Acto: RESOLUCION Nº 7.003/61.-

Materias: CONCURSOS - DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA - ESCALAFON DE LA SECRETARIA DE HACIENDA - INGRESO - NOMBRAMIENTOS - REEMPLAZOS

Buenos Aires, 9 de enero de 1961.-

Visto que la Dirección General Inmobiliaria propone la modificación del reglamento de concursos de antecedentes y de oposición y de pruebas de aptitud aprobado por Resolución nº 7.592 (1), y atento que con ello se tiende a perfeccionar el referido régimen,

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

1º.- Apruébase el adjunto reglamento de los concursos de antecedentes y de oposición y pruebas de aptitud, a fin de ser aplicado en la Dirección General Inmobiliaria para el ingreso o el cambio de clase o grupo de sus agentes.

2º.- Derógase la resolución nº 7592/60.-

3º.- Comuníquese, publíquese y archívese.-

Fdo. RAMON C. LEQUERICA

//-

(1) Ver Digesto Administrativo nº 1265.-

REGLAMENTO DE LOS CONCURSOS DE ANTECEDENTES Y DE OPOSICION Y PRUEBAS DE APTITUD

I - Bases generales

ARTICULO 1°.- Los concursos y las pruebas de aptitud para el ingreso o el cambio de clase o grupo en la Dirección General Inmobiliaria, se regirán por las disposiciones de los capítulos IV, V y VII del Escalafón aprobado por decreto nº 9.530/58 y su complementario, el decreto nº 11.941/59 (*), y por las presentes normas.

II - Concursos de antecedentes para cargos efectivos

ARTICULO 2°.- Los concursos de antecedentes para cargos efectivos serán resueltos con sujeción a las previsiones contenidas en el apartado II, punto 32°, de las normas complementarias del Escalafón, aprobadas por decreto nº 11.941/59.

Para las funciones que se especifican a continuación, se exigirán los siguientes títulos:

a) Jefe y segundo Jefe del Departamento Técnico de Tasaciones (A-IV y A-V): Asesor en Tasaciones (A-IV) y Asesor en Construcciones (A-V) ingeniero civil, arquitecto o equivalente.

b) Jefe y segundo Jefe de la División Tasaciones Especiales (B-I y B-II): ingeniero civil, arquitecto, ingeniero agrónomo, agrimensor o equivalentes.

c) Jefe y segundo Jefe de Sección en División Tasaciones Especiales (B-III y B-IV): ingeniero civil, arquitecto, ingeniero agrónomo y agrimensor o equivalentes.

d) Jefe de la Sección Agrimensura (B-III): ingeniero civil, agrimensor o equivalentes.

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 916.-

e) Asesor Legal (B-I): Abogado.

La exigencia de título profesional podrá ser suplida, en los casos de los incisos a)-excepto para las funciones de Asesores en Tasaciones y en Construcciones- b), c) y d), por el desempeño anterior continuado e inmediato durante cinco años en funciones técnicas propias de la especialidad.

III - Concursos de oposición y pruebas de aptitud para cargos efectivos.

ARTICULO 3º.- En los concursos de oposición y en las pruebas de aptitud para cargos efectivos, los aspirantes serán sometidos a exámenes teóricos y prácticos, según corresponda, sobre las materias que, a continuación, se detallan para cada función, clase y grupo escalafonarios.

C L A S E A

Temas generales

a) Organización y funciones de los Poderes del Estado.
b) Organización y funciones de la Secretaría de Estado de Hacienda.
c) Organización y funciones de la Dirección General Inmobiliaria.
d) Organización y funciones de la Cámara de Alquileres.
e) Organización y funciones del Tribunal de Tasaciones.
f) Organización y funciones del Departamento respectivo.
g) Ley de Contribución Inmobiliaria y su reglamentación
h) Leyes de venta de inmuebles del Estado y sus re -

glamentaciones.

i) Ley de contabilidad y su reglamentación.
j) Ley complementaria permanente de presupuesto.
k) Estatuto y Escalafón del Personal Civil y demás regímenes vigentes en materia de personal.
l) Ley orgánica de los Ministerios y Secretarías de Estado.
ll) Sistemas de contabilización mecanizada.
m) Derecho Administrativo.
n) Ley de propiedad horizontal y su reglamentación.
ñ) Ley de alquileres y su reglamentación.
o) Ley de transmisión gratuita de bienes.

Temas específicos

Funciones

1.- Director General (A-I) - Subdirector General (A-II) - Director Secretario (A-III)

Examen teórico

En extenso: Puntos a) b) c) d) e) g) y h).
Nociones generales: Puntos i) j) k) l) ll) m) n) ñ) y o).

Examen práctico: Para la clase A, grupos I, II y III: resolución de cinco (5) problemas, como mínimo, relativos a los conocimientos de legislación exigidos en el examen teórico.

2.- Jefe del Departamento de Administración (A-IV) - 2º Jefe del Departamento de Administración (A-V) - Asesor Administrativo (A-IV y A-V)

Examen teórico

En extenso: Puntos a) b) c) f) g) h) i) j) y k).
Nociones generales: Puntos d) e) l) ll) y m).

3.- Jefe del Departamento Inmobiliario (A-IV) - 2º Jefe - del Departamento Inmobiliario (A-V) - Asesor Inmobiliario (A-IV).

Examen teórico

En extenso: Puntos a) b) c) f) y g).
Nociones generales: Puntos d) h) l) ll) m) y n).

4.- Jefe del Departamento Técnico de Tasaciones (A-IV) = 2º Jefe del Departamento Técnico de Tasaciones (A-V) Asesor en Tasaciones (A-IV) = Asesor en Construcciones (A-V)

Requisito: Títulos de ingeniero civil, arquitecto o equivalentes.

Examen teórico

En extenso: Puntos a) b) c) e) f) g) n) y o).
Tasaciones inmobiliarias (fiscales y especiales). Ley de expropiación de inmuebles. Ley de excedentes municipales de parcelas del catastro nacional.
Nociones generales: Puntos d) h) l) ll) m) y ñ).

5.- Jefe del Departamento de Inmuebles Fiscales (A-IV) = 2º Jefe del Departamento de Inmuebles Fiscales (A-V) Asesor en Inmuebles (A-IV)

Examen teórico

En extenso: Puntos a) b) c) f) h) i).
Nociones generales: Puntos d) e) g) l) m) n) y ñ).
Derecho civil (derechos reales, sucesiones, compraventas, donaciones, locaciones, etc., con referencia a inmuebles).

Examen práctico

Para la clase A, grupos IV y V: resolución de cuatro (4) problemas, como mínimo, relativos a los conocimientos exigidos en el examen teórico.

C L A S E B

Temas generales

a) Organización y funciones de los Poderes del Estado.

b) Organización y funciones de la Secretaría de Estado de Hacienda.
c) Organización y funciones de la Dirección General Inmobiliaria.
d) Organización y funciones del Departamento respectivo.
e) Organización y funciones de la División respectiva.
f) Ley de contribución inmobiliaria y su reglamentación.
g) Ley de contabilidad y su reglamentación.
h) Ley complementaria y permanente de presupuesto.
i) Estatuto y Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Nacional y demás regímenes vigentes en materia de personal.
j) Leyes de venta de inmuebles del Estado y sus reglamentaciones.
k) Ley de Alquileres y su reglamentación.
l) Ley de propiedad horizontal y su reglamentación.
ll) Ley de expropiación de inmuebles.
m) Organización y funciones de la Cámara de Alquileres.
n) Organización y funciones del Tribunal de Tasaciones.
ñ) Régimen de contrataciones del Estado.
o) Sistemas mecánicos de contabilidad.
p) Reglamentación del trámite de actuaciones administrativas.
q) Normas reglamentarias de la administración general de inmuebles del Estado.
r) Normas relativas a la administración de los inmuebles fiscales destinados a vivienda, colonias de vacaciones, etc.

Temas específicos

Funciones

Departamento de Administración

1.- Jefe de la División Administrativa (B-I) - 2° Jefe de la División Administrativa (B-II) - Asesor Administrativo (B-I) y (B-II) - Fiscalizador Administrativo (B-I y B-II) - Fiscalizador Contable (B-I)

Examen teórico

En extenso: Puntos a) b) d) e) g) h) i) ñ) y p).
Ley orgánica de los Ministerios y Secretarías de Estado.
Normas sobre sellado de actuaciones.
Nociones generales: Punto f).

2.- Jefe de la División Contaduría (B-I) - 2° Jefe de la División Contaduría (B-II)

Examen teórico

En extenso: Puntos a) b) c) d) e) f) g) y h).
Contabilización a cargo de la Dirección General Inmobiliaria. Rendición de cuentas: nomenclador de gastos. - Cargo Padrón (recaudación y deudas).
Nociones generales: Puntos i) ñ) y o).
Organización y funciones del Departamento Inmobiliario.

3.- Jefe de la División Tesorería (B-I) - 2° Jefe de la División Tesorería (B-II)

Examen teórico

En extenso: Puntos a) b) c) d) y e).
Régimen de diferencias de caja.
Nociones generales: Punto g).
Normas sobre sellado de actuaciones.

4.- Jefe de la Sección Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo (B-III) - 2° Jefe de la Sección Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo (B-IV)

Examen teórico

En extenso: Puntos c) d) e) y p).
Normas sobre sellado de actuaciones.
Nociones generales: Punto f) m) y n).

5.- Jefe de la Sección Adquisiciones y Suministros (B-III) 2º Jefe de la Sección Adquisiciones y Suministros - (B-IV)

Examen teórico

En extenso: Puntos c) d) e) g) y ñ).

6.- Jefe de la Sección Personal (B-III) - 2º Jefe de la - Sección Personal (B-IV)

Examen teórico

En extenso: Puntos c) d) e) i) y p).
Nociones generales: Puntos m), y n).

7.- Jefe de la Sección Teneduría de Libros y Presupuesto (B-III) - 2º Jefe de la Sección Teneduría de Libros y Presupuesto (B-IV)

Examen teórico

En extenso: Puntos c) d) e) y g).
Presupuesto de la Dirección General Inmobiliaria. Contabilización a cargo de la Dirección General Inmobiliaria. - Rendición de cuentas y nomenclador de gastos.
Nociones generales: Punto h).
Modificación del presupuesto (Facultades del Poder Ejecutivo).

8.- Jefe de la Sección Verificaciones y Liquidaciones de Cobradores Fiscales (B-III) - 2º Jefe de la Sección - Verfificaciones y Liquidaciones de Cobradores Fiscales (B-IV)

Examen teórico

En extenso: Puntos c) d) e) g) y o).
Cargo Padrón: cobros y deudas.
Nociones generales: Organización y funciones de la División Operaciones Mecanizadas.

9.- Jefe de la Sección Intervención de Documentos de Contabilidad (B-III) - 2º Jefe de la Sección Intervención de Documentos de Contabilidad (B-IV)

Examen teórico

En extenso: Puntos c) d) e) f) y g).
Imputaciones, devoluciones, anulaciones y exoneraciones; su contabilización.

10.- Jefe de la Sección Patrimonial (B-III) - 2º Jefe de la Sección Patrimonial (B-IV)

Examen teórico

En extenso: Puntos c) d) e) y g).
Contabilización; sincronismo con contabilidad de presupuesto; cuenta general del ejercicio y su aspecto patrimonial.
Seguro de automotores; disposiciones y trámites.
Nociones generales: Funcionamiento del Registro de Bienes del Estado.

11.- Jefe de la Sección Recaudación (B-III) - 2º Jefe de la Sección Recaudación (B-IV)

Examen teórico

En extenso: Puntos c) d) e) y g).
Recargos, intereses, plazos, formas de pago, etc., prescriptos por la ley de contribución inmobiliaria y su reglamentación. Régimen de la intervención previa.
Recaudación y su ingreso, recibos y su contabilización.
Régimen de diferencias de caja.
Nociones generales: Punto f).

12.- Jefe de la Sección Valores (B-III) - 2º Jefe de la

Sección Valores (B-IV)

Examen teórico

En extenso: Puntos c) d) e) y g).
Juicios de responsabilidad. Depósitos de cheques; su ingreso en la cuenta del Banco; particularidades y requisitos. Giros bancarios. Transferencias. Ley de sellos; disposiciones aplicables.
Nociones generales: Punto f).

13.- Jefe de la Sección Habilitación (B-III) - 2° Jefe de la Sección Habilitación (B-IV)

Examen teórico

En extenso: Puntos c) d) e) y g).
Caja chica; requisitos, contabilización y rendición. Disposiciones generales del Tribunal de Cuentas. Rendiciones de cuentas; régimen y procedimiento. Régimen de diferencias de caja. Ley de sellos; disposiciones pertinentes; su aplicación. Depósitos en garantía; requisitos de su trámite.
Nociones generales: Punto f).

14.- Asesor Contable (B-III)

Examen teórico

En extenso: Puntos c) d) e) g) h) y j).
Régimen de viáticos, horas extraordinarias, movilidad, pasajes, reintegro de gastos e indemnizaciones.
Nociones generales: Punto f).
Derecho administrativo.

15.- Fiscalizador de liquidaciones de cobradores fiscales (B-III)

Examen teórico

En extenso: Puntos c) d) y o).
Régimen del cobro de la deuda.

Nociones generales: Punto f).
Impuesto a los réditos, 4a. categoría.

16.- Fiscalizador administrativo (B-III y B-IV)

Examen teórico

En extenso: Puntos c) d) e) g) h) y p).
Normas sobre sellado de actuaciones.
Nociones generales: Punto f).

17.- Jefe de la Oficina de Depósito (B-V)

Examen teórico

En extenso: Puntos c) d) y e).
Funcionamiento de la Comisión de Recepción. Sistema de - control, balances e inventarios de existencias.
Nociones generales: Punto ñ).

18.- Jefe y 2º Jefe de la Oficina de Contribución Inmobiliaria (Sección Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo (B-V y B-VI)

Examen teórico

En extenso: Puntos c) d) e) y p).
Trámites de actuaciones relacionadas con la contribución inmobiliaria. Normas sobre sellado de actuaciones.
Nociones generales: Punto f).

19.- Jefe y 2º Jefe de la Oficina de Propiedad Horizontal (Sección Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo (B-V y B-VI)

Examen teórico

En extenso: Puntos c) d) e) y p).
Trámite de actuaciones relacionadas con la propiedad horizontal. Normas sobre sellado de actuaciones.
Nociones generales: Punto f).

20.- Jefe y 2° Jefe de la Oficina de Locaciones (Sección Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo) (B-V y B-VI)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) y p).
Trámite de actuaciones relacionadas con la Cámara de Alquileres. Normas sobre sellado de actuaciones.
Nociones generales: Puntos f) y m).

21.- Jefe y 2° Jefe de la Oficina de Oficios Judiciales (Sección Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo (B-V y B-VI)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) y p).
Tramitación de los oficios judiciales. Normas sobre sellado de actuaciones.
Nociones generales: Punto f).
Organización y funcionamiento del Departamento Técnico de Tasaciones.

22.- Jefe y 2° Jefe de la Oficina de Ficheros Alfabéticos (Sección Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo) (B-V y B-VI)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) y p).
Normas para la intercalación de fichas por rubros.
Nociones generales: Punto f).

23.- Jefe y 2° Jefe de la Oficina de Archivo (Sección Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo) (B-V y B-VI)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) y p).
Nociones generales: Punto f).

24.- Fiscalizador administrativo (B-V y B-VI)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) y g).
Nociones generales: Puntos f) h) i) y p).

25.- Fiscalizador de recaudación en Bancos (B-V)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) y g).
Recaudación de los gravámenes a cargo de la Dirección General Inmobiliaria. Organización de las Divisiones Contaduría y Tesorería.
Nociones generales: Punto f).

26.- Fiscalizador de recaudación de impuestos (B-V)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) y g).
Recargos, intereses, multas y plazos. Régimen de la intervención previa. Expropiación, devoluciones, anulaciones, ampliaciones, reducciones, exoneraciones; su registro contable.
Organización de las Divisiones Contaduría y Tesorería.
Nociones generales: Punto f).

27.- Fiscalizador contable (B-VI)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) y g).
Régimen de viáticos, horas extraordinarias, movilidad, pasajes, reintegro de gastos e indemnizaciones.
Nociones generales: Punto f) y o).

Examen práctico

Para los cargos del Departamento de Administración (Clase B, grupos I,II,III,IV,V y VI): resolución de tres (3) problemas, como mínimo, relativos a los conocimientos e-

xigidos en el examen teórico.

Departamento Inmobiliario

28.- Jefe de la División Contribución Inmobiliaria (B-I) 2º Jefe de la División Contribución Inmobiliaria - (B-II) - Asesor Inmobiliario (B-I y B-II) - Asesor Impositivo (B-I)

Examen teórico
En extenso: Puntos a) b) c) d) e) f) y l).
Organización y funciones de las Divisiones Tasaciones - Inmobiliarias y Contaduría. Normas reglamentarias sobre padrón inmobiliario, documentos de contabilidad, cuentas impositivas, certificados, exoneraciones, deuda, cobradores fiscales, etc..
Nociones generales: Punto o).

29.- Jefe de la Sección Departamentales (B-III) - 2º Jefe de la Sección Departamentales (B-IV)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) y f).
Organización y funciones de las Divisiones Tasaciones Inmobiliarias y Contaduría.
Nociones generales: Punto o).

30.- Jefe de la Sección Cuentas Impositivas (B-III) - 2º Jefe de la Sección Cuentas Impositivas (B-IV)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) y f).
Organización y funciones de la División Contaduría.
Nociones generales: Punto o).

31.- Jefe de la Sección Certificados (B-III) - 2º Jefe - de la Sección Certificados (B-IV)

Examen teórico

En extenso: Puntos c) d) e) y f).

32.- Jefe de la Sección Padrón Inmobiliario (B-III) - 2° Jefe de la Sección Padrón Inmobiliario (B-IV)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) y f).
Organización y funciones de la División Tasaciones Inmobiliarias.
Nociones generales: Punto o).

33.- Jefe de la Sección Exoneraciones (B-III) - 2° Jefe de la Sección Exoneraciones (B-IV)
Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) y f).
Organización y funciones de la División Tasaciones Inmobiliarias y Contaduría.
Nociones generales: Punto o)

34.- Jefes de Oficinas Departamentales (B-V)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) y f).
Nociones generales: Punto o)

35.- Fiscalizador Inmobiliario (B-IV)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) y f).
Organización y funciones de las Divisiones Tasaciones Inmobiliarias y Contaduría.
Nociones generales: Sistemas mecánicos de contabilidad.

36.- Fiscalizador Inmobiliario (B-V y B-VI)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) y f).
Organización y funciones de las Divisiones Tasaciones Inmobiliarias y Contaduría.

37.- Fiscalizador de locaciones (B-IV)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) f) k) y m).
Nociones generales: Contratos de locación; disposiciones pertinentes del Código Civil.

Examen práctico
Para los cargos del Departamento Inmobiliario, clase B, grupos I,II,III,IV,V y VI: tres (3) problemas relativos a los conocimientos exigidos en el examen teórico.

Departamento Técnico de Tasaciones

38.- Jefe de la División Tasaciones Especiales (B-I) -
2º Jefe de la División Tasaciones Especiales (B-II)

Requisito: Título de ingeniero civil, arquitecto, inge - niero agrónomo, agrimensor o equivalente.

Examen teórico
En extenso: Puntos a) b) c) d) e) y n).
Tasaciones especiales.
Nociones generales: Puntos f) y m).

39.- Jefe de la División Valores Inmobiliarios (B-I) -
2º Jefe de la División Valores Inmobiliarios (B-II)

Examen teórico
En extenso: Puntos a) b) c) d) e) y n).
Tasaciones fiscales y especiales.
Nociones generales: Puntos f) y m).

40.- Jefe de la División Tasaciones Inmobiliarias (B-I)
2º Jefe de la División Tasaciones Inmobiliarias (B-II)

Examen teórico

En extenso: Puntos a) b) c) d) e) f) k) y l).

Ley de transmisión gratuita de bienes.
Organización y funciones de la División Contribución Inmobiliaria.
Tasaciones fiscales y especiales.
Nociones generales: Puntos m) y n).

41.- Fiscalizador de Tasaciones (B-I) y Asesor en Tasaciones (B-II)

Examen teórico
En extenso: Puntos a) b) c) d) e) y n).
Tasaciones especiales.
Nociones generales: Puntos f) y m).

42.- Jefe y 2º Jefe de la Sección Valores de Tierra y Edificación (B-III y B-IV)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) y n).
Organización y funciones de las Divisiones Valores Inmobiliarios y Tasaciones Inmobiliarias. Tasaciones fiscales y especiales.
Nociones generales: Punto f).

43.- Jefe y 2º Jefe de la Sección Planimetría, Dibujo y Mapoteca (B-III) y (B-IV)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) y e).
Organización y funciones de la División Tasaciones Inmobiliarias y de la Sección Padrón Inmobiliario. Conocimiento de catastro.
Nociones generales: Punto f).

44.- Jefe y 2º Jefe de la Sección (División Tasaciones Especiales) (B-III y B-IV)

Requisito: Título de ingeniero civil, arquitecto, inge-

niero agrónomo y agrimensor o equivalentes.
Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) y n). Tasaciones especiales.
Nociones generales: Punto f).

45.- Jefe y 2º Jefe de la Sección Inspección y Verificaciones (B-III y B-IV)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) f) y l).
Organización y funciones de las Divisiones Valores Inmobiliarios y Contribución Inmobiliaria. Tasaciones fiscales.
Nociones generales: Punto k).

46.- Jefe y 2º Jefe de la Sección Avalúos (B-III y B-IV)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) y f).
Organización y funciones de las Divisiones Valores Inmobiliarios y Contribución Inmobiliaria.
Nociones generales: Ley de transmisión gratuita de bienes.

47.- Fiscalizador de Tasaciones (B-III, B-IV, B-V y B-VI)
Fiscalizador de Tasadores (B-IV y B-V)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) y n).
Tasaciones fiscales y especiales.
Nociones generales: Punto f).

Examen práctico
Para los cargos del Departamento Técnico de Tasaciones (clase B, grupos I,II,III,IV,V y VI): resolución de tres (3) problemas, como mínimo, relativos a los conocimientos exigidos en el examen teórico.

Departamento de Inmuebles Fiscales

48.- Jefe de la División Explotación (B-I) - 2º Jefe de - la División Explotación (B-II)

Examen teórico
En extenso: Puntos a) b) c) d) e) y g).
Reglamentación de las concesiones , locaciones y juicios.
Nociones generales: Puntos f) h) q) y r).

49.- Jefe de la División Mensura y Conservación (B-I) - 2º Jefe de la División Mensura y Conservación (B-II)

Examen teórico
En extenso: Puntos a) b) c) d) e) y j).
Organización y funciones de los balnearios de Ezeiza.
Nociones generales: Puntos k) m) y n).
Mensuras, subdivisiones, etc..
Inventarios, recepción de inmuebles, etc.

50.- Jefe de la División Registro (B-I) - 2º Jefe de la - División Registro (B-II) - Asesor en Inmuebles (B-I)

Examen teórico
En extenso: Puntos a) b) c) d) e) j) q) y r).
Nociones generales: Puntos f) g) k) l) ll) m) y n).
Ley orgánica de los Ministerios y Secretarías de Estado.
Locaciones, reglamento de compra y venta, sucesiones, donaciones, etc., con referencia a inmuebles.
Títulos de dominio -Referencias de títulos- Escribanía General de Gobierno.

51.- Jefe de la División Ventas (B-I) - 2º Jefe de la División Ventas (B-II)

Examen teórico
En extenso: Puntos a) b) c) d) e) j) k) l) q) y r).
Nociones generales: Puntos g) y m).
Derechos reales.

52.- Jefe de la Sección Antecedentes de Inmuebles (B-III)
2º Jefe de la Sección Antecedentes de Inmuebles (B-IV)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) j) q) y r).
Registro real de inmuebles. Estudio y referencia de títu - los.
Nociones generales: Puntos k) l) y ll).
Derechos reales. Sucesiones. Donaciones.
Títulos de propiedad (estudio y referencia).

53.- Jefe de la Sección Planos y Dibujo (B-III) - 2º Jefe de la Sección Planos y Dibujo (B-IV)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) j) y l).
Interpretación de planos. Normas fijadas por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la Dirección Nacional - del Catastro para la ejecución de planos.
Nociones generales: Puntos q) y r).
Registro real de inmuebles.

54.- Jefe de la Sección Estudios y Registro (B-III) - 2º - Jefe de la Sección Estudios y Registro (B-IV)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) j) k) l) y ll).
Transferencia de Inmuebles.
Nociones generales: Derechos reales. Sucesiones. Donacio - nes. Contratos. Escribanía General de Gobierno. Procura - ción del Tesoro. Tribunal de Cuentas.

55.- Jefe de la Sección Agrimensura (B-III) - 2º Jefe de - la Sección Agrimensura (B-IV) - Fiscalizador de mensu ras (B-III)

Requisito: Título de ingeniero civil, agrimensor o equiva-

lentes.

Examen teórico

En extenso: Puntos c) d) e) j) y l).

Ley de catastro nacional. Reglamentaciones sobre mensuras, subdivisiones, etc.. Régimen de aranceles.

Nociones generales: Puntos q) y r).

Registro real de inmuebles. Estudio y referencias de títulos.

56.- Jefe de la Sección Inspección (B-III) - 2º Jefe de la Sección Inspección (B-IV)

Examen teórico

En extenso: Puntos c) d) e) q) y r).

Reglamentación de la venta de inmuebles del dominio privado del Estado. Inspección y recepción de inmuebles. Vigilancia del cumplimiento de los contratos.

Nociones generales: Puntos j) k) y l).

57.- Jefe de la Sección Talleres (B-III) - 2º Jefe de la Sección Talleres (B-IV)

Examen teórico

En extenso: Puntos c) d) y e).

Organización y funciones de los balnearios de Ezeiza. Organización de depósitos. Custodia e inventario de bienes muebles e inmuebles. Planes de trabajo.

Nociones generales: Conocimientos generales sobre refrigeración, electricidad, albañilería, carpintería, mantenimiento de inmuebles, bombeo de agua, cloración, etc..

58.- Jefe de la Sección Explotación Directa (B-III) - 2º Jefe de la Sección Explotación Directa (B-IV)

Examen teórico

En extenso: Puntos c) d) e) g) y k).

Control y vigilancia del cumplimiento de los contratos de

concesión. Explotación directa o por concesionarios, de los balnearios de Ezeiza.
Nociones generales: Puntos q) y r).

59.- Jefe de la Sección Arrendamientos y Concesiones (B-III - 2º Jefe de la Sección Arrendamientos y Concesiones (B-IV)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) y g).
Normas reglamentarias de las concesiones, locaciones y juicios.
Nociones generales: Puntos q) y r).
Organización y funciones del Departamento de Administración.

60.- Jefe de la Sección Remates (B-III) - 2º Jefe de la Sección Remates (B-IV)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) j) l) y ñ).
Registro real de inmuebles.
Nociones generales: Puntos q) y r).
Presupuesto de la Dirección General Inmobiliaria.

61.- Jefe de la Sección Escrituraciones (B-III) - 2º Jefe de la Sección Escrituraciones (B-IV)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) y k).
Preceptos del Código Civil relativos a locación de inmuebles. Normas y resoluciones de la Cámara de Alquileres de la Capital Federal; su aplicación.
Reglamento de copropiedad y administración.
Nociones generales: Puntos g) y m).

62.- Jefe de la Sección Conservación (B-III) - 2º Jefe - de la Sección Conservación (B-IV)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) q) y r).
Normas de la Ley de Alquileres sobre reparaciones, gastos de conservación, etc.. Organización y funcionamiento de los balnearios de Ezeiza.
Nociones generales: Puntos g) l) y m).

63.- Jefe de la Oficina de Mesa de Entradas (División Registro) (B-V)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) y p).
Organización y funciones de la Sección Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo de la Dirección General Inmobiliaria. Régimen de firma. Archivo del Departamento de Inmuebles Fiscales; clasificación cronológica por numeración y asuntos.
Nociones generales: Puntos j) k) l) q) y r).

Examen práctico
Para los cargos del Departamento de Inmuebles Fiscales (clase B, grupos I,II,III,IV y V): resolución de tres (3) problemas, como mínimo, relativos a los conocimientos exigidos en el examen teórico.

Asesoría Letrada

64.- Asesor Legal (B-I)

Requisito: Título de abogado.

Examen teórico
En extenso: Puntos b) c) y d).
Organización y funciones de la Asesoría Letrada.
Puntos f) g) l) j) k) l) ll) m) y n).

Nociones generales: Ley orgánica de los Ministerios y Secretarías de Estado.
Puntos q) y r).

65.- Jefe de la Sección Cobradores Fiscales (B-III) - 2º
Jefe de la Sección Cobradores Fiscales (B-IV)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) y f).
Organización y funcienes de la Asesoría Letrada. Reglamentación de las funciones de los cobradores fiscales. Ley sobre procedimientos de los Tribunales Nacionales en lo Civil y Criminal. Parte pertinente.
Nociones generales: Punto p).

66.- Fiscalizador administrativo (B-V)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) d) e) e i).
Normas sobre sellado de actuaciones. Organización y funciones de la Asesoría Letrada.
Nociones generales: Puntos f) m) y n).

Examen práctico
Para los cargos de la Asesoría Letrada (clase B, grupos I, III, IV y V): resolución de tres (3) problemas, como mínimo, relativos a los conocimientos de legislación exigidos en el examen teórico.

Asesoría Técnica

67.- Asesor en Organización (B-I)

Examen teórico
En extenso: Puntos a) b) c) y f).
Organización y funciones de la Asesoría Técnica.
Racionalización y organización. Sistemas de control interno y externo.

Nociones generales: Puntos i) y p).
Normas sobre sellado de actuaciones. Recaudación; ingreso, recibo y contabilización. Normas reglamentarias que rigen los trámites a cargo de los distintos Departamentos y Asesorías.

68.- Asesor Impositivo (B-I) - Asesor Inmobiliario (B - II)

Examen teórico
En extenso: Puntos a) b) c) d) y f).
Organización y funciones de la Asesoría Técnica. Organización y funciones del Departamento Inmobiliario. Normas reglamentarias sobre padrón inmobiliario, documentos de contabilidad, cuentas impositivas, certificados, exoneraciones, deuda, cobradores fiscales, etc..
Nociones generales: Puntos i) y p).
Normas sobre sellado de actuaciones. Contabilización a cargo de la Dirección General Inmobiliaria. Contabilidad mecanizada.

Examen práctico
Para los cargos de la Asesoría Técnica (clase B, grupos I y II): resolución de tres (3) problemas, como mínimo, relativos a los conocimientos exigidos en el examen teórico.

Secretaría General del Tribunal de Tasaciones

69.- Fiscalizador administrativo (B-IV y B-V)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) y n).
Normas sobre sellado de actuaciones. Organización y funciones de la Secretaría General del Tribunal de Tasaciones.
Nociones generales: Puntos f) i) p) y 11).

Examen Práctico
Resolución de tres (3) problemas, como mínimo, relativos a los conocimientos exigidos en el examen teórico.

Secretaría de Despacho

70.- Jefe de la Sección Secretaría de Despacho (B-III)

Examen teórico
En extenso: Puntos c) y p).
Organización y funciones de la Secretaría de Despacho. - Régimen de firma. Régimen de resoluciones y circulares - de la Dirección General.
Nociones generales: Puntos f) y m).

Examen práctico

Resolución de tres (3) problemas, como mínimo, relativos a los conocimientos exigidos en el examen teórico.

C L A S E D

Temas generales

a) Organización y funciones de la Dirección General Inmobiliaria.
b) Organización y funciones del Departamento respectivo.
c) Organización y funciones de la División respectiva.
d) Reglamentación del trámite de actuaciones administrativas.
e) Normas sobre sellado de actuaciones.
f) Ley de contribución inmobiliaria y su reglamentación.

Temas específicos

Para los diversos Departamentos y Asesorías

1.- Oficinista (D-II)

Examen teórico
Nociones generales: Puntos a) b) c) d) e) y f).

Examen práctico
Matemáticas: Tres problemas, como mínimo, de regla de tres simple y compuesta, directa e inversa, interés y descuento simples, término medio y repartición proporcional. Cálculos sencillos de superficies.
Redacción: Nota con texto no inferior a 150 palabras. Informe de extensión no inferior a 300 palabras.
Ortografía: Correcciones de un escrito que contenga no menos de 15 errores.
Dactilografía: 50 palabras por minuto, como mínimo, en una copia de 5 minutos, con una tolerancia de un 3% de errores.

2.- Oficinista (D-IV)

Examen teórico
Nociones generales: Puntos c) d) y e).

Examen práctico
Matemáticas: Tres problemas, como mínimo, de regla de tres simple y compuesta, directa e inversa, interés y descuento simples.
Redacción: Nota con texto no inferior a 150 palabras. Informe de extensión no inferior a 250 palabras.
Ortografía: Corrección de un texto que contenga no menos de 10 errores.
Dactilografía: 40 palabras por minuto, como mínimo, en una copia de 5 minutos, con una tolerancia máxima de un 5%

de errores.

3.- Oficinista (D-VI)

Examen teórico
Nociones generales: Puntos c) y d).

Examen práctico
Matemáticas: Tres problemas, como mínimo, de regla de tres simple y compuesta, directa e inversa e interés simple.
Redacción: Nota con texto no inferior a 120 palabras.
Ortografía: Corrección de un escrito que contenga no menos de 10 errores.
Dactilografía: 35 palabras por minuto, como mínimo, en una copia de 5 minutos, con una tolerancia máxima de un 5% de errores.

4.- Oficinista (D-VIII)

Examen teórico
Nociones generales: Punto c).

Examen práctico
Matemáticas: Tres problemas, como mínimo, de regla de tres simple y compuesta e interés simple.
Redacción: Nota con texto no inferior a 100 palabras.
Ortografía: Corrección de un escrito que contenga no menos de 10 errores.
Dactilografía: 30 palabras por minuto, como mínimo, en una copia de 5 minutos, con una tolerancia máxima de un 5% de errores.

5.- Subgrupo Cadete Administrativo

Examen práctico

Matemáticas: Cuatro operaciones elementales con números

enteros, fracciones decimales y fracciones comunes.
Redacción: Nota de extensión no inferior a 70 palabras.
Ortografía: Corrección de un texto con un mínimo de 7 - errores (En los trabajos manuscritos se calificará también la caligrafía).
Dactilografía: Mínimo de 30 palabras por minuto, en una copia de 5 minutos, con una tolerancia máxima de un 5% de errores.

Departamento de Administración

6.- Cajero (D-II y D-IV)

Examen teórico
Puntos a) b) y c).
Régimen de fallas de caja. Pagos en efectivo. Requisitos que debe cumplir el agente pagador. Contabilización. Recaudación: su ingreso, recibo y contabilización. Depósitos, valores en efectivo, su trámite. Poderes. Formalidades. Verificaciones para pagos.

Examen práctico

Resolución de dos problemas, como mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos en el examen teórico.

7.- Operador de máquinas de fichas perforadas (D-I y - D-III)

Examen teórico
Puntos b) y c).
Conocimientos técnicos del sistema mecánico a base de - tarjetas perforadas.
Examen práctico
Armado de tableros de las unidades mecánicas con que - cuente el servicio. Interpretación de gráficos y diagramas.

8.- Operador de máquinas de fichas perforadas (D-V y D-VII)

Examen teórico

Puntos b) y c).

Conocimiento del sistema mecánico a base de tarjetas perforadas.

Examen práctico

Armado de tableros.

9.- Verificador de máquinas de fichas perforadas (D-V)

Examen teórico

Puntos b) y c).

Conocimiento de los diversos tipos de máquinas para perforar tarjetas que se utilizan en el servicio respectivo.

Utilidad de las barras de salto y diferencia entre barra baja y barra alta.

Examen práctico

Rendimiento de 9.600 digitaciones horarias.

Departamento Inmobiliario

10.- Grabador de fichas metálicas (D-III)

Examen teórico

Nociones generales: Puntos a) b) c) y f).

Examen práctico

Matemáticas: Problemas con las cuatro operaciones elementales.

Grabación: Llenar una ficha metálica sistema "Adrema" en 45 espacios y 8 líneas en un tiempo mínimo de 7 minutos, con una tolerancia de error de un 3%.

Impresión: Imprimir con máquina impresora "Adrema" 200 fichas metálicas, en un tiempo mínimo de tres minutos.

11.- Grabador de fichas metálicas (D-V y D-VII)

Examen teórico

Nociones generales: Puntos c) y f).

Examen práctico

Matemáticas: Problemas con las cuatro operaciones elementales.

Grabación: Llenar una ficha metálica, sistema "Adrema", en 45 espacios y 4 líneas en un tiempo mínimo de 7 minutos, con una tolerancia de errores de un 3%.

Impresión: Imprimir con máquina impresora "Adrema" 200 - fichas metálicas, en un tiempo mínimo de 5 minutos.

Departamento Técnico de Tasaciones

12.- Tasador (D-I y D-III)

Examen teórico

Puntos b) c) y f).

Leyes de expropiación de inmuebles y de propiedad hori - zontal. Tasaciones fiscales y especiales. Nociones sobre organización y funciones de la Cámara de Alquileres y el Tribunal de Tasaciones.

Examen práctico

Desarrollo de una tasación, conforme a las disposiciones legales establecidas en el temario del examen teórico.

Conocimiento y lectura de una grabación hecha por máquina "Adrema".

13.- Calculista (D-I y D-III)

Examen teórico

Nociones generales: Puntos a) b) c) d) y f).

Examen práctico

Matemáticas: Tres problemas de regla de tres simple y - compuesta, directa e inversa, interés y descuento sim - ples, término medio y repartición proporcional.

Demostración práctica de dominio de cualquier máquina de calcular.

Dactilografía: 50 palabras por minuto, como mínimo, en - una copia de 5 minutos, con una tolerancia de un 3% de -

errores.

14.- Calculista (D-V y D-VII)

Examen teórico

Nociones generales: Puntos a) b) c) y f).

Examen práctico

Matemáticas: Tres problemas de regla de tres simple y compuesta.

Demostración práctica del dominio de un sistema de máquina de calcular, como mínimo.

Dactilografía: 35 palabras por minuto, como mínimo, en una copia de 5 minutos, con una tolerancia máxima de un 5% de errores.

15.- Fiscalizador de tasaciones (D-I)

Examen teórico

Puntos b) c) y f).

Leyes de expropiación de inmuebles y de propiedad horizontal. Tasaciones fiscales y especiales. Nociones sobre organización y funciones de la Cámara de Alquileres y el - Tribunal de Tasaciones.

Examen práctico

Resolución de tres (3) problemas, como mínimo, relativos a los conocimientos exigidos en el examen teórico.

16.- Dibujante (D-I y D-III)

Examen teórico

Punto c).

Conocimiento de escalas, sus conversiones, etc.
Medidas superficies, etc..

Examen práctico

Dibujo lineal de un plano con conversión de escalas.

17.- Dibujante copista (D-V y D-VII)

Examen teórico

Punto c).
Organización y funciones de la Sección Planimetría, Dibujo y Mapoteca. Nociones de dibujo lineal y copia de planos.

Examen práctico
Copia de planos y nociones sobre escalas.

18.- Verificador de inmuebles (D-III) - Verificador de Tasaciones (D-V)

Examen teórico
Puntos c) y f).
Tablas, elementos constructivos y codificación de edificios. Nociones sobre organización y funciones del Tribunal de Tasaciones. Nociones sobre ley de propiedad horizontal y su reglamentación.

Examen práctico
Avalúo fiscal de un inmueble. Lectura de una grabación - de "Adrema".

Departamento de Inmuebles Fiscales

19.- Técnico en agrimensura (D-I)

Examen teórico
Puntos a) b) y c).
Leyes de venta de inmuebles fiscales y sus reglamentaciones. Dominio de las funciones trigonométricas para triángulos planos. Nociones generales de topografía.
Métodos de medición.

Examen práctico
Resolución de tres (3) problemas, como mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos en el examen teórico y también sobre regla de tres simple y compuesta, interés y descuento simples y repartición proporcional.
Redacción de un informe sobre un tema de la especialidad.

20.- Supervisor de contrataciones (D-I)

Examen teórico

Puntos a) b) y c).

Leyes de venta de inmuebles fiscales y sus reglamentaciones. Régimen de contrataciones del Estado.
Decretos relativos a concesiones, locaciones y juicios.
Ley de Alquileres.

Examen práctico

Resolución de tres (3) problemas, como mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos en el examen teórico, y también sobre regla de tres simple y compuesta, interés y descuentos simples y repartición proporcional.
Redacción sobre un tema de la especialidad.

21.- Gestor (D-II)

Examen teórico

Puntos a) b) y c).

Leyes de venta de inmuebles fiscales y sus reglamentaciones. Ley de Alquileres. Nociones sobre la ley de contabilidad. Ley de organización de los Ministerios y Secretarías de Estado.

Examen práctico

Resolución de tres problemas, como mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos en el examen teórico.
Redacción sobre un tema de la especialidad.

22.- Inspector de inmuebles (D-II)

Examen teórico

Puntos a) b) y c).

Leyes de venta de inmuebles fiscales y sus reglamentaciones. Nociones sobre la ley de alquileres. Régimen de transferencia de inmuebles del Estado. Nociones acerca de la ley de contabilidad. Conocimientos sobre inspección de inmuebles.

Examen práctico
Resolución de tres problemas, como mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos en el examen teórico.
Redacción sobre un tema de la especialidad.

Asesoría Letrada

23.- Cobrador Fiscal (D-VII)

Examen teórico
Puntos b) c) y f).
Reglamentación de las funciones de los cobradores fiscales. Ley de procedimientos de los Tribunales Nacionales en lo Civil y Criminal. Disposiciones pertinentes.

Examen práctico
Resolución de tres cuestiones, como mínimo, relativas a los conocimientos exigidos en el examen teórico.

Secretaría General del Tribunal de Tasaciones

24.- Supervisor de trámites de actuaciones sobre expropiaciones (D-I)

Examen teórico
Puntos a) y d).
Organización, funciones y reglamento interno del Tribunal de Tasaciones. Estructura y funciones de la Secretaría General del Tribunal de Tasaciones. Ley de expropiaciones.

Examen práctico
Resolución de tres cuestiones, como mínimo, relativas a los conocimientos exigidos en el examen teórico.

C L A S E E

Pruebas de aptitud

Departamento de Administración

1.- Operario de depósito (E-VI)

Prueba práctica

Matemáticas: Las cuatro operaciones elementales.
Lectura de un texto no inferior a 200 palabras.

Departamento de Inmuebles Fiscales

2.- Capataz (E-III y E-IV)

Prueba teórica

Punto c) de la Clase D.
Organización, funcionamiento, instrumental y materiales - de un taller de la especialidad.

Prueba práctica

Resolución de tres problemas como mínimo, relativos a los temas de la prueba teórica y a regla de tres simple y compuesta, interés simple, término medio y repartición proporcional.
Redacción de un informe sobre un tema de la especialidad, con texto no inferior a 200 palabras.

3.- Técnico en refrigeración y electricidad (E-III)

Prueba teórica

Punto c) de la clase D.
Organización, funcionamiento e instrumental de un taller de la especialidad.

Prueba práctica

Resolución de tres problemas, como mínimo, relativos a - los temas de la prueba teórica.
Redacción de un informe sobre un tema de la especialidad, con texto no inferior a 200 palabras.

4.- Oficial mecánico (E-IV) - Oficial carpintero (E-IV) - Oficial electricista (E-IV) - Oficial de refrigera - ción (E-IV) - Oficial tornero (E-V)

Prueba teórica

Conocimientos sobre instrumental, materiales y técnica de la especialidad.

Prueba práctica

Resolución de tres problemas, como mínimo, relativos a la técnica de la especialidad.

5.- Almacenista (E-V) - Chófer (E-V y E-VI) - Encargado de cuadrilla (E-V y E-VI) - Mecánico (E-V y E-VI) Arborista (E-V, VI y VII) - Carpintero (E-VI y VII) Pintor (E-VI) - Plomero (E-VI) - Albañil (E-VI y VII) Electricista (E-VI y VII) - Jardinero (E-VI y VII) Caballerizo (E-VII) - Conductor de máquina jardinera (E-VII) - Operario (E-VII) - Peón (E-VIII)

Prueba teórica

Conocimientos sobre instrumental, materiales y técnica de la especialidad.

Prueba práctica

Resolución de tres problemas, como mínimo, relativos a la técnica de la especialidad.

C L A S E F

Pruebas de aptitud

Departamento de Administración

1.- Ordenanza (F-V y F-VI)

Prueba práctica

Matemáticas: Las cuatro operaciones elementales.
Lectura de un texto no inferior a 500 palabras.
Dictado de un texto no inferior a 100 palabras.

2.- Portero (F-VI)

Prueba práctica

Matemáticas: Las cuatro operaciones elementales.
Lectura de un texto no inferior a 500 palabras.
Dictado de un texto no inferior a 100 palabras.

IV - Concursos para cargos interinos

Artículo 4°.- Los concursos para la provisión de cargos interinos se ajustarán en todos los casos a las mismas condiciones que las establecidas para los cargos efectivos.

En la convocación de los concursos a que se refiere este artículo, se dará a conocer el término de duración del cargo que haya de proveerse interinamente.

Artículo 5°.- La existencia de una prórroga del término de la interinidad, no supondrá derecho alguno para el agente que sea designado en un concurso de esta naturaleza, para prolongar su desempeño. En tales casos, la Dirección General Inmobiliaria decidirá respecto de la concesión de una prórroga de la función interina, o del llamado a concurso.

Artículo 6°.- El término de una interinidad se extinguirá automáticamente al producirse la vacante definitiva del cargo presupuestario que hubiese originado el llamado a concurso para su provisión interina.

Artículo 7°.- El desempeño de un cargo interino no inhibe al agente para presentarse a un concurso correspondiente a otro cargo; pero ello no le otorga derecho alguno para considerarse comprendido en los beneficios de la clase y grupo en que reviste provisionalmente.

V - Preparación de los temas de examen

Artículo 8°.- A los fines dispuestos en los incisos e) y f) del apartado IV de las normas complementarias del punto 32° del Escalafón, los temas de los concursos de

oposición y las pruebas de aptitud serán preparados por las siguientes comisiones:

a) Para la clase A, grupo I, por el Director General de Asuntos Jurídicos, El Director General de la Dirección General de Impuestos y Contribuciones y el Director General de Contabilidad y Administración

b) Para la clase A, grupos II, III, IV y V, por el Director General de la Dirección General Inmobiliaria, el Director General de Impuestos y Contribuciones y el Director General de Contabilidad y Administración.

c) Para la clase B, C, D, E y F, por una comisión de tres miembros designados por el Director General de la Dirección General Inmobiliaria.

En caso de vacante, ausencia o impedimento de alguno de los integrantes de dichas comisiones, el Secretario de Estado de Hacienda, en el caso de los incisos a) y b), o el Director General de la Dirección General Inmobiliaria, en el del inciso c), designarán los reemplazantes.

En ningún caso podrán ser integradas dichas comisiones por aspirantes que se hayan presentado a los concursos en que ellas deban intervenir.

Artículo 9°.- En la preparación de los ejercicios de los concursos de oposición y las pruebas de aptitud, se graduarán las dificultades en relación con el grupo escalafonario a que corresponda el cargo objeto del examen. Cuando se trate de exámenes para cargos en que la práctica dactilográfica sea complementaria y no específica de la función, se reducirán las exigencias sobre velocidad y exactitud establecidas para la prueba mecanográfica.

Artículo 10°.- Cuando en la calificación de los exámenes relativos a los concursos de oposición se produzca igualdad de puntos, prevalecerá el candidato que cuente con la mayor valoración de antecedentes.

Esta valoración deberá efectuarse con arreglo a la enumeración contenida en el apartado II de las normas complementarias del punto 32° del Escalafón, aprobadas por decreto n° 11.941/59.

VI - Publicidad de los concursos

Artículo 11°.- Los llamados a concurso serán publicados durante dos (2) días hábiles, como mínimo, por los siguientes medios, en cada uno de los casos especificados a continuación:

1 - Ingreso de agentes:

a) Boletín Oficial.
b) Tres (3) diarios de los de mayor circulación en el país.
c) Carteles en lugares visibles de las reparticiones dependientes de la Secretaría de Estado de Hacienda, durante dos (2) días hábiles, como mínimo.

2 - Cambio efectivo de clase o grupo:

a) Boletín Oficial.
b) Circular para conocimiento del personal de la Secretaría de Estado de Hacienda, que remitirá la Sección Personal de la Dirección General Inmobiliaria, y de cuyo contenido se notificarán obligatoriamente todos los agentes.
c) Carteles en lugares visibles de las reparticiones dependientes de la Secretaría de Estado de Hacienda, durante dos (2) días hábiles, como mínimo.

3 - Cambio interino de clase o grupo:

a) Circular para conocimiento del personal de la Secretaría de Estado de Hacienda, que re-

mitirá la Sección Personal de la Dirección General Inmobiliaria, y de cuyo contenido se notificarán obligatoriamente todos los agentes.

b) Carteles en lugares visibles de las reparticiones dependientes de la Secretaría de Estado de Hacienda, durante dos (2) días hábiles, como mínimo.

Artículo 12°.- Los llamados a concurso se difundirán con una antelación mínima de quince (15) días hábiles y contendrán las siguientes especificaciones:

a) Cargo a proveer y su remuneración.

b) Condiciones generales y particulares exigibles.

c) Plazo y lugar de presentación de las solicitudes.

d) Fecha de apertura del concurso.

e) Término de los cargos interinos.

VII - Cargos con horario reducido

Artículo 13°.- Las prescripciones establecidas en este reglamento rigen también para los concursos destinados a la provisión de vacantes en grupos escalafonarios de horario reducido.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Acto: Rev. LA LEY del 14-3-61. Pág. 2.-

Materia: ESTABILIDAD

1.- **No procede el recurso extraordinario contra una decisión fundada en sumario administrativo substanciado regularmente, con audiencia del imputado, y si la decisión de la cámara se funda en la apreciación de circunstancia de hecho y prueba.**

2.- La separación del cargo sin que medie pronunciamiento de los tribunales del fuero represivo importa menoscabar indebidamente al empleado, a quien ha debido suspendérselo preventivamente, y pasar las actuaciones a la justicia en lo criminal. Esto no obsta a la resolución que en ejercicio del poder disciplinario, pueda dictarse en definitiva, ponderando las conclusiones en el fallo que recaigan en el proceso y las modalidades que diferencian a la responsabilidad administrativa de la de orden penal.

CS, setiembre 16-960. - De Marco, Osvaldo S.

Buenos Aires, setiembre 16 de 1960.-

CONSIDERANDO:

Que a raíz del sumario administrativo instruido en el juzgado nacional del trabajo número 7, su titular -

//-

solicitó del tribunal de alzada la cesantía del empleado Osvaldo S. de Marco. La cámara, previa ampliación del sumario, decretó la medida peticionada por estimar debidamente acreditado lo que califica de "gravísima violación a los deberes del empleado", la que habría consistido en el ofrecimiento de De Marco para conseguir la designación de un contador, en calidad de perito, mediante la entrega de una suma de dinero. De las actuaciones no surge se haya dado intervención a la justicia del crimen.

Que, contra la resolución de la cámara, De Marco interpuso recurso de apelación para ante esta Corte, con fundamento en los arts. 19 del decreto-ley 1285/58 (Adla, XVIII-A, 587) y 14 y 15 de la ley 48 (Adla, 1852-1880, - 364), habiéndosele denegado el previsto por aquel decreto-ley.

Que dicho recurso es improcedente desde la vigencia de la ley 15.271. El deducido en la especie ha sido, pues, bien denegado.

Que, en cuanto al extraordinario -también intentado- basta para declarar su improcedencia la consideración de que el sumario se ha substanciado regularmente, con audiencia del imputado, y de que la decisión de la cámara se funda en la apreciación de circunstancias de hecho y prueba.

Que, sin embargo, esta Corte estima que procede avocar las actuaciones con arreglo a lo establecido por el art. 22 del Reglamento para la justicia nacional (Adla, XIII-A, 931). En efecto, como surge de la precedente relación de antecedentes, el hecho atribuido a De Marco, que da fundamento a la resolución que ha dispuesto su cesantía, no permite descartar que la responsabilidad del empleado exceda a la de orden meramente administrativo.

Que, en esas condiciones, la separación del cargo sin que medie pronunciamiento de los tribunales del fuero represivo importa menoscabar indebidamente al emplea-

do. Por otra parte, la intervención de la justicia del crimen en situaciones como la de autos deriva de la disposición del art. 164 del Código de Procedimiento Criminal.

Que, en consecuencia, atenta la naturaleza del hecho imputado a De Marco, ha debido suspendérselo preventivamente y pasar las actuaciones a la justicia en lo criminal.

Que las declaraciones precedentes no obstan a la resolución que, en ejercicio del poder disciplinario, pueda dictarse en definitiva ponderando las conclusiones del fallo que recaiga en el proceso y las modalidades que diferencian a la responsabilidad administrativa de la de orden penal.

Por ello, se resuelve: a) desestimar la queja en cuanto a los recursos de apelación y extraordinario interpuestos; b) avocar las actuaciones y dejar sin efecto la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, de fecha 24 de junio próximo pasado, que declara la cesantía del empleado Osvaldo S. De Marco, del juzgado número 7 del fuero; c) hacer saber a la cámara mencionada que debe dictar nueva resolución con arreglo a lo declarado en la presente.-

BENJAMIN VILLEGAS BASAVILBASO - ARISTOBULO D. ARAOZ DE LAMADRID - LUIS M. BOFFI BOGGERO - JULIO OYHANARTE - RICARDO COLOMBRES

ACTO: Rev. LA LEY del 9-3-61.- Págs. 3 y 4.-

MATERIAS: ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 37, incs. a),d) y f), 41 ap. III, XII, XVII y XVIII - y 44) - ESTABILIDAD - JUNTA DE DISCIPLINA

1.- A los efectos del art. 37, inc. a) del decreto-ley 6666/57 (') (ADLA, XVII-A, 560), la determinación de si las inasistencias del empleado son injustificadas es, en principio, misión propia de la autoridad administrativa, sin que pueda ser revisada por el órgano judicial, salvo que se trate de una apreciación arbitraria.

2.- Si la falta de vista de las actuaciones y conclusiones del sumario administrativo se ha debido a la actitud del funcionario sumariado de negarse a concurrir a la citación para declarar, no puede decirse que con ello se haya comprometido la garantía constitucional de la defensa en juicio, pues no fué pído porque no siguió los trámites requeridos para ese fin.

3.- La intervención de la Junta de Disciplina, exigida por el artículo 44 del decreto-ley 6666/57 (ADLA, -

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

XVII-A, 560), tiene por objeto constituir una garantía para los imputados y su falta compromete la legitimidad de la resolución que disponga la cesantía. CNFed., SALA CONTENCIOSOADMINISTRATIVO, agosto 2-960.- Sammartino, Ernesto E.

2a. Instancia.- Buenos Aires, agosto 2 de 1960.-

CONSIDERANDO:

Que por resolución del presidente del Banco Hipotecario Nacional, de fecha 6 de febrero de 1959, se declara cesante al recurrente en el cargo de abogado jefe (gerente departamental de 3a.) de la sucursal de La Plata de ese Banco. Se funda esta decisión en las causales contempladas por los incs. a), d) y f) del art. 37 del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional (decreto-ley 6666/57 (ADLA, XVII-A, 560).

Que el doctor Sammartino interpone, en tiempo y forma, el recurso que autoriza el art. 24 del citado decreto-ley, lo que trae estas actuaciones a conocimiento del tribunal.

Que como a fs. 23 del agregado 15/607 se informa que el recurrente se hizo cargo del puesto el 29 de febrero de 1956, lo que se reitera a fs. 53 del presente expediente, y la cesantía fué pronunciada el 6 de febrero de 1959, como ya se dijo, lo primero que debe resolverse es si el mismo tiene derecho a la estabilidad que establece el estatuto. A este respecto, el art. 11 dispone que esa estabilidad se logra "después de tres años de servicios efectivos y continuos o cinco años de servicios efectivos discontinuos, de su ingreso en la Administración Nacional". Podría tal vez caber alguna duda frente a los servicios prestados de manera continua, ya que la nota de fs. 53 dice que cesó en sus funciones el 2 de marzo, aclarándose también que en ese lapso estuvo suspendido a raíz del sumario que culminó con la cesantía. Pero tal duda ha quedado disipada con el informe de la Secretaría de Agricultu-

ra y Ganadería de la Nación a fs. 56, producido a raíz de la medida para mejor proveer, decretada por el tribunal, en el sentido de que el doctor Sammartino prestó servicios en el ex Ministerio de Agricultura desde el 26 de diciembre de 1925 hasta el 31 de diciembre de 1930. Con esto se completan los cinco años discontinuos requeridos por la ley y, en consecuencia, hay que concluir que al recurrente lo asiste el derecho a la estabilidad que invoca.

Que admitido el derecho al cargo, corresponde considerar si la cesantía de que se trata fue pronunciada de conformidad con las normas del decreto-ley 6666/57. Con este propósito, es menester analizar las causales invocadas en la resolución recurrida.

Que la primera es la contenida en el inc. a) del art. 37 del estatuto, consistente en inasistencias injustificadas que excedan de diez días en el año, continuas o discontínuas.

Que el doctor Sammartino ha tenido más de diez inasistencias en el año, es exacto. Los informes obrantes en los agregados lo acreditan y él lo confirma. Pero se trata de saber si tales inasistencias eran o no injustificadas.

Que el tribunal ha declarado que, por vía de principio, determinar si las inasistencias son injustificadas es misión propia de la autoridad administrativa, sin que se pueda revisar por el órgano judicial, salvo que se trate de una apreciación arbitraria (sentencia del 15 de marzo último "in re", "Vázquez").

Que para establecer cuál ha sido el proceder del Banco sobre este punto, se hace necesaria una relación de los hechos, tal como resultan de los elementos acumulados para conocimiento del tribunal. Del informe de fs.23 de la carpeta 15/607 agregada, y de los remitidos por el gerente de la sucursal La Plata al secretario de casa -

central, obrantes en la carpeta caratulada "Sucursal La Plata. Profesionales de la sucursal. Fijación de horarios. Carta circular "S" 37/1958", también agregada, resulta - que el doctor Sammartino, desde su designación, no acostumbraba a concurrir diariamente a su despacho y que tal circunstancia era de conocimiento de sus superiores. Esto demuestra que las inasistencias no se juzgaron injustificadas por la autoridad competente. Recién por resolución de la presidencia del 7 de noviembre de 1958 se establece el régimen de asistencia y la obligación de cumplir horario para los profesionales que prestan servicios en las sucursales. Esta resolución se hace saber por circular "S" 37/58. A fs. 1 de la carpeta "Sucursal La Plata. Profesionales de la sucursal. Fijación de horarios. Cumplimiento - del mismo por parte del abogado jefe doctor Ernesto Sammartino" el gerente de esa sucursal, con fecha 24 de noviembre de 1958, hizo saber a la citada casa matriz que notificado el recurrente de la circular antes mencionada, manifestó que "por mantener su despacho al día, no considera necesaria su asistencia diaria". Esto dio lugar a un - dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Banco - en el que se aconsejó que "correspondía hacer saber al abogado jefe de la citada filial, que se encuentra comprendido en la aludida resolución de la presidencia, comunicada por carta circular "S" 37 del corriente año y por ende, está obligado a su cumplimiento". Hasta este momento no - hay ningún indicio como para presumir que el Banco considerara injustificadas las inasistencias. No se le aplicaron sanciones ni se le descontaron haberes. Otra circunstancia -decisiva por cierto- que influye para pensar así, la proporciona el cargo desempeñado por el doctor Sammartino. Para los empleados administrativos va implícita la obligación de concurrir diariamente a la oficina en que - presta sus servicios y cumplir el horario íntegro de la - respectiva administración. En cambio, para un abogado je-

fe no es lo mismo. Lo corriente es que no tenga obligación de cumplir la totalidad del horario y frecuente que tampoco se le exija la concurrencia diaria. Tal lo ocurrido en este caso hasta el momento en que, a raíz del dictamen de la Dirección de Asuntos Legales antes mencionado, el gerente general del Banco resolvió con fecha 4 de diciembre de 1958 que se notificara al doctor Sammartino - "que se encuentra comprendido en la resolución comunicada por carta circular "S" 37/958 y, por ende, está obligado a su cumplimiento". Este es el momento en que se expresaba la voluntad del Banco de exigir al recurrente que cumpla con la asistencia diaria y el horario correspondiente. Y la correlativa obligación se pone a cargo del interesado, a partir del 23 de diciembre siguiente, en que le es notificada, por telegrama colacionado, esa resolución. Desde ahí deben contarse sus inasistencias y pueden calificarse de injustificadas, toda vez que si al recibir esta comunicación el doctor Sammartino la hubiese acatado, nadie habría pensado en que era acreedor a la cesantía. En efecto; a fs. 8 corre una comunicación del gerente en la que da cuenta del envío del telegrama aludido y agrega: "En consecuencia, al vencimiento de la licencia ordinaria que ha solicitado el doctor Sammartino, comenzaremos a computar las inasistencias sin aviso, como injustificadas y con descuento de sueldo". Consta a fs. 24 del agregado 15/607 que el doctor Ernesto Sammartino estuvo en goce de licencia ordinaria desde el 16 de diciembre de 1958 hasta el 15 de enero de 1959. En consecuencia, sólo a partir del 16 de enero de este último año puede comenzar el cómputo referido. Pero como por resolución de la presidencia de fecha 15 de esos mismos mes y año -notificada el día siguiente-, se le suspende preventivamente mientras dure la sustanciación del sumario que se manda instruir y de resultas del cual fue de-

cretada la cesantía; fuerza es reconocer que la causal del inc. a) del art. 37 no se ha configurado en este caso, toda vez que desde que se le impuso la obligación de asistencia no tuvo oportunidad de incurrir en faltas.

Que previa al análisis de las otras dos causales que se citan para fundar la cesantía, es la cuestión articulada por el recurrente respecto a las violaciones legales en que dice haberse incurrido en la tramitación del sumario y a la falta de intervención de la Junta de Disciplina. Estas circunstancias no se estudiaron antes porque, para adoptar la medida de que se trata por la causal del inc. a) del artículo referido, no es necesaria la sustanciación de sumario ni la intervención de dicha junta. De modo que si se llegaba a la conclusión de que la cesantía por esa causal estaba debidamente decretada, resultaba innecesario tratar las demás cuestiones. Como no ha sido así, es menester, pues, proceder a su consideración.

Que al recibir el telegrama por el cual se le notificaba la obligación de asistencia, el doctor Sammartino contestó una nota dirigida al presidente del Banco de tono sumamente fuerte y por la cual rechazaba rotundamente, dice, la medida que se le pretende imponer. Esto, a juicio del Banco, importa incurrir en las causales contempladas en los incs. d) y f) del recordado art. 37, que se refieren a faltas graves de respeto al superior e inconducta notoria, respectivamente.

Que, como para adoptar, por estas causales, la medida recurrida, es necesaria la sustanciación de sumario previo, como se dijo, el Banco dispuso la instrucción del mismo, que encomendó al Director de Asuntos Legales.

Que el recurrente imputa ilegalidad a esos trámites por no haberse cumplido con lo que disponen el art. 41 del estatuto y los arts. III, XII y XVII de su decreto reglamentario en cuanto no se le ha dado vista de los cargos concretos que debe formular el instructor, para pro-

ducir su defensa; en cuanto considera que el instructor - no pertenece a la misma jurisdicción en la que se ha producido el hecho; y en cuanto no se siguió el procedimiento contemplado por el último de los artículos citados para el caso de negarse a prestar declaración, como él lo - hizo.

Que en lo que respecta a la falta de jurisdicción del instructor, cabe advertir que no se trata de una incompetencia por razón de la materia, sino simplemente territorial y, por ende, no es ella de suficiente entidad como - para comprometer la validez de las actuaciones. Además, al ser citado para declarar se enteró que debía concurrir a la Dirección de Asuntos Legales, porque así lo dice el respectivo telegrama, sin que cuestionara la competencia del funcionario, lo que implica un consentimiento a su actuación.

Que las otras dos defensas que se refieren a la falta de vista del sumario para ejercer el derecho de defensa y al procedimiento seguido ante la no concurrencia a prestar declaración, se hallan íntimamente vinculadas entre - sí, por lo que deben tratarse juntas. A este respecto, el art. XVIII de la reglamentación, establece que debe citarse al imputado para prestar declaración y que si no concurriera se lo citará nuevamente. Esto se ha cumplido en - las respectivas actuaciones. Si no se presenta, sin causa justificada, deberá proseguirse el sumario hasta reunir - todos los elementos de prueba, continúa diciendo, y luego paralizarse las actuaciones y elevarse a la Junta de Disciplina. La vista al interesado debe conferirse después - de terminada la prueba de cargo (art. 41 del estatuto) y luego de concluido el sumario y formuladas las conclusiones por el instructor. Es decir, que el sumario sigue dos procedimientos distintos según que el agente concurra o - no a prestar declaración. En el primer supuesto, se le da vista de las conclusiones y de los actuados para hacer su

defensa; en el segundo no; se limita a elevar las actuaciones a la Junta de Disciplina, la cual "dictaminará si corresponde aplicar las sanciones previstas en los arts. 37 y 38 del estatuto". De manera que, en cuanto a la falta de vista de las actuaciones y conclusiones, no es fundado el agravio porque el recurrente con su actitud -de negarse a concurrir a la citación para declarar-, hizo procedente el procedimiento seguido, en este aspecto. Y no puede decirse que con ello se haya comprometido la garantía constitucional de la defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional, como lo sostiene el recurrente, porque si no fue oído es porque no siguió los trámites requeridos para ese fin. Y ello, según lo ha declarado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia, no compromete dicha garantía. En cuanto a no haberse girado las actuaciones a la Junta de Disciplina es un punto que se vincula directamente con el último de los agravios del doctor Sammartino, que se trata en el considerando siguiente.

Que, asimismo sostiene el recurrente, la ilegitimidad de la decisión recurrida por falta de intervención de la Junta de Disciplina, como lo exige necesariamente el art. 44 del estatuto. Y aquí tiene razón. El tribunal ha declarado reiteradamente, a partir del caso "Esnaola" -sentencia del 2 de setiembre de 1958- que esa ingerencia actúa a guisa de garantía para los imputados y su falta compromete la legitimidad de la resolución que disponga la cesantía. A fin de evitar repeticiones, cabe remitirse a lo dicho en esa oportunidad.

Por estas consideraciones, se anula la decisión recurrida y se dispone la reincorporación del doctor Ernesto E. Sammartino en los términos de los arts. 26 y 27 del decreto-ley 6666/57.-

HORACIO H.HEREDIA - ADOLFO R.GABRIELLI - JUAN C.BECCAR VARELA - (Sec.: Jorge R.Pastor).-

Acto: Rev. LA LEY del 15-3-61. Pág.2.-

Materias: ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMI - NISTRACION PUBLICA NACIONAL (arts. 2° inc.1), 8°, 9° apart.3°, 28, 40 y 41) - ESTABILIDAD

1.- El Estatuto del Personal Civil de la Nación tiende a proteger la carrera administrativa. De ahí que - se excluyan de su alcance a todos aquellos cargos a los que no se llega por ascenso, sino con pres - cindencia del escalafón.

2.- El Estatuto del Personal Civil de la Nación no pro tege la función, salvo que ella fuere inherente a la clase, grupo o categoría respectiva.

3.- El Estatuto del Personal Civil (decreto - ley 6666/ 57 (*)(ADLA, XVII-A, 560) no protege a quien des- empeñaba las funciones de encargado del Registro - de Créditos Prendarios, pues se trata de una asig- nación de funciones que puede recaer en agentes de la Administración Nacional o Provincial y por las cuales no se percibe sueldo, no figurando el cargo en el presupuesto de la Nación.

CNFed., Sala Contenciosoadministrativo, setiembre 29- 960. Falabella, Angel M.

//-

(*) Ver Digesto Administrativo N° 254.-

2a. Instancia.- Buenos Aires, setiembre 29 de 1960.-

CONSIDERANDO:

Que por decreto del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 18 de mayo de 1959, 6154, se dieron por terminadas las funciones de encargado del Registro de Créditos Prendarios, en Alta Gracia (Córdoba), del doctor Angel M. Falabella.

Que contra ese decreto interpuso el interesado el recurso que legisla el art. 24 del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional (decreto-ley 6666/57 - XVII-A, 560), el que le fué denegado por decreto también del Poder Ejecutivo de 24 de agosto del mismo año.

Que ante esa situación, el doctor Falabella ocurrió de hecho ante la cámara, lo que dió lugar a la providencia de fs.34 por la cual, después de oír al fiscal, se dispuso correr traslado al recurrente y al Ministerio de Justicia de la Nación.

Que el recurso se funda en no haberse instruido sumario, con violación de lo dispuesto por los arts. 40 y 41 del Estatuto y no invocarse ninguna de las causales de cesantía consignadas en su art. 37. Se deja asimismo planteado el caso federal por considerarse violados los arts. 18, 16 y 31 de la Constitución Nacional.

Que el Ministro de Educación y Justicia, al evacuar el traslado de fs. 42, sostiene la improcedencia del recurso por considerar, en virtud de las razones aducidas por el segundo jefe de la Dirección General de Justicia en el dictamen que en copia acompaña, que el cargo desempeñado por Falabella no es de los contemplados por el Estatuto del Personal Civil de la Nación, lo que así fué resuelto de manera expresa en el decreto 7199/59 (ADLA, XIX-A, Ia, 418).

Que en realidad en la única parte donde se encuentran los fundamentos en que apoya su actitud el Poder Ejecutivo es en los considerandos del decreto 7199/59, antes citado, una copia del cual se agrega a fs. 18/19. Se expresa allí que la función de encargado de dichos registros surge de la ley de prenda agraria 9644, la cual en su art. 7° dice que estos registros funcionarán en las oficinas nacionales o provinciales que determina el Poder Ejecutivo.

Que no se trata de un cargo sino de una función, tanto es así que en la Capital Federal se creó el Registro de Prendas, pero en el resto del país se designó para ejecutar esa función a funcionarios, jueces de paz o encargados de oficinas del Registro Civil.

Que tales funciones se retribuyen con parte del producido del respectivo arancel y que dichos encargados actúan con automomía, en locales particulares, con personal propio y sin figurar en el presupuesto nacional.

Que a esta altura de la exposición, cabe aclarar que al dictar el decreto antes referido, el Poder Ejecutivo no puso en ejercicio la facultad que le confiere el inc. 1) del art. 2° del estatuto -sin perjuicio de que para el futuro pudiera tener ese efecto, sobre lo que no corresponde pronunciarse ahora- sino que hizo una interpretación de ese estatuto para concluir que sus preceptos no comprendian a las funciones de que aquí se trata.Por ello, no tiene importancia que este decreto sea de fecha posterior al que dio por terminadas las funciones del recurrente.

Que las condiciones en que se desempeñaba el recurrente deben tenerse por acreditadas si se considera que ellas resultan de un decreto del Poder Ejecutivo que, como acto administrativo, tiene a su favor presunción de legitimidad, y cuyas constancias, por otra parte, no han sido negadas.

Que siendo ello así, fuerza es reconocer que la postura del Poder administrador resulta legal y correcta. - En efecto, como ya lo ha dicho el tribunal en otra oportunidad, el estatuto tiende principalmente a proteger la carrera administrativa. De ahí que se excluyan de su alcance a los ministros, subsecretarios, secretarios de la Presidencia de la Nación, los integrantes de los gabinetes de los ministros y Secretaría de la Presidencia, los miembros de los cuerpos colegiados, etc.; es decir, a todos aquellos cargos a los que no se llega por ascenso, - sino con prescindencia del escalafón. Además, por vía de principio, tampoco protege la función, salvo que ella - fuera inherente a la clase, grupo o categoría respectiva (art. 9°); y aquí se trata de una asignación de funcio - nes, que puede también recaer en agentes de la Adminis - tración Nacional o Provincial, lo cual, en este último - caso, implicaría violar la incompatibilidad consagrada - en el art. 47 del estatuto.

Por último, el hecho de no percibir sueldo y no figurar el cargo en el presupuesto de la Nación constituyen características que chocan con las disposiciones contenidas en los arts. 8°, 9°, apart. 3° y 28.

Que en atención a lo dicho precedentemente, las cuestiones constitucionales planteadas en el escrito inicial deben ser desestimadas, por no guardar relación directa e inmediata con lo resuelto a base de la interpretación que se hace de las disposiciones legales aplicables.

En consecuencia, y por virtud de las consideraciones que se dejan expuestas, se desestima la presente queja y se declara bien denegado el recurso interpuesto.

HORACIO H. HEREDIA - ADOLFO R. GABRIELLI - JUAN C. BECCAR VARELA (Sec.: Jorge R. Pastor).

ACTO: DECRETO Nº 4.410/61.-

MATERIA: LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS (Hipódromos)

Buenos Aires, 2 de junio de 1961.-

Visto la situación creada en los Hipódromos Nacionales a raíz de las medidas de fuerza adoptadas por la Asociación Gremial del personal jornalizado, y la resolución de fecha 28 de mayo dictada por la Comisión de Carreras de Palermo y San Isidro, suspendiendo por tiempo indeterminado las actividades hípicas, y la correlativa de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos del 30 de mayo último y,

CONSIDERANDO:

Que una vez más la Asociación Gremial de que se trata adopta medidas de fuerza para obtener el logro de otras nuevas demandas;

Que en ese sentido cabe recordar que en junio de 1960, mientras las autoridades de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos y la Secretaría de Hacienda consideraban la implantación de un Escalafón especial para el personal de Hipódromos, frente al pedido de la Entidad Gremial de un 150 % de aumento sobre los jorna

//-

les, ésta dispuso sorpresivamente el trabajo a reglamento durante la reunión que debía realizarse el día 20 de dicho mes;

Que esa medida culminó con el abandono de sus tareas por parte del personal de Hipódromos al iniciarse la venta de boletos de la novena y última carrera, provocando una enérgica reacción en el público que obligó a la Comisión de Carreras -para evitar consecuencias mayores- a suspender la disputa de aquella prueba;

Que dado la falta de garantía para llevar a cabo normalmente los respectivos programas, la repartición suspendió igualmente las reuniones de los días 25 y 26 de junio de 1960, mientras el gremio dilataba las soluciones al disponer su asamblea un cuarto intermedio hasta el primero de julio;

Que pese a ello el Poder Ejecutivo, con el propósito de conciliar los intereses de las partes, por decreto Nº 7.334 del 29 de julio de 1960 (*), aprobó el nuevo Estatuto para el personal de Hipódromos y fijó las bases para la implantación del correspondiente Escalafón;

Que la entidad gremial, en conocimiento del citado acto de gobierno, reanudó la asamblea y ésta fijó un plazo de 30 días para obtener los ajustes salariales solicitados;

Que otra asamblea realizada el día 7 de agosto resolvió cumplir nuevamente el trabajo a reglamento, sin tener en cuenta las tareas que se estaban realizando en la Secretaría de Hacienda para concretar las mejoras en cuestión;

Que la medida de fuerza comentada no se llegó a cumplir gracias a las gestiones realizadas por la repartición ante el gremio en las cuales se determinó la imposibilidad de satisfacer en plazo tan breve sus demandas, que estaban vinculadas a la aplicación del decreto de je

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1204.-

rarquización de toda la Administración Nacional y a la presentación del Presupuesto General de la Nación, tareas éstas que requerían un lapso evidentemente más prolongado;

Que, no obstante ello, la entidad gremial vuelve a disponer el trabajo a reglamento y el retiro de toda colaboración a la dependencia a partir del día 3 de septiembre y sólo deja sin efecto la medida ante la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien la intima a ajustarse al procedimiento de conciliación previa fijado por la Ley Nº 14.786 (");

Que con fecha 21 de septiembre, por decreto número 11.616/60 (°), el Poder Ejecutivo aprobó el nuevo Escalafón para el personal de Hipódromos en el cual, entre otros, se conceden los siguientes beneficios:

a) mejoras de haberes superiores a las otorgadas para el resto del personal comprendido en el Escalafón único, en el cual venían revistando estos agentes;
b) mejoras superiores a las concedidas por el Decreto de jerarquización al personal de la Administración Pública;
c) un sistema más ágil y acelerado de promociones;
d) la incorporación definitiva a sus haberes de las diferencias de sueldos por mayores cargos, y
e) la incorporación del adicional equivalente a 3/8 de jornal que percibían sólo en la eventualidad de un incremento en el número de pruebas por reunión;

Que sin embargo la Asociación Gremial resuelve reiniciar el trabajo a reglamento a partir del día 25 de septiembre, como manifestación de disconformidad por los beneficios recibidos en el mencionado Escalafón;

(") Ver Digesto Administrativo Nº 714.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1269.-

Que bajo los efectos de aquella medida de fuerza la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos resuelve suspender la actividad de los Hipódromos e intimar al personal la reanudación de sus servicios, frente a la responsabilidad que le incumbía por la importancia de las reuniones hípicas programadas, entre las que se encontraba el Gran Premio Nacional;

Que mientras se cumplían nuevas negociaciones, el gremio dispuso el levantamiento de su disposición a partir del día 15 de octubre;

Que, satisfaciendo una vez más la gestión gremial, el Poder Ejecutivo dispuso una ampliación de los beneficios reconocidos por el Escalafón dado por decreto Nº 11.616/60 concediendo:

a) equiparación de distintas categorías de pagadores y vendedores de vales y boletos;
b) reconocimiento de la diferencia del complemento por ubicación a raíz de la incorporación a los haberes de los 3/8 del jornal;
c) autorización para liquidar la bonificación por antigüedad en un importe no inferior al vigente al 31 de julio de 1960;
d) mantenimiento del pago de doble jornal para las reuniones en que se disputa el Gran Premio Nacional y Gran Premio Carlos Pellegrini, y
e) pago de horas extraordinarias por extensión del horario a más de 8 horas;

Que en consecuencia, en estos momentos, cuando se consideraba ya superado el conflicto antes descripto, el Gremio intima nuevamente para que en el plazo de 15 días, a contar del 2 de mayo de 1961 se reduzca a 8 pruebas por reunión la programación vigente; en una hora la jornada de labor y se otorgue un 30% de aumento sobre los actuales jornales;

Que vencido el plazo aludido el Gremio resuelve realizar un paro total de actividades durante 2 carreras - del programa del día 25 de Mayo, una de las cuales sería el Gran Premio Internacional;

Que esta medida se repitió durante las reuniones internacionales de los días 28 y 29 de mayo ppdo.;

Que la intimación aludida, además de exceder el nivel de una lógica aspiración, desconoce las bases que dieron origen a la aplicación de los jornales vigentes, ésto es, la conversión a 10 carreras dentro de 8 horas de trabajo de una jornada anterior de 8 pruebas con carreras adicionales remuneradas, transformando así el problema en un - círculo vicioso por el cual se pretende volver al sistema anterior, pero manteniendo los beneficios logrados - con la implantación del vigente;

Que a lo incongruente del petitorio, cabe agregar las características compulsivas de su gestión, ya que el paro decretado estuvo dirigido a afectar no solo la economía de la repartición y poner en riesgo la integridad de los bienes del Estado sino principalmente el prestigio - del turf nacional convocado para una fiesta de excepción;

Que es evidente por otra parte que la Asociación Gremial del personal jornalizado de Hipódromos ha tratado - reiteradamente de forzar la obtención de las mejoras laborales presionando sobre las autoridades al aprovechar por los compromisos que éstas debían afrontar con motivo de la disputa de los grandes premios, pruebas internacionales, aniversarios patrios, etc.;

Que la importancia y jerarquía alcanzada por los Hipódromos Argentinos, su relación directa con los importantes intereses que componen la hípica nacional, los propios del Estado y las responsabilidades de la repartición, frente a los perjuicios morales y materiales que actitudes de esta naturaleza producen, obligan a tomar urgentes medidas que permitan contar con las mayores condiciones de seguridad para su normal realización;

Que ante tal situación y medida la gravedad de los hechos producidos, el Poder Ejecutivo se ve precisado a intervenir, adoptando los recaudos necesarios para evitar su repetición, ya que entiende que una de las razones que justifican la administración de los hipódromos en jurisdicción del Estado está dada por la responsabilidad y seguridad que éste garantiza al público y a todos aquellos sectores vinculados con esta actividad;

Por ello y atento a lo propuesto por la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos y la Secretaría de Estado de Hacienda,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Ratificar la suspensión de las actividades hípicas en los Hipódromos de Palermo y San Isidro, por tiempo indeterminado.

ARTICULO 2º.- Suspender en sus funciones a todo el personal jornalizado de los Hipódromos de Palermo y San Isidro.

ARTICULO 3º.- Designar una Comisión integrada por los señores Jefes de Departamento de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos don Oscar Horacio Elía, don Enrique Escars y don Manuel R.Macchi, para que, con la urgencia que el caso requiere, aconseje las medidas que considere oportuno adoptar para la pronta normalización de la actividad hípica. Actuará como secretario de dicha Comisión el señor Héctor José Gálvez.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Estado de Hacienda a sus efectos.-

FRONDIZI - Roberto Alemann
Jorge Wehbe.

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº 1406.-

ACTO: DECRETO Nº 5.006/61.-

MATERIAS: PLAN DE RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - CEPRA PERSONAL - PROHIBICIONES - ECONOMIAS - VACANTES BOLSA DE TRABAJO

Buenos Aires, 21 de junio de 1961.-

Visto que el Poder Ejecutivo ha adoptado diversas medidas para reducir los gastos de la Administración Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que el análisis de las cifras de altas de personal en los distintos sectores de la Administración demuestra que aún cuando se mantiene la disminución neta de agentes, es decir que en el conjunto las bajas acusan mayor número que las altas, esa diferencia está disminuyendo paulatinamente;

Que al respecto es significativo hacer notar que mientras en 1959 se registró una disminución neta de 39.116 agentes y en 1960 de 37.527, en los primeros cuatro meses de 1961 esa disminución es sólo de 4.262 agentes originada por 16.681 bajas y 12.419 altas;

Que es alarmante constatar que el ritmo de disminución de agentes decrece desde el mes de diciembre de 1960 y también lo es el hecho de que se advierten numerosas designaciones en organismos que se encuentran en proceso

//-

de liquidación o de reestructuración;

Que en momentos en que el Gobierno quiere proceder en forma metódica y racional a reducir los costos de la administración, tratando de evitar medidas expulsivas siempre dolorosas, no se justifica el ingreso de agentes que agravan la situación que se quiere remediar;

Que las necesidades imprescindibles que se registren pueden ser atendidas mediante la redistribución del personal por intermedio del servicio creado por Decreto Nº 9.718/59 (¹), y en caso de tratarse de funciones de alta especialización, puede establecerse el régimen de excepción que permita resolver tales situaciones;

Que las consideraciones precedentes comprenden tanto la administración central, en la cual sin embargo los ingresos de agentes han sido muy limitados, como los organismos descentralizados y autárquicos y las empresas del Estado;

Que si bien estos organismos poseen por sus estatutos orgánicos facultades legales para efectuar designaciones, debe advertirse que el artículo 33° de la Ley Nº15.796 (ⁿ), establece la vigencia general de las medidas de racionalización que en la materia dicte el Poder Ejecutivo en ejercicio de las funciones y responsabilidades que le atribuye el artículo 86° de la Constitución Nacional, sentando así un principio de orden que impedirá la existencia de sectores privilegiados que puedan actuar con desconocimiento de los esfuerzos que realiza la Nación en su conjunto;

Por ello y atento lo propuesto por el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A),

---

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 854.-

(ⁿ) Ver Digesto Administrativo Nº 1324.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- A partir de la fecha y hasta la finalización del presente ejercicio financiero queda terminantemente prohibido el ingreso de nuevos agentes, de cualquier categoría, en la administración central, organismos descentralizados, empresas del Estado, obras sociales, organismos financiados con recursos de cuentas especiales y plan de trabajos públicos, sea con imputación a partidas individuales o globales de los respectivos presupuestos, con las excepciones que más adelante se indican, las que serán de interpretación restrictiva.

ARTICULO 2º.- Declárase congeladas durante el mismo lapso todas las vacantes existentes y que se produzcan en los organismos a que se refiere el Artículo anterior. El descongelamiento, al único efecto del otorgamiento de ascensos o de la provisión de cargos mediante el sistema de transferencias previsto en el decreto Nº 9.718/59, sólo podrá resolverse previa la conformidad del COMITE EJECUTIVO DEL PLAN DE RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA (C.E.P.R.A.), que la prestará únicamente frente a la justificación documentada de su imprescindible necesidad. Considéranse descongeladas, a los efectos del otorgamiento de ascensos, aquellas vacantes para cuya cubertura ya se hayan publicado los avisos de llamado a concurso.

ARTICULO 3º.- Las excepciones al Artículo 1º serán resueltas únicamente mediante decreto del Poder Ejecutivo previo informe del COMITE EJECUTIVO DEL PLAN DE RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA (C.E.P.R.A) y con la intervención de la SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA. El pedido respectivo deberá acompañar, además de la justificación a que se refiere el Artículo 2º, un informe producido por el SERVICIO DE TRANSFERENCIA creado por decreto Nº 9.718/59 en el que se certifique que no se ha podido satisfacer el

requerimiento de personal y que se ha consultado a ese efecto a todos los organismos mencionados en el Artículo 1º.

ARTICULO 4º.- Durante el mismo lapso indicado en el Artículo 1º declárase en suspenso todas las autorizaciones acordadas para efectuar designaciones, inclusive las provisorias o interinas.

ARTICULO 5º.- Las designaciones en horas de cátedra sólo serán autorizadas para asignaturas cuyo dictado se encuentre en curso, y deberán recaer exclusivamente en agentes que ya tengan asignada la compensación por estado docente, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Nº 14.473 (Estatuto del Docente).

ARTICULO 6º.- Las designaciones de maestros de grado y preceptores sólo se harán en establecimientos de enseñanza en pleno funcionamiento y deberán recaer únicamente en agentes con título habilitante que presten servicios en cualquier organismo de la administración sea central o descentralizada; en tal caso el cargo que quede vacante en la administración será automáticamente suprimido. Todo ello con la salvedad indicada en la parte final del Artículo anterior.

ARTICULO 7º.- Serán responsables del cumplimiento de las normas de este decreto, además de las autoridades de los organismos a que se refiere el Artículo 1º, los delegados, fiscales o auditores del TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, síndicos de Empresas del Estado y directores de administración o similares. El incumplimiento será considerado falta grave y determinará la instrucción de sumario a los efectos de adoptar la pertinente medida de expulsión. Para los funcionarios que ejercen únicamente tareas de contralor se considerará que han incurrido en incumplimiento cuando no han formulado acto expreso de oposición en el momento oportuno.

ARTICULO 8º.- A partir del 1º de noviembre del año en -

curso se aplicarán nuevamente, en materia de personal, las disposiciones del decreto N° 413/60 (°).

ARTICULO 9°.- Autorízase al COMITE EJECUTIVO DEL PLAN DE RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA (C.E.P.R.A.) para aclarar los alcances del presente decreto, en los casos en que sea necesario.

ARTICULO 10°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 11°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Jorge Wehbe

(°) Ver Digesto Administrativo N° 1066.-

ACTO: DECRETO Nº 4.603/61.-

MATERIA: LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS (Hipódromos)

Buenos Aires, 9 de junio de 1961.-

Visto el Decreto Nº 4.410/61 relacionado con la situación creada en los hipódromos nacionales como consecuencia de las medidas de fuerza dispuestas por la Asociación Gremial del Personal Jornalizado, y

CONSIDERANDO:

Que tal como se expresara al fundamentar aquel acto de gobierno, los importantes intereses que afecta la actividad hípica, hace necesaria la adopción de las medidas que den rápida solución a la situación creada a consecuencia del conflicto;

Que para ello se estima indispensable contar con un sistema que permita a la repartición actuar en forma ágil y eficaz, atendiendo las características específicas de los servicios, especialmente en lo que hace a la integración de los planteles de personal para cada reunión hípica, con arreglo a su programación;

Que en este sentido debe tenerse en cuenta que si bien las tareas que se realizan en dicho ámbito tienen cierta regularidad, no puede sostenerse lo mismo en cambio con respecto al tiempo en que se cumplen, la cantidad de agentes que deben desempeñarla y la fre -

//-

cuencia con que se prestan los servicios;

Que tales circunstancias dan a las tareas en cuestión cierto margen de fluctuaciones que deben ser atendidas mediante un régimen dotado de suficiente elasticidad para responder en el acto a sus demandas;

Que para ello dentro de los mecanismos posibles en la organización administrativa actual del Estado, el que mejor se adviene a estas necesidades es el de la contratación directa de servicios con arreglo a fórmulas tipificadas;

Que la medida enunciada tiene por exclusiva finalidad posibilitar la reanudación a breve plazo de las actividades hípicas en los Hipódromos Nacionales, sin perjuicio de que la Comisión Especial creada por el Decreto N° 4.410/61 (°), prosiga con los estudios que le fueron oportunamente encomendados;

Que, correlativamente, corresponde introducir las modificaciones pertinentes en el presupuesto para el ejercicio de 1961 de la cuenta especial "Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos - Explotación de Hipódromos";

Por ello, teniendo en cuenta lo aconsejado por la citada Comisión Especial y la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, como asimismo la conformidad prestada por la Secretaría de Hacienda, lo previsto por el artículo 3° del Decreto N° 413/60 (") y la autorización conferida por el artículo 12° de la Ley número 15.796 (+),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Autorízase a la Lotería de Beneficencia Na-

(°) Ver Digesto Administrativo N° 1405.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 1066.-
(+) Ver Digesto Administrativo N° 1324.-

cional y Casinos para efectuar "ad referendum" de la Secretaría de Hacienda, la contratación directa de agentes para prestar servicios por reunión en los Hipódromos de Palermo y San Isidro, no pudiendo exceder su número de 3.400 para el primero y 3.200 para el segundo, cuyas retribuciones -de acuerdo con la función que se asigne- no serán inferiores a m$n.310, ni superiores a m$n.1.300 diarios. Asimismo dichos contratos serán de un año de duración y podrán ser renovados a su vencimiento.

ARTICULO 2°.- El desempeño de parte del personal contratado en cada una de las reuniones extraordinarias denominadas "Gran Premio Nacional" y "Carlos Pellegrini" dará lugar a una retribución adicional equivalente al importe asignado por reunión en el contrato.

ARTICULO 3°.- Asimismo, el personal contratado que eventualmente desempeñe un cargo superior al fijado en el contrato, percibirá por esa función una mayor retribución que se calculará sobre la base de las escalas de remuneraciones básicas establecidas por el Decreto número 11.616 del 21 de setiembre de 1960 (°).

ARTICULO 4°.- El gasto emergente del cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 1°, 2° y 3° del presente acto de Gobierno será atendido con cargo a la partida de "Honorarios y retribuciones a terceros" de la cuenta especial "Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos - Explotación de Hipódromos".

ARTICULO 5°.- El personal que en función de lo dispuesto por el artículo 1° resulte contratado para desempeñarse por reunión en los Hipódromos Nacionales, gozará de los beneficios establecidos por el artículo 1° del Decreto nº 3.601 del 15 de marzo de 1954.

(°) Ver Digesto Administrativo N° 1269.-

ARTICULO 6°.- Modifícase de acuerdo al detalle que figura en planillas anexas el presupuesto para el ejercicio de 1961 de la Sección 1a. - Título I - Servicios (Sector 2,B) Erogaciones a financiar con recursos de cuentas especiales (propios, contribuciones a cargo del Tesoro y otros ingresos), N° 4 del Anexo 100 - Secretaría de Hacienda (N° 52) Item 325 - Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos - Explotación de Hipódromos.

ARTICULO 7°.- Modifícase en la forma que se determina en planillas anexas el cálculo de recursos efectado a la financiación de las Secciones 1a. y 2a. - Presupuesto de Gastos e Inversiones Patrimoniales (N° 6), B) Recursos de cuentas especiales (propios, contribuciones a cargo del Tesoro y otros ingresos) - N° 4 del Anexo 100 - Secretaría de Hacienda (N° 52), Item 325 - Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos - Explotación de Hipódromos.

ARTICULO 6°.- Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación de acuerdo a los términos establecidos por el artículo 16° de la Ley N° 15.796.

ARTICULO 9°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.

FRONDIZI - Roberto T. Alemann - Jorge Wehbe

ACTO: DECRETO Nº 4.648/61.-

MATERIAS: PLAN DE RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - ADMINISTRATIVA - RACIONALIZACION - ESTRUCTURAS

Buenos Aires, 9 de junio de 1961.-

Visto el artículo 31º de la Ley número 15.796 (*), lo aconsejado por el Instituto Superior de Administración Pública y lo propuesto por el C.E.P.R.A., y

CONSIDERANDO:

Que la citada disposición legal ratifica y complementa las del decreto nº 10.975/58 (**), que demostró su eficacia para contener el proceso de hipertrofia administrativa;

Que la misma ha sido dictada con el propósito fundamental de consolidar los beneficios obtenidos y de establecer un adecuado control sobre toda la estructura orgánica de la Administración Nacional, para evitar cualquier expansión de organismos que no sea indispensable;

Que es conveniente y oportuno iniciar la segunda etapa, ya prevista, del Plan de Racionalización en la que se procurará reducir y adecuar las estructuras y //-

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1324.-

(**) Ver Digesto Administrativo Nº 682.-

funciones de todos los organismos de la Administración Nacional a los fines del Estado establecidos por la Constitución Nacional, las leyes y los planes de Gobierno;

Que esta adecuación es una tarea larga y compleja, que requiere el más alto interés y apoyo por parte de las altas autoridades, al mismo tiempo que una amplia participación de numerosos organismos y agentes especializados;

Que en estas condiciones resulta imprescindible centralizar toda la información técnica en el Instituto Superior de Administración Pública (ISAP), que es el organismo asesor del Poder Ejecutivo en problemas de administración pública y de racionalización administrativa;

Que es oportuno y conveniente facilitar la transformación del Presupuesto General de la Nación en un auténtico documento de previsión y de expresión numérica de los planes de Gobierno;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- A partir de la fecha, los organismos civiles del Estado -cualquiera sea su naturaleza jurídica- no pondrán a consideración del Poder Ejecutivo ningún proyecto de decreto autorizando creaciones o modificaciones de estructuras y/o funciones y/o cargos, sin intervención previa del Instituto Superior de Administración Pública (ISAP), quien en cada caso agregará un informe aconsejando las medidas pertinentes y sus fundamentos.

ARTICULO 2°.- Los proyectos mencionados en el artículo anterior, serán remitidos al citado Instituto con toda la información técnica, estudios y antecedentes que se requieran para expedirse, a lo que se agregará la opinión fundada del respectivo Servicio o Comisión de Organiza -

ción y Métodos. Las correspondientes normas e instrucciones generales serán establecidas por resolución del C.E.P.R.A.-

ARTICULO 3°.- La categoría presupuestaria de los niveles jerárquicos aprobados por el Instituto Superior de Administración Pública (ISAP), será establecida por acuerdo conjunto del C.E.P.R.A. y de la Secretaría de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4°.- Déjase establecido que todas las creaciones o modificaciones de estructuras orgánicas que impliquen alteración presupuestaria, una vez aprobadas, serán incluídas en el ante-proyecto de presupuesto para el siguiente año fiscal. Los casos de excepción, originados en razones de interés nacional, de emergencia o de evidente e imprevista necesidad, serán autorizados expresamente con intervención previa del C.E.P.R.A.

ARTICULO 5°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI - Roberto T. Alemann - Jorge Wehbe

ACTO: DECRETO N° 4.730/61.-

MATERIA: COEFICIENTES

Buenos Aires, 13 de junio de 1961.-

Visto el Decreto N° 11.919 de fecha 4 de julio de 1956, por el que se fijó los coeficientes para las remesas que se realizan a favor del personal del Estado destacado en el exterior, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 942 del 2 de febrero de 1961 (1), al establecerse el sistema de liquidación y pago de las remuneraciones a los Agentes de la Administración Central del Estado en el exterior, se dejó establecido que la Comisión Mixta Asesora creada por el artículo 7° del citado texto legal, propondría al Poder Ejecutivo la asignación de los coeficientes a los diferentes países;

Que hasta tanto se expida la citada Comisión, procede -de acuerdo con las estimaciones actuales del costo de la vida experimentado en Japón- reajustar el coeficiente vigente;

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A:

ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 1° del Decreto nú

(1) Ver Digesto Administrativo n° 1.353.-

mero 11.919 de fecha 4 de julio de 1956 (+), dejándose establecido que a partir del 1° de julio de 1961, regirá para Japón el coeficiente básico de ocho con cincuenta (8,50).
ARTICULO 2ª.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado de Relaciones Exteriores y Culto, Economía y Defensa Nacional y firmado por los Señores Secretarios de Estado de Hacienda, Comercio y Aeronáutica.
ARTICULO 3ª.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Roberto T. Alemann - Justo P. Villar - Adolfo Mugica - Pedro M. Garcia Oliver - Ramón A. Abrahín - Jorge Wehbe.-

(+) Ver Digesto Administrativo n° 123.-

ACTO: DECRETO Nº 4.781/61.-

MATERIAS: ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - LICENCIAS - CALIFICACION

Buenos Aires, 14 de junio de 1961.-

Visto el Escalafón para el Personal Civil de la Administración Nacional aprobado por decreto Nº 9.530/58, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con las normas del mismo, el personal que aspire a cambiar de Clase y/o Grupo, a través de los concursos de rigor, debe poseer una calificación promedio no inferior a siete (7) puntos en los últimos dos (2) años;

Que en la determinación de la calificación anual del personal inciden, en forma proporcional a su duración, las licencias sin goce de haberes, de cualquier carácter, que hubiesen usufructuado los agentes, rebajando de tal manera el puntaje que aquéllos hubiesen acreditado en la valoración de los conceptos que integran la foja respectiva;

//-

Que entre las causales de otorgamiento de licencias - sin sueldo se encuentra la prevista en el art. 34° del decreto N° 12.720/53 (1), referente a casos de realización de estudios, investigaciones, trabajos científicos, técnicos o artísticos, o participación en conferencias o congresos de esa índole en el país o en el extranjero por - parte de los agentes de la Administración Pública Nacional;

Que resulta evidente que en estos casos existe un interés concurrente del Estado en facilitar la preparación del agente, o en acrecentarla, a fin de que sus servicios resulten, una vez reintegrado a sus tareas, más eficientes, como consecuencia de la actividad desplegada en usufructo de aquella licencia, que en muchos casos es consecuencia directa de la obtención de una beca y en otros - responde a invitaciones emanadas de instituciones científicas, culturales o artísticas de reconocida jerarquía;

Que en tales condiciones, resulta excesivamente riguroso castigar al agente que ha utilizado tales licencias impidiéndole participar en la realización de concursos de antecedentes o de oposición en razón de que su calificación conceptual haya sido reducida por efectos de la licencia sin sueldo utilizada;

Que dicho procedimiento incide asimismo en la percepción del adicional por "responsabilidad jerárquica" resultante del decreto N° 9.252/60 (2), que exige una calificación no inferior a ocho (8) puntos para dar derecho a tal beneficio y en la promoción anual por antigüedad calificada;

Que es conveniente al propio Estado que sus agentes - tengan la mayor capacitación posible, para obtener de sus servicios los mejores resultados, para lo cual deben arbitrarse medidas que estimulen sus ansias de perfeccionamiento científico, cultural o artístico, en beneficio del Es-

(1) Ver Digesto Administrativo N° 15.-
(2) Ver Digesto Administrativo N° 1216.-

tado y de toda la comunidad;

Por ello, y atento a lo aconsejado por la Secretaría de Estado de Hacienda en uso de las atribuciones resul - tantes del decreto-ley Nº 797/58 (°) (Ley Nº 14.467) (+),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Las licencias sin goce de haberes que sean concedidas al personal de la Administración Nacional com prendido en el Escalafón para el Personal Civil (decreto Nº 9.530/58), encuadradas en el art. 34º del decreto Nº 12.720/53, y motivadas, exclusivamente, por la realiza - ción de estudios, investigaciones, trabajos científicos, técnicos o artísticos, o por la participación en confe - rencias o congresos de esa índole, en el país o en el ex tranjero, no serán deducidas de la calificación anual de los agentes beneficiarios de las mismas.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc - ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archíve - se.-

FRONDIZI - Roberto T.Alemann
Jorge Wehbe.

(°) Ver Digesto Administrativo Nº 419.-
(+) Ver Digesto Administrativo Nº 609.-

ACTO: DECRETO Nº 4.832/61.-

MATERIA: LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS

(Hipódromos)

Buenos Aires, 16 de junio de 1961.-

Visto lo aconsejado por la Comisión Especial creada por el artículo 3º del decreto Nº 4.410, del 2 de junio de 1961 (*), para el estudio de las medidas tendientes a regularizar la actividad hípica en los Hipódromos Nacionales, y

CONSIDERANDO:

Que según constancias obrantes en el acta suscripta en fecha 15 de junio del año en curso, entre la Comisión Especial, decreto Nº 4.410/61, por una parte y representantes de la Confederación General del Trabajo y de la Federación Argentina de Trabajadores del Turf, por la otra, la entidad gremial que agrupa al personal de Hipódromos, procedió a levantar las medidas de fuerza oportunamente dispuestas, comprometiéndose, además, a no realizar nuevos actos de esa naturaleza hasta tanto el Poder Ejecutivo dicte la política a seguir con respecto a la explotación de los Hipódromos Nacionales;

Que en esas condiciones y poniendo de manifiesto una vez más el espíritu conciliador que lo anima, el -

//-

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1405.-

Poder Ejecutivo no tiene inconveniente en dejar sin efecto, a su vez, la suspensión del personal establecida por el decreto Nº 4.410/61, y retrotraer la situación de dichos agentes a las condiciones de revista dentro del régimen imperante con anterioridad al dictado del referido acto de gobierno;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Dénse por terminados los efectos del decreto Nº 4.410/61.-

ARTICULO 2º.- La Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, dispondrá las medidas necesarias a efectos de regularizar la situación derivada de la disposición establecida en el artículo 1º.-

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Hacienda a sus efectos.-

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Jorge Wehbe

ACTO: DECRETO N° 4.836/61.-

MATERIAS: ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - BOLSA DE TRABAJO - TRANSFERENCIAS

Buenos Aires, 16 de junio de 1961.-

Visto el Decreto N° 1.840/61 (¹), por el que se establecieron las condiciones y los plazos para la incorporación presupuestaria definitiva del personal transferido en función de las normas del decreto número 9.718/59 ("), y

CONSIDERANDO:

Que distintos Ministerios, Secretarías de Estado y Reparticiones Descentralizadas han solicitado se prorrogue el término fijado para concretar dichas incorporaciones, en razón de la imposibilidad de obtener en término la aprobación de los reajustes presupuestarios que posibiliten las mismas;

Por ello y de conformidad con lo informado por la Secretaría de Estado de Hacienda,

//-

(¹) Ver Digesto Administrativo N° 1363.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 854.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Prorrógase hasta el 31 de agosto de 1961 - el término fijado en el artículo 1° del decreto número 1.840/61, para que los organismos que a la fecha del mismo contaran con personal transferido por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación en función de las disposiciones del decreto n° 9.718/59, procedan a incorporar a dichos agentes a sus respectivos presupuestos o los reintegren a las dependencias de origen.

ARTICULO 2°.- Los distintos Ministerios, Secretarías de Estado y organismos, que incorporen o reintegren el personal a que se refiere el artículo anterior, deberán remitir a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación copia de los actos administrativos correspondientes, a fin de que este organismo proceda a actualizar sus registros de personal en disponibilidad.

ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Jorge Wehbe

ACTO: DECRETO N° 4.863/61.-

MATERIAS: LICENCIAS - ADSCRIPCIONES

Buenos Aires, 19 de junio de 1961.-

Visto el expediente n° 38.044/959 (1), relacionado con la licencia sin goce de sueldo oportunamente otorgada al agente de la cuenta especial "Secretaría de Estado de Hacienda-Dirección General de Contabilidad y - Administración-Cumplimiento Decreto Ley n° 12.029/57" (2), don Guillermo Enrique Barbaglia, y

CONSIDERANDO:

Que el beneficio aludido le fué concedido al nombrado mediante resolución n° 365, dictada por el Ministerio de Educación y Justicia -donde se desempeña en calidad de adscripto-, el 26 de agosto de 1959 (fs.4);

Que al ser giradas las presentes actuaciones a la delegación ante la Secretaría de Estado de Hacienda, del Tribunal de Cuentas de la Nación, a efectos de que tomara la intervención que le compete, dicha dependencia estimó que la licencia en cuestión debía ser otorgada por la autoridad del organismo donde el causante revistaba presupuestariamente (fs.6 y 13), criterio compartido por el propio Tribunal de Cuentas de la Nación (fs.16);

//-

(1) Ver Digesto Administrativo N° 1302.-
(2) Ver Digesto Administrativo N° 335.-

Que la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, consideró que, si bien las licencias sin goce de sueldo deben ser concedidas de la manera indicada por el citado organismo fiscalizador, en mérito a que las mismas no revisten el carácter de un derecho absoluto, sino que se hallan sujetas entre otras cosas, a las necesidades del servicio, resultaba imprescindible, en todos los casos, contar con la opinión previa de la repartición donde el agente se encontrara desempeñándose (fs. 15);

Que al dictaminar sobre el particular, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Hacienda (fs. 19/20), estimó que corresponde a la repartición de origen la adopción de las medidas que puedan modificar substancialmente la situación jurídica permanente que vincula al empleado con la Administración y, en cambio, son propias del organismo donde se halle prestando servicios, aquellas otras que hagan a las necesidades funcionales del mismo, agregando, que las manifestaciones del Tribunal de Cuentas de la Nación y de su delegación (fs. 6, 13 y 16, respectivamente), resultan inconsistentes, por cuanto "... "la mera aserción o el simple juicio asertórico no son ra "zón suficiente, desde que se trata, en el caso, de una "cuestión controvertible y desde que no se han expuesto, "en verdad, los principios o premisas en que se fundan a- "quellas afirmaciones";

Que el señor Subprocurador del Tesoro de la Nación al expedirse en autos, manifestó que "... las afirmaciones de "que se hace mérito en los informes de fs. 13 y 15, no al "canzan a enervar los sólidos fundamentos del dictamen de "fs. 19 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de "esa Secretaría de Estado", agregando, además "...Por ello, "soy de opinión que la concesión de licencias en caso co- "mo el que se trata, incumbe a la repartición en la que "el agente presta servicios";

Que por lo expuesto, a fin de evitar tratamientos dis

pares y de conformidad con lo dictaminado por el señor - Subprocurador del Tesoro de la Nación (fs. 22), procede dejar debidamente establecido que las licencias sin goce de sueldo, previstas por el artículo 31° del decreto nº 12.720/53 (+), de los agentes que se desempeñen en calidad de adscriptos, deberán ser concedidas por las autoridades del organismo donde se hallen prestando servicios, siempre que el lapso del beneficio no exceda el término de la adscripción;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Las licencias sin goce de sueldo a que se refiere el artículo 31° del decreto nº 12.720/53, de agentes que se encuentren desempeñándose en calidad de - adscriptos, deberán ser otorgadas por las autoridades - del organismo donde se hallen prestando servicios, siempre que el lapso del beneficio aludido, no exceda el término de la adscripción.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento - de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Jorge Wehbe

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 15.-

ACTO: Rev. LA LEY del 20-3-61 -Págs.4 y 5.-

MATERIA: CONTRATACIONES (Mora)

1.- A los contratos administrativos les son aplicables las reglas relativas a todos los demás contratos; por consiguiente, en lo que atañe a la mora debe estarse a lo que dispone el código civil.

2.- Si el contrato administrativo establece un término y una cláusula penal para el caso de no cumplirse dentro de él, no hay duda que es necesario constituir previamente en mora al deudor para que la pena entre a aplicarse (art. 655, Código Civil), debiendo mediar interpelación.

CNFed., Sala Civil y Comercial, noviembre 24-960 - Pfeiffer y Cía. c. Gobierno nacional.

1a. Instancia.- Buenos Aires, setiembre 25 de 1958.

CONSIDERANDO:

Que atento a la litis trabada por demanda y reconvención la cuestión a dilucidar se concreta a si es o no procedente la multa impuesta por la demandada por el incumplimiento de Pfeiffer y Cía. en la provisión del arseniato de plomo. La actora sostiene su improcedencia y pide la devolución de parte de esa multa ya -

/—

percibida por la demandada sobre el depósito de garantía. Esta, por el contrario, arguye su procedencia y solicita, por vía de la reconvención, el pago del saldo no cobrado. Contra esta última acción se ha opuesto la prescripción decenal.

Corresponde dejar constancia que la actora demandó - también la rescisión del contrato, sin cargo contra su - parte, pero ello lo hizo para encuadrar su derecho a percibir la devolución de la parte de la multa ya cobrada. Sobre esta rescisión no hay cuestión a dilucidar, puesto que la demandada ya rescindió el citado contrato por decreto y no es necesario la declaración judicial por cuanto, al ser un contrato de suministro con finalidad de - bien público (arseniato de plomo para luchar contra las plagas de la agricultura) y ser su destinatario y parte contratante el Ministerio de Agricultura de la Nación, o sea el Estado, revista la calidad de un contrato administrativo que puede rescindirse por decreto (v. Bielsa, "Derecho Administrativo", 5a. ed., t.II, p.379, número 355 bis).

La actora fundamenta la improcedencia de la multa en dos eximentes distintas: a) existencia del caso fortuito o fuerza mayor que impidió el cumplimiento del contrato y b) inexistencia de daños y perjuicios a la demandada - por tal incumplimiento.

En cuanto al caso fortuito o fuerza mayor, la actora pretende escudarse en hechos ocurridos en Méjico con anterioridad y posterioridad a la firma del contrato (ciclones y tempestades, y explosión de la fábrica, respectivamente). Respecto a los primeros, cabe decir que el - contrato del 9 de noviembre de 1944, fué suscripto sin - reservas de ninguna clase por la actora y por él se comprometía a entregar el arseniato de plomo, dentro de los 45 días. Tales circunstancias hacen inocua y carente de causa la eximente de caso fortuito y/o fuerza mayor fun-

dado en hechos anteriores y conocidos a la fecha de la firma del contrato.

En cuanto a la explosión ocurrida en la fábrica, que sería posterior a la firma del contrato, la misma no ha sido suficientemente probada en el sentido de que los desperfectos eran irreparables y que la fábrica no podía seguir funcionando. Los elementos probatorios del acta de fs. 614/15 del expediente administrativo, son insuficientes y no constituyen prueba fehaciente para sustentar razonablemente los eximentes de casos fortuitos y/o fuerza mayor. A igual conclusión se llega en lo referente a la pretendida prohibición del gobierno mejicano sobre la exportación del arseniato de plomo, pues del informe de fs. 330 del expediente administrativo agregado, resulta que dicho gobierno sólo impuso un régimen de control sobre tal producto y un permiso previo para su exportación. Además, como bien lo afirma la parte demandada en su alegato a fs. 54, la actora "no ha acreditado que haya hecho dichas gestiones reiteradas ni con la debida diligencia para obtener el permiso de exportación respectivo, ni que el mismo haya sido denegado, ya que la nota oficial en fotocopia obra a fs.612 del expediente administrativo se refiere a mercadería destinada a otro comprador".

En lo que respecta al hecho de que la demandada, es decir, el Ministerio de Agricultura, no sufrió perjuicio alguno por el incumplimiento de la actora en la provisión del arseniato de plomo, tampoco es argumento favorable a las pretensiones de la actora, ya que la multa impuesta por decreto y de conformidad con lo pactado libremente entre las partes (arts. 1197, Código Civil) nada tiene que ver con la acción por daños y perjuicios donde, para su progreso y procedencia, lógicamente debe existir el concepto de "culpa" y la concreción de daños.

En el caso de autos, una de las partes, el Estado, - puso en juego el art. 12 del pliego de condiciones que - formaban parte del contrato, donde se establecía la multa por retardo, aplicándose al infractor, que es la otra parte, el máximo de dicho retardo, o sea el 15% del valor total de la mercadería no entregada, resultante del 1% diario sobre 15 días. Dicha multa no requería la constitución en mora por originarse en un contrato administrativo, como se ha dicho más arriba y, a mayor evento, cabe afirmar que de la cláusula del art. 12 se desprende la mora expresa.

En lo que atañe a la reconvención por cobro del saldo de la multa, corresponde resolver previamente sobre - la prescripción decenal opuesta por la contraparte.

Contrariamente a lo sostenido por la reconviniente, el punto de partida de la prescripción no es el de la fecha del contrato celebrado entre las partes, el 9 de noviembre de 1944, puesto que allí nacen los derechos y obligaciones que las mismas pactaron, entre las que se encuentran la de multar por el retardo (art. 12, pliego de licitación), lo que así hizo el Poder Ejecutivo, usando precisamente de esa facultad. Podría argüirse que conforme a esas cláusulas, no existiría retardo sino después - de los 45 días de la firma del contrato, ya que ese era el plazo para cumplirlo, pero sea uno u otro el criterio, en ambos casos la acción estaría prescripta, por cuanto la reconvención se dedujo el 3 de abril de 1956 según - cargo de fs. 32. En consecuencia, debe así declararse y desestimarse, por tal causa, la acción objeto de la re - convención.

Por todo lo expuesto, fallo rechazando la demanda seguida por Pfeiffer y Cía., S.A.Com. contra el Gobierno - nacional, Ministerio de Agricultura, sobre cobro de m$n 63.988,10, con costas, y rechazando la reconvención dedu

cida por la demandada sobre cobro de m$n 32.011.90, con costas por su orden, atento la procedencia de la prescripción.- Carlos E. González Bonorino. (Sec.: Jorge A. Almeida).

2a. Instancia.- Buenos Aires, noviembre 24 de 1960.

El doctor Bidau dijo:

La expresión de agravios de la actora, al eliminar su defensa inicial de fuerza mayor, simplifica enormemente la solución de este pleito, puesto que, en definitiva, redice su argumento a la falta de constitución en mora, necesaria para que se aplique la cláusula penal pactada en el art. 12 de las condiciones generales a que se sujetó el contrato. Comenzaré por decir que, no existiendo disposición legal alguna que aparte a los contratos administrativos de las reglas aplicables a todos los demás contratos, debe estarse en lo que a mora atañe, a lo que dispone el código civil. Con lo cual demuestro estar en desacuerdo con la tesis del a quo, en el sentido de no ser necesaria la constitución en mora cuando se trata de tales contratos administrativos. Ello suponiendo que lo fuera el que origina los autos, tema del que ni siquiera me ocuparé, por ser ello innecesario, puesto que he adelantado ya opinión en el sentido de aplicarse las reglas sobre mora en ambas clases de contratos.

Como también dice el a quo, de la redacción de dicho art. 12, resulta que las partes pactaron que la mora se produciría por el solo transcurso del plazo (art. 509, inc. 1º, Código Civil). Voy a transcribir el artículo: "En el caso de que el adjudicatario no efectuare la entrega de la mercadería en la forma y plazo estipulados, como así también si al no ajustarse a la calidad y especificaciones determinadas, se rechaza total o par-

cialmente y no fuera reemplazada o subsanada la deficiencia observada dentro del término convenido para la entrega, sufrirá una multa diaria del 1% del total de la mercadería durante los primeros 15 días". Basta leer esa parte de la cláusula, única que aquí interesa, para advertir que no dice lo que el a quo entiende: establece un término y una cláusula penal para el caso de no cumplirse el contrato dentro de él y nada más. Siendo así no me cabe la menor duda sobre la necesidad de constituir previamente en mora al deudor para que la pena entre a aplicarse, según expresamente dice también el art. 655 del mismo código; y como el art. 509 exige para ello la previa interpelación, sólo mediando ésta, entrará a jugar la multa. Y es ello lo único que está en juego, a pesar de que el Procurador Fiscal de Cámara pretende, que, por el solo hecho de existir la garantía entregada por la actora, basta el incumplimiento para que se origine aquella pena. Tanto administrativa, como judicialmente, el fisco ha sostenido que reclama la suma a que se refiere el pleito en concepto de dicho 1% y lo dispuesto en la cláusula 12 transcripta. De manera que ella requiere, no sólo el retardo, sino también la constitución en mora.

Queda, entonces, sólo por ver si el fisco interpeló en algún momento a la actora a ese efecto. No surge ello de las actuaciones administrativas, ni existe prueba alguna en autos de que lo haya hecho. La entrega debía hacerse a los 45 días del contrato; pero a fs. 403 propone la actora embarcar durante la primera quincena de diciembre de 1944 y el ministro se lo acepta, con fecha 18 de ese mes. Es verdad que se deja "supeditado hasta la recepción del producto lo relacionado con la mora que pudiera incurrir en la entrega del mismo"; pero lo cierto es que, sin requerir el cumplimiento, a fs. 426 el ministro resuelve dar orden de no recibir nuevas partidas de

la mercadería contratada, porque se dice en el informe - de fs. 425 que ha pasado ya la época de utilizarla. Ello ocurre en febrero 15 de 1945, antes de que se pasaran - los 45 días desde que fuera otorgada la conformidad para el embarque, a mediados de diciembre. Ese plazo de entrega resulta de la propuesta obrante a fs. 200 del expediente administrativo agregado. En el interin, no se produjo interpelación.

Por dichas razones, entiendo que es improcedente la multa por retardo y, por tanto, corresponde devolver los m$n 63.988.10 reclamados en la demanda. Claro está que, por lo mismo, es improcedente la reconvención y ello hace innecesario estudiar los agravios de la demandada referentes a la prescripción que acepta el a quo.

En consecuencia, voto por la revocación de la sentencia apelada y que se haga lugar a la demanda, condenando a la demandada a abonar a la actora la suma de $63.988,10, con intereses desde la fecha de la notificación de aquélla y todas las costas del juicio.

Los doctores Ortiz Basualdo y Vocos adhirieron al voto que antecede.

Conforme al acuerdo precedente se revoca la sentencia apelada en cuanto rechaza la demanda y, en consecuencia, se hace lugar a la misma, condenándose a la demandada a pagar a la actora la suma de m$n 63.988,10, con más sus intereses al tipo de los que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus habituales operaciones de descuento, desde la fecha de la notificación de aquélla. En - cuanto a la parte de la sentencia que rechaza la reconvención, se la confirma.-

JOSE F. BIDAU - FRANCISCO J. VOCOS - EDUARDO A. ORTIZ BASUALDO (Sec.: Carlos R. Cornejo).

ACTO: EXPEDIENTE Nº 2.582/946.-

MATERIAS: EMPRESAS DEL ESTADO - LOCACIONES DE INMUEBLES
LEY DE CONTABILIDAD (Art. 51) - PATRIMONIO
DEL ESTADO - INMUEBLES DEL ESTADO

Señor Ministro de Educación y Justicia:

I.- El Consejo Nacional de Educación contaba con una concesión de carácter gratuito sobre los terrenos ocupados por la escuela Nº 298 en Estación Alhuampa, Provincia de Santiago del Estero. Dichos terrenos son de propiedad del Ferrocarril Nacional General Belgrano. A fs. 404, la Gerencia General del Ferrocarril manifiesta que, dada la imposibilidad de mantener en los términos anteriores la concesión, por ser ello contrario a las dispcsiciones del decreto Nº 25.281/48, se impone celebrar un contrato de locación, a cuyo efecto fija la suma de alquiler anual en m$n. 50, equivalente al 7 % del valor venal estimado de la tierra. La Dirección General de Administración, a fs. 408, reconoce esa cuota anual y, fundándose en esta resolución, desde el 1º de enero de 1950 se abona al Ferrocarril Nacional General Belgrano la suma mencionada (fs. 424 vta.).

A fs. 451, la División Secretaría, manifiesta que no cabe celebrar el contrato de locación ajustándose al modelo presentado en el interín por el Ferrocarril Na-

//-

cional General Belgrano, en razón de no corresponder al modelo establecido por el decreto Nº 36.506/948, regla - mentario de la anterior Ley de Contabilidad Nº 12.961. La Gerencia del Ferrocarril reitera sus requerimientos, argumentando que los requisitos de forma aludidos sólo - valen para contratos celebrados entre reparticiones esta tales y particulares. Sobre este punto, y a fs. 479, se solicita el dictamen de esta Procuración.

II.- Escuetamente, el punto a resolver consiste en saber, si es lícito que dos reparticiones estatales cele bren un contrato de locación. No cabe, claro está, un pro nunciamiento de alcance general, toda vez que los órga - nos de la administración pública difieren en cuanto a su grado de descentralización y, por tanto, en cuanto al ám bito de su competencia y facultades. Sin querer estable- cer una división que, aunque justificada quizás desde un punto de vista puramente teórico, no responde enteramen- te a la realidad administrativa, cabe distinguir según - las partes en el contrato o convenio sean órganos centra lizados o descentralizados (entes autárquicos, etc.). Tres posibilidades pueden enumerarse: la contratación entre - entes autárquicos o descentralizados; la contratación en tre un ente autárquico y un órgano centralizado; y, por fin, la concertación de un contrato entre órganos centra lizados del Estado.

III.- Además debe tenerse presente, frente a las tres posibilidades indicadas, que ninguna de ellas admite so- luciones dogmático-teóricas unívocas. Esta reserva se e- fectúa habida cuenta del dictamen anterior de esta Procu ración, en el expediente Nº 10.946/950 (1) del ex-Minis- terio de Asuntos Técnicos, dictamen en el que se sostuvo la tesis de que dos órganos centralizados de la Adminis-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 357.-

tración Central o bien un órgano centralizado y un ente autárquico, no pueden celebrar entre sí contratos de locación. Dicho dictamen no debe aplicarse por lo menos a partir del presente en el sentido de que implicaría sentar una norma interpretativa de carácter general, dado que el problema concreto a que se refería fué resuelto en definitiva sobre la base de las normas que establecían la competencia de los órganos administrativos en litigio. En realidad, el problema, en su alcance general, ha sido estudiado por la doctrina fundándose en diversas consideraciones teóricas sobre la diferente naturaleza jurídica de los órganos de la Administración Pública, considera - ciones ajenas, en cierto punto, a un examen estrictamente normativo de la cuestión y que llevan, por lo común, a soluciones de índole ideológica.

Interesa examinar, a los efectos del presente dictamen, sobre todo la primera posibilidad indicada en el párrafo anterior, a saber: el caso en que las partes en un eventual contrato de locación son ambos órganos descentralizados o autárquicos de la Administración Pública. Las conclusiones a que se arriba en este respecto, de ninguna manera implican eliminar a priori toda posibilidad de contratación entre entes autárquicos y órganos de la Administración Central ni tampoco entre reparticiones centralizadas. Mas los casos que se refieran a tales entidades deberán, a su vez, ser objeto de soluciones casuísticas.

IV.- El problema concreto objeto de este dictamen ha sido planteado por la doctrina y, en algún grado, por la jurisprudencia que se apoya en la misma, como un problema referente a las características esenciales de las entidades autárquicas y, en especial, al sentido en que cabe hablar en su respecto de personalidad jurídica. El concepto mismo de ente autárquico carece de una definición uniforme en la doctrina. La disparidad doctrinaria

ha llevado a pensar de que en la realidad de nuestro ordenamiento jurídico los entes autárquicos son objeto sui generis a los cuales no se ajustan enteramente las categorías usuales del pensamiento jurídico. Para Villegas - Basavilbaso, por ejemplo, los entes autárquicos requieren como notas esenciales constitutivas, contar con personalidad jurídica, perseguir un fin público y ser titulares de un patrimonio propio (Derecho Administrativo, T. II , p. 183). Otros autores, como Bielsa, establecen como condición necesaria que los entes autárquicos, regidos por el derecho administrativo y no por el derecho privado, se encuentren sometidos a contralor y fiscalización por parte del Poder Administrativo Central. El mismo autor señala que la capacidad de derecho de la entidad autárquica y por ende, su personalidad jurídica, se encuentran limitadas por los términos de las normas que la crearon (Estudios de Derecho Público, T. I, pág. 408 y siguientes , 435 y siguientes). Otros autores, en cambio, no aceptan que los entes autárquicos posean patrimonios propios, contando simplemente con "patrimonios de afectación" dentro del patrimonio total del Estado. Y la personalidad jurídica que se les atribuye es una personalidad sui generis, no asimilable a la personalidad del derecho privado.

La mayor parte de la doctrina, como es fácil advertir, trabaja con las ideas tradicionales sobre personalidad - jurídica y capacidad; concretamente, en el caso de nuestro derecho, la doctrina de Aubry y Rau, incorporada al Código Civil, según la cual el patrimonio es una condición necesaria para la existencia de una persona jurídica, es considerada fundamental para encarar los proble - mas de los órganos descentralizados.

V.- En realidad, la cuestión ha sido planteada sobre una base inconsistente. No es posible invocar las supuestas características esenciales de un ente autárquico, para atribuirle luego las facultades que se considera flu-

yen de las mismas, sin más razón suficiente, que la denominada "naturaleza" o "esencia" del ente. Es menester tener presente que cuando un autor, desde un punto de vista doctrinario, señala que "ente autárquico" es el órgano administrativo con tales y tales notas, lo que está haciendo es dar, dentro de su sistema o teoría, una definición de lo que en las mismas debe entenderse por "ente autárquico". No siempre coinciden las clasificaciones adoptadas desde un ángulo teórico con las establecidas en concreto por el ordenamiento jurídico. Así, el problema de la llamada personalidad del ente autárquico no es, visto de un ángulo puramente normativo, sino un aspecto del problema del grado de descentralización en la creación y aplicación del derecho. Este problema, como se sabe, reviste una importancia fundamental en el Derecho Público. A la postre, se trata de diferencias técnicas, adoptadas por el ordenamiento jurídico, para el logro de las actividades del Estado.

De por sí, el concepto de órgano administrativo se disuelve pura y exclusivamente, en un problema de descentralización normativa, vale decir, en la cuestión de cómo se encuentran técnicamente repartidas entre diversas personas las funciones de creación y aplicación de normas. Los órganos, o si se quiere los actos cumplidos por los órganos, son simples o compuesto, según la creación de la norma jurídica aplicable en definitiva a un caso en concreto requiera la participación de una o más personas. El órgano supremo estatal, (el Jefe del Estado, Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, según corresponde) en ciertos casos delega sus facultades en funcionarios, o cuerpos de funcionarios indeterminados (órganos). Y según sea el tipo de esta delegación, nos encontramos con diversos grados de autarquía o autonomía administrativa. Esta delegación de facultades se efectúa, naturalmente, estableciendo normas que facultan al funcionario

o al órgano inferior a dictar nuevas normas. La distinción teórica que cabe establecer en este proceso de descentralización, que, dada la complejidad del Estado moderno aparece como un fenómeno social y jurídico de carácter universal y necesario, es entre la descentralización perfecta, cuando el órgano descentralizado puede proceder a crear normas en forma independiente y definitiva (vale decir, cuando la resolución que adopte no pueda ser anulada por la administración central), y una descentralización imperfecta cuando los órganos administrativos centrales guardan facultades para modificar las resoluciones de los órganos inferiores, considerándose que estos últimos no hacen sino aplicar las normas generales dictadas por los órganos superiores. La distinción, pues, entre órganos centralizados y descentralizados de la Administración Pública es enteramente relativa. En puridad, no correspondería hablar sino de grados de descentralización, grados que sólo cabe determinar en concreto mediante el análisis de las normas aplicables.

Por lo general, como señala Kelsen, la llamada descentralización administrativa, pese a todo, no pasa de ser sino una descentralización imperfecta para la ejecución de facultades atribuídas al Poder Ejecutivo (véase: General Theory of Law and State, pág. 313, y sigts.). Se ve así, que el planteo tradicional, al partir del concepto civilista de persona jurídica, no permite llegar a soluciones objetivas neutras, dado que se ha falseado el planteo mismo del problema. El ente autárquico contará con las facultades que el ordenamiento le atribuya, facultades, por tanto, que dependen de las normas positivas y contingentes referentes al órgano en cuestión. Suponer que un ente autárquico deba poseer necesariamente tales o cuales características, fundándose en que algún autor le atribuye una específica naturaleza jurídica, implica confundir la realidad con la ficción y creer que los criterios que da esta última son los que deben solucionar los problemas de -

la primera.

Se trata pues de un problema de interpretación de normas positivas, y no de deducciones a partir de premisas teóricas.

VI.- Paralelamente al problema de la personalidad jurídica de los entes autárquicos, se ha planteado la cuestión de si cabe que órganos del Estado contraten entre sí. Dicho problema, en su forma extrema, ha sido estudiado como la cuestión de la imposibilidad de que el Estado se autoobligue. Se ha discutido, con alguna longitud, sobre la imposibilidad de que órganos estatales intervengan en contratos bilaterales, dado que, al no haber estrictamente hablando dos partes frente a frente, no corresponde invocar la categoría del contrato o del acuerdo de voluntades. Bueno es señalar que también este problema resulta de una concepción superada del contrato, concepción que obliga a recurrir a ficciones de toda índole. No puede sostenerse que contraten dos órganos estatales que no poseen, se arguye, por ejemplo, voluntad propia. Para superar estas antinomias, se habla de actos administrativos complejos, con lo que se obtiene, sin duda, una solución verbal del problema. Puede ser que dentro de un cierto ordenamiento jurídico, el contrato no sea una categoría aplicable a las relaciones entre dos órganos administrativos. Ello obligaría a hablar, sin mayor inconveniente, de una nueva figura jurídica, que recibiría un nombre ad hoc por ejemplo, el de "convenio o negocio administrativo". Parece, ilegítimo, en todo caso, sostener a priori la imposibilidad de que dos órganos de la administración celebran un contrato de locación simplemente porque el convenio proyectado no concuerde exactamente con lo que el Código Civil denomina "contrato de locación". Esta problemática puramente verbal ha llevado a consideraciones tales como la de pretender que no pue-

de un órgano administrativo transferir en locación un inmueble a otro órgano administrativo, porque de concebirse tal relación como un contrato de locación habría que suponer que, en ciertos casos, el Estado estaría facultado a desalojarse a sí mismo. Por lo demás, nada obsta a que los órganos superiores estatales, en el proceso de descentralización y por razones de eficacia, autoricen a los órganos inferiores a la realización de contratos, convenios o negocios administrativos e incluso a que los efectos contractuales sean regidos parcial o totalmente, directa o supletoriamente por las llamadas normas de derecho privado común. Asimismo no hay inconveniente lógico ni axiológico para que tales conflictos sean resueltos en la órbita administrativa o en la judicial.

En nuestro ordenamiento la situación general está dada por los siguientes principios: a) las facultades contractuales o convencionales interadministrativas de los órganos del Estado resultan en cada caso de las normas concretas referidas a su creación y funcionamiento; b) el principio básico para la solución de conflictos o disposición de modificaciones normativas está dado por la supremacía constitucional del Poder Ejecutivo (C.N. art. 86, inc. 1º); c) en el caso de las "locaciones interadministrativas" las normas civiles sólo se aplican supletoriamente (C.Civil, art. 1502, argumento sobre "los conceptos de "bienes nacionales" aplicables a todos los bienes del Estado y sus órganos y "establecimientos de utilidad pública". Rezzonico, II, 83).

Advierto marginalmente, que lo dicho no importa excluir en nuestro derecho, la posibilidad de que algunos de aquellos conflictos interadministrativos pueden ser resueltos por el Poder Judicial, cuando así lo determinen las normas pertinentes. Ello sin perjuicio de la citada potestad constitucional del Poder Ejecutivo. (Véase las sentencias de la Corte Suprema, Fallos 18--58 y Fallos -

215-495, que, a mi juicio, siguen dicho principio, aunque sin la suficiente especificación, especialmente la última).

VII.- En concreto, para obtener un criterio objetivo de solución del caso planteado en el presente expediente, es menester examinar específicamente en qué forma las normas vigentes estructuran las facultades de los órganos entre los cuales se celebraría el proyectado "contrato de locación". El convenio cuyo proyecto figura en el expediente sería celebrado entre el Ferrocarril General Belgrano (locador) y el Consejo Nacional de Educación (locatario). En virtud del art. 2º del decreto Nº 15.778 de 29 de agosto de 1956, de creación de la Empresa del Estado "Ferrocarriles del Estado Argentino" el Ferrocarril General Belgrano es parte integrante de esa empresa. De acuerdo con el art. 4º del Estatuto de Ferrocarriles del Estado Argentino (decreto Nº 4440/958, modificatorio del Estatuto aprobado por decreto Nº 15.778/956) dicha empresa del Estado cuenta con la capacidad de las personas jurídicas de derecho privado y con autarquía en el ejercicio de su gobierno administrativo; puede comprometer en árbitros, entablar acciones civiles, comerciales o criminales, aceptar legados, donaciones, adquirir y transferir bienes inmuebles, tomar y conservar la posesión de ello, contraer obligaciones, etc., así como realizar cuantos más actos fueren necesarios para el logro de sus finalidades, en el modo y forma que establecen los códigos, leyes generales y especiales y sus decretos reglamentarios, con las limitaciones que el Estatuto establece.

El art. 41, por su parte, agrega que "la empresa efectuará sus compras y contrataciones conforme a los principios básicos de publicidad y competencia de precios, de acuerdo a las normas del presente Estatuto, y con arreglo a uno de los procedimientos siguientes: ...inc. d) contratación directa: en el país o en el extranjero, cualquiera

sea el monto de la contratación y en los siguientes casos: ...6º) con reparticiones públicas, empresas del Estado o sociedades mixtas en las que tengan participación el Estado Nacional o Provincial a precios no mayores de los corrientes en plaza".

En lo relativo al Consejo Nacional de Educación, restablecido por decreto-ley Nº 7977 del 30 de abril de 1956 en condiciones de "autarquía didáctica, administrativa y financiera", como rezan los considerandos, los arts. 7, 9 y 57 de la ley 1420, lo facultan a administrar los fondos destinados al fomento de la educación común y a efectuar las gestiones necesarias para obtener los terrenos que necesitasen las escuelas públicas (art. 57, inc.25). El Consejo Nacional de Educación, tal como fué estructurado por la ley 1420, ha sido tenido como un caso típico de ente autárquico administrativo.

VIII.- Por consiguiente, tratándose de dos órganos descentralizados de la Administración Pública, facultados por sus normas específicas de creación para administrar fondos y contratar, en su respecto no pareciera haber obstáculo jurídico de índole alguna para que celebren el contrato proyectado en este expediente. Al caso son especialmente aplicables las normas de los arts. 51, inc. i) -referente a la contratación directa-; y 60, -referente a organismos descentralizados- de la Ley de Contabilidad. Siendo este último texto legal de aplicación supletoria (art. 63), el contrato sobre el cual se dictamina deberá ajustarse, en la medida en que las circunstancias del caso lo permitan, al modelo aprobado por el decreto Nº 9.400/57, reglamentario de la Ley de Contabilidad.-

Febrero 20 de 1959.-

Fdo. RICARDO COLOMBRES
Procurador del Tesoro de la Nación

Expediente Nº 8834-953.-

Señor Director General de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría de Estado de Hacienda:

I.- Se somete el presente caso a dictamen a fin de fijar criterio sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la opinión emitida por esta Procuración en el expte. Nº 10.946/50, del ex-Ministerio de Asuntos Técnicos, sobre locación de lugares estatales por reparticiones administrativas para cumplir servicios públicos.

Las actuaciones fueron originadas a raíz de la construcción de Petroquímica E.N. -empresa dependiente de DINIE- de un inmueble especialmente destinado a la instalación de una Oficina Postal en Kilómetro 8, Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, por la que se requirió un alquiler mensual de $ 1.250.- y que fue ocupado el 1º de enero de 1953 (acta de fs. 65).

La Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, atento el dictamen producido por esta Procuración en el expediente Nº 3148/MC/51, eleva a la Dirección General del Ministerio de Comunicaciones las actuaciones a fin de saber el temperamento a adoptarse. Dicha repartición, en vista del decreto Nº 24.046/53 y el dictamen de la Administración General de Inmuebles del Estado que le dio origen (fs. 77/80), dispone que se realicen las gestiones tendientes a perseguir el pago de los gastos de administración y conservación únicamente, por no corresponder la locación de inmuebles entre Reparticiones del Estado (fs. 81).

Comunicado a Petroquímica E.N. dicho resultado, contesta a fs. 83 rebatiendo la conclusión a que arriban los organismos del Ministerio de Comunicaciones actuantes y la Administración General de Inmuebles del Estado,

fundando la oposición en los arts. 2º y 17 del decreto Nº 8130/48 y en la distinta condición que, a su juicio, tienen las Empresas nacionalizadas del grupo DINIE. En mérito a dichas consideraciones, esta empresa no accede a la nueva modalidad contractual propuesta.

Requerida, como consecuencia de las diversas interpretaciones citadas, la opinión de la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Comunicaciones, ésta en su dictamen de fs. 86, considera que las empresas del grupo DINIE, en virtud de lo dispuesto por el art. 2º del decreto Nº 8130/48, actúan en la gestión y administración de sus negocios con el carácter de personas de derecho privado, aún cuando contraten con personas de derecho público, y más aún, cuando todas las operaciones referentes al giro común y ordinario están regidas también por el derecho privado, sosteniendo que debe abonarse el precio del alquiler estipulado por no ser de aplicación el dictamen de la Procuración del Tesoro producido en el expte. Nº 3148/MC/51.

Al tomar nueva intervención la Administración General de Inmuebles del Estado, mantiene la opinión expuesta en el informe de fs. 77/8 y estima que corresponde recabar dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hacienda.

En este estado es que el señor Director General solicita la opinión de la Procuración del Tesoro.

II.- Lo que se plantea en el presente expediente es la cuestión de si corresponde el pago de un alquiler o tan sólo el de los gastos de conservación de los bienes, ya que se trataría de un convenio celebrado entre reparticiones del Estado.

III.- Uno de los posibles contratantes es Petroquímica E.N. empresa de la Dirección Nacional de Industrias del

Estado que fue creada por decreto Nº 18.991/47, habiéndose aprobado su estatuto orgánico por decreto Nº 8130/48. Este último estableció el funcionamiento de DINIE como entidad descentralizada, desdoblando en el art. 2º su personalidad en "pública" según sean sus relaciones de carácter jerárquico administrativo, o "privada" en todos los demás casos y especialmente cuando actúe como gestora o administradora de las empresas sometidas a su régimen, subsistiendo dicho carácter aún cuando contrate con personas de derecho público, Nación, Provincias, Municipalidades, reparticiones públicas, etc.

En la actualidad, por imperio del decreto Nº 5883/55 a las empresas del grupo DINIE, se les aplica el régimen de las empresas del Estado, regidas por la Ley 13.653.

IV.- Esta Procuración del Tesoro, en dictamen del 20 de febrero ppdo., en expediente Nº 2582/946, se ha expedido con relación a las locaciones entre reparticiones del Estado. En dicho dictamen al hacer un análisis de la capacidad jurídica de que está investido el ente autárquico interviniente para contratar (Ferrocarril Nacional General Belgrano), en base a las normas legales y reglamentarias que lo rigen, se llegó a la conclusión de que el mismo se encontraba facultado a contratar locaciones con otras reparticiones del Estado, siendo procedente, por tanto, los cobros de alquileres que en su carácter de locador pudiera requerir.

A fin de una mayor brevedad se acompaña copia del citado dictamen de esta Procuración, con el objeto de que los organismos competentes apliquen las conclusiones del mismo al caso particular en examen, teniendo en cuenta la capacidad del ente, cuyo régimen legal señalé someramente en el punto III.

Abril 8 de 1959.-

Fdo. ALEJANDRO R. AHUMADA
Sub-Procurador del Tesoro de la Nación

MEMORANDUM - Nº 272/57 - T.C.N.

(Para el Ministerio de Hacienda de la Nación)

Ref.: Anteproyecto de decreto disponiendo la venta de inmuebles por la Empresa FERROCARRILES DEL ESTADO ARGENTINO.

Ese Departamento de Estado, por conducto de su Dirección General de Contabilidad y Administración, ha sometido a la consideración de este TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION el adjunto anteproyecto de decreto por el que se propicia excluír del régimen de la Ley 13.539 (') a los inmuebles del dominio privado del Estado, afectados o que hayan sido afectados a la Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino, u organismos que la antecedieran y se dispone la enajenación de aquellos que no fueren necesarios para la explotación presente o futura de dicha Empresa, por intermedio de ésta y de acuerdo a los procedimientos que en el mismo se establecen.

Sobre dicho anteproyecto este TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION cumple dictaminar:

- I -

1.- Con arreglo a los principios de unidad e indivisibilidad que rigen el patrimonio, según los cuales cada persona no puede tener más de uno, es el ESTADO NACIONAL ARGENTINO el único y exclusivo titular de todos los bienes que componen el patrimonio fiscal.

La Constitución Nacional, por su parte, ha determinado a qué Poder del Estado corresponde disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional, atribuyendo dicha facultad al H.Congreso de la Nación (art. 67, inciso 4º).

(') Ver Digesto Administrativo Nº 269.-

2.- Es en razón de la unidad del patrimonio estatal y en ejercicio de la facultad constitucional señalada que por vía de la Ley de Contabilidad (art. 51) que atribuye al Ministerio de Hacienda la administración de los bienes inmuebles del Estado, se ha reglado el "derecho al uso gratuito" de los inmuebles de propiedad estatal por parte de distintos organismos de la Administración Nacional, centralizados o descentralizados o de los otros Poderes de la Nación. Por la aludida norma se determina que las dependencias usuarias atenderán los gastos de conservación de los bienes y que éstos retornarán a la jurisdicción del Departamento de Estado citado, cuando haya cesado el uso que de ellos hicieran los organismos a los que estuvieran asignados.

La reglamentación del uso de los inmuebles fiscales señalada y la competencia específica del Ministerio de Hacienda de la Nación relativa a la administración de ellos, que se ha expuesto, guardan, a su vez, concordancia con las normas de la Ley Orgánica de Ministerios (art. 4º - Cap. II, Ley Nº 14.303, no modificado por el decreto-ley 10.351/56) (") toda vez que allí se dispone la actuación de ese Ministerio en lo concerniente al patrimonio, recursos y gastos del Estado.

De lo expuesto debe seguirse, forzosamente, que ningún organismo del Estado puede pretender un mejor derecho respecto a los bienes inmuebles de propiedad de la Nación que el proveniente de su necesidad para un más eficaz cumplimiento de los servicios a su cargo ni atribuirse una mayor capacidad o competencia para su administración que las que resultan de las leyes y reglamentos que las fijan.

3.- En lo relativo a la disposición de las tierras de propiedad nacional, el H. Congreso de la Nación por leyes especiales ha autorizado la venta de ciertos inmue-

(") Ver Digesto Administrativo Nº 3.-

bles o facultado al Poder Ejecutivo Nacional para enajenar los bienes que el mismo estableciera. En este último caso, ha subordinado la enajenación a determinados requisitos, como el de no ser necesarios los inmuebles para los servicios u obras que ejecute o tenga a su cargo la Administración Nacional, etc. (leyes 13.235 - 13.539 - 14.167 - 13.384).

El análisis de dichas leyes muestra que siempre el H. Congreso de la Nación autorizó al Poder Ejecutivo Nacional para realizar las ventas dispuestas.

-II- Tales antecedentes legales hacen méritos más que suficientes, a juicio de este TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, para que la disposición de bienes inmuebles sea realizada por el organismo competente del Poder Ejecutivo, el que deberá considerar si un bien que dejara de ser necesario para el cumplimiento de los fines del organismo que lo había recibido a título de "uso" puede utilizarse a partir de ese mismo momento para la atención de los servicios de otro organismo nacional, en cuyo caso procede disponer el cambio de "afectación del bien" parte de un patrimonio único.

Si el inmueble no fuera aprovechable en la organización estatal, recién entonces, deberá disponerse su enajenación evitando así el caso de que bienes puestos a la venta por un organismo, que resultaran útiles para otro organismo nacional, llevaran al Estado a confundirse en el doble carácter de vendedor y comprador.

Es en razón de ello que este TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION considera que los procedimientos establecidos por la ley 13.539 y su reglamentación son lo suficientemente orgánicos como para resguardar, en la forma más adecuada, los intereses del Fisco Nacional y asegurar una correcta selección de los bienes raíces que pueden salir de su patrimonio.

Por otra parte, es procedente mantener en el Poder -

Ejecutivo Nacional la facultad de efectuar las ventas como lo dispone dicha Ley, en razón de ser quien constitucionalmente tiene a su cargo la administración general del país (art. 86, inc. 1º de la Constitución Nacional), expide las instrucciones y reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes, haciendo además recaudar las rentas de la Nación (incisos 2 y 13 del art. 86 citado). Por otra parte, las rentas públicas se forman, en parte, con el producido de la venta de tierras de propiedad nacional (art. 4º).

-III- De acuerdo con los principios expuestos y las normas legales vigentes, a que se ha hecho referencia, el TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, opina que las atribuciones y funciones del Directorio de la Empresa del Estado "Ferrocarriles del Estado Argentino" establecidas en el art. 7º inc. 13, del Estatuto de dicho organismo, aprobado por decreto-ley Nº 15.778/956, que le facultan para disponer la venta de inmuebles pertenecientes a la Empresa y que dejen de ser útiles para la misma, previa su desafectación autorizada por el Ministerio de Transportes, no concilian con los conceptos de unidad e indivisibilidad del patrimonio nacional y la conveniencia de mantener centralizado en el órgano competente del Poder Ejecutivo Nacional lo inherente a la decisión y demás formalidades para la enajenación de los bienes inmuebles de propiedad del Estado.

-IV- Los fundamentos expuestos en los puntos precedentes fijan la opinión del TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, que apoyado en los principios básicos y antecedentes legales citados, considera que es conveniente y procedente mantener el régimen vigente en la materia, máxime que en la cuestión en examen no se han aportado razones de necesidad o de otro carácter que justificaran el dictado de normas de excepción a las reglas fundamentales existentes.-

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, 15 de julio de 1957.-

Fdo. DAMIAN FIGUEROA
Presidente

Expte. Nº 53.338/959.-
P.Nº 7.677.-

//nos Aires, setiembre 28 de 1959.-

Ref.: Petroquímica E.N.s/locación entre el Estado y D.I.N.I.E.-

Pase al señor Procurador General de la Nación, estimándole quiera servirse emitir opinión respecto del asunto de que se trata en los presentes actuados.-

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN
Secretario de Hacienda de la Nación

Buenos Aires, 10 de junio de 1960.-

Señor Secretario de Estado:

V.E. me hace el honor de solicitar mi dictamen acerca de las facultades que corresponden a las empresas del Estado sujetas al régimen de la ley 13.653 (T.O. por ley Nº 14.380), para acordar con otras reparticiones oficiales contratos de locación de los bienes inmuebles afectados a su servicio.

Sobre el particular comparto los puntos de vista expuestos por el señor Procurador del Tesoro de la Nación en su dictamen corriente a fs. 118, al que adhiero.

Corresponde, por lo demás, poner de manifiesto que las disposiciones del decreto-ley 23.354/56 no rigen respecto de las entidades antes aludidas, ya que así lo establece en forma expresa el art. 140 del mencionado decreto-ley, al preceptuar que sus normas sólo serán aplicables a las -

entidades descentralizadas que, cumpliendo funciones de carácter comercial o industrial, no hayan sido aún incorporadas al sistema de la ley 13.653.

Saludo a V.E. con mi más distinguida consideración.-

Fdo. RAMON LASCANO
Procurador General de la Nación.

Expediente Nº 50.811/59.(*)
Informe Nº 105/60.- TCN.-

(Direc.Gral.de Auditorías)

Atento el requerimiento formulado a fs. 132 por la Secretaría de Hacienda y visto el dictamen producido a fs. 131 por el señor Procurador General de la Nación, el Tribunal de Cuentas significa:

1º) El pronunciamiento de este Cuerpo que corre a fojas 28/29, del 31 de agosto de 1959, tuvo entonces como fundamento la aplicación del art. 51 de la Ley de Contabilidad, ejercida por el Poder Ejecutivo en reiteradas oportunidades asignando a organismos estatales el uso gratuito de bienes inmuebles del Estado, salvo la atención de los gastos de conservación previsto en la misma norma legal.

2º) La modificación de la ley 13.653 (t.o.) dispuesta por la ley 15.023 (") ha determinado un nuevo enfoque del problema. En efecto, en virtud de lo dispuesto por dicha ley, sancionada y promulgada a fines del año 1959, se ha incorporado al texto de la ley 13.653 (t.o.) un artículo nuevo que expresa:

"Artículo nuevo- Toda transferencia de bienes de o "a una empresa del Estado respecto a los demás orga "nismos de la administración Nacional se efectuará

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1107.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1039.-

"sobre la base del valor real de los mismos a la fecha "de su desplazamiento. La contabilidad de la empresa "afectada deberá registrar el movimiento pertinente,- "así como también la situación patrimonial y jurídica, "conforme con las condiciones en que se haya dispues- "to la transferencia por el Poder Ejecutivo".

3º) En cuanto hace a la inaplicabilidad de la ley de contabilidad a las empresas del Estado, criterio que sustenta el dictamen de fs. 131, corresponde señalar que la citada ley Nº 15.023 modificó el texto anterior - del artículo 11 de la ley 13.653 (t.o.) admitiendo la aplicación de la ley de contabilidad y de obras públicas Nº 13.064 en todo cuento no prevea dicha ley Nº 13.653 (t.o.), los estatutos específicos de cada empresa y las reglamentaciones pertinentes. De ello resulta que en el caso a que se refieren estos obrados, estando prevista la solución del problema mediante la aplicación del artículo nuevo transcripto precedentemente, no es de aplicación la ley de contabilidad. Pero, puede serlo, cuando se den los supuestos que el art.- 11 (modificado) ha previsto.

4º) Finalmente, encontrándose en trámite de decisión lo - relativo al arriendo de un inmueble de la entidad Petroquímica E.N. dependiente de la empresa del Estado DINIE, que utiliza la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, el Tribunal de Cuentas estima que en virtud de lo dispuesto por la norma legal señalada en el punto 2º, resulta procedente el cobro de alquiler que en su carácter de locador ha reclamado el primero de los organismos estatales indicado, toda vez - que si corresponde la transferencia con cargo sobre - la base del valor real del bien que transfiera una empresa del Estado a otro organismo de la Administración Nacional, debe aplicarse el mismo criterio cuando se trate del uso del bien, es decir, que es pertinente -

ACTO: DECRETO Nº 5.143/61.-

MATERIA: LEY DE CONTABILIDAD (Art. 22º)

Buenos Aires, 23 de junio de 1961.-

Visto el adjunto expediente Letra S.C., Nº 48.191, año 1960, en el que se recuerda que el art. 22 de la Ley de Contabilidad se encuentra reglamentado por la disposición correlativa del decreto Nº 13.100/57 (*), el que en tal parte establece el procedimiento que debe seguirse por los organismos de la Administración Nacional -excluídas las Empresas del Estado y las instituciones que integran el sistema bancario oficial- para hacer efectivos los créditos que tengan pendientes de cobro y

CONSIDERANDO:

Que la reglamentación aludida discrimina los créditos no cobrados, estableciendo para los que provengan de la gestión específica de la repartición actuante el principio de que siendo menores de un mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000) no se perseguirá su cobro por la vía judicial, pero sí debe recurrirse a ella si son mayores de tal cantidad;

Que, como consecuencia, aquellos créditos no derivados de la gestión específica indicada, o sea los producidos por causas de carácter común, deben ser reclamados //-

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 487.-

inexcusablemente ante los tribunales competentes en caso de falta de pago, aun cuando la deuda respectiva fuere - menor de un mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000);

Que la disposición comentada da lugar a que el Estado Nacional se constituya en parte actora en gran cantidad de juicios promovidos por sumas menores de un mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000), de los cuales buena parte corre el riesgo de ser fallados en forma desfavorable debido a las distintas circunstancias procesales, de donde se infiere que el pago que se obtenga en esas situaciones no resulta compensatorio del tiempo insumido en cada caso particular ni del costo de las respectivas actuaciones administrativas y judiciales;

Que de lo expuesto surge la conveniencia de extender a toda clase de créditos de los organismos de que se trata, el régimen fijado para la percepción de aquellos atinentes a la realización de su función específica;

Que en tal sentido, se considera, asimismo necesario, actualizar los montos contenidos en el decreto Nº 13.100/57 al reglamentar el art. 22 de la Ley de Contabilidad;

Por ello, atento a lo solicitado por el señor Secretario de Estado de Comunicaciones y a lo propuesto por - el señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Públicos,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Modificar la reglamentación del art. 22 de la Ley de Contabilidad, dispuesta por el decreto número 13.100/57, en la forma que seguidamente se indica:

a) Sustituir el texto del inciso 1 por el siguiente:

"1) Los Organismos de la Administración Nacional, excluídas las Empresas del Estado y las instituciones que integran el sistema bancario oficial, para hacer efectivos sus créditos -provengan éstos

o no de su gestión específica- ajustarán su cometido a las normas que se indican a continuación".

b) Incisos 2), 3) y 7): sustituir la cantidad de un mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000) que en ellos se expresa, por la de cinco mil pesos moneda nacional (m$n. 5.000).

c) Sustituir el texto del inciso 4 por el siguiente:

"4) Vencido el plazo a que se refiere el punto 2º sin que la deuda se haya cancelado, seguirán el siguiente procedimiento:

a) Créditos de hasta cinco mil pesos moneda nacional (m$n. 5.000). Cuando resulte negativa expresa o silencio del deudor, los organismos aludidos en el inciso 1º quedan autorizados a no perseguir su cobro por la vía judicial. En caso de hacerse uso de esta autorización, el moroso será declarado deudor del fisco y figurará como tal mientras no se opere la extinción de la obligación. Esta declaración será formulada por el jefe del servicio administrativo respectivo.

b) Créditos de más de cinco mil pesos moneda nacional (m$n. 5.000). Se procurará su cobro por la vía judicial, a cuyo efecto se remitirán las actuaciones a la Procuración del Tesoro sea con la resolución ministerial que habilite a promover juicio, cuando el importe fuere de hasta un millón de pesos moneda nacional (m$n. 1.000.000), o con el decreto pertinente si se tratare de importe mayor al señalado, siempre que el respectivo servicio jurídico, actuando como delegado del Cuerpo de Abogados del Estado, estime conveniente iniciar tales acciones considerándose desde este momento como deudores en gestión.

Si el referido servicio jurídico considera inconveniente la iniciación de las acciones al cobro, los titulares de estas deudas se considerarán también como deudores del Fisco, mientras no se opere la extinción de la obligación, declaración que será formulada por el Jefe del respectivo servicio administrativo".

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Obras y Servicios Públicos y de Economía y firmado por los señores Secretarios de Estado de Comunicaciones y de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaría de Estado de Comunicaciones a sus efectos.-

FRONDIZI - Arturo Acevedo - Roberto T.Alemann - Miguel F.Mugica - Jorge Wehbe.

ACTO: Fallo del 23 de mayo de 1961.-

MATERIAS: ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - ESTABILIDAD

"SANCHEZ, Segundo José s/Decreto-ley 6.666/57" (*).

CONSIDERANDO:

Que un funcionario de la Presidencia de la Nación - comprobó que un automóvil marca "Pontiac", modelo 1940, motor P.6.T.Z.549, patente Nº 602.003, de propiedad de dicha Presidencia, que se encontraba en exhibición para la venta en la Sección Venta de Automotores de la Dirección General de Suministros del Estado, estaba desmantelado, faltándole varios accesorios externos y el tablero. Puesto el hecho en conocimiento de esa repartición, los señores Director General y Subdirector de ésta verificaron su exactitud, razón por la cual se dispuso la instrucción del sumario administrativo agregado y se - formuló la correspondiente denuncia ante la autoridad - policial.

Que, terminada la tramitación sumarial, se imputó - al señor Omar Evangelista Rampinini ser el autor de la sustracción y al recurrente, señor Segundo José Sánchez, Encargado General de dicha Sección, haber ocultado el - hecho, a pesar de las interrogaciones que le hiciera al //-

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

respecto el señor Director General.

Que, como consecuencia de tales hechos, el señor Sánchez fué suspendido preventivamente, sobreseído en sede penal y dejado cesante en su cargo por decreto del Poder Ejecutivo Nº 13.108, de fecha 21 de octubre de 1959 en el que se invocan los incs. e) e i) del decreto Nº 1471/58(*) que reglamenta el art. 6º del decreto-ley 6666/57, aprobatorio del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, y el art. 37, inc. h) de este último.

Que contra este decreto esgrime el interesado el recurso establecido por el art. 24 del Estatuto lo que trae las presentes actuaciones al Tribunal.

Que en su defensa, el recurrente sostiene: a) haberse violado los arts. 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional; b) que él era un simple encargado administrativo, por lo cual no tenía obligación de controlar el proceder de los mecánicos; c) que no pudo comunicar el hecho a la superioridad porque entre la visita del funcionario de la Presidencia -momento en que dice haber tomado conocimiento del hecho- hasta la confesión del autor transcurrieron sólo dos horas; d) que la entidad de la falta no justifica una cesantía y que al graduar la pena no se ha tenido en cuenta la gravedad del hecho, los antecedentes del agente y los perjuicios ocasionados; e) que después de su declaración indagatoria se ha continuado actuando sin darle la vista que corresponde luego de cerrado el sumario. Agrega luego que no ha visto el sumario, el que se propone examinar cuando se encuentre en sede judicial, y se formula una serie de interrogaciones sobre si se habrán o no cumplido las distintas formalidades prescriptas por el Estatuto. En el escrito de traslado no concreta ni enuncia ninguna imputación sobre este aspecto.

Que en cuanto a la garantía de la estabilidad en el -

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 422.-

empleo público consagrada por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, ya la Cámara ha tenido oportunidad de dejar establecido ésta, como todas las demás que asegura la Carta Fundamental, no es absoluta y no impide la separación de los empleados cuando media para ello una causa justificada (Cirasi" sentencia del 23 de marzo ppdo.). - Las otras dos garantías que dice se habrían vulnerado - (arts. 16 y 18) las vincula a la defensa, sosteniendo haberse violado la igualdad porque a él no se le dió vista del sumario mientras en otros casos así se hizo. Este aspecto se verá más adelante. El art. 17 lo invoca para decir que se le confiscó el sueldo al haber resuelto el decreto respectivo que la cesantía tendría efectos a partir del 17 de julio de 1958. Sobre esto cabe destacar que nada se opone a esa retroactividad a la época de los hechos que se trata de sancionar, por no existir una norma superior que lo prohiba.

Que con respecto a las defensas sintetizadas en los puntos b), c) y d), cabe recordar lo ya resuelto en otros casos en los que se dijo que el Tribunal en la sustanciación y decisión de este recurso no tiene jurisdicción plena y su competencia se limita a controlar la legitimidad del proceder administrativo y del acto atacado, no pudiendo revisar cuestiones de hecho ni la apreciación que de ellos haga el órgano administrativo, salvo casos de manifiesta arbitrariedad capaz de tornar ilegítimo el comportamiento administrativo ("Prol", sentencia del 22 de abril de 1960; "Tripicchio, sentencia del 6 de junio de 1960) (°), lo cual no obsta -también ha dicho- para - que pueda examinar las actuaciones a fin de dejar establecido si la falta que se imputa ha sido o no cometida y - encuadra en algunas de las causales admitidas por la ley ("Arroyo", sentencia del 22 de marzo último).

Que, siguiendo estos principios, corresponde tener - en cuenta que el automóvil de marras no se encontraba en

---

(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1350.-

el lugar para ser reparado, sino en exhibición a los efectos de su venta y si el recurrente era el encargado de la Sección resulta elemental que fuera responsable de lo que en ella ocurriera; por lo que la defensa referida en el punto b) no puede prosperar.

Que la argumentación mentada en el punto c) se ve desmentida por las actuaciones que se tienen a la vista, ya que no sólo dejó de comunicar el hecho sino que lo negó - de manera categórica ante los requerimientos telefónicos del señor Director General (fs. 71/73).

Que si la entidad de la falta lo hacía acreedor a la cesantía o a otra sanción menor, es cuestión que, en principio, no puede considerar el Tribunal, ya que el hecho - encuadra dentro de las causales enumeradas en el art. 37 del Estatuto, el cual emplea una terminología lo suficientemente elástica al respecto -cuando se refiere a las obligaciones impuestas por el art. 6º- como para dejar librado ese aspecto al criterio administrativo, que no puede - sustituirse por el judicial, salvo supuestos, como se dijo, de manifiesta arbitrariedad; lo que no ocurre en el - caso.

Que, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, para graduar la pena se tuvo en cuenta la gravedad de la falta y el perjuicio. Si no se hizo mérito de los antecedentes del agente, ello no constituye una causal de nulidad del decreto atacado, ya que nada obsta a que, a pesar de los buenos precedentes, el Poder Ejecutivo decrete una cesantía si se encuentra en presencia de una falta lo suficientemente grave como para justificarla.

Que el último agravio expresado no puede admitirse. Se dice que después de la declaración indagatoria se continuó actuando en el expediente y no se le dió vista. No es esto exacto. La última vez que declaró el señor Sánchez - fué el 1º de octubre de 1958 (fs. 53/56) y luego se continuó actuando hasta el informe final del Instructor en el

que se concretan los cargos, que lleva fecha 23 del mismo mes y año y corre a fs. 109/116. Inmediatamente se le confirió vista de lo actuado (fs. 121/122), que contestó a fs. 125/133. Después de esto sólo queda el informe de la Junta de Disciplina y el decreto de cesantía, como trámites propiamente sumariales.

En razón de todo lo expuesto, se desestima el presente recurso.

Regístrese, notifíquese, agréguese a las actuaciones administrativas y devuélvanse.-

JUAN CARLOS BECCAR VARELA - HORACIO H. HEREDIA - ADOLFO R.GABRIELLI.-

ACTO: DECRETO Nº 5.506/61.-

MATERIA: EMPRESAS PERIODISTICAS

Buenos Aires, 28 de junio de 1961.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que por decreto Nº 5.135 de fecha 3 de setiembre de 1958 (*) a los fines establecidos por el artículo 5º del decreto-ley Nº 3.490/58 (**), se encomendó a la Secretaría de Hacienda la atención de las tareas emergentes de la liquidación de las Empresas Periodísticas dispuesta por decreto-ley 7.104/56 y concordantes;

Que con tal motivo en jurisdicción de la mencionada Secretaría de Estado, se designó un Administrador-Liquidador para que, con dependencia directa del Secretario de Hacienda, encarara los asuntos pendientes como resultado de la gestión antes mencionada;

Que asimismo dependientes del funcionario antes mencionado se desempeñan en la Cuenta Especial "Secretaría de Estado de Hacienda - Dirección General de Contabilidad y Administración - Decreto-ley Nº 3.490/58 - Liquidación de Empresas Periodísticas y Afines" un plantel de personal transitorio, afectado a las tareas de liquidación;

//-

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 593.-
(**) Ver Digesto Administrativo Nº 480.-

Que encontrándose las citadas tareas en su etapa final, corresponde -cumplido ya dicho objetivo- dar por finalizadas las funciones del Administrador-Liquidador y de aquellos agentes cuyos servicios no fueran estrictamente indispensables;

Que, por último, los asuntos pendientes pueden ser atendidos directamente por la misma Secretaría de Hacienda, a través de sus servicios administrativos;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Las funciones encomendadas al Administrador-Liquidador por decreto N° 5.135/58, cesarán el 30 de junio de 1961.

ARTICULO 2°.- La Secretaría de Hacienda por conducto de la Dirección General de Contabilidad y Administración, se hará cargo de la tramitación de todos los asuntos pendientes a la fecha determinada por el artículo 1° y proseguirá los mismos hasta su total finalización.

ARTICULO 3°.- El Administrador-Liquidador hará entrega bajo inventario a la citada Repartición de los bienes muebles e inmuebles existentes, como así también un Estado Patrimonial conteniendo en detalle la totalidad de créditos y obligaciones resultantes de su actuación hasta la fecha de cesación de sus funciones.

ARTICULO 4°.- Limítanse al 30 de junio de 1961 los servicios del personal que revista en la cuenta especial "Secretaría de Hacienda - Dirección General de Contabilidad y Administración - Decreto-ley N° 3.490/58 - Liquidación de Empresas Periodísticas y Afines" que se detalla en planilla anexa, afectados a las tareas que se dan por finalizadas en este acto de Gobierno.

ARTICULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.
ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Jorge Wehbe.

ACTO: DECRETO N° 5.007/61.-

MATERIA: CONTRATACIONES EN EL EXTERIOR

Buenos Aires, 21 de junio de 1961.-

Visto el monto y la importancia de los compromisos con el exterior que contraen los distintos organismos - (centralizados, descentralizados y empresas); y

CONSIDERANDO:

Que tales adquisiciones de bienes de capital, al efectuarse con pagos diferidos, afectarán nuestro balance de pagos en los años próximos;

Que estas adquisiciones afectan fundamentalmente ejercicios financieros futuros, comprometiendo así las finanzas no sólo de los organismos adquirentes, sino también del Tesoro Nacional;

Que es propósito del Gobierno Nacional permitir a la actividad privada llevar adelante el reequipamiento industrial y la expansión de la economía nacional;

Que para que ello sea factible, los organismos del Estado no deben comprometer el crédito exterior en forma ilimitada, reduciendo así las posibilidades de sectores vitales de la economía;

Que todo sistema de regulación y control, de cualquier naturaleza, tendiente a evitar los inconvenientes antes enunciados, debe efectuarse sobre la gestión de los organismos estatales, teniendo en cuenta la impor -

//-

tancia de las adquisiciones y sus posibilidades financieras;

Que por ello se impone un ordenamiento de prioridades para todas las adquisiciones que reclamen pagos a más de 180 días, y que se hagan en el exterior, formuladas por organismos del Gobierno Nacional, que esté en función no sólo de programas de realizaciones asignado a cada una de las distintas jurisdicciones del Estado, sino también de las reales posibilidades del país;

Que la sola aprobación de los respectivos planes de inversión no es suficiente para evitar los inconvenientes señalados precedentemente, por cuanto en ellos sólo se prevén los créditos a utilizar en un ejercicio determinado, no contemplando en consecuencia, los compromisos que deberán atenderse en los períodos siguientes, creándose así la situación de hecho que se desea evitar;

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- En lo sucesivo los organismos del Estado, de cualquier naturaleza (centralizados, descentralizados y empresas), previo a toda operación de contratación con el exterior, que incluya pagos a más de 180 días de plazo, deberán requerir la opinión del Ministerio de Economía de la Nación.

ARTICULO 2°.- El Ministerio de Economía de la Nación efectuará el estudio de cada operación teniendo en cuenta especialmente las siguientes condiciones:

a) si la contratación programada merece prioridad en relación con la masa de las necesidades del sector público o privado;
b) plazos, tipos de interés y condiciones de financiación que se estima podrán obtenerse;

c) verificación de la existencia de autorización legal para contratar y crédito para imputar y
d) incidencia del compromiso a asumir en los ejercicios futuros del organismo adquirente, y su efecto sobre el Tesoro Nacional.

ARTICULO 3º.- En toda operación con el exterior, conforme con lo dispuesto en el artículo anterior, el Ministerio de Economía de la Nación controlará el cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas por los respectivos organismos, a cuyos efectos éstos deberán suministrar periódicamente la información correspondiente.
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Roberto T.Alemann
Jorge Wehbe

ACTO: RESOLUCION Nº 3.882/61.-

MATERIAS: ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - JUNTA DE DISCIPLINA - JUNTA DE CALIFICACIONES - ELECCIONES

Buenos Aires, 21 de julio de 1961.-

Visto que el señor Subsecretario por la nota que antecede, solicita se adopten los recaudos tendientes a la renovación de los miembros de la Junta de Disciplina de esta Secretaría de Estado, de acuerdo a lo preceptuado en el Punto II de la reglamentación del artículo 43º del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, aprobado por decreto-ley Nº 6.666/57 (1); y

CONSIDERANDO:

Que a los efectos indicados "ut-supra", corresponde convocar a elecciones al personal perteneciente a las dependencias que integran la estructura orgánica interna de esta Secretaría de Estado (Direcciones Generales de Contabilidad y Administración, del Servicio Civil de la Nación, de Impuestos y Contribuciones, de Asuntos Jurídicos y de Finanzas; División Intendencia y Oficina de Prensa), a fin de que elijan sus representantes en la //-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

aludida Junta;

Que en concordancia con lo expuesto, se impone ordenar las normas aprobadas por resolución Nº 3.614/58 (*), a fin de garantizar el fiel ejercicio del acto eleccionario;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

R E S U E L V E :

1º) Convócase al personal de esta Secretaría de Estado - (Direcciones Generales de Contabilidad y Administración, del Servicio Civil de la Nación, de Impuestos y Contribuciones, de Asuntos Jurídicos y de Finanzas; División Intendencia y Oficina de Prensa), para el - día 16 de agosto de 1961, a efectos de que elija los miembros que lo representará en la Junta de Disciplina (dos titulares y dos suplentes).

2º) La elección aludida en el punto anterior, se llevará a cabo el día indicado precedentemente, entre las 12 y las 17 horas.

3º) Ordénanse las normas electorales establecidas por resolución Nº 3.614/58, las que forman parte integrante de esta resolución, a las que deberá ajustarse el cometido a cumplir.

4º) Por el Departamento de Personal procédase a una amplia difusión de la presente entre el personal de esta Secretaría de Estado, dése al Digesto Administrativo y por conducto del citado Departamento archívese en carpeta especial.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES
Director General

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 446.-

NORMAS PARA LAS ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DEL PERSONAL EN LAS JUNTAS DE DISCIPLINA Y CALIFICACIONES

I

DE LOS ELECTORES

1º) Serán electores todos los agentes que revistan en las Clases A, B, C, D, E y F de las Direcciones Generales de Contabilidad y Administración, del Servicio Civil de la Nación, de Impuestos y Contribuciones, de Asuntos Jurídicos y de Finanzas; División Intendencia y Oficina de Prensa, sin distinción de jerarquías y cuyo desempeño a la fecha de la elección, sea de carácter permanente de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional aprobado por decreto-ley Nº 6.666/57.

2º) A partir del segundo día de la convocatoria a elecciones, el Departamento de Personal habilitará en la División Contralor (7º Piso-Oficina 709) y en lugar visible, un listado donde se indique por orden alfabético a todo el personal a que alude el punto 1º), especificándose en cada caso su documento de identidad (libreta de enrolamiento, cívica o cédula de identidad), consignándose asimismo, una columna para las "observaciones".

Dicho listado tendrá carácter de padrón y podrá ser consultado por el personal a efectos de verificar si figura en el mismo, como así también, será pasible de las impugnaciones que se estime correspondan, las que se podrán interponer ante el citado Departamento durante el día posterior al de su habilitación. Vencido dicho término el mencionado padrón tendrá carácter de definitivo e inobjetable.

El Departamento de Personal elevará a la Dirección

General de Contabilidad y Administración las impugnaciones que se formularen, la que resolverá sobre la procedencia o improcedencia de las mismas, pudiendo recurrirse, en última instancia, al señor Subsecretario de Hacienda.

II
DE LOS CANDIDATOS Y FISCALES

3º) Para ser candidato, se requiere ser argentino, haber cumplido 30 años de edad y 10, por lo menos, de antigüedad en la Administración Nacional.

4º) Dentro de los ocho días de vencido el término a que se alude en el segundo párrafo del punto 2º, los electores elevarán al Departamento de Personal las respectivas listas de candidatos a efectos de oficialización. Dichas listas deberán ser presentadas bajo firma por no menos de 10 electores en ejercicio.

5º) El aludido Departamento, una vez recibidas las listas de candidatos procederá a verificar si los nombres de los mismos y de los presentantes figuran en el padrón, como así también, si los nombrados en primer término reúnen los requisitos exigidos por el punto 3º), cumplido lo cual procederá a citar a los candidatos a efectos de que ratifiquen por escrito su conformidad para los fines que fueron propuestos. En el supuesto negativo se hará saber a los presentantes tal circunstancia, a efectos de que en el lapso de dos días propongan al respectivo reemplazante.

6º) Vencido el plazo indicado anteriormente el Departamento de Personal confeccionará las boletas respectivas, las que deberán contar como único título la siguiente inscripción: "Secretaría de Estado de Hacienda- Junta de Disciplina - Cumplimiento art. 43º decreto-ley Nº 6.666/57", o "Secretaría de Estado de Hacienda - Junta de Calificación - Cumplimiento art. 43º decreto -

ley Nº 6.666/57", según corresponda. Dichas boletas serán publicadas en las carteleras de la Secretaría habilitadas a tal efecto.

7º) Las boletas contendrán tantas secciones como candidatos figuren en las listas y las secciones irán unidas entre sí por medio de líneas negras y marcada perforación que permitan el doblez del papel y la separación inmediata de las boletas por parte del elector o de los funcionarios del escrutinio.

Las boletas deberán ser de diferentes colores a fin de lograr una mayor individualización. Dichos colores serán asignados por el Departamento de Personal.

En el supuesto de que dada la cantidad de boletas la impresión en colores no permita la fácil identificación que se procura, el aludido Departamento asignará a las boletas un orden alfabético, de acuerdo a la fecha y hora de recepción de las respectivas listas.

8º) Los representantes de cada una de las listas oficializadas, deberán designar, por nota dirigida al Departamento de Personal, tantos fiscales como mesas receptoras de votos se constituyan. Dicha comunicación deberá efectuarse un día antes de la realización del acto eleccionario.

9º) Los Fiscales deberán constituirse el día de la elección en la respectiva mesa, una hora antes de la fijada para la apertura de la misma, oportunidad en que procederán a votar entre sí, a efectos de designar al que ejercerá las funciones de presidente, labrando a tal efecto un acta que dé prueba de ello. En caso de que existan dos únicas listas oficializadas y por ende, dos únicos fiscales, ejercerá la presidencia de la mesa el de mayor edad.

El día de la elección, los agentes designados fiscales estarán exentos de prestar sus servicios en las oficinas en que revistan, considerándose afectados a

las tareas electorales. El presidente y los fiscales, deberán votar en la mesa en que actúen, aunque no figuren en la lista correspondiente.

En este caso, se agregará el nombre del votante al final de padrón, haciéndose notar dicha circunstancia.

10º) Los fiscales deberán ser electores en ejercicio y su misión especial es velar por el correcto desarrollo del acto eleccionario.

Los fiscales elegidos presidentes, serán los encargados de hacer saber por escrito a S.E. el señor Secretario de Estado de Hacienda, el resultado de la elección.

11º) El presidente de la mesa y los fiscales cuidarán de que en el cuarto obscuro existan, en todo momento, suficientes ejemplares de las boletas oficializadas de todas las listas, en forma que sea fácil para los electores poder distinguirlas.

El presidente de la mesa no admitirá en el cuarto obscuro otras boletas que las proporcionadas por el Departamento de Personal.

III

DEL ACTO ELECCIONARIO Y DEL ESCRUTINIO

12º) El acto eleccionario se llevará a cabo en el lugar, locales y dentro del horario indicado en la resolución que establece el llamado a elecciones.

13º) Los jefes de oficinas adoptarán las medidas necesarias tendientes a facilitar la concurrencia del personal al comicio dentro del horario establecido al efecto, contemplando, en cada caso, las necesidades del servicio.

14º) El Departamento de Personal habilitará los recintos necesarios que funcionarán como cuartos obscuros. Estos recintos no deberán tener más de una puerta utilizable, debiéndose cerrar las demás en presencia de los fisca-

les como así también, las ventanas que tuvieren, de modo de rodear de las mayores seguridades y garantías al secreto del voto.

Queda terminantemente prohibido colocar en el cuarto obscuro, carteles, inscripciones, insignias, indicaciones y otro elemento que puedan implicar una sugerencia a la voluntad del elector.

15º) A la entrada de los locales destinados al acto electoral se colocará, en lugar visible, un cartel indicando las letras que, de acuerdo a los apellidos de los electores, deban votar en las mismas, de manera que el personal pueda enterarse del lugar en que vota antes de entrar a identificarse.

16º) El Departamento de Personal proporcionará a cada mesa receptora de votos los siguientes elementos:

a) un ejemplar autenticado donde se consigne por orden del alfabético a todo el personal habilitado en su respectiva mesa,

b) una urna, debidamente sellada y firmada por el jefe del citado Departamento, el presidente de la mesa y los fiscales.

c) sobres para el voto debidamente sellados.

d) la cantidad de boletas oficializadas necesarias;y

e) un ejemplar de la presente disposición, papel,tinta, etc.en la cantidad necesaria.

La entrega será hecha con la anticipación suficiente como para que, a la hora indicada para la apertura del acto eleccionario, se encuentre la mesa en condiciones de recibir a los electores.

17º) Abierto el acto electoral, el presidente y los fiscales, en su orden, serán los primeros en votar. El personal se presentará por orden de llegada exhibiendo sus documentos de identidad (libreta de enrolamiento, cívica o cédula de identidad) y previa constatación en el listado respectivo se le hará entrega del

sobre para que emita su voto. Los sobres deberán ser firmados por el presidente y los fiscales.

18º) La elección se realizará a simple pluralidad de sufragios. Los electores podrán suplantar de una boleta oficializada, a uno o más candidatos pertenecientes a otras boletas. Los candidatos sustituídos, sólo podrán ser reemplazados por otros de idénticas condiciones.

19º) Si por deficiencia del padrón, el nombre del elector no correspondiera exactamente al del documento de identidad exhibido, el presidente admitirá el voto, siempre que los números de la matrícula o de la cédula de identidad fueran coincidentes con los del padrón. Tampoco se podrá impedir la emisión del voto, cuando el nombre figure con exactitud y discrepen en cambio, los números del documento de identidad con los consignados en el listado.

De las anomalías a que se alude anteriormente, el presidente deberá dejar constancia en la columna de "observaciones" del registro.

20º) La elección no podrá ser interrumpida y en caso de serlo por fuerza mayor, se expresará en acta, el tiempo que haya durado la interrupción y la causa de la misma.

21º) La elección finalizará indefectiblemente a la hora indicada al efecto, ordenando el presidente la clausura del acceso al lugar del comicio, pero deberá continuarse recibiendo el voto a los electores presentes que aguardaran turno.

22º) El presidente y los fiscales realizarán el escrutinio ajustándose a los siguientes procedimientos:

a) Se abrirá la urna de la que se extraerán todos los sobres y se los contarán, confrontándose la cantidad que resulte con el número de sufragantes.

b) Efectuada dicha operación, se procederá a la apertura de los sobres seccionándose las boletas a efectos de su recuento por candidato.

c) El escrutinio no podrá realizarse, bajo ningún pretexto, antes de la hora indicada para tal fin, aún cuando hubiere sufragado la totalidad del personal.

d) Si en un sobre se encontraran dos o más boletas completas correspondientes a una misma lista, sólo se computará una de ellas. Un mismo sobre no podrá contener más de cuatro secciones de distintas boletas, o sea no podrá contener más de cuatro candidatos (dos titulares y dos suplentes). En caso contrario el voto se considerará anulado.

e) Asimismo, se considerarán votos nulos, los emitidos en boletas con inscripciones que permitan la individualización del elector, o que las mismas sean ajenas a los fines a que promueve el acto eleccionario.

f) Los votos se computarán por candidatos y no por listas.

Cualquiera de los fiscales podrá cuestionar la clasificación de los sufragios y toda otra circunstancia que a su juicio no se ajuste a las disposiciones contenidas en la presente fundando su observación con exposición concreta de las causas. El presidente considerará la cuestión y si "prima facie", la observación no fuera absolutamente clara desestimará la misma. Si el que efectuare la observación estuviere disconforme con lo resuelto por el presidente podrá expresar su protesta solicitando que se labre un acta al respecto.

23º) Finalizado el escrutinio se consignará en acta -que se agregará a la lista respectiva- lo siguiente:

a) Hora del cierre del comicio y número de sufragios emitidos.

ACTO: DECRETO Nº 4.651/61.-

MATERIAS: RACIONALIZACION - SERVICIOS DE ORGANIZACION Y METODOS

Buenos Aires, 9 de junio de 1961.-

Visto el Decreto-Ley Nº 4.027/58 (1), el Decreto Nº 10.976/58 (2), el inciso 21 del anexo al artículo 2º del Decreto Nº 2.351/61 (3), lo propuesto por el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A.) y lo aconsejado por Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.), y

CONSIDERANDO:

Que las Comisiones de Organización y Métodos cuya creación se dispuso por decreto Nº 10.976/58, han permitido obtener beneficios positivos, suficientemente comprobados, cuando fueron constituídos en la forma dispuesta y contaron con el interés y apoyo de las altas autoridades de los organismos en que actuaron;

Que lo expresado permite asegurar que las citadas Comisiones, adecuadamente integradas y utilizadas, constituyen un instrumento idóneo para realizar la racionalización y reforma administrativas en que está empeñado //-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 479.-
(2) Ver Digesto Administrativo Nº 683.-
(3) Ver Digesto Administrativo Nº 1371.-

el Gobierno Nacional;

Que es conveniente facilitar la rotación e intercambio de analistas entre los distintos organismos del Estado para mejorar la capacitación, ampliar la experiencia y permitir una mejor utilización de los citados agentes;

Que la experiencia recogida hasta la fecha aconseja perfeccionar y completar las disposiciones del decreto Nº 10.976/58;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Las Comisiones de Organización y Métodos, cuya constitución dispuso el decreto Nº 10.976/58, se denominarán Servicios de Organización y Métodos, tendrán la jerarquía y composición que surja de la estructura funcional respectiva, aprobada con intervención del Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.) y deben quedar constituidos e incluidos en el respectivo presupuesto antes de los ciento veinte (120) días de la fecha, en los ministerios, secretarías de Estado, subsecretarías y organismos que se indican en el anexo agregado al presente decreto, con la dependencia y jurisdicción que se señala. En las entidades descentralizadas, los Servicios de Organización y Métodos dependerán directamente del titular del organismo.

La constitución de los Servicios y su inclusión en el presupuesto, deberá efectuarse sin modificar la cantidad de los cargos y los créditos asignados presupuestariamente al organismo.

ARTICULO 2º.- Los organismos no indicados expresamente podrán constituir Servicios de Organización y Métodos si lo considerasen necesario, previo asesoramiento del Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.). En caso contrario podrán solicitar la colaboración de la jurisdicción ministerial de la que dependen o del Servicio

de Organización y Métodos del Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.).

ARTICULO 3º.- Los Servicios de Organización y Métodos estarán integrados por personal especializado, con el mínimo indispensable de personal auxiliar. El personal especializado deberá reunir las condiciones mínimas establecidas para los analistas de Organización y Métodos del - Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.). Para facilitar la especialización del citado personal, el Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.), con acuerdo de los organismos interesados, podrá incorporarlo a sus equipos de Organización y Métodos para realizar trabajos prácticos por períodos de dos (2) o tres (3) meses, después que hayan completado el curso de capacitación correspondiente.

ARTICULO 4º.- Los ministros y secretarios de Estado encargarán a un asesor de su gabinete la misión de facilitar la actuación de los Servicios de Organización y Métodos, allanar los inconvenientes que se le presenten y colaborar en la preparación y actualización de su plan de trabajos.

ARTICULO 5º.- Además de las funciones básicas establecidas en el artículo 1º del decreto Nº 10.976/58, los Servicios de Organización y Métodos deben informar oportunamente al titular del Organismo del que dependen, los casos comprobados de superposición de funciones entre dependencias de la jurisdicción en que actúan y las soluciones adecuadas. En forma similar deberán informar sobre - las superposiciones de funciones entre la propia y otras jurisdicciones ministeriales. En ambos casos se remitirá al Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.-P.) copia del correspondiente informe.

ARTICULO 6º.- Los Jefes de los Servicios de Organización y Métodos elevarán un informe trimestral, sintético y - concreto, al titular del organismo del que dependen, de-

tallando los trabajos realizados, beneficios alcanzados e inconvenientes no superados. Una copia de este informe será remitida al Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.).

ARTICULO 7º.- Facúltase a todos los organismos incluidos en el anexo al presente decreto, a intercambiar sus analistas de Organización y Métodos por lapsos de hasta un (1) año, mediante el sistema de traslado "en comisión" y con intervención del Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.).

ARTICULO 8º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 9º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Jorge Wehbe

Anexo

ORGANISMOS QUE DEBEN CONSTITUIR SERVICIOS DE ORGANIZACION Y METODOS

Administración Central

Presidencia de la Nación	Jefe de la Casa Militar
Secretaría de Informaciones del Estado	Subsecretario
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	Subsecretario de Relaciones Exteriores
Ministerio del Interior	Subsecretario
Secretaría de Agricultura y Ganadería	Subsecretario
Secretaría de Hacienda	Subsecretario
Dirección General Impositiva	Director General
Dirección Nacional de Aduanas	Director Nacional
Secretaría de Industria y Minería	Secretario de Estado
Secretaría de Comercio	Secretario de Estado
Subsecretaría de Educación	Subsecretario de Educación
Subsecretaría de Justicia	Subsecretario de Justicia
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública	Subsecretario
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	Subsecretario
Secretaría de Obras Públicas	Subsecretario
Secretaría de Comunicaciones	Subsecretario
Secretaría del Transporte	Subsecretario

Organismos Descentralizados

Comisión Nacional de Energía Atómica
Administración Nacional de Bosques

Dirección General de Parques Nacionales
Consejo Agrario Nacional
Junta Nacional de Carnes
Junta Nacional de Granos
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Mercado Nacional de Hacienda
Caja Nacional de Ahorro Postal
Instituto de Servicios Sociales Bancarios
Banco Central de la República Argentina
Banco de la Nación Argentina
Banco Hipotecario Nacional
Banco Industrial de la República Argentina
Instituto Nacional de Reaseguros
Instituto Nacional de Vitivinicultura
Dirección Nacional de Geología y Minería
Dirección Nacional de Industrias del Estado
Agua y Energía Eléctrica
Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Yacimientos Carboníferos Fiscales
Gas del Estado
Universidad Tecnológica Nacional
Consejo Nacional del Menor
Consejo Nacional de Educación
Consejo Nacional de Educación Técnica
Administración General de Obras Sanitarias de la Nación
Dirección Nacional de Vialidad
Empresa Nacional de Telecomunicaciones
Dirección Nacional de Turismo
Transportes de Buenos Aires
Flota Mercante del Estado (1)
Flota Fluvial del Estado Argentino
Talleres de Reparaciones Navales
Administración General de Puertos
Ferrocarriles del Estado Argentino

---

(1) Atiende también la Flota Argentina de Navegación de Ultramar.-

ACTO: EXPEDIENTE Nº 50.588/61.-

MATERIA: DICTAMENES

Vuelva a la SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA significándole:

1º) Que presumiblemente la "resolución" requerida -en el oficio de fs. 1 sea el dictamen producido por el ex-titular de esta Procuración del Tesoro en el expediente Nº 161/58 "Empresa Nacional de Telecomunicaciones c/ EDITORIAL DEMOCRACIA S.A. s/Propuesta de Transacción", que -junto con su agregado Nº 58.206/58- fué girado a esta Secretaría de Estado (Decreto-Ley 3.490/58) (*) en septiembre 15 de 1959 mediante informe Nº 7373/A.F.

2º) Que en mi opinión y en principio, los dictámenes de los asesores legales del Poder Ejecutivo deben permanecer reservados, sin perjuicio de que los funcionarios a quienes legalmente van dirigidos -ejercitando su propio juicio sobre la conveniencia o no de hacerlo- den vista de los mismos. Por mi parte he recomendado en otra oportunidad que no se conceda vista a personas que litigan contra la Nación de dictámenes que adelantan opiniones sobre la conducta a seguir por ésta, criterio que bien podría ser aplicado al presente caso pese a que el

//-

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 480.-

requerimiento lo formula un magistrado ya que, de todos modos, se colocaría a la Nación en situación de desventaja con relación a la otra parte, que cuenta al respecto con la efectiva garantía del secreto profesional de sus propios asesores.

Dése a la presente carácter de muy atenta nota de remisión.-

Buenos Aires, 28 de junio de 1961.-

Fdo. CARLOS MARIA BIDEGAIN
Procurador del Tesoro
de la Nación

ACTO: RESOLUCION Nº 3.947/61.-

MATERIA: LICENCIAS

Buenos Aires, 28 de julio de 1961.-

Atento la necesidad de ajustar los incisos a) y b) del punto 85) del Reglamento de Asistencia y Licencias, aprobado por resolución del ex-Ministerio de Hacienda - Nº 8.264/56 (1), a las disposiciones específicas establecidas en el apartado 3º) del artículo 30 del decreto Nº 12.720/53 (2),

EL SECRETARIO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

1º) Modifícanse los incisos a) y b) del punto 85) del - Reglamento de Asistencia y Licencias, aprobado por resolución Nº 8.264 dictada por el ex-Ministerio de Hacienda el 16 de octubre de 1956, el que quedará - redactado de la siguiente forma:

"Fallecimientos:

"a) 5 días en caso de fallecimiento de:

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 16.-
(2) Ver Digesto Administrativo Nº 15.-

"cónyuge
"padres
"hijos

"b) 2 días en caso de fallecimiento de:

"suegros
"yerno o nuera
"padrasto o madrasta
"hijastros
"hermanos
"medios hermanos
"abuelos
"nietos
"cuñados".

2°) Comuníquese a quienes corresponda, notifíquese al personal, publíquese y archívese.-

Fdo. JORGE WEHBE

ACTO: DECRETO Nº 4.652/61.-

MATERIA: INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA

Buenos Aires, 9 de junio de 1961.-

Visto lo dispuesto por el Decreto-Ley Nº 4.027 de fecha 1º de abril de 1958 (1) y,

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Superior de Administración Pública dependiente de la Presidencia de la Nación ha programado un amplio plan de cursos para la capacitación de funcionarios de todas las jerarquías;

Que mediante los citados cursos, además de darse cumplimiento a las normas legales vigentes, se procura crear en la Administración Pública las condiciones necesarias para el aumento de su eficiencia, base de una efectiva racionalización;

Que el sistema de contratación de personal docente ha sido ya previsto en el decreto reglamentario Nº6343 de fecha 29 de abril de 1958, y el Instituto cuenta con las partidas presupuestarias que permiten ponerlo en ejecución;

Por ello,

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 479.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- El Instituto Superior de Administración Públicas (I.S.A.P.), organizará y dictará los siguientes cursos para la capacitación y perfeccionamiento del personal de la Administración Pública Nacional:

a) Curso de Organización y Métodos, destinado a la formación de técnicos analistas en racionalización administrativa, para prestar servicios en el I.S.A.P. o en los diferentes servicios de O. y M. de los Ministerios, Secretarías de Estado y organismos descentralizados, incluyendo Empresas del Estado,
b) Curso de Administración de Personal, destinado a capacitar a los funcionarios de los diferentes servicios de personal, en las nuevas técnicas de administración de personal.
c) Curso de Administración Pública, destinado a capacitar a los funcionarios de la Clase "A" del Escalafón y categorías equivalentes.
d) Curso Medio de Administración Pública, destinado a capacoitar a los funcionarios de la Clase "B", Grupo I y II del Escalafón y categorías equivalentes.
e) Cursos Centrales de Supervisión (Supervisores), destinado a capacitar a los funcionarios de la Clase "B" Grupos III a VIII y categorías equivalentes, que preferentemente tengan personal a sus órdenes en las diferentes unidades o sectores operativos de la Administración Nacional.
f) Curso de Instructores, en Técnicas de Supervisión, destinado a la formación del cuerpo docente de la Administración Pública en la especialidad de capacitación de supervisores.

ARTICULO 2º.- La Dirección del I.S.A.P. reglamentará las

características y detalles de cada uno de los cursos mencionados, incluyendo: programas, cantidad de horas asignadas a cada materia, la cantidad, duración y oportunidad de los cursos, temas a cargo de los ayudantes de curso, procedimiento de inscripción; procedimientos de enseñanza que se utilizarán; exigencias que deben llenar los cursantes para obtener el certificado, integración de mesas examinadoras, horario de cursos, etc.

ARTICULO 3º.- La asistencia a los cursos detallados en el artículo 1º del presente decreto, con autorización competente, se considera como parte de las tareas específicas de cada funcionario o empleado cursante.

ARTICULO 4º.- A los efectos del artículo 5º del Decreto Nº 9.252/60 (") serán válidos los certificados de aprobación de los cursos indicados en los incisos c), d) y e) del artículo 1º del presente decreto. Los alumnos del curso f) obtendrán también certificado del curso e) al aprobar el respectivo examen.

ARTICULO 5º.- Los cursos podrán dictarse dentro o fuera del horario oficial de la Administración Pública, y no se considerarán incompatibles las contrataciones previstas en el art. 7º del presente decreto y las tareas administrativas, a cuyo efecto y en caso de superposición horaria, los organismos respectivos y el I.S.A.P. adoptarán las medidas necesarias para regularizar la prestación de servicios de los agentes comprendidos en el presente artículo.

ARTICULO 6º.- Además de los Cursos Centrales de Supervisión que se dictarán en el I.S.A.P., se organizarán cursos similares en cada jurisdicción administrativa, Presidencia de la Nación, Ministerios, Secretarías de Estado,

(") Ver Digesto Administrativo Nº 1216.-

Tribunal de Cuentas de la Nación, Reparticiones descentralizadas y Empresas del Estado; su instalación y desarrollo se ajustará a las siguientes normas:

a) Los cursos se ajustarán a los programas e instrucciones que prepare el I.S.A.P.

b) Los servicios administrativos pertinentes tendrán a su cargo la organización y realización de los cursos y deberán proveer personal, local adecuado, útiles, muebles y demás comodidades.

Estará a cargo, igualmente, la reimpresión del material didáctico que indique o facilite el I.S.A.P. y el control de la asistencia.

c) Los cursos serán dictados por funcionarios de las Clases "A" y "B" que hayan sido seleccionados y capacitados en el Curso de Instructores del I.S.A.P. Entre éstos, la autoridad de la respectiva jurisdicción, previa consulta con el I.S.A.P., designará el Encargado de Curso.

d) El desarrollo de los cursos y los exámenes serán controlados por funcionarios de la Dirección de Cursos del I.S.A.P. Los certificados finales serán firmados por el Director de Cursos del I.S.A.P. y por el encargado de Cursos respectivo.

ARTICULO 7º.- Para dictar los cursos mencionados en el art. 1º se contratarán los profesores, disertantes, instructores o ayudantes de cursos que sean necesarios de acuerdo a lo previsto en el Decreto-Ley Nº 4.027/58, art. 10º, inc. i). Tales contrataciones que se harán por tiempo limitado y para cursos determinados, podrán realizarse con agentes que revisten en cualquiera de las jerarquías de la Administración Pública, de cualquier jurisdicción, incluso del mismo Instituto Superior de Administración Pública o con personas ajenas a la función pública, siempre

que reúnan las condiciones y conocimientos especializados necesarios.

ARTICULO 8º.- Con excepción de los expertos extranjeros, enviados por organismos internacionales de asistencia técnica o de los funcionarios de firmas privadas que actúen en representación de las mismas para demostración o explicación de los elementos de su comercio todas las personas que dicten clases conferencias o cursillos o que conduzcan seminarios, discusiones guiadas o grupos de trabajo, podrán recibir compensaciones en forma de honorarios según escala que se someterá a la aprobación del Poder Ejecutivo.

ARTICULO 9º.- Los instructores contratados para dictar clase en los Cursos de Supervisores (Art. 1º, Inc. e) y Art. 6º) podrán pasar a revistar en comisión para dedicarse a la tarea de Instructor en Técnicas de Supervisión, siempre que en la misma no sean remunerados por más de cincuenta y cinco (55) horas de clase en el mes, y que en otras tareas relacionadas con los cursos completen el período de tiempo diario establecido como horario administrativo.

ARTICULO 10º.- Para la selección de personal docente se seguirá el siguiente procedimiento: se constituirá una comisión de selección para cada curso, la cual determinará la persona que de acuerdo con sus antecedentes debe dictar cada asignatura. Una vez efectuada esa determinación el Director de I.S.A.P., procederá a firmar con la persona elegida el contrato respectivo con arreglo al modelo adjunto que se aprueba. Dicho contrato surtirá efectos desde la fecha de su firma. Las Comisiones de Selección estarán integradas en todos los casos por el Secretario Técnico de la Presidencia de la Nación, por el Director del I.S.A.P. y por el Director de Cursos del I.S.A.P.. además la integrarán los miembros que se indican a continuación para los siguientes cursos

Curso de Administración Pública: Procurador del Tesoro y Subsecretario de Hacienda.

Curso Medio de Administración Pública: Director General del Servicio Civil de la Nación.

Curso de Organización y Métodos: Director y Subdirector del Servicio de O. y M. del I.S.A.P.

Cursos Centrales de Supervisión y Cursos de Instructores: Encargado del Curso (actualmente experto de Naciones Unidas).

Cursos Desconcentrados de Supervisión (Art.6º del presente decreto): Titular de Personal de la jurisdicción respectiva y Encargado del Curso.

Curso de Administración de Personal: Director General del Servicio Civil de la Nación.

ARTICULO 11.- Todas las dependencias de la Administración Pública deberán prestar amplia colaboración al Servicio de Cursos del Instituto Superior de Administración Pública, en todo lo que atañe al mejor desarrollo de los Cursos mencionados.

ARTICULO 12.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto se atenderán con imputación al Sector 2, Financiación 5, Anexo 200, Jurisdicción 1, Inciso 7, Principal 33, Subprincipal 015 del Presupuesto del Instituto Superior de Administración Pública (Organismos Descentralizados Nº 79).

ARTICULO 13.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 14.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación a sus efectos.

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Jorge Wehbe

ANEXO AL ARTICULO 10º

Entre el Director del Instituto Superior de Administración Pública en representación del Poder Ejecutivo, en virtud de lo establecido en el Artículo 10º del Decreto Nº.... y el señor .... se conviene celebrar el siguiente:

CONTRATO

ARTICULO 1º.- El señor .... se compromete a dictar en el Instituto Superior de Administración Pública .... horas de 60 minutos de clase correspondientes a la asignatura .... de los Cursos de .... a dictarse en los meses de ... a .... del año .... y con arreglo a lo establecido en el presente contrato, en el Decreto Nº .... y en el reglamento de cursos del I.S.A.P.

ARTICULO 2º.- El señor .... dictará sus clases en el horario que le asigne la Dirección de Cursos del I.S.A.P. y deberá desarrollar totalmente en ellos la asignatura mencionada en el artículo anterior ajustándose al programa básico establecido en el anexo Nº .... del Reglamento de Cursos.

ARTICULO 3º.- El señor .... percibirá por cada hora de clase completa dictada la suma de m$n. .... que le será abonada dentro de los cinco días de finalizado el mes en que la dicte.

ARTICULO 4º.- Aunque la remuneración se establece sobre las horas de clase efectivamente dictadas, el señor .... deberá prestar colaboración con la Dirección de Cursos del I.S.A.P. para integrar las mesas examinadoras, para tomar exámenes, calificar monografías, así como para atender consultas y aclaraciones del tema con los cursantes o preparar material didáctico referente a su materia. El cumplimiento de estas funciones podrá insumir hasta un 40 %

del tiempo de horas de clase previsto en el Art. 1º del presente contrato, sin que se lo considere por separado a los efectos de la remuneración.

ARTICULO 5º.- El I.S.A.P., podrá declarar rescindido el presente contrato en caso de que el señor .... inasistiera sin causa justificada y previo aviso a dos clases consecutivas o cuatro alternadas, o no cumpliera las tareas a que se refiere el Artículo 4º del presente contrato.

ARTICULO 6º.- Los pagos que efectúe el I.S.A.P. al señor .... revisten el carácter de honorarios profesionales y no crean con el Estado relación de empleo.

ARTICULO 7º.- A los efectos de las divergencias que origine la aplicación del presente contrato, y también para el caso de controversia judicial emergente del mismo, las partes establecen expresamente la jurisdicción de los tribunales federales de la Capital Federal.

ARTICULO 8º.- El I.S.A.P., constituye su domicilio en Diagonal Presidente Roque Sáenz Peña 501, 5º Piso y el señor .... en .....

ARTICULO 9º.- El sellado del presente contrato en la proporción que corresponde será repuesto por el Contratado en el original que quedará en poder del I.S.A.P.

En prueba de conformidad se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor, en Buenos Aires a los .... días del mes de .... del año 19.....

ACTO: DECRETO Nº 5.899/61.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - FONDO DE COMPENSACION

Buenos Aires, 13 de julio de 1961.-

Visto lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto Nº 1.254/60 (1), que determina el régimen de distribución del complemento del "Fondo de Compensación" por incentivación instituido para el personal de la Dirección General Impositiva, y atento la necesidad de ajustar el procedimiento previsto en la citada norma, en cuanto fija el grado de calificación a que está supeditada la liquidación respectiva, a los principios generales que en materia de ponderación de la calificación ha venido utilizándose en el ámbito de la Administración Pública Nacional,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Substitúyese el texto del artículo 5º del Decreto Nº 1.254/60 por el siguiente:

"Artículo 5º.- Determinado el saldo a distribuir

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1132.-

según lo indicado en el artículo 4° -es decir, ya - deducido los dos (2) sueldos mínimos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo mencionado- se efectuará la liquidación del complemento en la forma que a continuación se indica, sobre la proporción de sueldos que resulte de aquella suma o bien sobre el máximo de cinco (5) sueldos si ella fuera mayor al importe de estos últimos.

"El 100% al agente cuya calificación en el ejercicio sea de 9,50 a 10 puntos;

"El 90% al agente cuya calificación en el ejercicio sea de 8,50 a 9,49 puntos;

"El 70% al agente cuya calificación en el ejercicio sea de 7,50 a 8,49 puntos;

"El 50% al agente cuya calificación en el ejercicio sea de 6,50 a 7,49 puntos;

"El 25% al agente cuya calificación en el ejercicio sea de 5,50 a 6,49 puntos;

"El agente cuya calificación en el ejercicio - sea inferior a 5,50 puntos percibirá únicamente los dos (2) sueldos mínimos a que alude el artículo 21° del Decreto N° 7.738/58 (")".

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por - el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Hacienda.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a - la Secretaría de Hacienda a sus efectos.

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Jorge Wehbe

(") Ver Digesto Administrativo N° 639.-

ACTO: DECRETO Nº 6.295/61.-

MATERIAS: LIMITACION DE SERVICIOS - ECONOMIAS - RACIONALIZACION - CESANTIAS - INDEMNIZACIONES

Buenos Aires, 27 de julio de 1961.-

Visto lo establecido en el Artículo 36º de la Ley Nº 15.796 (1), y

CONSIDERANDO:

Que la citada norma establece que su aplicación deberá condicionarse a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo;

Que, en consecuencia, es necesario establecer el régimen pertinente para hacer efectiva la autorización legislativa en oportunidad de producirse los eventos previstos en el artículo 36º mencionado;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Las facultades acordadas por el Artículo 36º de la Ley Nº 15.796 serán ejercidas, con las limitaciones establecidas en el mismo, por las autoridades superiores de los organismos que posean competencia en //-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1324.-

materia de designación y remoción de personal, o por el Poder Ejecutivo a propuesta fundada de los organismos administrativos que carezcan de esa competencia.

ARTICULO 2º.- Las vacantes que se produzcan con motivo del ejercicio de esas facultades quedarán automáticamente suprimidas y su eliminación deberá concretarse presupuestariamente dentro del actual ejercicio financiero, salvo que se trate de un cargo que figure en la estructura funcional del organismo, aprobada por el Poder Ejecutivo en cuyo caso podrá mantenerse la vacante, pero deberá:

1º) Rebajarse cargos por un importe equivalente al de la vacante o vacantes que hubiese correspondido eliminar, o

2º) Suprimirse por lo menos, el mismo número de cargos que se mantienen y rebajar créditos en otras partidas de los respectivos presupuestos para compensar el monto de las reducciones que deberían realizarse por eliminación del cargo o cargos correspondientes.

ARTICULO 3º.- En todos los casos en que se resuelva la supresión de organismos o dependencias, el personal que forma la planta presupuestaria de los mismos (partidas individuales y partidas globales) quedará incluído en las normas del presente decreto, salvo que el Poder Ejecutivo disponga otro destino, previa proposición debidamente fundada del Ministerio, Secretaria de Estado u organismo respectivo y con la conformidad del Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A.).

ARTICULO 4º.- El personal afectado por las normas indicadas en los artículos precedentes será puesto, en las condiciones previstas por el Decreto nº 9.718/59 (º), con las limi

(º) Ver Digesto Administrativo nº 854.-

taciones a que se refiere el artículo siguiente, a disposición de la Dirección General del Servicio Civil de la Nación.

ARTICULO 5º.- El personal a que se refiere el artículo anterior, podrá ser transferido a otros organismos del Estado, siempre que:

1º) El organismo que requiera el concurso del o de los agentes, tenga vacantes disponibles;

2º) Que además tenga acordada la autorización para cubrirlas. La Dirección General del Servicio Civil de la Nación no dará curso a ningún pedido de transferencia de este personal, sin que se cumplan las condiciones indicadas precedentemente.

Si transcurridos 45 (cuarenta y cinco) días corridos desde la fecha en que dicho personal se encuentre a disposición de la citada Dirección General, no hubiera sido nombrado en otros organismos, quedará automáticamente comprendido en las disposiciones del Artículo 36º de la Ley Nº 15.796.

ARTICULO 6º.- Aclárase que no son de aplicación para las vacantes que se produzcan en virtud de lo establecido en el presente decreto, las normas a que se refieren los Decretos números 9.252/60 (") (Artículo 2º) y 10.852/60 (") (Artículo 3º), como así también cualquier otra autorización acordada para la cubertura de vacantes.

ARTICULO 7º.- El personal de cuyos servicios se prescinda como consecuencia de las medidas indicadas precedentemente, tendrá derecho a percibir por ese motivo:

(") Ver Digesto Administrativo Nº 1216.-

(") Ver Digesto Administrativo Nº 1261.-

1º) Agentes comprendidos en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, o excluídos del mismo y que no se encuentren amparados por ningún régimen indemnizatorio: Indemnización equivalente al 40% (cuarenta) por ciento de su última retribución mensual por cada año de servicio y hasta un máximo de 20 (veinte) años;

2º) Agentes excluídos del estatuto mencionado en el apartado 1º) y que estén comprendidos en otro régimen indemnizatorio: Indemnización que corresponda por despido sin causa, según el régimen respectivo.

ARTICULO 8º.- En los casos mencionados precedentemente la indemnización será calculada de acuerdo con la antigüedad computable de conformidad con las normas en vigor, no pudiendo, en ningún caso, ser inferior a 3 (tres) meses de retribución.

La liquidación de los importes que les corresponda se realizará en cuotas mensuales equivalentes al 70% (setenta) por ciento de su retribución mensual.

Al personal que reingrese a la Administración Pública, cualquiera sea el sistema de retribución (mensual, a jornal, contratado, etc.) deberá cesar en forma automática el pago de la indemnización.

Para los agentes que tengan otorgado un beneficio jubilatorio de carácter ordinario o prestación similar o que se encuentre en condiciones de obtenerlo, la indemnización será igual a 3 (tres) meses de sueldo y se liquidará y abonará en la misma forma que para el resto del personal.

ARTICULO 9º.- Al solo efecto de este decreto, entiéndese por retribución mensual el último sueldo (sueldo o jornal) nominal mensual básico del agente y demás asignaciones o bonificaciones regulares y permanentes, con exclu-

sión de toda otra forma de retribución, compensación o reintegro. Debe incluirse para el cómputo de la indemnización las asignaciones por carga de familia, título y compensaciones acordadas en virtud de los Decretos Nros. 9.252/60 y 10.852/60.

ARTICULO 10.- Para el personal en uso de licencia anual reglamentaria por descanso o de licencia por razones de salud, el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días a que se refiere el Artículo 5º del presente decreto, se computará a partir del vencimiento del término de esas licencias.

El personal que no haya hecho uso de su licencia anual reglamentaria por descanso, tendrá derecho a solicitarla dentro de los 5 (cinco) días corridos de su notificación de la baja.

ARTICULO 11.- Los organismos del Estado cargarán provisionalmente los gastos emergentes del pago de las indemnizaciones a que se refiere este decreto y que corresponden al presente ejercicio financiero de 1961, al disponible de los créditos presupuestarios para "Gastos en Personal".

ARTICULO 12.- Los Ministerios, Secretarías de Estado y demás organismos, deberán elevar a consideración del Poder Ejecutivo con intervención de la Secretaría de Estado de Hacienda, el ajuste de su presupuesto, en el cual se preverán los aspectos siguientes:

1º) Supresión de las vacantes y créditos correspondientes, con motivo de la aplicación del presente decreto.

2º) Inclusión de las partidas para atender los gastos realizados y/o comprometidos por el servicio que total o parcialmente se suprima, refunda, etc.

3º) Inclusión de las partidas para el pago del personal por el tiempo indicado en el Artículo 5º, que se pone a disposición de la Dirección General del Servicio Civil y de la indemnización que pudiera corresponderle.

ARTICULO 13.- Déjase establecido que en todos los casos en que la autoridad competente disponga la baja del agente en función de las normas precedentes deberá aclararse que dicha baja tiene efectos una vez transcurridos los plazos indicados en el presente decreto.

ARTICULO 14.- A partir de los 45 (cuarenta y cinco) días corridos a que se refiere el Artículo 5º, los servicios administrativos respectivos y, cuando así corresponda, el Tribunal de Cuentas de la Nación, no darán curso a la liquidación de haberes del personal afectado por las disposiciones del presente decreto.

ARTICULO 15.- Modifícase y amplíase con sujeción a lo establecido en el presente decreto, las medidas dictadas hasta la fecha mediante las cuales se haya resuelto la baja de agentes por aplicación del Artículo 36º de la Ley Nº 15.796, dejándose aclarado que en todos los casos se deberá adoptar el procedimiento fijado en los artículos anteriores.

ARTICULO 16.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 17.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación a sus efectos.

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Jorge Wehbe

ACTO: DECRETO Nº 6.317/61.-

MATERIA: SEGURO DE VIDA COLECTIVO

Buenos Aires, 27 de julio de 1961.-

Visto el Expediente Nº 6.478/60, del registro del Ministerio de Economía de la Nación, en el que la Caja Nacional de Ahorro Postal, expone la situación de ex agentes del Estado excluidos del seguro de vida de la Ley 13.003 (t.o.1958), por no haber abonado las primas respectivas, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 13.003 (t.o.1958) permite a dichos asegurados continuar amparados en ese régimen, aún después de dejar la Administración por cualquier motivo -excepto jubilación o retiro- mediante el pago en forma directa del importe de la prima;

Que se omitió practicar el descuento y/o efectuar la notificación previstos en los artículos 31º y 39º del Decreto Nº 11.806/51 ó 32º y 40º del Decreto Nº 10.176/58 (1);

Que la falta de notificación de los artículos 39º o su correlativo 40º, no exime del pago de las primas y que en su defecto se opera la rescisión de la cobertura //-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 724.-

individual, por cuanto las cláusulas sólo prevén un eventual desconocimiento de la reglamentación por parte de los asegurados, sin que ello altere la presunción de que la ley es conocida por todos a partir de su publicación (artículo 2º, Código Civil);

Que, no obstante ello, el fin eminentemente social de este régimen autoriza como excepción y dentro de las facultades del Estado como asegurador, a aplicar un criterio de equidad que permita la rehabilitación de los seguros de esos ex agentes;

Que las mismas razones concurren a determinar el pago del seguro a los beneficiarios, cuando hubiere ocurrido el siniestro;

Por ello, lo propuesto por la Caja Nacional de Ahorro Postal, lo dictaminado a fs. 3/5 y 10/12 y las conformidades expuestas a fs. 8 y 12 vta.,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Amplíase el artículo 40º del Decreto número 10.176/58 con el siguiente párrafo:

"En caso de incumplimiento de la notificación indicada, el seguro se mantendrá en vigencia hasta el 31 de diciembre del año siguiente a aquel en que se produjo el egreso del ex agente, sin perjuicio de aplicar a los funcionarios responsables lo dispuesto en el artículo 97º".

ARTICULO 2º.- Los ex agentes del Estado que hubieran quedado excluidos del seguro de la Ley 13.003 (t.o.1958) antes de la vigencia de este decreto, por no haber abonado las primas respectivas, podrán rehabilitar su seguro regularizando las mismas dentro de los treinta días de notificados en tal sentido, siempre que medie solicitud del interesado dentro del año siguiente al de su egreso

de la repartición y cuando ésta haya omitido practicar - el descuento y/o efectuar la nptificación prevista en - los artículos 31º y 39º del Decreto Nº 11.806/51 ó 32º y 40º del Decreto Nº 10.176/58.

ARTICULO 3º.- En los casos de siniestros ocurridos con - anterioridad a la vigencia del Decreto Nº 10.176/58 y - dentro del año siguiente al del egreso del interesado de la repartición, la Caja Nacional de Ahorro Postal dispondrá el pago del capital asegurado en la forma reglamentaria, previo cumplimiento de todos los requisitos necesarios y sin perjuicio del pertinente ajuste de primas.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Jorge Wehbe

ACTO: DECRETO Nº 6.482/61.-

MATERIAS: DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA - DEDICACION PROFESIONAL O TECNICA EXCLUSIVA

Buenos Aires, 31 de julio de 1961.-

Visto la necesidad de intensificar la gestión fiscalizadora a cargo de las dependencias del Estado que tienen a su cargo tareas inherentes a la percepción de gravámenes, impuestos o tasas, a fin de lograr con ello el cumplimiento estricto de las disposiciones que rigen la materia, y

CONSIDERANDO:

Que una de las causas determinantes de la evasión fiscal está dada por la insuficiencia de personal especializado para llevar a cabo con eficacia las distintas tareas que exige el complejo mecanismo impositivo;

Que en ese sentido la Dirección Nacional de Química, a cuyo cargo está la realización de los análisis dirigidos a identificar características, naturaleza y calidad de la mercadería a los efectos de la aplicación de las normas impositivas, aduaneras y penales en vigor, ha expuesto las serias dificultades que plantea a su actividad la circunstancia antes apuntada; agravada por efecto de las cada vez más frecuentes bajas del personal más idóneo que se aleja tentado por mejores -

//-

posibilidades económicas;

Que con tal motivo propone la implantación de un régimen provisorio, hasta tanto se establezca el definitivo, que contemple la mayor capacitación que van adquiriendo progresivamente los profesionales y técnicos de la repartición, al cual, al permitir satisfacer mejor las exigencias del servicio, logre también crear un estímulo dirigido a obtener personal consagrado íntegramente a su función;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Implántase para el personal especializado de la Dirección Nacional de Química, una sobreasignación por DEDICACION PROFESIONAL O TECNICA EXCLUSIVA, que será distribuída conforme a las normas que se establecen en el presente decreto.

ARTICULO 2°.- Tendrán exclusivamente derecho a la percepción del beneficio aludido en el artículo 1°, los profesionales y técnicos cuyas especialidades y funciones se relacionen con el cometido específico de la repartición y no ejerzan otras actividades en el orden privado u oficial, cualquiera sea su naturaleza y horario, excepto la docencia en establecimientos educacionales privados u oficiales o aquéllas de las que no resulte una incompatibilidad ética y/u horaria con sus funciones en la Dirección Nacional de Química, conforme lo determinan las normas en vigor.

ARTICULO 3°.- La sobreasignación por DEDICACION PROFESIONAL O TECNICA EXCLUSIVA, se liquidará en los importes que se indican a continuación, la cual será incrementada en función de la antigüedad que el agente registre en la Dirección Nacional de Química en la función profesional

o técnica, de acuerdo al coeficiente que se establece en cada caso:

CLASE	ASIGNACION BASICA POR DEDICACION PROFESIONAL O TECNICA
B y C	2.000.-
D	1.500.-

SECTOR	ANTIGUEDAD	COEFICIENTE
I	hasta 5 años	1
II	más de 5 años a 10 años	1,5
III	más de 10 años a 15 años	2
IV	más de 15 años hasta 20 años	2,5
V	más de 20 años hasta 30 años	3

ARTICULO 4°.- A los efectos del cómputo de la antigüedad en la repartición serán deducibles los períodos de licencia sin goce de sueldo y suspensiones que excedan de treinta días, debiendo acumularse los plazos inferiores hasta alcanzar dicho total. Tampoco serán computados los servicios prestados en la Dirección Nacional de Química que hubieran originado jubilación o retiro, salvo que el causante no perciba los haberes correspondientes a su situación de pasividad. A los fines del reconocimiento de la antigüedad computable -en caso de dudas se aplicarán supletoriamente las normas complementarias y aclaratorias del punto 52 del Escalafón General aprobado por el decreto n° 9.530/58.

ARTICULO 5°.- La sobreasignación por DEDICACION PROFESIONAL O TECNICA EXCLUSIVA estará sujeta a las mismas disposiciones que el sueldo básico al solo efecto de los descuentos y cargas sociales .

ARTICULO 6°.- El beneficio establecido por este decreto - se liquidará de acuerdo con lo previsto por el artículo - 30 de la Ley N° 15.796 (').

ARTICULO 7°.- El derecho a la sobreasignación por DEDICACION PROFESIONAL O TECNICA EXCLUSIVA se pierde por:

a) Traslado a otra repartición;
b) Cambio de funciones para desempeñar otras no amparadas por el beneficio;
c) Desestimiento del causante.

ARTICULO 8°.- Facúltase a la Secretaría de Hacienda para dictar las normas complementarias y aclaratorias del presente decreto.

ARTICULO 9°.- La Secretaría de Estado de Hacienda proyectará el correspondiente reajuste presupuestario tendiente a posibilitar la atención del gasto que demande el beneficio de que se trata.

ARTICULO 10.- La Dirección Nacional de Química elevará al Poder Ejecutivo Nacional para su consideración y aprobación, dentro de los 180 días de suscripto el presente decreto, un proyecto del régimen definitivo que regirá para el personal de la Repartición.

ARTICULO 11.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Hacienda.

ARTICULO 12.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Hacienda a sus efectos.

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Jorge Wehbe

(') Ver Digesto Administrativo N 1324

ACTO: DECRETO N° 6.483/61.-

MATERIAS: CASA DE MONEDA - PRIMA DE PRODUCCION

Buenos Aires, 31 de julio de 1961.-

Visto que por decreto n° 21.640/56 (°), se instituyó un régimen de "Primas de Producción", con carácter provisorio, para el personal de la Casa de Moneda de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que cumplido el período de experimentación a que fuera sometido dicho instrumento y dando ahora cumplimiento a lo ordenado por el artículo 2° del decreto recordado, la Casa de Moneda ha estudiado los ajustes y modificaciones al sistema vigente, y eleva para su aprobación el proyecto que da formas definitivas al mecanismo;

Que el régimen propuesto basado en la determinación de "unidades ponderadas", tiende a valorizar equitativamente cada una de las unidades mecánicas en funcionamiento en su capacidad ideal de producción;

Que a diferencia del método de estímulo global en el cual los mejores elementos mecánicos o el esfuerzo de algunos sectores obreros absorben las deficiencias -

//-

(°) Ver Digesto Administrativo N° 278.-

de otros, el nuevo mecanismo permite valuar discriminadamente el índice real de producción de cada equipo o grupo de trabajo, estableciendo así una mayor justicia en la retribución y por ende incentiva en forma directa y eficaz el grado superior de rendimiento;

Que por otra parte, mientras se estudia la posibilidad de adaptar el actual agrupamiento escalafonario de la repartición a las características netamente industriales que definen su actividad, se considera oportuna la circunstancia para el otorgamiento transitorio de una asignación adicional, dirigida a compensar tal especialización;

Que el nuevo régimen escalafonario, en el que deberá considerarse la redistribución o reagrupamiento de funciones y de personal según las características indicadas, no podrá exceder los niveles de retribución totales que se alcanzarán por aplicación de las normas del presente decreto;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Apruébase el cuerpo de disposiciones adjuntas que reglamenta el sistema de "Primas de Producción" para el personal que preste servicios efectivos en Casa de Moneda de la Nación.

ARTICULO 2º.- Asígnase la suma de UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.800.-) mensuales, en concepto de prima base fija por tareas industriales, para todo el personal de la repartición citada comprendido en las Clases "B", "C", "D", "E" y "F". El importe fijado será considerado como integrante del sueldo básico del agente a los efectos derivados del régimen de "Primas de Producción" y liquidado conforme a las normas del artículo 30 de la Ley Nº 15.796 (*).

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1324.-

ARTICULO 3°.- Facúltase a la Secretaría de Hacienda para dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias del instrumento aprobado por este decreto.

ARTICULO 4°.- Derógase el decreto n° 21.640/56 y sus complementarios.

ARTICULO 5°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Estado de Hacienda a sus efectos.

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Jorge Wehbe

REGIMEN DE PRIMAS DE PRODUCCION

ARTICULO 1°.- Tendrá derecho a los beneficios de las primas de producción, todo el personal que preste servicios efectivos en Casa de Moneda de la Nación, con arreglo a las normas que se fijan en el presente.

ARTICULO 2°.- En ningún caso el importe correspondiente a las primas de producción podrá superar el monto de un sueldo por bimestre.

ARTICULO 3°.- A los efectos de la aplicación del sistema de "primas a la producción", la organización del trabajo por equipos se dividirá en cinco series de operaciones, a saber:

Serie 1a. - TALLER DE IMPRESIONES CALCOGRAFICAS:

a) Dibujo
b) Grabado
c) Fotografía
d) Galvanoplastía
e) Clisés Tipográficos y Estereotipías
f) Tintas
g) Cilindros Calcográficos
h) Cámara de Secado y Desintercalación

Serie 2a. - TALLER DE IMPRESIONES TIPOGRAFICAS:

a) Dibujo
b) Fotografía
c) Clisés Tipográficos y Estereotipía
d) Linotipía y Composición
e) Cilindros Tipográficos
f) Encuadernación
g) Tintas

Serie 3a. - TALLER DE IMPRESIONES OFFSET:

a) Dibujo
b) Fotografía
c) Fotomecánica
d) Tintas

Serie 4a. - TALLER DE IMPRESIONES DE HUECOGRABADO:

a) Dibujo
b) Fotografía
c) Confección de planchas y cilindros de huecograbado:
d) Galvanoplastía
e) Tintas

Serie 5a. - TALLER DE ACUÑACION DE MONEDAS:

(Dibujo y Grabado intervendrían en esta serie cuando cambios de diseños o motivos, requieran su intervención).

ARTICULO 4°.- El personal acreedor al beneficio a que se refiere este régimen se dividirá en cuatro grupos:

I - Personal directo
II - Personal de dirección y supervisión
III - Personal indirecto
IV - Personal auxiliar de la producción

I - Se entiende por personal directo a todo aquel agente que aporte mano de obra activa en cada una de las series de operaciones establecidas en el artículo 3° del presente.

II - Personal de dirección es aquel que cumple las funciones superiores de dirección de la repartición y personal de supervisión es el que desarrolla tareas de jefatura dentro de cada uno de los sectores pertenecientes a cada serie de operaciones.

III - Personal indirecto es aquel que cumple funciones atinentes al proceso fabril que se ejecuta en cada una de las series (personal administrativo de cada uno de los talleres o sectores pertenecientes a cada serie de operaciones y portavalores).

IV - Se entiende por personal auxiliar de la producción a todo agente no comprendido dentro de los grupos establecidos en los apartados anteriores.

ARTICULO 5°.- La adjudicación de las "primas de producción" a los agentes que intervengan en cualquiera de las series de operaciones a que se hace referencia en el ar-

tículo 3°, se efectuará en la siguiente forma:

a) Personal directo de cada uno de los talleres cabeza de serie percibirá el 100% del coeficiente que obtiene esa serie.

b) Personal directo no perteneciente a un taller cabeza de serie, percibirá el 100% del promedio que resulte de los coeficientes obtenidos por cada una de las series en las cuales participe.

c) Personal directo de Contralor, Talleres Auxiliares, Laboratorio Químico y del Cuerpo de Contadores Volantes, percibirá el 100% del promedio que resulte de los coeficientes obtenidos por cada una de las cinco series.

d) Los Jefes y 2dos. Jefes de Departamentos de Talleres, Talleres Auxiliares, Contralor y Químico, percibirán el 90% del promedio obtenido por las cinco series en que se divide la organización del trabajo.

e) El personal jerárquico de los sectores comprendidos en el punto a) de este artículo, percibirá el 90% del promedio del taller, siempre que no tenga a su cargo la atención directa de una máquina, en cuyo caso percibirá el 100% (esto último hasta la categoría de Jefe de Sección).

f) El personal jerárquico de los sectores comprendidos en el punto b), percibirá el 90% del promedio que resulte de los coeficientes obtenidos por cada una de las series en que participa.

g) El personal de dirección y el personal jerárquico de los sectores comprendidos en el punto c), percibirá el 90% del promedio que resulte de los coeficientes obtenidos por las cinco series.

h) Al personal indirecto de los sectores comprendidos en el punto a), se le liquidará el 80% del coeficiente obtenido por el sector al cual pertenece.

i) Al personal indirecto de los sectores comprendidos en el punto b), se le liquidará el 80% del promedio de los sectores a los cuales pertenece.

j) El personal indirecto de los sectores comprendidos en el punto c), percibirá el 80% del promedio que resulte de los coeficientes obtenidos por cada una de las cinco series.

k) El personal auxiliar de la producción percibirá el 70% del promedio que resulte de los coeficientes obtenidos por cada una de las cinco series.

ARTICULO 6º.- El monto de cada prima a otorgarse estará de acuerdo con la cantidad de trabajos realizados bimestralmente por cada taller cabeza de grupo o equipo formado según la serie de operaciones para llegar a la operación final, establecidas en el artículo 3º del presente. Dicha cantidad de trabajo será medida mediante el sistema de "unidades ponderadas".

ARTICULO 7º.- Para medir y equiparar las diferencias de rendimiento y características de las distintas máquinas de la Casa de Moneda, las cantidades directas de producion se transformarán en "unidades ponderadas" y todos los cómputos, cotejos, comparaciones, etc., se harán en base a estas últimas.

Para tales fines, se computará una cantidad determinada de "unidades ponderadas" para cada uno de los procedimientos que seguidamente se detallan:

a) Cada máquina individualmente o cada taller como promedio, percibirá premio a partir de 100.000 "uni

dades ponderadas".

b) Para obtener el 100% de prima, cada máquina individualmente o cada taller como promedio, deberá acumular 150.000 "unidades ponderadas".

c) Por un turno completo de labor empleado en tareas de "arreglo", se adjudicarán 110.000 "unidades ponderadas".

d) Por un turno completo de labor absorbido por "interrupciones normales diarias", se computarán 14.000 "unidades ponderadas".

e) Por un turno completo de labor absorbido en "reparaciones mecánicas o eléctricas", se adjudicarán 100.000 "unidades ponderadas".

ARTICULO 8º.- Semestralmente la Casa de Moneda de la Nación someterá a consideración de la Secretaría de Estado de Hacienda, los ajustes que sean necesarios realizar para mantener permanentemente actualizados los índices que den el cómputo de "unidades ponderadas".

ARTICULO 9º.- Por las inasistencias de cada día-hombre, incurridas por el personal que preste servicios en la Casa de Moneda, excepto las relativas a vacaciones reglamentarias, se descontará el TRES POR CIENTO (3%) de las primas a la producción que le hubiera correspondido durante el período bimestral. Igual deducción se practicará al agente que durante el bimestre incurra en cinco (5) faltas de puntualidad o tres (3) salidas por asuntos propios antes de finalizar la jornada de labor.

ARTICULO 10.- La Casa de Moneda confeccionará y remitirá a la Secretaría de Hacienda un balance cuatrimestral, donde se reflejen los resultados obtenidos con la producción incentivada.

ARTICULO 11.- La Secretaría de Hacienda dictará las nor-

mas a que deberá ajustarse el personal para hacerse acreedor a los beneficios que establece el presente régimen, como así también los recaudos de calidad y cantidad en la producción; deducciones por trabajos inutilizados y responsabilidad de los agentes en el ejercicio de sus funciones.

ARTICULO 12.- La liquidación y pago de las primas se efectuará dentro de los treinta (30) días a partir del vencimiento del bimestre.-

ACTO: DECRETO Nº 6.544/61.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA - PATRIMONIO DEL ESTADO - MUEBLES Y UTILES - TRANSFERENCIAS - BOLSA DE TRABAJO - DISPONIBILIDAD

Buenos Aires, 2 de agosto de 1961.-

Visto la Ley Nº 15.799, que modifica el régimen de la contribución inmobiliaria a partir del 1º de enero de 1961, y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la citada ley, el impuesto municipal de alumbrado, barrido y limpieza y las tasas por servicios sanitarios serán liquidados y percibidos directamente por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación;

Que el cobro del impuesto territorial ha sido suspendido por el término de dos años, a cuyo vencimiento su percepción pasará a jurisdicción municipal;

Que el artículo 7º de la Ley Nº 15.799 autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la transferencia de funciones, créditos presupuestarios, etc., y a convenir con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la trans-

//-

ferencia de personal, oficinas técnicas, muebles y útiles y demás elementos indispensables;

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la Ley Nº 15.796 (º), el Poder Ejecutivo Nacional, por Decreto Nº 3.660/61 (") ha conferido competencia a la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación para que proceda a la venta de los bienes inmuebles del dominio del Estado Nacional que no sean necesarios para la prestación de servicios públicos;

Que en tales circunstancias las tareas administrativas que demandaban las funciones que el Decreto-Ley Nº 7.688/56 (+) y disposiciones concordantes acordaran a la Dirección General Inmobiliaria, dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda, se verán reducidas, ya que estas últimas han sido atribuidas a otros órganos de la Administración Pública Nacional y Municipal;

Que en mérito a los hechos expuestos, y a los efectos del cumplimiento de lo prescripto por el artículo 7º de la Ley Nº 15.799, corresponde encomendar a la Secretaría de Estado de Hacienda la adopción y ejecución de las medidas pertinentes;

Por ello;

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- A los fines señalados en el artículo 7º de la Ley Nº 15.799, autorízase a la Secretaría de Hacienda para adoptar todas las medidas conducentes al cumplimiento de la citada disposición legal.

(º) Ver Digesto Administrativo Nº 1324.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1395.-
(+) Ver Digesto Administrativo Nº 52.-

ARTICULO 2º.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior la Secretaría de Estado de Hacienda queda facultada para convenir con los demás organismos de la Administración Pública Nacional (Administración Central, organismos descentralizados y empresas del Estado) y con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la transferencia de los servicios a cargo de la Dirección General Inmobiliaria, como así también la de personal, muebles, útiles y demás elementos afectados a dicha Dirección.

ARTICULO 3º.- El personal que resulte disponible por no haber sido afectado a ninguna de las transferencias a que se refiere el artículo 2º o bien que quede sobrante después de racionalizados los servicios de la Dirección General Inmobiliaria al solo efecto del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley Nº 15.799, será puesto a disposición del servicio creado por el Decreto Nº 9.718/59 (=) y podrá ser transferido a otros organismos del Estado, siempre que:

1º) El organismo que requiera el concurso del o de los agentes, tenga vacantes disponibles;

2º) Que además tenga acordada autorización para cubrirlas.

Transcurridos cuarenta y cinco (45) días desde la fecha de su transferencia al servicio del Decreto Nº 9.718/59, el personal que no hubiera sido nombrado en otros organismos quedará automáticamente en disponibilidad a los efectos de la aplicación del artículo 36 de la Ley número 15.796.

ARTICULO 4º.- Dentro del plazo de treinta (30) días contados desde la fecha del presente decreto, la Secretaría

(=) Ver Digesto Administrativo Nº 854.-

de Estado de Hacienda deberá dar término a las tareas que se le encomienda por el artículo 2°.

ARTICULO 5°.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía e Interior y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Justo P. Villar - Jorge Wehbe

Dpto. DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION Dpto. de Secretaría

ACTO: DECRETO Nº 6.311/61.-

MATERIAS: PLAN DE RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - C.E. P.R.A. - PERSONAL - PROHIBICIONES - ECONOMIAS VACANTES - BOLSA DE TRABAJO

Buenos Aires, 27 de julio de 1961.-

Visto lo dispuesto en el decreto Nº 5.006/61 (*), y

CONSIDERANDO:

Que el análisis de la aplicación del decreto número 5.006/61 sugiere ya la conveniencia de aclarar su concepto esencial afirmando al mismo tiempo el sentido rotundo de contención de gastos en personal que dicho decreto consagrara;

Que debe entenderse que las dotaciones de ministerios y secretarías, organismos de seguridad y clero que se encuentran fijadas en reglamentos orgánicos obliga a cubrir los cuadros en la forma prevista en los mismos, pues de lo contrario los servicios respectivos se verían afectados;

Que ello, naturalmente, no exime a las propuestas de designación a efectuarse por decreto del Poder Ejecutivo, del trámite previsto en el decreto Nº 5.006/61;

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1406.-

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Declárase que las normas del decreto número 5.006/61 no comprenden a las designaciones que ministerios, secretarías y organismos de defensa, seguridad y clero deban realizar para cubrir sus cuadros con relación al personal específicamente afectado a los servicios respectivos.

ARTICULO 2°.- Las disposiciones del decreto Nº 5.006/61, no derogan lo dispuesto por los decretos Nros. 2.781(1), 3.152 (") y 6.930 (°) del año 1960.

ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI - Roberto T.Alemann
Jorge Wehbe

---

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1139.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1145.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1194.-

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION Ministerio de Hacienda

ACTO: DECRETO Nº 6.808/61.-

MATERIAS: REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS - OBRAS PUBLICAS

Buenos Aires, 8 de agosto de 1961.-

Visto el estudio realizado por la Secretaría de Estado de Obras Públicas, sobre la conveniencia de modificar el reglamento que rige el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, aprobado por decreto número 11.376/58 y posteriormente modificado por los decretos Nros. 2.996/60 (') y 6.140/60 ("); y

CONSIDERANDO:

Que a los fines de facilitar la concreción de las reuniones que realiza el Consejo del mismo, se hace necesario aumentar en uno más el número de miembros integrantes de éste en representación del Estado;

Que el artículo 24 del citado reglamento admite la presentación de ofertas a los proponentes que no hubieran efectuado el pedido de inscripción, no obstante que por el artículo 22 se establece que no serán admitidas

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1142.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1185.-

propuestas de oferentes, cuya capacidad de contratación anual sea inferior a la cifra que resulta de dividir el presupuesto oficial de la obra que se licita por el plazo de ejecución expresado en años;

Que para ser posible esta selección es imprescindible la inscripción previa en el Registro, sin cuyo requisito no es posible establecer la capacidad de contratación anual;

Que, además, existen empresas dedicadas a trabajos especiales que cabe exceptuarlas de la exigencia establecida en el artículo 26 de contar con los servicios permanentes de un profesional técnico universitario;

Que por otra parte el tope de $ 1.500.000.- m/n. establecido en el artículo 27, para obras o trabajos, como requisito de no obligatoriedad para inscribirse en el Registro, se considera bajo y superado por los aumentos de costos que han experimentado las obras en el último año, por lo que se considera conveniente incrementarlo para facilitar la concurrencia de empresas que se dedican a las pequeñas obras públicas, en especial los de conservación y reparos;

Por ello y atento lo solicitado por el Secretario de Estado de Obras Públicas y a lo propuesto por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Públicos;

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Apruébase el Reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas corriente a fs. 7/19 que forman parte integrante del presente decreto.

ARTICULO 2°.- Deróganse los decretos Nros. 11.376/58, 2.998/60 y 6.140/60.

ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el

señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Públicos y firmado por el señor Secretario de - Estado de Obras Públicas.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaría de Estado de Obras Públicas a sus efectos.-

FRONDIZI - Arturo Acevedo
Manuel H. Acuña

REGLAMENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS

TITULO I

Del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas

ARTICULO 1º.- Estarán sujetas a inscripción en el Registro, las personas físicas o jurídicas que deseen desarrollar cualesquiera de las actividades mencionadas en el artículo 1º de la Ley Nº 13.064 y que quieran contratar obras o trabajos con la Administración Nacional.

La Administración Nacional deberá contratar las obras o trabajos que ejecute, únicamente con los inscriptos, con las excepciones que establecen los artículos 16 y 27.

ARTICULO 2º.- El Registro, cuando proceda, inscribirá a las personas físicas o jurídicas, que así lo soliciten, - con la calificación y capacitación que se les asigne. Al efecto el Registro contará con 2 secciones: a) sección Obras de Ingeniería y b) sección Obras de Arquitectura.

ARTICULO 3º.- El Registro ajustará su funcionamiento a las determinaciones del Consejo del Registro Nacional de Cons

tructores de Obras Públicas, que se crea por el presente decreto, el que dependerá directamente de la Secretaría de Estado de Obras Públicas.

TITULO II
Del Consejo del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas

A) Composición:

ARTICULO 4º.- El Consejo estará integrado por ocho (8) miembros: El Subsecretario de Estado de Obras Públicas y cinco (5) miembros que serán designados entre funcionarios de los organismos de la Administración Nacional que realizan obras públicas. Los dos (2) miembros restantes representarán a las entidades inscriptas en el Registro y serán elegidos por las mismas, por cuatro (4) años, siendo renovables por mitades cada dos (2) años.

El Consejo será presidido por el Subsecretario de Estado de Obras Públicas, quien ejercerá la representación del mismo. El Consejo elegirá de entre sus miembros un vicepresidente que reemplazará al presidente en caso de ausencia o impedimento.

Actuará como asesor letrado el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Estado de Obras Públicas, o su representante legal, quien concurrirá al seno del Consejo cada vez que éste lo conceptúe necesario, a cuyo fin será invitado con la debida antelación o producirá dictamen por escrito en los casos que así se lo requiera.

B) Funcionamiento:

ARTICULO 5º.- El Consejo actuará con quórum de cuatro miembros y podrá resolver por simple mayoría. En caso de empate, el Presidente del Consejo tendrá doble voto.

ARTICULO 6º.- El Consejo realizará, por lo menos, una se

sión ordinaria mensual y todas aquellas que a su juicio, cuando asuntos a su consideración y resolución así lo requieran.

Asimismo, se podrán realizar reuniones de carácter extraordinario, cuando la índole y urgencia de los asuntos a considerar, exijan adoptar tal determinación.

ARTICULO 7º.- Las reuniones extraordinarias podrán ser solicitadas por cualquiera de los miembros del Consejo al presidente, fundamentando la petición.

ARTICULO 8º.- Las tareas técnico administrativas que requiere el funcionamiento del Registro, estarán a cargo de una dependencia que organizará el Consejo y dependerá del mismo.

ARTICULO 9º.- Los procedimientos serán escritos o verbales, según lo determine el Consejo, quien deberá ordenar su instrucción en forma que se respete el derecho de las partes a ser oídas y a producir pruebas dentro de los términos que señale el Consejo, antes de formalizar su decisión. Los procedimientos podrán ser impulsados a pedido de parte o de oficio.

Cuando se utilice el procedimiento verbal, se dejará constancia de lo actuado en un acta levantada al efecto.

C) Atribuciones y deberes:

ARTICULO 10.- Son atribuciones y deberes del Consejo:

a) Disponer la inscripción en el Registro de las empresas que lo soliciten, cuando así proceda, con la calificación y capacitación que respectivamente les asigne, y la formación del legajo correspondiente con todos los antecedentes;
b) Entender en la actualización de los antecedentes de las empresas inscriptas, en orden a su desarrollo y actuación en obras y tomar razón de la naturaleza y monto de las obras contratadas por cada empresa;
c) Recabar de las dependencias de la Administración Pú -

blica, de las instituciones de crédito estatales y privadas, de las entidades profesionales de los interesados y de cualquier otra persona real o ideal, las informaciones que considere necesarias para formar juicio sobre las empresas inscriptas, o que hayan solicitado inscripción. Al efecto todas las reparticiones de la Administración Nacional quedan obligadas a suministrar toda información que sobre el particular les sea requerida por el Consejo;

d) Calificar el comportamiento de los inscriptos, en las obras por ellos contratadas, sean éstas públicas o privadas, teniendo en cuenta las informaciones a que se refiere el inciso c) y sin perjuicio del examen directo que considere oportuno efectuar;

e) Notificar de oficio a las reparticiones de la Administración Nacional acerca de las sanciones que se apliquen a los inscriptos;

f) Informar acerca de las constancias del registro a las reparticiones públicas nacionales, provinciales o municipales que lo soliciten, y comunicarles las modificaciones que se produzcan;

g) Aplicar por sí, o proponer, las sanciones que a su juicio y con arreglo a lo establecido en el artículo 11, deben ser impuestas a los inscriptos;

h) Notificar a los inscriptos sobre los decretos, resoluciones y disposiciones referentes a dichas sanciones;

i) Resolver en las reclamaciones que sobre sus resoluciones efectúan los inscriptos, o las entidades con personería para representarlos;

j) Entender en los pedidos de rehabilitación que los sancionados formulen;

k) Convocar a los inscriptos en el Registro para elección de sus representantes;

l) Dictar su propio reglamento interno para su funcionamiento;

m) Proponer al Poder Ejecutivo por intermédio de la Secre

taría de Obras Públicas las modificaciones del presente reglamento, cuando lo estime conveniente.

Sin perjuicio de las notificaciones personales o por nota que se efectúen a los interesados, las inscripciones y sus modificaciones, como así también las sanciones que se apliquen a los inscriptos, se publicarán en el Boletín Oficial.

ARTICULO 11.- El Consejo podrá aplicar las siguientes sanciones en caso de incumplimiento por las empresas de las obligaciones que impone el presente reglamento, o de las de carácter contractual que la autoridad competente para resolver sobre ellas lleve a su conocimiento:

a) Aplicar apercibimiento;
b) Suspender del registro hasta por un año;
c) Proponer al Secretario de Obras Públicas la suspensión por otras causales que las indicadas en el inciso anterior hasta un plazo de dos años;
d) Proponer al Poder Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Obras Públicas la suspensión por un plazo mayor al fijado en el inciso anterior, hasta un término máximo de cinco años.

En todos los casos el imputado deberá ser previamente oído.

Las firmas suspendidas por un término no mayor de dos años quedarán automáticamente rehabilitadas para contratar con el Estado, con todos los derechos que la inscripción les da, una vez cumplido el término de la sanción; y el Consejo de oficio o a pedido del interesado, ordenará la publicación pertinente en el Boletín Oficial. Las que fueren suspendidas por un término mayor de dos años, deberán solicitar su rehabilitación, dando cumplimiento a las condiciones y requisitos señalados para la inscripción. La resolución respectiva será dictada por el Poder Ejecutivo previo dictamen del Consejo.

TITULO III

De las Gestiones de Inscripción

ARTICULO 12.- Las solicitudes de inscripción deberán presentarse en los formularios que oportunamente apruebe el Consejo. Los datos que los interesados consignen en la solicitud revestirán el carácter de declaración jurada y secreta y no podrán ser utilizados para otros fines que los previstos en este reglamento.

ARTICULO 13.- Sólo serán inscriptos en el Registro, las empresas legalmente capacitadas para contratar y que a juicio del Consejo acrediten condiciones técnicas y solvencia económica y moral suficientes para desempeñarse como contratistas del Estado. Contra las resoluciones denegatorias se podrá recurrir ante el Poder Ejecutivo por intermedio de la Secretaría de Obras Públicas.

ARTICULO 14.- Las empresas podrán ser inscriptas en una o en ambas secciones del Registro según lo soliciten, pero lo serán separadamente en cada una de ellas de acuerdo con los antecedentes que ofrezcan.

ARTICULO 15.- El Consejo podrá requerir de las empresas que soliciten su inscripción o la ampliación o la modificación de su calificación y capacitación, todos los datos que estime necesario a tales fines. La negativa infundada a este requerimiento motivará la suspensión del trámite respectivo, y eventualmente el archivo de las actuaciones. Las solicitudes de modificación de la calificación y capacitación sólo podrán presentarse una vez por año.

ARTICULO 16.- El trámite de inscripción así como los pedidos de ampliación o modificación de la calificación y capacitación, serán substanciados en un lapso máximo de noventa (90) días laborables contados desde la fecha de presentación de la solicitud respectiva y deducidas las demoras atribuibles al peticionante. Transcurrido ese plazo sin que el Consejo se haya expedido, las Empresas estarán

automáticamente facultadas para presentarse a licitaciones o concursos de precios e incluso podrán resultar adjudicatarias, a solo juicio de autoridad competente, si hasta el momento de pronunciarse, el Consejo no hubiera fijado la capacidad y calificación pertinente.

ARTICULO 17.- Denegada a una empresa la inscripción o la ampliación o la modificación de su calificación y capacitación, ella no podrá repetir la instancia hasta transcurrido el lapso mínimo de un año desde la resolución denegatoria del Consejo.

ARTICULO 18.- Concedida la inscripción se otorgará a cada empresa la correspondiente credencial con el número de orden en el Registro, indicación de la sección o secciones en que se haya inscripto y la capacidad de ejecución anual asignada por el Consejo.

Asimismo y en la misma credencial se dejará constancia del monto de obra anual comprometida en la forma que se indica en el artículo 21.

TITULO IV

De la Calificación y Capacitación

ARTICULO 19.- Las empresas constructoras serán calificadas y capacitadas según el sistema que establece el presente reglamento, a los fines de fijar la aptitud y capacidad de las empresas dentro de la sección o secciones en que haya acreditado su inscripción.

ARTICULO 20.- Denomínase capacidad de ejecución anual de una empresa al monto anual máximo de obra que se estima puede construir normalmente. Este valor, expresado en pesos moneda nacional se determinará en forma distinta para las aspirantes en actividad como constructoras y para las nuevas empresas que se constituyen. Para las primeras se establecerá como sigue:

a) Se asignará a cada empresa una capacidad básica equi-

valente al monto anual de obras ejecutadas, públicas y privadas que se le hayan certificado por cualquier concepto en los doce meses corridos de mayor producción tomados dentro de los cinco años de actuación anteriores a la fecha en que el Registro determine su capacidad;

b) La capacidad básica así determinada deberá afectarse por un factor que contemple la fluctuación de los precios, factor que será determinado periódicamente por el Consejo;

c) La capacidad resultante en b) deberá afectarse a su vez por un factor que determinará el Consejo que no excederá de 10 y que tendrá en cuenta lo siguiente:

1) El estado económico de cada empresa a la fecha de la determinación de la capacidad, para lo cual la empresa deberá presentar el último balance general en regla y los correspondientes a los tres ejercicios anteriores a aquél, certificados por contador público nacional, así como la declaración sobre equipos y toda otra información que pueda ilustrar sobre su crédito.

En lo sucesivo las empresas quedan obligadas a presentar anualmente su balance general y las modificaciones que se produzcan en su plantel y equipo;

2) El cumplimiento de las obligaciones por cada empresa;

3) La antigüedad de cada empresa en el país;

4) Las posibilidades de crecimiento o decrecimiento general de la capacidad básica de cada empresa indicada en a).

ARTICULO 21.- Denomínase monto anual de obra comprometida a la cifra en pesos moneda nacional que resulte de la suma de los cocientes entre la obra que falta ejecutar de cada contrato en curso y el saldo del plazo de ejecución expresado en años. Esta cifra admitirá corrección -

en los casos que se concedan prórrogas por la Administración.

ARTICULO 22.- Denomínase capacidad de contratación anual de cada empresa, a la que resulta de la diferencia entre la capacidad de ejecución anual y el monto anual de obra comprometida.

No serán admitidas en las licitaciones las ofertas de proponentes cuya capacidad de contratación anual sea inferior a la cifra que resulta de dividir el presupuesto oficial de la obra que se licita por el plazo de ejecución expresado en años. En casos de empresas que se presenten transitoriamente unidas para contratar determinada obra, se sumará la capacidad de contratación anual del consorcio.

ARTICULO 23.- Para empresas nuevas o para aquellas que no hayan hecho obras en los cinco años anteriores a su inscripción, o bien que por reestructuración técnica y financiera se consideren en condiciones de alcanzar una capacidad de contratación anual superior a lo que resulta de la aplicación del artículo anterior, se determinará dicha capacidad en la forma siguiente:

a) Se comprobará la existencia real de equipos, maquinarias, enseres y útiles, depósitos y locales adecuados al tipo de obra de la especialidad de la empresa;
b) Se certificará el plantel de directores, técnicos y operarios permanentes de la empresa;
c) Se solicitará de la empresa la presentación de sus actos constitutivos, balances, disponibilidad de fondos en caja y Bancos;
d) Igualmente se establecerá por declaraciones juradas y cualquier medio de información las deudas contraídas, con y sin garantía real o personal;
e) Se establecerá el crédito bancario de la empresa, mediante averiguaciones ante las instituciones de crédito oficiales o privadas.

Con esos elementos de juicio el Consejo establecerá un monto teórico de obra realizable y certificable en un año, que constituirá su capacidad de contratación anual.

El Consejo determinará el valor que debe asignarse a los factores aludidos en forma de que guarden homogeneidad con los que resulten de la aplicación del artículo 20.

Se aplicarán a estas empresas las disposiciones contenidas en el artículo 22, segundo apartado.

ARTICULO 24.- A los efectos previstos en los artículos anteriores, las empresas inscriptas en el Registro deberán comunicar al Consejo toda contratación de obra pública, nacional, provincial o municipal, así como todo otro compromiso de obra, que contraigan con entidades privadas o con particulares, dentro de los diez (10) días de contraído el compromiso de que se trata. Asimismo una vez por año deberán comunicar las certificaciones de obra y toda obligación o circunstancia que de alguna manera influya en su capacidad de contratación y cualquier modificación que se produzca en orden a las declaraciones formuladas al Registro con anterioridad. Las omisiones serán sancionadas con las penalidades que establece el artículo 11, con la graduación que el Consejo estime justa.

TITULO V

De la Dirección Técnica

ARTICULO 25.- Las empresas que soliciten su inscripción en el Registro deberán probar que cuentan con los servicios permanentes de por lo menos un profesional técnico universitario en el ramo de su especialidad legalmente habilitado para el ejercicio de su profesión. Las empresas comunicarán dentro del término de treinta (30) días de producido el hecho, el cese de los servicios del profesional aludido y el nombre del que lo reemplace.

TITULO VI
De las Excepciones

ARTICULO 26.- El Consejo podrá disponer por excepción la inscripción en el Registro con carácter condicional, de empresas que lo soliciten y no cuenten con los servicios permanentes de un profesional técnico universitario, como establece el artículo 25, cuando se trate de empresas que se dediquen a especialidades que no lo requieran a juicio del Consejo, y que tengan antigüedad y experiencia en los trabajos de la especialidad.

La inscripción se hará condicionada a ejecutar solamente esta clase de trabajos.

ARTICULO 27.- Excepcionalmente el Consejo podrá autorizar la concurrencia a las licitaciones, de empresas no inscriptas pero con antecedentes verificables en el país, o en el extranjero, que las hagan acreedoras a ser consideradas con capacidad técnica y financiera suficiente, por una obra cada vez.

Para concurrir a licitaciones de obras o trabajos de hasta cuatro millones de pesos moneda nacional de curso legal ($ 4.000.000 %.) no es obligatoria la inscripción en el Registro.

Este importe podrá ser reajustado por el Consejo, toda vez que las variaciones de costos determinadas oficialmente, a criterio de este organismo, así lo exijan.-

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	N°. 1433.-



ACTO: DECRETO N° 6.927/61.-

MATERIAS: CONTRATACIONES (Art. 61, inc. 51°, 53° y 54°)

MAYORES PRECIOS - OBRAS PUBLICAS

Buenos Aires, 10 de agosto de 1961.-

Visto lo dispuesto por la Ley N° 15.285, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de las facultades concedidas por Decreto N° 14.304/60 la Secretaría de Estado de Obras Públicas requirió la colaboración de los Ministerios y Secretarías de Estado y organismos descentralizados que tuvieran a su cargo la ejecución de obras públicas, a fin de preparar la reglamentación adecuada de las normas de la Ley N° 15.285;

Que como resultado de los estudios practicados, la Secretaría de Estado de Obras Públicas propone la adopción de preceptos de carácter general que fijen debidamente el alcance de las disposiciones legales, considerando la aplicación de distintos sistemas de liquidación, dada la flexibilidad con que se requiere encarar el problema por la diversidad de situaciones existentes en las contrataciones que ellos efectúan;

Por ello, y de acuerdo a lo solicitado por el señor Secretario de Estado de Obras Públicas y a lo propuesto por el señor Ministro Secretario en el Departamento de

//-

Obras y Servicios Públicos en orden a la competencia que específicamente les atribuye la Ley N° 14.439 (¹);

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Los reconocimientos de variaciones de costos o valores contemplados en el presente decreto, se aplicarán a todas las obras comprendidas en el artículo 1° de la ley N° 15.285. Salvo lo previsto en el artículo 5° de este decreto, los reconocimientos que se reglamentan a continuación son de aplicación a los montos de obra realizada a partir del 1° de enero de 1959 y en relación con los valores del tercer cuatrimestre del año 1957 o el de la fecha de la licitación de la obra si ésta fuese posterior.

ARTICULO 2°.- Amortización de equipos:

Para el reconocimiento de la variación de valores correspondiente a amortización de los equipos, se seguirá, según el caso, uno de los siguientes procedimientos:

a) Cuando las variaciones de costos sean liquidadas sobre la base de análisis de precios elaborados por la entidad comitente y en esos análisis figure el rubro "reparaciones y repuestos", el monto a reconocer para la amortización de los equipos será el importe que resulte de multiplicar los montos de variaciones certificadas en concepto de "reparaciones y repuestos", por el coeficiente 1.33, equivalente a considerar que el importe de las reparaciones y repuestos es del 75% del valor de amortización de los equipos.

b) Cuando las variaciones de costos sean liquidadas sobre la base de análisis de precios elaborados por el contratista y en esos análisis de precios figure el rubro "amortización de equipos", se re-

(¹) Ver Digesto Administrativo N° 505.-

conocerá como amortización el importe que resulte de aplicar el monto de los certificados de variaciones de costos, el tanto por ciento establecido por el contratista para ese rubro.

c) En los casos del inciso anterior, cuando en los análisis de precios estuviese incluida la amortización de equipos dentro de los rubros de gastos indirectos o generales, se considerará que con el reconocimiento de éstos últimos, según se determina en los artículos 3° y 4° de este decreto, quedan de hecho reconocidas las amortizaciones correspondientes.

d) En todos los demás casos se procederá a estimar el valor de la amortización de los equipos, tomando como base el valor de éstos en el tercer cuatrimestre del año 1957 o en el cuatrimestre de la licitación si esta fué posterior a aquél, en forma porcentual con respecto al valor del contrato a la misma fecha, porcentaje éste que se aplicará al monto de los certificados de variaciones de de costos posteriores al 1° de enero de 1959.

ARTICULO 3°.- Gastos Indirectos: En las obras en que se hubiere pactado para el valor de los "gastos indirectos" un porcentaje determinado, este porcentaje se aplicará al monto de los certificados de variaciones de costos incrementados por el importe correspondiente a la amortización de los equipos, determinado según lo especificado en el artículo precedente.

ARTICULO 4°.- Gastos Generales: A la suma de los importes de las variaciones de costos directos, de amortización de equipos y/o gastos indirectos liquidados por obra realizada a partir del 1° de enero de 1959, se adicionará el porcentaje fijado por el artículo 2° de la Ley N°

15.285 para compensar la variación correlativa de los gastos generales de la empresa, salvo los casos en que las liquidaciones de variaciones de costos fuesen practicadas sobre la base de los análisis de precio del contratista, en cuyo caso se aplicarán los porcentanjes previstos por éste, si ellos fueran menores que los fijados en la citada ley.

ARTICULO 5°.- Liquidación de Gastos Improductivos: A los efectos de la liquidación de los Gastos Improductivos previstos por el artículo 31° del Decreto N° 11.511/47, se actualizan los valores establecidos en la tabla y el monto máximo de aplicación que figuran en dicho artículo, a los efectos de tener en cuenta la relación de los valores entre agosto del año 1947 y el 1° de enero de 1959, fecha a partir de la cual se aplicarán los nuevos reconocimientos quedando por lo tanto la tabla inserta en el artículo mencionado, modificada en la siguiente forma:

Tipos de obra	Monto de Obra: Hasta $3.600.000	De $3.600.000 A $9.000.000	De $9.000.000 A $18.000.000	Más de $18.000.000
Construcción edificios	5	4	3	2
Obras de artes y puentes	5	4	3	2
Canales y desagües	6	5	4	3
Obras en túnel	7	6	5	4
Obras básicas (incluido puentes)	8	7	6	5
Obras básicas y pavimentos	9	8	7	6
Pavimentos	10	9	7	6

La tabla precedente se aplicará en forma acumulativa para los distintos montos de contrato indicados en el cuadro y hasta un máximo de $ 27.000.000.00.- El excedente sobre este monto no será computado a los efectos del cálculo de este reconocimiento.

Para las obras no incluidas especificamente en el precedente cuadro, las respectivas comisiones liquidadoras determinarán por analogía, los porcentajes a aplicar.

Cuando las paralizaciones tuvieran un origen especial, este procedimiento se aplicará sin perjuicio de los mayores resarcimientos que pudieran corresponder a los contratistas por aplicación de otras normas legales o contractuales en cuyo caso las sumas liquidadas conforme a este artículo se deducirán de la que en definitiva se reconozcan por aplicación de dichas normas.

ARTICULO 6º.- De las liquidaciones que se efectúen en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores, deberán deducirse todas aquellas sumas que por iguales conceptos pudieran haber sido ya abonadas en liquidaciones practicadas con anterioridad.

ARTICULO 7º.- Los casos especiales no contemplados en los artículos anteriores serán resueltos por aplicación analógica de los mismos con sujeción al criterio que inspira el presente decreto.

ARTICULO 8º.- Las discrepancias que se susciten entre las partes en la aplicación del régimen de la ley nº 15.285 y sus decretos reglamentarios, serán resueltas de acuerdo con los procedimientos fijados por los artículos 8º y 32º del decreto nº 11.511/47, por el decreto nº 14.211/49 y por el artículo 3º del decreto nº 1.098/56.

ARTICULO 9º.- Las presentes normas serán también de aplicación obligatoria para las obras que se liciten con posterioridad a la fecha de este decreto, aun cuando las bases de licitación y contratos respectivos no previeran los reconocimientos de mayores costos que la ley 15.285 y sus decre-

tos reglamentarios contemplan.

ARTICULO 10°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Públicos y firmado por el señor Secretario de Estado de Obras Públicas.

ARTICULO 11°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaría de Estado de Obras Públicas a sus efectos.-

FRONDIZI - Arturo Acevedo - Manuel H. Acuña.-

ACTO: Fallo del 12 de mayo de 1961.-

MATERIAS: ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Arts. 6º, inc. a) y b), 37º, inc. h), 38º, inc. b) - ESTABILIDAD - SUMARIOS - CESANTIAS

BARRAZA, Luis y SYLVESTER, Juan C. s/ Decreto 6666/57 (*).

CONSIDERANDO:

Que de las presentes actuaciones resulta haberse despachado en la Estación Rosario de Lerma (Salta) treinta fardos documentados por boleto de exportación Nº 68 como cueros secos de vizcacha destinados a Estados Unidos de Norteamérica, en tránsito por Antofagasta (Chile). Al pasar por el resguardo de Socompa, fué contraverificado el cargamento resultando que los fardos en cuestión contenían lana de oveja Lincoln, en lugar de la mercadería declarada.

Que con este motivo se instruyó el correspondiente sumario en el que se comprobó, por confesión de los propios interesados, que el señor Juan Carlos Sylvester actuó como vista en el despacho y el señor Luis Angel Barraza como guarda en el control de los efectos documentados. //-

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

Que de resultas de tales hechos y de lo actuado, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 13.640 de fecha 28 de octubre de 1959, por el cual se exoneró al primero de los nombrados y se dejó cesante al segundo, de los cargos que desempeñaban en la Dirección Nacional de Aduanas. Como fundamento legal se citaron las disposiciones del inc. b) del art. 38 del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, el inciso h) del 37 y los incisos a) y b) del 6 del mismo cuerpo legal (Decreto ley 6666/57).

Que el señor Barraza, solicitó, en nota dirigida al señor Ministro, revocatoria de este decreto "conforme arts. 24 y 25 del decreto 6666/57 (Estatuto)" y no presentó memorial ante la Cámara, no obstante estar debidamente notificado en el domicilio que constituyera. El señor Sylvester, en cambio, pidió también revocatoria pero interpuso en subsidio el recurso contencioso ante el Tribunal, a cuyos estrados compareció presentando la correspondiente memoria.

Que la circunstancia apuntada en el considerando anterior torna necesario precisar la situación procesal del primero de los nombrados. A este respecto, el Tribunal considera que la cita de los arts. 24 y 25 del Estatuto y la redacción del escrito en que pidiera reconsideración -en el cual se señalan debidamente los defectos que, a juicio de su presentante, vician de nulidad el procedimiento sumarial- son suficientes como para poder tener por deducido el recurso contencioso.

Que, dejando así resuelta la cuestión procesal, corresponde entrar a la solución de fondo.

Que los recurrentes atacan el trámite sumarial porque: a) no se les dió vista de lo actuado ni se les hizo saber que podían asistirse de letrado, privándolos así del derecho a su defensa; b) la Junta de Disciplina no tuvo a la vista ni consideró en forma muy especial -

sus legajos de antecedentes; c) cuando declararon algunos de los testigos no se les tomó juramento; d) no se dejó constancia del número de fs. de cada declaración, "como lo prescribe el art. 41, V de la Reglamentación"; e) no existió perjuicio fiscal; f) no se cumplió "con la prescripción de elevar a la Junta de Disciplina el sumario dentro de los 10 días (art. 41, XIII)"; g) la sanción no es proporcionada a la falta que se cometió.

Que, ante todo, conviene recordar lo dicho por esta Cámara en otras oportunidades al declarar que las nulidades del procedimiento sumarial no se deben decretar para satisfacer un mero interés teórico, sino cuando los actos atacados hayan redundado en un perjuicio positivo para el derecho de quien las pide ("Vázquez", sentencia del 15 de marzo del año mil novecientos sesenta). En el presente caso, los hechos que sirven de fundamento a las respectivas sanciones han sido reconocidos expresamente y en ninguna parte se pretende que ellos no hayan ocurrido así.

Que, en cuanto a la vista de lo actuado, a fs. 87 vta. aparece la diligencia de notificación de ella y, a continuación una diligencia en la que manifiestan ratificar las declaraciones oportunamente formuladas ante la instrucción y que, como consideran excesivas las sanciones que se piden, solicitan se tengan en cuenta sus antecedentes personales, conforme a los respectivos legajos...". Como se vé, la oportunidad para ejercer sus defensas les fué proporcionada y si no la ejercieron con mayor amplitud de fundamentos a ellos exclusivamente puede atribuírse la responsabilidad. Además, aquí, en los estrados judiciales han podido hacerlo sin cortapisas y uno de ellos lo hizo. El no haberles comunicado que podían hacerse asistir por un abogado, es asunto que sin duda carece de entidad para comprometer la validez de las actuaciones. La regla es la posibilidad de esa asistencia y, por ende, la excepción -

debe ser expresa. Distinto sería el problema si hubiesen tratado de intervenir así asistidos y se les hubiera negado el derecho para hacerlo. Por otra parte, se explica que a un analfabeto o persona de muy baja cultura haya necesidad de indicarle la existencia de tal derecho a su favor, pero no se concibe que la misma necesidad exista respecto de funcionarios de la jerarquía de los causantes de estos obrados. No se ignora que la reglamentación del Estatuto así lo disponga, pero lo que se afirma es que esa omisión no tiene la suficiente importancia como para viciar de nulidad el procedimiento.

Que la Junta de Disciplina informa a fs. 126 haber compulsado los legajos personales de los recurrentes. Es cierto que tal manifestación la efectuó a requerimiento del Departamento de Personal (fs. 124) y después de haber se quejado de ello los interesados y de dictado el decreto de cesantía. Pero lo que importa es que los haya visto y tenido en cuenta y no la oportunidad en que lo manifieste. Por otra parte, ya ha dicho el Tribunal que el mérito de los antecedentes personales es una de las circunstancias que deben considerarse, según el Estatuto, para graduar la sanción, pero nada obsta a que se aplique una pena severa por juzgarse grave la falta, a pesar de los buenos antecedentes del agente y el ponderar esos antecedentes no vicia lo actuado. (Cirasi, Pedro sentencia del 23 de marzo último).

Que, en lo que a los agravios sintetizados bajo las letras c), d) y f), basta su lectura para apreciar la ínfima magnitud de los hechos que los motivan. Lo único que podría revestir cierta significación es el hecho de no haberse tomado juramento de decir verdad a los testigos, pero, como ya se expresara más arriba, los testigos dicen lo mismo que los interesados y éstos no pretenden que aquellos hayan falseado la realidad.

Que aunque no haya existido perjuicio fiscal -y en este caso el hecho de los recurrentes pudo haberlo producido, y de importancia, si no lo hubieran impedido terceras personas- la sanción pudo aplicarse, ya que, como lo dispone el art. 38 inc. b) del Estatuto y tuvo oportunidad - de destacarlo esta Cámara ("Cirasi, Pedro") basta con que ese perjuicio recaiga sobre el prestigio de la administración.

Que el Tribunal ha resuelto, y lo ha reiterado, que - carece de jurisdicción plena en la sustanciación de estos recursos, limitándose su potestad a juzgar la legitimidad del procedimiento y del acto administrativo, razón por la cual, en principio, no puede revisar las cuestiones de hecho ni la apreciación que de ellas haga el órgano de la - administración, salvo casos de manifiesta arbitrariedad - capaz de tornar ilegítimo el comportamiento administrativo (Prol, sentencia del 22 de abril de 1960; Tripicchio , del 6 de junio de 1960 (*), Greco, del 14 de marzo último, etc.). En aplicación de esa doctrina, pues, cabe manifestar que la desproporción que se atribuyen a las penas con respecto a las faltas imputadas, no resulta un proceder - manifiestamente arbitrario y, por ello, aun que se pensara en un rigor excesivo al respecto, no se lo podría atemuar.

Que el señor Sylvester hace mérito de haberle impedido una fiscalización más prolija de los bultos la circunstancia de hallarse afectado de lumbago; dice también haber actuado de buena fe y que lo ocurrido se debió a su inexperiencia, ya que era un vista improvisado pues revistaba en un cargo sin denominación. Todas estas argumentaciones se dirigen a la equidad, a la que no puede echar mano el Tribunal por lo mismo que se dijo en el considerando anterior, si no se configura un caso de manifiesta arbitrariedad, en cuyo supuesto ya no se trataría de la equidad sino de la legitimidad.

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1350.-

Que en cuanto a la prueba sugerida a los efectos de que se decrete como medida para mejor proveer, el Tribunal no estima necesario hacerlo, ya que tienden a demostrar los antecedentes personales del recurrente, aspecto sobre el cual no cabe pronunciamiento por las razones - que se adujera más arriba.

Que el señor Sylvester termina su memorial formulando una grave imputación a las actas de la Junta de Calificaciones, al sostener que las firmas en ellas estampadas no serían auténticas. Funda su cargo en que le parece indudable que la caligrafía de las que suscriben aquellos (la de fs. 98 y la de fs. 126) no coinciden. Dado - que los actos impugnados constituyen instrumentos públicos ya que documentan actuaciones practicadas por funcionarios, resulta por demás endeble el fundamento en que apoya la imputación. El Tribunal, a simple vista -es decir, usando el mismo procedimiento empleado por el recurrente- no advierte la existencia de la anormalidad denunciada, de ahí que no estime proceder la pericia de cotejo pedida, teniendo en cuenta que en los procedimientos ordinarios para atacar la veracidad de instrumentos de tal naturaleza es menester deducir la querella de falsedad.

En virtud de las consideraciones que se dejan expuestas, se desestiman los recursos deducidos en estos obrados.

Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones.-

JUAN CARLOS BECCAR VARELA - HORACIO H. HEREDIA - ADOLFO R. GABRIELLI.-

ACTO: RESOLUCION DEL T.C.N. Nº 1.794/61.-

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - SUMARIOS - PERJUICIO FISCAL

Buenos Aires, 31 de julio de 1961.-

Visto lo dispuesto por los artículos 118 y correlativos del capítulo XIII de la Ley de Contabilidad y,

CONSIDERANDO:

Que en virtud de la correlación de los artículos - 118 y 119 de la Ley mencionada toda vez que se denuncia o se tiene conocimiento de un hecho o un acto que puede dar lugar a un perjuicio fiscal se instruye el pertinente sumario, como etapa inicial del juicio de responsabilidad.

Que los sumarios tienen por objeto comprobar la - existencia de irregularidades, lo que no supone necesariamente la existencia de responsabilidades imputables.

Que los mismos, salvo cuando los sustancia directamente el Tribunal de Cuentas, son actos internos promovidos por los organismos responsables en resguardo del patrimonio y de la correcta conducta de los agentes - del Estado sometidos a su jurisdicción.

Que, por lo tanto, nada obsta para que se admitan

//-

sus conclusiones en determinados casos, siempre y cuando se hayan observado las formas procesales del sumario, se haya respetado el derecho de defensa del imputado y la naturaleza de la irregularidad y el monto del daño así lo justifique.

Que si bien la Ley de Contabilidad establece la competencia del Tribunal de Cuentas en el juzgamiento de la responsabilidad administrativa de los agentes del Estado, ello no invalida la fijación de procedimientos que, sin enervar sus atribuciones jurisdiccionales, permiten la agilitación de los trámites en beneficio de la economía procesal.

Que, en tal sentido, resulta aconsejable el dictado de normas a que se deben ajustar esos procedimientos, en función de lo dispuesto por la Ley de Contabilidad.

Que para alcanzar el propósito enunciado es menester distinguir la naturaleza de las transgresiones que dan origen a la instrucción de sumarios, así como los montos del presente perjuicio fiscal.

Que el primer aspecto señalado en el considerando anterior es de relevante importancia por cuanto, aunque no hubiera daño material, la irregularidad puede dar lugar a la aplicación de multas y que el segundo debe ponderarse en resguardo de los intereses del Estado, que podrían verse afectados por exceso o por defecto al aplicar formas de control y juzgamiento que no guardan relación con la gravedad de la transgresión o con el cuántum del perjuicio pecuniario.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta la atribución conferida por el artículo 84, inciso o) de la Ley de Contabilidad,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Aprobar las siguientes normas de interpretación y cumplimiento de la Ley de Contabilidad para los ar

tículos que a continuación se indican:

ARTICULO 119.- 1 -Los sumarios que se instruyan en virtud de lo dispuesto en el primer párrafo serán resueltos "ad referendum" del Tribunal de Cuentas, por la autoridad superior del organismo respectivo, siempre y cuando los hechos o actos que lo originen no hagan presumir la existencia de un delito imputable a persona determinada y el monto del perjuicio fiscal no excediera de la suma de diez mil pesos moneda nacional (m$n. 10.000). Si fuera superior a este importe y no sobrepasara el de cincuenta mil pesos moneda nacional se seguirá el mismo procedimiento, pero deberá requerirse la conformidad, previamente al dictado de la resolución del organismo, de la representación del Tribunal de Cuentas.

2 -En ambos supuestos, y por las resoluciones que fueran absolutorias, los organismos respectivos confeccionarán una planilla resumen de los expedientes resueltos durante el mes, que enviarán a la representación de este cuerpo antes del día 20 del mes siguiente, en la que consignarán el número de la actuación, el nombre del presunto imputado, la causa del sumario, el monto del perjuicio y una síntesis de los fundamentos de la absolución. El contador fiscal a cargo de la fiscalización del organismo examinará los expedientes que no hubiere intervenido previamente, pero si el número de éstos fuera superior a diez (10) podrá hacerlo, en lo que excediere por muestra selectiva.

3 -Dicha planilla, con la constancia de las actuaciones que no hubieran sido intervenidas por la representación y con la conformidad de ésta, será elevada al Tribunal de Cuentas a los efectos del curso señalado en el art. 121. En caso de disconformidad con alguna resolución dictada por el organismo fiscalizado, la representación requerirá las respectivas actuaciones y las gira-

rá, con su dictamen, al Tribunal de Cuentas a los mismos fines del mencionado artículo.

ARTICULO 125.- Si en los sumarios a que se refiere el artículo 119, párrafo 1 de las normas de interpretación recayere resolución condenatoria del organismo se notificará del importe del cargo al agente responsable y se le acordará un plazo de quince días para hacerlo efectivo.

De ser cancelado el cargo se dispondrá el archivo, sin más trámite, de las actuaciones y en caso de incumplimiento se elevarán éstas a los fines previstos en el artículo 121.

En todos los casos, las representaciones del Tribunal de Cuentas fiscalizará que el monto de los cargos que se formulan respondan al perjuicio pecuniario ocasionado al fisco.

ARTICULO 126.- Esta disposición es aplicable también para aquellos sumarios que se sustancien de acuerdo con las normas de interpretación de los artículos 119 y 125 de la Ley.

ARTICULO 2º.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a los distintos responsables y, cumplido, archívese.-

ANTONIO M.PEREZ ARANGO - DAMIAN FIGUEROA - JOSE M.FERNANDEZ FARIÑA - WIFREDO DEDEU - LUIS P.PICARDO - CESAR AGUIRRE LECARRETA (Secretario).

ACTO: RESOLUCION DEL T.C.N. Nº 1.877/61.-

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - COMPROMISOS - CONTRATACIONES APROPIACIONES

Buenos Aires, 11 de agosto de 1961.-

Visto lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Contabilidad y,

CONSIDERANDO:

Que dicha disposición consagra el principio de que las apropiaciones deben efectuarse en razón de su compromiso legal y que la computación contable del mismo ha de practicarse en la oportunidad que, mediante un acto de autoridad competente, se de origen a la obligación de pagar determinada suma de dinero;

Que como excepción al régimen general se admite aquellos compromisos legales que den lugar a erogaciones cuyo monto sólo pueda establecerse clausurado que está el ejercicio, en la oportunidad de practicarse las respectivas liquidaciones;

Que la excepción señalada debe interpretarse en forma restrictiva, toda vez que la apropiación de gastos devengados en ejercicios anteriores, a los créditos del año financiero en que se formaliza la liquidación, distorsiona los resultados reflejados en la cuenta general

//-

del ejercicio;

Que al dictarse las normas de interpretación vigentes del mencionado artículo se tuvo en cuenta el principio reseñado, pero se hizo extensivo el procedimiento de excepción a los gastos en personal correspondientes a haberes devengados en ejercicios anteriores, con sujeción a determinados requisitos;

Que este último procedimiento se justificaba por la inexistencia de un régimen que permitiera la liquidación de gastos de esa naturaleza sin necesidad de gestionar los créditos legales ante el H. Congreso;

Que habiéndose obviado ese inconveniente que demoraba considerablemente los pagos a los beneficiarios de los créditos, mediante la autorización conferida al Poder Ejecutivo por el artículo 19 del Decreto-Ley Nº 16.990/57 (1), incorporado a la Ley Nº 11.672 (permanente de presupuesto) por la Ley Nº 15.021, no es racional mantener el criterio establecido respecto a los gastos en personal;

Que, en consecuencia, sólo corresponde declarar comprendido en la última parte del citado artículo 25 a los gastos derivados de contratos de adhesión, tales como los de servicio teléfonico y suministro de energía eléctrica y gas, entre otros, y los que provengan de diferencias a pagar que tengan su origen en cláusulas de variabilidad de precios legalmente consentida o en la rescisión de contratos por incumplimiento del proveedor y su ulterior ejecución a cargo de éste;

Que respecto a los gastos mencionados en primer término, no obstante la latitud del precepto recordado, deben computarse en los residuos pasivos de los ejercicios en que hubieren devengado, cuando resulte posible hacerlo mediante información anticipada o bien por estimación estadística basada en liquidaciónes anteriores;

---

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 409.-

Que estas medidas propenden a la corrección de los resultados que deben arrojar las cuentas generales del ejercicio;

Que, asimismo, corresponde señalar la oportunidad en que se han de considerar contraidos los compromisos en los casos de obras o trabajos a realizar por administración;

Por ello y en virtud de la facultad acordada por el artículo 84, inciso o) de la Ley de Contabilidad,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Sustituir las normas de interpretación y cumplimiento del artículo 25 de la Ley de Contabilidad, aprobadas por Resolución Nº 1.636/57 (*), del 24/9/1957 por las que se indican a continuación:

Artículo 25.- Se considerará contraido el compromiso, en los casos de obras o trabajos a realizar por administración, cuando se disponga, por un acto de autoridad competente, la ejecución de las obras o trabajos.

Considéranse comprendidos en el régimen establecido en el último párrafo del artículo 25 de la ley, los siguientes gastos:

a) Los que tengan su origen en contratos de adhesión, siempre y cuando no se hubieren podido incluir en las cuentas de residuos pasivos del ejercicio en que hubieren devengado, mediante información anticipada o bien por estimación estadística basada en liquidaciones anteriores;

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 333.-

b) Los que deriven de diferencias a pagar, producidas con motivo de la variabilidad de precios legalmente consentida o como consecuencia de la rescisión de contratos por incumplimiento del adjudicatario y su ulterior ejecución a cargo de éste cuando tales diferencias se establezcan después de cerrado el ejercicio en el que se asumió el compromiso original.

Los gastos que no se encuentren comprendidos en las excepciones de los incisos a) y b) precedentes serán considerados de ejercicio vencido y deberán apropiarse a los créditos que al efecto se autoricen legalmente.

ARTICULO 2º.- Regístrese, dése a conocer por Digesto Administrativo y archívese.-

Antonio M. Pérez Arango - Wifredo Dedeu - Damián Figueroa - José M. Fernández Fariña - Luis P. Picardo - Juan Carlos Pastene (Secretario).

ACTO: FALLO DEL 25 de julio de 1961.-

MATERIAS: ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 24) - ESTABILIDAD

"TIMOSSI ADOLFO s/Decreto 6666/57".-

CONSIDERANDO:

Que el señor Adolfo Timossi llega al Tribunal por medio del recurso establecido en el art. 24 del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, aprobado por Decreto-Ley 6666/57 (¹), atacando de inconstitucionales el art. 13 de la ley 14.794 ("), el art. 1º del decreto 11.811/60 (+) y los decretos - 10.115/59 (°) y 11.962/59 (-).-

Que tal actitud obedece a que, por decreto 13.132, del 28 de octubre de 1960, le fueron limitados al señor Timossi los servicios que prestaba en la Dirección Nacional de Aduana, aplicando las disposiciones que ataca.-

//-

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 688.-
(+) Ver Digesto Administrativo Nº 1255.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 855.-
(-) Ver Digesto Administrativo Nº 932.-

Que este Tribunal tiene ya resuelto no competirle el conocimiento de cuestiones como la aquí planteada, por la vía del recurso esgrimido en este expediente, salvo que, bajo la apariencia de la aplicación del art. 13 de la ley 14.794, se encubra una verdadera cesantía, como sanción disciplinaria, de las que caen bajo la protección de este medio jurisdiccional ("Coello", sentencia del 30 de noviembre de 1960, "Yver" sentencia del 2 de marzo de 1961).-

Que, en este caso, como ya se dijo, sólo se plantea la incompatibilidad de las normas aludidas con el art.14 de la Constitución Nacional que garantiza la permanencia en la función pública, pero en momento alguno se pretende que por ese medio se trata se ocultar una sanción de carácter disciplinario.-

Por estas consideraciones y las aducidas en los precedentes citados, se desestima el presente recurso.-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

JUAN CARLOS BECCAR VARELA - HORACIO H. HEREDIA - ADOLFO R. GABRIELLI

ACTO: DECRETO Nº 7.299/61.-

MATERIAS: RACIONALIZACION - TRANSFERENCIAS

Buenos Aires, 23 de agosto de 1961.-

Visto el artículo 27º de la Ley Nº 15.796 (1) y lo propuesto por el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa, y

CONSIDERANDO:

Que la Nación presta diversos servicios públicos en el Territorio de las Provincias, algunos de los cuales corresponden, por su naturaleza, a la jurisdicción local;

Que sin entrar a ponderar las razones que en su momento determinaron la centralización en el Gobierno Nacional de esas prestaciones, es evidente que en la actualidad las Provincias han acreditado la capacidad técnica necesaria para administrar con eficacia distintos servicios públicos;

Que es medida de buen gobierno reforzar y reafirmar el federalismo asignando los elementos y medios para que las Provincias puedan intensificar su colaboración en el programa de expansión y desarrollo;

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1329.-

Que para facilitar los propósitos que el Legislador ha exteriorizado en la norma del artículo 27º de la Ley Nº 15.796, resulta conveniente establecer el sistema que faculte a los organismos del Estado Nacional para promover las transferencias que encuadran en aquellos enunciados;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Autorízase a los Ministerios, Secretarías de Estado y organismos descentralizados de la Administración Nacional, a iniciar tratativas tendientes a transferir a las Provincias los servicios nacionales que se presten en las respectivas jurisdicciones y que no sea indispensable mantener con dependencia del Gobierno Nacional.

ARTICULO 2º.- Los organismos mencionados en el artículo anterior pondrán a consideración y aprobación del Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A.), antes de los 60 (sesenta) días, una lista de los servicios que podrían ser transferidos, incluyendo una descripción sintética de los bienes muebles e inmuebles, personal y recursos que quedarían afectados por la medida.

ARTICULO 3º.- La aprobación del Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A.) a que se refiere el artículo anterior, facultará a los organismos mencionados en el artículo 1º a iniciar las tratativas pertinentes con los gobiernos o entidades provinciales competentes, sometiendo a la consulta de los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Culto, Defensa Nacional y C.E.P.R.A. los anteproyectos de convenios que sea menester celebrar.

En dichos convenios deberá preverse el régimen de transferencias de bienes muebles e inmuebles, el personal, los contratos en ejecución y en general el activo y

pasivo de cada servicio debidamente individualizado, así como los recursos propios de tales servicios.

ARTICULO 4º.- Los convenios preverán también la transferencia a las Provincias de los fondos asignados en el presupuesto vigente para atender los gastos que originan los servicios que se transfieren. A tal efecto dispondrán que hasta tanto se aumenten los índices de coparticipación de los impuestos nacionales a que se refieren las Leyes Nros. 14.060, 14.390 y 14.788, la entrega de esos fondos tendrá el carácter de contribución especial y que la misma no afectará el actual régimen y monto de dicha coparticipación.

ARTICULO 5º.- El Ministerio del Interior invitará a los Gobiernos provinciales para que hagan llegar al Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E. P.R.A.), por intermedio del citado Ministerio, sugerencias con respecto a los organismos y servicios nacionales por cuya transferencia de jurisdicción se hallen interesados.

ARTICULO 6º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos del Interior y de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Alfredo R. Vítole - Jorge Wehbe.

ACTO: DECRETO Nº 7.531/61.-

MATERIAS: BOLSA DE TRABAJO - ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - TRANSFERENCIAS

Buenos Aires, 29 de agosto de 1961.-

Visto las solicitudes provenientes de distintos Ministerios, Secretarías de Estado y Reparticiones Descentralizadas a fin de que se prorrogue el plazo fijado en los decretos Nº 1.840 (') y 4.836/61 (") para concretar la incorporación presupuestaria definitiva del personal transferido en función de las normas del decreto Nº 9.718/59 (°), y

CONSIDERANDO:

Que las tareas de preparación del proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 1961-62 han provocado demoras en la consideración y aprobación de los reajustes presupuestarios indispensables para efectivizar las citadas transferencias;

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1363.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1412.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 854.-

Que resulta conveniente, en tales condiciones, extender el plazo estipulado, hasta hacerlo coincidir con la fecha de cierre del actual Ejercicio Financiero;

Por ello, y atento a lo informado por la Secretaría de Estado de Hacienda,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Prorrógase hasta el 31 de octubre de 1961 el término fijado en los decretos Nº 1.840/61 y 4.836/61 para la incorporación presupuestaria definitiva del personal transferido por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación en función de las disposiciones del decreto Nº 9.718/59, o su reintegro a las dependencias de origen.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Jorge Wehbe.

ACTO: RESOLUCION Nº 7.333/61.-

MATERIAS: CASA DE MONEDA - PRIMA DE PRODUCCION

Buenos Aires, 4 de setiembre de 1961.-

Visto el decreto Nº 6.483/61 (1), por el cual se estableció un nuevo régimen de "Primas de Producción" para el personal de la Casa de Moneda, y

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario precisar los alcances del mencionado régimen, en cuanto se refiere al ámbito de aplicación que comprenden sus términos y a la forma de liquidación en concepto de horas extraordinarias que como consecuencia de aquel sistema realiza el personal incluído en el mismo;

Que en ese orden de ideas, corresponde señalar que en el artículo 2º del citado acto de gobierno, ya se dejó establecido que el importe de m$n. 1.800 determinado como prima base fija para tareas industriales, será considerado como sueldo básico del agente a los efectos derivados del régimen de "Primas de Producción";

Que por lo tanto, si la liquidación por horas extraordinarias deriva de las tareas que se cumplen en orden del sistema de que se trata, procede que los montos a

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1429.-

percibir por los agentes interesados se ajuste a las normas previstas en el decreto de la referencia;

Que, por otra parte, corresponde señalar que el decreto citado tiende a valorizar el trabajo de los agentes de acuerdo con el grado de capacidad de cada uno, de tal manera que no cabe realizar ninguna discriminación en base a la situación de revista de los mismos, toda vez que en el caso, se atiende exclusivamente al rendimiento e índice real de producción de los distintos equipos o grupos de tareas, con prescindencia de cualquier otra situación;

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del mencionado decreto N° 6.483/61,

EL SECRETARIO DE HACIENDA
R E S U E L V E:

1°.- Déjase establecido que el importe fijado como prima base fija en el artículo 2° del decreto N° 6.483/61 para el personal de la Casa de Moneda detallado en el mismo, constituye un adicional del sueldo básico a los efectos de la determinación del monto que corresponda liquidar, en concepto de horas extraordinarias que se cumplan como consecuencia del régimen de "Primas de Producción".

2°.- Los beneficios que se acuerdan en base al régimen nombrado, además de comprender al personal especificado en el artículo 2° del decreto N° 6.483/61, alcanzan también a todos los agentes que se desempeñan en la Casa de Moneda -adscriptos o en comisión- cualquiera sea su situación de revista, siempre que su cometido se ajuste a las normas y características determinadas por el sistema de "Primas de Producción" a que se ha hecho referencia, debiéndose considerar la prima base fija como adicional al sueldo básico.

3°.- Comuníquese a quienes corresponda y archívese.-

Fdo. JORGE WEHBE

ACTO: DECRETO Nº 7.422/61.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - CONTRATACIONES

Buenos Aires, 25 de agosto de 1961.-

Visto la observación Nº 30/61, formulada por el Tribunal de Cuentas de la Nación al decreto Nº 4.107/61 (1), por el cual se determina que las autorizaciones y aprobaciones de las contrataciones que se celebren en la Dirección General Impositiva serán efectuadas por los funcionarios que designe el Consejo a propuesta del señor Interventor de ese organismo y hasta los montos que el mismo cuerpo determine, y atento que subsisten las razones que originaron el dictado del citado decreto;

Por ello, en uso de las facultades que el artículo 87, de la Ley de Contabilidad confiere al Poder Ejecutivo,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Insístese en el cumplimiento del decreto Nº 4.107/61.

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1396.-

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación a sus efectos.-

FRONDIZI - Roberto T.Alemann
Jorge Wehbe.-

ACTO: DECRETO Nº 7.920/61.-

MATERIAS: PROMOCIONES - CONCURSOS - BONIFICACIONES ESPECIALES - JUNTA EXAMINADORA

Buenos Aires, setiembre 8 de 1961.-

Visto y Considerando:

Que mediante recientes actos de gobierno, el Poder Ejecutivo ha procedido a la actualización de las escalas de remuneraciones de personal perteneciente a distintos organismos del Estado, mientras que al mismo tiempo, están en gestión o en vías de concretarse otras medidas de igual naturaleza, a fin de adecuarlas a niveles justos y acordes con la importancia de los respectivos servicios;

Que ello ha sido posible como consecuencia de una paulatina pero efectiva reducción de la burocracia, que ha permitido una importante contención en los gastos públicos, lográndose a la vez ceñir los planteles de personal correspondientes a la mayoría de los organismos que integran la Administración Pública, al número mínimo indispensable para la correcta atención de sus funciones;

Que en este orden de ideas, la Secretaría de Hacienda, luego de considerar la situación de los agentes de su jurisdicción, cuyas retribuciones básicas están dadas por el Escalafón aprobado por el decreto nº 9.530/58, ha elaborado un proyecto de mejoras dirigido fundamentalmente a las clases y grupos inferiores, toda vez que es en tales niveles donde se aprecia la urgencia de un incremento de sueldo;

//-

Que dicha medida tiene por objeto ajustar dichas escalas de sueldos en función de valores actualizados, logrando con ello una mayor correlación con las ya vigentes en la mayoría de los restantes organismos del Estado e incluso algunas de la propia Secretaría de Hacienda recientemente consideradas por el Poder Ejecutivo;

Que, por otra parte, resulta necesario contemplar en este acto, las necesidades que plantean los servicios de dicha Secretaría de Estado, frente a cierto número de vacantes producidas en su organización jerárquica, cuya provisión reviste carácter de urgente a fin de no lesionar el eficaz desenvolvimiento de las respectivas tareas;

Que como consecuencia de ello debe arbitrarse el mecanismo que, dentro del marco excepcional que ofrece la circunstancia apuntada, haga posible en breve plazo la solución buscada;

Que en ese sentido corresponde advertir que la medida en cuestión debe quedar limitada exclusivamente a esta ocasión y que la cubertura de los cargos vacantes sólo podrá hacerse mediante la promoción de los elementos más aptos pertenecientes a la misma repartición donde aquélla se ha producido, sin apelar a nuevos ingresos y una vez incorporados los agentes que estuvieran afectados a cada jurisdicción por el Servicio Centralizado para la Transferencia y Redistribución de Personal de la Dirección General del Servicio Civil;

Que al respecto debe quedar señalado que en la medida proyectada habrá de hacerse efectiva la incorporación al presupuesto de la Secretaría de Hacienda de 307 cargos pertenecientes a agentes afectados a la misma por el Servicio Centralizado para la Transferencia y Redistribución del Personal, en cumplimiento del decreto nº 9.718/59 (°), lo cual significará al propio tiempo la rebaja de igual cantidad de cargos en las dependencias de origen;

(°) Ver Digesto Administrativo Nº 854.-

Que asimismo y por aplicación de las disposiciones del artículo 36 de la Ley nº 15.796 (*), dicha Secretaría llevará a cabo mediante este acto la reducción de su plantel en aproximadamente 300 agentes, como consecuencia de supresión de empleos, servicios y dependencias;

Que igualmente corresponde hacer notar que para posibilitar el programa de mejoras y promociones comentado, la Secretaría de Hacienda procederá a rebajar de su presupuesto, además, 2.500 cargos vacantes, con lo cual se logrará al propio tiempo que una efectiva reducción de la burocracia, la mayor eficacia en los servicios, al quedar éstos con una dotación de agentes capacitados y mejor retribuídos;

Que, por último debe señalarse que las medidas anunciadas deberán financiarse con los créditos del presupuesto vigente a la fecha de su aplicación, sin exceder los totales netos autorizados;

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Autorízase a la Secretaría de Estado de Hacienda para que por esta única vez y como excepción a las normas vigentes, proceda a cubrir las vacantes existentes y las que se produzcan como consecuencia directa de este acto en las reparticiones que la integran y se hallen comprendidas en las disposiciones del Escalafón General de la Administración y el decreto nº 13.375/60, con arreglo a las siguientes normas:

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1.333.-

a) En cada repartición u organismo se constituirá una Junta Examinadora compuesta por su titular y su reemplazante natural y por los jefes de las dependencias principales que lo integran.

b) La Junta procederá al análisis de los antecedentes de todo el personal de su jurisdicción, exclusivamente, sin distinción de clase o grupo, para la cubertura de todas las vacantes existentes en la misma hasta el límite máximo de la Clase A, Grupo III.

c) Realizado el estudio de los antecedentes, la Junta confeccionará la nómina de los candidatos que, conforme a los mismos, resultaren mejor calificados para cubrir cada uno de los cargos vacantes. Dicha nómina será firmada por todos los miembros de la Junta y remitida antes del 15 de octubre próximo a consideración del señor Secretario de Estado de Hacienda, con intervención de la Dirección General de Contabilidad y Administración, con el correspondiente proyecto de decreto o resolución, según corresponda.

d) A los efectos dispuestos precedentemente, se considerarán los antecedentes enumerados en el inciso II de las normas reglamentarias del Escalafón, aprobadas por el decreto nº 11.941/59 (1)

e) Las Juntas no podrán constituirse con menos de tres miembros y quedarán habilitadas de oficio a partir de la fecha. Sus miembros deberán pertenecer a la jurisdicción donde se realiza el concurso y a grupos superiores al correspondiente a los cargos a proveer.

---

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 916.-

f) Si razones de organización funcional o jerárquica impidieran la constitución de alguna Junta en la forma establecida por el presente, la misma será integrada por resolución del señor Secretario de Estado de Hacienda, con los funcionarios que estén en mejores condiciones para el desempeño de esta tarea.

ARTICULO 2º.- A los fines dispuestos precedentemente, la Dirección General de Contabilidad y Administración proveerá a cada una de las reparticiones antes del 30 de setiembre próximo, el detalle completo de las vacantes que se encuentren habilitadas para su cubertura.

ARTICULO 3º.- Apruébase para el personal de la Secretaría de Estado de Hacienda comprendido en el Escalafón aprobado por decreto Nº 9.530/58 y en el decreto Nº 13.375/60, y para el personal jornalizado de la Dirección General de Obra Social, con excepción de los agentes amparados por los decretos Nros. 6.482 (') y 6.483/61 ("), las bonificaciones especiales mensuales que se detallan en las planillas anexas.

ARTICULO 4º.- Las bonificaciones especiales establecidas en el artículo 3º no integran el concepto sueldo, remuneración o retribución a los efectos de las disposiciones en vigor. Ello no obstante, dichas asignaciones son correlativas al desempeño efectivo del cargo, debiendo sufrir por esa causal, únicamente, las mismas deducciones que el sueldo en materia de licencias, inasistencias y suspensiones.

ARTICULO 5º.- Las promociones previstas por el artículo 1º y los beneficios establecidos en el artículo 3º se ajustarán a las disposiciones del artículo 30º de la Ley Nº 15.796.

ARTICULO 6º.- El gasto que originen las presentes dispo-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1428.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1429.-

siciones, debe ser atendido con los créditos del presupuesto a la fecha de su aplicación, sin exceder los totales netos autorizados y previa incorporación del personal afectado a cada jurisdicción por el Servicio de Transferencia y Redistribución del Personal dependiente de la Dirección General del Servicio Civil de la Nación y del de la Dirección General Inmobiliaria distribuído como consecuencia de su disolución. Con respecto a este último, déjase aclarado que su transferencia dentro de la Secretaría de Hacienda, se operará con todos los créditos no distribuídos.

ARTICULO 7º.- Sin perjuicio de lo establecido en el presente, la Secretaría de Estado de Hacienda procederá al estudio de un nuevo ordenamiento escalafonario de su personal, en orden a las características y actividad de los organismos que la integran. En dicho instrumento deberá considerarse la redistribución o reagrupamiento de funciones y los niveles de redistribuciones que en él se establezcan no podrán exceder de los totales que se alcancen por aplicación de este decreto.

ARTICULO 8º.- Facúltase a la Secretaría de Estado de Hacienda para dictar las normas reglamentarias, complementarias y aclaratorias del presente decreto.

ARTICULO 9º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 10º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación a sus efectos.-

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Jorge Wehbe

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 3º

CLASE	GRUPO	IMPORTE M$N.
B	I	2.000
B	II	2.000
B	III	1.800
B	IV	1.800
B	V	1.700
B	VI	1.700
B	VII	1.600
B	VIII	1.500
B	IX	1.200
B	X	1.200
B	XI	1.100
B	XII	1.100
C	I	2.000
C	II	2.000
C	III	1.800
C	IV	2.000
C	V	2.000
C	VI	1.200
D	I	1.700
D	II	1.700
D	III	1.600
D	IV	1.600
D	V	1.500
D	VI	1.500
D	VII	1.400
D	VIII	1.400
Subgrupo		1.000
E	I	1.800
E	II	1.800
E	III	1.7[illegible]

CLASE	GRUPO	IMPORTE M$N.
E	IV	1.600
E	V	1.600
E	VI	1.500
E	VII	1.400
E	VIII	1.400
F	I	1.700
F	II	1.700
F	III	1.600
F	IV	1.500
F	V	1.400
F	VI	1.400
Subgrupo		1.000

PERSONAL JORNALIZADO DE LA DIRECCION GRAL.DE OBRA SOCIAL

JORNAL M$N.	IMPORTE M$N.
160	70
170	75
180	75
185	75
190	80
200	80

PERSONAL COMPRENDIDO EN EL DECRETO Nº 13.375/60

MENSUALIZADO

CATEGORIAS	IMPORTE M$N.
a) III y IV	2.000
a) V y VI	1.800
a) VI "a" y VI "b"	2.000
a) VII y VIII	1.800
a) IX a XV	1.600

CATEGORIAS	IMPORTE M$N.
b) I y II	1.800
b) III a VI	1.600
c) I a V	1.600

JORNALIZADO

a) I a III	100
a) IV y V	90
a) VI a IX	80
b) I a IV	100
b) V y VI	90
b) VII y VIII	80
c) I	90
c) II y III	80
d) I a III	80

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION Dpto. de Secretaría

ACTO: DECRETO Nº 13.375/60.-

MATERIAS: LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS - ESCALAFON DE CASINOS

Buenos Aires, 31 de octubre de 1960.

Visto el decreto Nº 7.334 de fecha 29 de junio de 1960 (°), que excluye al personal de las Cuentas Explotación "Hipódromos" y "Salas de Entretenimientos", dependiente de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, de las disposiciones del Estatuto y del Escalafón General para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, aprobado por decreto-ley Nº 6.666/57 (") y decreto Nº 9.530/58, respectivamente, atento a lo previsto por el artículo 3º del referido decreto Nº 7.334/60, por el cual se prevé el dictado de un ordenamiento escalafonario para el personal de que se trata, sustitutivo del instrumento aprobado por el decreto Nº 9.530/58, y atento el proyecto elevado por la Secretaría de Estado de Hacienda respecto del régimen correspondiente al personal de la Cuenta Explotación "Salas de Entretenimientos".

//-

(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1204.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Apruébase el cuerpo de disposiciones adjunto, que constituye el Escalafón para el Personal que reviste en la Cuenta Especial Explotación "Salas de Entretenimientos", cuyos efectos entrarán en vigor a partir del día 1º de agosto de 1960.

ARTICULO 2º.- Facúltase a la Secretaría de Estado de Hacienda para dictar las normas aclaratorias y complementarias del instrumento que se aprueba por el artículo 1º.

ARTICULO 3º.- Derógase toda disposición que se oponga al presente.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Alvaro Alsogaray
Guillermo W.Klein

ESCALAFON PARA EL PERSONAL DE LA CUENTA ESPECIAL EXPLOTACION "SALAS DE ENTRETENIMIENTOS"

Capítulo I
A M B I T O

ARTICULO 1º.- Este Escalafón es de aplicación para todo el personal afectado a la Cuenta Especial Explotación "Salas de Entretenimientos" dependiente de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, comprendido en el Estatuto aprobado por el decreto Nº 7.334/60.

Capítulo II

INGRESO

ARTICULO 2º.- Las condiciones de ingreso -títulos, estudios cursados, pruebas de competencia o aptitud, etc.-, serán fijadas por resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda.

Con tal motivo queda suspendido el ingreso de personal en el ámbito del presente instrumento, hasta tanto se apruebe el régimen de que se trata.

Capítulo III

PROMOCIONES

ARTICULO 3º.- Salvo razones de servicio que, a juicio de la autoridad competente para resolver, exijan apartarse de las presentes normas, toda vacante que se produzca se cubrirá con el agente mejor calificado que revista en la categoría inmediata inferior, pertenezca a la misma especialidad, oficio o tarea a que corresponde el cargo vacante y posea una calificación no menor a ocho (8) puntos. A igualdad de calificación se dará preferencia al personal de mayor antigüedad.

Las promociones a que dé lugar el presente artículo se llevarán a cabo, además, con arreglo a los siguientes principios:

a) Estarán limitadas a la necesidad de cubrir el cargo vacante la cual será determinada a juicio de autoridad competente;

b) Salvo casos de urgencia debidamente probados y documentados las promociones se efectuarán en períodos trimestrales y tendrán vigor a partir del día 1º del mes siguiente al de su aprobación.

Capítulo IV
REMUNERACIONES

ARTICULO 4º.- El personal percibirá las remuneraciones básicas que se determinan en las planillas anexas al presente artículo, de acuerdo con su función, tarea, oficio o especialidad. Además percibirá los adicionales que se detallan a continuación:

a) Adicional por antigüedad;
b) Subsidio familiar;
c) Adicional por título habilitante;
d) Compensación por dedicación funcional;
e) Compensación por responsabilidad jerárquica.

ADICIONAL POR ANTIGÜEDAD

ARTICULO 5º.- Serán computables a los fines de esta bonificación, los servicios prestados en la administración pública nacional, provincial o municipal, en instituciones, entidades o empresas privadas que hubieran sido incorporadas al patrimonio nacional, siempre que al producirse la estatización, el agente se hallara prestando servicios en la misma.

Déjase aclarado que procederá la computación de los servicios prestados como contratado o con carácter honorario, cuando concurran las siguientes circunstancias:

1º.- Servicios como Contratado:

a) Que sean servicios prestados en relación de dependencia;
b) Que estuvieran sujetos a un determinado horario y fueran susceptibles de un determinado contralor en cuanto a asistencia, puntualidad, etc.;
c) Que la prestación haya sido hecha en forma personal.

2º.- Servicios con carácter honorario:

Cuando estén reconocidos por la Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado, de acuerdo

Capítulo II

I N G R E S O

ARTICULO 2º.- Las condiciones de ingreso -títulos, estudios cursados, pruebas de competencia o aptitud, etc.-, serán fijadas por resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda.

Con tal motivo queda suspendido el ingreso de personal en el ámbito del presente instrumento, hasta tanto se apruebe el régimen de que se trata.

Capítulo III

P R O M O C I O N E S

ARTICULO 3º.- Salvo razones de servicio que, a juicio de la autoridad competente para resolver, exijan apartarse de las presentes normas, toda vacante que se produzca se cubrirá con el agente mejor calificado que revista en la categoría inmediata inferior, pertenezca a la misma especialidad, oficio o tarea a que corresponde el cargo vacante y posea una calificación no menor a ocho (8) puntos. A igualdad de calificación se dará preferencia al personal de mayor antigüedad.

Las promociones a que dé lugar el presente artículo se llevarán a cabo, además, con arreglo a los siguientes principios:

a) Estarán limitadas a la necesidad de cubrir el cargo vacante la cual será determinada a juicio de autoridad competente;

b) Salvo casos de urgencia debidamente probados y documentados las promociones se efectuarán en períodos trimestrales y tendrán vigor a partir del día 1º del mes siguiente al de su aprobación.

Capítulo IV
REMUNERACIONES

ARTICULO 4º.- El personal percibirá las remuneraciones básicas que se determinan en las planillas anexas al presente artículo, de acuerdo con su función, tarea, oficio o especialidad. Además percibirá los adicionales que se detallan a continuación:

a) Adicional por antigüedad;
b) Subsidio familiar;
c) Adicional por título habilitante;
d) Compensación por dedicación funcional;
e) Compensación por responsabilidad jerárquica.

ADICIONAL POR ANTIGÜEDAD

ARTICULO 5º.- Serán computables a los fines de esta bonificación, los servicios prestados en la administración pública nacional, provincial o municipal, en instituciones, entidades o empresas privadas que hubieran sido incorporadas al patrimonio nacional, siempre que al producirse la estatización, el agente se hallara prestando servicios en la misma.

Déjase aclarado que procederá la computación de los servicios prestados como contratado o con carácter honorario, cuando concurran las siguientes circunstancias:

1º.- Servicios como Contratado:

a) Que sean servicios prestados en relación de dependencia;
b) Que estuvieran sujetos a un determinado horario y fueran susceptibles de un determinado contralor en cuanto a asistencia, puntualidad, etc.;
c) Que la prestación haya sido hecha en forma personal.

2º.- Servicios con carácter honorario:

Cuando estén reconocidos por la Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado, de acuerdo

con las disposiciones de la ley Nº 14060 o por el organismo similar correspondiente a la jurisdicción provincial o municipal, según corresponda.

ARTICULO 6º.- La antigüedad de servicios cumplidos como agente jornalizado, se computará considerando como un año de servicios el total de jornadas que le hubiere correspondido cumplir, de acuerdo con la programación de actividades dispuesta para cada período de doce (12) meses.

ARTICULO 7º.- No se computarán:

a) Los servicios civiles, militares o de seguridad o defensa que hubiesen originado pensión, jubilación o retiro, cuando el agente perciba total o parcialmente su prestación de pasividad;

b) Los servicios prestados en empresas de capital mixto, salvo cuando hubiesen sido incorporadas al patrimonio nacional y en este caso, siempre que el agente se hubiera encontrado prestando servicios a la fecha de estatización;

c) Las suspensiones, licencias e inasistencias sin goce de haberes por períodos superiores a treinta (30) días contínuos o discontínuos;

d) Los servicios que se computen y por los que se perciba bonificación por antigüedad en otros cargos o empleos, dentro de la repartición o fuera de ella, ya se trate de la administración pública nacional, provincial o municipal.

En caso de cesar en el otro cargo o empleo podrá acrecentar la antigüedad que le hubiera sido excluída, siempre que la misma encuadre en las presentes disposiciones.

ARTICULO 8º.- La antigüedad por los servicios aludidos en los artículos 5º y 6º que el agente tuviera acreditada al 31 de julio de 1960, será reconocida a razón de $ 50.- mensuales o $ 2,50 por día de trabajo, por cada año de servicios, según se trate de personal mensualizado o jornaliza-

do respectivamente. En ningún caso el importe que corresponda percibir por el período transcurrido hasta el 30/7/960, podrá ser inferior al que el agente tenga reconocido por complemento por ubicación a esa fecha.

Los servicios prestados con posterioridad a esa fecha se reconocerán a razón de m$n. 75.- mensuales o m$n. 3,75 por día de trabajo para el personal mensualizado o jornalizado, respectivamente. Los ajustes por cumplimiento de antigüedad se efectuarán semestralmente, a partir del 1º de agosto de 1960, y la liquidación y pago respectivo se hará con retroactividad al primer día del mes siguiente a aquél durante el cual el agente hubiera cumplido el nuevo ciclo.

ARTICULO 9º.- Los importes indicados en el artículo 8º corresponderán a personal mensualizado que se desempeña en horario mínimo de treinta y cinco (35) horas semanales y al personal jornalizado con horario mínimo de siete (7) horas diarias.

Al personal que se desempeña en horarios inferiores se le liquidará la proporción correspondiente.

ARTICULO 10.- Si con posterioridad a la fecha indicada, el personal acreditara nuevos servicios computables prestados con anterioridad al 31 de julio de 1960, se reconocerán los mismos en las condiciones establecidas por el artículo 8º -primera parte-.

SUBSIDIO FAMILIAR Y ADICIONAL POR TITULO

ARTICULO 11.- Declárase aplicables para el personal de los Casinos las disposiciones del punto 26º del decreto Nº 9530/58 y del decreto Nº 4631/59 (*), sus normas correlativas, complementarias y aclaratorias.

COMPENSACION POR DEDICACION FUNCIONAL

ARTICULO 12.- Corresponderá liquidar esta compensación en los importes que se indican en las planillas anexas al ar

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 738.-

tículo 4º, con arreglo a las siguientes condiciones:

a) Dedicar a la función un mínimo de cuarenta y cinco (45) horas;

b) Ejercer la Jefatura de un servicio u organización y contar con personal bajo su dependencia. La excepción a esta norma sólo podrá ser acordada previa intervención del C.E.P.R.A., ante fundadas y documentadas razones de servicio;

c) No percibir prestación alguna en concepto de pasividad (jubilación, retiro o pensión);

d) Podrá ser excluído de este régimen:
   - a su solicitud;
   - cuando le sean asignadas funciones excluídas de este beneficio;
   - cuando hubiera dejado de cumplir o no cumpliera algunas de las condiciones señaladas en los incisos precedentes.

RESPONSABILIDAD JERARQUICA

ARTICULO 13.- Corresponderá liquidar esta compensación en los importes que se indican en las planillas anexas al artículo 4º, con arreglo a las siguientes condiciones:

a) Cumplir cuando el servicio así lo requiera y dentro de un exceso horario máximo, equivalente al diez por ciento semanal al margen del horario mínimo correspondiente, las tareas que la superioridad le encomienda, sin derecho a percepción por tal circunstancia de retribución alguna por horas extraordinarias.

b) Haber obtenido durante el período inmediato anterior una calificación de ocho (8) puntos como mínimo.

Cuando el agente no reuniera la condición fijada por el inciso b), se le suspenderá la liquidación de la respectiva compensación hasta el primer mes siguiente al de la finalización del período en el cual el mismo hubiera reco-

brado la calificación mínima exigida.

ARTICULO 14.- Las compensaciones por "dedicación funcional" y "responsabilidad jerárquica", constituyen el reintegro de los mayores gastos que origina el ejercicio de las funciones superiores y atento a esa finalidad no integran el concepto sueldo, remuneración o retribución a los efectos de todas las disposiciones en vigor; ello no obstante, dichas compensaciones son correlativas al desempeño efectivo del cargo, debiendo sufrir por esa causal únicamente, las mismas deducciones que el sueldo en materia de licencias e inasistencias y suspensiones.

ARTICULO 15.- Las compensaciones establecidas por los artículos 12 y 13, son excluyentes entre sí.

ARTICULO 16.- La compensación por "dedicación funcional" es incompatible con cualquier otra sobreasignación que el agente percibiera por el mismo concepto o de características similares en cuanto a su finalidad; asignaciones por servicios extraordinarios y gastos de representación, regulares y permanente, por el desempeño efectivo del mismo cargo, pudiendo el agente optar por el régimen más beneficioso.

ARTICULO 17.- La compensación por "responsabilidad jerárquica" se podrá liquidar automáticamente a partir del 1º de agosto de 1960, en tanto que la correspondiente dedicación funcional lo será a partir del 1º de octubre del mismo año y se asignará, con arreglo a las presentes normas, por resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda.

Capítulo V

C A L I F I C A C I O N E S

ARTICULO 18.- A los fines de la calificación del personal se aplicarán las normas establecidas por los puntos 34 al 42 del cuerpo de disposiciones aprobado por el decreto Nº 9.530/58 y sus normas complementarias y aclaratorias, todo

ello con arreglo al estatuto establecido por el decreto - Nº 7.334/60, al presente escalafón y a las limitaciones - que a continuación se señalan:

a) No regirá la norma dispuesta por el inciso a) del punto 38 del decreto Nº 9.530/58;

b) Como foja de calificaciones se emplearán, adaptadas a la nomenclatura específica, los formularios previstos por el punto 41 de las normas aprobadas por el decreto Nº 11.941/59 (*), excepto para el personal jornalizado para el cual se utilizará un solo formulario, substituyendo los conceptos de calificación exigidos, por los siguientes: "eficiencia ", "cooperación", "dedicación" y "corrección".

Capítulo VI

D I S P O S I C I O N E S G E N E R A L E S

ARTICULO 19.- Fíjanse las siguientes jornadas de labor para el personal comprendido en este escalafón:

a) Personal mensualizado: Siete (7) horas diarias durante 5 días por semana;

b) Personal jornalizado de actividad diaria: Siete (7) horas diarias durante 6 días por semana;

c) El personal que hubiera optado oportunamente por - el horario reducido de tres horas y treinta minutos (3,30 hs.) o cuatro (4) horas diarias continuará - con el mismo y sus remuneraciones serán proporcionales a dicho horario

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 916.-

ANEXO AL ARTICULO 4º

EXPLOTACION SALAS DE ENTRETENIMIENTOS
PERSONAL MENSUALIZADO

a) ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO

FUNCION	Categoría	Grupo	Sueldo básico	Dedicación Funcional	Responsab. Jerárquica
Jefe de Departamento (Gerente General)	I	1	10.000	9.200	4.000
Gerente Administrativo	II	1	8.500	7.700	3.000
Gerente Servicios Generales	III	1	7.900		2.400
Asesor		2			
Gerente Casino Mendoza		3			
Delegado Contador	IV	1	7.000		2.100
Tesorero General		2			
Delegado Personal		3			
Jefe de Despacho		4			
Jefe Técnico		5			
Sub-Gerente de Mendoza		6			
Asesor		7			
Jefe de Prevención y Seguridad	V	1	6.500		1.700
Intendente		2			
Tesorero de Explotación		3			
Tesorero de Administración		4			
Jefe de Compras y Suministros		5			

FUNCION	Categoría	Grupo	Sueldo básico	Dedicación Funcional	Responsab. Jerárquica
Jefe de Acción Cultural		6			
Delegado Contador Mendoza		7			
Tesorero Mendoza		8			
Jefe de Sumarios		9			
2º Jefe de Despacho		10			
Sub-Delegado Personal		11			
Sub-Delegado Contador		12			
Médico	VI	1	6.500		1.600
Médico	VI"a"	1	4.000		1.000
Escribano	VI"b"	1	3.500		870
Jefe de Contabilidad	VII	1	5.800		1.450
Jefe de Patrimonio		2			
Jefe de Liquidación de Haberes		3			
Jefe de Proyectos y Dibujos		4			
Jefe de Pagos		5			
Jefe de Control y Asistencia Personal		6			
Jefe Movimiento y Trámites Personal		7			
Jefe Trámites Servicios Generales		8			

FUNCION	Categoría	Grupo	Sueldo básico	Dedicación Funcional	Responsab. Jerárquica
Jefe Mesa Entradas y Salidas		9			
Jefe de Dereoho de Acceso		10			
Jefe de Legajos y Ficheros		11			
Jefe Canjes de Cheques		12			
Jefe Trámites Sub-Gerencia de Juego		13			
2ºJefe de Prevención y Seguridad		14			
2ºJefe de Compras y Suministros		15			
2ºJefe de Sumarios		16			
2º Jefe de Acción Cultural		17			
Sub-Intendente		18			
Sub-Delegado Contador Mendoza		19			
Sub-Tesorero Mendoza		20			
Delegado Personal Mendoza	VIII	1	5.300		1.100
Jefe de Trámites Mendoza		2			
Jefe de Prevención y Seguridad Mendoza		3			
Intendente Mendoza-Río Hondo y Sub-Intendente (Anexo 1)		4			
Jefe de Depósitos		5			
2ºJefe Derecho de Acceso		6			
2ºJefe de Contabilidad		7			

FUNCION	Categoría	Grupo	Sueldo básico	Dedicación Funcional	Responsab. Jerárquica
2ºJefe de Control y Asistencia Personal		8			
2ºJefe de Trámites y Servicios Generales		9			
2ºJefe de Pagos		10			
2ºJefe de Liquidación de Haberes		11			
2ºJefe de Patrimonio		12			
2ºJefe de Movimiento y Trámites Personal		13			
2ºJefe de Legajos y Ficheros Personal		14			
2ºJefe Mesa Entradas y Salidas		15			
2ºJefe Canje Cheques		16			
2ºJefe Trámites Sub-Gerencia de Juego		17			
Asesor		18			
Jefe Recepción Mercaderías	IX	1	5.760		
Jefe Derecho Acceso Mendoza		2			
Jefe Recuento Mendoza		3			
Dibujante y Restaurador Cuadros		4			
2ºJefe de Depósitos		5			
2ºJefe de Prevención y Seguridad Mendoza		6			

FUNCION	Categoría	Grupo	Sueldo básico	Dedicación Funcional	Responsab. Jerárquica
Sub-Delegado Personal Mendoza		7			
2º Jefe de Derecho de Acceso Mendoza	X	1	5.640		
Oficinista		2			
Cabo Enfermero		3			
Enfermera	XI	1	5.280		
Encargado Armería		2			
Fiscalizador Recuento Mendoza		3			
Oficinista	XII	1	4.800		
Auxiliar Recuento Mendoza		2			
Oficinista	XIII	1	3.960		
Agente Prevención y Seguridad		2			
Telefonista	XIV	1	3.720		
Oficinista	XV	1	3.120		

- Categorías VI "a" y VI "b" corresponden a horario reducido.-

ANEXO AL ARTICULO 4º

b) DE MAESTRANZA Y OBRERO

FUNCION	Categoría	Grupo	Sueldo básico
Jefe de Taller	I	1	7.000
2º Jefe de Taller o Capataz	II	1	6.500
Oficial de 1ra.	III	1	5.800
Oficial de 2da.	IV	1	5.200
Oficial de 3ra.	V	1	4.400
½ Oficial	VI	1	3.800

c) SERVICIOS AUXILIARES — ANEXO AL ARTICULO 4º

FUNCION	Categoría	Grupo	Sueldo básico
Mayordomo	I	1	5.800
Capataz	II	1	4.900
Sub-Capataz	III	1	4.300
Portero	IV	1	3.720
Ordenanza		2	
Mucama	V	1	3.120
Peón		2	

ANEXO AL ARTICULO 4º

EXPLOTACION SALAS DE ENTRETENIMIENTOS
PERSONAL JORNALIZADO

a) PERSONAL ADMINISTRATIVO, PROFESIONAL, TECNICO Y ESPECIALIZADO

FUNCION	Categoría	Grupo	Jornal
Gerente Casinos Anexos	I	1	440
Sub-Gerente Casinos Anexos	II	1	390
Tesorero Casinos Anexos		2	
Sub-Tesorero Casinos Anexos	III	1	350
Jefe de Prevención y Seg.Casinos Anexos	IV	1	290
Jefe Derecho Acceso		2	
Jefe de Recuento		3	
2ºJefe de Prevención y Seg.Anexos	V	1	270
2ºJefe Derecho Acceso		2	
Fiscalizador Recuento y Bancas		3	
Delegado Personal		4	
Médico	VI	1	250
Auxiliar de Recuento	VII	1	225
Ventanillero Derecho Acceso	VIII	1	190
Agente Prevención y Seguridad		2	
Enfermera		3	
Fiscalizador de Reloj	IX	1	175
Telefonistas		2	
Oficinistas		3	

b) PERSONAL DE JUEGO — ANEXO AL ARTICULO 4º.-

FUNCION	Categoría	Grupo	Jornal
Gerente de Juego	I	1	500
Sub-Gerente de Juego	II	1	440
Jefe de Juego	III	1	390
Tesorero de Fichas		2	
Jefe de Sala	IV	1	350
Sub-Tesorero de Fichas		2	
Inspectores	V	1	290
Jefe Caja Conversión (Central)		2	
Jefe Caja Público (Central)		3	
Jefe de Mesa	VI	1	270
Jefe Caja Conversión (Anexos)		2	
Jefe Caja Público (Anexos)		3	
Jefe de Turno (Central)		4	
Jefe de Cambistas		5	
Jefe de Naipes (Central)		6	
Pagadores y Talladores	VII	1	225
Jefe Cilindrero (Anexos)		2	
Jefe de Turno (Anexos)		3	
Jefe de Cambistas (Anexos)		4	
Cajero Caja Conversión		5	
Cajero Caja Público		6	
Sub-Jefe de Naipes (Central)		7	
Ayudante de Ruleta	VIII	1	190
Cambistas		2	
Cilindreros		3	
Auxiliar de Turnos		4	

ANEXO AL ARTICULO 4º

c) PERSONAL OBRERO Y DE MAESTRANZA

FUNCION	Categoría	Grupo	Jornal
Encargado Electricidad (Necochea y Miramar	I	1	290

FUNCION	Categoría	Grupo	Jornal
Oficial 1º de Oficio	II	1	260
Chofer	III	1	220
Utilero		2	

ANEXO AL ARTICULO 4º

d) PERSONAL DE SERVICIO

FUNCION	Categoría	Grupo	Jornal
Mayordomo	I	1	245
Capataz	II	1	215
Portero	III	1	165
Sereno		2	
Ordenanza		3	
Acomodador		4	
Mucamas		5	
Peones		6	

ACTO: DECRETO Nº 5.821/58.-

MATERIAS: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - BOLETIN OFICIAL

Buenos Aires, 24 de abril de 1958.-

Visto la necesidad de concentrar en un organismo oficial toda la documentación relacionada con los actos de gobierno de carácter público dictados por el Poder Ejecutivo de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que tales tareas estuvieron a cargo de la Dirección General del Registro Nacional (Decretos Nros. 659/47 (') y 10.001/48) y posteriormente, al desaparecer esta repartición, a la Dirección General del Boletín Oficial;

Que en virtud de lo dispuesto por decreto Nº883/57(") encomendando al Archivo General de la Nación la custodia de los decretos originales de "carácter público", ha quedado interrumpida la recepción de los documentos de este carácter en la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas, estableciéndose como consecuencia de ello, dos Direcciones con finalidades comunes;

Que aparte de traer aparejada esta situación trastornos para las reparticiones de gobierno y gestiones de organismos de diverso carácter por cuanto deben consultar al Boletín Oficial y al Archivo General de la Nación, res

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 392.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 393.-

pectivamente, según se trate de determinadas fechas, ha - sido el Registro Nacional creado en el año 1825 y poste - riormente el Boletín Oficial de la Nación, quienes han te nido a su cargo las publicaciones oficiales de todos los textos de decretos, leyes y resoluciones de la Administra ción Nacional y el archivo de tales documentos para darle carácter de "auténticos" y para cualquier otra verifica - ción;

Que han sido, el Registro Nacional y el Boletín Ofi - cial, los creadores y organizadores del sistema de "proto colización" de todos los decretos originales desde el año 1947 hasta la Presidencia del Teniente General Lonardi en 1955, contando con un Archivo de 1902 tomos encuadernados y con el primer Registro de firmas auténticas de Presiden tes de la Nación y de Ministros del Poder Ejecutivo;

Que por razones históricas y de tradición, resulta - conveniente y justo devolver a este organismo las funcio- nes que le eran propias con anterioridad al 25-1-57;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Modifícase el artículo 1° del decreto núme- ro 883/57, restableciéndose a la Dirección General del Bo letín Oficial e Imprentas, las funciones confiadas al Ar- chivo General de la Nación, en cuanto se relaciona con la guarda y conservación de decretos originales del P.E., de "carácter público".

ARTICULO 2°.- El Archivo General de la Nación hará entre- ga, bajo las garantías del caso, de todos los documentos originales que obren en su poder como consecuencia del de creto N° 883/57.

ARTICULO 3°.- Deróganse todas las disposiciones que se o- pongan al presente decreto.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

ARAMBURU - A. H. Cabral.-

ACTO: DECRETO Nº 7.603/61.-

MATERIAS: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - BOLETIN OFICIAL

Buenos Aires, 31 de agosto de 1961.-

Visto el expediente Nº 7.643, letra B, del año 1961, mediante el cual el Boletín Oficial e Imprentas solicita que se le releve de la tarea de conservar los decretos originales de carácter "público" dictados por el Poder Ejecutivo de la Nación, en virtud de que próximamente se trasladará a un local que, si bien reune las condiciones apropiadas para permitir la centralización de sus talleres y oficinas administrativas, carece de las comodidades necesarias para la custodia de tan importante documentación; atento lo propuesto por esta repartición y teniendo en cuenta la opinión del Archivo General de la Nación, organismo cuya finalidad es la de recibir y custodiar los documentos públicos de propiedad nacional.

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Derógase el decreto Nº 5.821/58 (1), restableciéndose al Archivo General de la Nación las funciones confiadas a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas en cuanto se relaciona con la guarda y conservación de decretos originales del Poder Ejecutivo de la Nación, de carácter "público".

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1444.-

ARTICULO 2°.- La Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas hará entrega al Archivo General de la Nación, bajo las formalidades del caso, de todos los documentos originales que obren en su poder, así como de los muebles metálicos en que se hallan depositados.

ARTICULO 3°.- Oportunamente, los organismos antes citados deberán registrar la transferencia de los bienes a que se alude en el artículo anterior.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo

ACTO: EXPEDIENTE Nº 60.221/61.-

MATERIAS: ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - SUELDO - DIFERENCIA DE HABERES - PRESUPUESTO - REEMPLAZOS

Providencia nº 1.574/61.-

//NOS AIRES, 16 de agosto de 1961.-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Administración llevando a su conocimiento que, en opinión de este organismo, la circunstancia de que el cargo que cubre interinamente un agente figure en distinto rubro presupuestario de aquél en el que el mismo revista, no lo inhibe de percibir la diferencia correspondiente, siempre que se den en el caso los requisitos fijados en los Decretos Nros. 10.542/46 (') y 11.826/60 (") vale decir que se trate de un reemplazo legal y reglamentario, que el cargo se halle vacante, etc.

.....

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

(') Ver Digesto Administrativo Nº 74.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1254.-

ACTO: DECRETO Nº 8.180/61.-

MATERIAS: PROMOCIONES - CONCURSOS - BONIFICACIONES ESPECIALES - JUNTA EXAMINADORA

Buenos Aires, setiembre 14 de 1961.-

Visto el decreto Nº 7.920/61 (¹), por el cual se acordó al personal de la Secretaría de Hacienda una bonificación especial sobre las respectivas remuneraciones mensuales, y

CONSIDERANDO:

Que, en dicha oportunidad, no se incluyó dentro de los citados beneficios al personal comprendido en el decreto Nº 11.516/60 (") (Cuenta Especial Explotación Hipódromos) y decreto-ley Nº 6.666/57 (°) (Gabinete de los Ministros del Poder Ejecutivo Nacional), en virtud de que dichos organismos poseen regímenes especiales para el ejercicio de sus actividades específicas;

Que, ello no obstante, teniendo en cuenta las mayores retribuciones que surgen por aplicación del recordado decreto Nº 7.920/61, resulta procedente hacer extensivas las bonificaciones de que se trata al personal -

//-

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1442.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1269.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

mencionado, toda vez que además de preveerse en el decreto Nº 1.472/58 (*) que el personal del "Gabinete de los Ministros" gozará de las mismas remuneraciones, sobreasignaciones, bonificaciones y demás emolumentos que el personal permanente de igual categoría del respectivo Ministerio o Secretaría de Estado, el procedimiento a fijarse permite que por comparación se logre una distribución armónica de las remuneraciones y se eviten injustificadas situaciones de desequilibrio entre las diversas dependencias comprendidas en el ámbito de la Secretaría recordada;

Que, en otro orden de ideas, cabe señalar que el Poder Ejecutivo, en virtud de las mismas razones que propiciaron el decreto Nº 7.920/61, ha acordado bonificaciones análogas para el personal de otras jurisdicciones administrativas, las cuales comenzarán a regir a partir del día 1º del mes en curso, circunstancia por la cual se estima que corresponde disponer igual fecha de iniciación para que los agentes de la Secretaría de Hacienda comiencen a percibir el beneficio acordado, puesto que a la vez de existir evidentes razones de equidad que aconsejan dicho tratamiento, el ordenamiento a que ajusta sus actos de gobierno el Poder Ejecutivo, hace que las medidas que revistan una naturaleza como las suscriptas deban tener idénticos términos de aplicación en todos los aspectos generales que le son afines;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Los beneficios establecidos por el artículo 3º del decreto Nº 7.920/61 comenzarán a regir con anterioridad al 1º de setiembre de 1961.

ARTICULO 2º.- Inclúyese en el régimen establecido por el

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 425.-

decreto Nº 7.920/61 al personal que se desempeña en el - "Gabinete del Ministro" y al comprendido en el Escalafón aprobado por el decreto Nº 11.616/60.- Para el personal mencionado en primer término regirá la escala de bonificaciones especiales mensuales que determina la planilla anexa al artículo 3º del decreto Nº 7.920/61, la cual se aplicará de acuerdo con la relación de sueldos y límites que se establecen por el citado acto de gobierno y para el segundo, las bonificaciones especiales mensuales que se detallan en las planillas anexas.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Hacienda a sus efectos.-

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Jorge Wehbe

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 2º

PERSONAL COMPRENDIDO EN EL DECRETO Nº 11.616/60

MENSUALIZADO

CATEGORIAS	IMPORTE M$N.
III a X	2.000.-
XI y XII	1.800.-
XIII	2.000.-
XIII (a)	900.-
XIII (b)	2.000.-
XIII (c) a XIII (f)	800.-
XIV a XIX	1.600.-
XX	1.000.-

DE MAESTRANZA Y OBRERO

I y II	1.800.-
III a IX	1.600.-

DE SERVICIO

I a VI	1.600.-

JORNALIZADO

	Por Reunión
A-O a V	100.-
A-VI	90.-
A-VII a XVI	80.-
B-I	90.-
B-II a VIII	80.-
C-I a VI	80.-

ACTO: DECRETO Nº 8.420/61.-

MATERIAS: PROMOCIONES - CONCURSOS - BONIFICACIONES ESPECIALES - JUNTA EXAMINADORA

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1961.-

Visto la observación formulada por el Tribunal de Cuentas de la Nación y subsistiendo las razones que originaron el dictado de los decretos Nros. 8.179/61 y 8.180/61 (1),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Insístese en el cumplimiento de lo dispuesto por los decretos Nros. 8.179/61 y 8.180/61.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo
Jorge Wehbe

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1447.-

ACTO: RESOLUCION Nº 7.362/61.-

MATERIAS: CASA DE MONEDA - PRIMAS DE PRODUCCION

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1961.-

CONSIDERANDO:

Que por decreto Nº 6.483/61 (¹), se aprobó el régimen de "Primas de Producción" para el personal que presta servicios efectivos en la Casa de Moneda de la Nación, asignándose al mismo tiempo la suma de m$n. 1.800 mensuales a todos los agentes de la repartición citada, en concepto de prima base fija por tareas industriales;

Que, posteriormente, por resolución Nº 7.333/61 ("), se declaró que el beneficio en cuestión alcanzaba también a todos los agentes que se desempeñasen en la Casa de Moneda en calidad de adscriptos, siempre que su cometido se ajustase a las normas y características del nombrado sistema de "Primas de Producción";

Que, finalmente, por decreto Nº 7.920/61 (°), se asignó al personal de esta Secretaría de Estado una bonificación especial mensual, de acuerdo con los índices fijados en las planillas correspondientes, exceptuándose de dicho tratamiento a los agentes amparados por el recordado decreto Nº 6.483/61;

Que, dada su situación especial de revista -y de no

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1429.- //-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1440.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1442.-

dictarse la aclaración necesaria- aparecería como que el personal adscripto de que se trata pudiese recibir un doble beneficio, en razón de las mejoras acordadas por los distintos actos a que se ha hecho referencia;

Que, en consecuencia, frente a las disposiciones anteriores, debe determinarse la forma en que procede liquidar las bonificaciones comentadas, a efectos de cumplir las exclusiones que determina el decreto Nº 7.920/61;

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 3º del decreto Nº 6.483/61,

EL SECRETARIO DE HACIENDA
R E S U E L V E :

1º.- Declárase incompatible para el personal que presta servicios en calidad de adscripto en la Casa de Moneda de la Nación, la percepción mensual simultánea de los beneficios acordados por los decretos Nros. 6.483 y 7.920 del año en curso.

2º.- Déjase establecido que en tales supuestos y hasta tanto se mantenga su actual situación de revista, al citado personal deberá liquidársele únicamente el beneficio dado por el decreto Nº 6.483/61.

3º.- En caso de quedar sin efecto las respectivas adscripciones, a tales agentes se les continuará acordando el beneficio señalado en el punto 2º de la presente hasta el día de su reintegro a la repartición de origen, fecha a partir de la cual cesará dicha liquidación y comenzará a practicársele la que resulta por aplicación del decreto Nº 7.920/61.

4º.- Comuníquese a quienes corresponda y archívese.-

Fdo. JORGE WEHBE

ACTO: DECRETO Nº 16.020/60.-

MATERIAS: JERARQUIZACION - FACULTADES

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1960.-

Visto el decreto Nº 9.252/60 (1), y

CONSIDERANDO:

Que la aplicación práctica de los sistemas de compensaciones implantados por el citado ordenamiento ha demostrado la conveniencia de introducir ajustes a los mismos para facilitar el procedimiento de liquidación;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Substituir el artículo 7º de las normas aprobadas por el decreto Nº 9.252/60 por el siguiente:

"Artículo 7º.- Facúltase a los señores Ministros, Secretarios de Estado, Procurador del Tesoro de la Nación, la Presidencia de la Nación y el Tribunal de Cuentas de la Nación, para establecer, con arreglo a las necesidades del servicio y al importe de los créditos presupuestarios que se habiliten para cada jurisdicción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6º, del decreto que aprueba las presen

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1216.-

//-

"tes normas, las funciones a cuyos titulares o reem-
"plazantes naturales o a ambos a la vez, alcance, reu
"nidas las condiciones requeridas, los regímenes de
"dedicación funcional" y "servicios calificados".-

ARTICULO 2°.- Derogar el artículo 6° de las normas aprobadas por el decreto N° 9.252/60.

ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Hacienda.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Alvaro C.Alsogaray
Guillermo W.Klein

ACTO: Fallo del 2 de agosto de 1961.

MATERIAS: ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 25) - ESTABILIDAD

SIRIANNI, Pascual Vicente s/ Decreto 6.666/57.-

CONSIDERANDO:

Que por decreto 15.183, del 5 de diciembre de 1960, el Poder Ejecutivo Nacional exoneró al señor Pascual Vicente Sirianni del cargo de Vista de Primera que desempeñaba en la Aduana de la Capital, en virtud de haber aceptado que cinco cajones llegados a puerto a bordo del vapor "Aguapey" contenían efectos personales cuando en realidad eran mercaderías.

Que contra este decreto interpuso el interesado el recurso establecido por el art. 24 del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública, aprobado por decreto-ley 6666/57 (1).

Que dicho recurso carece de la expresión de fundamentos que exige el art. 25 del mismo cuerpo legal, lo cual, según afirma el interesado, se debe a no haber podido examinar las actuaciones luego de dictado el decreto de cesantía. En tales condiciones, como bien dice el señor Fiscal de Cámara, puede excusarse tal deficiencia y con //-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

siderarla suplida con la fundamentación que contiene el escrito de traslado presentado ante el Tribunal.

Que, en cuanto al fondo del asunto, el recurrente no niega el hecho que se le imputa; antes, bien lo reconoce expresamente. Sus defensas se limitan a sostener que la sanción es excesiva, pues, dice, existen muchos atenuantes a su favor.

Que el Tribunal tiene ya declarado carecer de competencia para entrar en este terreno, salvo caso de manifiesta arbitrariedad de los orgános administrativos (ver: "Peyret", sentencia del 31 de julio de 1961; "Sanchez", sentencia del 23 de mayo del corriente año)(*), lo que no ocurre aquí.

Por estas consideraciones, se desestima el presente recurso.

Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones.

JUAN CARLOS BECCAR VARELA
HORACIO H. HEREDIA
ADOLFO R. GABRIELLI.

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1417.-

ACTO: DECRETO Nº 7.034/61.-

MATERIAS: PLAN DE RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - C.E.P.R.A.

Buenos Aires, 16 de agosto de 1961.-

Visto lo dispuesto por el punto 10 del anexo al artículo 2º del Decreto Nº 2.351/61 (') que aprueba el Plan de Trabajos sobre Racionalización Administrativa, por el cual se encomienda a la Secretaría de Hacienda proyectar las medidas necesarias para que la Dirección Nacional de Estadística y Censos pueda mantener información estadística periódica sobre movimiento de altas y bajas en la Administración Pública, así como toda clase de estadísticas relacionadas con ella en personal, bienes muebles, inmuebles, automotores, etc., y que comprenderá a los otros Poderes del Estado y a las Provincias y Municipalidades con vinculación efectiva entre ella y la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección General del Servicio Civil de la Nación y la Contaduría General de la Nación cubrirán el suministro de las informaciones básicas dentro del ámbito nacional, quedando por establecer la forma en

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1371.-

que habrá de encararse la correspondiente a las jurisdiccciones provinciales y municipales;

Que en ese sentido y con el objeto de llevar a cabo en forma integral el plan propuesto, que permita reflejar la situación total del país en la materia, se estima necesario requerir la colaboración de los gobiernos provinciales, para obtener las informaciones básicas correspondientes a los mismos;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- El Ministerio del Interior invitará a los Gobiernos provinciales a adoptar en sus respectivos Estados similares medidas a las comprendidas en el punto 10° del anexo al artículo 2° del Decreto N° 2.351/61, con el fin de suministrar periódicamente a la Dirección Nacional de Estadística y Censos las informaciones básicas correspondientes a organismos provinciales y municipales en jurisdicción provincial.

ARTICULO 2°.- Considérese el presente decreto como complementario del número 2.351/61.

ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de Interior y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Hacienda a sus efectos.-

FRONDIZI - Luis R. Mac Kay
Alfredo R. Vítolo - Jorge Wehbe

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº. 1453.-

ACTO: DECRETO Nº 7.921/61.-

MATERIAS: JUNTA NACIONAL DE REPRESION DEL CONTRABANDO

COMPENSACIONES

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1961.-

Visto el Expediente Nº 60.674/61 de la Secretaría de Estado de Hacienda, los informes producidos en el mismo y

CONSIDERANDO:

Que la Junta Nacional de Represión del Contrabando, creado por Decreto Nº 1.588/58 y cuyas facultades y atribuciones fueron ampliadas por Decreto Nº 352/59, no cuenta en su presupuesto con créditos para designar al personal que imprescindiblemente necesita;

Que no obstante, ante las dificultades que se le creara al Organismo para la obtención de personal en tal carácter que estuviera capacitado para el desempeño de tareas que requieren especialidad o tecnicismo, debió recurrir a los servicios de algunas personas que reunieran esas condiciones;

Que la partida de "Compensación por Servicios Especiales" que la citada Junta dispone en su Presupuesto, fué creada con el objeto de brindar a los agentes que presten sus servicios en la misma con carácter de adscriptos o en comisión -cualquiera fuera su situa-

//-

putado a la Partida "Compensación por Servicios Especiales" (2 - 1 - 52 - 9/635 - 7 - 039 - 1154) del Presupuesto aprobado para el ejercicio de 1960/1961 y similar de los presupuestos futuros.

ARTICULO 4º.- Exclúyese al personal que presta servicios en la mencionada Junta, de los decretos Nros. 1.134/32 y complementarios: 25.068/47 y 13.834/60 (*), artículo - 8º, inciso d).

ARTICULO 5º.- Ratifícanse las designaciones, asignaciones y retribuciones fijadas por la Junta Nacional de Represión del Contrabando hasta el 31 de agosto de 1961 en los conceptos expresados en los arts. 1º y 2º y desde la fecha en que se incluyera en su presupuesto la partida "Compensación por Servicios Especiales".

ARTICULO 6º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Hacienda.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Hacienda a sus efectos.

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Jorge Wehbe

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1274.-

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº 1454.-

ACTO: EXPEDIENTE Nº 31.247/60.-

MATERIAS: ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Arts. 37, inc.h) y 38, incs. a) y b) - SUMARIOS - JUNTA DE DISCIPLINA - CESANTIA - EXONERACION

//ñor Secretario de Hacienda:

Esta Junta ha tomado ya en las presentes actuaciones la intervención que "necesariamente" le compete, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 44º del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, al dictaminar sobre el mérito del sumario dispuesto por resolución de fs. 9/10 (v. fs. 26/28).

Parecería, pues, que habiéndose dictado resolución administrativa en el sumario en cuestión (fs. 31/34), esta Junta carece de competencia para volver a intervenir en las presentes actuaciones. Sin embargo, la atenta lectura del citado art. 44º lleva a la conclusión de que las Juntas de Disciplina, además de sus intervenciones "necesarias", pueden ser llamadas a dictaminar también en actuaciones que no constituyen sumario o que han pasado ya de la etapa sumarial, en casos que, por no estar reglamentados, deben ser decididos, a juicio de esta Junta, por el Secretario de Estado que corresponda.

//-

Ello no obstante, por tratarse del primer caso en que es llamada a intervenir al margen de todo sumario, esta Junta ha resuelto dictaminar en el presente y así lo hace.

De acuerdo con lo aconsejado en el dictamen de esta Junta de fs. 26/28, con fecha 30 de junio de 1960, se dictó el decreto 7386 por el cual se dispuso la cesantía del agente Osvaldo Mosquera, por hallarse encuadrada su situación en el inciso h) del art. 37 del Estatuto, "sin perjuicio de agravar dicha medida según sean las resultancias a que se arribe en la causa que se le sigue ante la justicia" (fs. 34).

Con fecha 12 de setiembre de 1960 se dictó sentencia en la causa, condenando al agente Mosquera a la pena de tres meses de prisión, a cumplir, por el delito de hurto previsto por el art. 162 del Código Penal, la que fue confirmada por la Cámara en cuanto a la penalidad y modificada en cuanto a la calificación del hecho, por considerarlo hurto en grado de tentativa (arts. 42 y 162 del Código Penal).

La cuestión que aquí se plantea es, pues, si en presencia de esta condena, corresponde agravar la sanción que en el orden administrativo se impuso al agente Mosquera o, para decirlo concretamente, si dicha condena puede ser causa de su exoneración.

Si recurrimos al art. 38 del Estatuto, vemos que entre las causas de exoneración figura la siguiente:"c) delito contra la Administración". El delito que en grado de tentativa cometió el agente Mosquera -hurto de efectos pertenecientes al Estado- es, sin duda, un delito en perjuicio de la Administración, pero no un delito "contra la Administración", pues debe suponerse que esta expresión ha sido usada en el Estatuto con el sentido que tiene en el Código Penal, donde bajo ese rótulo se han previsto los delitos de "atentado y resistencia contra la autoridad", "desacato", "usurpación de autoridad", -

"Abuso de autoridad", "cohecho", "prevaricato", "malversación de caudales públicos", "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas", "exacciones ilegales", etc. (arts. 237 a 281).

Con pocas variantes, todas estas figuras delictivas estaban comprendidas en el código penal anterior bajo el título de "delitos peculiares a los empleados públicos", y como esta expresión es usada en el inc. b) del art. 4º del Estatuto, se ha juzgado que tal disposición se refiere a esos mismos delitos (v. dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos publicado en el "Digesto de Hacienda" Nº 1374, pags. 4/5).

De este modo, el Estatuto resulta congruente al disponer que los delitos cuya comisión impide el ingreso o reingreso a la Administración Pública, constituyen al mismo tiempo causales de exoneración.

Teniendo en cuenta que el agente Mosquera ha cometido un delito que no se encuentra entre los ya enumerados y que tampoco puede considerarse comprendido entre los que caracteriza el inc. a) del art. 38, que suponen condena de reclusión, o de prisión por más de cinco años (v. dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, publicado en el Digesto de Hacienda; número citado, pags. 5 a 12), a juicio de esta Junta no corresponde convertir en exoneración la cesantía de que aquél ha sido objeto.

JUNTA DE DISCIPLINA, junio 27 de 1961.-

ISMAEL F. ALCHOURRON - MARTIN E. BRUNO - LEONARDO P. VERI - RICARDO F. RAFFAINI - CARLOS A PATALANO

//ñor Secretario de Hacienda:

Se consulta a esta Dirección acerca de si la situación del agente Osvaldo Mosquera -declarado cesante por

decreto 7386/60 y condenado luego por tentativa de hurto en perjuicio de la Administración- encuadra en los términos del inc. c) del art. 38 del Estatuto aprobado por decreto-ley 6666/57 (1), por el que se dispone que un "delito contra la Administración" es causa de exoneración - del agente.

Esta Dirección considera:

a) que es indudable que cuando las leyes se refieren a materias o instituciones propias de los códigos y leyes especiales, ellas deben entenderse según el concepto que tales códigos o leyes les han atribuído;

b) que en el derecho penal argentino no hay otros delitos contra la Administración que los previstos en los arts. 237 a 281 del respectivo Código, los cuales están destinados a "proteger el desenvolvimiento funcional correcto de la Administración" (Soler, t. V, p. 102);

c) que no se encuentran en este caso los delitos de hurto y de robo, con respecto a los cuales la condición de empleado público del autor no constituye siquiera forma calificada de ellos.

Por lo expuesto, estima esta Dirección que la interpretación que la Junta de Disciplina de esta Secretaría ha dado al inc. a) del art. 38 del Estatuto, en su dictamen de fs. 50/51, es correcta.

DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS JURIDICOS, setiembre 5 de 1961.-

Fdo. CRISTIAN GIMENEZ DEMARIA
Director General

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

ACTO: DECRETO Nº 8.263/61.-

MATERIAS: PLAN DE RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION - REGISTRO DEL PERSONAL CIVIL - SERVICIO DE ESTADISTICA

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1961.-

Visto lo establecido por el decreto Nº 2.351/61 (1) y el Plan de Trabajos sobre Racionalización Administrativa adjunto al mismo, y

CONSIDERANDO:

Que se han dado por finalizados los estudios previos tendientes a poner en ejecución los puntos del citado Plan en lo referente al registro y movimiento de ingresos y egresos del personal civil que revista en la Administración Nacional;

Que existe actualmente el organismo con funciones, elementos y fuentes documentales que facilitarán la cumplimentación de los citados puntos;

Que se halla en plena vigencia el régimen legal establecido por los decretos nºs. 6.441/47, 26.242/48 y 4.971/59 que persigue idéntico objetivo al enunciado en el citado Plan referente a información en materia de per

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1371.-

sonal;

Que la consecución de dicho objetivo se halla supeditada, principalmente, al cumplimiento que a las normas del mencionado régimen presten los distintos sectores comprendidos en su órbita;

Que el incumplimiento, la transgresión, o las reticencias a la observancia de dichas normas dificulta e impide el logro de los fines perseguidos entorpeciendo y viciando la labor de conjunto a cargo del aludido organismo;

Que resulta imperioso propender al estricto e ineludible cumplimiento de las normas sobre dicha materia, responsabilizando y sancionando severamente la inobservancia a las mismas;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Los Ministerios, Secretarías de Estado, Entidades Descentralizadas y Empresas del Estado, deberán suministrar a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación toda la información que sobre personal la misma les requiera por intermedio de su Departamento Registro del Personal Civil, en la forma y plazos que en cada oportunidad establezca, de acuerdo con lo dispuesto por los decretos nos. 6.441/47, 26.242/48 y 4.971/59.

ARTICULO 2°.- Sin perjuicio de lo previsto por el artículo 3° del decreto n° 4.971/59, la falta de cumplimiento de las obligaciones emergentes del artículo anterior será considerada como violación de los deberes establecidos en el artículo 6° inciso d), del Estatuto del Personal Civil de la Administración Nacional (decreto-ley n° 6.666/57) (") y será sancionada conforme a lo dispuesto

(") Ver Digesto Administrativo N° 254.-

en los artículos 36° al 38° de aquel cuerpo normativo, o sus equivalentes en similares regímenes legales vigentes en los organismos no comprendidos en dicho Estatuto. En estos casos la Dirección General del Servicio Civil de la Nación comunicará directamente tal defecto al organismo en incumplimiento quien deberá ordenar, ante esa sóla comunicación, la iniciación inmediata del sumario correspondiente.

ARTICULO 3°.- La Dirección General del Servicio Civil, en el término no mayor de 60 días a contar de la fecha, organizará y mantendrá un servicio de estadística mensual, por jurisdicciones, de los ingresos y egresos de personal en la Administración Nacional.

ARTICULO 4°.- La Dirección General del Servicio Civil proporcionará a la Dirección Nacional de Estadística y Censos, toda cifra o información estadística que obtenga como resultado del cumplimiento de sus funciones específicas y, además, periódicamente le suministrará las cifras del movimiento mensual de ingresos y egresos de agentes civiles operado en la Administración Nacional.

ARTICULO 5°.- Invítase a los señores Presidentes de las Cámaras del Honorable Congreso y al señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a prestar su colaboración a fin de que en sus respectivas jurisdicciones dicten resoluciones en armonía con el presente decreto a efectos de que a la Dirección General del Servicio Civil se le faciliten las informaciones referentes a personal que solicite con destino a las compilaciones estadísticas.

ARTICULO 6°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Jorge Wehbe

ACTO: DECRETO Nº 8.493/61.-

MATERIA: C.E.P.R.A.

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1961.-

Visto lo establecido en el punto 7) del Plan de Trabajos anexo al artículo 2º del decreto Nº 2.351/61 (1), y

CONSIDERANDO:

Que las funciones acordadas al Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A.), requieren la posesión por este Organismo de informaciones completas relacionadas con la Administración Pública;

Que el artículo 7º del decreto Nº 10.974/58 (2) lo faculta para solicitar todos los informes que requiere su cometido;

Que la obligación de facilitar esa tarea incumbe - tanto a los organismos de la administración central como a los descentralizados y empresas del Estado, en razón de que el citado Comité actúa como colaborador directo del Presidente de la Nación, quien tiene a ese - respecto las facultades y responsabilidades que resul - tan del artículo 86º de la Constitución Nacional;

Por ello,

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1371.-
(2) Ver Digesto Administrativo Nº 681.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Los organismos de la administración, tanto central como descentralizada, y las empresas del Estado - deberán obligatoriamente suministrar las informaciones - que para el cumplimiento de su cometido requiera el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa - (C.E.P.R.A.), y facilitarle el acceso directo a las fuentes de información cuando ello sea necesario a juicio de dicho Comité.

ARTICULO 2°.- Los organismos mencionados deberán asimismo prestar su colaboración en la realización de los estudios e investigaciones que el Comité efectúa.

ARTICULO 3°.- La falta de asistencia o colaboración o la negativa a suministrar las informaciones pedidas, será - considerada falta grave y sancionada en consecuencia, previa determinación de los responsables.

ARTICULO 4°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo
Jorge Wehbe

ACTO: DECRETO Nº 8.494/61.-

MATERIAS: PATRIMONIO DEL ESTADO - IMPRENTAS OFICIALES

VENTAS

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1961.-

Visto lo dispuesto por el artículo 36º de la Ley Nº 15.796 (1), y

CONSIDERANDO:

Que diversos Organismos del Poder Ejecutivo Nacional poseen un servicio de imprenta destinado a cumplir funciones circunstanciales;

Que no se justifica el mantenimiento del referido servicio frente a los recursos que son necesarios destinar para su sostenimiento en gastos de personal, maquinarias, útiles, etc.;

Que la política actual del Poder Ejecutivo Nacional tiende a evitar que el Estado desarrolle funciones que pueden ser cumplidas eficientemente por la actividad privada y que no importen la prestación de servicios públicos esenciales;

Que resulta conveniente que el Poder Ejecutivo se desprenda del cumplimiento de ese servicio, lo que de ninguna manera puede afectar el desarrollo normal de las funciones encomendadas a los Organismos de su juris

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1333.-

dicción, dado el carácter circunstancial mencionado y atento que el mismo puede ser encomendado a la actividad privada mediante la adopción de un régimen contractual que permitirá reducir los gastos considerablemente;

Por ello y de acuerdo con los artículos 33° y 36° de la Ley 15.796 (").

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Ordénase la venta de todas las imprentas que posean a la fecha los Ministerios, Secretarías de Estado, Empresas del Estado, entidades autárquicas y demás dependencias en jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional, con excepción de las pertenecientes a los organismos de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Defensa, de la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas del Ministerio del Interior, de la Casa de la Moneda de la Secretaría de Estado de Hacienda y de las Administraciones de la Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino.

ARTICULO 2°.- Encomiéndase la venta de esos bienes a la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación, quedando autorizada para realizarla por licitación o en remate público por intermedio de organismos oficiales especializados.

ARTICULO 3°.- El ofrecimiento de venta podrá efectuarse en lotes, en block o individualmente cada uno de los elementos constitutivos técnicos, maquinarias y útiles.

ARTICULO 4°.- Todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional mencionados en el artículo 1° deberán elevar a la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación, dentro de los diez (10) días de la fecha, un inventario detallado de los bienes a transferir, incluyendo la nómina del personal afectado a su servicio.

ARTICULO 5°.- La tasación de esos bienes deberá realizar

(") Ver Digesto Administrativo N° 1324.-

se dentro de los 15 días de vencido el plazo señalado - precedentemente a cuyo fin la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación requerirá de cualquiera de esos organismos la designación de técnicos que valuarán los - bienes inventariados, aconsejarán la base de venta y la conveniencia de adoptar cualquiera de las modalidades señaladas en el artículo 3º, de acuerdo al estado general de los bienes. La designación deberá comunicarse a la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación dentro - de los 3 días del requerimiento, en cuya oportunidad el o los funcionarios designados deberán asumir esas funciones transitorias.

ARTICULO 6º.- La función encomendada a la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación será realizada por - intermedio de la Dirección General de Suministros del Estado de la Secretaría de Estado de Hacienda, quien tendrá a su cargo las tareas administrativas originadas por las ventas.

ARTICULO 7º.- La Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación queda autorizada, cuando la modalidad de la - venta lo haga aconsejable, a acordar plazo para el pago a cuyo fin incluirá en las bases del remate o licitación esta condición por el cincuenta por ciento del precio obtenido, pagadero en veinte mensualidades iguales y consecutivas con más el diez por ciento de interés anual computado sobre saldos deudores con garantía de prenda con registro.

ARTICULO 8º.- Dentro de los veinte días de vencido el plazo a que se refiere el artículo 5º la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación procederá a efectuar las publicaciones pertinentes, de acuerdo a las normas legales vigentes, para la liquidación de los bienes incluídos en el presente decreto.

ARTICULO 9º.- Las maquinarias y demás elementos cuya ven

ta se ordena en el presente decreto quedarán depositados en los lugares en que se encuentran, a la orden de la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación, quien impartirá las instrucciones pertinentes una vez que se encuentren finiquitados los trámites necesarios para realizar esos bienes.

ARTICULO 10.- Cuando los bienes se encuentren ubicados fuera del radio de la Capital Federal y Gran Buenos Aires, la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación podrá designar funcionarios de la Dirección General de Suministros del Estado para que procedan a su venta en el lugar en que se encuentren o bien resolver el traslado a la Capital Federal.

ARTICULO 11.- Para el cumplimiento de lo establecido en la primera parte del artículo anterior, facúltase a la Dirección General de Suministros del Estado a liquidar y abonar a sus funcionarios los importes provenientes de gastos de movilidad, viáticos, comida y servicios extraordinarios y a emitir órdenes de pasajes, de acuerdo con las normas establecidas por la legislación vigente.

ARTICULO 12.- Las sumas que se perciban en virtud del presente decreto serán acreditadas a Rentas Generales o a los destinos específicamente fijados en leyes especiales y la misma imputación tendrán los gastos que se originen.

ARTICULO 13.- Todas las ventas a que se refiere el presente decreto hasta la suma de Tres Millones de Pesos Moneda Nacional (m$n. 3.000.000) serán aprobadas por el señor Secretario Técnico de la Presidencia de la Nación, conforme a las normas legales vigentes. Las que excedan de esa suma y hasta Cinco Millones de Pesos Moneda Nacional (m$n. 5.000.000) serán aprobadas por el Ministro o Secretario de Estado en cuya jurisdicción se encuentren los bienes. Las que excedan de esta última suma serán aprobados por decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 14.- A partir del 1º de diciembre de 1961 los organismos incluidos en el presente decreto procederán a realizar los trabajos específicos de imprenta por medio del régimen contractual con la actividad privada. A partir de la misma fecha quedarán suprimidas todas las partidas presupuestarias destinadas a atender esos servicios a cuyo efecto los organismos responsables elevarán los reajustes presupuestarios pertinentes a consideración de la Secretaría de Estado de Hacienda con la anticipación necesaria.

ARTICULO 15.- El personal afectado a los servicios cuya venta se dispone será distribuído mediante el régimen del Decreto Nº 9.718/59 (") y, en caso de no ser absorbido, le serán aplicadas las disposiciones del artículo 36º de la Ley 15.796 y su decreto reglamentario.

ARTICULO 16.- Los Directores Generales de Administración de los organismos mencionados en el artículo 1º o los funcionarios que hagan sus veces serán directamente responsables del estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 4º y 14º del presente decreto, bajo apercibimiento de considerarlos incursos en falta grave y de disponer la instrucción de sumario administrativo, con suspensión automática del cargo, dándose intervención a la Procuración General del Tesoro de la Nación si la jerarquía del responsable así lo requiere, conforme a las normas en vigor.

ARTICULO 17.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

(") Ver Digesto Administrativo Nº 854.-

ARTICULO 18.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo
Jorge Wehbe

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº. 1458.-

ACTO: DECRETO Nº 8.533/61.-

MATERIAS: JUBILACIONES - LIMITACION DE SERVICIOS

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1961.-

Visto que hay en actividad elevado número de funcionarios en condiciones de obtener los beneficios de la jubilación ordinaria, y

CONSIDERANDO:

Que el agente que se encuentra en condición de obtener la jubilación ordinaria ha completado su ciclo de tareas dentro de la Administración Pública y no debe permanecer en sus cuadros más allá del plazo en que normalmente tiene que producirse su retiro;

Que el derecho al progreso en la carrera administrativa, que estatuye el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, exige la renovación permanente del elemento humano, razón por la cual siendo la jubilación el medio natural para el cumplimiento de ese proceso, no puede ser alterado sin perjuicio de todo el mecamismo escalafonario;

Que el mencionado recurso permite, por consiguiente, la apertura de los escalafones del personal, facilitando el legítimo ascenso de los agentes que reunan las condiciones máximas de idoneidad, promoción que actualmente se ve obstaculizada por la permanencia en los cargos inmediatos superiores de personal en las condicio-

//-

nes referidas, con el lógico detrimento del entusiasmo y rendimiento de los afectados por esa circunstancia;

Que el retiro obligatorio existe con evidentes beneficios, en otras instituciones fundamentales del Estado; tal resultado debe considerarse como un valioso precedente para su aplicación analógica a las restantes actividades del Estado;

Que si bien algunos regímenes jubilatorios establecen que el personal no podrá ser obligado a jubilarse, hasta transcurrido cierto plazo de haber cumplido los recaudos necesarios, el Poder Ejecutivo está autorizado por el artículo 36° de la Ley N° 15.796 (*) para prescindir por razones de racionalización administrativa y de economías, de los agentes que están en esas condiciones;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Dentro de los 30 (TREINTA) días corridos de la publicación del presente decreto, los señores Ministros, Secretarios de Estado, Procurador del Tesoro, el TRIBUNAL DE CUENTAS, la PRESIDENCIA DE LA NACION y las autoridades de los organismos civiles del Estado con facultades legales para remover personal (Administración Central, Servicios de Cuentas Especiales, Organismos Descentralizados, Obras Sociales, Empresas del Estado y Plan de Trabajos Públicos), propondrán o resolverán la baja de aquellos agentes que sean titulares de una jubilación ordinaria o prestación similar o bien que reúnan los extremos de edad y antigüedad para obtener tales beneficios.

ARTICULO 2°.- El personal afectado por el presente decreto será indemnizado por una suma igual a 3 (TRES) meses

---

(*) Ver Digesto Administrativo N° 1333.-

de sueldo.

A los efectos de este Artículo y de lo establecido en el artículo 5° entiéndese por sueldo la última remuneración (Sueldo o jornal) nominal mensual básica del agente y demás asignaciones o adicionales, regulares y permanentes y las sumas que se abonen en concepto de compensaciones acordadas en virtud de los decretos números 9.252/60 ("), 10.852/60 (+) y 16.023/60, y asimismo de los regímenes de sobrepagas inspirados en estas disposiciones.

ARTICULO 3°.- Las indemnizaciones serán abonadas en todos los casos en cuotas mensuales sucesivas equivalentes al 70% (SETENTA) por ciento del importe de la percepción nominal mensual que tenía el agente, determinada según lo establecido en la parte "in fine" del Artículo 2°. El saldo necesario para cubrir el total de la indemnización y que no alcance al porcentaje citado, será abonado con la última cuota.

ARTICULO 4°.- Podrá proponerse al Poder Ejecutivo la contratación de los agentes comprendidos en el Artículo 1°, cuando los mismos sean imprescindibles para el normal desenvolvimiento del servicio. Los proyectos de decretos respectivos serán acompañados por un memorando de los señores Ministros y Secretarios de Estado, en el cual se justificarán las razones que lo fundamentan, y deberán contar con dictamen favorable del COMITE EJECUTIVO DEL PLAN DE RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA (C.E.P.R.A.).

ARTICULO 5°.- Hasta tanto las respectivas Cajas de Previsión otorguen los beneficios correspondientes, y una vez

---

(") Ver Digesto Administrativo N° 1216.-

(+) Ver Digesto Administrativo N° 1261.-

transcurrido el término previsto para el pago de la indemnización establecido en el artículo 36° de la ley número 15.796, los agentes afectados por lo dispuesto en el artículo 1°, percibirán el 70 (SETENTA) por ciento sobre sus remuneraciones actuales, determinadas en la forma indicada en el artículo 2°, que les será abonado con las partidas para pago de haberes, por la correspondiente Dirección de Administración u organismos que hagan sus veces.

El goce del referido anticipo no podrá prolongarse por un período mayor de 12 (DOCE) meses transcurrido el cual, cesará su percepción por los interesados. Tan pronto sea otorgada la jubilación por la Caja respectiva, ésta reintegrará al organismo respectivo lo que hubiere abonado, hasta concurrencia de los haberes jubilatorios que correspondan, por ese lapso, a los beneficiarios.

ARTICULO 6°.- Los distintos organismos del Estado procederán de inmediato, a extender las certificaciones de servicios que correspondan a los agentes encuadrados en lo dispuesto por el artículo 1° del presente decreto, y a su vez, las Cajas de Previsión que deben hacer efectivos los beneficios correspondientes, comunicarán oportunamente a dichos organismos, la nómina de los agentes que tuvieran acordada definitivamente la jubilación o prestación que en tal concepto les correspondiere.

ARTICULO 7°.- Los organismos del Estado imputarán provisionalmente las erogaciones que demande el cumplimiento del presente decreto y que correspondan al presente ejercicio financiero, al disponible de los créditos presupuestarios para "Gastos en Personal".

ARTICULO 8°.- Los Directores Generales de Administración de los organismos mencionados en el artículo 1° o los funcionarios que hagan sus veces y los Directores de Personal, serán directamente responsables del estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el mismo, bajo

apercibimiento de considerarlos incursos en incumplimiento intencional de órdenes legales -art.38 inc.d) del decreto Nº 6.666/57 (-) y de disponer la instrucción de sumario administrativo, con suspensión automática del cargo, dándose intervención a la Procuración General del Tesoro de la Nación, si la jerarquía del responsable así lo requiriera, conforme a las normas en vigor.

Serán asimismo responsables los organismos internos o externos de contralor financiero, en la medida de su intervención y sancionados de acuerdo a las disposiciones del Capítulo IV del mencionado Estatuto.

ARTICULO 9º.- Incurrirán en la responsabilidad del artículo anterior, las autoridades pertinentes del Estatuto del Docente y sancionados mediante las normas y procedimientos que en su Estatuto -ley 14.473- se establecen.

ARTICULO 10º.- Autorízase al COMITE EJECUTIVO DEL PLAN DE RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA (C.E.P.R.A.) para aclarar los alcances del presente decreto, en los casos en que sea necesario.

ARTICULO 11º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 12º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI - Alfredo Vítolo
Jorge Wehbe

(-) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

Dpto. DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - Min. de Hacienda

ACTO: DECRETO Nº 8.534/61.-

MATERIAS: AUTOMOTORES OFICIALES - AUTOMOTORES ADSCRIPTOS - COMPENSACIONES - PROHIBICIONES - C.E.P.R.A. - DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO (Cuenta Especial)

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1961.-

Visto el estudio realizado por el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A.) sobre el régimen de los automotores oficiales destinados al traslado de funcionarios, y

CONSIDERANDO:

Que las estadísticas realizadas con motivo de la implantación del régimen establecido por los decretos números 10.977/58 (') y 4/59 (") para el uso de los automotores con motivo de ese tipo de movilidad, ha demostrado que la erogación total a cargo del Estado alcanza cifras de magnitud tal que requiere un reajuste urgente;

Que por ello se justifica un cambio total del sistema en forma que permita aliviar las finanzas públicas sin dejar de atender a la necesidad de medios propios de movilidad en aquellos casos en que resulten conse- -

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 684.-

(") Ver Digesto Administrativo Nº 696.-

cuencias ineludibles de la función pública;

Que para el mejor logro de la finalidad perseguida - corresponde vincularla con la propia responsabilidad de los funcionarios, suprimiendo así las costosas erogaciones que demandan las reparaciones y el empleo de conductores profesionales, conclusiones a que han llegado organizaciones privadas al encarar situaciones similares;

Que con motivo de los estudios realizados se ha considerado que se puede resolver el problema facilitando a los agentes del Estado que se encuentren en determinadas condiciones, la posibilidad de adquirir su propio automóvil adscribiéndolo luego al servicio oficial conforme lo autoriza el artículo 17° de la Ley 11.672 complementaria permanente del presupuesto (edición 1943);

Que esta medida impulsará con mayor intensidad la racionalización de la Administración General y de las empresas del Estado para que las funciones administrativas - puedan ser cumplidas de una manera más eficaz;

Que un nuevo régimen sobre movilidad oficial está - previsto en el punto 18) del Plan de Trabajo anexo al decreto N° 2.351/61 (-), según el artículo 2° del mismo;

Que el movimiento de los fondos correspondientes a - la aplicación de la medida propuesta ha de registrarse - por la apertura de una cuenta especial que dispondrá la Contaduría General de la Nación;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Limítase el uso de automóviles de propiedad del Estado, destinados al traslado individual de funcionarios, con servicios de choferes oficiales, a los siguientes casos:

(-) Ver Digesto Administrativo N° 1371.-

a) Flota de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con 10 (diez) automóviles.
b) Flota de protocolo en Ministerios y Secretarías de Estado a razón de hasta 5 (cinco) automóviles por jurisdicción, cuyas autoridades superiores establecerán previamente el régimen de utilización de las mismas. Esta cifra en cada caso será convenida previamente, al igual que su excepcional ampliación, y deberá contar con la autorización expresa del Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A.).
c) Flota de protocolo para las autoridades superiores de los organismos descentralizados y empresas del Estado, a razón de hasta 3 (tres) automóviles para cada una, y cuyo régimen de uso será fijado por las respectivas entidades.
d) Flotas pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Policía Federal, Prefectura Marítima y Gendarmería que quedarán sometidas a las reglamentaciones vigentes en ellas.

Los gastos que demande el mantenimiento y servicios de choferes de los vehículos detallados precedentemente, estarán a cargo del Estado. Los créditos destinados a la atención de tales gastos de mantenimiento figurarán específicamente en el presupuesto de cada jurisdicción.

ARTICULO 2º.- Declárase obligatorio en los organismos de la Administración -con excepción de la Presidencia de la Nación- y en los organismos descentralizados, obras sociales, empresas del Estado y cuentas especiales, el régimen establecido en los artículos siguientes para la movilidad de funcionarios y agentes del Estado que por su jerarquía o la naturaleza de sus tareas deben utilizar medios de transporte individuales.

ARTICULO 3º.- Para posibilitar la movilidad de los agentes del Estado comprendidos en el artículo 2º, el Poder Ejecutivo facilitará a dichos agentes la adquisición de vehículos, siempre que se cumplan los siguientes requisi

tos:

a) Informe fundado de la autoridad jurisdiccional respectiva en el que se determine la razón de jerarquía o de función que exige el uso de un medio de movilidad individual.

La razón de jerarquía solamente podrá alcanzar al personal superior de los organismos principales que integran la jurisdicción de un Ministerio o Secretaría de Estado.

Para los agentes no comprendidos en el punto anterior deberá probarse además, que los mismos, a la fecha del presente decreto, hacen uso de vehículos del Estado en forma regular y permanente en virtud de requerirlo la índole de las funciones que cumple;

b) Que el Ministerio, la Secretaría o el Organismo de Estado en que reviste el agente, cuente con los recursos necesarios para atender este gasto, dentro de la cuenta especial a que se refiere el artículo 20° del presente decreto;

c) El automóvil deberá quedar adscripto al servicio oficial mientras el agente revista en la Administración; quedando de entendido como objeto de esta adscripción, que el vehículo estará a disposición del funcionario titular de su propiedad, en los horarios habituales de labor del mismo, quien además está obligado a utilizarlo en los actos de servicio.

El Poder Ejecutivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 17° de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (edición 1943) y con la intervención de la Secretaría de Estado de Hacienda, autorizará las adscripciones al servicio oficial de los automóviles que se adquieran en los términos del presente decreto.

En caso de cesación de la adscripción del automóvil por voluntad del agente, el saldo adeudado será exigible de inmediato y de no ser cancelado dentro de los treinta (30) días de la desadscripción, se ejecutará la respecti-

va prenda. Al agente le será suspendida la compensación prevista en el artículo 5º, aun cuando el mismo continuara en el cargo, desde la fecha de la desadscripción.

Los pedidos de adscripción que se formulen deberán contar con la conformidad previa del Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A.).

ARTICULO 4º.- Al efecto de cumplimentar el artículo 3º, la provisión de automóviles se hará por riguroso orden jerárquico, de modo que cubiertas las necesidades del Grupo I de la Clase "A", se atienda a las de los siguientes Grupos de dicha Clase sucesivamente a las demás Clases y Grupos en estricta observancia de la línea jerárquica establecida por el Escalafón aprobado por decreto Nº 9.530/58, conforme lo permitan los recursos que se provean.

Las equivalencias de los cargos no comprendidos en los del citado Escalafón, serán dispuestas en todos los casos por el Poder Ejecutivo con intervención de la Secretaría de Estado de Hacienda, previa conformidad del Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E.R.R.A.).

ARTICULO 5º.-Fíjase en la suma de hasta doce mil quinientos pesos moneda nacional (m$n. 12.500.-) mensuales, la compensación total por todo concepto que se acordará -conforme con el artículo 19º- a los agentes comprendidos en el artículo 3º del presente decreto, la que se extenderá hasta que se cancele la deuda devengada por el costo del automóvil, salvo los casos previstos en el artículo 6º. La compensación de referencia será reajustada al ser cancelada la deuda.

Dicha compensación mensual se liquidará también cuando el agente use de licencia ordinaria, y será reducida en un 20 por ciento (veinte) por ciento mientras el agente deba cumplir comisiones en el exterior, o esté en uso de licencia extraordinaria con goce de sueldo. En caso -

de licencias sin goce de sueldo no corresponderá el abono de la asignación mensual.

El agente propietario tomará un seguro de vida adicional con carácter obligatorio, a favor de la Dirección General de Suministros del Estado, con reajuste cada 12 - (doce) servicios mensuales, a cuyo efecto la Caja Nacional de Ahorro Postal cubrirá el riesgo mediante prima análoga a la del Seguro Obligatorio para el personal del Estado. Este seguro será constituido automáticamente por la Caja Nacional de Ahorro Postal, sin reconocimiento médico del asegurado, y aplicado a la liberación del saldo del crédito prendario.

La totalidad de los gastos de mantenimiento y conservación del automóvil adscripto estará a cargo en todos - los casos, de su propietario, inclusive los de las primas de seguro de vida y de una póliza de seguro sobre riesgo total del automóvil por intermedio de la Caja Nacional - de Ahorro Postal o del asegurador por quien optare, con - carácter obligatorio y endoso de la póliza a favor de la Dirección General de Suministros del Estado. Estas primas serán deducidas por el organismo administrativo o la Caja de Jubilaciones pertinente, al liquidar los haberes mensuales, y abonadas a quien corresponda.

Las respectivas administraciones de los organismos , deducirán de la liquidación mensual de sueldos y demás - retribuciones correspondientes al agente beneficiario de este decreto, inclusive la compensación prevista en el - artículo 5º, un servicio financiero fijo que incluirá una amortización acumulativa por el plazo máximo a que se refiere el artículo 10º y un interés del 5 por ciento (cinco) por ciento anual sobre los saldos deudores. Dicho importe ingresará al crédito de la cuenta prevista en el artículo 20º. A los agentes que se jubilaren y queden obligados por acogimiento al artículo 6º, les será deducida dicha cuota de amortización e intereses por la Caja -

de prestación, la que los ingresará a la cuenta anteriormente referida, y si lo haberes no cubrieran la cuota, el agente abonará el saldo, mensualmente, en la Dirección General de Suministros del Estado, y el del seguro, al tiempo del pago de la prima.

ARTICULO 6º.- Si el agente propietario fuera dejado cesante sin causa encuadrada en el Capítulo V, Régimen disciplinario del Estatuto aprobado por decreto-ley Nº 6.666/57 (º), o de regímenes similares aprobados por ley o por decreto correspondientes a otros Departamentos u Organismos del Estado, por aplicación del artículo 36º de la Ley Nº 15.796 (*), o que reunidos los extremos de la Ley se acoja a la jubilación ordinaria, mantendrá sus derechos y obligaciones en lo concerniente a la prenda sobre el automóvil hasta la extinción de la deuda a favor de la Dirección General de Suministros del Estado, pagadera en las mensualidades convenidas, con la obligación de atender las primas para que continúen en vigor el seguro general y el de vida como se ha previsto; pero le será suprimida al día del cese de servicios, la compensación establecida por el artículo 5º.

El agente que renunciara por supresión del organismo o de los servicios del cargo en que revista, luego de haber pagado no menos de 18 (dieciocho) mensualidades, podrá retener el automóvil abonando el saldo del crédito prendario en 18 (dieciocho) meses si este plazo fuera inferior al faltante para la cancelación de la deuda, a cuyo efecto se formulará el correspondiente ajuste de la cuota mensual de amortización con el interés anual que el agente venía abonando. Asimismo queda obligado a mantener los seguros conforme al artículo 5º.

El agente separado de la Administración con causa, o el que renunciara sin estar comprendido en las previsiones del apartado anterior, perderá todos sus derechos al

(º) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1333.-

pago por cuotas mensuales y le será exigida la cancela - ción del saldo del crédito prendario con las consecuen - cias emergentes.

ARTICULO 7º.- Queda terminantemente prohibido dotar de choferes pertenecientes al personal del Estado, a los automóviles adscriptos. La responsabilidad por la transgresión de estas normas será solidaria entre el funcionario que lo haya autorizado y el propietario del vehículo y - reputará falta grave.

ARTICULO 8º.- Cuando un funcionario por causa de reparaciones, o por cualquier otra causa, se viera impedido de utilizar el automóvil, no le será facilitado otro en su reemplazo y proveerá a su movilidad con sus propios re - cursos.

ARTICULO 9º.- La Dirección General de Suministros del Estado cumplimentará las disposiciones de este decreto exigiendo la copia autenticada del decreto del Poder Ejecutivo, o resolución de autoridad competente según la jurisdicción, que acredita que ha sido autorizada la adscripción del automóvil al agente que lo adquirirá conforme a este decreto, el que deberá ser nuevo y de fabricación - nacional.

ARTICULO 10.- El monto total de la deuda que contraiga - el funcionario deberá ser cancelado en un plazo no mayor de 5 (cinco) años en cuotas mensuales iguales; cada una de cuyas cuotas no podrá exceder del 80 % (ochenta) por ciento de la compensación a que se refiere el artículo 19º.

ARTICULO 11.- En el momento que la Dirección General de Suministros del Estado se lo requiera, el agente que se acoja a los términos de este decreto, deberá abonar en - la expresada Repartición el 10% (diez) por ciento del valos del automóvil, a cuenta de precio destinado al crédito de la cuenta especial prevista en el artículo 20º.

ARTICULO 12.- Fíjase en 6 (seis) meses el plazo de tran-

sición entre el régimen vigente y el que se implanta por el presente decreto. Vencido el mismo no se admitirá la existencia de coches oficiales para el traslado de agentes ni choferes para los mismos, salvo las siguientes excepciones:

a) Las previstas en el artículo 1º.
b) El sistema de prioridades que fija el artículo 4º.
c) La demora en la entrega de unidades por parte de la firma vendedora, cuando el contrato de compra-venta hubiera sido suscripto dentro del plazo establecido precedentemente. En este caso solamente se admitirá el mantenimiento de coches oficiales en servicio en igual número que el adquirido por los correspondientes interesados.
d) Casos especiales por razones de edad o incapacidad física.
e) Automóviles afectados a los servicios que no estén asignados a un funcionario determinado o que estuvieren afectados a servicios de inspección y cuyo costeo personal implicare restringir la actividad oficial específica encomendada al agente.

Las excepciones previstas en los incisos b), c), d) y e) serán resueltas con intervención de la Secretaría de Estado de Hacienda previa conformidad del Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A.).

ARTICULO 13.- Para la aplicación del régimen de automotores a que se refiere el artículo 3º del presente decreto, los organismos respectivos de la Administración Nacional deberán suprimir los cargos correspondientes al personal afectado al funcionamiento y mantenimiento de automóviles en la proporción correspondiente aplicando a tales efectos las disposiciones del artículo 36º de la Ley Nº 15796; a menos que las autoridades superiores de las diversas reparticiones del Estado opten por darles nuevo destino, si

así lo aceptaran aquellos agentes, en cuyo caso los organismos quedan obligados a suprimir vacantes por un importe equivalente a las supresiones que debían efectuarse.

ARTICULO 14.- Vencido el plazo previsto en el artículo 12, el Tribunal de Cuentas de la Nación solamente dará curso a las liquidaciones para el pago de combustibles, lubricantes, reparaciones cocheras etc., correspondientes a automotores cuando los respectivos Directores de Administración, Gerentes Administrativos o funcionarios que hagan sus veces declaren bajo su responsabilidad personal que los suministros o servicios responden a consumos o usos realizados por unidades de propiedad del Estado cuyo funcionamiento no prohibe el presente decreto.

ARTICULO 15.- Igualmente al vencimiento del plazo aludido en el artículo 12º, las Direcciones de Administración de cada organismo o dependencias que hagan sus veces harán llegar al Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A.) una copia del inventario por jurisdicción, de los automóviles de la repartición con indicación de las unidades afectadas a los fines establecidos por el artículo 1º y el inciso b) del artículo 12º del presente decreto.

ARTICULO 16.- El gasto que demande el pago de la compensación que se establece por el artículo 5º será atendido con cargo a una partida específica que se incorporará en el presupuesto de cada organismo afectado, mediante compensación de créditos y cuyo monto no podrá exceder en ningún caso el costo del servicio que se sustituye.

ARTICULO 17.- El Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A.) no autorizará pedidos de adscripción formulados por agentes cuyos organismos no satisfagan las exigencias del presente decreto en cuanto a la formación del crédito de la cuenta especial prevista en el artículo 20º y a las demás disposiciones de economía presupuestaria como supresión de vacantes, eliminación

de gastos de mantenimiento de automóviles, y todos aquellos aplicables a los fines de este decreto.

ARTICULO 18.- Este decreto es de aplicación exclusivamente para la adscripción de automóviles nuevos adquiridos conforme al régimen del mismo.

Los agentes comprendidos en los alcances de este decreto que poseyeran automóvil, podrán adscribir el vehículo de su propiedad con las siguientes alternativas:

a) Con compesación fija igual al 30 % (treinta) por ciento de la compensación máxima establecida en el artículo 5º; y
b) Con la compensación regida por las reglamentaciones vigentes o las que se dictaren en lo sucesivo, y que continuarán siendo de aplicación a las adscripciones de automóviles que escapan a las normas del presente decreto.

ARTICULO 19.- La compensación establecida en el artículo 5º se aplicará según la siguiente escala:

Al adquirente de un automóvil por valor de:

Hasta m$n. 300.000 ..... $ 8.500.- mensuales
De m$n. 300.001 a m$n. 350.000 ... $ 9.500.- mensuales
De m$n. 350.001 a m$n. 400.000 ... $10.500.- mensuales
De m$n. 400.001 a m$n. 450.000 ... $11.500.- mensuales
De m$n. 450.001 a mayor valor .... $12.500.- mensuales

ARTICULO 20.- La Contaduría General de la Nación dispondrá la apertura de una cuenta especial que se denominará "Dirección General de Suministros del Estado, Decreto Nº " cuyo régimen de funcionamiento será el siguiente:

Crédito: Se acreditará con la suma proveniente de la venta de automotores del Estado; el importe equivalente a 12 (doce) meses que resulte de la rebaja, en la proporción que corresponda, de partidas afectadas al mantenimiento y renovación de automóviles, combustibles, lubricantes, reparaciones, cocheras, supresión de vacantes (artículo 13

del presente decreto), etc., como así también por el importe del 10% (diez) por ciento del valor de la unidad - que debe ingresar el funcionario que se acoja al sistema de este decreto. Asimismo se acreditará con los intereses - del 5% (cinco) por ciento anual sobre el saldo de la prenda que se constituya y con las amortizaciones mensuales correspondientes.

Débito: Por los importes que se requieran para la adquisición de vehículos en los términos del presente decreto, y los gastos que eventualmente pudieran existir por la venta de automotores.

Administración: Será administrada directamente por - la Dirección General de Suministros del Estado debiendo contabilizarse en forma independiente los ingresos y egresos por cada uno de los organismos establecidos en - el artículo 2º de este decreto. Mensualmente deberá rendirse cuenta documentada a la Contaduría General de la - Nación.

Saldo al cierre del ejercicio: El saldo al cierre - del ejercicio será transferido al siguiente, hasta tanto se complete la provisión de automotores en cada jurisdicción, conforme se prevé en los artículos 3º y 4º del presente decreto.

Realizado el ciclo de adquisición, la Dirección General de Suministros del Estado ingresará a Rentas Generales, a las Empresas del Estado, o al organismo descentralizado respectivo, el remanente correspondiente.

ARTICULO 21.- Oportunamente el Poder Ejecutivo incorporará al presupuesto general de la Administración Nacional, el presupuesto de la Cuenta Especial a que se refiere el artículo anterior.

ARTICULO 22.- Las Empresas del Estado y los organismos - descentralizados están autorizados para aplicar en forma directa el presente decreto.

ARTICULO 23.- La Secretaría de Estado de Hacienda con la

intervención previa de la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación, queda facultada para aclarar e interpretar las disposiciones de este decreto.

ARTICULO 24.- El incumplimiento de cualesquier disposición de este decreto será considerado como falta grave.

ARTICULO 25.- Derógase toda disposición que se oponga al presente decreto.

ARTICULO 26.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 27.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación a sus efectos.-

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo
Jorge Wehbe

ACTO: DECRETO Nº 8.566/61.-

MATERIAS: INCOMPATIBILIDADES - HORARIO - INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1961.-

Visto la Ley Nº 14.794 (') que en su Artículo 13º apartado c) autoriza al Poder Ejecutivo a aplicar un régimen que reduzca al mínimo la acumulación de cargos - con el propósito de establecer un régimen adecuado de trabajo en la función pública, y

CONSIDERANDO:

Que por decreto Nº 11.709 del 22 de diciembre de 1958 (") se determinó la política a seguir en esta materia sobre las siguientes bases:

a) estructura de un nuevo régimen restrictivo que - solamente responda a necesidades ineludibles de los servicios y que tienda a evitar la acumulación de cargos;
b) un control riguroso de su aplicación;
c) un régimen especial para retirados y jubilados;
d) severas sanciones por omisión o falsedad en las correspondientes declaraciones juradas;

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 688.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 691.-

Que a la fecha tienen plena aplicación los escalafonamientos establecidos por el decreto Nº 9.530/58 y regímenes similares, en los que se determina el cumplimiento de tareas en horarios íntegros o reducidos;

Que por decretos Nros. 5.008/59 (¹), 944/60 (") y 9.252/60 (°) se ha fijado el horario oficial común para toda la Administración Nacional, por lo que es necesario reglamentar el límite máximo que debe autorizarse a un agente para que preste servicios en otras tareas, atendiendo a la necesidad de obtener el mayor rendimiento, dedicación y eficacia en la función, como así también a elementales razones que hacen a la salud del individuo;

Que por otra parte corresponde rever el régimen sobre incompatibilidades que estableció el decreto número 1.134 del 23 de marzo de 1932, medida que articuló los principios generales que se estimaron entonces necesarios para regular el desempeño de más de un cargo;

Que en la actualidad el sistema, que resulta de las variantes que ha sufrido el decreto original a través de 27 años de aplicación, es totalmente inorgánico, ya que existen en vigor más de doscientas disposiciones que lo amplían, complementan, modifican o aclaran, consistentes en decretos, resoluciones, interpretaciones y dictámenes;

Que asimismo es necesario adecuar a normas y preceptos ciertas condiciones inherentes a las acumulaciones de cargos, o de éstos con beneficios jubilatorios o retiros;

Que en consecuencia procede dejar sin efecto muchas excepciones o interpretaciones que no tienen justificación ni actualidad, así como es necesario consagrar principios para definir situaciones no reglamentadas al presente;

Que también es conveniente uniformar procedimientos y tramitaciones, a cuyos fines conviene adoptar un formu

---

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 741.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1074.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1216.-

lario único de declaración jurada para toda la administración;

Que en cuanto al procedimiento de fiscalización es conveniente delegar en las direcciones de administración u organismos que hagan sus veces el análisis de las declaraciones juradas de los agentes cuyos haberes se liquiden por su intermedio;

Que sin perjuicio de lo señalado en el considerando precedente, corresponde atribuir a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación el contralor centralizado del régimen, a cuyo fin se deberá dar conocimiento de las resoluciones que, en cada caso adopten los organismos antes citados;

Por lo expuesto,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Apruébase el cuerpo de disposiciones adjuntas que constituyen el "Régimen sobre acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública Nacional", que comprende a la totalidad del personal, sin distinción de actividades.

ARTICULO 2º.- Encomiéndase al INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (I.S.A.P.) el estudio de las causas, el impacto y el costo social del múltiple empleo en el país, teniendo en cuenta los problemas conexos respectivos. Al término de este estudio el INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (I.S.A.P.) deberá proponer las normas básicas para la solución orgánica de la dispersión de esfuerzos de funcionarios que por diversos motivos desempeñan más de un cargo o realizan tareas en distintas dependencias públicas y/o privadas.

ARTICULO 3º.- Derógase todo acto que se oponga al presente, salvo aquellos que impongan condiciones más restrictivas.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI - Alfredo R.Vítolo
Jorge Wehbe

CAPITULO I - INCOMPATIBILIDADES

Artículo 1º.- A partir de los 60 (SESENTA) días de publicado el presente en el Boletín Oficial y con las excepciones que expresamente se establecen, ninguna persona podrá desempeñarse ni ser designada en más de un cargo o empleo público remunerado dentro de la jurisdicción y competencia del Poder Ejecutivo Nacional. Asimismo declárase incompatible el desempeño de un cargo público con la percepción de jubilaciones, pensiones y/o retiros civiles - y/o militares provenientes de cualquier régimen de previsión nacional, provincial y/o municipal.

Las prohibiciones que anteceden son de aplicación para las situaciones existentes, aunque hubieran sido declaradas compatibles con arreglo a las normas vigentes hasta la fecha.

Quedan excluídas de este régimen las contrataciones efectuadas en virtud de autorizaciones legales o acordadas por el Poder Ejecutivo.
Artículo 2º.- Las disposiciones del presente comprenden al personal de la administración central, entidades descentralizadas, empresas del Estado, Bancos Oficiales, haciendas para-estatales, servicios de cuentas especiales, planes de obras y construcciones, servicios de obras so-

ciales de los Ministerios y sus dependencias o reparti - ciones, academias y organismos subsidiados por el Estado y, en general, al de los organismos y empresas cuya admi nistración se halla a cargo del Estado Nacional, esté o no el presupuesto respectivo incluído en el Presupuesto General de la Nación. En cuanto a su retribución compren de a todos los cargos o empleos, cualquiera sea la forma de remuneración, ya sea por pago mensual y permanente, - jornal, honorarios, comisiones, y en general toda presta ción que se perciba por intermedio de los organismos an- tes citados, en concepto de retribución de servicios.

Por tanto alcanza a todo el personal de la Adminis - tración Nacional sin distinción de categorías ni jerar - quías que se desempeñe en los servicios civiles, al per- sonal militar de las fuerzas armadas y al de los cuerpos de seguridad y defensa.

Artículo 3º.- Al personal comprendido en el Artículo 1º que tuviera más de 3 (TRES) años en la Administración, - que fuera designado candidato a miembro de los Poderes E jecutivos o Legislativos de la Nación o de las Provincias y de las Municipalidades se le acordará licencia desde - ese momento sin goce de haberes. Si no resultara electo deberá reintegrarse assus funciones dentro de los 10 - (DIEZ) días de conocido el resultado de la elección. En caso afirmativo continuará apartado del ejercicio de sus funciones sin percepción de haberes, siendo reintegrado a su cargo de origen a la terminación de su mandato.

Igual licencia se acordará al personal que con 3 - (TRES) años de antigüedad fuera designado;

a) Ministro, Secretario de Estado, Subsecretario y Secre tario de la Presidencia de la Nación, de las Provin - cias o de las Municipalidades;
b) Integrante del Gabinete de los Ministros o Secretarios de Estado y de la Presidencia de la Nación, cuyo car- go figure en tal carácter en el respectivo presupuesto;

c) Miembro de los cuerpos colegiados que funcionen en la Administración Nacional, Provincial o Municipal.

Artículo 4º.- El personal titular de cargos en el servicio exterior de la Nación no podrá percibir otra remuneración que la que determine el presupuesto del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, siendo incompatibles - tales cargos con cualquier jubilación, retiro, remuneración civil o militar a cargo de la Administración Nacional, Provincial o Municipal, cuando cumpla sus funciones fuera del país, de acuerdo con las condiciones y tiempo que determine su nombramiento correspondiente.

Artículo 5º.- El personal designado por el Poder Ejecutivo para el desempeño transitorio de otro cargo, empleo, misión o comisión, sólo podrá percibir el sueldo o la asignación mayor que le correspondiere sin derecho a ninguna otra retribución adicional por ese cometido; la disposición que antecede es de aplicación para los gastos - de representación, viáticos, movilidad o reintegro de gastos que funcionalmente corresponda al cargo, función o - comisión que se desempeñe, no pudiendo acumularse asignaciones por tales conceptos correspondientes a cargos distintos.

Artículo 6º.- Los magistrados judiciales de la Nación y de las Provincias en cualquiera de sus fueros así como - los integrantes del Ministerio Público, no podrán impartir la enseñanza secundaria, normal, especial o primaria en establecimientos educacionales dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. Igual limitación alcanzará a los miembros de los Tribunales de Cuentas de la Nación, Provincias o Municipalidades.

Artículo 7º.- El personal comprendido en el presente no podrá representar o patrocinar a litigantes contra la Nación, o intervenir en gestiones judiciales o extrajudiciales en asuntos en que la Nación sea parte; tampoco podrán actuar como peritos ya sea por nombramiento de ofi-

cio o a propuesta de parte en iguales circunstancias. Se exceptúan de estas disposiciones cuando se trate de la defensa de intereses personales del agente, de su cónyuge o de sus parientes consanguíneos o por afinidad en primer grado.

Artículo 8º.- Las incompatibilidades que se establecen mediante este decreto no excluyen las que especialmente determinen las leyes, decretos y otras disposiciones orgánicas para ciertos servicios, ya sean aquellas de orden moral o funcional.

CAPITULO II - COMPATIBILIDADES

Artículo 9º.- Como excepción a lo dispuesto en el artículo 1º, autorízanse únicamente las acumulaciones expresamente citadas en este Capítulo, las que estarán condicionadas en todos los casos a que se cumplan los siguientes extremos, sin perjuicio de las exigencias propias de cada servicio en particular:

a) que no haya superposición horaria, y que entre el término y el comienzo de una y otra tarea exista un margen de MEDIA ($\frac{1}{2}$) hora por lo menos;
b) que se cumplan integralmente los horarios correspondientes a cada empleo; queda prohibido por lo tanto acordar o facilitar el cumplimiento de horarios especiales o diferenciales, debiendo exigirse el cumplimiento del que oficialmente tenga asignado el cargo. A estos efectos se entiende por horario oficial el establecido por el Poder Ejecutivo Nacional o por autoridad competente para el servicio respectivo;
c) que no medien razones de distancia que impidan el traslado del agente de uno a otro empleo en el lapso indicado en a), salvo que entre ambos desempeños medie un tiempo mayor suficiente para desplazarse;
d) que en ningún caso diariamente el agente en conjunto deba trabajar más de 10 (DIEZ) horas;

e) que no se contraríe ninguna norma de ética, eficiencia o disciplina administrativa inherente a la función pública tales como: parentesco, subordinación en la misma jurisdicción a un inferior jerárquico, relación de dependencia entre los dos empleos y otros aspectos o supuestos que afecten la independencia funcional de los servicios.

Entiéndese expresamente que las excepciones para acumular cargos son excluyentes entre sí y por tanto el interesado sólo puede ampararse en una de ellas. La circunstancia de encontrarse en determinada alternativa, de hecho elimina la posibilidad de acogerse simultáneamente a otra franquicia.

Artículo 10º.- Los profesionales del arte de curar pueden acumular cargos de esa naturaleza en las condiciones indicadas en el artículo 9º del presente Capítulo.

A los fines de este decreto se consideran profesiones del arte de curar a las desempeñadas por médicos, odontólogos, farmacéuticos (Ley Nº 12.921, artículo 1º) y obstétricas.

Artículo 11º.- El agente que posea título universitario, que se desempeñe en cargos reservados exclusivamente a su profesión y resida en centros poblados de menos de 30.000 (TREINTA MIL) habitantes, podrá acumular otro cargo de igual naturaleza en las Provincias o Municipalidades.

Artículo 12º.- A los efectos de este régimen se considera cargo docente la tarea de impartir, dirigir, supervisar u orientar la educación general y la enseñanza sistematizada, así como también la de colaborar directamente en esas funciones, con sujeción a normas pedagógicas y reglamentaciones previstas en el Estatuto del Docente.

Los cargos docentes deberán estar indefectiblemente precisados en tal carácter en el presupuesto respectivo y comprenden a las actividades referidas a la enseñanza

universitaria, superior, secundaria, media, técnica, especial, artística, primaria o de organismos complementarios, ya sea en el orden oficial o adscripto o de institutos civiles o militares; incluídos, además de los titulares los suplentes o provisorios.

El personal a que se refiere el apartado anterior podrá acumular exclusivamente uno de los siguientes supuestos:

a) a un cargo docente, otro cargo docente;
b) a un cargo docente, hasta doce horas de cátedra de enseñanza;
c) veinticuatro horas de cátedra de enseñanza;
d) Los Directores y Rectores, Vicedirectores y Vicerectores, Regentes y Jefes Generales de enseñanza práctica, Subregentes y Secretarios de Distrito de enseñanza primaria, media, técnica superior y artística podrán acumular hasta 6 (SEIS) horas de clase. No se pueden acumular cargos directivos de escuelas en ninguna rama de la enseñanza de la misma o distinta categoría;
e) hasta 12 (DOCE) horas de cátedra de enseñanza, un cargo no docente;
f) a un cargo docente, otro cargo no docente.

Los rectores de establecimientos de enseñanza secundaria con un solo turno, podrán dictar sus horas de clase dentro del mismo turno.

CAPITULO III - FISCALIZACION

Artículo 13º.- El agente que se encontrara en situación de incompatibilidad, ya sea porque revistara en cargos o pasividades no autorizadas, o bien, porque en la acumulación no se cumplieran las condiciones exigidas en el artículo 9º, deberá formular la opción respectiva, a cuyos fines presentará bajo recibo y dentro de los 30 (TREINTA) días corridos de publicado el presente decreto, la renuncia fundada en esta circuntancia, al o a los cargos -

respectivos, o bien, según corresponda, solicitará -también bajo recibo- la limitación del haber de pasividad.

Estas renuncias serán aceptadas sin más trámite; si el agente estuviera sujeto a la substanciación de sumarios o irregularidades, la aceptación lo será sin perjuicio de lo que se resuelva en esas actuaciones.

Al margen del curso de las renuncias, el agente dejará de prestar servicios a los 30 (TREINTA) días corridos de su presentación, si antes no fuera aceptada. Esta circunstancia será fiscalizada por el superior jerárquico inmediato, el que dispondrá que el interesado deje de prestar servicios en el plazo indicado, siendo responsable directo de las transgresiones que en este sentido se cometieran.

La opción debe formularse indefectiblemente, aunque el agente revistara con licencia con o sin goce de haberes.

Artículo 14º.- Dentro de los 60 (SESENTA) días de publicado este decreto los agentes que presten servicios en los organismos mencionados en el artículo 2º del presente Régimen, deberán declarar bajo juramento su situación de revista en el formulario anexo que se aprueba por este acto, que se extenderá por triplicado, y cuyos ejemplares se destinarán:

Original: A la Dirección de Administración u Organismo que haga sus veces, para ser acompañado con la planilla de liquidación de haberes del mes posterior al de vencimiento del plazo fijado, el que se remitirá para la intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION (Delegación, Fiscalía y/o Auditoría); ésta procederá a su desglose y lo enviará bajo recibo a la DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL;

Duplicado: Para tramitar en la repartición donde el agente presta servicios;

Triplicado: Para el interesado, que deberá conservarlo cuidadosamente y presentarlo en las oportunidades que

se le solicite; en este ejemplar deberá constar la recepción de los dos ejemplares anteriores por el superior jerárquico respectivo.

Artículo 15º.- A los fines de constatar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior los servicios encargados de efectuar el pago de haberes exigirán al abonar los correspondientes al mes siguiente al vencimiento del plazo fijado en el mismo, la exhibición del triplicado de la declaración jurada con la constancia de la recepción de los otros dos ejemplares.

A su vez el TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION por intermedio de sus Delegaciones, Fiscalías o Auditorías se abstendrá de dar curso a la liquidación de haberes del mes indicado de aquellos agentes cuya declaración jurada original no hubiera sido remitida en el plazo establecido.

El procedimiento indicado será de observancia para todos lo agentes, aunque no presten servicios por revistar con licencia, se encontraren suspendidos, o por cualquier otra causal. Igual trámite se seguirá para aquellos que se incorporan con posterioridad.

Artículo 16º.- Las Direcciones de Administración u Organismos que hagan sus veces, en colaboración con los servicios de personal, analizarán los duplicados de las declaraciones juradas de los agentes cuyos haberes se liquiden por su intermedio, procediendo de la siguiente forma:

1º.- Si no se denunciaran acumulaciones (inclusive jubilaciones, pensiones, retiros y pasividades en general), dispondrán por escrito su agregación al legajo del agente;

2º.- Si se denunciaran acumulaciones:

a) Si fueran compatibles por estar expresamente autorizadas en el presente, analizarán si se cumplen los extremos requeridos en el artículo 9º,

autorizando en caso afirmativo por escrito la acumulación, disponiéndose la notificación del causante y la agregación a su legajo personal. En caso que no se cumplieran algunos de los requisitos señalados en el artículo 9º, se dispondrá el inmediato cese de funciones del agente y se requerirá la cesantía a la autoridad que corresponda.

b) Si fueran incompatibles por no estar autorizadas en el presente, también se dispondrá el inmediato cese de funciones del agente y se requerirá la cesantía del causante a la autoridad competente.

En cualquiera de los supuestos indicados en el apartado 2º) las Direcciones de Administración u Organismos que hagan sus veces deberán informar a la DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL las resoluciones que en uno u otro sentido se hubieran tomado.

Artículo 17º.- La DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL tendrá a su cargo la centralización de la fiscalización del estricto cumplimiento de las disposiciones del presente, a cuyo fin procederá a verificar que las Direcciones de Administración u Organismos que hagan sus veces adopten las medidas establecidas a fin de regularizar las situaciones incompatibles.

La DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL implantará de inmediato un sistema mecánico de registro de las declaraciones juradas, sobre la base de los nombres completos de los declarantes y números de sus documentos de identificación, preferentemente matrícula de enrolamiento y libreta cívica, a efectos de establecer en el acto la existencia de acumulación de cargos.

En los casos que la DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL compruebe situaciones de incompatibilidad no regularizadas, las comunicará al Poder Ejecutivo por intermedio de los Ministerios o Secretarías de Estado que corres

ponda, a los fines de las sanciones que corresponda aplicar a los responsables que hayan consentido tales situaciones.

Artículo 18º.- El agente que en virtud del presente régimen fuera separado del servicio por no encuadrar su situación de revista en las normas que se establecen, no tendrá derecho a la percepción de haberes durante el lapso que no preste funciones, aunque con posterioridad su situación se regularizara.

No podrá tampoco continuar en el uso de los beneficios que acuerda el régimen de licencias en ninguno de sus casos, en tanto no solucione previamente la situación de incompatibilidad en que se encuentre.

Sin perjuicio de las sanciones que correspondan al agente, son responsables de las transgresiones a este artículo los superiores jerárquicos inmediatos que no exijan su fiel cumplimiento.

Artículo 19º.- Los agentes están obligados a actualizar sus declaraciones juradas en cada oportunidad en que se produzcan variaciones en la situación de acumulación, de horarios en el desempeño de los cargos, cambio de lugares donde deba cumplir sus funciones, modificaciones en la percepción de pasividades y en general cuando se altere alguna condición susceptible de hacer variar los antecedentes tenidos en cuenta para autorizar supuestos compatibles.

Artículo 20º.- Toda omisión o falsa declaración sobre los cargos y/o beneficios que acumulen los agentes hará pasible a los mismos a las medidas disciplinarias que correspondan, según el grado de infracción cometida. Iguales medidas se aplicarán a las autoridades responsables de los servicios respectivos que consientan tales omisiones.

Artículo 21º.- Las autoridades de la administración nacional están obligadas a facilitar a la DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, todos los elementos informativos que la misma requiera para cumplir con la fiscalización a su cargo.-

ACTO: DECRETO Nº 8.567/61.-

MATERIA: LICENCIAS

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1961.-

Visto el decreto Nº 2.351/61 (1), que dispone se actualice el régimen de licencias para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, aprobado por decreto Nº 12.720/53 (2) y,

CONSIDERANDO:

Que la actualización de dicho régimen debe estar basada en las necesidades actuales de la Administración Pública y sus agentes;

Que el Instituto Superior de Administración Pública y la Dirección General del Servicio Civil de la Nación han propuesto las modificaciones a introducirse, previa consulta a los distintos Ministerios y Secretarías de Estado;

Por ello, y atento a lo informado por la Secretaría de Estado de Hacienda, en uso de las facultades emergentes del Decreto-ley Nº 797/58 (3), y la Ley Nº 14439 (4),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Apruébase el cuerpo de disposiciones ad - //-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1371.-
(2) Ver Digesto Administrativo Nº 15.-
(3) Ver Digesto Administrativo Nº 419.-
(4) Ver Digesto Administrativo Nº 505.-

junto, que constituyen el Régimen de Licencias, Justificaciones y Permisos, para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional.

ARTICULO 2°.- Las disposiciones de los artículos 2°, 3°, 8°, 10° y 25° entrarán en vigencia el 1° de enero de 1962; las restantes se aplicarán desde el 1° del mes siguiente a la fecha de publicación del presente decreto en el Boletín Oficial.

ARTICULO 3°.- Del artículo anterior quedan excluídos como excepción, los casos de los agentes que a la fecha del presente decreto se encuentren en uso de licencia concedida con sujeción a los artículos 14° ó 17° del decreto número 12.720/53, quienes quedarán amparados por las citadas normas legales, en lo referente a los plazos determinados para cada caso particular, hasta la finalización de dichas licencias, que se operará al momento de serles otorgada el alta médica pertinente.

ARTICULO 4°.- Derógase el decreto N° 12.720/53 y toda otra disposición que se oponga a lo establecido en el presente decreto.

ARTICULO 5°.- Facúltase a la Secretaría de Estado de Hacienda para dictar las normas reglamentarias, complementarias, aclaratorias e interpretativas que requiera la aplicación del Régimen que se aprueba por el presente decreto. En los casos de los artículos 8°, 10° al 20°, 32°, 33°, 36° y 37°, dicha Secretaría de Estado podrá recabar del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública el asesoramiento médico necesario para dictar las normas de referencia.

ARTICULO 6°.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Economía y Asistencia Social y Salud Pública, y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Alfredo Vítolo - Héctor V. Noblía - Jorge Wehbe.

REGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y PERMISOS PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

ARTICULO 1º.- Fíjase el presente régimen de licencia para el personal civil dependiente del Poder Ejecutivo de la Nación. Comprende a todos los agentes con funciones - permanentes o transitorias, cualquiera sea la forma de su retribución.

Exclúyese al personal contratado, sometido a regímenes especiales, al que expresamente determine el Poder Ejecutivo y al designado por tiempo determinado o con acuerdo del Senado.

ARTICULO 2º.-

a) La licencia ordinaria por descanso es de utilización obligatoria, se concederá con goce íntegro de haberes y podrá ser fraccionada en dos (2) períodos a juicio de autoridad superior de cada organismo, se acordará por año calendario conforme a las necesidades del servicio y no podrá ser transferida al año siguiente por ningún concepto.

b) En las dependencias que tuvieran receso funcional anual, se dispondrá que la mayor parte del personal - use su licencia en dicha época.

c) Cuando el agente sea titular de más de un cargo rentado, en organismos de la Administración Pública Nacional, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, se le concederá la licencia ordinaria por descanso en forma simultánea.

d) El agente separado de su cargo por razones de economía o racionalización, transferencia a la actividad - privada, incompatibilidad por acumulación de cargos, razones de salud, fallecimiento, vale decir, que no lo sea por una medida expulsiva emanada de un sumario, tendrá derecho al pago de la parte proporcional de la licencia por descanso no utilizada.

e) El agente que presente renuncia al cargo por motivos particulares, o por jubilación ordinaria o retiro voluntario, que hubiere utilizado la licencia total por descanso, y cuya prestación de servicios en el año calendario fuera inferior a seis (6) meses, deberá reintegrar los haberes correspondientes a la parte proporcional utilizada en exceso.

f) Las licencias por descanso no podrán ser utilizadas a continuación de licencias por enfermedad (art. 11º), accidentes de trabajo o enfermedad profesional (art. 12º) servicio militar (art. 21º), licencias extraordinarias sin goce de haberes (arts. 22º, 23º, 27º y 28º), o con goce de haberes (art. 29º), debiendo por lo menos haber transcurrido un (1) mes de trabajo efectivo. Si razones de tiempo no hacen posible su utilización dentro del año calendario, se perderá el derecho a la misma.

g) Igual temperamento que el indicado en f) será de aplicación cuando el agente se reintegre al servicio después de una suspensión mayor de un (1) mes, ya se trate de una medida cautelar o disciplinaria.

h) La licencia anual por descanso podrá interrumpirse por las siguientes causas:

1º.- enfermedad

2º.- razones de servicio

En el primer caso, el agente deberá continuar en uso de la licencia por vacaciones interrumpida, seguidamente del alta médica respectiva, sin considerar ésta como una nueva fracción. Para este caso es de aplicación el inciso a) cuando se refiere a no trasladar al año siguiente la licencia no utilizada. Para el punto 2º las autoridades deberán tomar los recaudos pertinentes para hacer posible que la interrumpida licencia sea utilizada indefectiblemente en el transcurso del año calendario.

i) Las licencias de este carácter serán en todos los casos

otorgadas por las reparticiones donde el agente está prestando servicios.

j) Para utilizar estas licencias debe contarse con seis - (6) meses de antigüedad ininterrumpida en la Adminis - tración Pública.

k) Los profesionales médicos radiólogos y los auxiliares de radiología pertenecientes a la Administración Públi ca Nacional quedan excluidos del presente artículo. La utilización de este beneficio les será otorgada confor me a lo reglamentado por el decreto Nº 21.158/56 (*).

ARTICULO 3º.- El término de la licencia anual será:

a) De diez (10) días hábiles, cuando la antigüedad del a- gente sea mayor de seis (6) meses y no exceda de cinco (5) años;

b) De quince (15) días hábiles, cuando la antigüedad del agente sea mayor de cinco (5) años y no exceda de diez (10) años;

c) De dieciocho (18) días hábiles, cuando la antigüedad - del agente sea mayor de diez (10) años y no exceda de quince (15) años;

d) De veintidos (22) días hábiles, cuando la antigüedad - del agente sea mayor de quince (15) años y no exceda de veinte (20) años;

e) De veinticinco (25) días hábiles cuando la antigüedad del agente sea mayor de veinte (20) años.

Los días de asueto total decretados por el Poder Ejecutivo, se considerarán como inhábiles.

En caso de que en el transcurso del año calendario el agente cumpliese una antigüedad que daría derecho a un tér mino mayor de licencia anual se computará el término ma - yor para el otorgamiento de la misma.

ARTICULO 4º.- Además del personal permanente con seis (6) meses de antigüedad, tendrá derecho al uso de la licencia a que se refiere el artículo 2º, con arreglo a la escala

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 151.-

del artículo anterior, el personal transitorio, a destajo o jornalizado que hubiese cumplido un período mínimo de seis (6) meses de trabajo y el remunerado a jornal al que se le hubiese liquidado como mínimo 120 días. En esos casos la liquidación de los haberes por el tiempo de la duración de la licencia, se practicará de la siguiente manera; para el jornalero teniendo en cuenta el útimo jornal percibido a la fecha del otorgamiento de la licencia y para el personal a destajo, por primera vez, en base a un promedio de lo percibido en los últimos tres meses de trabajo, y en lo sucesivo en base al promedio de lo liquidado en el año anterior a la fecha de concesión de la licencia.

ARTICULO 5º.- Cuando el agente se hallare cumpliendo una comisión o misión oficial fuera del asiento habitual donde desempeña sus tareas, no se computará en los términos del artículo 3º el tiempo normal empleado en el viaje de ida y vuelta que le ocasione el traslado.

Si la licencia la fracciona en dos (2) períodos sólo en uno de ellos se concederá el descuento por tiempo de viaje; al término de la licencia deberá justificar ante la autoridad respectiva que le concedió la misma, su traslado mediante certificación extendida por la policía de la localidad.

ARTICULO 6º.- Para establecer la antigüedad del agente se computarán los años de servicio prestados en la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal, incluso los "ad honorem" o en entidades privadas cuando en este último caso se haya hecho el cómputo de servicio en la respectiva Caja de Previsión Social.

A los efectos del reconocimiento de la antigüedad acreditada en entidades privadas y hasta tanto la correspondiente Caja extienda las respectivas certificaciones, los agentes deben presentar una declaración jurada, acompañada con una constancia extendida por el o los emplea-

dores, sujeta a la pertinente certificación documental , en la que se justifiquen los servicios prestados a partir de los 18 años de edad.

ARTICULO 7º.- Al personal retirado o dado de baja de las Fuerzas Armadas de la Nación, Gendarmería Nacional, Institutos Penales, Policía Federal y Prefectura Nacional - Marítima, lo mismo que a jubilados y retirados de la Administración Nacional, Provincial y Municipal que ocupan cargos en la Administración Nacional, se le computará su anterior antigüedad a los efectos del artículo 3º. A este fin se tendrán en cuenta únicamente los años efectivos de servicio.

ARTICULO 8º.- Para el tratamiento de afecciones comunes, incluídas operaciones quirúrgicas menores, y por accidente acaecido fuera del servicio se concederá a los agentes hasta treinta (30) días corridos de licencia por año calendario, en forma contínua o discontínua con percepción íntegra de haberes. Vencido este plazo podrá prorrogarse hasta la finalización del año calendario pero sin goce de haberes.

En los casos en que la jornada fuera múltiple de la correspondiente a la misma categoría, para la justificación de las inasistencias por este artículo, se computarán tantos días comp jornadas comunes comprendiera la - del agente enfermo.

Cuando el servicio médico autorizado para cada organismo, estimare que el agente padece una afección que lo haría incluir en el artículo 11º, deberá someterlo a examen del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, sin que sea necesario agotar previamente los 30 días a que se refiere el presente artículo.

Cuando encontrándose en el desempeño de sus funciones el agente requiera la atención médica del servicio - médico, le será considerado el día como licencia por enfermedad con o sin goce de haberes según corresponda -

cuando hubiere transcurrido menos de la media jornada de labor, y se le concederá permiso de salida sin reposición cuando hubiere trabajado más de media jornada de labor.

ARTICULO 9º.- Las inasistencias motivadas por donar sangre serán justificadas con goce de haberes, siempre que se presente la certificación correspondiente extendida por establecimiento médico reconocido, y no tendrá incidencia en el premio por asistencia instituído por decreto Nº 9.252/60 (').

ARTICULO 10º.-

a) Para consagrarse a la atención de un miembro enfermo del grupo familiar, el agente tendrá derecho a que se le conceda hasta diez (10) días hábiles de licencia contínuos o discontínuos, con goce íntegro de haberes, por año calendario.
b) Cuando el cuerpo médico autorizado estime que el estado del paciente lo justifica, podrá prorrogar esta licencia en las mismas condiciones que la anterior por un término de 20 días hábiles, pero sin goce de sueldo. En ambas circunstancias el agente tendrá igualmente derecho, aunque el paciente se encuentre hospitalizado.
c) Los agentes de la Administración Pública Nacional quedan obligados a presentar ante las respectivas oficinas de Personal y el Servicio Médico una declaración jurada sobre los integrantes del grupo familiar.
d) Cualquier comprobación sobre que el agente ha falseado su declaración jurada con intención de lograr una licencia de este tipo, será sancionado conforme las normas disciplinarias que rigen en el Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional o regímenes similares.

ARTICULO 11º.-

a) Por afecciones que inhabiliten para el desempeño del

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1216.-

trabajo y para los casos de intervenciones quirúrgicas, exceptuando la cirugía menor a que hace referencia el artículo 8º, se concederá hasta 365 días corridos en forma contínua o discontínua, para una misma o distinta afección, con percepción íntegra de haberes.

b) Vencido este plazo, subsistiendo la o las causales que determinaron la licencia, se concederá ampliación de la misma hasta el término de 365 días corridos, con el 50% de remuneración.

c) Antes de terminar la prórroga, el agente será reconocido por una Junta Médica en el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, la que determinará de acuerdo con la capacidad laborativa del agente las funciones que podrá desempeñar en la Administración Nacional.

d) En caso de incapacidad total y permanente dictaminada por la citada Junta Médica, se aplicarán las Leyes de Previsión y Ayuda Social correspondientes, las que deberá tramitar el agente ante las Cajas respectivas; para este último supuesto los organismos del Estado y en especial el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública deberán tener en cuenta los artículos 1º y 2º del decreto 5.554/58 (-)

e) Cuando la mencionada Junta Médica no pueda expedirse categóricamente sobre la incapacidad total y permanente, y compruebe que el agente no está en condiciones de reintegrarse, se formará una nueva Junta Médica al cabo de 180 días, la que se expedirá en forma definitiva. Este período de 180 días se justificará sin percepción de haberes.

f) Cuando el agente se reintegre al servicio una vez vencida la licencia y la prórroga, es decir agotados los 730 días que acuerda este artículo, no podrá utilizar una nueva licencia de este carácter hasta después de transcurridos tres (3) años.

(-) Ver Digesto Administrativo Nº 612.-

g) Cuando se trate de períodos discontínuos se irán acumulando hasta cumplir los plazos indicados siempre que entre los períodos otorgados no medie un lapso de tres (3) años sin haber hecho uso de licencia de este tipo; de darse este supuesto aquéllos no serán considerados, y tendrá derecho a las licencias totales a que se refiere este artículo.

h) El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública es el único autorizado para disponer el alta del agente, sin cuyo requisito éste no podrá reintegrarse a sus tareas.

i) Igualmente podrá ordenar cambio de tareas o de destino al agente si lo conceptúa necesario para el total restablecimiento del mismo. Asimismo podrá conceder para idénticos fines una reducción en las horas de labor, tratándose de accidentes del trabajo, a fijar en cada caso. El tiempo de esta franquicia será fijado exclusivamente por el citado Ministerio.

j) Las dos franquicias aludidas serán concedidas por el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, aunque no haya mediado licencia por el presente artículo, previa autorización para el examen médico otorgada por el Servicio Médico de la Repartición.

ARTICULO 12º.-

a) En caso de enfermedad profesional contraída en acto de servicio, o accidente de trabajo, se concederán hasta 730 días corridos de licencia, en forma contínua o discontínua, para una misma o distinta afección, con goce íntegro de haberes.

b) Vencido este plazo, subsistiendo la o las causales que determinaron la o las licencias, se efectuará una Junta Médica en el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, la que determinará la presunta incapacidad del agente.

c) Si de la misma no surgiese incapacidad, se otorgará el alta al agente con reintegro a sus tareas habituales o

recomendará cambio de tareas o de destino.

d) Si surgiese incapacidad parcial, transitoria o permanente, se adecuarán las tareas del agente a su nuevo estado.

e) Si la incapacidad fuese total y permanente, se recomendará la aplicación de las Leyes de Previsión que estatuyen sobre la materia aludida, quedando en consecuencia la licencia de referencia sujeta a los términos de la Ley citada.

f) En el supuesto de que agotados los 730 días la Junta Médica no pudiese expedirse categóricamente sobre la incapacidad total y permanente, y comprobare que el agente no está en condiciones de reintegrarse a sus tareas, aún cambiándolas o adecuándolas, se le concederá al mismo una prórroga de 180 días corridos, con el 50% de remuneración.
Vencido este plazo se realizará una nueva Junta Médica, la que deberá expedirse en forma definitiva.

g) Cuando una enfermedad profesional o un accidente de trabajo motivare el alejamiento del agente de sus tareas habituales por un lapso ininterrumpido mayor de 365 días, al término de éstos se realizará una Junta Médica en el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, la que determinará la incapacidad parcial o total de acuerdo a lo establecido en la Ley 9.688 y disposiciones complementarias.

h) Cualquier accidente sufrido por el agente hasta una hora antes del comienzo de la jornada de labor o hasta una hora después de finalizada la misma, siempre que ocurriera en el trayecto del domicilio del agente al lugar de trabajo o viceversa, será causal para incluir la licencia que fuese necesario concederle, con cargo al presente artículo. El lapso indicado podrá ampliarse cuando se verifique que por razones de distancia o de ubicación, el viaje aludido demande nor -

malmente más de una hora.

i) La denuncia del accidente de trabajo deberá efectuarse ante la autoridad administrativa del organismo en que se desempeña el agente, inmediatamente de ocurrido aquél. Cuando el accidente se produzca conforme a lo previsto en el inciso h), deberá hacerse la denuncia respectiva ante autoridad policial, dentro de las 24 horas de producido.

j) En todos los casos, para poder incluirse la licencia en el presente artículo, el pedido efectuado ante el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública debe ir siempre acompañado de la respectiva constancia sumarial.

k) El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública es el único organismo autorizado para disponer el alta del agente, sin cuyo requisito éste no podrá reintegrarse a sus tareas.

l) Cuando el agente se reintegre al servicio una vez vencida la licencia y la prórroga, es decir agotados los 910 días que acuerda este artículo, no podrá utilizar una nueva licencia de este carácter hasta después de transcurridos dos (2) años.

m) Cuando se trate de períodos discontínuos se irán acumulando hasta cumplir los plazos indicados siempre que entre los períodos otorgados no medie un lapso de dos (2) años sin haber hecho uso de licencia de este tipo; de darse este supuesto aquéllos no serán considerados, y tendrá derecho a las licencias totales a que se refiere este artículo.

ARTICULO 13º.- En los casos a que se refiere el artículo 12º, las Direcciones de Obra Social o Asistencia Social y en su defecto el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, proveerán gratuitamente la asistencia médica y los elementos terapéuticos necesarios.

ARTICULO 14º.- El Ministerio de Asistencia Social y Salud

Pública será el único organismo autorizado para expedir las certificaciones y practicar los reconocimientos médicos a que se refieren los arts. 11º y 12º. Los respectivos Ministerios, Secretarías de Estado y dependencias descentralizadas con Servicio Médico organizado, quedan autorizados para conceder las licencias o justificaciones previstas en los artículos 8º, 9º, 10º, 18º y 20º del presente decreto, y solicitar la intervención del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública en los casos que escapan a su jurisdicción.

ARTICULO 15º.- En todos los casos los Ministerios o Secretarías de Estado, tendrán a su cargo el control de la situación declarada por los agentes de la Administración, para lo cual contarán con la colaboración del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública. El agente al cual se comprobare que no realiza tratamiento médico perderá su derecho a las licencias y beneficios que otorga el presente decreto.

Las licencias o justificaciones a que se refieren los arts. 8º, 9º, 10º, 11º, 12º y 18º, son incompatibles con el desempeño de cualquier función pública o privada; los agentes que infrinjan esta disposición quedarán comprendidos en el presente artículo, aparte de las sanciones que les correspondieren de acuerdo con lo establecido en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional o regímenes similares.

ARTICULO 16º.- Si el agente se encontrara fuera de su residencia habitual, en el interior del país, y necesitara licencia por enfermedad en un lugar en que no hubiera médico del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación o de la Repartición a que pertenece, o de otra repartición nacional, provincial o municipal, con sede en la localidad, deberá presentar certificado del médico de Policía del lugar y si no hubiere, de médico particular, refrendado por la autoridad policial del lugar con

historia clínica y demás elementos de juicio médico que permitan certificar la existencia real de la causal invocada.

Cuando un agente se encontrara en el extranjero y solicitara licencia por enfermedad (art. 8º, 11º y 12º), deberá presentar o remitir para su justificación, al Servicio Médico de su Repartición, los certificados médicos extendidos por autoridades médicas oficiales del país donde se encontrare, visado por el Consulado de la República Argentina. En el supuesto de no existir las autoridades a que se hace referencia, el interesado recabará ante la policía del lugar una constancia que certifique tal circunstancia, teniendo entonces validez el certificado de médico particular, legalizado y visado por el Consulado de la República Argentina.

ARTICULO 17º.- Los agentes en uso de licencia por enfermedad (arts. 11º y 12º) no podrán ausentarse al interior del país o al extranjero sin autorización del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, bajo cuyo control médico se encuentran.

Al agente que no cumpliere con el requisito precedente, no le será concedida la prórroga de licencia que por causas de enfermedad podría solicitar en o desde el interior del país o el extranjero, aparte de las sanciones disciplinarias que podría corresponderle por vulnerar expresas disposiciones del presente decreto.

ARTICULO 18º.-

a) Por maternidad se acordará licencia con goce íntegro de haberes por el término de 84 días corridos, lapso que podrá ser dividido en dos períodos preferentemente iguales, uno anterior y otro posterior al parto, los períodos son acumulables, y en ningún caso el segundo período (post-parto) será inferior a 42 días.
b) En el supuesto de parto diferido, se reajustará la fecha inicial de este artículo, justificándose los días

previos a la iniciación real de esta licencia por los artículos 8º u 11º.

c) En caso de nacimiento múltiple, la licencia por maternidad podrá ampliarse a un total de 105 días corridos, con un período posterior al parto no inferior a 63 - días, resultando igualmente de aplicación las especificaciones del inciso b).

d) La iniciación de la licencia por este artículo limita automáticamente a dicha fecha inicial el usufructo de cualquier otra licencia de que esté gozando la agente.

ARTICULO 19º.- A petición de parte y previa certificación de autoridad médica competente que así lo aconseje podrá acordarse cambio de tareas o de destino a partir de la - concepción y hasta el comienzo de la licencia por maternidad.

ARTICULO 20º.- De acuerdo con lo estatuído en la Ley Nº 12.568, toda agente madre de lactante, tendrá derecho a la reducción de una hora de su jornada de labor para atender a la crianza de su hijo pudiendo optar por:

a) Disponer de dos (2) descansos de media hora cada uno para atención de su hijo en el transcurso de la jornada de trabajo.

b) O disminuir en una hora diaria su jornada de trabajo ya sea, iniciando su labor una hora después del horario de entrada o finalizando una hora antes.

c) O disponer de una hora en el transcurso de la jornada de trabajo.

Esta franquicia se acordará por espacio de 240 días corridos contados a partir de la fecha del nacimiento - del niño, cualquiera fuera la época de su reintegro.

Este plazo excepcionalmente podrá ampliarse, en casos muy especiales y previo examen médico del niño, hasta - 365 días corridos quedando bajo la absoluta responsabilidad del cuerpo médico de los distintos organismos la concesión de la referida prórroga, como asimismo del benefi

cio de que trata el presente artículo.

En caso de nacimiento múltiple se le concederá a la agente esta franquicia sin examen previo de los niños; en caso de posterior fallecimiento de alguno de los niños, se procederá como en el caso de nacimiento único.

La franquicia a que se alude y su posible prórroga, sólo alcanzará a los agentes cuya jornada de trabajo sea superior a cuatro (4) horas diarias.

ARTICULO 21º.- Los agentes que deben incorporarse al servicio militar tendrán derecho a las siguientes licencias con el 50% de su remuneración: desde la fecha de su incorporación hasta cinco (5) días después del día de la baja asentada en la libreta de enrolamiento, en los casos en que el agente hubiera sido declarado inapto o fuera exceptuado; y hasta quince (15) días después de haber sido dado de baja si hubiera cumplido el período para el cual fué convocado y éste fuera mayor de seis meses. Igualmente se concederá licencia de cinco (5) días, con la remuneración expresada, cuando el período fuera inferior a seis (6) meses.

Las licencias de cinco (5) y quince (15) días a que hace referencia el párrafo anterior, serán sobre días corridos.

Los días de viaje por traslado desde el punto del país donde cumplió con el servicio militar obligatorio y el asiento habitual de sus tareas no serán incluídos en los términos de licencias fijados precedentemente; y se justificarán independientemente con el 50% de haberes.

Las ausencias en que incurra el personal por tener que someterse a examen médico previo a su incorporación a las filas de las fuerzas armadas, o por otras razones relacionadas con el mismo fin, serán justificadas con goce de sueldo, previa presentación de las citaciones respectivas, emanadas de organismo militar, y no incidirán sobre el premio por asistencia instituído por decreto Nº 9.252/60.

El personal que en carácter de reservista sea incorporado

transitoriamente a las Fuerzas Armadas de la Nación tendrá derecho a usar de licencia y a percibir, mientras dure su incorporación, como única retribución la correspondiente a su grado en caso de ser oficial o suboficial de la Reserva; cuando el sueldo del cargo civil sea mayor que dicha remuneración, la dependencia a la cual pertenece liquidará la diferencia.

Para el personal que cumpla el servicio militar incorporado a la Policía Federal, se le concederá licencia sin sueldo de conformidad con lo establecido en el decreto Nº 4.216/54 (').

ARTICULO 22º.- El personal civil de la Administración Nacional que fuera designado para desempeñar cargos de representación política en el orden nacional, provincial o municipal, o cuando resultare elegido miembro de los Poderes Ejecutivo o Legislativo de la Nación o de las Provincias y de las Municipalidades, queda obligado a solicitar licencia sin percepción de haberes mientras dure su mandato, debiendo contar para ello con una antigüedad no inferior a tres (3) años de servicios.

ARTICULO 23º.- Cuando el agente fuera designado o elegido para desempeñar cargos de representación gremial y/o sindical, tendra derecho a licencia sin sueldo, conforme a lo previsto sobre el particular por la Ley 14.455 ("). y por el tiempo que dure su mandato, debiendo reintegrarse al servicio una vez finalizado éste.

Las licencias de este carácter quedan condicionadas a las especificaciones de la citada Ley; debiendo los distintos organismos limitar su concesión a aquellos agentes que desempeñarán cargos directivos, hasta la categoría de Tesoreros o equivalentes, en Asociaciones profesionales con "personería gremial" reconocida, y que ostenten la representación más calificada e importante a que se refiere el art. 18º de la Ley 14.455.

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1052.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 608.-

ARTICULO 24º.- Desde el día de su ingreso el agente tendrá derecho a usar de licencia con goce íntegro de haberes en los siguientes casos y por los términos que se indican:

1) Matrimonio:

   a) del agente (cuando éste se realice conforme a las leyes argentinas o extranjeras reconocidas por leyes argentinas): 10 días corridos.
   b) de sus hijos: 1 día laborable.

2) Nacimiento:

   a) de hijos del agente varón: 2 días laborables.

3) Fallecimientos (ocurridos en el país y en el extranjero), mediante comprobante respectivo.

   a) del cónyuge o parientes consanguíneos en primer grado: 5 días laborables.
   b) parientes afines de primer grado y consanguíneos y afines de 2º grado: 2 días laborables.

ARTICULO 25º.- Dentro del año calendario se concederá licencia con goce íntegro de haberes por el término de 28 días laborables, a los agentes que cursen estudios en establecimientos secundarios, especiales, universitarios, oficiales o incorporados y en Universidades privadas reconocidas por el Superior Gobierno de la Nación (nacionales, provinciales o municipales), para rendir examen. Este beneficio será acordado en tantos plazos como sea necesario, pero ninguno de los cuales podrá ser superior a siete (7) días. Al término de cada licencia el agente deberá presentar el comprobante respectivo extendido por autoridad del establecimiento educacional, en el que conste que ha rendido examen.

Si al término de la licencia acordada, el agente no hubiera rendido examen por postergación de fecha o mesa examinadora, deberá presentar un certificado extendido por autoridad educacional respectiva, en el que conste dicha circunstancia y la fecha en que se realizará la prueba, quedando hasta entonces en suspenso la justificación

de las ausencias incurridas.

ARTICULO 26º.- Cuando el agente acredite su condición de estudiante en establecimiento a que se refiere el artículo 25º, y la necesidad de asistir a dichos establecimientos en horas de oficina, los respectivos organismos que tengan concedidos horarios especiales deberán arbitrar las medidas para que estos agentes puedan concurrir a clase, clases prácticas y demás exigencias inherentes a su calidad de estudiante, tratando de armonizar que el servicio se afecte al mínimo, y el agente pueda normalmente desarrollar su actividad estudiantil; de no ser ello posible se acordarán permisos dentro del horario de trabajo.

En el caso de resultar imposible a los organismos respectivos adoptar las medidas enunciadas, los agentes podrán optar por el artículo 12º del decreto Nº 945/60 (º).

ARTICULO 27º.- En el transcurso de cada decenio el agente podrá usar de licencia sin remuneración por el término de seis (6) meses fraccionable en dos (2) períodos. El término de licencia no utilizado en un decenio, no puede ser acumulado a los decenios subsiguientes. Para tener derecho a esta licencia en distintos decenios, deberá transcurrir un plazo mínimo de dos (2) años entre la terminación de una y la iniciación de otra, y no podrá adicionarse a las licencias previstas en los arts. 23º, 28º y 29º. Además deberá contarse con una antigüedad ininterrumpida en la Administración Pública de un (1) año.

ARTICULO 28º.- El agente tendrá derecho a un (1) año de licencia sin sueldo cuando deba realizar estudios, investigaciones, trabajos científicos, técnicos y culturales, o participar en conferencias o congresos de esa índole, en el país o en el extranjero, ya sea por iniciativa particular, estatal o extranjera o por becas otorgadas por Instituciones privadas, nacionales o extranjeras.

Esta licencia podrá ser prorrogada por un año más en

(º) Ver Digesto Administrativo Nº 1075.-

iguales condiciones, cuando las actividades que realice el agente a juicio de los Ministerios o Secretarías de Estado resulten de interés para el servicio. En este caso el agente queda comprometido a no retirarse de la Administración Pública Nacional hasta transcurrido un (1) año como mínimo desde la fecha de su reintegro a las funciones.

Para usufructuar esta licencia deberá contarse con una antigüedad ininterrumpida en la Administración Pública de un año, y no podrá adicionarse a las licencias previstas en los artículos 27° y 29°, debiendo mediar una real prestación de servicios de un (1) año.

ARTICULO 29°.- Los agentes de la Administración Pública podrán obtener licencia con goce de sueldo por el lapso que se determinará en forma expresa en el decreto que el Poder Ejecutivo dicte para su concesión cuando se den las siguientes causales y se cubran los requisitos exigidos: que los intereses de la Nación en materia técnica, científica o profesional afín aconsejen la concurrencia o incorporación de agentes a Instituciones en el extranjero o en el país. Al efecto deberá expedirse con carácter previo, la Comisión Nacional de la Unesco, cuando se trate de pedidos fundados en las actividades de ese organismo internacional, o el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en los demás casos, los que determinarán el verdadero interés nacional de la concurrencia o incorporación, fundando dicha opinión en la necesidad e importancia que para el país reportaría los estudios a realizar. También corresponderá a dichos organismos analizar la aptitud, antecedentes, capacitación y títulos de los candidatos propuestos.

El agente que use esta licencia queda comprometido mediante acto legal expreso a permanecer como empleado de la Administración Pública Nacional por el término de tres (3) años como mínimo, a partir de la fecha del reintegro a sus funciones; si antes del término fijado el mismo de-

cidiera su alejamiento de la función pública se le hará cargo de devolución de los sueldos percibidos durante el tiempo que permaneció en uso de la licencia de referencia.

Asimismo queda obligado a presentar ante la autoridad superior de su organismo un trabajo sobre la materia abordada durante su concurrencia o incorporación a la entidad extranjera o en el país.

Para tener derecho a esta licencia deberá contarse con una antigüedad en la Administración Pública Nacional de un (1) año ininterrumpido; y no podrá adicionarse a las previstas en los artículos 27º y 28º, debiendo mediar como mínimo una real prestación de servicios de un (1) año.

ARTICULO 30º.- Fuera de los casos de licencias contempladas expresamente en el presente decreto, podrán justificarse por razones particulares de fuerza mayor con goce de haberes, hasta seis (6) días por año calendario que no excederán de dos (2) por mes.

ARTICULO 31º.- El agente tendrá derecho a la justificación con goce de haberes de las inasistencias motivadas por fenómenos meteorológicos especiales debidamente comprobados, y no incidirán en el premio por asistencia instituído por decreto Nº 9.252/60.-

En todos los casos deberá cotejarse, previo a la justificación, el domicilio declarado por el agente en las Oficinas de Personal y el lugar del siniestro.

ARTICULO 32º.- Las licencias concedidas por causas de enfermedad o accidentes podrán ser canceladas si las autoridades médicas respectivas estimasen que se ha operado el restablecimiento total antes de lo previsto.

El agente deberá en todos los casos, solicitar la reincorporación a sus funciones, aún cuando no hubiere vencido el término de su licencia, siempre que se encontrare en condiciones necesarias de acuerdo a la reglamentación presente.

ARTICULO 33º.- Se considerará falta grave toda simulación realizada con el fin de obtener licencia o justificación de inasistencias; el agente incurso en esta falta será sancionado conforme a lo establecido en el Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional o regímenes similares. Igual procedimiento se seguirá con el médico funcionario público que extienda certificación falsa.

ARTICULO 34º.- Facúltase a los señores Ministros y Secretarios de Estado para determinar qué funcionarios tendrán a su cargo la concesión de las licencias previstas en el presente decreto, con excepción de la determinada por el artículo 29º, que será acordada por el Poder Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 35º.- Al personal que reviste como adscripto o en comisión, las licencias a que se refiere el presente decreto con excepción de los artículos 11º, 12º, 28º y 29º serán concedidas por los organismos en los cuales presta servicios el agente, circunstancia que oficialmente se pondrá en conocimiento de las reparticiones de donde aquél depende presupuestariamente. Igual procedimiento se seguirá para la aplicación de sanciones disciplinarias emergentes del presente decreto.

ARTICULO 36º.- El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública es la única autoridad competente para expedir al aspirante el certificado de salud a que hace referencia el artículo 3º, inciso 5º del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública.

En el caso de que en el primer examen no se pudiese otorgar el certificado de aptitud, se le extenderá al postulante un certificado de salud provisorio, que podrá ser renovado periódicamente hasta un lapso no mayor de 180 días a cuyo término se expedirá en forma definitiva sobre la aptitud o inaptitud del interesado. Durante el lapso de vigencia de este certificado de salud provisorio, se le podrá permitir al aspirante el desempeño de tareas de

acuerdo a la índole de la afección que padece.

Mientras el postulante no se haya sometido al examen psico-físico de aptitud, o se encuentre comprendido en el lapso de certificado de salud provisorio, no tendrá derecho al usufructo de ninguna licencia por enfermedad establecida en este decreto.

ARTICULO 37º.- Las licencias y permisos por razones de salud y/o por maternidad previstas en el presente decreto, no podrán ser aconsejadas ni acordadas, en ningún caso, por Servicios Médicos que dependan jerárquica o funcionalmente de Obras Sociales o Mutualidades.

ARTICULO 38º.- El agente tendrá derecho a usar desde la fecha de su incorporación las licencias regladas en el presente decreto, salvo los casos contemplados en los artículos 3º, 22º, 27º, 28º y 29º para los cuales queda especificada en cada caso la antigüedad requerida.

ARTICULO 39º.- Los distintos Ministerios, Secretarías de Estado y organismos con autonomía funcional, podrán reglamentar la aplicación de las normas del presente decreto, conforme con las necesidades de los servicios respectivos, sometiendo a consideración de la Secretaría de Estado de Hacienda las cuestiones de interpretación o aclaración que sean necesarias para su mejor ejecución.-

ACTO: DECRETO Nº 8.272/61.-

MATERIAS: EMPRESAS DEL ESTADO - LICENCIAS

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1961.-

Visto la necesidad de perfeccionar el régimen de licencias del personal civil de la Nación, así como el del personal perteneciente a las Empresas del Estado en lo referente al reconocimiento médico de nuevos agentes de las mismas y,

CONSIDERANDO:

Que las Empresas del Estado, por sus características especiales, deben poseer las facultades pertinentes para examinar a sus agentes, por medio de sus propios Servicios Médicos, tanto para el ingreso de los mismos, como para el otorgamiento de las licencias fijadas por las normas respectivas;

Que la autonomía proyectada en lo referente al régimen aludido redundará en beneficio de las tareas que son propias de dichas Empresas, por cuanto habra de dotarlas de la suficiente agilidad en la tramitación de licencias e ingresos, con capacidad para resolver con la adecuada rapidez los problemas urgentes que se presentaren, sin interferencias que traben su normal desenvolvimiento;

Que asimismo, es menester dotar a los organismos

//-

del Estado de facultades para resolver, por intermedio de sus servicios médicos, los problemas inherentes a la determinación y certificación de las licencias correspondientes a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o afecciones que requieran largo tratamiento de la salud, para que dichas licencias sean adecuadas a una mayor racionalización, capaz de evitar demoras perjudiciales que no condicen con la eficacia que debe poseer la tramitación de las mismas;

Por ello, y de acuerdo con lo aconsejado por el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Las Empresas del Estado fiscalizarán, por medio de sus servicios médicos, a sus agentes, desde su ingreso hasta su egreso, en lo referente a su aptitud psicofísica para el trabajo, a las licencias por enfermedad (comunes o profesionales), accidentes de trabajo o parto.

Dicha fiscalización se realizará de acuerdo con las directivas técnicas que determine el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, que es el organismo del Estado con facultades para indicar las normas a seguir en la materia.

ARTICULO 2°.- El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública podrá convenir con los organismos de la Administración Pública Nacional que posean un servicio médico adecuado, la forma en que los mismos concederán las licencias correspondientes a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y afecciones que requieran largo tratamiento de la salud. La concesión de dichas licencias se efectuarán sobre la base de las directivas que emanen del citado Departamento de Estado.

ARTICULO 3°.- El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública será, en caso de plantearse divergencias sobre el

otorgamiento de las licencias aludidas en el artículo anterior, el organismo llamado a resolver la cuestión.

ARTICULO 4º.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

ARTICULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Asistencia Social y Salud Pública y de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI - Héctor V. Noblía -
Roberto T.Alemann - Jorge Wehbe



ACTO: DECRETO Nº 8.495/61.-

MATERIAS: OBRAS PUBLICAS - CONTRATACIONES

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1961.-

Visto las medidas sugeridas por el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa para evitar la multiplicación de organismos dedicados a la realización de obras arquitectónicas dentro de los distintos Ministerios, Secretarías de Estado y demás reparticiones autárquicas nacionales, y

CONSIDERANDO:

Que la experiencia y la buena práctica administrativa demuestran acabadamente la bondad de los principios teóricos que exigen una total centralización de esta clase de actividades por los múltiples beneficios que de ella se derivan en los aspectos técnicos, económicos y financieros involucrados en la ejecución de las obras arquitectónicas nacionales;

Que esa centralización tuvo comienzo de realización con los Decretos Nros. 1.383/45, 31.313/45 y 12.207/54 que incorporaron al entonces Ministerio de Obras Públicas las Direcciones de Arquitectura del Consejo Nacional de Educación y del ex Ministerio de Comunicaciones y la Dirección de Construcciones del Ministerio de Salud Pública, creando una única Dirección Nacional de Arquitectura en jurisdicción de aquel Departamento de Estado;

//-

Que lamentablemente no se siguió con la constancia debida por ese camino, volviéndose en cambio a la práctica de la multiplicación de organismos técnicos para el estudio, proyecto y contratación de las obras arquitectónicas nacionales;

Que la Ley Nº 15.796 (') faculta al Poder Ejecutivo para racionalizar, refundir y suprimir servicios de la Administración Pública Nacional, por lo que se cuenta con los medios legales idóneos para obtener en su totalidad - los fines expuestos, en beneficio de una bien entendida economía fiscal y eficiente administrativa, dando también adecuado cumplimiento por esta vía a la distribución de funciones dispuesta por Ley Nº 14.439 (") de organización de los Ministerios y Secretarías de Estado;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- En lo sucesivo la Dirección Nacional de Arquitectura de la Secretaría de Estado de Obras Públicas intervendrá con carácter exclusivo y necesario en todos los estudios, proyectos, ejecución y contratación de obras arquitectónicas que realicen los Ministerios, Secretarías de Estado y demás organismos nacionales, con la sola excepción de las obras militares, que lo serán por las respectivas Secretarías que actúan en jurisdicción del Ministerio de Defensa Nacional.

ARTICULO 2º.- Los Ministerios, Secretarías de Estado y demás organismos oficiales que realicen directamente en la actualidad tareas que por este decreto se atribuyen a la Dirección Nacional de Arquitectura, con la sola excepción

---

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1324.-

(") Ver Digesto Administrativo Nº 505.-

de los organismos militares determinados en el artículo anterior, propondrán dentro de los treinta (30) días de la fecha las medidas que correspondan para eliminar de su estructura funcional y presupuestaria los organismos, funcionarios y/o empleados afectados a las mismas, para transferir los créditos de trabajos públicos vigentes así como las obras en ejecución a la jurisdicción de la Secretaría de Estado de Obras Públicas y para disponer la inclusión del personal que en consecuencia deba cesar en sus cargos, en el régimen del decreto Nº 6.295/61 (-), reglamentario del Art. 36 de la Ley Nº 15.796 (°).

ARTICULO 3º.- A partir del 1º de noviembre del corriente año la Secretaría de Estado de Hacienda no dará curso a ningún libramiento, presupuesto o cualquier otro acto relacionado con organismos de ese carácter que se encuentren fuera de la jurisdicción de la Secretaría de Estado de Obras Públicas, salvo las excepciones ya consideradas en este decreto.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de Obras y Servicios Públicos y firmado por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Obras Públicas.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo -
Arturo Acevedo - Jorge Wehbe -
Manuel H. Acuña

(-) Ver Digesto Administrativo Nº 1426.-

(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1333.-

ACTO: RESOLUCION Nº 7.398/61.-

MATERIAS: DEDICACION PROFESIONAL O TECNICA EXCLUSIVA - DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA

Buenos Aires, 2 de octubre de 1961.-

Visto el pedido formulado por el agente Clase C-Grupo I de la Dirección Nacional de Química, don Antonio Bernabé Aznárez, solicitando que se le reconozcan los servicios prestados en el Ministerio de Salud Pública de la Nación, a efectos de acrecer la antigüedad computable para la percepción de las bonificaciones establecidas por decreto Nº 6.482/61 (1), y

CONSIDERANDO:

Que el recurrente manifiesta haberse desempeñado entre los años 1931 a 1958 como Jefe de Farmacia y Laboratorio del Hospital Común Regional de Río Negro, circunstancia por la cual estima que en razón de haber ejercido dicha especialidad, aquel lapso tendría que tomarse en cuenta para la liquidación de las bonificaciones fijadas por el recordado acto de gobierno;

Que, al respecto, el artículo 3º del citado decreto determina que la sobreasignación por dedicación profesional o técnica exclusiva, será incrementada en función de la antigüedad que el agente registre en la Dirección //-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1428.-

Nacional de Química, en la función profesional o técnica;

Que, en consecuencia, no procede reconocer los años de servicios que el peticionante gestiona hacer valer en la oportunidad, toda vez que el mencionado artículo 3° - constituye una norma expresa, que delimita en forma clara y precisa la condición necesaria para que sea reconocida la antigüedad que por imperio del tratamiento acordado corresponde bonificar;

Que, a mérito de las razones expresadas anteriormente, cabe señalar que tampoco es de aplicación la parte - in-fine del artículo 4° del decreto en cuestión, en razón de que la situación tratada se encuentra perfectamente definida en el régimen respectivo;

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

1°.- No ha lugar a lo peticionado por el agente Clase C- Grupo I de la Dirección Nacional de Química, don Antonio Bernabé Aznárez, en cuanto solicita que a los fines de la sobreasignación por dedicación funcional o técnica exclusiva, acordada por decreto número 6.482/61, le sea reconocida la antigüedad por - servicios prestados fuera del ámbito de la Dirección Nacional de Química.

2°.- Comuníquese a quienes corresponda y archívese.-

Fdo. JORGE WEHBE

ACTO: Fallos del 27 de julio y del 29 de agosto de 1961.

MATERIAS: ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 24) - ESTABILIDAD - LIMITACION DE SERVICIOS (Art. 13, Ley 14.794)

KASSLATTER, Rodolfo S/ Decreto 6.666/57.-

CONSIDERANDO:

Que el señor Rodolfo Kasslatter llega al Tribunal por medio del recurso establecido en el art. 24 del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, aprobado por decreto-ley 6.666/57 (1), atacando de inconstitucionales el art. 13 de la ley 14794 (2), el art. 1º del decreto 11.811 (3) y los decretos 10.115/59 (4) y 11.962 (5).

Que tal actitud obedece a que, por decreto 13.132, del 28 de octubre de 1960, le fueron limitados al señor Kasslatter los servicios que prestaba en la Dirección Nacional de Aduanas, aplicando las disposiciones que ataca.

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-
(2) Ver Digesto Administrativo Nº 688.-
(3) Ver Digesto Administrativo Nº 1255.-
(4) Ver Digesto Administrativo Nº 855.-
(5) Ver Digesto Administrativo Nº 932.-

Que este Tribunal tiene ya resuelto no competirle el conocimiento de cuestiones como la aquí planteada, por la vía del recurso esgrimido en este expediente, salvo que , bajo la apariencia de la aplicación del artículo 13 de la ley 14.794, se encubra una verdadera cesantía, como sanción disciplinaria, de las que caen bajo la protección de este medio jurisdiccional ("Coello", sentencia del 30 de noviembre de 1960, "Yver", sentencia del 2 de marzo de 1961).

Que, en este caso, como ya se dijo, sólo se plantea la incompatibilidad de las normas aludidas con el art. 14 de la Constitución Nacional que garantiza la permanencia en la función pública, pero en momento alguno se pretende que por ese medio se trata de ocultar una sanción de carácter disciplinario.

Por estas consideraciones y las aducidas en los precedentes citados, se desestima el presente recurso.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JUAN CARLOS BECCAR VARELA
HORACIO H. HEREDIA
ADOLFO R. GABRIELLI.

AUTOS Y VISTOS:

Que en esta materia el Tribunal entiende originariamente solo en los casos previstos por el art. 24 del decreto-ley 6.666/57 y en aquellos que, bajo la apariencia de una separación por la vía del art. 13 de la ley 14.794, se ha encubierto una verdadera cesantía de las que dan lugar al recurso organizado por dicho art. 24.

Que en tales condiciones, en el sub judice carecía de competencia para pronunciarse tanto sobre la inconstitucionalidad impetrada, como sobre cualesquiera de las otras defensas esgrimidas.

Que por otra parte la simple concesión del recurso interpuesto precedentemente significaría tanto como admitir

que la resolución del Tribunal obrante a fs. 35 es merecedora de la calificación de "arbitraria", en los términos de la doctrina de la Corte Suprema a ese respecto, lo que por principio no puede aceptarse.

A mérito de lo expuesto, se deniega el recurso extraordinario.

Regístrese y notifíquese.-

JUAN CARLOS BECCAR VARELA
HORACIO H. HEREDIA
ADOLFO R. GABRIELLI.

ACTO: DECRETO Nº 8.586/61.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - BONIFICACIONES ESPECIALES

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1961.-

Visto el programa de mejoras económicas aprobado para el personal de la Secretaría de Estado de Hacienda comprendido en las disposiciones del Escalafón General - Decreto Nº 9.530/58; y

CONSIDERANDO:

Que entre las medidas adoptadas se cuenta la implantación de una bonificación especial a los agentes de determinadas clases y grupos, tendiente a contemplar la urgencia de un incremento de sueldo en ciertos niveles de la escala jerárquica;

Que si bien el programa en cuestión está referido al personal de la Secretaría de Estado de Hacienda, por cuanto ha sido posible llevarlo a la práctica afectando los fondos correspondientes a los cargos vacantes en la misma, resulta equitativo contemplar también la situación de los agentes que revistan en organismos regidos por regímenes escalafonarios propios, en cuyos cuadros, dentro de determinados niveles, se observan similares apremios económicos;

//-

Que dentro de los extremos comentados se encuadra el caso del personal de la Dirección General Impositiva, el cual percibe sus remuneraciones con arreglo a las escalas instituídas por el Decreto nº 7.737 del 17 de octubre de 1958 (+);

Que para la concreción del propósito enunciado no resulta posible proceder a la supresión de cargos vacantes, en razón de que en dicho organismo, declarado por decreto Nº 2.781/60 (°) en estado de reorganización, se encuentran en plena ejecución los planes de intensificación de la labor fiscalizadora tendiente a combatir la evasión fiscal, lo cual torna imperiosa su necesidad de cubrir totalmente los cuadros de personal para cumplir con la labor técnico especializada que demanda las tareas a su cargo;

Que ello no obstante, la implantación para dichos agentes de una bonificación similar a la comentada, puede efectivizarse sin incrementar los créditos asignados a la mencionada Dirección General para el corriente ejercicio financiero, utilizando al efecto indicado las economías efectuadas por la misma en las partidas de su presupuesto "Gastos en Personal";

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Apruébase para el personal de la Dirección General Impositiva las bonificaciones especiales mensuales que se detallan en planilla anexa, las que regirán a partir del 1º de setiembre de 1961.

ARTICULO 2º.- Las bonificaciones especiales establecidas en el artículo 1º no integran el concepto sueldo, remuneración o retribución a los efectos de las disposiciones en vigor.- Ello no obstante, dichas asignaciones son co -

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 638.-

(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1139.-

rrelativas al desempeño efectivo del cargo, debiendo sufrir por esa causal, únicamente, las mismas deducciones que el sueldo en materia de licencias, inasistencias y suspensiones.

ARTICULO 3º.- Autorízase al Consejo de la Dirección General Impositiva para crear la partida global necesaria en el presupuesto de gastos de la citada Repartición para el pago de las bonificaciones que se acuerdan por el presente decreto.

A tal efecto, dicho Cuerpo al practicar el ajuste para el que está autorizado por decreto Nº 3.152 de fecha 28/3/960 (-), no podrá exceder los créditos totales acordados para el corriente ejercicio.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación a sus efectos.-

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo
Jorge Wehbe

(-) Ver Digesto Administrativo Nº 1145.-

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º.

Agrupamiento Escalafonario Decreto Nº 7737/58	Bonificación especial mensual
GRUPO	m$n.
Personal Administrativo y Técnico	
21 al 33	1.800.-
17 al 20	1.700.-
13 al 16	1.600.-
8 al 12	1.500.-
1 al 7	1.400.-
0	1.000.-
Personal Obrero y de Maestranza	
13 al 14	1.600.-
7 al 12	1.500.-
1 al 6	1.400.-
Personal de Servicios Auxiliares	
12 al 15	1.500.-
3 al 11	1.400.-
1 al 2	1.000.-



ACTO: EXPEDIENTE Nº 471.473/61.-

MATERIAS: DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS - POR ZONA

SUPLEMENTO

Señor Director General:

La Dirección Nacional de Aduanas formula en estas actuaciones una consulta respecto de la aplicación de las disposiciones del decreto nº 14.590/57 (1) que estableció un suplemento mensual sobre la remuneración del personal de la repartición destacado en determinadas zonas del territorio de la República.

Es el caso de dos agentes pertenecientes al ex-Instituto Argentino de Promoción del Intercambio que, adscriptos a la repartición, fueron destinados a prestar servicios en comisión en la Receptoría de Rentas Aduaneras de Puerto Deseado, desde el 2 de agosto de 1960 y quienes se han presentado solicitando la liquidación del beneficio acordado por el referido acto de gobierno.

La Dirección Nacional de Aduanas, teniendo en cuenta la situación de revista presupuestaria de los interesados y los términos del régimen comentado, instituído para el personal de la repartición -artículo 1º-, solicita se determine si corresponde abonar a los mismos el

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 385.-

suplemento de que se trata.

Este Departamento, haciendo mérito de los fundamentos que sirvieron de base al dictado del recordado decreto nº 14.590/57, es de opinión que, estando dirigida la bonificación, a compensar las dificultades que debe afrontar el personal que presta servicios en zonas donde se acentúan los problemas del mayor costo de vida, no sería justo establecer una diferenciación en el derecho a percibirla, fundada en un hecho circunstancial como lo constituye el de la dependencia presupuestaria, toda vez que aquellos problemas afectan a todos por igual, y más aún teniendo en cuenta que regímenes similares han sido adoptados para personal de otras jurisdicciones que se desempeñan en zonas alejadas.

Por lo expuesto, se considera que corresponde liquidar a los causantes el beneficio reclamado, sin perjuicio de lo cual y atento la competencia específica que en la materia le fijan las disposiciones vigentes, se estima necesario someter el caso planteado a la consideración de la Dirección General del Servicio Civil de la Nación.

DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, setiembre 20 de 1961.-

Fdo. ADOLFO DIA QUIROGA
Jefe de Departamento

Providencia Nº 1872.-

//nos Aires, 3 de octubre de 1961.-

Con carácter de atenta nota, vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Administración, llevando a su conocimiento que esta Dirección General comparte el criterio sustentado a fs.5; máxime si se tiene en cuenta que el beneficio que acuerda el Dto. 14.590/57 se refiere al personal de la Dirección Nacional de Aduanas en forma genérica y no exclusivamente al personal presupuestario de la misma.

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº. 1468.-



ACTO: ACTUACION C.E.P.R.A. Nº 10.117/61.-

MATERIAS: JUBILACIONES - LIMITACION DE SERVICIOS - C.E.P.R.A.

Buenos Aires, 28 de setiembre de 1961.-

La Secretaría de Transporte solicita diversas aclaraciones con respecto al alcance y correcta interpretación de algunas disposiciones del último decreto sobre baja del personal jubilable de la Administración Nacional.

En su orden el C.E.P.R.A. procede a evacuar los distintos puntos del cuestionario presentado:

a) El decreto establece que deberán tenerse cumplidos los extremos de edad y antigüedad requeridos para obtener la jubilación ordinaria. Para establecer si la compensación entre ambos extremos puede considerarse como cumplimiento simultáneo de los mismos, debe establecerse si esa compensación opera en forma automática y de oficio o se trata de una opción a favor del interesado. El art. 18 de la Ley Nº 4.349 modificado por el art. 1º de la Ley 12.887 establece siempre que el agente "podrá" compensar años de servicio con edad o viceversa. De modo que se trata de un beneficio estatuído a favor del agente. En conclusión el C.E.P.R.A. interpreta que el cumplimiento de los extremos de edad y antigüedad mediante compensación

//-

es facultativo del agente, pero que a los efectos de la baja de oficio deben tenerse ambos cumplidos.

b) Con relación a la opción que el Estatuto del Personal Civil (decreto-Ley 6.666/57 (¹), Art. 19) fija en dos años y la Ley Nº 10.650 para ferroviarios establece en cinco años, para que los agentes jubilables puedan permanecer en sus cargos luego de cumplidos los extremos mencionados en el apartado anterior, el C.E.P.R.A. interpreta, y así lo dicen los considerandos del decreto 8.533/61 (²), que tales opciones han quedado suprimidas cuando se trata de bajas por economías o reestructuración administrativa, pues el art. 36 de la Ley Nº 15.796 (³) solo exige el cumplimiento de aquellos extremos y por lo tanto ha modificado las citadas normas legales. Por otra parte considera el C.E.P.R.A. que las opciones citadas son inaplicables cuando se trata, como en este caso, de una cesación de servicios dispuesta previa indemnización, situación no contemplada en aquellas normas.

c) En forma indistinta podrá disponerse que el agente haga uso de la licencia pendiente o compensarlo pecuniariamente por la falta de goce de la misma.

La interpretación que realiza el C.E.P.R.A. en virtud de las facultades acordadas por el artículo 10º del decreto Nº 8.533/61 se funda en el art. 36º de la Ley 15.796 y en los considerandos y art. 1º del decreto citado que, en lo pertinente, tiene carácter reglamentario de aquella norma legal.

El C.E.P.R.A. resuelve asimismo cursar copia de la presente interpretación al Tribunal de Cuentas de la Nación y a todos lor Organismos civiles existentes en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional.

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. JUAN OVIDIO ZAVALA
Secretario Técnico de la Presidencia de la Nación

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-
(²) Ver Digesto Administrativo Nº 1458.-
(³) Ver Digesto Administrativo Nº 1333.-

ACTO: DECRETO Nº 8.127/61.-

MATERIA: INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1961.-

Visto el expediente Nº 1.591/61, del registro del Ministerio de Economía, en el que el Instituto de Servicios Sociales Bancarios expone la situación existente en relación a los convenios celebrados por el mismo con el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Córdoba y con el Instituto Nacional de Reaseguros, referentes a la prestación de servicios sociales; y

CONSIDERANDO:

Que el decreto-ley Nº 20.714, de fecha 19 de noviembre de 1956 (1), derogó las Leyes Nros. 13.987 y 14.171;

Que el hecho de que el citado decreto-ley, no contenga una disposición similar a la del Decreto Nº 23437/51, artículo 11, inciso m), o de la Ley Nº 14.171, artículo 2º, no permite inferir la caducidad de los convenios celebrados con anterioridad a la sanción de aquel decreto-ley y vigentes en aquel momento;

Que a la citada omisión por parte del decreto-ley Nº 20.714 no debe otorgársele otro alcance que el evitar que nuevas instituciones se incorporen al régimen de que se trata;

Que las condiciones económicas de prestación de esos servicios por parte del Instituto, por la antigua data en que fueron convenidas, han perdido actualidad; //-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 97.-

Que los contratos en ejecución, a la fecha de entrar a regir el decreto-ley Nº 20.714/56, pueden ser objeto de rescisión, renovación y/o actualización por parte del Instituto según lo aconsejen las circunstancias;

Que tal interpretación consulta más adecuadamente los intereses de afiliados que desde la implantación de esos servicios han venido gozando de sus beneficios, ya que en otra forma se verían privados de los mismos;

Por ello, y lo dictaminado por la Asesoría Legal del Ministerio de Economía,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Autorízase al Instituto de Servicios Sociales Bancarios a mantener la afiliación del personal de las entidades que estaban incorporadas a su régimen a la fecha en que entró en vigencia el decreto-ley Nº 20.714/56, por imperio de lo estatuído en el artículo 12, inciso e),ítem 3º, de la Ley Nº 13.987/50, derogada por aquél.

ARTICULO 2º.- Facúltase al mismo Instituto a renovar y/o actualizar los convenios que se hallaban en vigencia al dictarse el decreto-ley Nº 20.714/56, y que habían sido suscriptos con arreglo a lo prescripto en el inciso m),artículo 11 del decreto Nº 23.437/51, ratificado por el artículo 2º de la Ley Nº 14.171/52.

ARTICULO 3º.- Fíjase como contribución obligatoria de las entidades empleadoras referidas en el artículo 1º y de sus respectivos personales, las que establecen los incisos f), g) e i) -este último incorporado por el decreto-ley número 7.555/57 (*)- del artículo 12, del decreto-ley Nº 20.714/56. Para las entidades a que hace mención el artículo 2º y para las incluídas en el artículo 1º que no cuenten con los rubros "intereses y comisiones", se fija como contribución equivalente a la establecida en el artículo 12,inciso i) del decreto-ley Nº 20.714/56, la que sobre la base del costo de sus prestaciones determine el Instituto -

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 267.-

de Servicios Sociales Bancarios, el que queda facultado para rescindir los convenios, no renovarlos o actualizar los, y/o proceder a las desafiliaciones en caso que las entidades no se avengan a efectuar esa contribución.
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía.
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Roberto T. Alemann

de Servicios Sociales Bancarios, el que queda facultado para rescindir los convenios, no renovarlos o actualizar los, y/o proceder a las desafiliaciones en caso que las entidades no se avengan a efectuar esa contribución.
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía.
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Roberto T. Alemann

ACTO: DECRETO Nº 8.270/61.-

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD (Arts. 54 y 64) - PATRIMONIO DEL ESTADO - INMUEBLES DEL ESTADO

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1961.-

Visto el Expediente Nº 141.813/52, del registro de la Secretaría de Estado de Hacienda (Contaduría General de la Nación), y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente se plantea una disparidad de criterio entre la Contaduría General de la Nación y el Consejo Nacional de Educación con respecto a las disposiciones legales que rigen el registro patrimonial de los inmuebles de propiedad del Estado Nacional y el archivo y guarda de los títulos de dominio respectivos;

Que, en consecuencia, corresponde que el Poder Ejecutivo resuelva la cuestión (artículo 86º, inciso 1º, de la Constitución Nacional;

Que el artículo 54º de la Ley de Contabilidad y su reglamentación (Decreto Nº 13.100/57)(') como así también el de la reglamentación del artículo 64º de la misma Ley (Decreto Nº 9.400/57) ratificando disposiciones de los Decretos Nros. 122.843/37 y 15.858/45, dictados en acuerdo general de ministros, establecen expresamente que el archivo y custodia de los títulos de propiedad del Esta-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 487.-

//-

do está a cargo de la Escribanía General de Gobierno, a cuyo fin deben serle remitidos todos los que se hallaren en poder de los distintos organismos estatales, previa la pertinente intervención que corresponde dársele a la Contaduría General de la Nación a los efectos de las anotaciones patrimoniales del caso;

Que la Contaduría General de la Nación, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Estado de Hacienda, el Tribunal de Cuentas de la Nación y la Procuración del Tesoro de la Nación, comparten el criterio en el sentido de que existe fundamentación legal suficiente para disponer el cumplimiento de las normas a que se refiere el considerando anterior;

Que la medida de que se trata, obedece a razones de buen orden administrativo y de mejor conocimiento del patrimonio estatal, que en nada enervan ni afectan las facultades de disposición que competen al Consejo Nacional de Educación;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Los títulos de propiedad de bienes inmuebles del patrimonio del Estado, afectados al Consejo Nacional de Educación, serán intervenidos por la Contaduría General de la Nación a los efectos de su inscripción en los registros patrimoniales respectivos y ulteriormente remitidos a la Escribanía General de Gobierno de la Nación, a cuyo cargo estará el archivo y guarda de los mismos.

ARTICULO 2º.- El Consejo Nacional de Educación adoptará las medidas necesarias para transferir la citada documentación de conformidad con las normas que rigen la materia.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Economía y de Educación y Justicia y firmado por el señor Secretario de Estado - de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc - ción General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaría de Estado de Hacienda, a sus efectos.-

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Héctor V. Noblía - Jorge Wehbe.

ACTO: DECRETO Nº 8.498/61.-

MATERIAS: PLAN DE RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - C.E. P.R.A. - PERSONAL - PROHIBICIONES - ECONOMIAS - VACANTES - BOLSA DE TRABAJO

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1961.-

Vistos los Decretos Nros. 5.006 (') y 6.311 (") de fecha 21 de junio y 27 de julio del corriente año respectivamente y atento a lo manifestado por el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa - (Actuación Nº 9.840);

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A:

ARTICULO 1º.- Amplíase el artículo 1º del Decreto Nº 6.311 de fecha 27 de julio de 1961, incluyéndose en el mismo al Personal Civil del Ministerio de Defensa Nacional, Secretarías Militares y Organismos de Defensa y Seguridad.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Defensa Nacional, de Interior, de Economía y firmado por los señores Secretarios de Estado de Guerra, Ma

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1406.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1431.-

rina, Aeronáutica y de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese y dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo - Justo P. Villar - Jorge Wehbe - Rosendo M. Fraga - Gastón C. Clement - Jorge Rojas

ACTO: DECRETO Nº 8.725/61.-

MATERIAS: ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL (Puntos 16, 17 y 18) - VACANTES - CONCURSOS - CAMBIO DE CLASE O GRUPO - JUNTA EXAMINADORA - LICENCIAS - HORARIO REDUCIDO - CALIFICACIONES

Buenos Aires, 3 de octubre de 1961.-

Visto el Escalafón para el Personal Civil aprobado por decreto Nº 9.530/58 y sus decretos ampliatorios y/o modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que la experiencia acumulada a través de la vigencia de dicho cuerpo normativo hace aconsejable introducir en sus disposiciones las normas que permitan una aplicación más ágil y elástica del sistema;

Que en ese sentido debe procurarse evitar trámites que puedan obviarse, en beneficio, no sólo del servicio, sino de los propios agentes de la Administración Nacional, tales como se verifica en distintos procesos de los llamados a concurso, que resultan fácilmente subsanables sin lesionar por ello los derechos de ningún concursante;

//-

Que tal es el caso de los llamados a concurso para cubrir cargos para los que se exige indispensablemente un determinado título profesional, en los que resulta lógico admitir la participación de los agentes que los poseen y que revisten en la Clase C, Personal Profesional Universitario, junto con los de las Clases A o B que prevean las reglamentaciones vigentes para cada caso;

Que no se avazalla de tal manera el derecho de los agentes de las Clases A o B, los que a igualdad de méritos poseen la prioridad que resulta del punto 16° del Escalafón;

Que en caso similar se hallan los concursos para proveer vacantes correspondientes a jefaturas de dependencias que tienen a su cargo el desarrollo de funciones que participan de la denominación de obrero, maestranza o servicios auxiliares, en las que resulta lógico admitir la participación de los agentes superiores de esas especialidades;

Que debe asimismo preverse un sistema ágil para posibilitar el pase a grupos de horario completo de agentes encasillados en horario reducido, cuando las necesidades del servicio lo hacen aconsejable;

Que debe salvarse también la omisión incurrida en los puntos 29° y 33° del Escalafón respecto de la facultad de las autoridades de los organismos descentralizados o autárquicos para efectuar los llamados a concurso y para integrar las Juntas Examinadoras que actúan en su jurisdicción;

Que resulta necesario fijar nuevas normas sobre el orden de preferencia estipulado en el punto 16 del Escalafón de manera tal que sin alterarlas, sean ampliadas para casos de subsistir la igualdad;

Que debe además encararse la situación que se plantea ante la calificación anual del personal que no presta servicio efectivo durante un período mínimo aceptable, o -

que al momento de efectuarse aquélla se encuentra bajo - sumario;

Que por otra parte deben ampliarse las atribuciones y responsabilidades de las Juntas Examinadoras, de manera tal que, además de fijar el orden de prioridad de los concursantes, se pronuncien sobre la existencia o insuficiencia de méritos de los que resulten ganadores;

Que asimismo debe modificarse la redacción de la norma referente al diligenciamiento de la foja de calificaciones, de manera de salvar un error existente en el texto aprobado por decreto Nº 11.941/59 (');

Que, por último, es propicia la oportunidad para hacer extensivos los beneficios del decreto Nº 4.781/61 (") al personal que solicite licencia sin sueldo para desempeñar funciones en organismos y oficinas internacionales, especializados en materia económica, financiera, bancaria o comercial;

Por ello, y atento a lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda, en uso de las atribuciones resultantes del decreto-ley Nº 797/58 (°) (Ley Nº 14.467)(-), y artículo 20º, inciso 12º, de la Ley Nº 14.439 (=),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Cuando se produzcan vacantes correspondientes a cargos de Clase A (Grupos I a V) o Clase B (Grupos I, II, IX y X) del Escalafón para el Personal Civil (Decreto Nº 9.530/58) para los cuales sea imprescindible la posesión de título universitario, se admitirá la inter -

(') Ver Digesto Administrativo Nº 916.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1410.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 419.-
(-) Ver Digesto Administrativo Nº 609.-
(=) Ver Digesto Administrativo Nº 505.-

vención en los concursos de antecedentes que se realicen para cubrirlas, en primera instancia y junto con los agentes autorizados por los puntos 17 y 18 del Escalafón, (Decretos Nros. 9.530/58 y 3.331/61)(+), de los profesionales universitarios de la especialidad, que revisten en la Clase C.

ARTICULO 2º.- Cuando se produzcan vacantes correspondientes a cargos de Clase B del Escalafón para el Personal Civil (Decreto Nº 9.530/58), que respondan a jefaturas o subjefaturas de organismos cuyas actividades específicas integren el concepto de maestranza y obreras, o estén íntimamente vinculadas a la producción, construcción, reparación y/o conservación de muebles, maquinarias, edificios, instalaciones, equipos, herramientas, útiles, automotores, embarcaciones y toda clase de bienes en general, se admitirá la intervención en los concursos de antecedentes que se realicen para cubrirlas, en primera instancia y junto con los agentes autorizados por el punto 18º del Escalafón (Decretos Nros. 9.530/58 y 3.331/61), de personal escalafonado en los Grupos I a IV de la Clase E (Personal de maestranza y obrero).

ARTICULO 3º.- Cuando se produzcan vacantes correspondientes a cargos de Clase B del Escalafón para el Personal Civil (Decreto Nº 9.530/58), que respondan a jefaturas o subjefaturas de organismos de servicios generales cuya actividad específica esté vinculada con la vigilancia, seguridad y/o limpieza de edificios o locales, y el cuidado y atención de bienes semovientes, se admitirá la intervención en los concursos de antecedentes que se realicen para cubrirlas, en primera instancia y junto con los agentes autorizados por el punto 18 del Escalafón (Decretos Nros. 9.530/58 y 3.331/61), del personal escalafonado en los Grupos I y II de la Clase F (Personal de servicios auxiliares).

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 1390.-

ARTICULO 4º.- Los organismos de la Administración Pública Nacional comprendidos en el Escalafón para el Personal Civil (Decreto Nº 9.530/58), que por necesidades de sus respectivos servicios, derivadas del incremento de sus atribuciones, funciones o tareas, deban ampliar la jornada de labor de sus agentes escalafonados en Clase B o C en Grupos de horario reducido, llevándolos a horario completo, deberán cumplimentar los siguientes requisitos:

1º Contar con la aprobación del Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.).
2º Someter a consideración del P.E. la modificación del agrupamiento funcional respectivo, con la previa intervención de la Secretaría de Estado de Hacienda.
3º Elevar al P.E. el reajuste de su planta de personal, o aprobarlo por sí en caso de contar con facultades legales para hacerlo, pero sin aumentar para ello el total de sus autorizaciones presupuestarias.
4º Reubicar a los agentes afectados por la medida en los Grupos de turno completo que sean equivalentes, en forma automática y sin concurso previo.

ARTICULO 5º.- Las autoridades de las Reparticiones descentralizadas o autárquicas con facultades para nombrar o remover personal podrán autorizar el llamado a concurso para cubrir vacantes dentro de su jurisdicción, y designar los miembros integrantes de las Juntas Examinadoras que deben considerar los mismos, con arreglo a los requisitos generales fijados en los puntos 29 y 33 del decreto Nº 9.530/58 y sus complementarios y/o modificatorios.

ARTICULO 6º.- Modifícase el orden de preferencia fijado en el punto 16 del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Nacional (Decreto Nº 9.530/58), el que queda fijado en la siguiente forma:

1º Personal del organismo donde se realiza el concurso.

2º Personal del Ministerio o Secretaría de Estado a que pertenece el organismo.
3º Personal de la Administración Nacional.

Dentro de cada uno de los órdenes de prioridad indicados se observará, a igualdad de méritos, el siguiente orden de preferencia:

a) Mayor jerarquía presupuestaria (Clase, Grupo y/o Categoría);
b) Mejor calificación promedio de los dos (2) últimos años;
c) Mayor antigüedad en el organismo;
d) Mayor antigüedad en el Ministerio o Secretaría de Estado a que pertenece el organismo;
e) Mayor antigüedad en la Administración Nacional.

ARTICULO 7º.- Agréguese a la enumeración de agentes que no deben ser calificados, fijada en el punto 38 del Escalafón para el Personal Civil (Decreto Nº 9.530/58), lo siguiente:

"g) Los agentes que no hayan prestado servicio efectivo durante un mínimo de tres (3) meses, consecutivos o alternados, durante el período correspondiente. En estos casos le será considerada a los mismos la calificación obtenida en el último período calificatorio a los fines del pase de categoría".

ARTICULO 8º.- Modifícase el apartado II de las normas complementarias del punto 7º del Escalafón para el Personal Civil, aprobadas por decreto 11.941/59, el que debe considerarse redactado de la siguiente forma:

"II.- El personal comprendido en el artículo 39º del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional y su Reglamentación, no será calificado hasta tanto se resuelva definitivamente su situación administrativa, y su promoción, si correspondiese, se hará con sujeción a lo previsto en el inciso a) del apartado I".

ARTICULO 9º.- Modifícase el apartado IV de las normas complementarias del punto 33 del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Nacional (Decretos Nros.9.530/58 y 11.941/59) el que deberá considerarse redactado de la siguiente forma:

"IV.- La Junta calificará los exámenes o antecedentes, en su caso; establecerá el orden de prioridad de los concurrentes y emitirá su opinión acerca de si los que han ocupado el primer lugar, o los primeros lugares, según se trate de cubrir una o más vacantes, llenan las condiciones mínimas necesarias para desempeñar el cargo, o si por el contrario existe insuficiencia de méritos en el o los candidatos.

Una vez efectuados dichos trámites, procederá a remitir toda la documentación al respectivo servicio de personal, el que notificará a los interesados exclusivamente el orden de prioridad y la declaración de la Junta Examinadora a que se alude en el párrafo anterior, no pudiendo exhibir a los concursantes ni las pruebas rendidas ni los antecedentes aportados del interesado ni de los demás concursantes.

A partir de la fecha de notificación de los interesados correrá un plazo de dos (2) días laborables, vencido el cual sin que se hubieran producido reclamos, se dará por aceptada la resolución de la Junta y según ésta se confeccionará el correspondiente acto administrativo proponiendo la designación o declarando desierto el concurso".

ARTICULO 10.- Modifícase el texto de las normas complementarias del punto 41º del Escalafón para el Personal Civil, aprobadas por decreto Nº 11.941/59, apartado IV, Cuadro 2º, tercer párrafo, el que deberá considerarse así redactado:

"En la primera casilla de la última columna (lapso que abarca la calificación) se anotará el total de días -

laborables contenidos en el lapso aludido, de acuerdo con la modalidad del servicio en que se desempeñe".

ARTICULO 11.- Háganse extensivos los beneficios del decreto Nº 4.781/61 al personal de la Administración Nacional comprendido en el Escalafón para el Personal Civil que haga uso de licencia extraordinaria sin goce de haberes como consecuencia del desempeño de funciones temporarias en organismos u oficinas internacionales especializadas en materia económica, financiera, bancaria, comercial o que de algún modo resulte de aplicación en las funciones específicas del servicio a que pertenece presupuestariamente el agente.

ARTICULO 12.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 13.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Roberto T.Alemann
Jorge Wehbe.

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	N°. 1473.-

ACTO: LEY N° 15.890.-

MATERIA: PENSIONES

Sancionada: 21 de setiembre de 1961.-

POR CUANTO:

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO, SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y :

ARTICULO 1°.- Modifícase el artículo 20 de la Ley 13.018 de la siguiente forma:

Artículo 20.- La pensión se acordará de conformidad con las siguientes disposiciones: a) A los derechohabientes del personal en situación de retiro o fallecido en actividad, el importe de la pensión será del 75% del haber de retiro que gozaba o a que tenía derecho el causante al día de su muerte; b) Los derechohabientes del personal en situación de actividad que fallezcan en o por actos del servicio, gozarán de pensión mensual equivalente a las dos terceras partes del sueldo asignado, al cargo que tenía el causante al día de su muerte.

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, Buenos Aires, a los veintiún días del mes de setiembre del año mil novecientos sesenta y uno.-

J.M. GUIDO
Claudio A. Maffei

OSCAR LOPEZ SERROT
Eduardo T. Oliver

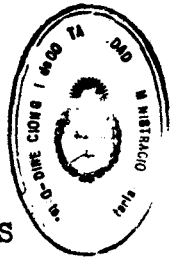
Buenos Aires,6 de octubre de 1961.-

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Luís R. Mac Kay

DECRETO Nº 8.944.-



ACTO: LEY N° 15.892.-

MATERIAS: JUBILACIONES - SERVICIOS HONORARIOS

Sancionada: 21 de setiembre de 1961.-

POR CUANTO:

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO, SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y :

ARTICULO 1°.- Decláranse computables por las cajas nacionales de previsión social, a los efectos jubilatorios, los servicios de carácter honorario prestados por profesionales del arte de curar en hospitales provinciales, municipales o sociedades de beneficencia, que hubieren sido designados por autoridad competente.

ARTICULO 2°.- A los efectos de establecer las sumas correspondientes por aportes no ingresados, se considerarán como devengados por el agente, durante la prestación honoraria de servicios, los sueldos que para iguales o similares servicios rigieron en las épocas respectivas.

ARTICULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de setiembre del año mil novecientos sesenta y uno.

J.M. GUIDO — OSCAR LOPEZ SERROT
Claudio A. Maffei — Eduardo T. Oliver

Buenos Aires, 6 de octubre de 1961.-

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, - publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI - Héctor V. Noblía -
Alfredo R. Vítolo -.I.E. Brune
Quijano

DECRETO Nº 8.931.-

ACTO: Fallo del 24 de julio de 1961.-

MATERIAS: ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Arts. 24, 25, 26, 27, 34, 37, 40 y 44) - ESTABILIDAD - CALIFICACIONES - CESANTIA

RECURSO DE QUEJA: en autos "DE LA TORRE, José Alejandro s/ decreto-ley 6.666/57" (').

Que el actor José Alejandro de la Torre fué designado subdirector de Asistencia Social en el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública por decreto número 1.188/58 y por resolución Nº 696/58 (fs. 8 del expediente Nº 86.771/59 agregado sin acumular), se le adscribió a la Subsecretaría del Ministerio.- En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 14 de la Ley número 14.439 ("), el 15 de septiembre de 1958 se lo nombró delegado de dicho Ministerio ante la Dirección Nacional de Seguridad y Protección Social de la Mujer, dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.- Allí se desempeñó desde el 1º de octubre de 1958 hasta el 31 de agosto de 1959, fecha en que pasó nuevamente a Salud Pública por haberse así dispuesto en la resolución 1.839/59 de este Ministerio, adscribiéndolo a la //-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 254.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 505.-

Dirección General de Mantenimiento Técnico (fs. 4, expte. 68.267/58).- Por disposición Nº 856/59 del 21 de septiembre de 1959, del titular de dicha Dirección, le fueron asignadas funciones de encargado administrativo de los talleres y depósitos de la calle Dávila 704 de esta Capital (fs. 2, expte. 10.905/59).- Que el señor de la Torre se negó a cumplir esta orden por considerarla ilegal y no corresponder las funciones que se le asignaban a la jerarquía de su cargo.

Que un mes después, aproximadamente, fué calificado con 10 puntos a los efectos del decreto 10.115/59 (-), reglamentario del art. 13 de la Ley 14.794 (=), lo cual le fué notificado el 26 de octubre, (la nota lleva fecha 23) haciéndole saber que podía presentar recurso de reconsideración dentro de los tres días, de acuerdo con el art. 4º de ese decreto, lo que hizo de inmediato el señor de la Torre.- Este recurso fué desestimado, sin dar ningún fundamento, por disposición del Sr. Subsecretario del 16 de noviembre de 1959.

Que, entre tanto, por decreto del 23 de octubre número 13.372, ya había sido dejado cesante, haciéndose aplicación del art. 4º del decreto Nº 10.115/59, reglamentario del art. 13 de la Ley 14.794.

Que contra este decreto interpuso el recurso establecido por el decreto 16.009/59 (º), (expte. 86.771/59, fs. 1/2), lo que motivó la intervención de la Comisión Asesora de Apelaciones, creada por dicho decreto, la cual dictaminó por unanimidad sosteniendo que la calificación de que había sido objeto el señor de la Torre "no concuerda con los antecedentes solicitados por esta Comisión Asesora, por lo que estima que corresponde hacer lugar al recurso interpuesto" (fs. 8, expte. 11.324/60).- Los antecedentes a que se refiere la Comisión son los que obran a fs.

(-) Ver Digesto Administrativo Nº 855.-
(=) Ver Digesto Administrativo Nº 688.-
(º) Ver Digesto Administrativo Nº 1033.-

6/7 de dicho expediente administrativo agregado sin acumular, de los cuales resulta que durante los años 1957,1958 y 1959 no ha tenido ninguna falta de asistencia ni de puntualidad y que en los dos primeros de esos años fué calificado de sobresaliente, no registrando ninguna sanción disciplinaria.

Que, a pesar del dictamen aludido en el considerando anterior, el Poder Ejecutivo -sin mencionarlo- desestimó el recurso por decreto 7.369 del 30 de junio de 1960, fundado en la baja calificación obtenida por el recurrente y en la inoperancia y desapego evidenciados durante el término de su desempeño como Delegado del Ministerio ante la Dirección Nacional de Seguridad y Protección Social a la Mujer (fs. 14/15, expte. 11.324/60).

Que, contrariamente a lo afirmado en este decreto,del expediente Nº 338507/60 del registro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se desprende que la actuación del señor de la Torre ante la indicada Dirección mereció el calificativo de sobresaliente (25 puntos); y, además, en la nota enviada por el Subsecretario de ese Ministerio al de Salud Pública se dice expresamente: "me hago un deber en hacer saber a las autoridades de ese Ministerio que en la nota donde la Directora Nacional de Seguridad y Protección Social a la Mujer comunica que el señor José Alejandro de la Torre, ha dado término a sus funciones el día 31 de agosto, hace constar la brillante colaboración que le ha brindado en la organización de esa repartición a su cargo, y cumplo con la obligación de así destacarlo ante la posibilidad de que las autoridades de ese Departamento de Estado consideren que ello pueda quedar registrado en su legajo personal".

Que con posterioridad a la cesantía dice el recurrente que por decreto 12.356 del 7 de octubre de 1960 y resolución 2.480 del día 13 siguiente, fué clasificado en el Escalafón como Fiscalizador Administrativo (Clase "B",Gru

po VI), es decir por debajo de la categoría que correspondía a su cargo (ver fs. 60/64 de este expediente).

Que contra el decreto de su cesantía el señor de la Torre interpuso el recurso establecido por el art. 24 del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, aprobado por decreto-ley 6.666/57, lo que ha traído las actuaciones al Tribunal, después de haber sustanciado la queja de que instruyen estos obrados.

Que frente a tales antecedentes, es necesario recordar que esta Cámara ha declarado carecer de competencia para intervenir por la vía del presente recurso, en los casos de separación del cargo fundada en los artículos 13 de la Ley 14.794 y 5º del decreto 10.115/59, por no tratarse de una sanción disciplinaria "en tanto no constituye un acto que tienda a encubrir una medida de esa naturaleza", y que si la calificación del agente resulta buena o mala es cuestión que, por vía de principio, no puede considerar ("Coello, Luis Gabriel", sentencia del 30 de noviembre de 1960; "Yver, Juan Carlos", sentencia del 2 de marzo último).

Que en este caso se presenta a juicio del Tribunal, típicamente configurado el supuesto de excepción a que se refieren los precedentes citados. En efecto, si en los años 1957 y 1958 el recurrente mereció el calificativo de sobresaliente (25 puntos) y desde el 1º de octubre de 1958 hasta el 31 de agosto de 1959 se desempeñó en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde también mereció la nota de sobresaliente no se justifica que en octubre de este último año sea calificado con una nota tan baja, como lo fué, a los efectos de la aplicación del decreto 10.115/59, sin que haya mediado ninguna falta, según resulta de los antecedentes que tuvo a la vista la Comisión Asesora de Apelaciones y que obra a fs. 6/7 del expediente 11.324/60; antecedentes que fueron precisamente los que indujeron a la Comisión a aconsejar se dejara sin efecto

la cesantía.

Que a esto debe agregarse que el decreto por el cual fué separado de la función pública el señor de la Torre - se dictó antes de que éste conociera la calificación de que fué objeto y, por consiguiente, también antes de que pudiera utilizar los recursos que le competían para reclamar de ella.- Asimismo debe tenerse en cuenta la disminución de jerarquía que se impuso.

Que todas estas circunstancias revelan un proceder arbitrario de parte de los órganos administrativos y producen el convencimiento de que, bajo la apariencia de una - separación por la vía del art. 13 de la Ley 14.794, se ha encubierto una verdadera cesantía de las que dan lugar al recurso organizado por los arts. 24 y 25 del decreto- ley 6.666/57.

Que en tales condiciones, la competencia del Tribunal surge indudable y la declaración de ilegitimidad del — decreto que separó al recurrente se impone.

Que el señor Ministro de Asistencia Social y Salud Pública, en su informe de fs. 81, manifiesta que su Ministerio procedió a calificar al señor de la Torre "en cumplimiento de las normas contenidas en el decreto 10.115/59 , por cuanto el mismo en ningún momento estuvo adscripto o en comisión ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sino que se le asignaron funciones de Delegado ante dicho Ministerio.- Esto lo expresa en virtud de que las - instrucciones de la Secretaría Técnica de la Presidencia establecieron que con respecto al personal adscripto, su eventual inclusión en la nómina de agentes que deberán cesar sería realizada por los funcionarios u organismos en que aquél prestaba servicios el 22 de agosto de 1959.-Desde luego que tal interpretación estrictamente literal de la norma no parece razonable.- Al disponer esas instrucciones la competencia para la calificación en la forma que - lo hizo ha tenido en cuenta que quién está en condiciones para hacerlo es la autoridad bajo cuya vigilancia inmediata actuara el agente; y ello ocurre exactamente igual en

lo supuesto de adscripción como en el caso de haber actuado en calidad de Delegado.-que es lo que ocurre aquí-, ya que en ambos existe un desempeño de funciones alejado del superior jerárquico que le es propio y bajo la vigilancia inmediata de otro.

Que, por otra parte, aún admitiendo la competencia del Ministerio de Salud Pública para calificar, resulta arbitrario prescindir de la opinión de los funcionarios que lo han visto actuar, sobre todo cuando no se incoara ninguna razón para justificar tal temperamento y la que se esgrime en el decreto que desestimó el recurso del interesado resulta desmentida por los elementos agregados a las respectivas actuaciones, como ya se dijo más arriba.- Que dando por sentado pues que el señor de la Torre ha sido separado de su cargo en virtud de una cesantía como sanción disciplinaria, la declaración de ilegitimidad del decreto que la dispuso resulta ineludible, por haberse violado todas las disposiciones del Estatuto relativas a la estabilidad de los funcionarios públicos y omitido las formalidades que deben cumplirse para su separación (arts. 11, 34, 37, 40 y 44 y concordantes del decreto-ley 6.666/57.-

En virtud de lo expuesto, se declara la procedencia del presente recurso y, al hacerse lugar a lo en él solicitado, se declara la ilegitimidad del decreto 13.372 del 23 de octubre de 1959, en cuanto dispuso la cesantía del señor José Alejandro de la Torre y la del de fecha 30 de junio de 1960 Nº 7.369 que la confirmó, y se dispone la reincorporación del agente con la categoría que corresponde al cargo de subdirector que investía a la fecha de la terminación de sus servicios, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 26 y 27 del decreto-ley 6.666/57.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

JUAN CARLOS BECCAR VARELA - HORACIO H. HEREDIA - ADOLFO R. GABRIELLI.

ACTO: DECRETO Nº 8.934/61.-

MATERIAS: SERVICIO EXTERIOR - JUBILACIONES - PERSONAL

Buenos Aires, 6 de octubre de 1961.

Visto que el artículo 168 del Decreto Nº 5.182/48, reglamentario de la Ley 12.951 del Servicio Exterior de la Nación, establece que a los efectos jubilatorios el personal administrativo destacado en el exterior estará comprendido en las disposiciones que rigen al personal de la Administración Pública en la materia, y

CONSIDERANDO:

Que al redactarse el referido artículo no quedó debidamente aclarada la situación que se le presenta al personal administrativo que preste servicios conforme al artículo 70 de la Ley 12.951, frente a lo que determina el inciso f) del artículo 16 de la citada Ley, para el personal con estado diplomático, ya que a este se le computa a los efectos jubilatorios, como doble el tiempo de servicios prestados en paises considerados insalubres o que se encuentren en estado de guerra o lucha civil.

Que el artículo 162 del mencionado Decreto Nº 5182/48, asimila en diversos aspectos a los empleados administrativos en el exterior con los funcionarios con estado diplomático, y no se contemplan los riesgos y peli

//-

gros emergentes del desempeño de funciones en los paises que estén en las condiciones antes mencionadas;

Que la Junta Calificadora del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, al considerar esta situación dictaminó el 17 de julio de 1956, aconsejando la equiparación de unos y otros funcionarios en este aspecto,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Declárase comprendido en los derechos mencionados en el apartado f, del artículo 16 de la Ley Nº 12.951, al personal administrativo; de maestranza y obrero y de servicios auxiliares del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que presta servicios en el exterior de conformidad con las disposiciones de la citada Ley y su Decreto reglamentario.

ARTICULO 2º.- El personal mencionado en el artículo anterior, que se hubiese acogido a los beneficios de la jubilación o retiro con anterioridad a la fecha del presente decreto o aquellos que en el futuro pasen a la pasividad, tendrán derecho a computar los años de servicios prestados en las condiciones establecidas en el citado apartado f) del artículo 16 de la Ley 12.951.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas, publíquese y archívese.

FRONDIZI - Miguel A. Cárcano

ACTO: DECRETO Nº 9.051/59.-

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD (Art. 49) - PAGOS DIRECTOS

Buenos Aires, 29 de junio de 1959.-

Visto las disposiciones del artículo 49° de la Ley de Contabilidad y su reglamentación, y

CONSIDERANDO:

Que por el referido artículo se faculta al Poder Ejecutivo para fijar en cada jurisdicción el monto hasta el cual podrán efectuar pagos directos las distintas tesorerías que la integran;

Que a tal efecto y reunida la información correspondiente a cada una de sus reparticiones, la Secretaría de Estado de Hacienda propone el respectivo ordenamiento, sobre la base de las necesidades que plantea la naturaleza y característica de cada servicio;

Por ello, atento lo manifestado por el Tribunal de Cuentas de la Nación;

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Las Tesorerías habilitadas en la Dirección General de Contabilidad y Administración, Direc -

//-

ción General Impositiva, Dirección Nacional de Aduanas, Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos y Dirección General de Suministros del Estado, dependientes de la Secretaría de Estado de Hacienda, podrán pagar directamente las cuentas por suministros, servicios u obras que provengan de contrataciones realizadas por su intermedio, hasta un máximo de CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 100.000 m/n.).

ARTICULO 2°.- La Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos podrá efectuar pagos directos sin límite de importes, de las sumas que corresponda pagar con afectación a las cuentas especiales "Explotación Salas de Entretenimientos" y "Explotación Hipódromos".

ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación a sus efectos.-

FRONDIZI - Alvaro C.Alsogaray
Guillermo W. Klein

ACTO: DECRETO Nº 9.248/61.-

MATERIAS: JUBILACIONES - PENSIONES

Buenos Aires, 16 de octubre de 1961.-

Visto el artículo 3º de la Ley 14.499 (1), según el cual las prestaciones acordadas por las Cajas de Previsión, antes de la vigencia de dicha ley, deben ser actualizadas conforme con las disposiciones de su artículo 2º; las previsiones sobre acrecimientos de haberes de pasividad resultantes de diversos regímenes jubilatorios correspondientes a las Cajas enumeradas en el artículo 1º de la misma ley; y el artículo 7º del Decreto Reglamentario Nº 11.732/60, que fija la fecha a partir de la cual deben calcularse las diferencias emergentes de las nuevas escalas para los casos generales, y

CONSIDERANDO:

Que es propósito del Poder Ejecutivo dar cumplimiento integral a los beneficios concedidos por la Ley número 14.499;

Que la aplicación de tales normas, ha requerido y requiere una tarea administrativa de gran envergadura, que ha ocasionado una demora cierta en la liquidación de las diferencias aludidas;

Que el pago del total de las retroactividades devengadas o a devengarse torna indispensable la inversión -

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 621.-

de ingentes sumas, que exceden las disponibilidades de las distintas Cajas, aun mediante la aplicación de los preceptos que regulan el funcionamiento del Fondo Compensador de Inversiones y Acumulaciones, previsto en el artículo 9º de la Ley 14.499;

Que es necesario arbitrar los medios idóneos para que las mejoras concedidas lleguen, en el menor término posible, a todos los jubilados y pensionados;

Que, por otra parte, los planes de regularización de pagos formulados por las distintas Cajas permiten afirmar que, en plazo relativamente corto, se volcarán en el mercado importantes sumas, con previsibles efectos inflacionarios, por tratarse de cantidades destinadas total o prevalentemente a inversiones en bienes de consumo;

Que es por ello imperioso hallar una solución adecuada a los distintos problemas indicados, disponiendo una forma de pago que, conciliando los intereses de los beneficiarios con las posibilidades de las Cajas y sin afectar las superiores finalidades del régimen previsional, resguarde la economía general del país;

Que en el decreto 11.732/60, reglamentario de la Ley Nº 14.499, no fué previsto este importante aspecto que origina el cumplimiento de la ley, siendo por lo tanto necesario establecer los modos y condiciones para el pago de retroactividades;

Que, no debiendo crearse nuevos motivos de prevalencias entre distintos sectores de beneficiarios, el pago de retroactividades originadas por actualizaciones de haberes excluídas del régimen de la Ley 14.499, en virtud de lo estatuído en el artículo 2º, párrafo 5º de la misma, debe sujetarse a las normas que mediante el presente se establecen;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Las Cajas Nacionales de Previsión a que se refiere el artículo 1º de la Ley 14.499, procederán a la actualización de los haberes de las jubilaciones y pensiones, respetando el orden correlativo de las actuaciones, salvo supuestos especialísimos, derivados de causas de excepción, que deberán ser valoradas por los respectivos directorios o quien ejerciere sus funciones y declaradas, en cada caso, mediante resolución fundada.

ARTICULO 2º.- Las liquidaciones que importen dichas actualizaciones serán abonadas de la siguiente manera:

a) Si la liquidación no excediera de veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 20.000.-), se abonará juntamente con la actualización del haber;
b) Cuando fuere superior a dicha suma y no excediere los cien mil pesos moneda nacional (m$n. 100.000.-), se abonará veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 20.000.-) simultáneamente con la actualización del haber, y el saldo en cuotas bimensuales de cinco mil pesos moneda nacional (m$n. 5.000.-);
c) Cuando excediere de cien mil pesos moneda nacional (m$n. 100.000.-) y hasta doscientos mil pesos moneda nacional (m$n. 200.000.-) se abonará veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 20.000.-) juntamente con la actualización del haber y el saldo en veinte (20) cuotas bimensuales;
d) Cuando excediere de doscientos mil pesos moneda nacional (m$n.200.000.-), se abonará veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 20.000.-) juntamente con la actualización del haber y el saldo en veinticinco (25) cuotas bimensuales.

En los casos de los puntos c) y d) los pagos bimensuales no podrán ser inferiores a cinco mil pesos moneda nacional (m$n. 5.000.-) o nueve mil pesos moneda nacional - (m$n. 9.000.-) respectivamente, debiendo reducirse en esas circunstancias el número de cuotas indicado.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y firmado por el señor Secretario de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Ismael E.Bruno Quijano
Roberto T.Alemann - Jorge Wehbe.

ACTO: RESOLUCION Nº 7.454/61.-

MATERIA: LICENCIAS

Buenos Aires, 24 de octubre de 1961.-

Visto que el artículo 34º del régimen de licencias aprobado por el decreto Nº 8.567/61(*) faculta a los señores Ministros y Secretarios de Estado para determinar los funcionarios que tendrán a su cargo la concesión de las licencias previstas por dicho cuerpo de disposiciones y

CONSIDERANDO:

Que si bien el dictado de las normas reglamentarias de aquel acto -conforme lo autoriza su artículo 39º- está supeditado actualmente a la formulación de diversas aclaraciones requeridas sobre el particular a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, corresponde fijar el régimen jurisdiccional de las autoridades con facultades para resolver en la materia, toda vez que la vigencia inmediata de varias de las disposiciones fijadas en el texto citado así lo requiere;

Que en ese sentido y mientras se formalice la reglamentación pertinente, conviene mantener el régimen acordado a tales efectos por la Resolución Nº 8.264/56(**), con el objeto de facilitar de esa forma la aplica- //-

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1461.-
(**) Ver Digesto Administrativo Nº 16.-

ción inmediata de las nuevas normas sancionadas;

EL SECRETARIO DE HACIENDA

R E S U E L V E:

1º.- Hasta tanto no se dicten las normas reglamentarias para la aplicación en el ámbito de esta Secretaría de Estado de las disposiciones del régimen de licencias aprobado por el decreto Nº 8.567/61, mantiénense en vigencia -para la concesión de las licencias previstas en el mismo, similares a las contempladas en la resolución Nº 8.264/56- las facultades otorgadas a los señores jefes de reparticiones por el punto 100º de la mencionada resolución, como así también las que se acuerdan por dicho punto y el 102º a la Dirección General de Contabilidad y Administración.

2º.- Comuníquese, publíquese y archívese.-

Fdo. JORGE WEHBE

ACTO: EXPEDIENTE Nº 60.501/61 - TCN.

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD (Arts. 55 y 56, inc. 2) - EMPRESAS DEL ESTADO - PATRIMONIO DEL ESTADO

La Ley de Contabilidad dispone que toda venta por cuenta de la Nación se hará por regla general previa licitación pública (art. 55) y que podrá contratarse por remate público la venta de bienes que haya autorizado el Poder Ejecutivo (art. 56, inciso 2).

La legislación vigente para el funcionamiento de las empresas del Estado no prevé el procedimiento que debe seguirse para la enajenación total o parcial de dichos organismos (art. 10 de la Ley 13.653 - t.o.). En virtud de ello y conforme a lo establecido en el art. 11 de la Ley 13.653 (t.o.) modificado por Ley 15.023 (1), corresponde la aplicación por vía supletoria de las normas de la Ley de Contabilidad indicadas en el primer párrafo, a los actos del Poder Ejecutivo que dispongan la transferencia o enajenación total o parcial del patrimonio de las empresas del Estado cuando la enajenación comporte la cesación de las actividades de la empresa en su tota

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1039.-

lidad o cuando configure dejar de cumplir alguno de los objetivos que originariamente se hubieran encomendado a la empresa.-

(Observación Nº 135/61 - D.A.T.C.N. Nº 459 - C. 168).-

ACTO: NOTA N° 761/61.-

MATERIA: PREMIO POR ASISTENCIA

Buenos Aires, 22 de junio de 1961.-

Señor Secretario del Tribunal de Cuentas de la Nación,
D. JUAN CARLOS PASTENE
S / D.-

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario - con referencia a la información que, sobre la liquida - ción del "premio por asistencia" formulara ese Tribunal en el expediente N° 90.351/61 (') y que esta Dirección General evacuara mediante Providencia N° 871, del 3 de mayo último.

Atento a que se han formulado ante este organismo - nuevas consultas al respecto, de parte de dependencias interesadas, cumplo en llevar a su conocimiento a fin de evitar cualquier duda en la aplicación de la norma - en cuestión, que el agente renunciante tendrá derecho - al total del "premio por asistencia" únicamente si pres ta servicio durante todo el mes; en caso contrario, los días no trabajados sufrirán los descuentos proporcionales fijados en el art. 4°, apartado III, inciso b), del régimen de compensaciones aprobado por decreto N° 9252/60 (").

Saludo al señor Secretario con mi consideración más distinguida.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director Gral.Servicio Civil de la Nación

(') Ver Digesto Administrativo N° 1391.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 1216.-

ACTO: DECRETO N° 4.898/61.-

MATERIAS: EMPRESAS DEL ESTADO - CANCELACION - DEUDAS - PAGOS - ORDENES DE DISPOSICION - LIBRAMIENTOS

Buenos Aires, 21 de junio de 1961.-

CONSIDERANDO:

Que las dificultades financieras porque atraviesa el Tesoro Nacional han provocado en la Tesorería General de la Nación la acumulación de una deuda exigible por un volumen de gran significación, cuya cancelación se realiza lentamente en forma escalonada, en la medida de lo posible en relación con las disponibilidades en efectivo;

Que la deuda exigible de referencia comprende los libramientos extendidos por los Organismos Oficiales a favor de proveedores particulares que a su vez son deudores del fisco por obligaciones impositivas;

Que la implantación de un sistema que permita la cancelación recíproca de dichos créditos y deudas, podrían funcionar en beneficio de ambas partes mediante la emisión de certificados de cancelación de deudas que serían admitidos por el Gobierno Nacional en pago de los derechos aduaneros y de las retenciones y recargos cambiarios a que se refieren los decretos nros. 11.917/58 y 11.918/58;

//-

Que asimismo, se considera conveniente que los certificados de cancelación de deudas sean aceptados por el Gobierno Nacional en pago de los impuestos internos unificados (Ley nº 14.390) y de los impuestos regidos por las leyes nacionales nº14.060 y 14.788, cuya recaudación está a cargo de la Dirección General Impositiva;

Que la aceptación de certificados como medio de pago para la cancelación de los derechos aduaneros, retenciones y recargos cambiarios, puede efectuarse por el monto total de los importes adeudados;

Que en cambio, para la deuda con el fisco representada por los impuestos regidos por las Leyes nros. 14.390, 14.060 y 14.788 y que percibe la Dirección General Impositiva, debe tenerse en cuenta que en el producido de los mismos tienen participación las Provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que dicha deuda sólo podrá ser cancelada mediante la entrega de certificados por un monto máximo de hasta el 70% debiendo cubrirse el remanente en efectivo;

Que resulta aconsejable declarar a los certificados de deudas como transferibles por endoso, a fin de permitir su traspaso a manos de terceros que no siendo acreedores del Estado, revistan en cambio el carácter de deudores del mismo;

Que sería conveniente extender el procedimiento de cancelación recíproca de créditos y deudas, a las empresas del Estado que teniendo libramientos de pago a su favor en Tesorería General, sean deudoras de particulares, que a su vez adeuden al fisco el pago de los impuestos mencionados precedentemente;

Que en una primera etapa es conveniente limitar la aplicación del sistema propuesto a los créditos y débitos existentes al 31 de diciembre de 1960 y por un monto no superior a los m$n. 2.000 millones;

Por ello y atento la opinión favorable del Tribunal

de Cuentas y de la Contaduría General de la Nación;

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Autorízase a la Secretaría de Hacienda para disponer la emisión de "Certificados de Cancelación de Deudas" a la orden de los acreedores del Estado que tengan en la Tesorería General de la Nación por cualquier concepto, libramientos de pago que hayan extendido a su favor los organismos oficiales competentes. Dichos certificados podrán ser extendidos asimismo a la orden de los acreedores de las Empresas del Estado, siempre que dichos organismos sean a su vez acreedores de la Tesorería General de la Nación por libramientos dictados contra órdenes de disposición de fondos destinados a cubrir necesidades financieras de esos organismos.

La presente emisión que queda fijada en la suma de dos mil millones de pesos moneda nacional (m$n. 2.000.000.000) será aplicada para la cancelación de deudas exigibles al 31 de diciembre de 1960.-

ARTICULO 2º.- Los "Certificados de Cancelación de Deudas" a que se refiere el artículo anterior, serán entregados directamente por la Tesorería General de la Nación o con intervención de los organismos respectivos, a los acreedores del Estado que así lo soliciten; no devengarán intereses, y podrán ser transmisibles por endoso con arreglo a las normas vigentes.

ARTICULO 3º.- Los "Certificados de Cancelación de Deudas" serán aceptados por el Gobierno Nacional en pago de los derechos aduaneros y tasa portuarias así como también de los recargos y retenciones cambiarias establecidas por los decretos nros. 11.917/58 y 11.918/58 adeudados hasta el 31 de diciembre de 1960. También serán aceptados en pago de deudas impositivas devengadas hasta la fecha in-

dicada, correspondientes a los impuestos que recauda la Dirección General Impositiva, de acuerdo con las Leyes nros. 14.390, 14.060 y 14.788.

ARTICULO 4º.- Las deudas con el fisco constituídas por derechos aduaneros, retenciones y recargos cambiarios podrán ser canceladas en su totalidad mediante la entrega de los "Certificados de Cancelación de Deudas". En cambio, las obligaciones impositivas correspondientes a los impuestos que percibe la Dirección General Impositiva serán cubiertas hasta un máximo del 70% con la entrega de dichos certificados debiendo ingresarse el remanente en efectivo.

ARTICULO 5º.- En la oportunidad de emitirse el "Certificado de Cancelación de Deudas" la Tesorería General de la Nación dará por cancelado el libramiento que dió origen a la emisión de dichos certificados.

ARTICULO 6º.- Los "Certificados de Cancelación de Deudas" caducarán al año de la fecha de su emisión, en cuyo caso serán devueltos a la Tesorería General de la Nación a los efectos de su renovación.

ARTICULO 7º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 8º.- Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y previa intervención de la Contaduría General y Tribunal de Cuentas de la Nación pase a la Tesorería General de la Nación a sus efectos.

FRONDIZI - Roberto T. Alemann -
Jorge Wehbe

ACTO: DECRETO Nº 6.120/61.-

MATERIAS: EMPRESAS DEL ESTADO - CANCELACION - DEUDAS - PAGOS - ORDENES DE DISPOSICION - LIBRAMIENTOS

Buenos Aires, 20 de julio de 1961.-

Visto el decreto nº 4898 del 21 de junio de 1961 (1), por el que se autoriza la emisión de "Certificados de Cancelación de Deudas" hasta la suma de m$n. 2.000 millones con el objeto de regularizar el pago de deudas provenientes de libramientos existentes en la Tesorería General de la Nación a favor de acreedores del Estado, como asimismo de facturas o certificados de obras a pagar por parte de empresas u otras entidades oficiales; y

CONSIDERANDO:

Que es conveniente aclarar que los acreedores del Estado podrán solicitar la entrega de certificados en cancelación de las deudas a su favor que se encuentren liquidadas en la Tesorería General de la Nación, cualquiera sea la fecha de origen de las mismas;

---

(1) Ver Digesto Administrativo nº 1.482.-

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Aclárase que los "Certificados de Cancelación de Deudas", cuya emisión ha sido autorizada por el decreto nº 4.898 del 21 de junio de 1961, podrán ser aplicados por la Tesorería General de la Nación a la cancelación de deudas exigibles liquidadas a favor de los acreedores del Estado, cualquiera sea la fecha de origen del compromiso.

Los certificados indicados podrán ser utilizados por los acreedores, según lo dispuesto por el citado decreto, para la cancelación de sus deudas por impuestos y recargos y retenciones cambiarias exigibles hasta el 31 de diciembre de 1960.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y previa intervención de la Contaduría General y Tribunal de Cuentas de la Nación, pase a la Tesorería General de la Nación a sus efectos.-

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Jorge Wehbe

ACTO: LEY Nº 15.921

MATERIAS: INCOMPATIBILIDADES - JUBILACIONES

Sancionada: 29 de setiembre de 1961.-

POR CUANTO:

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO, SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y :

ARTICULO 1º.- Prorrógase hasta el 30 de setiembre de 1962 el régimen de compatibilidad establecido por el Decreto-Ley 12.458/57 (') y Decreto 8.320/58 ("), con la modificación de la Ley 15.434.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de Setiembre del año mil novecientos sesenta y uno.

A. GARCIA — OSCAR LOPEZ SERROT
Alejandro N. Barraza — Eduardo T. Oliver

Aprobada por el Poder Ejecutivo el 18/10/61 según el artículo 70 de la Constitución Nacional.-

---

(') Ver Digesto Administrativo Nº 343.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 878.-

ACTO: EXPEDIENTE Nº 60.109/61.-

MATERIAS: CONTRATACIONES - PLIEGO DE CONDICIONES - PLAZOS

El plazo fijado por el artículo 23 de los pliegos de condiciones aprobados por el decreto Nº 9.400/57 no es perentorio. Por lo tanto el adjudicatario debe interpelar a la repartición una vez vencido dicho plazo para que ésta proceda a dar cumplimiento a la expedición del certificado definitivo.

Mientras ello no se produzca el organismo puede rechazar los elementos con los efectos que prevé la reglamentación.-

(Contratos y Trabajos Públicos - Informe Nº 223/61 - C. Nº 171).-

ACTO: EXPEDIENTE Nº 41.517/60.-

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD (art. 56, inc. 2) - PATRIMONIO DEL ESTADO - BIENES EN DESUSO

El requisito de la previa autorización del Poder Ejecutivo para vender bienes en desuso a que se refiere el artículo 56, inciso 2, de la Ley de Contabilidad, sólo es exigible cuando la enajenación se efectúa por remate público.-

(Contratos y Trabajos Públicos - Informe Nº 474/61 -C. Nº 173).-

ACTO: DECRETO Nº 9.190/61.-

MATERIAS: ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 28 - apart. IX) - BONIFICACION POR TITULO

Buenos Aires, 13 de octubre de 1961.-

Visto el Expediente nº 90.891/61 en el que la Secretaría de Hacienda expone las dificultades de orden contable que deben superarse para realizar, con efecto retroactivo al 1º de noviembre de 1958, las liquidaciones de adicionales por título correspondientes a especializados que no han cumplido en la debida oportunidad los recaudos indispensables para obtener ese beneficio, y

CONSIDERANDO:

Que razones de orden administrativo aconsejan establecer términos prudenciales para la formalización de las gestiones de ese carácter, a fin de que las liquidaciones respectivas se efectúen con arreglo a los procedimientos normales, evitando así los inconvenientes que suponen las rectificaciones de ejercicios vencidos;

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda,

//-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Limítase al día 31 de octubre del corriente año, la vigencia del apartado IX del punto 28 de las normas aprobadas por el Decreto nº 11.941/59 (+).-

ARTICULO 2°.- Los títulos obtenidos con anterioridad al 1° de noviembre de 1958, cuya posesión se acredite con posterioridad al término de vigencia de la cláusula aludida en el artículo precedente, serán reconocidos a partir del 1° del mes siguiente a la fecha de presentación de las certificaciones respectivas.-

ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.-

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Jorge Wehbe

(+) Ver Digesto Administrativo N° 916.-

ACTO: DECRETO Nº 9.191/61.-

MATERIAS: VIATICOS - MOVILIDAD - HORAS EXTRAORDINARIAS- INDEMNIZACIONES - REINTEGRO DE GASTOS

Buenos Aires, 13 de octubre de 1961.-

Visto el artículo 2º, inciso n) del Decreto número 13.834/60 (*) que establece que "No procede liquidación por diferencia de asignaciones en concepto de viáticos al personal que, habiendo cumplido o hallándose cumpliendo, alguna comisión por exigencias del servicio, obtenga posteriormente y con carácter retroactivo, un aumento en sus remuneraciones", y

CONSIDERANDO:

Que dichos regímenes establecen, aparte del viático, otros tipos de compensaciones, acerca de cuya liquidación no se ha consignado norma alguna en lo referente a la incidencia que sobre los mismos producirán los aumentos retroactivos de las remuneraciones de los agentes a los que alcanzara;

Que, además del régimen de compensaciones mencionado, que es de carácter general para la Administración Pública, existen otras normas legales similares, dictadas en particular para distintos organismos, en atención //-

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1274.-

a la situación muy específica y peculiar que caracteriza algunos;

Que, ello ha motivado consultas relacionadas con la forma de liquidar las distintas compensaciones cuando se producen aumentos de remuneraciones en el personal, y éste es retroactivo;

Que, ante esta circunstancia se impone la necesidad de dictar una norma general aclaratoria;

Por ello, atento a lo aconsejado por la Secretaría de Estado de Hacienda en uso de las atribuciones resultantes del decreto-ley Nº 797/58 (") (Ley Nº 14.467) (°),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- No procede liquidar diferencias de asignaciones en concepto de viáticos, movilidad, servicios extraordinarios, o cualquier otro tipo de compensaciones de los fijados en el decreto Nº 13.834/60 y/o regímenes similares vigentes para otros organismos de la Administración Nacional, al personal que habiendo devengado o percibido los mismos obtenga posteriormente y con carácter retroactivo, cualquier tipo de aumento en sus remuneraciones que pueda incidir sobre los importes de aquéllos beneficios.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Roberto T.Alemann
Jorge Wehbe

(") Ver Digesto Administrativo Nº 419.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 609.-

ACTO: DECRETO Nº 9.432/61.-

MATERIA: INCOMPATIBILIDADES

Buenos Aires, 19 de octubre de 1961.-

Visto el Decreto Nº 8.566 de fecha 22 de setiembre de 1961 (*), por el que se determina un nuevo régimen de incompatibilidades para el personal de la Administración Pública Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que la aplicación inmediata y en los términos perentorios que establece el decreto aludido de las nuevas normas sobre incompatibilidades, gravitará en el normal desarrollo de las tareas escolares, ya que las mismas se verán afectadas en cuanto lleva implícito la cesación de numerosos profesores y personal auxiliar de la docencia de los establecimientos de enseñanza;

Que las razones apuntadas determinan la necesidad, atento el informe producido sobre el particular por el Ministerio técnico respectivo de prorrogar el plazo establecido por el mencionado decreto, a los efectos de obviar los inconvencientes señalados;

Por ello y de conformidad con lo aconsejado por el señor Ministro de Educación y Justicia,

//-

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1460.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA,

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Prorrógase hasta el 1° de enero de 1962 - la iniciación de los plazos determinados en los artículos 1°, 13 y 14 del régimen aprobado por Decreto n° 8.566 de 22 de setiembre de 1961, con respecto al personal directivo, docente y auxiliar de todos los establecimientos - de enseñanza.-

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Educación y Justicia.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc - ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Luis R. Mac Kay

ACTO: DECRETO Nº 8.668/61.-

MATERIA: TRIBUNAL DE TASACIONES

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1961.-

Visto la Ley 15.799 y el decreto Nº 6.544/61 (¹); y

CONSIDERANDO:

Que dentro de los fines de racionalización administrativa de la Administración Nacional resulta conveniente transferir a la Secretaría de Estado de Obras Públicas las funciones del Tribunal de Tasaciones, juntamente con el personal a su cargo y los muebles y útiles afectados a su jurisdicción, que integran la Dirección General Inmobiliaria, dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda;

Que, asimismo, resulta necesario atento a la experiencia recogida modificar la constitución y funciones del citado Tribunal de Tasaciones establecidas por el decreto Nº 15.715/59 (") como asimismo el término de duración del mandato de sus miembros;

Por ello y atento a lo solicitado por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Obras Públicas y a lo propuesto por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de Obras y Servicios Públicos; //-

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1430.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1065.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Déjase sin efecto el decreto Nº 15.715/59 - del 23 de noviembre de 1959, que se sustituye por el pre - sente.

ARTICULO 2º.- El Tribunal de Tasaciones será presidido por el señor Subsecretario de Estado de Obras Públicas. La Secretaría de Estado de Obras Públicas designará de entre - los miembros del Cuerpo un Vicepresidente 1º y el Cuerpo a un Vicepresidente 2º, que reemplazarán, en ese orden, al - Presidente, en caso de ausencia o impedimento.

El Tribunal estará constituido por los miembros que a continuación se consignan:

a) Tres (3) miembros en representación de las entidades - vinculadas a los problemas técnicos de la propiedad inmobiliaria.

Estas representaciones serán ejercidas por:

Unión Argentina de Ingenieros.
Federación Argentina de Sociedades de Arquitectos.
Cámara Argentina de Construcción.

b) Dos (2) miembros en representación de los intereses de los contribuyentes.

c) Un (1) funcionario superior de la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de Estado de Guerra.

d) Un (1) funcionario superior del Banco Hipotecario Nacional.

e) Un (1) funcionario superior de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación.

f) Un (1) funcionario superior de la Municipalidad de Buenos Aires.

g) Un (1) funcionario superior de la Secretaría de Obras Públicas.

Los miembros del Tribunal de Tasaciones, con la sola -

excepción del Presidente, durarán tres (3) años en sus funciones y se renovarán por tercios cada año, pudiendo ser reelectos. Los términos a que se refiere este párrafo se computarán para la primera vez a partir de la fecha de publicación del presente decreto, incluso para los miembros que actualmente integran el Organismo y para aquellos que se incorporen por hallarse vacante la representación. También para la primera vez, la determinación de tres de los miembros que cesarán en su mandato al primer año y tres miembros que lo harán al segundo año, se efectuará por sorteo.

ARTICULO 3º.- Las funciones del Tribunal de Tasaciones serán las siguientes:

a) Asesorar a la Justicia del fuero nacional, conforme a lo establecido por los artículos 14 y 31 de la Ley 13.264.

b) Asesorar al Poder Ejecutivo en la fijación del precio básico de venta de los inmuebles del dominio privado del Estado (Ley 13.539 (º). Arts. 1º y 2º, decreto 15.054/50).

c) Establecer los valores de venta de los sobrantes municipales del catastro, de acuerdo con los términos del artículo 18º de la Ley Nº 14.159.

d) Fijar el precio de venta de los inmuebles destinados a usos comerciales así como el de los terrenos que no estuvieran afectados a viviendas o necesidades de servicios públicos y que provengan de expropiaciones o adquisiciones hechas para la habilitación de las viviendas a que hace referencia el art. 1º de la Ley 14.277 (Ley Nº 14.277, artículo 6º y decreto Nº 25.310/53).

e) Fijar la base de venta de los inmuebles del plan de construcción de viviendas para enajenación al personal militar, establecido por Ley 14.135.

(º) Ver Digesto Administrativo Nº 269.-

f) Practicar la valuación especial de los inmuebles cuya venta disponga el Instituto Nacional de Granos y Elevadores (Decreto 7.501/55).
g) Tasar los inmuebles que el Estado Nacional proyecta adquirir en remate público o en forma directa (Decreto Nº 9.400/57, Reglamentario del Capítulo VI, arts. 55 al 64 de la Ley de Contabilidad, Decreto-ley Nº 23.354/56).
h) Tasar los inmuebles que la Dirección General de Gas del Estado proyecta adquirir para el desarrollo de sus funciones específicas (Decreto 2.420/57, art.18, inciso d), apartado II).
i) Determinar el valor venal de los terrenos sobrantes del dominio privado del Estado para su venta a entidades culturales y cooperativas (Ley 14.334,art. 3º).
j) Resolver los reclamos interpuestos contra los avalúos para fijación del valor imponible de la propiedad inmueble (Ley de Contribución Inmobiliaria,t.o.en 1956)
k) Practicar las tasaciones especiales que le sean requeridas por los organismos nacionales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
l) Establecer las normas y métodos de tasación a que se ajustará el cuerpo y las oficinas auxiliares.

ARTICULO 4º.- A los fines de las funciones enumeradas en los distintos incisos del artículo 3º, se incorporarán al organismo los siguientes miembros:

a) El expropiado o su representante a los efectos de las funciones enumeradas en el inciso a).
b) Un representante de la repartición pública expropiante o con interés directo en las resultas del juicio de expropiación a los efectos de las funciones enumeradas en el inciso a).
c) Un representante de la Secretaría de Transporte a los efectos de las funciones enumeradas en el inciso b).

ARTICULO 5º.- Los miembros del Tribunal de Tasaciones - según lo establecen las disposiciones pertinentes son designados en la siguiente forma:

a) Los aludidos en los incisos a) y b) del artículo 2º directamente por el Poder Ejecutivo Nacional.

b) Los aludidos en los incisos c) al g) por el Poder Ejecutivo a propuesta de los respectivos organismos y el representante de la Secretaría de Transporte - citado en el art. 4º, apartado c) por el Poder Ejecutivo a propuesta de la misma.

c) El representante de la repartición pública expropiante o con interés directo en las resultas del juicio (art. 4º, inciso b), por el Departamento de Estado del cual depende el organismo sobre cuyo presupuesto gravita el gasto de la expropiación.

d) El representante del expropiado a que alude el inciso a) del art. 4º, por la parte expropiada o su apoderado.

ARTICULO 6º.- Las funciones enumeradas en el artículo - 3º, con excepción de los incisos j) y l), estarán condicionadas al arancel que determine la Secretaría de Estado de Obras Públicas con el asesoramiento del Tribunal de Tasaciones. El pago del arancel estará a cargo - del organismo que solicita el avalúo, excepción hecha - de las tasaciones del inciso a) en los que el pago corresponderá de conformidad al orden en que se regulan - las costas en el juicio de expropiación. Lo recaudado - por aplicación del arancel ingresará a rentas generales.

ARTICULO 7º.- Para el cumplimiento de su cometido el Tribunal de Tasaciones podrá requerir información a las reparticiones públicas nacionales, municipales, entes autárquicos y entidades vinculadas a los problemas técnicos sometidos a su consideración.

ARTICULO 8º.- El Tribunal de Tasaciones dictará el Re -

glamento Interno a que ajustará su actuación, en todos los aspectos no previstos en el decreto.

ARTICULO 9º.- Los miembros del Tribunal podrán ser recusados y están obligados a excusarse en los casos previstos en el artículo 43 de la Ley Nacional de Procedimientos Nº 50.

ARTICULO 10.- Para el desempeño de sus funciones, el Tribunal de Tasaciones contará con el personal técnico y administrativo que le asigne la Secretaría de Estado de Obras Públicas y con la organización administrativa que, a propuesta del mismo, apruebe, dicho Departamento de Estado.

Actuará como asesor letrado el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Estado de Obras Públicas o su reemplazante legal quien concurrirá al seno del Tribunal cada vez que éste lo conceptúe necesario, a cuyo fin será invitado con la debida antelación o producirá dictamen por escrito en los casos que así corresponda.

ARTICULO 11º.- Los miembros a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 4º, serán citados con diez (10) días de anticipación a la consideración de la tasación por el Tribunal de Tasaciones, pudiendo el organismo sesionar sin su presencia en el caso de ausencia no justificada.

ARTICULO 12º.- El Tribunal de Tasaciones formará quórum con la presencia de los dos tercios (2/3) de sus miembros.

ARTICULO 13º.- El Tribunal se expedirá fundando el dictamen adoptado por simple mayoría de los miembros presentes. Toda eventual disidencia de alguno o algunos de sus miembros dará lugar a un dictamen en minoría que deberá igualmente fundarse. El Presidente sólo tendrá voto en caso de empate.

ARTICULO 14º.- Las mociones de reconsideración y la revisión de las normas vigentes requerirán para su aprobación el voto favorable de los dos tercios (2/3) de los miembros presentes.

ARTICULO 15º.- Transfiérese a la Secretaría de Estado de Obras Públicas el personal de la Dirección General Inmobiliaria dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda, como asimismo los muebles, máquinas y demás elementos, en la forma que convengan los citados Departamentos de Estado.

ARTICULO 16º.- La Secretaría de Estado de Hacienda arbitrará las medidas necesarias para la transferencia al presupuesto de la Secretaría de Estado de Obras Públicas de los créditos correspondientes.

ARTICULO 17º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de Obras y Servicios Públicos y firmado por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Obras Públicas.

ARTICULO 18º.- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a sus efectos a las Secretarías de Estado de Hacienda y de Obras Públicas.-

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo - Arturo Acevedo - Jorge Wehbe - Manuel H. Acuña.-

ACTO: DECRETO Nº 9.677/61.-

MATERIAS: INCOMPATIBILIDADES - LIMITACION DE SERVICIOS-JUBILACIONES - RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA C.E.P.R.A. - PROHIBICIONES

Buenos Aires, 27 de octubre de 1961.-

Visto los decretos Nros. 8.533 (°) y 8.566 (") de fecha 22 de septiembre de 1961 dictados el primero en cumplimiento del artículo 36° de la Ley 15.796 (°) y el segundo en ejercicio de las facultades que son propias del Poder Ejecutivo, y las observaciones y sugerencias que tales medidas motivaron por parte del Tribunal de Cuentas de la Nación; y

CONSIDERANDO:

Que procede disponer tanto en consecuencia de las mismas, como frente a la conveniencia de adoptar algunas normas complementarias que posibiliten el adecuado cumplimiento de aquellos decretos;

Por ello,

//-

(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1458.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1460.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1333.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Déjase establecido que las disposiciones del decreto Nº 8.533 de fecha 22 de setiembre de 1961, no incluyen las jurisdicciones de las Fuerzas Armadas y organismos de Seguridad y Defensa, Universidades Nacionales y sus dependencias, Tribunal de Cuentas de la Nación y reparticiones eminentemente Científicas, como la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, cuyas respectivas autoridades quedan facultadas para disponer la aplicación de la autorización acordada por el artículo 36º de la Ley 15.796 con arreglo al régimen establecido por aquel decreto.

ARTICULO 2º.- Agréguese al artículo 1º del decreto indicado precedentemente lo siguiente "... a la fecha del presente decreto".

ARTICULO 3º.- Sin perjuicio del estricto cumplimiento de lo establecido en el decreto 8.533/61, dentro del plazo fijado en el presente, podrá solicitarse el mantenimiento en su cargo de aquellos funcionarios que por sus condiciones resulten imprescindibles para el normal desenvolvimiento de los servicios.

Los pedidos respectivos serán resueltos en todos los casos por el Poder Ejecutivo y deberán estar fundados mediante memorándum de los señores Ministros o Secretarios de Estado de cada jurisdicción. La formulación de tales pedidos no implicará la suspensión ni interrupción del plazo fijado en el artículo 15º del presente decreto.

Derógase el artículo 4º del decreto 8.533/61.

ARTICULO 4º.- Déjase establecido que la imputación de los anticipos de beneficios jubilatorios fijada en el artículo 5º del decreto Nº 8.533/61, será la determinada por el artículo 7º del mismo.

ARTICULO 5º.- Aclárase el artículo 8º del decreto número 8.533/61 en el sentido de que las sanciones a que el mismo se refiere se substanciarán con arreglo a las normas estatutarias y reglamentarias que sean de aplicación.

ARTICULO 6º.- Al personal al que alcanzare la aplicación de las medidas autorizadas por el artículo 36º de la Ley 15.796 y decreto Nº 8.533/61, y en el momento de disponerse su limitación de servicios, se encontrare suspendido en el ejercicio de su cargo y/o sujeto a la instrucción de sumario administrativo o judicial, no podrá liquidársele las indemnizaciones previstas por aquellos actos hasta tanto no medie resolución administrativa definitiva con respecto a su situación y sólo podrá abonársele los importes respectivos en caso de no ser objeto de una medida separativa.

ARTICULO 7º.- Amplíase el artículo 1º del régimen aprobado por el decreto Nº 8.566 de fecha 22 de septiembre de 1961 en el sentido de que asimismo es incompatible el ejercicio de un cargo o empleo público remunerado en la jurisdicción y competencia del Poder Ejecutivo Nacional, con cualquier otro cargo público retribuído en el orden nacional, provincial o municipal.

ARTICULO 8º.- Aclárase que las disposiciones del régimen aprobado por el decreto Nº 8.566/61 no serán de aplicación en las jurisdicciones de las Fuerzas Armadas y organismos de Seguridad y Defensa, que tengan establecido con anterioridad un régimen especial de incompatibilidades en cuyo caso el mismo continuará en aplicación, como así también que las normas del referido decreto no comprenden a los vocales del Tribunal de Cuentas de la Nación ni a las Universidades Nacionales y sus dependencias, organismos eminentemente técnicos como la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y academias y entidades -

subsidiadas por el Estado. Tampoco son aplicables dichas medidas en los casos de prescripciones legales vigentes - que faculten la acumulación de cargos entre sí, o de éstos con jubilaciones, retiros o pensiones.

ARTICULO 9º.- El personal comprendido en el presente decreto no podrá representar o patrocinar a litigantes contra la Nación, o intervenir en gestiones judiciales o extrajudiciales en asuntos en que la Nación sea parte; tampoco - podrán actuar como peritos, a propuesta de parte en iguales condiciones. Se exceptúan los casos previstos en el - artículo 13º de la Ley Nº 11.672 (Edición 1943) o cuando se trate de la defensa de los intereses personales del agente, de su cónyuge o de sus parientes consanguíneos o a fines en primer grado.

ARTICULO 10º.- Suprímese el apartado d) del artículo 9º - del régimen aprobado por el decreto Nº 8.566/61.

ARTICULO 11º.- Aclárase que la enumeración de profesiones del arte de curar contenida en el artículo 10º del régimen aprobado por decreto Nº 8.566/61 tiene los alcances - fijados para ellas en el apartado c), artículo 2º del decreto Nº 22.212/45 (ratificado por la Ley 12.921), y en la Ley 13.970.

ARTICULO 12º.- El agente designado interinamente para desempeñar un cargo, horas de enseñanza o cátedra, de cualquier naturaleza que los mismos fueren, y que por tal circunstancia se encuentren en situación de incompatibilidad por excederse el máximo de acumulación admitido por el régimen de incompatibilidades, no estará obligado a hacer - la opción correspondiente hasta que sea confirmado en el interinato, siempre que solicite licencia sin goce de haberes en las tareas que se exceda.

ARTICULO 13º.- Mantiénense en vigencia las disposiciones dictadas hasta el presente para determinados servicios especiales de la Administración Nacional que por sus carac-

terísticas así lo requieren, que posibilitan acumulaciones de cargos distintas que las regladas por el régimen aprobado por el decreto Nº 8.566/61 - Operadores de medio tiempo en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Estafeteros en la Secretaría de Estado de Comunicaciones, Jornalizados de Hipódromos en días sábados, domingos y feriados, destajistas por hora-, como así también las - que por iguales razones establecen en forma expresa exclusiones del sistema de incompatibilidades.

La determinación precisa de cuales de aquellas disposiciones deben mantenerse en aplicación por subsistir las causales que las motivaron, estará a cargo de la Secretaría de Estado de Hacienda con el asesoramiento del Tribunal de Cuentas de la Nación.

ARTICULO 14º.- Los regímenes aprobados por decretos Nros. 8.533 y 8.566 del año 1961 se aplicarán al personal comprendido en los distintos escalafones desde la categoría Clase "A" - Grupo I del aprobado por decreto Nº 9.530/58 o sus similares de los otros sistemas escalafonarios, y en orden descendentes hasta alcanzar las últimas categorías, con las salvedades que se mencionan en el presente decreto. Los casos de duda sobre asimilación de categorías escalafonarias serán resueltos por el Ministro o Secretario de Estado de la jurisdicción respectiva con la conformidad previa del Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A.).

ARTICULO 15º.- Con las aclaraciones y modificaciones efectuadas por el presente las normas del decreto Nº 8.533/61 se cumplirán el 31 de diciembre de 1961 y las del régimen aprobado por el decreto Nº 8.566/61 regirán a partir del 1º de enero de 1962 manteniéndose hasta la fecha el régimen de incompatibilidades vigente.

ARTICULO 16º.- La Secretaría de Estado de Hacienda conjuntamente con el Comité Ejecutivo del Plan de Racionaliza-

ción Administrativa (C.E.P.R.A.) tendrá a su cargo el dictado de las aclaraciones que fuesen necesarias para la mejor aplicación del decreto Nº 8.566/61.-

ARTICULO 17º.- En ejercicio de la facultad acordada por el artículo 87º de la Ley de Contabilidad, insístese en el cumplimiento de los decretos Nros. 8.533/61 y 8.566/61 en cuanto han sido materia de observación en aspectos no contemplados en las aclaraciones y modificaciones dispuestas por este decreto.

ARTICULO 18º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 19º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y, previo conocimiento del Tribunal de Cuentas de la Nación, archívese en la Secretaría de Estado de Hacienda.-

FRONDIZI - Roberto T.Alemann
Jorge Wehbe.

ACTO: ACTUACION C.E.P.R.A. Nº 10.438/61.-

MATERIAS: INCOMPATIBILIDADES - CONTRATADOS

Expediente nº 51.001/61.-
Providencia nº 2.824/61.-

//nos Aires, octubre 10 de 1961.-

Teniendo en cuenta el decreto nº 8.566/61 (+) sobre acumulación de cargos, funciones y/o pasividades, cuyo artículo 1º establece en su parte in-fine que quedan excluídos de dicho régimen las contrataciones efectuadas en virtud de autorizaciones legales o acordadas por el Poder Ejecutivo, pase a la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación para que se sirva cursar lo actuado a consideración del C.E.P.R.A., en razón de que si bien esta Secretaría de Hacienda estima que -de acuerdo con la excepción citada- corresponde mantener el tratamiento seguido hasta la fecha para la contratación de esta clase de servicios, las características particulares del sistema aludido hacen conveniente que por intermedio del nombrado organismo, se den las normas de interpretación necesarias, para disponer en consecuencia.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 1.460.-

Buenos Aires, 20 de octubre de 1961.-

La Subsecretaría de Hacienda sugiere que el C.E.P.R.A. dé "las normas de interpretación necesarias" de la disposición del artículo 1° in-fine del decreto n° 8.566/61, que excluye de su régimen al personal contratado.

Estima este Comité que las conclusiones vertidas por el Señor Subsecretario a fojas 8, en el sentido de que "corresponde mantener el tratamiento seguido hasta la fecha para la contratación de esta clase de servicios" son plenamente válidas y pueden tomarse como la norma de interpretación que se solicita.

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. JUAN OVIDIO ZAVALA
Secretario Técnico
de la Presidencia de la Nación

ACTO: DECRETO Nº 9.884/61.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL DE FINANZAS - DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES - ADICIONAL POR ESPECIALIZACION DE TAREAS

Buenos Aires, 31 de octubre de 1961.-

Visto lo solicitado por la Secretaría de Estado de Hacienda, y

CONSIDERANDO:

Que la particular especialización y dedicación que exigen las funciones a cargo de las Direcciones Generales de Finanzas e Impuestos y Contribuciones dependientes de la citada Secretaría, requieren el mantenimiento e incorporación de personal capacitado;

Que en razón de las continuas y mayores exigencias y obligaciones de carácter permanente, las reparticiones aludidas no logran el concurso de agentes de probada aptitud dispuestos a una consagración exclusiva a sus tareas, dada la escasa remuneración con que se retribuyen las mismas;

Que en consecuencia, sin perjuicio de las medidas que se adopten para resolver en forma integral el problema planteado, resulta imprescindible acordar asignaciones adicionales a las que perciben los agentes que revistan en las dependencias citadas, con el propósito

//-

de conservar y formar un plantel básico de personal que reúna condiciones eficientes para las funciones fiscales y financieras;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Con la aprobación del señor Secretario de Hacienda y con exclusión de los agentes que revistan en la clase "A" del Escalafón General de la Administración Nacional, el personal de la Dirección General de Finanzas y de la Dirección General de Impuestos y Contribuciones de la Secretaría de Hacienda, así como el personal adscripto a las citadas dependencias -que cumpla funciones que en cada caso determinen sus respectivos titulares-, gozará de un suplemento adicional mensual de hasta m$n. 5.000.- (CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL), en concepto de "adicional por especialización de tareas".

ARTICULO 2°.- El adicional que se establece por el presente decreto no integra el concepto sueldo, remuneración o retribución a los efectos de todas las disposiciones en vigor. Ello no obstante, dicho adicional es correlativo al desempeño efectivo del cargo, debiendo sufrir por esa causal, únicamente, las mismas deducciones que el sueldo en materia de licencias, inasistencias y suspensiones.

Los titulares de las dependencias citadas, con la aprobación del señor Secretario de Hacienda, determinarán, para cada una de las funciones, el adicional que corresponda dentro de los límites fijados, teniendo en cuenta el grado de responsabilidad, eficiencia y dedicación del personal y el horario cumplido por cada agente en el mes.

ARTICULO 3°.- Los agentes que hayan obtenido una calificación inferior a 8 (ocho) puntos determinada según lo previsto en el Escalafón General de la Administración Nacional, que

dan excluídos de los beneficios que se establecen por el presente régimen.

ARTICULO 4º.- La responsabilidad fiscal y financiera que dá derecho a la percepción del adicional, obliga al personal respectivo a una dedicación especial, debiendo:

a) Desempeñarse fuera del horario normal, de acuerdo con las necesidades del servicio, al sólo requerimiento de su superior inmediato o siguientes, inclusive en días feriados y no laborables, aún cuando las tareas sean ajenas al sector donde habitualmente se desempeña, sin derecho a otra percepción extraordinaria, excepto en los casos de tareas requeridas para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la ley de contabilidad y en las leyes de coparticipación o convenios interestatales. Esta obligación comporta como mínimo el cumplimiento de una jornada diaria de 9 (nueve) horas entre las 9 y 20 horas, aspecto que según lo determinado en el artículo 2°, debe tenerse en cuenta también a efectos de la fijación de los adicionales respectivos.

b) Seguir cursos de perfeccionamiento y alta especialización que organicen las Direcciones General de Finanzas e Impuestos y Contribuciones, aún cuando los mismos se desarrollen parcial o totalmente fuera del horario normal.

ARTICULO 5°.- El número de agentes a quienes podrá asignársele el adicional que por el presente decreto se establece, no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) de la planta estable más el personal adscripto.

ARTICULO 6º.- Los beneficios que se otorgan por el presente decreto se ajustarán a las disposiciones del artículo 3º de la Ley nº 15.796.

ARTICULO 7º.- Facúltase a la Secretaría de Hacienda para dictar -si fuese necesario- las normas aclaratorias suplementarias y complementarias del presente decreto y del régimen que se aprueba por el mismo.

ARTICULO 8º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el Señor Secretario de Hacienda.

ARTICULO 9º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaria de Hacienda a sus efectos.-

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Jorge Wehbe.-

ACTO: DECRETO Nº 12.369/49.-

MATERIA: SEGURO DE AUTOMOTORES

Buenos Aires, 28 de mayo de 1949.-

Visto las condiciones de póliza y tarifa preparadas por la Caja Nacional de Ahorro Postal en virtud de lo dispuesto en el artículo 2º del decreto Nº 5.162/49, y aprobadas provisoriamente por la Superintendencia de Seguros de la Nación, para la realización por dicha Institución de los seguros sobre automotores de propiedad del Estado que el citado decreto Nº 5.162/49 pone a su cargo,y

CONSIDERANDO:

Que correlativamente a la implantación de este seguro, es necesario adoptar ciertas normas relacionadas con el contralor que el Estado debe efectuar, tendiente a la mejor conservación de los automotores de su propiedad, lo que redundará también en un menor costo del seguro,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Será obligatorio asegurar en la Caja Nacional de Ahorro Postal de acuerdo con el régimen implantado por decreto 5.162/49 todos los automotores de pro-

//-

piedad del Estado que éste tuviere asignados a funcionarios públicos o afectados a servicios generales vinculados con su normal desenvolvimiento.

Asimismo podrán asegurarse dentro de este régimen los automóviles de propiedad particular de los funcionarios que hayan sido puestos por éstos al servicio del Estado.

No están comprendidos en el seguro; los automotores del Estado afectados específicamente a la defensa nacional; los afectados a la explotación del transporte de pasajeros y/o cosas; los utilizados permanentemente en el exterior como tampoco aquellos vehículos que no reúnan las condiciones de asegurabilidad necesarias.

ARTICULO 2º.- A los efectos del artículo 1º, se entiende por automotor a los automóviles, camiones, furgones, ómnibus y microómnibus para transporte de personal, tractores, acoplados, triciclos a motor, camiones-estanque, jeeps, ambulancias y vehículos similares incluyendo el equipo y/o maquinarias que formen parte integrante de los mismos.

ARTICULO 3º.- Las Reparticiones tomarán el seguro con sujeción a lo siguiente:

a) Automóviles asignados a funcionarios: se asegurarán obligatoriamente contra los riesgos de: Responsabilidad Civil, Incendio, Accidente y Robo del automóvil, y Accidentes al chófer.

b) Automóviles afectados a servicios generales: se asegurarán obligatoriamente contra los riesgos de: Responsabilidad Civil, Incendio, Accidente y Robo del automóvil, y accidentes al chófer, excepto cuando se trate de automotores pertenecientes a Dependencias que cuenten con talleres de reparaciones en cuyo caso podrán solicitar la exclusión de los riesgos de accidentes e incendio del vehículo.

c) Otros automotores: se asegurarán obligatoriamente contra el riesgo de Responsabilidad Civil, sin perjuicio de que las Reparticiones puedan, si lo estiman necesario, asegurarlos también contra los demás riesgos.

En los casos de los incisos b) y c), si las Dependencias que cuentan con talleres de reparaciones optan por cubrir, mediante este seguro, los riesgos de accidentes e incendio del vehículo, las reparaciones estarán a su cargo y la Caja les abonará en efectivo el importe de la indemnización que corresponda.

ARTICULO 4º.- El presente régimen de seguro de automotores entrará en funcionamiento a partir de la fecha de este decreto.

Los seguros que las Reparticiones tuvieren concertados con entidades privadas, pasarán a este régimen a su vencimiento, salvo que acordasen la rescisión anticipada de los mismos.

Las Dependencias que no tuvieren asegurados sus automotores como así también aquéllas que contaren con regímenes propios de seguro, deberán proporcionar a la Caja, en los formularios que ésta les suministre y antes del 30 de junio de 1949, toda la información que se les requiriese sobre los automotores asegurables. El seguro de estos automotores entrará a regir a partir de la fecha que las Reparticiones convinieren con la Caja.

ARTICULO 5º.- Las primas serán anuales y pagaderas por adelantado. En los casos en que los funcionarios que tienen a su cargo el pago de la prima, opten por satisfacer su importe en cuotas trimestrales deberán prestar su conformidad a fin de que las Reparticiones efectúen de sus haberes el descuento de las sumas que correspondan, las que deberán ser ingresadas a la Caja Nacional de Ahorro Postal dentro de los diez (10) días de practicado el descuento correspondiente.

ARTICULO 6º.- A los efectos del control de la utilización y conservación de los automotores de propiedad del Estado, la Caja elevará al 31 de diciembre de cada año al Ministerio de Hacienda, por el conducto que corresponda una información estadística sobre el número de sinies

tros y el monto de los mismos, por Repartición.

Idéntica información deberán elevar las Reparticiones al Ministerio de Hacienda con respecto a aquellos automotores que, de acuerdo con el artículo 3º, hubiesen sido excluídos del riesgo de accidente.

ARTICULO 7º.- A los efectos de la intervención asignada por las condiciones de Póliza a la Contaduría General de la Nación, con relación a las divergencias que pudieran suscitarse sobre la avaluación de los daños, dicha Repartición podrá requerir el asesoramiento técnico de funcionarios o Reparticiones del Estado.

ARTICULO 8º.- Si el siniestro diera lugar a un proceso criminal o correccional o a un juicio civil, la Caja podrá asumir la representación y defensa del asegurado subrogándolo en todos sus derechos y acciones.

ARTICULO 9º.- Las primas de este seguro que las Reparticiones deban abonar a la Caja, serán imputadas a las partidas pertinentes de sus respectivos presupuestos.

En lo sucesivo deberá preverse en los presupuestos de gastos de todas las dependencias del Estado, la partida específica destinada a atender el pago de tales primas.

ARTICULO 10.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado que integran el Consejo Económico Nacional.

ARTICULO 11.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional, solicítese a los señores Presidentes de las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores y al señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia la adopción -dentro de sus respectivas jurisdicciones- del régimen implantado por el presente decreto y archívese.-

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ACTO: DECRETO Nº 9.630/61.-

MATERIA: SEGURO DE AUTOMOTORES

Buenos Aires, 27 de octubre de 1961.-

Visto el decreto Nº 12.369/49 (¹); lo informado por la Caja Nacional de Ahorro Postal, y

CONSIDERANDO:

Que el déficit que ocasiona a la Caja Nacional de Ahorro Postal el seguro de automotores del Estado es consecuencia de los valores, inferiores a los de plaza, que se asignan a las unidades sujetas a este régimen;

Que por otra parte han desaparecido las causas que hicieron aconsejable la cobertura obligatoria de los automotores del Estado en la Caja Nacional de Ahorro Postal,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Autorízase a la Caja Nacional de Ahorro Postal a actualizar los valores asegurables de los automotores comprendidos en el régimen del decreto número 12.369/49.

//-

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1494.-

ARTICULO 2º.- A partir de la fecha los automotores comprendidos en el régimen del decreto precedentemente mencionado podrán asegurarse en la Caja Nacional de Ahorro Postal o en entidades privadas de seguros según se estime más conveniente.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda de la Nación.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Jorge Wehbe

ACTO: DECRETO Nº 10.013/61.-

MATERIAS: JUBILACIONES - PENSIONES

Buenos Aires, 31 de octubre de 1961.-

Atento la necesidad de aclarar la disposición del artículo 2º del Decreto nº 9.248 de fecha 16/10/61 (') por el que se fijaron las normas para la liquidación de los haberes de las jubilaciones y pensiones actualizadas en cumplimiento de la Ley nº 14.499 ("); Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 2º del Decreto nº 9.248/61 el que quedará redactado en la siguiente forma:

"Artículo 2º.- Las liquidaciones que importen dichas actualizaciones serán abonadas de la siguiente manera:

a) Si la liquidación no excediera de veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 20.000), se abonará juntamente con la actualización del haber;

b) Cuando fuere superior a dicha suma y no excediere //-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1.478.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 621.-

los cien mil pesos moneda nacional (m$n. 100.000), se abonará veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 20.000) simultáneamente con la actualización del haber y el saldo en cuotas bimestrales de cinco mil pesos moneda nacional (m$n. 5.000);

c) Cuando excediere de cien mil pesos moneda nacional (m$n. 100.000) y hasta doscientos mil pesos moneda nacional 200.000), se abonará veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 20.000) juntamente con la actualización del haber y el saldo en veinte (20) cuotas bimestrales;

d) Cuando excediere de doscientos mil pesos moneda nacional (m$n. 200.000), se abonará veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 20.000) juntamente con la actualización del haber y el saldo en veinticinco (25) cuotas bimestrales.

En los casos de los puntos c) y d) los pagos bimestrales no podrán ser inferiores a cinco mil pesos moneda nacional (m$n. 5.000) o nueve mil pesos moneda nacional (m$n. 9.000) respectivamente, debiendo reducirse en esas circunstancias el número de cuotas indicado".

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y firmado por el señor Secretario de Hacienda.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Ismael E. Bruno Quijano - Jorge Wehbe.-

ACTO: DECRETO Nº 10.107/61.-

MATERIAS: PRESUPUESTO - TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION
LEY DE CONTABILIDAD (Art. 35º)

Buenos Aires, 31 de octubre de 1961.-

Atento la proximidad de la clausura del ejercicio financiero 1960/61, encontrándose en trámite diversos actos de Gobierno relacionados con la gestión financiero patrimonial que finaliza el 31 de octubre de 1961, y

CONSIDERANDO:

Que la clausura definitiva del ejercicio y cierre de cuentas del presupuesto se operará al 31 de octubre, de acuerdo a las normas del artículo 35° de la Ley de Contabilidad;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Las distintas Secretarías de Estado y Organismos dependientes del Poder Ejecutivo, deberán diligenciar para antes del 15 de noviembre todos los actos de Gobierno suscriptos al 31 de octubre a fin de que sean recibidos a esa fecha por el Tribunal de Cuentas de la Nación a efectos de la intervención que le compete.

//-

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Jorge Wehbe.-

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	N° 1498.-

ACTO: DECRETO N° 10.510/61.-

MATERIAS: HORARIO - PERSONAL

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1961.-

Visto la situación que crea el paro ferroviario a los agentes de la Administración Pública que deben hacer uso habitualmente de ese medio de transporte, y

CONSIDERANDO:

Que es función del gobierno arbitrar las medidas necesarias a fin de que los servidores públicos puedan cumplir sus tareas sin inconvenientes;

Que la afluencia a una misma hora de todo el personal ocasiona grandes trastornos e incomodidades ya que los transportes comunes se ven sobrecargados, por los paros dispuestos en los ferrocarriles;

Que, ante la situación de emergencia y mientras dure el motivo que acarrea estos inconvenientes, es necesario implar una medida de igual naturaleza que el hecho que las ocasiona;

Que en consecuencia el horario establecido para la administración pública de 12.30 a 19.30 puede hacerse jugar con cierta elasticidad para atenuar las dificultades mencionadas;

Por ello, y atento a lo propuesto por el señor Ministro Secretario en el Departamento del Interior;

//-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Facúltase a los señores Ministros Secretarios de Estado para que en la jurisdicción de sus respectivos departamentos, autoricen a los jefes de las distintas dependencias, entidades autárquicas y descentralizadas, a conceder a los empleados domiciliados lejos del lugar de prestación de servicios y que habitualmente utilicen el ferrocarril como medio de transporte, las franquicias en el cumplimiento de sus horarios que consideren necesarias para atenuar las dificultades creadas con motivo de los paros ferroviarios.

ARTICULO 2º.- Esta autorización, que en modo alguno significa modificar las disposiciones existentes sobre horarios es transitoria y solamente tendrá vigencia mientras se realice la huelga ferroviaria, quedando automáticamente suprimidas todas las franquicias acordadas, cuando se reanuden los servicios.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento del Interior.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva al Ministerio de origen a sus efectos.-

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo

ACTO: EXPEDIENTE Nº 36.582/59.-

MATERIAS: ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - CREDITOS AL EMPLEADO PUBLICO

Providencia Nº 1812/61.

//nos Aires, 18 de setiembre de 1961.-

Vuelva al Despacho de la Subsecretaría de Comercio, llevando a su conocimiento sobre la consulta formulada a fs. 20, lo siguiente:

El régimen de crédito para el empleado público está dado por decreto Nº 6.754/43, cuyo artículo 4º se refiere a deudas contraídas con afectación de haberes, y el artículo 11 a deudas contraídas sin afectación de haberes. La reglamentación de esta norma se efectuó por decreto Nº 9.472/43.

Con posterioridad, el 4 de agosto de 1944 se dicta el decreto Nº 20.109, que se refiere a instrucciones aclaratorias y explicativas sobre procedimientos a seguir con relación a las normas citadas, pero que en ningún caso modifica o altera lo conceptual de aquéllas, vale decir que su vigencia es plena.

En dichos cuerpos legales se determinan asimismo penalidades para quienes incurran en incumplimiento de obligaciones contraídas bajo el régimen que nos ocupa;

//-

estas penalidades debieron adecuarse al régimen disciplinario fijado en el Decreto-Ley Nº 6.666/57 (') (Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional) y ello originó el dictado del decreto Nº 4.570/60(").

Si como queda dicho el decreto Nº 6.754/43 está vigente, las escalas de penalidades fijadas en el art. 2º del decreto Nº 4.570/60, alcanzan por igual cuando las deudas hayan sido contraídas con o sin afectación de haberes.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

(') Ver Digesto Administrativo Nº 254.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1157.-

ACTO: DECRETO Nº 9.947/61.-

MATERIAS: ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - BOLSA DE TRABAJO - TRANSFERENCIAS

Buenos Aires, 31 de octubre de 1961.-

Visto las solicitudes provenientes de distintos Ministerios, Secretarías de Estado y Reparticiones Descentralizadas a fin de que se prorrogue el plazo fijado en los decretos Nros. 1840/61 (¹), 4836/61 (") y 7531/61 (°) para concretar la incorporación presupuestaria definitiva de personal transferido en función de las normas del decreto Nº 9718/59 (=), y

CONSIDERANDO:

Que las tareas relacionadas con el Presupuesto para el Ejercicio 1961-62, han provocado demoras en la consideración y aprobación de los reajustes presupuestarios indispensables para efectivizar las citadas transferencias;

Que resulta conveniente, en tales condiciones, extender el plazo estipulado, para dar lugar a regularizar las situaciones pendientes; //-

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1363.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1412.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1439.-
(=) Ver Digesto Administrativo Nº 854.-

Por ello, y atento a lo informado por la Secretaría de Estado de Hacienda,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1961 el término fijado en los decretos Nros. 1840/61, - 4836/61 y 7531/61 para la incorporación presupuestaria definitiva del personal transferido por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación en función de las disposiciones del decreto Nº 9718/59 o su reintegro a las dependencias de origen.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por - el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Roberto T.Alemann
Jorge Wehbe.

ACTO: DECRETO Nº 10.635/61.-

MATERIA: LICENCIAS

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1961.-

Visto que por el artículo 2º del decreto Nº 8.567, del 22 de setiembre de 1961 (1), se establecieron las fechas en que comenzarán a regir las normas del Régimen de Licencias, Justificaciones y Permisos, aprobadas por el mismo, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a tal disposición, el artículo 2º de dichas normas entraría en vigor a partir del 1º de enero de 1962;

Que ese articulado es el que trata de las licencias por descanso y, entre otras cosas, establece que no serán acumulables al año siguiente por ningún concepto;

Que si bien ello resulta de perfecta aplicación con las licencias ordinarias correspondientes al año 1962, ocasionaría inconvenientes en los servicios, en lo que resta del presente año, dada la gran cantidad de personal que aún no ha hecho uso del beneficio de los años 1960 y 1961;

Que en ese orden de ideas, se estima procedente determinar un lapso prudencial para la aplicación de las disposiciones citadas, a cuyo efecto se impone modificar el artículo 2º del referido decreto Nº 8.567/61, es

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1461.-

tableciéndose que las mismas tendrán vigencia a contar - del 1º de abril de 1962;

Que correlativamente con tal procedimiento también - corresponde modificar el artículo 4º del aludido acto de gobierno, en el sentido de que las prescripciones del decreto Nº 12.720 del año 1953 (") regirán hasta tanto sean de aplicación las nuevas normas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2º, quedando automáticamente derogadas las primeras, a medida que entren en vigor las aprobadas por el decreto Nº 8.567/61;

Por lo expuesto,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Modifícanse los artículos 2º y 4º del decreto Nº 8.567, de 22 de setiembre de 1961, los que quedan - redactados de la siguiente forma:

"Artículo 2º.- Las disposiciones de los artículos 3º, 8º, 10 y 25, entrarán en vigencia el 1º de enero de - 1962; las del artículo 2º a partir del 1º de abril de 1962 y las restantes se aplicarán desde el 1º del mes siguiente a la fecha de publicación del presente decreto en el Boletín Oficial".

"Artículo 4º.- Las disposiciones del decreto Nº 12720/53, continuarán en vigor hasta tanto sean de aplicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º, las normas aprobadas por el presente decreto, oportunidad en - que aquellas quedarán automáticamente derogadas, como - así también toda otra disposición que se oponga a las - mismas".

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Economía y Asistencia Social y Salud Pública y fir

(") Ver Digesto Administrativo Nº 15.-

mado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Roberto T. Alemann -
Héctor V.Noblía - Jorge Wehbe.

ACTO: RESOLUCION Nº 2.593/61.-

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - SUMARIOS - PERJUICIO FISCAL

Buenos Aires, 23 de octubre de 1961.-

Visto la Resolución Nº 1.794/61 (*), mediante la que se aprobaron normas de interpretación y cumplimiento de los artículos 119, 125 y 126 de la ley de contabilidad, y

CONSIDERANDO:

Que es conveniente, a efectos de uniformar procedimientos, determinar el momento en que han de intervenir las representaciones del Tribunal de Cuentas los sumarios que merezcan resolución condenatoria y el perjuicio fiscal no supere la suma de $ 10.000;

Que siguiendo la línea de las normas aprobadas por la mencionada Resolución Nº 1.794/61 que se orienta hacia la agilitación de las tramitaciones, es procedente disponer que tal intervención se opere luego de resarcido el perjuicio o cuando se entiendan agotadas las medidas para lograrlo;

//-

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1435.-

Por ello y en uso de la facultad acordada por el inciso o) del artículo 84 de la Ley de Contabilidad.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION,

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- Agrégase como último parágrafo de las normas de interpretación y cumplimiento del artículo 125 de la Ley de Contabilidad aprobada por Resolución N° 1.794/61, el siguiente texto:

Los sumarios en los que recaiga resolución condenatoria y el perjuicio fiscal establecido no supere la suma de diez mil pesos moneda nacional (10.000 m$n.), serán intervenidos por las representaciones del Tribunal de Cuentas luego de resarcido el perjuicio, o, en su defecto, cuando se entiendan agotadas las medidas para lograrlo.

ARTICULO 2°.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a los distintos responsables, y, cumplido, archívese.

ANTONIO M. PEREZ ARANGO - José M. Fernández Fariña - Luis P. Picardo - Wifredo - Dedeu - Eusebio E. Villar (Vocal Acc.) - César Aguirre Legarreta (Secretario).

ACTO: INFORME T.C.N. Nº 726/61.-

MATERIAS: OBRAS PUBLICAS - CERTIFICADOS DE OBRA - INTERESES - RESERVAS

Con fecha 30 de agosto de 1961 la Procuración del Tesoro de la Nación ha dictaminado (expediente número 41.136/58 T.C.N.) que aunque los pagos parciales estipulados en los contratos de obras públicas se hagan sobre la base de certificados parciales que se confeccionan sobre mediciones provisionales que pueden ser objeto de reajustes en oportunidades de la medición y liquidación final, es innegable que, aún aceptando esa posibilidad de futuros reajustes, contractualmente se ha convenido en forma expresa la obligación de pagar una suma de dinero que en ese momento resulta cierta, líquida y exigible y cuya falta de pago en los términos estipulados hace incurrir automáticamente en mora a la Administración. Se encuentran así reunidos los requisitos exigidos para que se genere la obligación de pagar intereses.

Conforme a tales conceptos, que el Tribunal de Cuentas compartiera, el pago de intereses por mora en el pago de certificados parciales de obra es procedente si al percibir su importe el contratista formula las reservas que prescribe el art. 624 del Código Civil, sin necesidad de esperar el pago del certificado final.-

(Contratos y Trabajos Públicos - C. 174 T.C.N.)

ACTO: DECRETO N° 3.097/60.-

MATERIA: AUTOMOTORES

Buenos Aires, 25 de marzo de 1960.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que los funcionarios públicos nacionales destacados en misión oficial en el exterior que con sujeción al régimen del Decreto 3.693/59 (bis), a su regreso al país introduzcan o hayan introducido en franquicia sus automóviles adquiridos con anterioridad a la promulgación de la Ley 14.446 (1), pueden transferir esos vehículos una vez transcurrido el término de tres años;

Que, en cambio, a los agentes del Estado Nacional con asiento permanente al sud del Paralelo 42°, trasladados por razones de servicio al norte de dicho paralelo, les está prohibido enajenar el automóvil que tienen derecho a introducir a esta última zona en las condiciones del Decreto 535/59 (") y sus complementarios números 1.848/59 y 7.714/59 (+);

Que tal tratamiento discriminatorio no responde a motivo alguno y sí a una inadvertencia del régimen vigente en la materia, por cuya razón es justo y equitativo suprimir ese distingo equiparando a ambos grupos de funcionarios, ya que en los dos supuestos es una misma //-

(1) Ver Digesto Administrativo N° 537.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 698.-
(+) Ver Digesto Administrativo N° 823.-

la razón que se ha tenido en cuenta para restringir el derecho de propiedad de aquéllos;

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la Secretaría de Estado de Hacienda,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA,

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el artículo 2° del Decreto N° 535/69, por el siguiente:

"Artículo 2°.- Los automóviles a que se refiere el presente decreto no podrán ser enajenados al norte - del Paralelo 42° durante el lapso de tres (3) años, - salvo que se opte por sufragar los derechos aduaneros y recargos de cambio. Al vencimiento de dicho término, los automóviles podrán ser nacionalizados sin previo pago de derechos aduaneros y de recargos cambiarios".

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por - el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3°.- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional de Aduanas, a sus efectos.

FRONDIZI - Alvaro Alsogaray
Guillermo W. Klein

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº. 1505.-

ACTO: RESOLUCION Nº 1.683/61.-

MATERIA: AUTOMOTORES

Buenos Aires, 11 de octubre de 1961.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 2.644/58 esta Secretaría de Estado autorizó a los legisladores nacionales de las provincias del sur del paralelo 42° a utilizar al norte de dicha línea geográfica el automóvil de su propiedad que hubieran importado con el régimen de franquicia establecido por el Decreto-Ley Nº 9.924/57;

Que aun cuando en dicha resolución no se estableció expresamente que tales automotores pueden ser enajenados en franquicia luego de los tres años de su admisión al norte del paralelo 42, en las condiciones establecidas por las disposiciones vigentes para los funcionarios nacionales que se han desempeñado en el sur, va de suyo que corresponde aplicar en el caso esas mismas disposiciones, desde que no es posible otorgar a los legisladores nacionales un tratamiento más oneroso que el dispensado a los agentes de la Administración Pública;

Por ello,

//-

EL SECRETARIO DE HACIENDA,

R E S U E L V E :

1°) Declarar que los legisladores nacionales que hubieren introducido al norte del paralelo 42° automotores en las condiciones establecidas por la Resolución de esta Secretaría N° 2.644/58, pueden proceder a la nacionalización de dichas unidades sin previo pago de derechos aduaneros y recargos cambiarios, una vez vencido el plazo de tres años establecido en el artículo 2° del Decreto N° 535/59 (¹), modificado por el Decreto N° 3.097/60(").

2°) Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Nacional de Aduanas, a sus efectos.

Fdo. JORGE WEHBE

(¹) Ver Digesto Administrativo N° 698.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 1504.-

ACTO: DECRETO Nº 9.985/61.-

MATERIAS: PERSONAL - LABORES ELECTORALES

Buenos Aires, 31 de octubre de 1961.-

Visto que proximamente se llevarán a cabo en todo el país elecciones nacionales para la renovación parcial de la H.Cámara de Diputados de la Nación,y

CONSIDERANDO:

Que en general, tales elecciones es norma realizarlas en los primeros meses del año en que corresponde - proceder a la renovación del cuerpo;

Que en esta oportunidad, tal norma no será seguida en todos los casos, para permitir así acogerse a la simultaneidad a algunas provincias que, por imperio de sus disposiciones, deben efectuar sus actos eleccionarios en fechas determinadas;

Que por decreto Nº 8.046 del 13 de septiembre de 1961, ya ha sido resuelto tal problema para la provincia de Santa Fe y, en su consecuencia, las elecciones nacionales en dicho Distrito, se efectuarán simultánea y conjuntamente con las locales el día 17 de diciembre próximo (Decreto Provincial de Convocatoria Nº 8.505/61);

Que con motivo de los comicios nacionales, deben efectuarse importantes tareas pre-electorales y de es - //-

crutinio, para cuya ejecución deben requerirse los servicios de personal extraordinario y, asimismo, recargar - fuera del horario normal al personal del Ministerio del Interior, habitualmente afectado a tales tareas y al de los Juzgados Electorales;

Que en consecuencia deben establecerse las normas y retribuciones que regirán para tales servicios, estableciendo un régimen acorde con las posibilidades económicas actuales,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Facúltase al Ministerio del Interior para recargar fuera de su horario habitual a su personal y al de sus dependencias afectadas a labores electorales y a requerir los servicios de otras personas, ya sean agentes al servicio del Estado o ajenos a la Administración Pública Nacional, mediante una retribución de treinta pesos moneda nacional ($ 30.- %.) la hora y con sujeción a las siguientes normas:

I.- Ministerio del Interior: Exclusivamente personal afectado a labores electorales, desde la firma del - presente decreto hasta la finalización de las tareas emergentes de las elecciones de que se trata.

II.- Juzgados Electorales y personal de otras dependencias o ajeno a la Administración Pública Nacional: desde la fecha de la respectiva convocatoria y hasta un máximo de treinta días posteriores a la fecha de la elección.

III.- El personal de otras dependencias o ajeno a la Administración Pública Nacional tendrá una jornada máxima de ocho (8) horas.

ARTICULO 2º.- El personal comprendido en el régimen establecido por el presente decreto y que se desempeñe en ta

reas de supervisión y/o especializadas que comporten mayor responsabilidad percibirá una suma adicional de diez pesos moneda nacional ($ 10.- %.) por hora de trabajo.

ARTICULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se atenderá, durante el corriente ejercicio, con imputación a: Gastos en Personal - Sección - 1ra. - 2 - 1 - 25 - 0 - 0 - 7 - 331 - 16 - 759 - 1409 - del presupuesto vigente y en el próximo, a la partida correlativa que asigne el presupuesto a regir en el mismo.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamento del Interior y de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo -
Roberto T.Alemann - Jorge Wehbe.

ACTO: LEY Nº 15.930.-

MATERIA: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Sancionada : 5 de octubre de 1961.-

POR CUANTO:

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO, SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y :

ARTICULO 1º.- El Archivo General de la Nación, dependiente del Ministerio del Interior, es un organismo que tiene por finalidad reunir, ordenar y conservar la documentación que la ley le confia, para difundir el conocimiento de las fuentes de la historia argentina.

ARTICULO 2º.- Son sus funciones:

a) Mantener y organizar la documentación pública y el acervo gráfico y sónico, pertenecientes al Estado Nacional, y que integren el patrimonio del Archivo, o la documentación privada que le fuera entregada para su custodia, distribuyéndola en las secciones que se estimen más adecuadas para su mejor ordenamiento técnico;

b) Ordenar y clasificar con criterio histórico dicha documentación y facilitar la consulta de sus colecciones;

c) Inventariar, catalogar y divulgar los documentos -

//-

que están bajo su custodia;

d) Publicar repertorios y series documentales para la difusión de los documentos que posean reconocido valor;

e) Difundir por cualquier otro medio el conocimiento del material existente en el Archivo;

f) Preparar un inventario de los fondos documentales que se refieren a la historia de la República y

g) Obtener copias del documental conservado en los archivos oficiales de las provincias o del extranjero, en cuanto interese para el estudio de la historia nacional y entregarles, a su vez, copia del material que conserve y reúna.

ARTICULO 3º.- Sin perjuicio de las que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones, tendrá las siguientes atribuciones:

a) Representar, en los actos de su competencia, al Poder Ejecutivo;

b) Aceptar herencias, legados o donaciones, "ad referendum" del Poder Ejecutivo;

c) Celebrar contratos para la adquisición de documentos "ad referendum" del Poder Ejecutivo;

d) Inspeccionar los archivos administrativos dependientes del Poder Ejecutivo y requerir la colaboración de los funcionarios encargados de su conservación;

e) Ejercer fiscalización sobre los archivos administrativos nacionales para el debido cumplimiento del traslado de documentos a que se refiere el artículo 4º, y efectuar los arreglos necesarios para la custodia y el retiro de dicha documentación;

f) Solicitar de instituciones privadas y de particulares, información acerca de documentos de valor histórico que obren en su poder;

g) Gestionar la obtención de copias de la documentación histórica perteneciente al Poder Legislativo;

h) Tomar intervención en las transferencias de documentos

que se efectúen entre particulares y proponer al Poder Ejecutivo, previo asesoramiento de la Comisión Nacional de Archivos, que se crea por la presente Ley, declaraciones de utilidad pública y la consiguiente expropiación cuando correspondiere;

i) Dictaminar, a los fines del artículo 17, en los casos en que se intente extraer del país, documentos históricos.

ARTICULO 4º.- Los ministerios, secretarías de Estado y organismos descentralizados de la Nación, pondrán a disposición del Archivo General, la documentación que tengan archivada, retendiendo la correspondiente a los últimos treinta años, salvo la que por razón de Estado deban conservar. En lo sucesivo, la entrega se hará cada cinco años.

ARTICULO 5º.- Las instituciones especializadas en determinados temas históricos y/o que evoquen próceres, estarán exentas de lo dispuesto en el artículo anterior.

ARTICULO 6º.- Los archivos y libros de entidades con personería jurídica y de asociaciones civiles, cuando ocurra su disolución o extinción legal, serán destinados al Archivo General de la Nación o al Archivo General de la provincia que corresponda, según el caso. Para las entidades a que se refiere el Código de Comercio, deberá transcurrir al efecto indicado, el plazo de veinte años que establece el artículo 67 del mismo y la consulta de los archivos y libros de aquéllas, no podrá efectuarse antes de los cincuenta años de la fecha de la disolución o extinción legal salvo expresa autorización de los interesados. La Inspección General de Justicia u Organismos con funciones análogas, velarán por el cumplimiento de esta disposición y harán saber a los archivos respectivos los casos que se presenten.

ARTICULO 7º.- La Biblioteca Nacional y la del Congreso de la Nación entregarán al Archivo General, para su sección de hemeroteca, las colecciones de diarios, revistas

y periódicos de que posean duplicado.

ARTICULO 8º.- Para ingresar como funcionario o empleado técnico al Archivo General, se requerirá acreditar capacidad específica, mediante pruebas o concursos.

ARTICULO 9º.- El Archivo General de la Nación es el único archivo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, que debe integrar su denominación con el aditamento "General".

ARTICULO 10.- Los archivos históricos oficiales de todo el país, tendrán en lo posible, organización uniforme, a cuyo efecto concurrirán las autoridades nacionales con las provinciales que se adhieran a la presente ley.

Créase, con tal finalidad una Comisión Nacional de Archivos de carácter autónomo, con las funciones y atribuciones que esta ley determina.

ARTICULO 11.- La Comisión estará constituída por un presidente, designado por el Poder Ejecutivo y por sendos representantes del Ministerio de Defensa Nacional, del Archivo General de la Nación, del Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de la Academia Nacional de la Historia, del Arzobispado de Buenos Aires y de tres provincias, de entre las cuales elegirá un vicepresidente.

ARTICULO 12.- El Presidente y demás integrantes de la Comisión que actuarán con carácter honorario, durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos, con excepción de los representantes de las provincias.

ARTICULO 13.- La Comisión dictará su reglamento interno, "ad-referendum" del Poder Ejecutivo. En dicho reglamento deberá establecerse la forma en que alternadamente estarán representadas las provincias en el seno de aquélla.

ARTICULO 14.- La Comisión coadyuvará al buen mantenimiento y conservación del acervo documental-histórico de la Nación y de las provincias y en la selección de documentos para su publicación, asesorando para ello a los archivos oficiales.

ARTICULO 15.- La Comisión asesorará al Archivo General -

de la Nación en el caso previsto en el inciso h) del artículo 3º.

ARTICULO 16.- A los fines de la presente ley se consideran documentos "históricos":

a) Los de cualquier naturaleza relacionados con asuntos públicos, expedidos por autoridades civiles, militares o eclesiásticas, ya sean firmados o no, originales, borradores o copias, como así también sellos, libros y registros y, en general, todos los que hayan pertenecido a oficinas públicas o auxiliares del Estado y tengan una antigüedad no menor de treinta (30) años;
b) Los mapas, planos, cartas geográficas y marítimas - con antigüedad de por lo menos cincuenta (50) años;
c) Las cartas privadas, diarios, memorias, autobiografías, comunicaciones y otros actos particulares y utilizables para el conocimiento de la historia patria;
d) Los dibujos, pinturas y fotografías referentes a aspectos o personalidades del país;
e) Los impresos cuya conservación sea indispensable para el conocimiento de la historia argentina y
f) Los de procedencia extranjera relacionados con la Argentina o hechos de su historia, similares a los enumerados en los incisos anteriores.

ARTICULO 17.- Los documentos de carácter histórico son de interés público y no podrán extraerse del territorio nacional, sin previo dictamen favorable del Archivo General de la Nación.

ARTICULO 18.- La introducción de documentos históricos - en el país, no podrá ser gravada ni dificultada, debiendo la Dirección Nacional de Aduanas comunicar el hecho - al Archivo General de la Nación.

ARTICULO 19.- Los documentos de carácter histórico que - estén en poder de particulares, deben ser denunciados - por sus propietarios al Archivo General de la Nación o al

Archivo General de la provincia que corresponda, en el plazo de un año de promulgada esta ley, para el conocimiento de su existencia e incorporación al inventario a que se refiere el inciso f) del artículo 2º. La no observancia de esta disposición implicará ocultamiento.

ARTICULO 20.- Los poseedores de documentos históricos podrán continuar con la tenencia de los mismos, siempre que los mantengan en condiciones que garanticen su conservación. Asimismo podrán entregarlos en depósito y custodia al Archivo General de la Nación o a un Archivo General provincial, en las condiciones que se estipulen, inclusive la de no ser consultados sin autorización de sus propietarios. Su entrega podrá ser revocada.

ARTICULO 21.- Los cedentes de documentos históricos deberán solicitar autorización al Archivo General de la Nación o del Archivo General provincial, según el caso, para efectuar la transferencia indicando el nombre y domicilio del futuro propietario o tenedor. Dentro de los treinta días de producido el acto deberán comunicar su conclusión. El incumplimiento de lo establecido en este artículo, será considerado ocultamiento.

ARTICULO 22.- Las personas que comercien con documentos de carácter histórico o intervengan en las respectivas transacciones deberán cumplir los mismos requisitos establecidos en el artículo 21. La infracción a lo determinado en este artículo será considerada igualmente ocultamiento.

ARTICULO 23.- Los actos jurídicos de transferencia de documentos históricos que pasen a ser propiedad del Estado, estarán exentos del pago de cualquier impuesto.

ARTICULO 24.- Los documentos históricos donados a la Nación o a las provincias, serán conservados con la denominación del donante o de la persona que él indicare, salvo manifestación contraria del interesado.

ARTICULO 25.- Todo funcionario o agente público dará cuen

ta al Archivo General de la Nación o al Archivo General provincial, en su caso, de la existencia de documentos - de carácter histórico que comprueben en las actuaciones en que intervengan.

ARTICULO 26.- Las personas que infringieren la presente ley, mediante ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos, serán penadas con multa de diez mil a cien mil pesos moneda nacional, si el hecho no configurare delito sancionado con pena mayor.

ARTICULO 27.- Quedan derogadas todas las disposiciones - que se opongan a la presente ley.

ARTICULO 28.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los cinco días del mes de octubre de mil novecientos sesenta y uno.-

J.M.GUIDO — O.LOPEZ SERROT
Alejandro N. Barraza — Guillermo González

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1961.-

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Alfredo R.Vítolo - Justo P. Villar - Miguel A. Cárcano - Luis R. Mac Kay.

DECRETO Nº 10.611.-

ACTO: DECRETO Nº 9.627/61.-

MATERIAS: PREMIO POR ASISTENCIA - LICENCIAS

Buenos Aires, 27 de octubre de 1961.-

Visto el Decreto nº 9.252/60 (+) que establece adicionales a liquidar al personal de la Administración Pública Nacional, entre los que se encuentra una compensación en concepto de premio por asistencia, y

CONSIDERANDO:

Que para hacerse acreedor a su percepción es necesario dar cumplimiento a determinadas condiciones enumeradas en el Art. 4º, Capítulo III;

Que dichas exigencias han resultado ser en la práctica de carácter excesivamente restrictivo, habiendo dado lugar a gestiones de distintos organismos, tendientes a lograr la inclusión de normas referentes a no computar a los efectos de las deducciones establecidas, ausencias por motivos muy atendibles;

Que al respecto, invisten un carácter especialísimo de excepción las ausencias motivadas por enfermedad profesional contraída en acto de servicio o accidente de trabajo;

Que es evidente que en estos casos las ausencias son forzosas y perfectamente documentadas;

//-

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 1216.-

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA,

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Agrégase al Art. 4º apartado III inciso c) del Régimen de Compensaciones aprobados por Decreto Nº 9.252/60 lo siguiente: 4º) Licencia por enfermedad profesional o accidente de trabajo (art. 12º del Decreto número 8.567/61 (").

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Jorge Wehbe

(") Ver Digesto Administrativo Nº 1461.-

ACTO: DECRETO Nº 9.978/61.-

MATERIAS: AUTOMOTORES - PRESUPUESTO - CUENTA ESPECIAL COMPRA-VENTA

Buenos Aires, 31 de octubre de 1961.-

Visto el Decreto Nº 9.977/61 referente a la adquisición de vehículos de transporte colectivo, y

CONSIDERANDO:

Que la adquisición de los referidos medios de transporte plantea la urgente necesidad de disponer de recursos para materializar la misma;

Que el Estado Nacional al actuar en calidad de intermediario, dados los fines perseguidos con la indicada adquisición aprovecha las circunstancias favorables que la misma ofrece para así dotar a las provincias de los vehículos indispensables para el mejoramiento de los servicios a su cargo;

Que el procedimiento más adecuado para concretar con la urgencia necesaria el designio señalado precedentemente, es crear una cuenta especial, con administración directa, de acuerdo con lo autorizado por el artículo 11 de la Ley 15.796 (1);

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1324.-

Que a fin de poder atender las erogaciones iniciales que demanden el cumplimiento del citado Decreto Nº 9.977/61, es indispensable autorizar un anticipo de fondos del Tesoro, con cargo de oportuno reintegro, haciéndose uso, a tales efectos de la autorización que acuerda el artículo 138 de la Ley Nº 11.672 (Edic. 1943), modificado por el artículo 17 de la Ley Nº 13.558;

Por ello, y atento a lo propuesto por el señor Ministro del Interior,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA,

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Créase en jurisdicción del Ministerio del Interior la Cuenta Especial "Automotores para Estados Provinciales", y establécese su régimen de funcionamiento de acuerdo a lo consignado a continuación:

a) Finalidad o cometido del servicio:
Compra y venta de vehículos a los Estados Provinciales, conforme a lo dispuesto en el presente decreto.

b) Administración de los fondos: Administrada directamente por el Ministerio del Interior, debiendo comunicar mensualmente a la Contaduría General de la Nación, en detalle, el movimiento de fondos.

c) Sobrantes al cierre del ejercicio: Se transfieren al ejercicio siguiente.

ARTICULO 2º.- En virtud de lo dispuesto precedentemente, incorpórase el Item Automotores para Estados Provinciales, al presupuesto de la Sección 2a. - Presupuesto de Inversiones Patrimoniales - Título II - Trabajos Públicos (Sector 5), B) Erogaciones a financiar con recursos de Cuentas Especiales (Propios, contribuciones a cargo del Tesoro y otros ingresos) Nº 4 - del anexo Cuentas Especiales Nº 100 de la jurisdicción del Ministerio del In

terior (Nº 25) del Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 1961, de acuerdo con el siguiente resumen y conforme al detalle que especifica la planilla anexa:

Sección 2da. - Presupuestos de Inversiones Patrimoniales Título II - Trabajos Públicos (Sector 5) - Item 763 - Automotores para Estados Provinciales - Inciso 8 - Obras y/o adquisiciones ..... m$n. 50.000.000.-

ARTICULO 3º.- Fíjase en la suma de cincuenta millones de pesos moneda nacional ($ 50.000.000 m/n.) el cálculo de recursos para el ejercicio 1961 destinado a financiar el presupuesto de la cuenta especial que se aprueba por el presente decreto, de acuerdo con el detalle que se indica en planilla anexa.

ARTICULO 4º.- Apruébase, con el carácter de Plan de Inversiones Patrimoniales para el ejercicio 1961, a realizar en jurisdicción del Ministerio del Interior, la distribución analítica que figura en la planilla anexa por un monto de cincuenta millones de pesos moneda nacional (m/n. 50.000.000), importe de los créditos presupuestarios asignados a la cuenta especial que se crea por el artículo 1º.-

ARTICULO 5º.- La Tesorería General de la Nación, previa intervención de la Contaduría General de la Nación, entregará al Ministerio del Interior la suma de cincuenta millones de pesos moneda nacional (m$n. 50.000.000) en concepto de anticipo y con cargo de reintegro con los recursos de la cuenta especial que se aprueba por el presente decreto.

ARTICULO 6º.- Comuníquese al Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con lo establecido por el artículo 16 de la Ley Nº 15.796.

ARTICULO 7º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos del In

terior y de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda .

ARTICULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y previa intervención del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General de la Nación, pase a la Tesorería General de la Nación a sus efectos.

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo -
Roberto T.Alemann - Jorge Wehbe

ACTO: LEY Nº 16.001.-

MATERIAS: JUBILACIONES - COMPUTO DE SERVICIOS

Sancionada: 30 de octubre de 1961.-

POR CUANTO:

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO, SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y :

ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 1º del Decreto-Ley 4.827/58 (') que quedará redactado en la siguiente forma:

Artículo 1º.- Declárase el derecho a computar a los fines jubilatorios los períodos de inactividad para aquellas personas que por causas políticas o gremiales fueron separadas de sus cargos públicos o privados, por por haber sufrido prisión, exilio o privación de la libertad de trabajo, como consecuencia de hechos acaecidos hasta el 30 de abril de 1958.

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 483.-

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los treinta días del mes de octubre del año mil novecientos sesenta y uno.

J.M. GUIDO
Alejandro N. Barraza

J. R. DECAVI
Eduardo T. Oliver

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1961.

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI - Ismael E. Bruno Quijano

DECRETO Nº 10.749.-

ACTO: DECRETO Nº 10.599/61.-

MATERIAS: EMPRESAS DEL ESTADO - PRESUPUESTO - INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - SINDICATURA GENERAL

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1961.-

Visto las disposiciones de la Ley Nº 13.653(t.o,modificada por la Ley Nº 15.023 (1), y atento la necesidad de que las empresas del Estado ajusten plenamente su gestión a la orientación de la política económica impartida por el Poder Ejecutivo, y

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 3º del cuerpo legal citado, las empresas del Estado funcionarán bajo la dependencia del Poder Ejecutivo y serán supervisadas directamente por el Ministerio o Secretaría de Estado jurisdiccional que corresponda;

Que las Empresas del Estado, parte sustancial de la hacienda pública, presentan características disímiles y heterogéneas, por los diferentes objetivos que a cada una competen, gravitando en su conjunto en forma importante en la economía nacional;

Que la sola aprobación de los respectivos planes de

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1039.-

inversión no es suficiente a los fines de asegurar una eficaz coordinación de la gestión del Gobierno en las mismas, por cuanto en ellos sólo se prevén los créditos correspondientes a un ejercicio determinado no contemplándose en consecuencia, diversos aspectos de su utilización, ni los compromisos que deberán atenderse en los períodos siguientes;

Que la Ley N° 14.439 (*), atribuye al Ministerio de Economía la competencia en todo lo concerniente al desarrollo de las actividades económicas de la Nación, coordinación de planes de Gobierno, verificación de su cumplimiento y demás atribuciones complementarias, de los objetivos fundamentales señalados;

Por tanto,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA,

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Las Empresas del Estado deberán ajustar su actividad administrativa, económica y financiera a los planes previamente aprobados por el Poder Ejecutivo y de acuerdo con los recursos fijados en su presupuesto anual y los destinos específicos previstos en cada partida. En ningún caso las Empresas del Estado podrán realizar gastos, inversiones o asumir compromisos que no estén específicamente previstos, con carácter previo, en los planes a que se refiere el presente artículo.

ARTICULO 2°.- Créase en jurisdicción del Ministerio de Economía la Sindicatura General a cuyo cargo queda el contralor preventivo de los planes de inversión de las empresas del Estado que se hallan bajo la supervisión jurisdiccional de los Ministerios de Economía y de Obras y Servicios Públicos. Tendrá también a su cargo la verificación

(*) Ver Digesto Administrativo N° 505.-

del cumplimiento de los mismos con arreglo a la orientación, coordinación e instrucciones pertinentes, en concordancia con la política económica del Poder Ejecutivo, determinada a través del Ministerio de Economía. La verificación del cumplimiento de dichos planes será efectuada, tanto durante el transcurso de la gestión como a la finalización de cada ejercicio.

ARTICULO 3°.- El Poder Ejecutivo designará por conducto del Ministerio de Economía y de acuerdo con las normas que el mismo proponga, un Síndico en cada una de las Empresas del Estado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2°, los cuales dependerán de la Sindicatura General.

ARTICULO 4°.- Serán atribuciones y deberes de los Síndicos de las Empresas del Estado:

a) Asistir con voto consultivo a las sesiones del directorio de la empresa u organismo que haga sus veces;
b) Dictaminar sobre los presupuestos, planes de inversión y de gastos y cálculo de recursos, así como sobre las memorias, balances y cuentas de inversión;
c) Dictaminar sobre la concordancia de los actos de gestión de cada empresa, con la política económica y financiera del Poder Ejecutivo;
d) Informar permanentemente al Ministerio de Economía sobre el cumplimiento de los planes de las Empresas del Estado así como sobre los problemas conexos que pueden incidir en la situación económica nacional;
e) Informar periódicamente al Ministerio de Economía sobre la situación económico-financiera de las Empresas del Estado;
f) Impugnar los actos de administración o disposición que impliquen transgredir la orientación económica del Poder Ejecutivo o el ordenamiento económico-financiero aprobado.

ARTICULO 5º.- Las atribuciones y deberes señalados en el artículo 4º serán ejercidos de acuerdo con las siguientes normas:

a) Para fundar su opinión el Síndico de la empresa tendrá acceso a toda la información y elementos de juicio que solicite;

b) La opinión que emita el Síndico deberá constar en actas.

ARTICULO 6º.- La impugnación deberá presentarse a la empresa por escrito y fundada. Dentro de los tres días de formulada, el impugnante elevará copia de todo lo actuado al Síndico General.

La impugnación determina la suspensión de la ejecución del acto impugnado.

Dentro de los quince (15) días de la impugnación, el directorio o la autoridad equivalente de la empresa podrá recurrir ante el Ministerio o Secretaría jurisdiccional aportando todos los elementos de juicio y de descargo que estime corresponder.

El Ministerio o Secretaría jurisdiccional respectivos se pronunciarán dentro de los cinco (5) días improrrogables. Si la decisión fuera contraria al acto impugnado, se devolverá lo actuado a la empresa, quedando sin efecto el acto.

Vencido el plazo de cinco días, sin recaer pronunciamiento, o si la decisión fuere confirmatoria del acto impugnado, a requerimiento del Síndico o de la empresa, se elevarán las actuaciones al Ministerio de Economía para su resolución.

Dentro del término de 10 (diez) días siguientes, el Ministerio de Economía, con dictamen fundado del Síndico General sobre la impugnación y la apelación, en reunión conjunta con el ministerio o secretaría jurisdiccional que corresponda resolverá el caso.

Si no fuera posible lograr el acuerdo para dictar resolución conjunta dentro del término fijado, el Ministerio de Economía elevará la apelación y sus antecedentes del caso en el plazo de cinco (5) días al Poder Ejecutivo, que resolverá por decreto. En caso de que dicho decreto no se dictara dentro del plazo de quince (15) días la impugnación quedará sin efecto.

ARTICULO 7º.- La Sindicatura General y las Sindicaturas de Empresas, ejercerán sus funciones, independientemente del cometido que compete al Tribunal de Cuentas de la Nación y con arreglo al presente decreto.

ARTICULO 8º.- Cuando el Tribunal de Cuentas de la Nación, en cumplimiento de sus funciones, comprobare una transgresión al ordenamiento legal-financiero de una Empresa, que no hubiera sido cuestionado por el Síndico en su oportunidad, dará cuenta de ello al Ministerio de Economía. A los fines pertinentes los Síndicos remitirán al Tribunal de Cuentas de la Nación, copias de las actuaciones relacionadas con cada acto impugnado.

El Instituto Superior de la Administración Pública tendrá permanentemente informado al Ministerio de Economía sobre las observaciones que le merezca dentro de sus funciones propias, la gestión de las Empresas del Estado comprendidas en el presente decreto.

Disposición Transitoria

ARTICULO 9º.- Dentro de los 180 días de asumir sus funciones, los Síndicos de Empresas, elevarán a la Sindicatura General y ésta a su vez con dictamen fundado, al Ministerio de Economía un informe total sobre el estado económico-financiero, administrativo y contable, de cada una de las Empresas de su respectiva actuación, así como las observaciones que correspondan en cada caso, en rela

ción a la orientación económica del Poder Ejecutivo.
ARTICULO 10º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y Obras y Servicios Públicos y firmado por los señores Secretarios de Estado de Hacienda, de Energía y Combustibles, Industria y Minería y Transportes.
ARTICULO 11º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI - Roberto T. Alemann -
Arturo Acevedo - José A. Blanco -
Jorge Wehbe - Vicente N. Branca.

ACTO: DECRETO Nº 10.689/61.-

MATERIA: SEGURO DE VIDA

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1961.-

Visto el artículo 34 de la Ley Nº 15.796 (') por el que se faculta al Poder Ejecutivo a fijar el régimen más conveniente para descontar de los haberes del personal las primas del Seguro de Vida Colectivo Obligatorio Ley Nº 13.003; El artículo 4º de la Ley Nº 13.003 - (t.o. por decreto Nº 10.175/58) ("), que autoriza asimismo al Poder Ejecutivo a aumentar el capital obligatorio, y

CONSIDERANDO:

Que el fraccionamiento de la prima de los capitales adicionales, a los efectos de su descuento, facilitará al agente la ampliación de su seguro por la mayor comodidad en el pago de la misma;

Que razones de orden técnico, y aún sociales, aconsejan actualizar el capital obligatorio, de forma que permita restablecer la relación adecuada que debe guardar con la escala de capitales optativos;

Que el aumento del capital obligatorio en el límite que autoriza la Ley, constituirá una medida de positive //-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1332.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 723.-

beneficio para un importante núcleo de la Administración que, no obstante el tiempo que lleva de vigencia este seguro, no cuenta sino con la protección mínima del capital básico, insuficiente hoy para atender las necesidades más urgentes a las cuales está destinado;

Que es conveniente actualizar los montos máximos de capital adicional en concordancia con el aumento operado en los sueldos de la Administración Pública;

Que razones de orden técnico aconsejan limitar la opción por capitales adicionales, en los casos de agentes que hayan sobrepasado determinados límites de edad, según se trate de agentes que están en el seguro o que se incorporan a él en esas condiciones;

Que atendiendo el nivel alcanzado por los sueldos y a la finalidad de gravitar sobre los mismos en el menor grado posible, se mantiene igual porcentaje de aporte del agente;

Que el nuevo sistema de pago de primas y la elevación del capital obligatorio, impone la necesidad de introducir determinadas modificaciones al régimen vigente;

Que consecuentemente con las facilidades que se acuerdan para el pago de la prima de capitales adicionales, resulta oportuno acordar un período de franquicia, a fin de que los interesados ajusten sus respectivos capitales optativos;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Fíjase en veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 20.000.-) el monto del capital obligatorio para la totalidad de las personas aseguradas bajo el régimen de la Ley Nº 13.003 (t.o. 1958). Este capital comenzará a regir a partir de la cero (0) hora del día 1º de enero de 1962.

ARTICULO 2º.- Substitúyense por las normas que se indican a continuación los artículos 15º, 26º, 28º, 29º, 31º, 32º, 34º, 37º y 55º del Decreto Nº 10.176/58 (º):

"Artículo 15º.- La opción por el capital adicional deberá efectuarse por sumas enteras de miles de pesos y con sujeción a la siguiente escala:

Sueldos Básicos						Capital Adicional
Hasta			m$n.	2.000.-	hasta m$n.	50.000.-
Más de m$n.	2.000.-	hasta	"	4.000.-	" "	100.000.-
Más de m$n.	4.000.-	"	"	6.000.-	" "	150.000.-
Más de m$n.	6.000.-	"	"	8.000.-	" "	200.000.-
Más de m$n.	8.000.-	"	"	10.000.-	" "	250.000.-
Más de m$n.	10.000.-	"	"	12.000.-	" "	300.000.-
Más de m$n.	12.000.-	"	"	14.000.-	" "	350.000.-
Más de m$n.	14.000.-	"	"	16.000.-	" "	400.000.-
Más de m$n.	16.000.-	"	"	18.000.-	" "	450.000.-
Más de m$n.	18.000.-	.....			" "	500.000.-

"Limítase a ciento cincuenta mil pesos moneda nacional (m$n. 150.000.-) la suma máxima total de capital adicional que podrán acumular las personas que al momento de incorporarse al seguro hayan cumplido cincuenta (50) años de edad.

Los agentes que al momento de efectuar una opción hayan cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad, sólo podrán ampliar su capital adicional en una suma equivalente al cincuenta (50) por ciento del máximo de la opción que les corresponda".

Artículo 26º.- La prima de este seguro es anual e indivisible y se descontará de los haberes de los asegurados de la siguiente forma:

a) El asegurado contribuirá al pago de la prima del capi

(º) Ver Digesto Administrativo Nº 724.-

tal obligatorio con el nueve (9) por ciento del sueldo básico mensual que tenga asignado al 1º de diciembre de cada año. - Esta contribución que se deducirá por adelantado del sueldo anual complementario, no superará en ningún caso a la prima total anual del seguro obligatorio, ni dará lugar a ajustes por variación del sueldo de los agentes durante el año.

La diferencia, si existiera, entre el importe de la prima del seguro obligatorio y lo aportado por el agente por este concepto, estará a cargo del Estado, aún en el caso de los agentes con licencia sin goce de haberes.

b) La prima por capital adicional, se hallará íntegramente a cargo del asegurado y se deducirá, en tres cuotas iguales, del sueldo anual complementario y de los haberes correspondientes a los meses de abril y agosto de cada año".

"Artículo 28º.- Cuando el sueldo del cual corresponda deducir primas sea insuficiente para cubrir las correspondientes al capital obligatorio y/o cuotas del adicional, el pago se efectuará mediante retención de los haberes del asegurado por el mes siguiente o, en su defecto, del inmediato posterior, salvo en el caso del artículo 29º.

Si no obstante lo indicado precedentemente los haberes que percibiere no alcanzaren para el pago de primas, el agente las abonará según lo previsto para el personal que deje de estar al servicio de la Administración, siendo obligación de la repartición notificar al interesado por escrito, con el alcance previsto en el artículo 40º.

"Artículo 29º.- Si por razones de enfermedad el empleado no percibiera ninguno de los haberes en las oportunidades a que se refiere el artículo 28º, la prima por los capitales obligatorio y adicional estará totalmente a cargo del Estado.

Si los sueldos que percibiera alcanzaran solamente a cubrir una parte de la prima por el capital obligatorio y/o proporción de la del capital adicional, el Estado ingresará la diferencia".

"Artículo 31º.- La prima del personal que se incorpore durante el año, será calculada sobre el sueldo básico que tenga asignado el agente, y se abonará la que corresponda al capital obligatorio de una sola vez y por el período que medie entre el primer día del mes de ingreso al seguro y el 31 de diciembre del año de la incorporación, y la que corresponda al capital adicional en tantas cuotas como haya lugar de acuerdo a la norma del artículo 26º entre la fecha de la incorporación y el 31 de diciembre del año de la incorporación".

"Artículo 32º.- En los casos de personal que deje de pertenecer a la Administración, las reparticiones procederán a deducir del último sueldo que se liquide al exagente, o, en su caso, del sueldo anual complementario que se le abone:

1) El importe de las sumas satisfechas en concepto de aporte del Estado por el período correspondiente a los meses que falten para completar el año, considerándose como enteras las fracciones de mes.
2) La parte de la prima no descontada por el capital adicional, correspondiente al año del egreso del agente.
3) El importe correspondiente a la prima de su seguro por el próximo período anual, salvo en las siguientes circunstancias:
   a) Cuando se trate de egresos por jubilación o retiro, y
   b) Cuando el interesado manifieste expresa oposición por escrito.

Si los haberes pendientes de pago no alcanzaren para satisfacer tales importes, el agente los abonará según

lo previsto para el personal que deje de estar al servicio de la Administración.- En estos casos las reparticiones deberán notificar por escrito a los interesados la disposición contenida en el artículo 40º.

En caso de incumplimiento de las retenciones indicadas, el seguro se mantendrá en vigencia hasta el 31 de diciembre del año siguiente a aquel en que se produjo el egreso del ex-agente, sin perjuicio de aplicar al funcionario responsable lo dispuesto en el artículo 97º".

"Artículo 34º.- En las planillas de liquidación del sueldo anual complementario se consignarán discriminadamente las retenciones efectuadas a cada agente por el capital obligatorio y una tercera parte de la prima del capital adicional, como asimismo, el importe correspondiente al aporte del Estado".

"Artículo 37º.- Las reparticiones deberán enviar a la Caja:

A - Antes del día 20 de cada mes:
1º) Nómina de las altas correspondientes a los nuevos asegurados acompañada de las respectivas fichas individuales;
2º) Liquidación de primas;
3º) Detalle de las modificaciones de capital adicional solicitados durante el mismo mes, con las respectivas solicitudes de opción;
4º) Comprobante del depósito o pago efectuado.

B - Antes del día 20 de los meses de enero, mayo y septiembre de cada año:
1º) Nómina de bajas del personal comprendido en el seguro producidas dentro del cuatrimestre calendario anterior;
2º) Liquidación de la parte correspondiente de las primas del capital adicional;
3º) Comprobante del depósito o pago efectuado".

"Artículo 55º.- Recibida la comunicación del siniestro, la Caja procederá, previo examen de la documentación a liquidar el importe del seguro a los beneficiarios, estando autorizada a deducir del capital, las cuotas de primas, correspondientes del capital adicional que estuviesen, a la fecha del siniestro, impagas.- El pago podrá efectuarse directamente por la Caja o por intermedio de sus delegaciones o agencias habilitadas o con intervención de las reparticiones.- La dependencia que efectúe el pago, obtendrá el correspondiente recibo, que será enviado a la Caja con la partida de defunción del asegurado, si este documento no hubiese sido remitido con anterioridad, y con la constancia de haberse verificado la identidad del beneficiario.- Los funcionarios que intervengan en el pago y certifiquen los respectivos recibos, serán responsables en el caso de no efectuarlo a quien corresponda".

ARTICULO 3º.- La renta o beneficio correspondiente a siniestros por incapacidad total y permanente o incapacidad parcial y permanente cuyas denuncias se hayan recibido por la Caja o sus delegaciones con anterioridad a la fecha de este decreto y los siniestros que se encontraren en curso de pago, se abonará o continuará abonándose sobre la base del capital obligatorio de diez mil pesos moneda nacional (m$n. 10.000.-).

En ningún caso se liquidarán y abonarán dichos beneficios tomando el nuevo capital obligatorio de veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 20.000.-), si el agente, con posterioridad a la iniciación de la vigencia del presente decreto, no registra prestación de servicio activo; esto es: concurrencia al empleo con percepción de haberes.- La Caja procederá de oficio a devolver las primas que se hubieran descontado indebidamente.

ARTICULO 4º.- El personal asegurado que actualmente se encuentre prestando servicio con percepción regular de -

haberes y concurrencia a su empleo, podrá ajustar su capital adicional conforme a la escala establecida por el artículo 15º, hasta el 30 de abril de 1962.- El seguro correspondiente regirá a partir del primer día del mes siguiente al de la opción.

Respecto de los agentes que se hallen en uso de licencia a la fecha de este decreto y no se reincorporen al servicio activo dentro del plazo que fija el párrafo anterior, se aplicará lo dispuesto sobre el particular por los artículos 16º y 17º (último párrafo).

Al personal que durante la vigencia de parte del plazo de esta franquicia preste servicio activo, no le es aplicable lo establecido en el artículo 17º (último párrafo).

Los asegurados que sobrepasen la edad de cincuenta y cinco (55) años no podrán en virtud de la presente franquicia, aumentar su capital adicional en una suma superior a los ciento veinticinco mil pesos moneda nacional (m$n. 125.000.-)

A los efectos de su validez, toda solicitud de opción de capital adicional formulada en uso de la franquicia que acuerda el presente artículo, deberá ingresar a la Caja Nacional de Ahorro Postal antes del 31 de julio de 1962.- La demora en la tramitación de estas solicitudes hará pasible a los funcionarios responsables de la sanción prevista en el artículo 97º del decreto Nº 10.176/58.

ARTICULO 5º.- Toda persona cuyo seguro de vida de la Ley Nº 13.003 (t.o.1958) hubiera quedado rescindido de acuerdo con las condiciones vigentes sobre el particular, podrá solicitar, hasta el 30 de abril de 1962, su reincorporación por el último capital asegurado que poseía, previo cumplimiento de requisitos médicos ante facultativos de la Caja y a satisfacción de ésta.

Los gastos que origine se hallarán a cargo del interesado.- Cumplidos estos requisitos, el seguro regirá -

desde la fecha en que sea aprobado por la Caja.
ARTICULO 6º.- Los legisladores y jueces que se hallen en ejercicio de sus funciones y que no hayan solicitado su incorporación al seguro podrán, hasta el 30 de abril de 1962, pedir su inclusión en el mismo.
ARTICULO 7º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.
ARTICULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Roberto T.Alemann
Jorge Wehbe.

ACTO: RESOLUCION Nº 7.555/61.-

MATERIAS: ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - CONCURSOS

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1961.-

Visto que por resolución nº 7.706/60 (¹) se prorrogaron durante el ejercicio 1961 las autorizaciones acordadas oportunamente a las reparticiones de esta Secretaría de Estado, comprendidas en el Escalafón General aprobado por el decreto nº 9.530/58 para que, con arreglo a lo dispuesto por el decreto nº 9.252/60 (²), efectuasen los correspondientes llamados a concursos para cubrir las vacantes existentes o que se produjeran en aquel lapso; atento que el término de tales autorizaciones ha caducado y teniendo en cuenta que resulta necesario prorrogar las mismas durante el curso del presente ejercicio,

EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

1º.- Prorrogar para el presente ejercicio los términos de la resolución nº 7.706/60.-

2º.- Comuníquese, publíquese y archívese.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1288.-
(²) Ver Digesto Administrativo Nº 1226.-

ACTO: DECRETO Nº 11.047/61.-

MATERIAS: ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - ADSCRIPCIONES COMISIONES - SANCIONES - SUSPENSIONES - RETROGRADACION - CESANTIA - EXONERACION - SUMARIOS

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1961.-

Visto la ausencia de normas que fijen los responsables para aplicar sanciones disciplinarias cuando estén dirigidas a empleados en comisión o adscriptos, como asimismo el cuerpo legal al cual deberán ajustarse cuando se trata de agentes que dependen presupuestariamente de un organismo y se desempeñan en otro, con distinto Estatuto, Escalafón y régimen disciplinario, y

CONSIDERANDO:

Que el poder jerárquico, y el poder disciplinario que de ordinario lo complementa, no debe permanecer exclusivamente ni a la administración de origen ni a la beneficiaria de la adscripción o comisión;

Que ambos poderes deben ser compartidos para la mejor satisfacción de los intereses de cada uno de ellos;

Que es evidente que a la administración de la cual depende presupuestariamente el agente, le corresponde aplicar todas las medidas disciplinarias que afecten o

//-

modifiquen su situación administrativa, como sería la retrogradación de categoría, la cesantía o la exoneración;

Que en cambio la administración en la cual presta servicios el agente en calidad de adscripto o en comisión debe reservarse su poder disciplinario cuando se trate de aplicar sanciones por motivos que afecten el interés del servicio al cual transitoriamente pertenece;

Por ello, y atento a lo aconsejado por la Secretaría de Estado de Hacienda, en base a las atribuciones resultantes del Decreto-Ley nº 797/58 (º) (Ley nº 14.467) (ºº) y art. 20º - inciso 12 de la Ley nº 14.439 (+),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- La aplicación de sanciones disciplinarias al personal de la Administración Nacional, comprendido en el Estatuto aprobado por el Decreto-Ley nº 6.666/57 (°), que presta servicios en calidad de adscripto o en comisión, se ajustará a las siguientes normas:

a) las sanciones que producen alteraciones fundamentales en la situación jurídica permanente que vincula al agente con la Administración (postergación en el ascenso, retrogradación de categoría, cesantía, exoneración), serán impuestas por el organismo en que el interesado revista presupuestariamente, con arreglo a las normas legales y reglamentarias en vigor en su jurisdicción;

b) las sanciones correctivas menores, o de carácter precautorio (apercibimiento y suspensión), serán impuestas por el organismo en que el interesado pres

(º) Ver Digesto Administrativo Nº 419.-
(ºº) Ver Digesto Administrativo Nº 609.-
(+) Ver Digesto Administrativo Nº 505.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

ta servicios, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias en vigor en su jurisdicción;

c) cuando las sanciones procedan en razón de infracciones cometidas en jurisdicción de la dependencia en que el interesado presta servicios, que corresponda comprobar mediante sumario, la instrucción de éste estará a cargo de dicha dependencia. Si en virtud del sumario correspondiera imponer sanciones de las mencionadas en el inciso a), las actuaciones respectivas serán elevadas al organismo en que el interesado revista presupuestariamente, a los efectos allí establecidos. No correspondiendo sumario, se elevará al mismo organismo la información o certificación respectiva de los hechos.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo
Jorge Wehbe

ACTO: DECRETO Nº 11.177/61.-

MATERIAS: PLAN DE RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - C.E. P.R.A. - PERSONAL - PROHIBICIONES - ECONOMIAS VACANTES - BOLSA DE TRABAJO

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1961.-

Visto lo dispuesto por el Decreto nº 5.006 del 21 de junio de 1961 (1), y

CONSIDERANDO:

Que subsisten en su mayoría las razones que determinaron aquella medida de Gobierno, pues la disminución neta de agentes en la administración pública no acusa todavía las cifras que permitan suponer la descongestión de personal que se persigue mediante diversas medidas de racionalización administrativa;

Que por lo tanto corresponde prorrogar por un nuevo período las disposiciones del decreto aludido;

Por ello y atento a lo propuesto por el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E. P.R.A.);

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1406.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A

ARTICULO 1º.- Prorrógase hasta el 31 de octubre de 1962 la aplicación del Decreto nº 5.006 del 21 de junio de 1961.

ARTICULO 2º.- Mantiénense en vigencia durante el nuevo período las excepciones totales o parciales acordadas por el Poder Ejecutivo a las disposiciones del aludido decreto, así como las aclaraciones formuladas con posterioridad al mismo.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo
Jorge Wehbe

(A.H.)

---

(1) Ver Digesto Administrativo

ACTO: DECRETO Nº 11.182/61.-

MATERIAS: AUTOMOTORES OFICIALES - AUTOMOTORES ADSCRIPTOS - COMPENSACIONES - PROHIBICIONES - CEPRA DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO (Cuenta Especial)

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1961.-

Visto la observación Nº 50, Anexo 52, Ejercicio 1960/1961 formulada por el Tribunal de Cuentas de la Nación al decreto nº 8.534 de fecha 22 de setiembre de 1961 (*), y

CONSIDERANDO:

Que la medida observada tiene por objeto racionalizar el uso de automotores oficiales en forma que permita al propio tiempo la eficaz atención de los servicios, debiendo en consecuencia insistirse en partes pertinentes de la misma;

Que si bien los fondos que se obtengan de la venta de automotores se destinarán transitoriamente y con reintegro, a la financiación de las compras de nuevas unidades por los funcionarios, terminado el ciclo de las operaciones, se acreditarán en la proporción pertinente a rentas generales tal como ya lo prevé el artículo 20º "in fine" del decreto observado; //-

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1459.-

Que por otra parte y a los efectos de no transgredir el artículo 24° de la Ley de Contabilidad, cada organismo comprendido en la medida en cuestión deberá obtener el reajuste de sus correspondientes créditos presupuestarios de acuerdo con lo dispuesto por este decreto, creando la o las partidas específicas a los fines del cumplimiento del decreto n° 8.534/61;

Que sin perjuicio de lo expuesto, es conveniente introducir al mismo algunas modificaciones o aclaraciones tendientes al más eficaz resultado del fin propuesto;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Los organismos de la Administración Central -con excepción de la Presidencia de la Nación- y las entidades descentralizadas, obras sociales, empresas del Estado y servicios de cuentas especiales, así como el Tribunal de Cuentas de la Nación, propondrán según corresponda y dentro de los treinta días corridos desde la fecha de publicación del presente, el reajuste de sus respectivos presupuestos a efectos de arbitrar la o las partidas específicas a los fines del cumplimienio del decreto n° 8.534/61. Las modificaciones presupuestarias se operarán por compensación de créditos, que serán rebajados de las partidas a que se refieren los artículos 13° y 20° del decreto citado. Hasta tanto la autoridad competente haya aprobado el reajuste, no se dará curso a ningún préstamo.

ARTICULO 2°.- Aclárase que, según lo establecido en el artículo 4° del decreto n° 8.534/61, no se otorgarán préstamos a funcionarios cuyos cargos correspondan a clases y grupos inferiores jerárquicamente a la clase A grupo I del escalafón aprobado por decreto n° 9.530/58, o cargos

equivalentes o superiores cuando se trate de agentes regidos por otras disposiciones, de cualquiera jurisdicción, hasta tanto en todas las jurisdicciones restantes no se haya cumplimentado la adjudicación prevista para dicho personal superior, y así sucesivamente, salvo que los organismos no presentaren los ajustes de los respectivos presupuestos dentro del plazo establecido en el artículo 1º del presente o bien que ellos o sus agentes no cumplimentaren otras exigencias, en cuyo caso los funcionarios respectivos perderán la prioridad acordada, considerándoseles sus solicitudes de préstamo con los de la clase y grupo en gestión al momento de la regularización.

ARTICULO 3º.- Déjase aclarado que los beneficios que en materia de préstamos para la adquisición de automóviles que acuerda el decreto nº 8.534/61, alcanzarán exclusivamente a los funcionarios escalafonados en cargos de carácter permanente. Los funcionarios cuyo nombramiento sea a plazo fijo o desempeñen funciones transitorias o presten servicios transitorios y/o por contrato, están excluídos del presente régimen.

ARTICULO 4º.- En concordancia con el segundo párrafo del artículo 3º del decreto nº 8.534/61 dispónese que la adscripción de los automóviles de los funcionarios del Grupo I - Clase A del escalafón aprobado por el decreto número 9.530/58 o de categorías equivalentes o superiores en los casos de personal regido por otras disposiciones se operará automáticamente con la simple declaración del interesado al iniciar las gestiones pertinentes. En todos los demás casos será necesario el pronunciamiento previo del Poder Ejecutivo, en la forma prevista por el artículo 3º "in fine" del decreto nº 8.534/61.

ARTICULO 5º.- El plazo fijado por el artículo 12º del decreto 8.534/61 se contará a partir de la publicación del presente decreto.

ARTICULO 6º.- La Dirección General de Suministros del Estado a petición expresa de los funcionarios interesados y una vez llenadas todas las exigencias del decreto Nº 8.534/61 y el presente queda autorizada para adquirir mediante contratación directa con las fábricas productoras, los automóviles destinados al cumplimiento del decreto nº 8.534/61. En tales casos la citada Dirección General actuará como gestora de los funcionarios interesados en las compras, dentro de las condiciones que la misma Dirección General establecerá para el mejor logro de su cometido, sin que dichos funcionarios puedan rechazar las unidades que se les adjudique, salvo defectos de fábrica o distinta marca o modelo que los solicitados por ellos.

ARTICULO 7º.- En los casos de cancelación anticipada del préstamo por cualquiera de las situaciones previstas en el decreto nº 8.534/61, la Dirección General de Suministros del Estado deducirá del monto a pagar por los funcionarios el importe de los intereses no devengados.

ARTICULO 8º.- Las empresas del Estado y las entidades descentralizadas que resuelvan apartarse del régimen de centralización de operaciones y fondos en la Dirección General de Suministros del Estado, haciendo uso de la facultad que les acuerda el artículo 22º del decreto nº 8.534/61, deberán ajustar estrictamente todos los procedimientos a las normas establecidas por el decreto mencionado y el presente.

ARTICULO 9º.- Las normas establecidas por el presente decreto son asimismo de aplicación en la parte pertinente para los casos de adscripción de vehículos de propiedad de los agentes comprendidos en los alcances del decreto nº 8.534/61 y de conformidad a lo establecido en el artículo 18º de dicho acto.

ARTICULO 10.- En ejercicio de la atribución conferida por el artículo 87º de la Ley de Contabilidad, insístese en

el cumplimiento del decreto nº 8.534/61, en todo aquello que no haya sido modificado por los artículos que anteceden.

ARTICULO 11.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 12.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y previa intervención del Tribunal de Cuentas de la Nación, pase a la Secretaría de Estado de Hacienda a sus efectos.

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo
Jorge Wehbe

ACTO: DECRETO Nº 11.183/61.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - ESCALAFONES

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1961.-

Visto la necesidad de dotar a la Dirección General Impositiva de una organización administrativa ágil, acorde con la importancia y magnitud de las tareas que la misma tiene a su cargo, y

CONSIDERANDO:

Que en tal orden de ideas debe prestarse preferente atención a todo esfuerzo que propenda a los mencionados fines, lo que incidirá directamente en el perfeccionamiento de la estructura de dicho organismo y en definitiva tendrá su correlativa repercusión en la labor recaudadora que la citada Dirección desarrolla;

Que al respecto es evidente que como consecuencia de la reorganización a que ha sido sometido el organismo precitado resulta aconsejable adecuar las normas del Decreto nº 7.738/58 (') a fin de que el escalafón por él aprobado se ajuste a las condiciones funcionales imperantes en la actualidad;

Que asimismo, para los fines precitados resulta necesario contar con las normas que permitan efectuar de-

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 639.-

signaciones o reincorporaciones atendiendo al respecto a la capacitación de los aspirantes y a las necesidades funcionales de la repartición;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Modifícase el párrafo 1° del artículo 5° del decreto n° 7.738/58 el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Los agentes ingresantes serán escalafonados en la categoría inicial establecida para cada clase de función. Lo dispuesto precedentemente no regirá para aquellas funciones que exigieran determinado tipo de habilidad manual o técnico-manual, casos en que los agentes serán escalafonados en la categoría de la respectiva carrera que se estimara adecuada al grado de preparación técnica demostrada en el momento de rendir la pertinente prueba de suficiencia".

ARTICULO 2°.- Las disposiciones del artículo anterior regirán a partir de la fecha de creación del Consejo de la Dirección General Impositiva, el cual queda facultado a determinar, a propuesta del señor Director General o quien haga sus veces, las funciones comprendidas en la excepción establecida precedentemente y la categoría en que serán ubicados los agentes.

ARTICULO 3°.- Modifícanse los párrafos 2° y 5° del artículo 5° del decreto n° 7.738/58 los que quedarán redactados de la siguiente manera:

Párrafo 2°.- "Los aspirantes a Inspector, mayores de edad, con título de Doctor en Ciencias Económicas, Actuario o Contador Público Nacional, serán escalafonados en el Grupo 17, Función 7, previo una prueba de competencia -

en materia impositiva".

Párrafo 5º.- "El personal de la Dirección que obtenga el título de Doctor en Ciencias Económicas, Actuario, Contador Público Nacional, Ingeniero Agrónomo, Doctor en Leyes y Jurisprudencia y Abogado pasará, a opción del interesado, a desempeñar, según corresponda, las funciones de Inspector de 4a. o Abogado de 4a. previo cumplimiento (excepto los verificadores e Instructores de Sumarios) de lo dispuesto en el párrafo 2º in-fine del presente artículo".

ARTICULO 4º.- Agrégase como último párrafo del artículo 5º del decreto nº 7.738/58 la siguiente norma:

"En ningún caso los ascensos por cambio de categoría, clase, grupo o función podrán disponerse a favor de agentes que no tengan, por lo menos, un año de antigüedad en la Dirección".

ARTICULO 5º.- Reemplázase el artículo 9º del decreto nº 7.738/58 por la siguiente norma:

"Los ascensos automáticos de categoría o grupo por rendición de exámenes; los cambios automáticos de clase por el mismo motivo; los ascensos o cambios automáticos de categoría, grupo o clase por obtención de títulos habilitantes; los ascensos automáticos por desempeño de funciones superiores (artículo 10 in-fine) serán acordados por la autoridad competente, disponiendo la respectiva asignación de funciones y en tales casos las diferencias de haberes resultantes serán abonadas, a partir del 1º del mes siguiente de la fecha de la Resolución aludida, con cargo a la partida "Complemento de Sueldo por Promoción Automática" del Pre

supuesto de "Gastos en Personal" de esta Reparti - ción".

"Los ascensos por otros motivos (acordados por razones funcionales, por méritos acreditados, por antecedentes, etc.) serán también acordados disponiendo la respectiva asignación de funciones y en tales - casos las diferencias de haberes resultantes serán abonadas a partir del 1º del mes siguiente de la fecha de la Resolución aludida, con cargo a la partida "Complemento de Sueldo por Promoción Automática" del Presupuesto de "Gastos en Personal" de la Dirección General Impositiva".

ARTICULO 6º.- La reincorporación de personal que hubiera dejado de pertener a la Dirección General Impositiva por renuncia, se efectuará designando al agente en la misma clase y función en que estaba escalafonado al tiempo de su egreso siempre y cuando, durante su actuación anterior, hubiera acreditado méritos suficientes para ello.

ARTICULO 7º.- Cuando en el ordenamiento escalafonario vigente a la fecha de disponerse la reincorporación no exista la función en que revistaba el agente al operarse su baja, se le acordará la categoría que se haya asignado, en el momento de desaparecer dicha función, al personal que estaba agrupado en la misma.

ARTICULO 8º.- El personal de la Dirección General Impositiva que hubiera obtenido los beneficios del retiro voluntario sólo podrá ser reincorporado a la misma cuando no hubieran transcurrido más de cinco (5) años desde su egreso. El reintegro se efectuará con arreglo a las condiciones establecidas en los artículos 6º y 7º del presente decreto.

Si los ex-agentes hubieran interpuesto el pertinen-

te pedido de reincorporación antes de cumplirse cinco (5) años de su egreso, podrán ser incorporados a la dotación de la Dirección General Impositiva aunque al momento de ser ésta dispuesta hubiera transcurrido un lapso mayor del aludido.

ARTICULO 9º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Hacienda.

ARTICULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Hacienda a sus efectos.

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo
Jorge Wehbe

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	N°. 1518.-

ACTO: DECRETO N° 10.658/61.-

MATERIA: JERARQUIZACION

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1961.-

Visto la necesidad de aclarar el alcance de las modificaciones que puedan producirse, en las asignaciones que se liquidan de conformidad con lo previsto por el artículo 1° del régimen aprobado por el Decreto número 9.252/60 (+), en concepto de compensación por "servicios calificados",

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A:

ARTICULO 1°.- Aclárase que en lo sucesivo, las modificaciones que puedan producirse en las asignaciones que en concepto de compensación por "servicios calificados" se liquidan de conformidad con lo previsto por el artículo 1° del régimen aprobado por Decreto n° 9.252 del año 1960, se ajustarán a las disposiciones del artículo 30° de la Ley n° 15.796 (°).

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

(+) Ver Digesto Administrativo n° 1.216.-
(°) Ver Digesto Administrativo n° 1.330.-

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Jorge Wehbe.-

ACTO: RESOLUCION N° 12.012/61.-

MATERIAS: VIATICOS - HORAS EXTRAORDINARIAS

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1961.-

Visto que en Expediente N° 90.736/61, la Dirección Nacional de Turismo dependiente de la Secretaría de Transportes formula diversas consideraciones vinculadas con la aplicación de las disposiciones del Decreto N° 13.834/60 (1), Arts. 2° y 7°, y

CONSIDERANDO:

Que, corresponde fijar expresamente los alcances de ambos artículos en el sentido de determinar si sus beneficios pueden ser utilizados simultáneamente por un mismo agente;

Que, el artículo 2° determine que el viático es la asignación diaria fija que se acuerda a los agentes del Estado, para atender todos los gastos personales que le ocasione el desempeño de una comisión de servicio en un lugar alejado a más de 50 kilómetros de su asiento habitual o que, aún cuando esté ubicado a una distancia menor, obligue al agente a pernoctar en el sitio de su actuación provisional por exigirlo así el cumplimiento de la misma o por falta de medios apropiados de movilidad, es decir, que no tiene relación con la duración

//-

(1) Ver Digesto Administrativo N° 1274.-

del trabajo, sino con los gastos personales que le ocasione el realizarlo fuera de su asiento habitual;

Que, el artículo 7° determina que se otorga "Retribución por Servicios Extraordinarios" cuando el agente realiza tareas extraordinarias al margen del horario normal de labor, ya lo cumpla en su asiento habitual o fuera de él, siempre que correspondan a su repartición;

Que, las motivaciones que originan los adicionales de que tratan los artículos citados, responden a conceptos distintos y satisfacen necesidades muy diferenciadas como queda precedentemente expuesto;

Que, conviene recordar al respecto lo dictaminado en anteriores ocasiones por la Procuración del Tesoro de la Nación (Expedientes números 99.877/50 - Ministerio de Educación y 72.012/57 - Banco Industrial), cuando expresa que los "accesorios económicos", que perciben los agentes de la Administración Pública, además del sueldo, llámense indemnizaciones, compensaciones, viáticos, bonificaciones, remuneraciones extraordinarias, gratificaciones, etc., a raíz de la prestación de servicios fuera del horario, o a la realización de trabajos especiales, responden a dos tipos principales: a) Retribución; b) Reintegro o indemnización. Entre los accesorios de tipo retributivo se incluye a las remuneraciones por servicios extraordinarios y por servicios especiales, y en cambio califica como reintegros o indemnizaciones a los viáticos, asignaciones por traslado o reembolso de gastos de movilidad;

Que, idéntica posición interpretativa mantiene la Dirección General del Servicio Civil;

Por ello, y atento a las facultades establecidas en el artículo 20, del Decreto N° 13.834/60.

EL SECRETARIO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

1°) Aclárase que las compensaciones por "Viáticos" y "Retribución por Servicios Extraordinarios", a que se refieren los artículos 2° y 7°, respectivamente, del Decreto Nº 13.834/60, pueden ser percibidos simultáneamente, cuando las causales que las originen se ajusten estrictamente a las especificaciones establecidas, para cada caso, en la norma citada.-

2°) Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

Fdo. JORGE WEHBE

ACTO: RESOLUCION Nº 12.013/61.-

MATERIA: LICENCIAS

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1961.-

Visto el decreto nº 8.567/61 (+), por el que se aprueba el Régimen de Licencias, Justificaciones y Permisos para el Personal de la Administración Nacional y las modificaciones introducidas al mismo por decreto nº 10.635/61(°), atento a las consultas formuladas por distintos organismos acerca de la aplicación de algunas de sus disposiciones, lo informado en las mismas por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, y las facultades conferidas por el art. 5º de dicho acto de gobierno,

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA

R E S U E L V E:

1º).- Aclárase, a los fines de la aplicación de las normas contenidas en el decreto nº 8.567/61, y Régimen de Licencias, Justificaciones y Permisos aprobados por el mismo, lo siguiente:

a) Las licencias anuales por vacaciones correspondientes al año 1961 que sean transferidas para ///.

(+) Ver Digesto Administrativo nº 1.461.-
(°) Ver Digesto Administrativo nº 1.501.-

1962 por razones de servicio o de salud, deberán ser computadas considerando la cantidad de días laborables fijada en el art. 4º del decreto nº 12.720/53(1).

b) El personal que entre el 23 y el 30 de septiembre de 1961 haya comenzado a hacer uso de licencia por enfermedad de largo tratamiento o por enfermedad profesional o accidente de trabajo (artículos 14º y 17º del decreto nº 12.720/53) quedará automáticamente encuadrada en la excepción prevista en el art. 3º del decreto nº 8.567/61.

c) La concesión de licencia por enfermedad de largo tratamiento (art. 11º del Régimen aprobado por decreto nº 8.567/61) al personal que hubiese hecho uso anteriormente de ese beneficio, con sujeción al art. 14º del decreto nº 12.720/53, sin que medie un lapso de tres (3) años desde su alta, se ajustará a las siguientes condiciones:

I) Si hubiera utilizado menos de 365 días con goce de haberes, se le acordará el período necesario para completar ese término, a cuyo vencimiento entrará a regir la prórroga con el 50% de haberes (art. 11º, inc. b).

II) Si hubiera utilizado 365 días o más, con goce de haberes, se le acordará directamente licencia con el 50% de haberes.

III) Si hubiera utilizado 2 años con goce de haberes y menos de 365 días con el 50% de haberes, se le acordará el período restante para completar esta última prórroga (art. 11º, inc. b).

---

(1) Ver Digesto Administrativo nº 15.-

IV) Si hubiera utilizado la totalidad de las licencias con goce integro y parcial de haberes previstas en el art. 14° del decreto n° 12.720/53, no tendrá derecho a licencia alguna hasta transcurridos 3 años de su alta.

d) Las licencias gremiales concedidas con anterioridad al 1° de octubre de 1961 con sujeción al artículo 29° (apartado 2), incisos a) y b) del Decreto número 12.720/53, serán ajustadas a partir de esa fecha a los términos y especificaciones del artículo 23° del Régimen aprobado por Decreto n° 8.567/61, condicionado a las disposiciones especiales y particulares de la Ley n° 14.455 (").

e) Las licencias sin goce de haberes acordadas antes del 1° de octubre de 1961 con sujeción a los artículos 31° y 34° del Decreto n° 12.720/53 podrán ser utilizadas hasta el vencimiento de los plazos acordados en las resoluciones respectivas, a cuyo término los pedidos de prórroga que se formulen deberán ajustarse a los plazos y condiciones especificados en los artículos 27° y 28° del Régimen aprobado por Decreto n° 8.567/61.

2°).- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, y archívese.-

Fdo. JORGE WEHBE

(") Ver Digesto Administrativo n° 608.-

ACTO: DECRETO Nº 9.573/61.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - BONIFICACIONES ESPECIALES

Buenos Aires, 26 de octubre de 1961.-

Visto la observación Nº 46/61 formulada por el Tribunal de Cuentas de la Nación y subsistiendo las razones que originaron el dictado del decreto Nº 8.586/61(1),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Insístese en el cumplimiento de lo dispuesto por el decreto Nº 8.586/61.-

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Hacienda.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Jorge Wehbe

---

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1466.-

ACTO: DECRETO Nº 10.620/61.-

MATERIAS: PRESUPUESTO - TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

LEY DE CONTABILIDAD (Art. 35º)

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1961.-

Visto la observación formulada por el Tribunal de Cuentas de la Nación al Decreto Nº 10.107 del 31 de octubre (1),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Insístese en el cumplimiento de lo dispuesto por el decreto Nº 10.107 del 31 de octubre de 1961.-

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas, y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría General de la Nación, a sus efectos.-

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Jorge Wehbe

---

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1497.-

ACTO: DECRETO Nº 10.724/61.-

MATERIAS: PATRIMONIO DEL ESTADO - INMUEBLES - MUEBLES Y UTILES

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1961.-

Visto la necesidad de proceder a otorgar las escrituras traslativas de dominio, constitutivas de hipotecas y sus cancelaciones, referentes a los inmuebles vendidos de acuerdo con el régimen del decreto Nº 3.660/61 (1), y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 64º del decreto-ley Nº 23.354/56, establece que todas las escrituras públicas correspondientes a actos jurídicos en los que el Estado Nacional sea parte, deberán ser otorgadas por ante la Escribanía General del Gobierno de la Nación;

Que, no obstante ello, por decreto-ley Nº 1412 del 6 de febrero de 1958, se creó un régimen de excepción para todas las escrituraciones que fueran necesarias realizar con motivo de las ventas que se efectuaron por el régimen del decreto-ley Nº 8.060/57, permitiendo que las mismas se formalicen por ante los escribanos autorizantes de las respectivas jurisdicciones de acuerdo a la u

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1.395.-

bicación de los inmuebles;

Que tal régimen de excepción se fundaba en las numerosas escrituras que habría necesidad de otorgar, así como en el hecho de que las mismas deberían ser suscriptas, en gran parte, en el interior del país y que, desde el punto de vista del orden económico patrimonial, no se creaban inconvenientes, toda vez que los honorarios de los profesionales actuantes, son a cargo de la parte compradora;

Que en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 37° de la ley N° 15.796 (*), el Poder Ejecutivo Nacional centralizó en la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación, por decreto N° 3.660/61, la venta de todos los inmuebles del dominio privado del Estado Nacional Argentino que no sean necesarios para la prestación de servicios públicos, inclusive los comprendidos en el régimen del decreto-ley N° 8.060/57;

Que, por consiguiente, quedan asimismo centralizadas en el citado organismo las facultades que en cada caso habían sido conferidas en especial a las instituciones que tenían a su cargo los distintos regímenes de ventas, de las cuales es continuadora para el cumplimiento de tales fines;

Que, al agruparse en un sólo organismo las distintos sistemas de ventas, subsisten aumentadas las causales que motivaron el régimen de excepción establecido por el decreto-ley N° 1.412/58;

Que teniendo en cuenta que la venta de los inmuebles en cuestión se realiza por intermedio de bancos oficiales, con organismos especializados para la ejecución de tales tareas, con agencias y delegaciones en

---

(*) Ver Digesto Administrativo N° 1334.-

el interior del país, principios elementales de racionalización y buena administración, hacen aconsejable encomendar las escrituraciones que fueren menester efectuar a las mismas instituciones, mediante los escribanos autorizantes inscriptos en sus registros, y de acuerdo al procedimiento de designación que rija en cada una de ellas;

Que tal sistema permite hacer uso de organizaciones públicas ya existentes con experiencia en la materia; evita recurrir a profesionales extraños a la administración pública y configura un beneficio para las instituciones oficiales intervinientes que ven, de este modo, incrementada su actividad;

Que, por otra parte, el artículo 37º de la Ley número 15.796, facultó al Poder Ejecutivo para reglamentar todo lo relativo a la venta de los inmuebles de que se trata, encontrándose dentro de las mismas la de fijar todo lo relacionado con el otorgamiento de las respectivas escrituras;

Por todo ello, atento lo aconsejado por la Escribanía General del Gobierno de la Nación y por la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Las escrituras traslativas de dominio, constitutivas de hipotecas y sus respectivas cancelaciones, que fueren necesario otorgar con motivo de las ventas efectuadas por el régimen del decreto Nº 3.660/61, podrán ser formalizadas por ante los escribanos autorizantes de las respectivas jurisdicciones, de acuerdo a la ubicación de los inmuebles, inscriptos en los registros de las instituciones bancarias oficiales, que tuvieron a su cargo la venta del bien.-

ARTICULO 2º.- Facúltase a la Secretaría Técnica de la Pre

sidencia de la Nación para que, directamente, de intervención a las mencionadas instituciones a los fines de proceder a las escrituraciones a que se refiere el artículo anterior. La institución bancaria, dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles de recibida la carpeta de venta, deberá designar al escribano que tendrá a su cargo la escrituración, conforme al procedimiento vigente para realizar tales nombramientos .-

ARTICULO 3º.- El Banco interviniente comunicará de inmediato a la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación, el escribano designado, consignando su domicilio profesional y el número del registro de contratos públicos del que fuera titular o adscripto.

ARTICULO 4º.- Dentro del término de 15 (quince) días hábiles de otorgada la escritura, el Banco deberá devolver a la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación, la carpeta de venta que le fuera remitida, con el título de propiedad con la nota marginal suscripta por el escribano actuante, donde deje constancia de la operación realizada, y una copia simple autenticada de la escritura otorgada.

ARTICULO 5º.- Dentro del término de 60 (sesenta) días hábiles de otorgada la escritura, el Banco deberá remitir a la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación, los datos de inscripción del dominio, de la hipoteca y de la cancelación, en cada caso, en el Registro de la Propiedad respectivo, enviando copia del recibo de entrega del testimonio al comprador.-

ARTICULO 6º.- Facúltase a la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación para pagar todos los gastos que fueren necesarios realizar para poder suscribir las escrituras mencionadas en el artículo 1º del presente decreto, conforme a los aranceles oficiales vigentes, así como también los impuestos que pudieren adeudar los in-

muebles vendidos, hasta la toma de posesión por parte de los adquirentes. Dichos gastos serán atendidos con los fondos obtenidos de la venta de los inmuebles, deduciéndose de las sumas a transferir a los organismos de origen de los mismos.-

ARTICULO 7º.- Para el otorgamiento de las escrituras públicas de constitución de servidumbres y sus cancelaciones, y cualesquiera otros derechos reales, como asimismo las escrituras de cesión y libramiento al servicio público nacional, provincial o municipal, trazado de plazas, reservas fiscales, calles y ochavas, en los inmuebles que se subdividen o en los casos en que resulte necesaria la cesión de esos espacios al dominio público, y, en general, cualquier otra forma de instrumentación de actas y contratos, públicos y privados, que fueren menester celebrar con motivo de las ventas efectuadas por el régimen del decreto Nº 3.660/61, se seguirá el mismo procedimiento establecido en los artículos precedentes.-

ARTICULO 8º.- La Escribanía General del Gobierno de la Nación resolverá sobre la oportunidad en que podrá tomar a su cargo la formalización de estas escrituraciones, debiendo poner tal circunstancia en conocimiento de la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación.-

ARTICULO 9º.- Las escrituraciones que se realicen deberán ser comunicadas a la Contaduría General de la Nación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54º del decreto-ley Nº 23.354/56.-

ARTICULO 10º.- Dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Escribanía General del Gobierno de la Nación, a sus efectos.-

ARTICULO 11.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento del Interior.-

ARTICULO 12.- Regístrese, publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo

ACTO: DECRETO Nº 11.209/61.-

MATERIA: PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1961.-

Visto el Decreto nº 354/59 (+), que ha dispuesto que el Procurador del Tesoro de la Nación tendrá jerarquía de Secretario de Estado y gozará de la misma retribución prevista para éstos en el Presupuesto de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con los artículos 12 del Decreto número 14.546/43 (°), 2ª de la Ley 12.954 (') y 1º del Decreto nº 8.328/58 ("), el Subprocurador del Tesoro es el sustituto legal del titular del organismo;

Que, por ello, a fin de adecuar su ubicación a la jerarquía otorgada a dicho titular corresponde que se le atribuya una equivalente a la de Subsecretario de Estado con la misma retribución prevista para éstos, según ya ha sido hecho para el ejercicio de 1961 a consecuencia de los ajustes dispuestos por el Decreto nº 2.899/61, para el Anexo 52 del Presupuesto Nacional;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A:

ARTICULO 1º.- El señor Subprocurador del Tesoro de la Na //..

(+) Ver Digesto Administrativo nº 886.-
(°) Ver Digesto Administrativo nº 91.-
(') Ver Digesto Administrativo nº 1.236.-
(") Ver Digesto Administrativo nº 881.-

ción tendrá jerarquía administrativa equivalente a la de Subsecretario de Estado y gozará de la misma retribución prevista para éstos en el Presupuesto de la Nación.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de los Departamentos de Interior y de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo
Jorge Wehbe

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº. 1525.-

ACTO: DECRETO Nº 11.300/61.-

MATERIAS: INCOMPATIBILIDADES - LIMITACION DE SERVICIOS - JUBILACIONES - RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA C.E.P.R.A. - PROHIBICIONES

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1961.-

Visto la nota precedente y

CONSIDERANDO:

Que la Escribanía General del Gobierno de la Nación es el organismo que tiene a su cargo el perfeccionamiento legal de importantes actos de gobierno;

Que, es parte integrante de la misma el "Registro Secreto de la Defensa Nacional", destinado a legalizar y conservar los documentos de carácter secreto confidencial o reservado del Estado vinculados a la seguridad y defensa de la Nación;

Teniendo en cuenta, además, que la Escribanía General del Gobierno de la Nación, por la naturaleza e importancia de las funciones que cumple debe considerársela incluída en las disposiciones del artículo 1º del Decreto nº 9.677/61 (+); Y, lo aconsejado por el señor Ministro de Educación y Justicia,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A:

ARTICULO 1º.- Déjase establecido que la Escribanía Gene

//..

(+) Ver Digesto Administrativo nº 1.491.-

ral del Gobierno de la Nación, está comprendida en las disposiciones del artículo 1º del Decreto nº 9.677 del 27 de Octubre ppdo.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Educación y Justicia y de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Luis R. Mac Kay - Alfredo R. Vítolo - Jorge Wehbe.-

ACTO: RESOLUCION Nº 12.009/61.-

MATERIAS: DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA - DEDICACION PROFESIONAL O TECNICA EXCLUSIVA

Buenos Aires, 23 de octubre de 1961.-

Visto el Régimen de Sobreasignación por Dedicación Profesional o Técnica Exclusiva aprobado para el personal especializado de la Dirección Nacional de Química, mediante Decreto nº 6.482/61 (+), y

CONSIDERANDO:

Que en el artículo 3º del mismo se establece la asignación básica y el coeficiente que incrementará aquélla sobre la base de la antigüedad que el agente registre en la Dirección Nacional de Química en la función profesional o técnica respectiva;

Que a los efectos del cómputo de la antigüedad aludida, el artículo 4º de la misma norma determina que serán deducibles los períodos de licencias sin sueldo y suspensiones que excedan de 30 días;

Que esta circunstancia ha originado consultas sobre la forma de considerar para tal fin las licencias sin sueldo otorgadas a agentes que han sido incorporados como Subtenientes de Reserva;

Que si bien el régimen comentado excluye expresamente para el cómputo respectivo los períodos en que no hubo prestación de servicios ni percepción de los haberes

//..

(+) Ver Digesto Administrativo nº 1428.-

correspondientes, sin hacer diferenciación alguna respecto de los motivos que originan aquellas situaciones, es evidente que no puede incluirse dentro de la exigencia expuesta la causal de incorporación como Subteniente de Reserva, dado el alto significado que tal circunstancia importa;

Por ello y atento a la facultad conferida por el artículo 8º del Decreto nº 6.482/61,

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA

R E S U E L V E:

1º.- Aclárase, a los fines de la aplicación de los artículos 3º y 4º del Decreto nº 6.482/61, que aprueba el Régimen de Sobreasignaciones por Dedicación Funcional o Técnica Exclusiva para el personal especializado de la Dirección Nacional de Química, que los períodos de licencia sin sueldo concedidos a los agentes por haber sido incorporados a las Fuerzas Armadas de la Nación en carácter de reservista, deberán ser considerados como servicios efectivos a los fines del cómputo de la antigüedad a que se refiere la norma aludida.

2º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

Fdo. JORGE WEHBE

ACTO: Fallos del 23 de marzo y 29 de setiembre de 1961.-

MATERIAS: ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Arts. 24, 38, inc. b) y 41) - ESTABILIDAD - CESANTIA - EXONERACION

CIRASI, Pedro S. s/Decreto 6666/57.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que don Pedro Cirasi fué exonerado del cargo que desempeñaba en la Casa de Moneda de la Nación por decreto del Poder Ejecutivo Nº 4.575, del 25 de abril de 1960, por habérsele comprobado que sustraía estampillas postales impresas en los recortes de impresión o en las hojas malas, las que vendía a un señor Ardisone. Estas estampillas estaban destinadas a la incineración porque carecían de valor postal y sólo lo tenían en el comercio de filatelia.

Que contra esa medida dedujo el interesado el recurso establecido por el artículo 24 del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional aprobado por decreto ley 6666/57 (1). Funda sus quejas en que: a) se ha violado la garantía de la defensa en juicio al no haberse hecho mérito en el decreto de exonera

//-

(1) *Ver Digesto Administrativo Nº 254.-*

ción de la defensa y de la prueba de descargo, amén de - no haberse recibido algunas de las pruebas ofrecidas ni rechazarse su pedido por resolución fundada; b) el perjuicio económico para el Estado no está establecido por no haberse pronunciado el Tribunal de Cuentas y, además, esas estampillas debían incinerarse y el único valor que tenían era para los filatélicos, pero no para el erario público; el perjuicio moral era compartido ya que había deficiencia de controles, lo cual permitió la comisión - de los hechos que se consideran; d) la sanción resulta - desproporcionada; e) el hecho no está probado, ya "que - la confesión no era prueba suficiente, cuando circunstancias especiales de la causa permitan esa consideración"; f) no se han ponderado los antecedentes del recurrente. Finalmente, deja planteado el caso federal por haberse - violado, dice, la garantía de defensa en juicio -artículo 18 de la Constitución Nacional- y la protección al trabajo y la estabilidad del empleado público consagradas - en el artículo 14.

Que en cuanto a los agravios extractados, cabe destacar que la jurisprudencia tiene reiteradamente resuelto no ser necesario seguir a las partes en todas sus argumentaciones y defensas. Los considerandos del decreto, cuya copia fotográfica corre a fs. 103/106 del expediente administrativo agregado por cuerda, son lo suficientemente prolijos en la consideración de los elementos de juicio allegados a las actuaciones como para ponerlo a cubierto de la tacha de que se le hace objeto. Hay que tener en - cuenta que se trata de un hecho reconocido por el propio inculpado, cuya existencia ni la prueba ni la defensa desvirtuó; es más, ni siquiera la negó el interesado. La apreciación sobre sus efectos y gravedad será tratada más adelante.

Que la prueba que ofreciera Cirasi a fs. 75 v. está sustancialmente cumplida con la copia de la contestación al oficio judicial obrante a fs. 82/83 (ambas fojas del expediente administrativo).

Que la exoneración de que fué objeto no se funda en la existencia de perjuicio material para el erario público. Si bien el decreto menciona el inciso b) del art. 38 del Estatuto, que habla de faltas graves que perjudiquen material o moralmente a la Administración, de los considerandos se infiere que hizo incapié exclusivamente en - el segundo término de la disyuntiva.

Que en lo que se refiere a las defensas sintetizadas en los puntos c) y d), conviene recordar que el Tribunal tiene resuelto que en la sustanciación de estos recursos carece de jurisdicción plena y su facultad se limita a controlar la legitimidad del proceder administrativo y - del acto en recurso. No puede revisar cuestiones de he - cho y rever la apreciación que de éstas haga el órgano - administrativo, salvo casos de manifiesta arbitrariedad capaz de tornar ilegítimo su comportamiento (Prol, sen - tencia del 22 de abril de 1960; Tripicchio, sentencia del 6 de junio del mismo año (*); Greco, sentencia del 14 del corriente, etc.).

Que no resultaría lógico calificar de manifiestamente arbitraria la apreciación que se hace en el decreto , ya que fuerza es admitir que los hechos relatados no resultan indiferentes para el prestigio moral del órgano administrativo. Esto sentado, el Tribunal carece de competencia para revisar el criterio allí expuesto y sustituir su propia apreciación a la efectuada por el Poder Ejecutivo. Tampoco puede prosperar la tacha de desproporcionada con que se califica la sanción, toda vez que está prevista a texto expreso en la antes recordada disposición legal.

Que el apartado XV) de la reglamentación del art. 41 del Estatuto no tiene el alcance que le atribuye el recurrente. Esta disposición establece que la confesión del

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1350.-

acusado hace prueba en su contra y es suficiente para dar por terminada la instrucción, de manera pues, que para tener por acreditado un hecho no se requiere corroboración de otros medios probatorios, como ocurre en sede penal. La segunda parte de esta norma sólo faculta a proseguir las actuaciones "a los efectos del mejor esclarecimiento", lo que no ocurre en este caso, pues los hechos quedaron perfectamente esclarecidos y no necesitan más sustanciación.

Que el no haberse mencionado expresamente en el decreto la ponderación de los antecedentes de Cirasi no tiene entidad suficiente para comprometer su validez. Por otra parte el art. 42 del Estatuto no lo prescribe de manera terminante, sino que lo menciona como uno de los elementos de juicio, entre los cuales figura también la gravedad de la falta. En este caso, a juicio del Poder Ejecutivo, la falta imputada fué lo suficientemente grave como para merecer la sanción de que se trata, a pesar de no tener antecedentes desfavorables su autor. Este criterio, al no presentarse como manifiestamente arbitrario, no puede ser revisado por el Tribunal.

Que en cuanto a las cuestiones constitucionales planteadas, sólo cabe expresar -toda vez que lo que se refiere a la defensa en juicio ya fué considerada- que la protección al trabajo y a la estabilidad del empleado público, incorporadas a la Constitución Nacional en su última reforma, como todas las garantías de este tipo, son susceptibles de reglamentación legal y es evidente que no pueden tener el alcance de impedir la separación de un agente público cuando éste se ha hecho acreedor a ello y la medida está autorizada por ley.

Por estas consideraciones, se desestima el presente recurso

El Dr. Gabrielli no suscribe la presente en razón de hallarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para

la Justicia Nacional).

Regístrese, notifíquese, agréguese a las actuaciones administrativas y devuélvanse.-

JUAN CARLOS BECCAR VARELA
HORACIO H. HEREDIA

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1961.-

Vistos los autos:"Casa de Moneda denuncia sustracciones de estampillas".

CONSIDERANDO:

1º) Que resulta de autos, contrariamente a lo sostenido por el apelante, que éste tuvo oportunidad de ejercer, y efectivamente ejerció, el derecho a su defensa, lo que excluye la procedencia del recurso extraordinario fundado en la garantía del art. 18 de la Constitución Nacional - (doctrina del fallo recaído, en fecha 25 de agosto de 1961, en la causa U.46,XIII, "Fernando Severino Uboldi c/Municipalidad de Santa Fe s/recurso contencioso administrativo" y los allí citados).

2º) Que, por lo que se refiere a la garantía del art. 14 nuevo de la Constitución Nacional, en cuanto hace a la estabilidad del empleado público, que también invoca el apelante, cabe señalar que esta Corte tiene resuelto que ese derecho, como todos los que consagra la Constitución, no es absoluto, debiendo ejercerse de conformidad a las leyes que lo reglamentan y en armonía con los demás derechos individuales y atribuciones estatales establecidos - en igual jerarquía por la misma Constitución (sentencia - recaída, en fecha 9 de agosto de 1961, en la causa V.193, XIII, "Alejandro J.Vázquez s/decreto-ley 6666/57 el que -

ha reglamentado para casos como el que aquí se juzga, el derecho a la estabilidad, consagrado por la Constitución Nacional.

3º)Que las alegaciones contenidas en el escrito de interposición del recurso extraordinario, concernientes a la arbitrariedad que se atribuye al decreto de cesantía Nº 3443/60 del Poder Ejecutivo Nacional son insuficientes para fundar el recurso extraordinario deducido. Igualmente corresponde desestimar los restantes agravios formulados, por estar referidos a cuestiones de hecho y prueba o a la extensión de la competencia del tribunal apelado -decididas sin arbitrariedad- que resultan ajenas a la instancia extraordinaria (Fallos: 247; 384 y 392; 249;75 y otros).

Por ello, y lo concordantemente dictaminado por el señor Procurador General, se declara improcedente el recurso extraordinario concedido a fs. 174. Notifíquese y devuélvanse.-

BENJAMIN VILLEGAS BASAVILBASO
ARISTOBULO D.ARAOZ de LAMADRID
RICARDO COLOMBRES
ESTEBAN IMAZ.

ACTO: EXPEDIENTE Nº 482.560/61.-

MATERIAS: JERARQUIZACION - SERVICIOS CALIFICADOS - DEDICACION FUNCIONAL - INCOMPATIBILIDADES

Buenos Aires, agosto 25 de 1961.-

Señor
Jefe del Departamento Contable,
DON ROBERTO PEDRO PASSAGGINO
S / D.-

Me dirijo a Vd. a efectos de informarle que con fecha 18 del corriente, ha hecho su presentación en la Aduana de Posadas el señor RAMON NICOLAS CASTILLA, que fuera designado interventor de la misma, oportunamente.-

Fdo. JUAN ALBERTO MARIOTTI
2do.Jefe Departamento de Personal
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

División Contabilidad, agosto 30 de 1961.-

Visto lo informado precedentemente vuelva al Departamento Personal, solicitándole quiera servirse informar si al interesado le corresponde percibir, debido al cambio de funciones, los beneficios que acuerda el decreto número 9.252/60 (+), en los conceptos "Servicios Calificados";

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 1216.-

"Dedicación Funcional", o en su defecto "Responsabilidad Jerárquica".-

Fdo. FLORIO J. BRUGNONE
Jefe División Contabilidad

Buenos Aires, noviembre 27 de 1961.-

Atento la situación planteada en estas actuaciones por la Dirección Nacional de Aduanas, pase a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación para su consideración, significándole al respecto que, si bien el caso en examen no se encuentra expresamente previsto en el régimen instituído por el decreto nº 9.252/60, correspondería seguir abonando al causante los beneficios allí establecidos, toda vez que la nueva asignación de funciones reviste carácter transitorio y no participa de las incompatibilidades previstas por el artículo 9º del aludido régimen de compensaciones. Cabe destacar, asimismo, que existiendo continuidad de servicios en la tarea que le ha sido impuesta al agente, no sería justo que ese hecho, ajeno a su voluntad, puediera ocasionarle un perjuicio económico.

Por otra parte, corresponde agregar en abono del criterio que se deja expuesto, la situación del agente en uso de licencia ordinaria o por enfermedad que, no obstante dicha circunstancia, sigue percibiendo las compensaciones referidas.

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES
Director General
de Contabilidad y Administración

//nos Aires, 11 de diciembre de 1961.-

Providencia nº 2470/61.-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Administración llevando a su conocimiento que el criterio sustentado por ese organismo a fs. 9 es compartido por esta Dirección General, pero siempre que en el desempeño de sus nuevas funciones el causante dé cumplimiento al requisito del mínimo de 45 horas de labor semanales que prevé el decreto nº 9.252/60 para el pago de los adicionales por "dedicación funcional" y "servicios calificados. En cuanto se refiere a la percepción de las compensaciones fijadas en el decreto nº 13.834/60 (1), a que se hace mención a fs. 8, debe entenderse que se trata de aquéllas que no resultan incompatibles con los adicionales ya mencionados.

Cabe señalar finalmente que si las nuevas funciones encomendadas al interesado tuvieran prevista una duración considerable, resultaría procedente asignarle a las mismas los beneficios de la "dedicación funcional" y "servicios calificados" por el término correspondiente, medida que se ajustaría en forma más adecuada al espíritu y la letra de las normas del decreto nº 9.252/60.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

---

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1274.-

ACTO: RESOLUCION Nº 12.014/61.-

MATERIAS: ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 38º, inc.b) CALIFICACIONES - CAMBIO DE CLASE O GRUPO

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1961.-

Visto la consulta formulada por la Dirección General de Contabilidad y Administración dependiente de esta Secretaría de Estado, sobre la aplicación del punto 38º inciso b) del Decreto Nº 9.530/58 - Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, e inciso I) de las normas complementarias del mismo, aprobadas por decreto nº 11.941/59 (1), y

CONSIDERANDO:

Que dicha norma establece que no serán calificados los agentes que a la fecha de calificación tengan menos de seis (6) meses de antigüedad en el cargo;

Que dicha antigüedad debe entenderse referida a la permanencia del agente en el empleo;

Que consecuente con ello, la norma aludida alcanza solamente al personal ingresante a la Administración Nacional con menos de seis (6) meses de antigüedad;

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 916.-

Que no cabe su extensión al personal que viene desempeñándose en la Administración Pública y que, teniendo una mayor antigüedad, ha cambiado de Clase o Grupo por imperio de disposiciones previstas en el Escalafón;

Que no es correcta otra interpretación, ya que de no seguirse el temperamento expuesto, los agentes que durante un período calificable cambian de Grupo dentro de una misma Clase, o promueven otra Clase, no podrían ser calificados durante ese período, lo que vulneraría lo establecido en el art. 12º del Estatuto (decreto-ley número 6.666/57) (*) cuando se refiere a que "el personal será calificado periódicamente o cuando menos una vez al año";

Que asimismo se hace necesario determinar el procedimiento a seguir para calificar al personal que dentro de un mismo período calificatorio pasa de una Clase a otra, en cada una de las cuales se evalúan conceptos distintos en las respectivas fojas de calificación;

Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas en el art. 13º del decreto nº 9.530/58,

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

1º) Aclárase que el punto 38º inciso b) del Escalafón aprobado por Decreto nº 9.530/58 y el inciso I) de las normas complementarias aprobadas por Decreto número 11.941/59 es de aplicación exclusivamente para el personal ingresante a la Administración Pública, con menos de seis (6) meses de antigüedad.

2º) La calificación de los agentes que dentro de un período calificatorio cambien de Clase, será efectuada

---

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

siguiendo el procedimiento fijado en el punto 40ª del Escalafón aprobado por decreto nº 9.530/58 y sus normas complementarias (decreto nº 11.941/59).-

3ª) Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

Fdo. JORGE WEHBE

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº. 1530.-

ACTO: EXPEDIENTE Nº 105.040/61.-

MATERIAS: VIATICOS - CONTRATADOS

Las erogaciones en concepto de viáticos que se liquiden al personal que revista en calidad de "contratado" en la Administración Pública Nacional, deben ser imputadas a la partida específica que para esa asignación se encuentra prevista en el respectivo presupuesto.-

(Providencia nº 2926/61 - Presupuesto, Incompatibilidades y Pasividades - D.A. T.C.N. Nº 497 - C. 175)

ACTO: RESOLUCION del T.C.N. Nº 2.558/61.-

MATERIAS: RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - LIBRAMIENTOS - CREDITOS - RESPONSABLES

Buenos Aires, 18 de octubre de 1961.-

Visto la necesidad de uniformar el procedimiento para que los diversos responsables se carguen en sus cuentas los importes que la Tesorería General de la Nación afecta en las operaciones de compras que se efectúan en el exterior del país mediante la apertura de créditos documentarios, como así también establecer la obligatoriedad de reflejar dicho cargo por parte de los organismos nacionales que hasta el presente no lo hacen, y

CONSIDERANDO:

Que nada obsta para que la Contaduría General de la Nación -Sección Contabilidad de Responsables- refleje en sus estados los asientos de débitos y créditos a que da origen el movimiento de fondos aplicado a la cancelación de las deudas así contraídas;

Que la circunstancia de que los organismos responsables emitan libramientos de pago a favor de los acreedores no constituye un impedimento para que se proceda a formular el cargo respectivo, en razón de que no obstan

//-

te la afectación definitiva de los fondos, las mercaderías adquiridas no han sido recibidas hasta el momento en su lugar de destino y que la documentación que hace al pago de las mismas se halla en poder del organismo comprador a diferencia de lo que sucede cuando tales libramientos de pago se aplican a la cancelación de deudas contraídas con acreedores radicados en el país;

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION
R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- En oportunidad en que la Tesorería General de la Nación proceda a la afectación de libramientos de pago por débitos de créditos documentarios, la Contaduría General de la Nación por intermedio de la Sección Responsables procederá a formular el cargo pertinente, que será a su vez reflejado en la contabilidad del organismo interesado bajo el rubro "Créditos Documentarios" al serle comunicado el respectivo débito por la mencionada Tesorería General de la Nación.

ARTICULO 2º.- El descargo de los débitos así formulados se ajustará al procedimiento establecido en el artículo 12 del reglamento de cuentas aprobado por resolución Nº 947/57 (1).

ARTICULO 3º.- Comuníquese a quienes corresponda y cumplido, archívese en la Dirección General de Delegaciones y Fiscalías.-

ANTONIO M.PEREZ ARANGO
José M.Fernández Fariña - Luis P.Picardo
Wifredo Dedeu-Eusebio E.Villar (Voc.acc.)
Juan Carlos Pastene (Secretario)

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 285.-

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº. 1532.-

ACTO: DECRETO Nº 11.064/61.-

MATERIAS: OBRAS PUBLICAS - CONTRATACIONES - PRESUPUESTO

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1961.-

Visto el decreto nº 8.495 del 22 de setiembre de 1961 (º), por el que se establecen diversas normas tendientes a centralizar en la Dirección Nacional de Arquitectura de la Secretaría de Estado de Obras Públicas, los estudios, proyectos, ejecución y contratación de las obras arquitectónicas que se realizan en el ámbito nacional, con la sola excepción de las obras militares, y

CONSIDERANDO:

Que por razones de carácter técnico-administrativas no ha sido posible concretar hasta ahora las medidas a que se refiere el artículo 2º del citado decreto, lo que habrá de originar en la práctica serios inconvenientes en la prosecución de los planes en marcha, si se tiene en cuenta que la Secretaría de Hacienda no podrá cursar favorablemente los libramientos, presupuestos o cualquier otro acto relacionado con los organismos del Estado que al 1º de noviembre de 1961 no hubiesen cumplido con las disposiciones del artículo 2º mencionado;

Que por tales motivos y a los efectos de asegurar la continuidad de los planes de obras y trabajos públicos //-

---

(º) Ver Digesto Administrativo Nº 1463.-

en ejecución al cierre del ejercicio 1961, resulta aconsejable autorizar a los Ministerios, Secretarías de Estado y organismos comprendidos en el decreto nº 8.495/61, a invertir con ese objeto hasta el 30% de los créditos asignados a cada jurisdicción en el ejercicio 1961;

Que, asimismo, es necesario autorizar los créditos mínimos para la continuidad de las obras o trabajos en ejecución de los ministerios militares que se encuentran exceptuados de las disposiciones del decreto nº 8495/61;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Hasta tanto se concreten las medidas dispuestas en el artículo 2º del decreto nº 8.495, del 22 de setiembre de 1961, y a los efectos de asegurar la continuidad de los planes de obras y trabajos públicos en ejecución, los MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO y demás ORGANISMOS NACIONALES a que se refiere el artículo 1º del citado decreto, podrán invertir en el conjunto de finalidades hasta un treinta por ciento (30%) de los créditos asignados en la respectiva jurisdicción para el ejercicio 1961, con destino a la prosecución de las realizaciones en ejecución o comprometidas al 31 de octubre de 1961.-

ARTICULO 2º.- Los MINISTERIOS MILITARES a los cuales no les comprenden las disposiciones del Decreto nº 8495/61, hasta tanto se apruebe la planificación analítica de los créditos para atender los planes de inversiones patrimoniales a su cargo, podrán invertir en el conjunto de finalidades hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) de los créditos asignados para el ejercicio 1961 con destino a la prosecución de las realizaciones iniciadas o comprometidas al 31 de octubre de 1961.-

ARTICULO 3º.- Las erogaciones que se autorizan por el presente decreto se contabilizarán como anticipo del plan integral de las realizaciones que se aprueben para el ejercicio 1962, debiendo los organismos ejecutores prever en la planificación del mismo las partidas correspondientes con afectación al respectivo crédito presupuestario.-

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de Obras y Servicios Públicos y firmado por los señores Secretarios de Hacienda y de Obras Públicas.-

ARTICULO 5º.- Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas y a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo -
Arturo Acevedo - Jorge Wehbe -
Manuel H. Acuña

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº 1533.-

ACTO: DECRETO Nº 11.495/61.-

MATERIAS: AUTOMOTORES - PRESUPUESTO - CUENTA ESPECIAL - COMPRA-VENTA

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1961.-

Visto las observaciones legales Nros. 38/61 y 39/61 formuladas por el Tribunal de Cuentas de la Nación a los decretos Nros. 9978/61 (*); 9977/61 y 9979/61, por los que se crea la cuenta especial "Automotores para Estados Provinciales"; se autoriza al señor Ministro del Interior a adquirir mediante contratación directa y/o concurso de precios, en el país o en el extranjero, unidades de transporte colectivo en la cantidad necesaria para satisfacer las necesidades de los gobiernos de provincias y se aprueba el contrato celebrado para la adquisición de 400 chasis Ford Thames equipados con carrocería Wayne y atento que subsisten las causas que determinaron el dictado de los decretos mencionados;

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DEL HONORABLE SENADO DE LA NACION, EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO, DECRETA:

ARTICULO 1º.- Insístese en el cumplimiento de los decretos Nros. 9977, 9978 y 9979 de fecha 31 de octubre de //-

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1509.-

1961.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva al Tribunal de Cuentas de la Nación a sus efectos.-

GUIDO - Alfredo R. Vítolo

ACTO: DECRETO Nº 11.713/61.-

MATERIAS: ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - LICENCIAS - CALIFICACIONES

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1961.-

Visto el Decreto nº 4.781/61 (1), y

CONSIDERANDO:

Que corresponde aclarar los alcances del mismo, con respecto a la situación de aquellos agentes que, con anterioridad a la fecha del dictado del citado cuerpo legal, han sufrido deducción en sus calificaciones anuales, por la utilización de licencias extraordinarias sin sueldo, circunstancia que les impide participar en los concursos de antecedentes y oposición, por no poder cumplir la exigencia del punto 12º - inciso c) del Decreto nº 9.530/58;

Que es evidente que el Decreto nº 4.781/61, ha tenido como principal finalidad la de evitar estos perjuicios a aquel personal que ha acrecentado su preparación o adquirido nuevos y valiosos conocimientos con la realización de estudios, investigaciones, trabajos científicos, técnicos o artísticos, los que redundarán en be-

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1410.-

neficio del propio Estado, que contaría con agentes con capacitación más destacada;

Por ello, y atento a lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda en uso de las atribuciones resultantes del decreto-ley nº 797/58 (") (Ley nº 14.467) (-),

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DEL H. SENADO DE LA NACION

EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Las disposiciones del decreto nº 4.781/61 serán aplicadas con efectos al 1º de noviembre de 1958 sobre las calificaciones de los agentes comprendidos en sus alcances.-

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Alfredo R. Vítolo
Jorge Wehbe

(") Ver Digesto Administrativo Nº 419.-
(-) Ver Digesto Administrativo Nº 609.-

ACTO: RESOLUCION Nº 165/61.-

MATERIAS: CANCELACION - DEUDAS - PAGOS - ORDENES DE DISPOSICION - LIBRAMIENTOS - EMPRESAS DEL ESTADO

Buenos Aires, 19 de julio de 1961.-

Visto el decreto Nº 4898 del 21 de junio de 1961 (*), por el que se autoriza la emisión de "Certificados de Cancelación de Deudas" hasta la suma de m$n. 2.000 millones, con el objeto de regularizar el pago de deudas provenientes de libramientos existentes en la Tesorería General de la Nación a favor de acreedores del Estado, como asimismo, de facturas o certificados de obras a pagar por parte de empresas u otras entidades oficiales, y atento la necesidad de establecer las normas de aplicación del citado decreto,

EL SECRETARIO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Apruébanse las adjuntas normas de aplicación del decreto Nº 4898, del 21 de junio de 1961, que

//-

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1482.-

forman parte integrante de la presente resolución.
ARTICULO 2º.- Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archívese.-

Fdo. JORGE WEHBE

CERTIFICADOS DE CANCELACION DE DEUDAS

Normas de aplicación del decreto Nº 4898/61

I - De la emisión.

1. Los CERTIFICADOS DE CANCELACION DE DEUDAS autorizados a emitir por decreto Nº 4898/61, serán extendidos únicamente por la Tesorería General de la Nación, en formularios numerados, especialmente habilitados al efecto, y llevarán las firmas del Contador General y Tesorero General de la Nación o sus reemplazantes legales.
2. El acreedor interesado deberá solicitar los certificados cubriendo el formulario cuyo modelo se agrega a las presentes normas y que le será suministrado por la Tesorería General de la Nación, donde tendrá que presentarlo.
3. Si la deuda correspondiere a empresas u otras entidades del Estado, la solicitud de ajustará al formulario especial para el caso de acuerdo al modelo que se agrega a las presentes normas y que le será suministrado por la empresa o entidad deudora donde deberá presentarlo llenándolo por duplicado.
4. La información necesaria para cubrir los formularios deberá ser facilitada por la Tesorería General

de la Nación o la entidad deudora según el caso.

5º Podrán extenderse tantos certificados como cada acreedor solicite, sin límites de cantidad, hasta cubrir el monto de los libramientos o créditos que el mismo tenga a su favor.

II -Del trámite.

a) Para deudas provenientes de libramientos existentes en la Tesorería General de la Nación, a favor de acreedor determinado:

6º Recibida la solicitud a que se refiere el punto 2, la Tesorería General de la Nación cumplirá idénticos requisitos a los vigentes en materia de pagos y procederá a extender el certificado que, juntamente con el libramiento respectivo, remitirá a la Contaduría General de la Nación para su firma.

7º Firmado por el Contador General de la Nación, el certificado y demás documentación será devuelto a la Tesorería General de la Nación para su firma por el Tesorero General, acto que asimismo revestirá carácter de autorización formal para su entrega al interesado.

8º Contra entrega del certificado, el interesado firmará el recibo que figura al pie de la solicitud el que constituirá suficiente carta de cobro y pago con respecto a la deuda hasta el importe a que asciende el certificado. En el caso de empresas u otras entidades del Estado, dicho recibo deberá firmarse por duplicado.

9º Una vez entregado el certificado al interesado, la solicitud debidamente firmada, se agregará al libramiento respectivo y se remitirá a la Contaduría General de la Nación a efecto de las operaciones contables que corresponda. Si con la entrega del certificado, el libramiento no resultare totalmen-

te cancelado, será devuelto a la Tesorería General de la Nación, con constancia de las operaciones realizadas y seguirá el trámite ordinario.

b) Para deudas provenientes de facturas o certificados de obra a pagar por empresas u otras entidades del Estado;

10. La extensión de certificados por deudas de empresas u otras entidades del Estado, únicamente será posible si en la Tesorería General de la Nación existieren libramientos con saldos a pagar a las mismas, libres de afectación.

11. En tales casos, el trámite de la solicitud prevista en el punto 3, se iniciará ante la entidad deudora cubriendo el formulario por duplicado.

12. Dicha solicitud, debidamente autorizada por la entidad deudora, será presentada por el acreedor en la Tesorería General de la Nación, dependencia que seguirá el trámite previsto en los puntos 6 en adelante.

13. Extendido el certificado y entregado al acreedor, la Tesorería General de la Nación devolverá el duplicado de la solicitud a la entidad deudora, lo que constituirá para ésta suficiente documentación de cancelación de deuda.

III -De la utilización del certificado.

14. Los titulares (directos o por endoso), de certificados de cancelación de deudas, podrán hacer uso de los mismos para cancelar sus deudas al 31 de diciembre de 1960, por los impuestos, derechos y tasas comprendidos en la nómina que se agrega como anexo a las presentes normas. Deberá utilizarse un certificado para cada impuesto, derecho o tasa que se adeude.

15. Los certificados serán aceptados por la Dirección

General Impositiva y la Dirección Nacional de Aduanas. Para el caso de impuestos comprendidos en el régimen de coparticipación federal, cuyo detalle se indica en la nómina anexa, sólo podrá cancelarse mediante utilización de certificados, hasta el 70 % de la deuda, siendo requisito indispensable el pago del 30 % restante en el mismo acto, en efectivo o cheque.

16. Los deudores que se hubieren acogido a regímenes de prórroga, podrán cancelar el saldo de sus deudas mediante el uso de certificados, en cuyo caso se ajustarán los intereses liquidados de acuerdo con el tiempo real de la prórroga.

VI - Del procedimiento administrativo.

17. La Dirección General Impositiva y la Dirección Nacional de Aduanas, previamente a aceptar los certificados, cumplirán idénticos trámites que los requeridos para los pagos ordinarios.

18. Aceptado el certificado, que constituirá suficiente documentación de ingreso, se incluirá su importe dentro del rubro que corresponda en los estados de recaudación, descargándolo como "recaudación de certificados". Los certificados se agregarán a dichos estados y se remitirán con nómina detallada a la Contaduría General de la Nación. La firma del duplicado de dichas nóminas por parte de las oficinas respectivas de la Contaduría General de la Nación, constituirá suficiente recibo o nota de crédito para la dependencia recaudadora.

19. Cuando el ingreso corresponda a impuestos comprendidos en el régimen de coparticipación federal, la Dirección General Impositiva depositará en la forma ordinaria, en el Banco de la Nación Argentina, la parte en efectivo o cheque que hubiere percibi-

do de conformidad con lo previsto en el punto 15. A su vez, comunicará diariamente al Banco de la Nación Argentina, los importes que hubiere recibido en certificados con el detalle necesario para que pueda procederse a la distribución respectiva.

20. La Contaduría General de la Nación registrará la cancelación de las deudas del Estado incluídas en el presente régimen en cuenta por separado en la oportunidad en que la Tesorería General de la Nación le remita la documentación conforme a lo previsto en el punto 9. Esta cuenta se irá descargando a medida que reciba certificados de conformidad con lo previsto en el punto 18.

NOMINA DE LOS GRAVAMENES ADEUDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1960, CUYO PAGO PODRA SER CANCELADO MEDIANTE LA ENTREGA DE "CERTIFICADOS DE CANCELACION DE DEUDAS"

a) - Recaudación a cargo de la Dirección General Impositiva:

- Impuestos internos

  Rubros: artículos de tocador, artículos suntuarios, cubiertas, hilados y tejidos de seda, fósforos, cervezas, azúcar, seguros y capitalización.

- Impuesto a los Réditos

- Impuesto a los Beneficios Extraordinarios

- Impuesto a las Ganancias Eventuales

- Impuesto a las Ventas
- Impuesto Sustitutivo del Gravamen a la Transmisión Gratuita de Bienes.

b) - Recaudación a cargo de la Dirección Nacional de Aduanas:

- Recargos y retenciones sobre importaciones y exportaciones - (Decretos Nros. 11.917/58 y 11.918/58).

CERTIFICADOS DE CANCELACION DE DEUDAS (Decreto 4898/61)

Instrucciones para los interesados

1.- Los CERTIFICADOS DE CANCELACION DE DEUDAS autorizados a emitir por decreto Nº 4898/61, serán extendidos únicamente por la Tesorería General de la Nación, en formularios numerados, especialmente habilitados al efecto y llevarán las firmas del Contador General y Tesorero General de la Nación o sus reemplazantes legales.

2.- El acreedor interesado deberá solicitar los certificados cubriendo el formulario cuyo modelo se agrega a las presentes instrucciones y que le será suministrado por la Tesorería General de la Nación, donde tendrá que presentarlo.

3.- Si la deuda correspondiere a empresas u otras entidades del Estado, la solicitud se ajustará al formulario especial para el caso de acuerdo al modelo que se agrega a las presentes instrucciones y que le será suministrado por la empresa o entidad deudora donde deberá presentarlo llenándolo por duplicado.

4.- La información necesaria para cubrir los formularios

deberá ser facilitada por la Tesorería General de la Nación o la entidad deudora según el caso.

5.- Podrán extenderse tantos certificados como cada acreedor solicite, sin límites de cantidad, hasta cubrir el monto de los libramientos o créditos que el mismo tenga a su favor.

6.- Contra entrega del certificado, el interesado firmará el recibo que figura al pie de la solicitud el que constituirá suficiente carta de cobro y pago con respecto a la deuda hasta el importe a que asciende el certificado. En el caso de empresas u otras entidades del Estado, dicho recibo deberá firmarse por duplicado.

7.- La extensión de certificados por deudas de empresas u otras entidades del Estado, únicamente será posible si en la Tesorería General de la Nación existieren libramientos con saldos a pagar a las mismas, libres de afectación.

8.- En tales casos, el trámite de la solicitud prevista en el punto 3, se iniciará ante la entidad deudora cubriendo el formulario por duplicado.

9.- Dicha solicitud, debidamente autorizada por la entidad deudora, será presentada por el acreedor en la Tesorería General de la Nación, dependencia que seguirá el trámite previsto en los puntos 6 en adelante.

10.- Los titulares (directos o por endoso), de certificados de cancelación de deudas, podrán hacer uso de los mismos para cancelar sus deudas al 31 de diciembre de 1960, por los impuestos, derechos y tasas comprendidos en la nómina que se agrega como anexo a las presentes instrucciones. Deberá utilizarse un certificado para cada impuesto, derecho o tasa que se adeude.

11.- Los certificados serán aceptados por la Dirección Ge

neral Impositiva y la Dirección Nacional de Aduanas. Para el caso de impuestos comprendidos en el régimen de coparticipación federal, cuyo detalle se indica en la nómina anexa, solo podrá cancelarse mediante utilización de certificados, hasta el 70 % de la deuda siendo requisito indispensable el pago del 30 % restante en el mismo acto, en efectivo o cheque.

12.- Los deudores que se hubieren acogido a regímenes de prórroga, podrán cancelar el saldo de sus deudas mediante el uso de certificados, en cuyo caso se ajustarán los intereses liquidados de acuerdo con el tiempo real de la prórroga.-

- - - - - - - - -

(Decreto Nº 4898/61)

a) Solicitud

Buenos Aires, ... de .....de 196...

A la empresa / entidad .....

El que suscribe .....
(nombre y apellido o razón social)

con domicilio en .....

Titular de la liquidación Nº .....de fecha ..... en concepto de .....

.....

solicita un / varios (1) certificado (s) de cancelación de deudas, declarando conocer los términos del decreto Nº 4898/61, por lo que al recibir el / los certificado (s) quedará cancelado su crédito hasta el importe de la presente solicitud.

.....
(Firma)

Por m$n. .....

b) Trámite

Autorízase a la Tesorería General de la Nación para afectar el libramiento Nº ..... con cargo a la Orden de Disposición Nº ..... en la suma de m$n. .....

.....

(m$n. .....)

.....
(Fecha)

.....
(Firma responsable de la empresa o entidad)

El libramiento arriba consignado, arroja a la fecha, un saldo de m$n. .....

.....

.....
(Fecha)

.....
(Firma responsable de Tesorería)

El libramiento está en situación de pago

.....
(Firma responsable de Contaduría)

ESTE FORMULARIO SE UTILIZARA UNICAMENTE PARA SOLICITAR CERTIFICADOS EN EMPRESAS U OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO

Los datos necesarios para cubrirlos, serán suministrados por la dependencia.

RECIBO OFICIAL

Buenos Aires, ... de .....de 196...

BI de la Tesorería General de la Nación $\frac{\text{el}}{\text{los}}$ certificado (s) de cancelación de deudas Nº ..... (1), por la suma total de m$n. .....

.....

.....por cancelación de la deuda consignada en mi precedente solicitud.

Por m$n. .....

.....
(Firma)

(Para el caso de varios certificados)

A llenar por el interesado m$n.	A llenar por la Tesorería Certificado Nº
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Recibí los certificados que se detallan en la planilla que antecede.

.....
(Firma)

Vuelva a ..... con constancia de que en la fecha indicada en el recibo precedente, se ha (n) entregado $\frac{\text{el}}{\text{los}}$ certificado (s) a que se refiere la presente solicitud.

.....
(Fecha)

.....
(Firma responsable de Tesorería General de la Nación)

(Decreto Nº 4898/61)

a) Solicitud

Buenos Aires, ... de .....de 196...

El que suscribe .....
(Nombre y apellido o razón social)

con domicilio en .....

titular del libramiento Nº ..... emitido por .....

..... con cargo a la orden de disposición Nº .....

Anexo ..... solicita $\frac{\text{un (1)}}{\text{varios}}$ certificado (s) de cancelación de deudas, declarando conocer los términos del decreto Nº 4898/61, por lo que al recibir $\frac{\text{el}}{\text{los}}$ certificado (s) quedará cancelado su crédito hasta el importe de la presente solicitud.

Por m$n. .....

.....
(Firma)

b) Trámite

El libramiento arriba consignado, arroja a la fecha, un saldo de m$n. .....

.....

.....
(Fecha)

.....
(Firma responsable de Tesorería)

El libramiento está en situación de pago

.....
(Firma del responsable de Contaduría)

R E C I B O O F I C I A L

Buenos Aires, ... de ..... de 196..

RECIBI de la Tesorería General de la Nación $\frac{\text{el (1)}}{\text{los}}$ certificado (s) de cancelación de deudas Nº .....(1), por la suma total de m$n. .....

.....por cancelación del libramiento consignado en mi precedente solicitud.

Por m$n. .....

.....
(Firma)

(1) Para el caso de varios certificados, el detalle figura al dorso.

ESTE FORMULARIO SE UTILIZA PARA LOS ... LA NACION. Los datos necesarios para cubrirlo, serán suministrados por dicha dependencia.

ACTO: RESOLUCION Nº 236/61.-

MATERIAS: CANCELACION - DEUDAS - PAGOS - ORDENES DE DISPOSICION - LIBRAMIENTOS

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1961.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que el artículo 3º del Decreto Nº 4.898 del 21 de junio de 1961 (') establece que los "Certificados de Cancelación de Deudas" serán aceptados en pago de deudas impositivas devengadas hasta el 31 de diciembre de 1960, correspondientes a los impuestos que recaude la Dirección General Impositiva de acuerdo con las Leyes Nros. 14.390, 14.060 y 14.788;

Que el alcance atribuible a la citada disposición no puede ser otro que el de considerar incluidas dentro de aquel concepto a las deudas por impuestos atribuibles a los ejercicios fiscales de 1960 y anteriores aun cuando el vencimiento de tales gravámenes se hubiere operado con posterioridad a esa fecha, por cuanto en razón del momento en que fuera dictado el Decreto Nº 4.898/61, una interpretación distinta hubiera llevado a la inoperancia del sistema instituido;

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1482.-

Que en razón de las consultas formuladas, es conveniente aclarar debidamente el alcance de aquella norma en el sentido indicado;

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

1°) Aclárase que las deudas por impuestos recaudados por la Dirección General Impositiva de acuerdo con las Leyes Nros. 14.390, 14.060 y 14.788, susceptibles de ser canceladas mediante los "Certificados de Cancelación de Deudas" cuya emisión fuera autorizada por el Decreto N° 4.898 del 21 de junio de 1961, son aquellas atribuibles a los ejercicios fiscales de 1960 y anteriores, aún cuando el vencimiento de tales gravámenes se hubiere operado con posterioridad al 31 de diciembre de 1960.-

2°) Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección General Impositiva a sus efectos.-

Fdo. JORGE WEHBE

ACTO: RESOLUCION N° 279/61.-

MATERIAS: CANCELACION - DEUDAS - PAGOS - ORDENES DE DISPOSICION - LIBRAMIENTOS

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1961.-

Visto que el artículo 3° del Decreto N° 4.898, del 21 de junio de 1961 (1), establece que los "Certificados de Cancelación de Deudas", serán aceptados por el gobierno nacional en pago de los derechos aduaneros y tasas portuarias así como también de los recargos y retenciones cambiarias a que se refieren los decretos números 11.917/58 y 11.918/58 adeudados hasta el 31 de diciembre de 1960, y

CONSIDERANDO:

Que en razón de las consultas formuladas y con el propósito de facilitar a los importadores el retiro de mercaderías de la Aduana, es necesario aclarar el alcance atribuible a la citada disposición,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- Aclárase que los "Certificados de Cancelación de Deudas", autorizados por el decreto n° 4.898, del //-

(1) Ver Digesto Administrativo N° 1482.-

21 de junio de 1961, serán aceptados en pago de todos los derechos aduaneros, tasas portuarias, recargos y retenciones cambiarias (Decretos Nros. 11.917/58 y 11.918/58, percibidos por la Dirección Nacional de Aduanas, cuyo producido ingresa a las Rentas Generales de la Nación, correspondientes a las mercaderías llegadas a puerto al 31 de diciembre de 1960. Asimismo, queda establecido que las deudas documentadas por los importadores ante la Dirección Nacional de Aduanas correspondientes a derechos, tasas, recargos y retenciones por mercaderías retiradas de depósito al 31 de diciembre de 1960, podrán ser canceladas mediante la entrega de los citados "Certificados de Cancelación de Deudas".

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional de Aduanas a sus efectos.

Fdo. JORGE WEHBE

ACTO: DECRETO Nº 11.799/61.-

MATERIAS: CANCELACION - DEUDAS - PAGOS - ORDENES DE DISPOSICION - LIBRAMIENTOS

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1961.-

Visto el Decreto nº 4.898, del 21 de junio de 1961(+), y su aclaratorio el nº 6.120, dictado el 20 de julio de 1961 (°), vinculados con la emisión de "Certificados de Cancelación de Deudas" destinados a regularizar el pago de deudas provenientes de libramientos existentes en la Tesorería General de la Nación a favor de acreedores del Estado, como también de facturas o certificados de obras a pagar por parte de empresas u otras entidades oficiales, y

CONSIDERANDO:

Que por el mecanismo establecido en el citado Decreto nº 4.898/61, y en las respectivas resoluciones reglamentarias dictadas al efecto, los "Certificados de Cancelación de Deudas", son aceptados por el Gobierno Nacional en pago de deudas por impuestos recaudados por la Dirección General Impositiva y la Dirección Nacional de Aduanas correspondientes a los ejercicios fiscales de 1960 y anteriores;

Que aún se mantienen impagos en la Tesorería General de la Nación y en las Tesorerías de las empresas del Es-

//..

(+) Ver Digesto Administrativo nº 1.482.-
(°) Ver Digesto Administrativo nº 1.483.-

tado y otros organismos oficiales, deudas exigibles por un monto de importancia cuya cancelación, mediante la entrega de "Certificados de Cancelación de Deudas", se realiza lentamente en la actualidad por tratarse de documentos que sólo pueden ser utilizados por sus tenedores para atender deudas con el Fisco de carácter impositivo, correspondientes a los ejercicios mencionados en el considerando precedente;

Que a los efectos de facilitar el mecanismo de cancelación recíproca de créditos y deudas implantado por el Decreto nº 4.898/61 resulta aconsejable extender los vencimientos de los gravámenes susceptibles de ser cubiertos con los "Certificados de Cancelación de Deudas", al 31 de diciembre 1961 para los impuestos que recauda la Dirección General Impositiva y al 31 de julio de 1961 para los derechos, tasas, recargos y retenciones, cuya percepción se encuentra a cargo de la Dirección Nacional de Aduanas;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DEL H.SENADO DE LA NACION, EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Los "Certificados de Cancelación de Deudas", cuya emisión ha sido dispuesta por Decreto Nº 4.898 de fecha 21 de junio de 1961, serán aceptadas por el Gobierno Nacional en pago de las deudas por impuestos cuya recaudación está a cargo de la Dirección General Impositiva de acuerdo con las leyes números 14.390, 14.060 y 14.788 con obligación de pago hasta el 31 de diciembre de 1961. También serán aceptados en pago de todos los derechos aduaneros, tasas portuarias, recargos y retenciones cambiarias (Decretos Nros. 11.917 y 11.918/58), percibidos por la Dirección Nacional de Aduanas, cuyo producido ingresa a las Rentas Generales de la Nación, correspondientes a las mercaderías llegadas a puerto hasta el 31 de julio de 1961.-

ARTICULO 2º.- Quedan en vigor todas las disposiciones del Decreto Nº 4.898/61, que no se opongan al presente.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y, previa intervención de la Contaduría General y del Tribunal de Cuentas, pase a la Tesorería General de la Nación a sus efectos.

GUIDO - Alfredo R. Vítolo -
Jorge Wehbe

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº 1539.-

ACTO: DECRETO Nº 11.800/61.-

MATERIAS: PRESUPUESTO - BANCOS - TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION - FONDOS

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1961.-

Visto el artículo 58 de la Ley Nº 16.432 de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 1962, por el que se dispone que los fondos de los organismos del Estado, de cualquier naturaleza que fueren, deberán ser depositados en los Bancos Oficiales y/o mixtos, y atento la necesidad de adoptar las medidas conducentes a la inmediata aplicación de la mencionada disposición legal, teniendo en cuenta la importancia que reviste desde el punto de vista de un mejor ordenamiento administrativo-financiero;

Por ello, y conforme con lo propuesto por la Secretaría de Hacienda,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DEL H.SENADO DE LA NACION,

EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- A partir del 1º de enero de 1962, todos los fondos de cualquier naturaleza de los organismos del Estado, de la jurisdicción de la Administración Central,

//-

entidades descentralizadas, empresas del Estado, obras sociales, organismos financiados con recurso de cuentas especiales y plan de trabajos públicos, deberán ser depositados en el Banco de la Nación Argentina.

El Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la Nación, fiscalizarán el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

ARTICULO 2°.- Las excepciones al artículo 1° serán resueltas únicamente mediante decreto del Poder Ejecutivo con la intervención de la Secretaría de Hacienda.

ARTICULO 3°.- Serán responsables del cumplimiento de las normas de este decreto, además de la autoridad principal de los organismos a que se refiere el artículo 1°, el o los funcionarios a cuyo cargo se encuentra el manejo de fondos de dichas jurisdicciones administrativas. El incumplimiento será considerado falta grave y determinará la instrucción del sumario correspondiente, a los efectos de adoptar la pertinente penalidad que podrá alcanzar hasta la exoneración.

ARTICULO 4°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas y a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

GUIDO - Alfredo R. Vítolo
Jorge Wehbe.-

ACTO: DECRETO Nº 11.704/61.-

MATERIAS: PROFESIONALES - BONIFICACIONES ESPECIALES - LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS (Hipódromos)

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1961.-

Visto que por Decreto Nº 7.920/61 (¹) se actualizaron las retribuciones del personal de la Secretaría de Estado de Hacienda, aprobándose en esa oportunidad una escala de bonificaciones mensuales especiales para el personal comprendido en el Escalafón dado por Decreto Nº 9.530/58 y en el Decreto Nº 13.375/60 (") y personal jornalizado de la Obra Social, con excepción de los Decretos Nros. 6.482 (+) y 6.483/61 (°), y

CONSIDERANDO:

Que al determinarse la retribución del personal profesional con desempeño de horario reducido (Clase C, Grupo IV y V) se fijó un importe superior al correspondiente a los Jefes de Servicios (Clase B, Grupos III,

//-

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1442.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1443.-
(+) Ver Digesto Administrativo Nº 1428.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1429.-

IX y X), omisión que debe repararse;

Que por el artículo 2° del Decreto N° 8.180/61 (-) se incluyó en el régimen establecido por el Decreto N° 7.920/61 al personal comprendido en el Escalafón aprobado por el Decreto N° 11.616/60 (=) (Cuenta Especial Explotación Hipódromos);

Que el referido acto de gobierno por el que se asignaron bonificaciones especiales mensuales al personal que se desempeña en los hipódromos dependientes de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, excluyó de sus beneficios al Jefe y 2° Jefe del Departamento de Hipódromos;

Que estos funcionarios están sometidos a un régimen de tareas que los obliga a prestar servicios durante 6 días a la semana, en contraposición con la prestación normal de 5 días establecida en el ámbito de la administración nacional;

Que en virtud de ello, al estructurarse las remuneraciones del escalafón aprobado por el Decreto N° 11.616/60, se determinaron sus haberes sobre la base del sueldo correspondiente a su ubicación presupuestaria con más los emolumentos que venían percibiendo en su condición de personal jornalizado de los hipódromos en la misma función;

Que habiendo sido mejoradas las retribuciones del personal jornalizado por reunión, por razones de evidente equidad procede modificar en la misma proporción los haberes establecidos para las categorías de referencia, pues de no hacerse así, el personal agrupado en las subsiguientes percibirá mayores retribuciones, quebrando de

---

(-) Ver Digesto Administrativo N° 1447.-

(=) Ver Digesto Administrativo N° 1269.-

esa forma el equilibrio obtenido al sancionarse el respectivo escalafón;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DEL H.SENADO DE LA NACION

EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Los profesionales que actúen con cargos jerárquicos (Clase B, Grupos III, IX y X) cuando se desempeñen en funciones inherentes a su especialidad recibirán en concepto de bonificación especial, instituida por Decreto Nº 7.920/61 el importe de m$n. 2.000.- mensuales en sustitución del que actualmente perciben.

ARTICULO 2º.- Determínase en m$n. 17.800 y m$n. 16.300 el sueldo básico correspondiente a las categorías I y II, grupo I, del personal mensualizado de la Explotación Hipódromos, cuyos haberes fueron establecidos por el Decreto Nº 11.616/60 y su modificatorio número 13.376/60.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación, a sus efectos.

GUIDO - Alfredo R. Vítolo
Jorge Wehbe

ACTO: DECRETO Nº 11.826/61.-

MATERIAS: ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 26) - SUBSIDIO FAMILIAR

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1961.-

Visto que en Expediente Nº 2.391/60 (Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública) se postula la liquidación del subsidio familiar que establece el Artículo 26 del Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, para los agentes a quienes se les haya confiado la guarda de menores o tenencia de los mismos, y

CONSIDERANDO:

Que tal situación no ha sido prevista en las normas complementarias del punto 26 del Escalafón aprobado por Decreto Nº 4.631/59 (1);

Que dado el aspecto legal del asunto fué requerida la opinión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Estado de Hacienda, quien se expidió favorablemente, haciendo mención que al respecto está vigente el Decreto Nº 22.451/48, cuyos términos con

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 738.-

vendría actualizar ajustándolo a las normas que hoy rigen la materia;

Que el Consejo Nacional de Protección de Menores, al informar que en los casos de entrega de un menor en "guarda familiar" a un hogar que lo recibe, o cuando la "tenencia" se dispone por resolución judicial, los tenedores o guardadores quedan obligados a prestarles asistencia, ayuda y sustento como si se tratara de hijos propios, está dando la tónica de la estrecha relación que existe entre este acto y el derecho a percibir el subsidio familiar por hijo estatuido en la norma comentada;

Que, consecuente con ello, y con el espíritu que evidentemente guió el dictado de aquella disposición que no es otra que la de aliviar las cargas de familia que debe atender el agente con su sueldo, se impone la necesidad de dictar una norma que salve la omisión existente;

Por ello, y de acuerdo con lo aconsejado por la Secretaría de Estado de Hacienda en uso de las facultades que le acuerda el Decreto-Ley Nº 797/58 (") (Ley Nº 14.467)(+),

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DEL H. SENADO DE LA NACION,

EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Considérase incluidos en la enumeración contenida en el apartado I de las normas complementarias del punto 26 del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional aprobadas por Decreto número 4.631/59, a los menores de 18 años de edad que hayan sido entregados en guarda a una familia, concedida por el Consejo Nacional de Protección de Menores o tenencia acorda-

(") Ver Digesto Administrativo Nº 419.-

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 609.-

da por Resolución Judicial.

ARTICULO 2º.- Derógase el Decreto Nº 22.451/48.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO - Alfredo R. Vítolo
Jorge Wehbe

ACTO: DECRETO N° 12.147/61.-

MATERIA: COEFICIENTES

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1961.-

Visto el Decreto N° 11.919 de fecha 4 de julio de 1956 (¹), por el que se fijó los coeficientes para las remesas que se realicen a favor del personal del Estado destacado en el exterior, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 942 del 2 de febrero de 1961(ᵛ), al establecerse el sistema de liquidación y pago de las remuneraciones a los agentes de la Administración Central del Estado en el exterior, se dejó establecido que la Comisión Mixta Asesora creada por el artículo 7° del citado texto legal, propondría al Poder Ejecutivo la asignación de los coeficientes a los diferentes países;

Que hasta tanto se expida la citada Comisión, procede -de acuerdo con las estimaciones actuales del costo de vida experimentado en Bolivia- reajustar el coeficiente vigente;

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Modifícase el artículo 1° del Decreto nº

(¹) Ver Digesto Administrativo n° 123.-
(ᵛ) Ver Digesto Administrativo n° 1.353.-

11.919 de fecha 4 de julio de 1956, dejándose establecido que a partir del 1° de noviembre de 1961, regirá para Bolivia el coeficiente básico de seis con cincuenta (6,50).
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado de Relaciones Exteriores y Culto, de Economía y de Defensa Nacional y firmado por los señores Secretarios de Estado de Hacienda, Comercio, Aeronáutica y Guerra.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Miguel A. Cárcano - Roberto E. Alemann - Justo P.Villar Jorge Wehbe - Pedro M.Garcia Oliver - Jorge Rojas - Rosendo M.Fraga.-

ACTO: LEY Nº 16.432 - DECRETO Nº 11.432/61.-

MATERIA: PRESUPUESTO

Sancionada: 30 de noviembre de 1961.-

.....

ARTICULO 4º.- Las partidas previstas en el anexo 32 - "Crédito de emergencia" de los presupuestos de gastos (sector 2 - Servicios) y de inversiones patrimoniales (sector 4 - Inversiones y sector 5 - Trabajos públicos), podrán destinarse a reajustar cualquiera de los créditos contenidos en los anexos de los respectivos presupuestos, sea cual fuere el régimen que regule la forma de incrementación de los mismos, siempre que dichos anexos no admitan reajustes internos o compensaciones que permitan resolver la insuficiencia producida. El "Crédito de emergencia" podrá también aplicarse a la creación de nuevos conceptos de inversión.

ARTICULO 5º.- El Poder Ejecutivo podrá realizar las operaciones de crédito que resulten necesarias para atender las erogaciones contenidas en el título I - Inversiones de la sección 2a. - Presupuesto de inversiones patrimoniales que se financian con recursos del crédito para las cuales no cuente con las autorizaciones pertinentes, pudiendo a tal efecto emitir valores de la deuda pública en cantidad suficiente.

//-

El Poder Ejecutivo podrá sustituir total o parcialmente esta financiación, destinando a ese efecto recursos de rentas generales en la medida que lo permita la recaudación.

ARTICULO 6°.- Las erogaciones autorizadas para el sector 5 - Trabajos públicos, se efectuarán con cargo a los respectivos créditos de reserva vigentes en virtud del decreto ley 470/55 y demás disposiciones complementarias. En los casos en que las inversiones autorizadas para aquel sector excedieran el saldo disponible de los créditos de reserva indicados, el Poder Ejecutivo ampliará dichos créditos hasta cubrir el importe de tales inversiones.

ARTICULO 7°.- Si se arbitrasen legalmente nuevos recursos especiales no provenientes del uso del crédito, afectados a financiar el plan de obras y trabajos públicos (sector 5) o si se obtuviera un mayor rendimiento de los actuales recursos especiales aplicados a dicho plan, el Poder Ejecutivo queda facultado para incrementar el importe de cualquiera de las finalidades de ese plan, o prescindir del uso del crédito público afectado a la financiación del mismo en la medida en que se operen aquellos nuevos ingresos o mayores rendimientos.

ARTICULO 8°.- El Poder Ejecutivo planificará analíticamente la distribución de los créditos para trabajos públicos autorizados por la presente ley, oportunidad en la cual deberá especificarse la respectiva jurisdicción territorial de las obras y trabajos y demás detalles propios de dicha distribución. Hasta tanto se apruebe el plan analítico mencionado, los organismos estatales a cargo de su ejecución podrán invertir, en el conjunto de finalidades, las sumas que el Poder Ejecutivo autorice en virtud de lo establecido por el artículo 11 de la ley de contabilidad sobre los créditos asignados para el ejercicio 1961, con destino a la prosecución de las realizaciones iniciadas al 31 de octubre de 1961, en forma de man-

tener la continuidad de las obras y trabajos, evitando entorpecimientos en su desarrollo.

En el plan analítico y sus reajustes podrán realizarse compensaciones entre las finalidades y jurisdicciones territoriales cuando se presenten necesidades o circunstancias que así lo exijan.

ARTICULO 9º.- Autorízase al Poder Ejecutivo para invertir hasta la suma de un mil millones de pesos ($ - 1.000.000.000), con destino al reequipamiento de las universidades nacionales, quedando facultado para realizar las operaciones financieras que estime convenientes.

Para el cumplimiento de los fines previstos precedentemente, el Poder Ejecutivo incorporará las partidas necesarias al presupuesto general de la administración nacional en los ejercicios fiscales pertinentes.

ARTICULO 10.- Refuérzase el presupuesto de la sección - 2a., título I - inversiones (sector 4), financiación 3, anexo 25 - Ministerio del Interior -, inciso 9, ítem 012 - Policía Federal - en la cantidad de treinta millones - de pesos ($ 30.000.000) y el de la sección 1a., título I -servicios (sector 2), financiación 1, anexo 25, inciso 7, ítem 012 - Policía Federal - en la cantidad de ciento ochenta y un millones de pesos ($ 181.000.000) con destino a la reestructuración de la planta básica del personal subalterno de seguridad y defensa y a la creación de diversos cargos de personal civil, en especial técnico - obrero.

ARTICULO 11.- Facúltase al Poder Ejecutivo para invertir hasta la suma de trece mil ciento sesenta y dos millones de pesos ($ 13.172.000.000) con destino a la ejecución - del plan de cuarenta aeropuertos y aeródromos civiles en el territorio del país, a cuyo efecto podrá realizar las operaciones financieras que considere necesarias.

Para el cumplimiento de los fines previstos precedentemente, autorízase al Poder Ejecutivo para incorporar -

las partidas pertinentes al presupuesto general de la Administración Nacional en los ejercicios fiscales correspondientes, a cuyo efecto la Secretaría de Estado de Aeronáutica convendrá anualmente con la Secretaría de Hacienda el plan a cumplirse dentro del ejercicio financiero en forma que pueda ser determinada y prevista con la debida antelación la suma de las erogaciones a cubrir dicho lapso.

ARTICULO 12.- Facúltase al Poder Ejecutivo para fijar el régimen de funcionamiento de los servicios de cuentas especiales y su sistema de administración, así como también para disponer la creación o cancelación de las mismas cuando ello resulte necesario, y para incorporarlas total o parcialmente a los presupuestos financiados con rentas generales o con el producido de la negociación de títulos, según corresponda, en los casos que representen necesidades normales y permanentes de la administración, incluyendo correlativamente la estimación de sus ingresos en el respectivo cálculo de recursos.

Autorízase asimismo al Poder Ejecutivo para que, con intervención de la Secretaría de Hacienda anticipe, con cargo de reintegro, las sumas indispensables para el funcionamiento de esos servicios, quedando derogado el artículo 138 de la ley 11.672, texto ordenado 1943 (complementaria permanente de presupuesto).

ARTICULO 13.- Los créditos incluidos en el presupuesto que se aprueba por la presente ley, correspondientes a los organismos cuya disolución, fusión o transferencia ya ha sido dispuesta o se disponga, tienen exclusivamente la finalidad de atender los gastos durante el proceso de liquidación, fusión o transferencia.

ARTICULO 14.- Facúltase al Poder Ejecutivo para efectuar dentro de los totales del presupuesto general de la administración nacional las reestructuraciones de créditos y de economías que sean necesarias frente a exigencias estrictamente impostergables de los servicios.

El Poder Ejecutivo podrá también introducir en los presupuestos de las cuentas especiales y de los organismos descentralizados, por vía de ajuste o reestructuración de créditos, las modificaciones, ampliaciones y reducciones que, de acuerdo con las necesidades de los servicios y dentro de las posibilidades financieras de los mismos, sean indispensables para su desenvolvimiento.

Igualmente queda autorizado el Poder Ejecutivo para incorporar a los respectivos presupuestos las partidas necesarias para proseguir o iniciar en el ejercicio 1962 el cumplimiento de las leyes dictadas en el curso de ejercicios anteriores.

ARTICULO 15.- El Poder Ejecutivo podrá delegar en los señores Ministros, Secretarios de Estado, autoridades de los organismos descentralizados, autárquicos o de las empresas del Estado, los que deberán ajustarse a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo con intervención de la Secretaría de Hacienda, la facultad que por el artículo precedente se le acuerda para reajustar en las respectivas jurisdicciones y dentro de los totales de los créditos autorizados, las partidas referentes a otros gastos, con excepción de aquellas que directa o indirectamente se traduzcan en beneficios al personal bajo cualquier modalidad o concepto. Quedan derogadas las disposiciones que confieren toda otra delegación de facultades a los organismos dependientes del Poder Ejecutivo, de cualquier naturaleza que fueren, para la propia aprobación y modificación de sus presupuestos o de regímenes escalafonarios y de asignaciones o compensaciones al personal, con excepción de las que expresamente se acuerdan por la presente ley y las autorizaciones del inciso b) del artículo 15 del decreto ley 13.126/57.

Similar facultad podrá delegar el Poder Ejecutivo en las autoridades mencionadas precedentemente, para que -

efectúen reajustes por compensación entre las partidas parciales integrantes de cada partida subprincipal del plan analítico de trabajos públicos.

ARTICULO 16.- Autorízase a los presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional para reajustar los créditos de sus presupuestos jurisdiccionales, debiendo comunicar al Poder Ejecutivo las modificaciones que dispusieren. Tales modificaciones sólo podrán realizarse dentro del respectivo total de créditos autorizados.

Las jurisdicciones mencionadas tendrán la libre disponibilidad de los créditos que le asigne la ley de presupuesto, sin más restricciones que las que la propia ley determine en forma expresa.

ARTICULO 17.- Autorízase al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Tribunal de Cuentas de la Nación, para reajustar los créditos de sus presupuestos jurisdiccionales debiendo comunicar al Poder Ejecutivo las modificaciones que dispusieren. Tales modificaciones sólo podrán realizarse dentro del respectivo total de créditos autorizados, sin originar aumentos automáticos para ejercicios futuros ni incrementos de las remuneraciones individuales, sobre asignaciones u otros conceptos análogos de gastos en personal o compensaciones o reintegros en favor del mismo.

Tendrán la libre disponibilidad de los créditos que le asigne la ley de presupuesto, sin más restricciones que las que la propia ley determine en forma expresa.

El Poder Ejecutivo, junto con el proyecto de presupuesto general de la administración nacional, enviará al Congreso los anteproyectos preparados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por el Tribunal de Cuentas de la Nación, acompañando los antecedentes respectivos cuando las estimaciones efectuadas por dichos organismos no coincidan con las del proyecto general.

ARTICULO 18.- En los casos en que imperiosas razones de servicio lo exijan, el Poder Ejecutivo podrá liberar total o parcialmente las economías de inversión establecidas por el artículo 1º, incorporando en igual medida al presupuesto general de la administración nacional, cuando ello sea imprescindible, con cargo a los recursos que corresponda, los créditos necesarios para satisfacer aquellas exigencias de los servicios.

ARTICULO 19.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que, con intervención de la Secretaría de Hacienda, deje en suspenso para el ejercicio 1962, en los casos y condiciones que sean necesarios, las normas a que se refiere la ley de contabilidad en su artículo 3º, apartado 2.

El Poder Ejecutivo con intervención de la citada Secretaría aplicará dichas normas en la medida de las posibilidades, a cuyo efecto dispondrá en su oportunidad las transferencias de créditos presupuestarios que correspondan.

ARTICULO 20.- Modifícase la ley de contabilidad en la siguiente forma:

a) Sustitúyense los artículos 10 y 11 por los siguientes:

Artículo 10.- Cuando la ejecución de una obra pública deba realizarse en un período mayor de un año, se podrá contratar o autorizar compromisos hasta el importe máximo fijado por las leyes de crédito, pero no se comprometerá o ejecutará obra alguna sin que figure en el plan anual y su inversión no sobrepasará el importe establecido en el mismo.

Artículo 11.- Hasta tanto se apruebe el plan anual a que se refiere el artículo 9º, seguirá en vigencia el anterior, al solo efecto de la continuidad de las obras y trabajos comprometidos o iniciados hasta el 31 de octubre del ejercicio terminado, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo podrá autorizar, con carácter provisio

nal, los créditos mínimos necesarios, los cuales se contabilizarán como anticipo del plan correspondiente.

El plan anual de obras y trabajos públicos y sus modificaciones serán comunicados al Congreso inmediatamente de ser decretados.

b) Agrégase al artículo 142 el siguiente párrafo:

Son imprescriptibles las obligaciones entre organismos del Estado nacional, centralizados o descentralizados, incluidas las entidades autárquicas, empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

ARTICULO 21.- El Banco Central de la República Argentina continuará con las funciones de vigilancia, comprobación e investigación autorizadas por el artículo 40 del decreto ley 13.126/57, como organismo de aplicación de las normas cambiarias mencionadas en el artículo 2º, inciso c) del citado decreto ley y sus disposiciones complementarias.

Una vez terminado el sumario de prevención, lo remitirá a la justicia nacional de primera instancia en lo penal y económico a los fines establecidos en el párrafo siguiente.

La justicia nacional en lo penal económico, entenderá en el aspecto represivo establecido por la ley 12.160, artículo 17, segunda parte; artículo 2º, inciso c), y artículo 40 del decreto ley 13.126/57 y las disposiciones complementarias.

Serán de aplicación las normas de procedimientos que corresponden a dicho fuero.

ARTICULO 22.- Mantendrán su actual radicación las causas:

a) En las cuales el infractor pagó total o parcialmente las multas o la consintió expresa o implícitamente, inclusо mediante pedido de facilidades de pago. En estos casos, de no cumplir el infractor el pago íntegro

de la multa, el Banco Central de la República Argentina podrá gestionar su cobro por la vía de apremio establecida en el título XXV de la ley 50, sirviendo de suficiente título, a tal efecto, la boleta de deuda expedida por el citado banco, no pudiendo oponerse otras excepciones que las de inhabilidad extrínseca del título, pago, prescripción y espera;

b) Los juicios ordinarios por repetición de multa.

ARTICULO 23.- Las causas actualmente radicadas en el Banco Central de la República Argentina, y las que estén en ejecución por vía de apremio, serán remitidas a la justicia nacional de primera instancia en lo penal económico, para el juzgamiento originario de las infracciones respectivas.

ARTICULO 24.- Las sanciones impuestas por el Banco Central de la República Argentina, con anterioridad a la vigencia de esta ley, no podrán ser modificadas en perjuicio del infractor.

ARTICULO 25.- Lo dispuesto por el artículo 23 no modifica el efecto interruptivo de la prescripción que las normas legales vigentes determinan con relación a los hechos, actos, procedimientos o resoluciones en las diversas etapas de la causa.

ARTICULO 26.- Sustitúyese el texto del artículo 39 del decreto ley 13.126/57 por el que se indica a continuación:

Artículo 39.- La fiscalización de las operaciones del banco estará a cargo de un síndico designado por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Honorable Senado de la Nación. El síndico durará dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegido; tendrá acceso a todos los documentos operativos, libros y demás comprobantes de las operaciones del banco y acompañará con su firma los balances de fin de ejercicio y los estados generales de ganancias y pérdidas. Informará

al directorio del banco, y al Poder Ejecutivo Nacional por conducto de la Secretaría de Hacienda, sobre la gestión operativa de la institución. El síndico percibirá por sus tareas la remuneración que le fije el directorio del banco.

Las disposiciones de la ley de contabilidad sólo serán de aplicación al banco en cuanto a la fiscalización de su presupuesto administrativo y en la correspondiente rendición de cuentas documentadas que, mensualmente, deberá presentar al Tribunal de Cuentas de la Nación.

ARTICULO 27.- Facúltase al Poder Ejecutivo para crear en jurisdicción del Ministerio de Economía la "Sindicatura de la Administración Pública", y por cuyo conducto designará con carácter de síndico en cada empresa del Estado a un funcionario permanente de ese departamento, cuyas obligaciones y derecho serán los establecidos en el artículo 3º de la ley 13.653 (t.o.) modificada por la ley Nº 15.023 (').

ARTICULO 28.- El Poder Ejecutivo queda autorizado para ampliar el crédito abierto por el decreto ley 5.949/58, en la medida necesaria para cubrir la diferencia de cambio emergente de la atención de los servicios financieros, establecidos en libras esterlinas, correspondientes a la adquisición por parte del gobierno nacional de los bienes de la Compañía Primitiva de Gas de Buenos Aires Ltda. y Compañía de Gas de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 29.- Los importes recaudados y los que se recauden en el futuro en concepto de aporte de entidades del Estado al Tesoro Nacional provenientes de utilidades obtenidas en su gestión, incluidos los emergentes de lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 14.158, se ingresarán a rentas generales.

ARTICULO 30.- Facúltase al Consejo Nacional de Educación

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1039.-

Técnica, al Consejo Nacional de Protección de Menores y al Instituto Nacional de Salud Mental para que procedan a la venta directa de los excedentes de producción de los talleres de aprendizaje y capacitación, así como de las secciones de agronomía dependientes de aquéllos. Las sumas provenientes de las ventas, previa deducción de los importes de producción, serán destinadas por terceras partes a los siguientes fines:

a) Conservación, reparación, equipamiento y renovación de los talleres de aprendizaje y capacitación, y secciones de agronomía;
b) Incremento de la cuenta recaudaciones propias de las respectivas instituciones; y
c) Asignación de peculios a favor de los educandos y/o internados.

El Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto por el presente artículo.

ARTICULO 31.- Suprímese el inciso f) del artículo 6º del decreto ley 1.224/58, modificado por el decreto ley Nº 6.066/58. La recaudación que se efectúa conforme a la ley 11.723 ingresará a rentas generales.

ARTICULO 32.- El Poder Ejecutivo, por conducto del ministerio o secretaría respectiva y con intervención de la Secretaría de Hacienda, dará cuenta al Congreso Nacional de las modificaciones que introduzca en el presupuesto general de la administración nacional aprobado por esta ley, en uso de las atribuciones conferidas por la misma, inmediatamente si se encontrara en funciones o en las primeras sesiones que realice cuando las medidas hubiesen sido adoptadas durante su receso.

ARTICULO 33.- Fíjase en la suma de un mil doscientos millones de pesos ($ 1.200.000.000) el monto que el Poder Ejecutivo podrá anticipar a las provincias, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y al territorio nacio -

nal de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con fondos del Tesoro Nacional, durante el período 1º de noviembre de 1961 al 31 de octubre de 1962, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1º de la ley 14.070, para atender los respectivos planes de obras y trabajos públicos.

Fíjase una cantidad adicional de cien millones de pesos ($ 100.000.000) a la provincia de La Pampa, además de lo que le correspondiere por el párrafo anterior, para el estudio y construcción de un dique derivador en Punto Unido, colonia Veinticinco de Mayo, sobre el río Colorado y obras de riego sobre el río Colorado.

La distribución del citado anticipo, por jurisdicción territorial, se realizará por conducto de la Secretaría de Hacienda dándose prioridad racional a las provincias de menor desarrollo relativo y previo asesoramiento del Consejo Federal de Inversiones.

Autorízase al Poder Ejecutivo para que, en la medida que las posibilidades del Tesoro Nacional lo permitan, contribuya a la financiación de los déficit presupuestarios de las provincias y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, entregándoles fondos con cargo de reintegro destinados a la financiación de los respectivos presupuestos correspondientes al ejericio 1962, como así mismo, para la cancelación de la deuda flotante debidamente certificada al 31 de diciembre de 1961.

El Poder Ejecutivo queda facultado para hacer uso del crédito público en la medida necesaria para atender esos anticipos y entrega de fondos.

ARTICULO 34.- Sustitúyese el texto del artículo 33 de la ley 11.672 (complementaria permanente del presupuesto), edición 1943, modificado por el decreto ley 5.169/58 (º) y la ley 14.794 (ºº), por el siguiente:

(º) Ver Digesto Administrativo Nº 503.-

(ºº) Ver Digesto Administrativo Nº 688.-

Artículo 33.- Para la atención de los gastos que por disposición legal deben cubrirse con el producto de la negociación de empréstitos, el Poder Ejecutivo emitirá anualmente, con mención de las leyes que faculten su emisión, la cantidad necesaria de títulos de deuda pública interna o externa, que serán reembolsados, según se haya convenido con los acreedores o agentes colocadores o pagadores, de acuerdo con las condiciones usuales del mercado financiero, con o sin prima, mediante pagos totales a vencimiento o mediante pagos sucesivos iguales o desiguales o mediante amortizaciones acumulativas o no, o mediante rescates antes del vencimiento; pudiendo realizar asimismo las operaciones de financiación transitoria que resulte necesaria, inclusive con el Banco Central de la República Argentina y demás instituciones bancarias oficiales, mediante la utilización por parte de éstas de fondos que obtengan de préstamos o colocaciones provenientes del exterior. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, facúltase a dichas instituciones bancarias para celebrar con el gobierno nacional los convenios respectivos, en forma independiente y al margen de las otras operaciones de crédito que puedan realizar con dicho gobierno, de acuerdo con las autorizaciones y limitaciones contenidas en las cartas orgánicas correspondientes.

ARTICULO 35.- Fíjase en la suma de doce mil millones de pesos ($ 12.000.000.000), para el ejercicio 1962, el límite máximo de la autorización para hacer uso, transitoriamente, del crédito a corto plazo a que se refieren las disposiciones vigentes sobre la materia, independientemente de las operaciones también transitorias autorizadas por el artículo 33 de la ley 11.672, modificado por el artículo 11 de la ley 14.794 y la presente.

ARTICULO 36.- El presidente de la Nación podrá delegar -

en los señores ministros o secretarios de Estado de la respectiva jurisdicción la resolución final y la firma de los siguientes asuntos: autorización a retirados, jubilados y pensionistas para residir en el extranjero; rectificación de nombramientos por cambio de estado civil o por modificación de nombres fundada en acto auténtico del que surja la identidad de personas; traslado y permuta de horas de cátedras; otorgamiento de pensiones con arreglo a las normas vigentes para el personal de las fuerzas armadas y de seguridad y defensa; modificaciones de haberes de pasividad fundadas en error u omisión del cómputo o en el cambio de situación de los beneficiarios y autorización para exportar el excedente de la producción nacional de metales o aleaciones, sus aleaciones y combinaciones, conforme lo determina el artículo 29 de la ley 12.709.

El acto mediante el cual el funcionario delegado ejecute la facultad delegada deberá ajustarse a las reglamentaciones en vigor, y contra el mismo podrá recurrirse ante el Poder Ejecutivo por las causas y en las condiciones establecidas en las normas vigentes.

ARTICULO 37.- El Poder Ejecutivo convendrá con los gobiernos de las provincias y municipalidades la transferencia de los servicios que la Nación presta en las respectivas jurisdicciones y cuya descentralización resulte conveniente, así como también, y con el carácter de contribución, las sumas asignadas en los presupuestos correspondientes para el sostenimiento de dichos servicios en el momento de su transferencia. Tales contribuciones acrecentarán oportunamente las cuotas de participación de impuestos a que se refieren las leyes 14.060, 14.390 y 14.788.

Cuando la transferencia se opere con arreglo a las prescripciones del decreto ley 7.977/56 (artículo 11) las obligaciones de la Nación sólo quedarán concluídas al otorgarse los fondos previstos en los convenios.

ARTICULO 38.- Déjase establecido que la transferencia de servicios a que se refiere el artículo anterior comprende también los bienes muebles e inmuebles afectados a los mismos, que serán cedidos sin cargo, juntamente con aquéllos. En caso de tratarse de obras en construcción, el Poder Ejecutivo podrá convenir igualmente el traspaso de los trabajos y de las partidas presupuestarias con que ellos se atienden. Declárense ratificados los convenios que el Poder Ejecutivo haya celebrado en las condiciones indicadas en el presente artículo.

ARTICULO 39.- En caso de que la transferencia a que se refiere el artículo 37 comprenda servicios de obras sanitarias regidos por la ley 13.577 y sus complementarias, autorízase al Poder Ejecutivo para declarar canceladas las deudas de los gobiernos de las provincias o municipalidades, correspondientes a las obras y explotaciones que toman a su cargo.

ARTICULO 40.- Exceptúase a las cajas nacionales de previsión comprendidas en las leyes 14.397 y 14.399, y en el decreto ley 11.911/56, del cumplimiento del artículo 11, inciso b), de la ley 14.236.

El Poder Ejecutivo podrá efectuar reajustes de los presupuestos respectivos hasta el monto que sea necesario para la continuidad de los pertinentes servicios.

ARTICULO 41.- El Poder Ejecutivo, con intervención de la Secretaría de Hacienda, determinará los créditos de los "servicios auxiliares" de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, que se financian con sus propios recursos y los provenientes de las contribuciones de los servicios de explotación y obras incluidas en los presupuestos de la citada repartición que se aprueban por la presente ley.

ARTICULO 42.- Los organismos civiles del Estado integrantes de la administración centralizada o descentralizada que jurisdiccionalmente dependen del Poder Ejecutivo de-

ben ajustar su estructura presupuestaria a la estructura funcional aprobada por el Poder Ejecutivo con intervención de la Secretaría de Hacienda y previo asesoramiento y conformidad del Instituto Superior de Administración Pública (ISAP).

El Poder Ejecutivo no autorizará ningún reajuste presupuestario de esos organismos modificatorios de su planta de personal, excepto para la supresión de vacantes, hasta tanto se haya obtenido la aprobación indicada.

ARTICULO 43.- El Ministerio de Educación y Justicia y sus organismos a cuyo cargo estén los diversos niveles de la enseñanza someterán a la aprobación del Poder Ejecutivo dentro del presente ejercicio, un plan general de gastos de enseñanza, que contemplando las necesidades de la Nación, tanto generales como zonales, así como de la población estudiantil, defina la orientación a seguir en materia de creación, organización y desarrollo de los establecimientos educativos, con excepción de la enseñanza universitaria y de las escuelas y colegios que fueren transferidos a las provincias.

Las creaciones de cursos o establecimientos en las distintas ramas y jurisdicciones de la enseñanza pública, con las excepciones indicadas en el párrafo anterior, deberán sujetarse a ese plan general. El Ministerio de Educación y Justicia determinará en cada caso si las creaciones propuestas se ajustan al plan aprobado por el Poder Ejecutivo, sin cuyo requisito los organismos de contralor financiero no darán curso a ningún proyecto de inversión originado por tales creaciones. La adscripción de establecimientos de enseñanza privada (ley 13.047) será dispuesta por el Poder Ejecutivo y a propuesta del Ministerio de Educación y Justicia con intervención de la Secretaría de Hacienda.

ARTICULO 44.- Las universidades nacionales dictarán sus propios estatutos y el escalafón para el personal no docente.

ben ajustar su estructura presupuestaria a la estructura funcional aprobada por el Poder Ejecutivo con intervención de la Secretaría de Hacienda y previo asesoramiento y conformidad del Instituto Superior de Administración Pública (ISAP).

El Poder Ejecutivo no autorizará ningún reajuste presupuestario de esos organismos modificatorios de su planta de personal, excepto para la supresión de vacantes, hasta tanto se haya obtenido la aprobación indicada.

ARTICULO 43.- El Ministerio de Educación y Justicia y sus organismos a cuyo cargo estén los diversos niveles de la enseñanza someterán a la aprobación del Poder Ejecutivo dentro del presente ejercicio, un plan general de gastos de enseñanza, que contemplando las necesidades de la Nación, tanto generales como zonales, así como de la población estudiantil, defina la orientación a seguir en materia de creación, organización y desarrollo de los establecimientos educativos, con excepción de la enseñanza universitaria y de las escuelas y colegios que fueren transferidos a las provincias.

Las creaciones de cursos o establecimientos en las distintas ramas y jurisdicciones de la enseñanza pública, con las excepciones indicadas en el párrafo anterior, deberán sujetarse a ese plan general. El Ministerio de Educación y Justicia determinará en cada caso si las creaciones propuestas se ajustan al plan aprobado por el Poder Ejecutivo, sin cuyo requisito los organismos de contralor financiero no darán curso a ningún proyecto de inversión originado por tales creaciones. La adscripción de establecimientos de enseñanza privada (ley 13.047) será dispuesta por el Poder Ejecutivo y a propuesta del Ministerio de Educación y Justicia con intervención de la Secretaría de Hacienda.

ARTICULO 44.- Las universidades nacionales dictarán sus propios estatutos y el escalafón para el personal no docente.

El escalafón de las universidades será único, con una gama de posiciones que permita el encasillamiento del personal de acuerdo con las particularidades de cada una.

A este efecto se utilizarán, además de las cantidades que figuran en cada presupuesto universitario, la parte proporcional que les corresponda del crédito de emergencia del anexo 32, ítem 526, inciso 7, incrementados en la cantidad de ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000).

El personal no docente de la Fundación Miguel Lillo tendrá el mismo escalafón y estatuto que el personal no docente de la Universidad Nacional de Tucumán.

ARTICULO 45.- Asígnase al Ministerio de Educación y Justicia un crédito de cinco millones de pesos ($ 5.000.000), que destinará a reforzar el presupuesto de "Otros gastos", comprendidos viáticos por traslado y movilidad, que ocasionen las representaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional en el interior de la República.

ARTICULO 46.- Inclúyense en el régimen de la ley 3.305 las enajenaciones a título oneroso que impongan las necesidades logísticas de cada institución y autorízase a las comisiones administrativas creadas por esa ley, a facultar a otras autoridades de las respectivas jurisdicciones para efectuar las adquisiciones o ventas a que se refiere la misma; todo ello en la forma que establezca el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 47.- Las disposiciones que dicte el Poder Ejecutivo Nacional para regular la actuación de los agentes del Estado y el uso de los bienes, serán de aplicación en todos los organismos de su jurisdicción, cualquiera sea su naturaleza jurídica, salvo las excepciones establecidas en la presente ley o ya acordadas por el Poder Ejecutivo o que éste disponga en el futuro atendiendo a las necesidades de los servicios.

ARTICULO 48.- Cuando convenga facilitar la movilización

de capitales en el mercado interior o exterior, con el fin de establecer o ampliar servicios públicos o actividades que directa o indirectamente estén vinculadas a los servicios de ese carácter, mediante obras o explotaciones legalmente autorizadas, o realizar inversiones fundamentales para el desarrollo económico del país, declaradas de interés nacional por ley o por el Poder Ejecutivo, quedando éste facultado para contratar préstamos con organismos internacionales económico-financieros a los que pertenezca como miembro de la República Argentina, o con agencias o entidades de otros gobiernos, siempre que se ajusten a términos y condiciones usuales, y a las estipulaciones de los respectivos convenios básicos y reglamentaciones sobre préstamos. Queda el Poder Ejecutivo, asimismo, facultado para prestar la garantía de la Nación, con carácter accesorio o principal, a obligaciones que con las finalidades y bajo los requisitos mencionados asuman entidades públicas o privadas.

ARTICULO 49.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que cuando razones de racionalización administrativa lo aconsejen o lo exija la ineludible necesidad de realizar economías en los gastos públicos, suprima dependencias, servicios y funciones, pudiendo igualmente redistribuir o transferir estos últimos entre los distintos organismos del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, debiendo determinarse -cuando así correspondiere- los organismos que se harán cargo de las funciones respectivas. Facúltasele además para que reduzca empleos en la administración pública nacional (Administración Central, servicios de Cuentas Especiales, organismos descentralizados, empresas del Estado, plan de obras y trabajos públicos, y obras sociales), en la medida que estime compatible con el funcionamiento adecuado de los servicios.

El personal del cual se prescinda como consecuencia de las medidas indicadas precedentemente, tendrá derecho a percibir por ese motivo lo siguiente:

a) Agentes comprendidos en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, o excluidos del mismo y que no se encuentren amparados por ningún régimen indemnizatorio - Indemnización equivalente al cuarenta por ciento (40 %) de su retribución mensual por cada año de servicio y hasta un máximo de veinte (20) años;

b) Agentes excluidos del estatuto mencionado en el apartado a) y que estén comprendidos en otro régimen indemnizatorio - Indemnización que corresponda por despido sin causa según el régimen respectivo.

La indemnización será calculada de acuerdo con la antigüedad computable de conformidad con las normas en vigor, no pudiendo ser inferior a tres (3) meses de retribución. La liquidación de los importes que le corresponda se realizará en cuotas mensuales no inferiores al setenta por ciento (70 %) de su retribución, debiendo suspenderse automáticamente el pago de esa indemnización en caso de que el agente reingrese a la administración pública. Esta norma es de aplicación asimismo para el personal que reingrese contratado o mediante cualquier forma de retribución.

La indemnización para los agentes que tengan otorgado un beneficio jubilatorio o prestación similar, o que se encuentren en condiciones de obtenerlos, se limitará a un máximo de tres (3) meses de retribución, de acuerdo con las normas que dicte el Poder Ejecutivo.

El importe correspondiente a las vacantes producidas por los motivos indicados se destinará al pago de las indemnizaciones a que se ha hecho referencia, a cuyo efecto las disponibilidades crediticias provenientes de aquéllas podrán afectarse provisionalmente a dicho pago.

El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones del presente artículo.

ARTICULO 5º.- Facúltase al Poder Ejecutivo para centralizar, en la medida que lo estime conveniente y en los orga

nismos adecuados, la venta de los inmuebles a que se refiere la ley 13.539 (=) y las leyes especiales dictadas hasta la fecha, por las cuales se autorizó expresamente a distintos organismos de la administración centralizada, entidades descentralizadas o autárquicas para realizar enajenaciones de inmuebles no necesarios para sus servicios específicos.

A tal efecto se lo faculta para fijar las bases de las ventas y para delegar en organismos centralizados o descentralizados, inclusive los bancos oficiales, los procedimientos de las operaciones de venta y para celebrar los actos jurídicos necesarios al perfeccionamiento de las transferencias.

Las ventas podrán hacerse mediante remate público o concurso de precios de acuerdo con la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. Podrán venderse directamente bienes inmuebles solicitados por gobiernos de provincias o municipalidades para destinarlos a fines de utilidad pública.

Asimismo podrán venderse directamente esos bienes a entidades oficiales o personas de derecho privado que persigan la finalidad de construir viviendas. En los casos de personas privadas, previa aprobación por el organismo centralizador de las ventas, de los planes de construcción y financiación.

Autorízase también la venta directa a sus ocupantes de los solares en los cuales aquéllos, con autorización oficial, hayan levantado viviendas, siempre que las construcciones realizadas se ajusten a las normas establecidas por la autoridad municipal del lugar.

En el caso de ventas directas, el precio se fijará con el asesoramiento indistinto del Tribunal de Tasaciones, del Banco Hipotecario Nacional, del Banco de la Nación Argentina o del organismo provincial especializado en materia de tasaciones inmobiliarias.

(=) Ver Digesto Administrativo Nº 269.-

Autorízase asimismo al Poder Ejecutivo para centralizar la venta de bienes muebles en desuso o en condiciones de rezago e aun de aquellos que sin reunir ese carácter convenga renovar para mejorar la eficiencia de los servicios, y para entregar tales bienes como parte de precio de las adquisicienes que efectúe. En caso de que la venta o entrega en pago de precio no resultara de un remate o licitación pública o privada, el valor de los bienes vendidos o entregados será fijado por peritos en la forma que establezca la reglamentación.

ARTICULO 51.- Autorízase al Poder Ejecutivo para contratar la construcción de establecimientos educacionales,culturales y/o administrativos destinados al Ministerio de Educación y Justicia y organismos de su jurisdicción, inclusive universidades, mediante la afectación del producido de la venta de los inmuebles actualmente ocupados o afectados a esas finalidades, y también para convenir permutas con el mismo objeto o bien para recurrir al uso del crédito en instituciones oficiales o privadas, constituyendo un fondo de renovación de establecimientos que funcionará con el sistema de cuenta especial. El Poder Ejecutivo podrá ingresar a ese fondo el producido de la venta de los bienes fiscales desafectados o que se desafecten en virtud de lo establecido en el presente artículo. Para realizar las contrataciones respectivas, el Poder Ejecutivo podrá prescindir de las normas del decreto ley 23.354/56 y de la ley 13.064, convenir la preparación de los proyectos y contratar la dirección de las obras,aceptando cualquier modalidad que permita el rápido cumplimiento de la finalidad perseguida.

Concretada, en función de las disposiciones del artículo 37, la transferencia de los servicios educacionales de la Nación, el producido de la venta de los bienes muebles e inmuebles afectados o de propiedad del Ministerio de Educación y Justicia y sus organismos, deberá ser

ingresado a una cuenta especial, que se abrirá en cada uno de los presupuestos respectivos, con el objeto de atender su concurrencia con los créditos previstos con cargo a rentas generales, un programa de asistencia técnica y económica educacional para los municipios y/o provincias. A tal efecto y en la medida que las necesidades lo requieran, se crearán organismos e institutos de perfeccionamiento y asesoramiento, debiendo el Ministerio de Educación y Justicia y sus organismos competentes, someter a la aprobación del Poder Ejecutivo los planeamientos integrales de tales servicios, como asimismo, las etapas en que será concretado su total funcionamiento.

ARTICULO 52.- Facúltase al Poder Ejecutivo para acreditar a la cuenta especial "Ministerio de Economía - Administración Federal de la Vivienda - Fondo Federal para la Vivienda", creada por decreto 6.122/61 y con destino a la financiación de nuevos planes de viviendas en todo el territorio del país, el producido de la venta de los inmuebles del dominio privado del Estado que no fueran afectados a otros fines específicos por leyes o por decretos del Poder Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 53.- Autorízase al Poder Ejecutivo para otorgar permisos de ocupación de zonas de dominio público con destino a la construcción y explotación de obras destinadas a operaciones portuarias, a título oneroso y precario, debiendo la autoridad competente establecer el monto de la contribución.

A tal efecto dictará las reglamentaciones respectivas dando cuenta al Congreso.

ARTICULO 54.- Facúltase al Poder Ejecutivo para adjudicar a reparticiones estatales, con intervención de la Secretaría de Hacienda, los bienes muebles e inmuebles incorporados al patrimonio del Estado en virtud de los decretos leyes 5.148/55 y 3.775/58 y disposiciones complementarias, con carácter provisorio o definitivo.

Facúltase, asimismo, al Poder Ejecutivo para destinar los fondos depositados en el Banco de la Nación Argentina, cuenta "Producido enajenación bienes decreto ley - 19.980/56" y los que ingresen a dicha cuenta en el futuro, para fines de utilidad pública o para ayuda a entidades de bien público, en la forma que el mismo determine.

ARTICULO 55.- No requerirán aprobación del Poder Ejecutivo las transacciones que convengan los representantes judiciales de la Nación por montos que no excedan de $ - 100.000 (cien mil pesos) previa consulta con los organismos del Estado que hayan determinado o promovido la acción correspondiente. Cuando el monto de la transacción supere esa cantidad, deberá ser autorizada expresamente por el Poder Ejecutivo o por el respectivo ministro, según que exceda o no de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos).

La presente disposición no modifica las facultades - que tuvieren acordadas en la misma materia por sus estatutos orgánicos los organismos descentralizados o autárquicos y las empresas del Estado.

ARTICULO 56.- No habrá lugar a reclamación por daños y - perjuicios entre organismos administrativos del Estado - nacional, centralizados y/o descentralizados, incluidas las entidades autárquicas, empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cuando el monto presupuesto de los daños y perjuicios no sea mayor a $ 20.000 (veinte mil pesos). Cuando exceda de esta cantidad hasta la suma de $ 1.000.000 (un millón de pesos) y no haya acuerdo entre los organismos interesados, la cuestión se someterá a la decisión definitiva e irrecurrible del procurador del Tesoro de la Nación; la decisión será tomada por el Poder Ejecutivo cuando supere el monto antes indicado. El Poder Ejecutivo podrá elevar los montos fijados en este artículo cuando las circunstancias lo hicieren aconsejable por razones de economía y expedición administrativa.

ARTICULO 57.- A los efectos del cumplimiento de los artículos 9º y 10 de la ley 14.499 (º), el Fondo Compensador de Inversiones y Acumulación estará a cargo del presidente o delegado del Instituto Nacional de Previsión Social, quién tendrá la responsabilidad de su constitución y aplicación. El Tribunal de Cuentas de la Nación y la Contaduría General de la Nación, fiscalizarán el movimiento de dicho fondo, así como también el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el mismo, por parte de las cajas nacionales de previsión enumeradas en el artículo 1º de la ley 14.499.

ARTICULO 58.- Los fondos de los organismos del Estado nacional, de cualesquier naturaleza que fueren, deberán ser depositados por éstos en los bancos oficiales y/o mixtos de la República Argentina, salvo en los casos debidamente autorizados por el Poder Ejecutivo con intervención de la Secretaría de Hacienda. La fiscalización estará a cargo del Tribunal de Cuentas de la Nación y de la Contaduría General de la Nación.

Facúltase al Poder Ejecutivo para reglamentar la presente norma estableciendo las penalidades a aplicar a los funcionarios que no la cumplimenten.

ARTICULO 59.- Facúltase al Poder Ejecutivo a transferir sin cargo a las provincias de locales de esparcimiento ubicados en territorio de ellas, pudiendo convenir el mantenimiento de la afectación de sus ingresos netos a obras de bien público. Derógase toda disposición que se oponga a la presente.

ARTICULO 60.- Facúltase al Poder Ejecutivo para fijar tarifas y aranceles para cubrir total o parcialmente los servicios que presta el Estado nacional, siempre que tales prestaciones y sus beneficiarios se encuentren debidamente individualizados y se trate de servicios solicitados voluntariamente por los usuarios. En todos los casos el Poder Ejecutivo fijará el régimen de gratuidad para las -

(º) Ver Digesto Administrativo Nº 621.-

personas de insolvencia comprobada.

La facultad otorgada por el presente artículo no comprende la función educacional del Estado, que se presta en forma gratuita.

ARTICULO 61.- Autorízase al Poder Ejecutivo para ordenar las disposiciones del artículo 150 de la ley 11.672 (edición 1943) y del artículo 39 de la ley 15.021, conforme a las modificaciones que a continuación se establecen y que sustituyen las contenidas en el artículo 61 de la ley 15.796 (1):

a) El monto de la cuota anual prevista en el punto 1º, que será fijada por el Poder Ejecutivo, no podrá exceder del máximo de treinta mil pesos ($ 30.000). La tasa uniforme no mayor del cinco por mil (5 °/₀₀), - que también fijará el Poder Ejecutivo, se calculará sobre las primas directas netas de anulaciones, la que será recaudada por los aseguradores como agentes de retención, liquidándose trimestralmente.

b) Sustitúyese el texto del punto 2º por el siguiente:

La Superintendencia de Seguros de la Nación es - una entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de Economía, con facultad de proyectar su presupuesto anual, que elevará para su aprobación al Poder Ejecutivo por intermedio de dicho ministerio, y con personería para actuar en juicio, cuya función es el contralor de los aseguradores en todo lo relacionado con su régimen económico y técnico. A ese efecto fiscalizará y podrá objetar la organización, funcionamiento, solvencia y liquidación de las sociedades de seguros privadas, estatales y mixtas, y en especial los planes, primas y modelos de contratos que aquéllas formulan, los balances, el régimen y conducta de los intermediarios y la publicidad o propaganda -

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1324.-

del seguro en general. A su propuesta, y por intermedio del Ministerio de Economía de la Nación, el Poder Ejecutivo fijará los capitales mínimos para operar en seguros. Las sucursales y agencias de sociedades extranjeras deberán mantener los capitales y reservas radicados en el país. El presente régimen comprende a todos los aseguradores sin excepción, y la Superintendencia de Seguros declarará incluidos en el mismo a quienes realicen operaciones asimilables al seguro cuando su naturaleza o alcance lo justifique.

c) Agrégase a continuación el primer párrafo del punto 8º el siguiente:

La Superintendencia de Seguros de la Nación sólo observará las primas por insuficientes, abusivas o arbitrariamente discriminatorias, aprobando niveles mínimos uniformes para que no se afecte la estabilidad del mercado o la solvencia de los aseguradores. Se expedirá dentro de los 120 días en caso de planes y tarifas nuevos y de los 30 días en los demás casos.

d) Sustitúyese el texto del punto 14 por el siguiente:

Cuando se infrinjan las disposiciones de este régimen legal o las reglamentaciones previstas en el mismo o no se cumplan las medidas dispuestas en su consecuencia por la Superintendencia de Seguros, y de ello resulte el ejercicio anormal de la actividad aseguradora o una disminución de la capacidad económico-financiera del asegurador o un obstáculo real a la fiscalización, el infractor se hará pasible de las siguientes sanciones, que se graduarán razonablemente según la buena fe, la gravedad y la reincidencia:

1º Apercibimiento.

2º Multa de hasta un millón de pesos ($ 1.000.000), cuyo producto ingresará como recurso de la Superintendencia de Seguros.

3º Suspensión de hasta tres (3) meses para operar en

uno o más ramos autorizados, en los casos de ejercicio anormal de la actividad aseguradora o disminución de su capacidad económico-financiera.

Quienes pretendan asumir operaciones de seguros - sin encontrarse autorizados para ello según este régimen, incurrirán en la multa señalada y, si llegaren a celebrar contrato, éste será nulo.

La Superintendencia sujetará sus decisiones de carácter particular a formas de procedimientos cuya sustanciación garantice el derecho de defensa y la producción de pruebas. La resolución fundada será apelable ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal de la Capital, dentro de los nueve días hábiles de notificada. El recurso se concederá en ambos efectos, - excepto cuando la resolución recurrida disponga medidas de saneamiento del estado económico-financiero del asegurador, que llevará el solo efecto devolutivo. La Cámara recibirá la prueba por diez días hábiles pudiendo presentarse memorial dentro de los cinco días hábiles subsiguientes, y dictará sentencia dentro del término de quince días hábiles, por vía de cuya ejecución se perseguirán las multas.

Las resoluciones de carácter general o susceptibles de afectar intereses generales del seguro dictadas por la Superintendencia admiten recursos de revisión con apelación en subsidio ante el Poder Ejecutivo, el que puede ser interpuesto por cualquier asegurador dentro de los treinta días hábiles de hechas públicas. Denegado , o transcurridos quince días hábiles de la interposición, la Superintendencia elevará las actuaciones dentro del tercer día al Ministerio de Economía, y si no lo hiciere procederá al recurso de queja ante el mismo. El ministerio dispondrá la apertura a prueba de oficio o a pedido de parte, la que - deberá diligenciarse en el término de diez días hábi-

les. El recurso, que será resuelto por decreto del Poder Ejecutivo, se concederá al solo efecto devolutivo, pero en cualquier estado del trámite el ministerio puede disponer la suspensión de la resolución recurrida.

ARTICULO 62.- Refuérzase el presupuesto del Instituto Nacional de Salud Mental, en las cantidades de cuarenta millones de pesos ($ 40.000.000) para inversiones patrimoniales y treinta millones de pesos ($ 30.000.000) para el fondo acumulativo, sector 2, otros gastos, y sector 4, inversiones; y el presupuesto de servicios e inversiones patrimoniales de la Comisión Nacional de Rehabilitación del Lisiado en la cantidad de veintidós millones de pesos ($ 22.000.000) con destino a la habilitación del Centro de Rehabilitación Laboral.

ARTICULO 63.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que refuerce el presupuesto del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública con especial destino al mejoramiento de los servicios en la forma que se indica:

a) Para grandes luchas sanitarias, en todo el país:

Sector 2: 100.000.000
Sector 4: 100.000.000

b) Para planes integrales de salud, de acuerdo a los convenios que realice el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública con las provincias (a distribuir y reglamentar por el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública):

Sector 2: 46.000.000

c) Escuela Nacional de Salud Pública:

Sector 2: 45.000.000
Sector 4: 15.000.000

Para atención de los gastos de la escuela, becas, realización de cursos de capacitación en servicios del ministerio y/o provincias y municipalidades, en todo el país, incluyendo las asignaciones a los profe

sores y demás erogaciones de organización y cursos de bachillerato en sanidad en las distintas provincias, y asignación a personal temporario que por contrato se desempeñe en los distintos cursos que dicte la escuela (a reglamentar por el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública).

ARTICULO 64.- Autorízase al Poder Ejecutivo a acordar al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, el siguiente refuerzo al inciso 7, gastos en personal: escalafón técnico del Ministerio de Asistencia Social y Salud - Pública, cuatrocientos millones de pesos ($ 400.000.000).

ARTICULO 65.- Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a arbitrar los medios tendientes a obtener recursos concurrentes al programa de protección de la salud para complementar el actual régimen gratuito sobre la base de las condiciones establecidas en el decreto 2.397/61 y cumplimentar el decreto 6.525/60.

Como consecuencia de lo establecido precedentemente - el Poder Ejecutivo nacional dispondrá la apertura de una cuenta especial denominada "Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública - Fondo Nacional de la Salud", con su régimen respectivo, cuyas finalidades serán:

a) Contribuir a financiar las diferencias por reajustes y/o modificaciones del escalafón de servicios técnicos de Salud Pública;
b) Contribuir a la atención de los gastos para el normal funcionamiento de los establecimientos y dependencias de su jurisdicción;
c) Acreditar las contribuciones de provincias, municipalidades y/o entes estatales y privados en todo el país;
d) Acreditar los ingresos al cálculo de recursos respectivo, de todo el producido de los aranceles que se establezcan, con determinación de transferencia al ejercicio siguiente de los montos no utilizados.

ARTICULO 66.- Refuérzase en la cantidad de tres mil cuatrocientos millones de pesos ($ 3.400.000.000) los respectivos créditos jurisdiccionales del presupuesto general de la administración nacional, con destino a cubrir la actualización del índice del Estatuto del Docente, a distribuir por el Poder Ejecutivo con intervención de la Secretaría de Hacienda.

ARTICULO 67.- Refuérzanse las partidas que se mencionan a continuación, con las siguientes cantidades:

Sector 2, financiación 1.

Anexo 28, ítem 63, inciso 9º.

Principal 14, subprincipal 258, parcial 1648	$	2.000.000
Principal 14, subprincipal 259, parcial 1648	"	500.000
Principal 14, subprincipal 536, parcial 1649	"	600.000
Principal 14, subprincipal 539, parcial 1648	"	6.000.000
Principal 14, subprincipal 590, parcial 1648	"	1.500.000

Anexo 31, ítem 509, inciso 9º.

Principal 3, subprincipal 210, parcial 1441	"	7.000.000

Otórgase a la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, y a la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, la cantidad de quinientos mil pesos ($ 500.000) a cada una, con destino a su sostenimiento.

Declárase monumento nacional el inmueble ubicado en la calle Vicente López 2220/24/30, de la Capital Federal, donde deberá instalarse el Museo Roca, de conformidad con lo dispuesto en el decreto 4.838 del 16 de junio de 1961. A los fines del cumplimiento del referido decreto declárase de utilidad pública los derechos de los ocupantes -

y/o inquilinos del inmueble citado. El Poder Ejecutivo adoptará las medidas conducentes al mejor cumplimiento de esta disposición a los fines de la instalación del referido museo.

Refuérzase el presupuesto del anexo 28 - Ministerio de Educación y Justicia de la Nación - en la cantidad de cuatro millones de pesos ($ 4.000.000) con destino a refección, instalación, habilitación y gastos de sostenimiento del Museo Roca de la Capital Federal.

Autorízase al Poder Ejecutivo a invertir anualmente hasta la suma de veinticinco millones de pesos ($ - 25.000.000) con destino a la adquisición directa de archivos, bibliotecas, documentos, hemerotecas y colecciones que interesen a la Nación.

Asimismo destínase la suma de cien millones de pesos ($ 100.000.000) para reforzar el presupuesto de la Dirección General de Enseñanza Agrícola, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación.

ARTICULO 68.- Refuérzase el presupuesto de la Universidad Tecnológica Nacional en la cantidad de veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000), incluidos cinco millones de pesos ($ 5.000.000), para poner en funcionamiento la Facultad Regional del Chaco, de acuerdo a la siguiente distribución:

Servicios ..... $ 10.000.000
Inversiones patrimoniales ..... " 15.000.000

ARTICULO 69.- Refuérzase el presupuesto del anexo 28 - Ministerio de Educación y Justicia de la Nación en la cantidad de seis millones de pesos ($ 6.000.000), con el siguiente destino: Instituto Experimental del Mogólico, $ 1.000.000, para adquisición de instrumental odontológico y médico y otras inversiones patrimoniales; escuelas de ciegos dependientes de la Dirección Nacional de Sanidad Escolar, $ 3.000.000, para gastos generales; Instituto -

Nacional de Sordomudas e Instituto Nacional de Sordomudos, $ 1.000.000 a cada uno, para adquisición de elementos de tratamiento y rehabilitación.

Asimismo destínase la cantidad de noventa millones de pesos ($ 90.000.000) para la erección, habilitación y funcionamiento de 21 establecimientos de educación diferenciada, uno de los cuales será para hipoacústicos, los que serán dirigidos y administrados por la Dirección Nacional de Sanidad Escolar.

ARTICULO 70.- Asígnase a la Secretaría de Obras Públicas la cantidad de ciento veinticinco millones de pesos ($ 125.000.000) con destino a las inversiones que se detallan a continuación: Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Buenos Aires, para obras de terminación y habilitación de su edificio, $ 80.000.000; Universidad Nacional del Litoral, para la adquisición de terrenos y obras en la Ciudad Universitaria de Rosario, $ 25.000.000; y Universidad Nacional del Sur, para la prosecución de las obras en ejecución, $ 20.000.000.

ARTICULO 71.- Refuérzase en la cantidad de setecientos cincuenta millones de pesos ($ 750.000.000) el anexo 62 - Secretaría de Marina, sección 2a. - Presupuesto de Inversiones Patrimoniales (sector 5), Título II - Trabajos Públicos, A) Erogaciones a financiar con recursos provenientes del uso del crédito Nº 3.

ARTICULO 72.- Incorpórase al anexo Secretaría de Hacienda la cantidad de treinta millones de pesos ($ 30.000.000) - para el funcionamiento de la Junta Nacional de Represión del Contrabando, a distribuir por el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 73.- Refuérzase el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación en la cantidad de cuatrocientos veinte millones de pesos ($ 420.000.000) para atender las mayores erogaciones que demande la actualización del régimen escalafonario, e increméntase en la cantidad de ciento noventa millones de pesos ($ 190.000.000) el -

crédito de Inversiones Patrimoniales, Trabajos Públicos, de dicha Secretaría.

ARTICULO 74.- Refuérzase en cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) el presupuesto de la Comición Nacional de Energía Atómica y en treinta millones de pesos ($ 30.000.000) el presupuesto del anexo Presidencia, con destino al funcionamiento del Consejo Nacional de Desarrollo, creado por el decreto 7.290/61, a distribuir por el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 75.- Agrégase al artículo 20 de la ley 13.922, a continuación de las palabras "carácter extraordinario", lo siguiente: "ejecutar las obras que consideren necesarias para ampliar las dependencias de sus respectivas jurisdicciones y adquirir inmuebles. Igual facultad tendrá el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

ARTICULO 76.- Increméntase en la suma de cuarenta millones de pesos ($ 40.000.000) el presupuesto del anexo Secretaría de Aeronáutica, para la terminación de las obras de construcción del aeropuerto internacional de San Juan.

ARTICULO 77.- Refuérzase el presupuesto del Congreso de la Nación en la cantidad de cuarenta y un millones cien mil pesos ($ 41.100.000), con el siguiente destino:

Para la adquisición de una propiedad para ampliación de las dependencias de la Honorable Cámara de Diputados, su habilitación, $ 15.000.000.

Para máquinas, motores, aparatos y herramientas de la Biblioteca del Congreso de la Nación, $ 2.000.000.

Para sector 2, sección 1a., título I, financiación 1, inciso 7, Senado de la Nación, $ 4.600.000.

Para atender los gastos e inversiones que demande la realización de la 51a. conferencia de la Unión Interparlamentaria a efectuarse en la ciudad de Buenos Aires en el año 1962, $ 17.500.000.

Para sector 2, sección 1a., título I, financiación 1, anexo 22, inciso 9, ítem 309, partidas 7-042 parcial 254, $ 2.000.000.

ARTICULO 78.- Establécese en la suma de un mil quinientos millones de pesos ($ 1.500.000.000) la partida parcial - 2.818, principal 8, subprincipal 786, inciso 9, ítem 000, organismos descentralizados 26, jurisdicción 33, anexo - 200, financiación 5, sector 4, correspondiente a la "a - tención régimen de inversiones y créditos a otorgar por la Dirección General de Préstamos Personales y con Garantía Real artículo 11 de la ley Nº 14.499", de acuerdo en un todo con las planillas anexas.

ARTICULO 79.- Autorízase al Poder Ejecutivo para otorgar al Consejo Agrario Nacional la suma de cien millones de pesos ($ 100.000.000), para la adjudicación de tierras a los exceptuados de las prórrogas legales de arrendamiento y desalojados por sentencia firme, habilitación de - nuevas tierras e inversión en mejoras necesarias para su puesta en producción.

A los efectos de lo dispuesto precedentemente el Poder Ejecutivo incluirá las respectivas partidas en los ejercicios fiscales, de acuerdo con las necesidades del cumplimiento del plan.

Estos fondos no podrán ser invertidos en gastos administrativos.

El Poder Ejecutivo realizará la emisión de títulos - necesarios para cubrir la erogación que demande este artículo.

ARTICULO 80.- Se incrementa el anexo 23 - Corte Suprema y tribunales inferiores - "Gastos en personal", en un - 25 % sobre los conceptos sueldo básico, costo de vida y las compensaciones previstas por el artículo 25 de la ley 15.796 y el artículo 1º de la ley 15.836.

ARTICULO 81.- Auméntase en un 25 % las remuneraciones que perciben los magistrados, funcionarios y empleados judi-

ciales por los conceptos expresados en el artículo anterior. Dicho aumento se percibirá en concepto de compensación por mayor jerarquía y responsabilidad y otras compensaciones, y estará sometido al régimen correspondiente a las referidas compensaciones establecidas por el artículo 25 de la ley 15.796 y su procedimiento de aplicación.

ARTICULO 82.- Facúltase al Poder Ejecutivo para consolidar la deuda flotante que se origine por la ejecución del presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio de 1962, a cuyo efecto podrá emitir títulos de la deuda pública y realizar las demás operaciones de créditos que resulten necesarias.

ARTICULO 83.- Incorpóranse a la ley 11.672 (complementaria permanente de presupuesto) los artículos 12, 16, 17, 47,48,58,61 y 75 de la presente ley.

El Poder Ejecutivo procederá a ordenar el texto de la ley 11.672, texto ordenado 1943 (complementaria permanente de presupuesto), de acuerdo con las incorporaciones a la misma sancionadas hasta la fecha, sin introducir otras modificaciones salvo las gramaticales indispensables para el nuevo ordenamiento.

ARTICULO 84.- El Poder Ejecutivo incorporará a las jurisdicciones respectivas del presupuesto aprobado por esta ley las partidas determinadas en los artículos 10, 44, 45, 62, 63, 64, 66 al 74, 76, 77, 80 y 81.

Dicha incorporación se realizará compensando el aumento que ello represente, con la disminución de los otros créditos autorizados en el mismo presupuesto, en la forma que en cada caso determine el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 85.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a treinta días del mes de noviembre del año mil novecientos sesenta y uno.-

JOSE M.A. BERTORA — FEDERICO F. MONJARDIN
Claudio A. Maffei — Guillermo González

Buenos Aires, 1º de diciembre de 1961.

Por tanto:

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Alfredo R. Vítolo
Jorge Wehbe

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº 1544.-

ACTO: LEY Nº 16.432.- DECRETO Nº 11.432/61.-

MATERIA: OBRAS PUBLICAS - LEY DE CONTABILIDAD (art.11)

.....

ARTICULO 8º.- El Poder Ejecutivo planificará analíticamente la distribución de los créditos para trabajos públicos autorizados por la presente ley, oportunidad en la cual deberá especificarse la respectiva jurisdicción territorial de las obras y trabajos y demás detalles propios de dicha distribución. Hasta tanto se apruebe el plan analítico mencionado, los organismos estatales a cargo de su ejecución, podrán invertir, en el conjunto de finalidades, las sumas que el Poder Ejecutivo autorice en virtud de lo establecido por el artículo 11 de la ley de contabilidad sobre los créditos asignados para el ejercicio 1961, con destino a la prosecución de las realizaciones iniciadas al 31 de octubre de 1961, en forma de mantener la continuidad de las obras y trabajos, evitando entorpecimientos en su desarrollo.

En el plan analítico y sus reajustes podrán realizarse compensaciones entre las finalidades y jurisdicciones territoriales cuando se presenten necesidades o circunstancias que así lo exijan.

.....

ACTO: LEY Nº 16. 432.- DECRETO Nº 11.432/61.-

MATERIA: CUENTAS ESPECIALES

.....

ARTICULO 12º.- Facúltase al Poder Ejecutivo para fijar el régimen de funcionamiento de los servicios de cuentas especiales y su sistema de administración, así como también para disponer la creación o cancelación de las mismas cuando ello resulte necesario, y para incorporarlas total o parcialmente a los presupuestos financiados con rentas generales o con el producido de la negociación de títulos, según corresponda, en los casos que representen necesidades normales y permanentes de la administración, incluyendo correlativamente la estimación de sus ingresos en el respectivo cálculo de recursos.

Autorízase asimismo al Poder Ejecutivo para que, con intervención de la Secretaría de Hacienda anticipe, con cargo de reintegro, las sumas indispensables para el funcionamiento de esos servicios, quedando derogado el artículo 138 de la ley 11.672, texto ordenado 1943 (complementaria permanente de presupuesto).

ARTICULO 13.- Los créditos incluidos en el presupuesto que se apruebe por la presente ley, correspondientes a los organismos cuya disolución, fusión o transferencia ya ha sido dispuesta o se disponga, tienen exclusivamente la finalidad de atender los gastos durante el proceso de liquidación, fusión o transferencia.

//-

ARTICULO 14.- Facúltase al Poder Ejecutivo para efectuar dentro de los totales del presupuesto general de la administración nacional las reestructuraciones de créditos y de economías que sean necesarias frente a exigencias estrictamente impostergables de los servicios.

El Poder Ejecutivo podrá también introducir en los presupuestos de las cuentas especiales y de los organismos descentralizados, por vía de ajuste o reestructuración de créditos, las modificaciones, ampliaciones y reducciones que, de acuerdo con las necesidades de los servicios y dentro de las posibilidades financieras de los mismos, sean indispensables para su desenvolvimiento.

Igualmente queda autorizado el Poder Ejecutivo para incorporar a los respectivos presupuestos las partidas necesarias para proseguir o iniciar en el ejercicio 1962 el cumplimiento de las leyes dictadas en el curso de ejercicios anteriores.

.....

ACTO: LEY N° 16.432.- DECRETO N° 11.432/61.-

MATERIAS: FACULTAD MINISTERIAL

.....

ARTICULO 15.- El Poder Ejecutivo podrá delegar en los señores ministros, secretarios de Estado, autoridades de los organismos descentralizados, autárquicos o de las empresas del Estado, los que deberán ajustarse a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo con intervención de la Secretaría de Hacienda, la facultad que por el artículo precedente se le acuerda para reajustar en las respectivas jurisdicciones y dentro de los totales de los créditos autorizados, las partidas referentes a otros gastos, con excepción de aquellas que directa o indirectamente se traduzcan en beneficios al personal bajo cualquier modalidad o concepto. Quedan derogadas las disposiciones que confieren toda otra delegación de facultades a los organismos dependientes del Poder Ejecutivo, de cualquier naturaleza que fueren, para la propia aprobación y modificación de sus presupuestos o de regímenes escalafonarios y de asignaciones o compensaciones al personal, con excepción de las que expresamente se acuerdan por la presente ley y las autorizaciones del inciso b) del artículo 15 del decreto-ley n° 13.126/57.

Similar facultad podrá delegar el Poder Ejecutivo en las autoridades mencionadas precedentemente, para que efectúen reajustes por compensación entre las partidas

//.

parciales integrantes de cada partida subprincipal del plan analítico de trabajos públicos.-

.....

ACTO: LEY Nº 16.432.- DECRETO Nº 11.432/61.-

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD (Arts. 3º apart.2, 10, 11 y 142)

.....

ARTICULO 19.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que, con intervención de la Secretaría de Hacienda, deje en suspenso para el ejercicio 1962, en los casos y condiciones que sean necesarios, las normas a que se refiere la ley de contabilidad en su artículo 3º, apartado 2.

El Poder Ejecutivo con intervención de la citada Secretaría aplicará dichas normas en la medida de las posibilidades, a cuyo efecto dispondrá en su oportunidad las transferencias de créditos presupuestarios que correspondan.

ARTICULO 20.- Modifícase la ley de contabilidad en la siguiente forma:

a) Sustitúyense los artículos 10 y 11 por los siguientes:

Artículo 10.- Cuando la ejecución de una obra pública deba realizarse en un período mayor de un año, se podrá contratar o autorizar compromisos hasta el importe máximo fijado por las leyes de crédito, pero no se comprometerá o ejecutará obra alguna sin que figure en el plan anual y su inversión no sobrepasará el importe establecido en el mismo.

//-

Artículo 11.- Hasta tanto se apruebe el plan anual a que se refiere el artículo 9°, seguirá en vigencia el anterior, al solo efecto de la continuidad de las obras y trabajos comprometidos o iniciados hasta el 31 de octubre del ejercicio terminado, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo podrá autorizar, con carácter provisional, los créditos mínimos necesarios, los cuales se contabilizarán como anticipo del plan correspondiente.

El plan anual de obras y trabajos públicos y sus modificaciones serán comunicados al Congreso inmediatamente de ser decretados.

b) Agrégase al artículo 142 el siguiente párrafo:

Son imprescriptibles las obligaciones entre organismos del Estado nacional, centralizados o descentralizados, incluidas las entidades autárquicas, empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

.....

ACTO: LEY Nº 16.432.- DECRETO Nº 11.432/61.-

MATERIAS: EMPRESAS DEL ESTADO - SINDICATURA DE LA ADMINISTRACION

.....

ARTICULO 27.- Facúltase al Poder Ejecutivo para crear en jurisdicción del Ministerio de Economía la "Sindicatura de la Administración Pública", y por cuyo conducto designará con carácter de síndico en cada empresa del Estado a un funcionario permanente de ese departamento, cuyas obligaciones y derechos serán los establecidos en el artículo 3º de la ley 13.653 (t.o.) modificada por la ley 15.023 (').-

.....

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1039.-

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº. 1549.-

ACTO: LEY Nº 16.432.- DECRETO Nº 11.432/61.-

MATERIAS: FACULTAD MINISTERIAL - PERSONAL - JUBILACIONES - PENSIONES

.....

ARTICULO 36.- El Presidente de la Nación podrá delegar en los señores ministros o secretarios de Estado de la respectiva jurisdicción la resolución final y la firma de los siguientes asuntos: autorización a retirados, jubilados y pensionistas para residir en el extranjero; rectificación de nombramientos por cambio de estado civil o por modificación de nombres fundada en acto auténtico del que surja la identidad de personas; traslado y permuta de horas de cátedras; otorgamiento de pensiones con arreglo a las normas vigentes para el personal de las fuerzas armadas y de seguridad y defensa; modificaciones de haberes de pasividad fundadas en error u omisión del cómputo o en el cambio de situación de los beneficiarios y autorización para exportar el excedente de la producción nacional de metales o aleaciones, sus aleaciones y combinaciones, conforme lo determina el artículo 29 de la ley 12.709.

El acto mediante el cual el funcionario delegado ejecute la facultad delegada deberá ajustarse a las reglamentaciones en vigor, y contra el mismo podrá recurrirse ante el Poder Ejecutivo por las causas y en las con

//-

diciones establecidas en las normas vigentes.

.....

ACTO: LEY Nº 16.432.- DECRETO Nº 11.432/61.-

MATERIAS: RACIONALIZACION - TRANSFERENCIAS - INMUEBLES DEL ESTADO - MUEBLES Y UTILES - PATRIMONIO DEL ESTADO

.....

ARTICULO 37.- El Poder Ejecutivo convendrá con los gobiernos de las provincias y municipalidades la transferencia de los servicios que la Nación presta en las respectivas jurisdicciones y cuya descentralización resulte conveniente, así como también, y con el carácter de contribución, las sumas asignadas en los presupuestos correspondientes para el sostenimiento de dichos servicios en el momento de su transferencia. Tales contribuciones acrecentarán oportunamente las cuotas de participación de impuestos a que se refieren las leyes 14.060, 14.390 y 14.788.

Cuando la transferencia se opere con arreglo a las prescripciones del decreto-ley 7.977/56 (Artículo 11) las obligaciones de la Nación sólo quedarán concluidas al otorgarse los fondos previstos en los convenios.

ARTICULO 38.- Déjase establecido que la transferencia de servicios a que se refiere el artículo anterior comprende también los bienes muebles e inmuebles afectados a los mismos, que serán cedidos sin cargo, juntamente con aquéllos. En caso de tratarse de obras en

//-

construcción, el Poder Ejecutivo podrá convenir igualmente el traspaso de los trabajos y de las partidas presupuestarias con que ellos se atienden. Declárase ratificados los convenios que el Poder Ejecutivo haya celebrado en las condiciones indicadas en el presente artículo.

ARTICULO 39.- En caso de que la transferencia a que se refiere el artículo 37 comprenda servicios de obras sanitarias regidos por la ley 13.577 y sus complementarias, autorízase al Poder Ejecutivo para declarar canceladas las deudas de los gobiernos de las provincias o municipalidades, correspondientes a las obras y explotaciones que toman a su cargo.

.....

ARTICULO 59.- Facúltase al Poder Ejecutivo a transferir sin cargo a las provincias los locales de esparcimiento ubicados en territorio de ellas, pudiendo convenir el mantenimiento de la afectación de sus ingresos netos a obras de bien público. Derógase toda disposición que se oponga a la presente.

.....

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	N°. 1551.-

ACTO: LEY N° 16.432.- DECRETO N° 11.432/61.-

MATERIAS: RACIONALIZACION - ESTRUCTURAS - I.S.A.P. - ORGANIZACION

.....

ARTICULO 42.- Los organismos civiles del Estado integrantes de la administración centralizada o descentralizada que jurisdiccionalmente dependen del Poder Ejecutivo deben ajustar su estructura presupuestaria a la estructura funcional aprobada por el Poder Ejecutivo con intervención de la Secretaría de Hacienda y previo asesoramiento y conformidad del Instituto Superior de Administración Pública (ISAP).

El Poder Ejecutivo no autorizará ningún reajuste presupuestario de esos organismos modificatorios de su planta de personal, excepto para la supresión de vacantes hasta tanto se haya obtenido la aprobación indicada.-

.....

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº. 1552.-

ACTO: LEY Nº 16.432.- DECRETO Nº 11.432/61.-

MATERIAS: RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - ECONOMIAS - LIMITACION DE SERVICIOS - CESANTIAS - INDEMNIZACIONES - VACANTES

.....

ARTICULO 49.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que cuando razones de racionalización administrativa lo aconsejen o lo exija la ineludible necesidad de realizar economías en los gastos públicos, suprima dependencias, servicios y funciones, pudiendo igualmente redistribuir o transferir estos últimos entre los distintos organismos del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, debiendo determinarse -cuando así correspondiere- los organismos que se harán cargo de las funciones respectivas. Facúltasele además para que reduzca empleos en la administración pública nacional (Administración Central, servicios de Cuentas Especiales, organismos descentralizados, empresas del Estado, plan de obras y trabajos públicos, y obras sociales), en la medida que estime compatible con el funcionamiento adecuado de los servicios.

El personal del cual se prescinda como consecuencia de las medidas indicadas precedentemente, tendrá derecho a percibir por ese motivo lo siguiente:

a) Agentes comprendidos en el Estatuto del Personal

//-

Civil de la Administración Pública Nacional, o excluidos del mismo y que no se encuentren amparados por ningún régimen indemnizatorio -Indemnización equivalente al cuarenta por ciento (40 %) de su retribución mensual por cada año de servicio y hasta un máximo de veinte (20) años;

b) Agentes excluidos del estatuto mencionado en el apartado a) y que estén comprendidos en otro régimen indemnizatorio -Indemnización que corresponda por despido sin causa según el régimen respectivo.

La indemnización será calculada de acuerdo con la antigüedad computable de conformidad con las normas en vigor, no pudiendo ser inferior a tres (3) meses de retribución. La liquidación de los importes que le corresponda se realizará en cuotas mensuales no inferiores al setenta por ciento (70%) de su retribución, debiendo suspenderse automáticamente el pago de esa indemnización en caso de que el agente reingrese a la administración pública. Esta norma es de aplicación asimismo para el personal que reingrese contratado o mediante cualquier forma de retribución.

La indemnización para los agentes que tengan otorgado un beneficio jubilatorio o prestación similar, o que se encuentren en condiciones de obtenerlos, se limitará a un máximo de tres (3) meses de retribución, de acuerdo con las normas que dicte el Poder Ejecutivo.

El importe correspondiente a las vacantes producidas por los motivos indicados se destinará al pago de las indemnizaciones a que se ha hecho referencia, a cuyo efecto las disponibilidades crediticias provenientes de aquéllas podrán afectarse provisionalmente a dicho pago.

El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones del presente artículo.

ACTO: LEY Nº 16.432.- DECRETO Nº 11.432/61.-

MATERIAS: INMUEBLES DEL ESTADO - TRIBUNAL DE TASACIONES

.....

ARTICULO 50.- Facúltase al Poder Ejecutivo para centralizar, en la medida que lo estime conveniente y en los organismos adecuados, la venta de los inmuebles a que se refiere la ley 13.539 (') y las leyes especiales dictadas hasta la fecha, por las cuales se autorizó expresamente a distintos organismos de la administración centralizada, entidades descentralizadas o autárquicas para realizar enajenaciones de inmuebles no necesarios para sus servicios específicos.

A tal efecto se lo faculta para fijar las bases de las ventas y para delegar en organismos centralizados o descentralizados, inclusive los bancos oficiales, los procedimientos de las operaciones de venta y para celebrar los actos jurídicos necesarios al perfeccionamiento de las transferencias.

Las ventas podrán hacerse mediante remate público o concurso de precios de acuerdo con la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. Podrán venderse directamente bienes inmuebles solicitados por gobiernos de provincias o municipalidades para destinarlos a fines de utidad pública.

Asimismo podrán venderse directamente esos bienes a entidades oficiales o personas de derecho privado que

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 269.-

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº. 1554.-

ACTO: LEY Nº 16.432.- DECRETO Nº 11.432/61.-

MATERIAS: PATRIMONIO DEL ESTADO - INMUEBLES DEL ESTADO

.....

ARTICULO 54.- Facúltase al Poder Ejecutivo para adjudicar a reparticiones estatales, con intervención de la Secretaría de Hacienda, los bienes muebles e inmuebles incorporados al patrimonio del Estado en virtud de los decretos-leyes 5.148/55 y 3.775/58 y disposiciones complementarias, con carácter provisorio o definitivo.

Facúltase, asimismo, al Poder Ejecutivo para destinar los fondos depositados en el Banco de la Nación Argentina, cuenta "Producido enajenación bienes decreto-ley 19.980/56" y los que ingresen a dicha cuenta en el futuro, para fines de utilidad pública o para ayuda a entidades de bien público, en la forma que el mismo determine.

.....

ACTO: LEY Nº 16.432.- DECRETO Nº 11.432.-

MATERIAS: REPRESENTANTES EN JUICIO - DEMANDAS - PATROCINIO - DAÑOS Y PERJUICIOS - DIFERENDO ENTRE REPARTICIONES Y ORGANISMOS DEL ESTADO

.....

ARTICULO 55.- No requerirán aprobación del Poder Ejecutivo las transacciones que convengan los representantes judiciales de la Nación por montos que no excedan de $ 100.000 (cien mil pesos) previa consulta con los organismos del Estado que hayan determinado o promovido la acción correspondiente. Cuando el monto de la transacción supere esa cantidad, deberá ser autorizada expresamente por el Poder Ejecutivo o por el respectivo ministro, según que exceda o no de $ 5.000.000.— (cinco millones de pesos).

La presente disposición no modifica las facultades que tuvieren acordadas en la misma materia por sus estatutos orgánicos los organismos descentralizados o autárquicos y las empresas del Estado.

ARTICULO 56.- No habrá lugar a reclamación por daños y perjuicios entre organismos administrativos del Estado nacional, centralizados y/o descentralizados, incluidas las entidades autárquicas, empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cuando el monto presupuesto de los daños y perjuicios no sea

//-

mayor a $ 20.000 (veinte mil pesos). Cuando exceda de esta cantidad hasta la suma de $ 1.000.000 (un millón de pesos) y no haya acuerdo entre los organismos interesados, la cuestión se someterá a la decisión definitiva e irrecurrible del procurador del Tesoro de la Nación; la decisión será tomada por el Poder Ejecutivo cuando supere el monto antes indicado. El Poder Ejecutivo podrá elevar los montos fijados en este artículo cuando las circunstancias lo hicieren aconsejable por razones de economía y expedición administrativa.

.....

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	N°. 1556.-

ACTO: LEY N° 16.432.- DECRETO N° 11.432/61.-

MATERIAS: PRESUPUESTO - BANCOS - TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION - FONDOS

.....

ARTICULO 58.- Los fondos de los organismos del Estado nacional, de cualesquier naturaleza que fueren, deberán ser depositados por éstos en los bancos oficiales y/o mixtos de la República Argentina, salvo en los casos debidamente autorizados por el Poder Ejecutivo con intervención de la Secretaría de Hacienda. La fiscalización estará a cargo del Tribunal de Cuentas de la Nación y de la Contaduría General de la Nación.

Facúltase al Poder Ejecutivo para reglamentar la presente norma estableciendo las penalidades a aplicar a los funcionarios que no la cumplimenten.

.....

ACTO: RESOLUCION Nº 4.190/61.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA - DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO - PATRIMONIO DEL ESTADO - TRANSFERENCIAS - INMUEBLES DEL ESTADO

Buenos Aires, septiembre 15 de 1961.-

Visto el decreto Nº 6.544/61 (1), y considerando - que razones de orden funcional aconsejan transferir a otro organismo las funciones que tiene asignadas la Dirección General Inmobiliaria en cuanto a la explotación y administración de inmuebles fiscales,

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

1º.- Asígnase a la Dirección General de Suministros del Estado las funciones atribuídas a la Dirección General Inmobiliaria por el decreto-ley 7.688/56 (2), en lo referente a la explotación y administración de inmuebles del dominio privado del Estado Nacional.

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1430.-

(2) Ver Digesto Administrativo Nº 52.-

2°.- Transfiérese a la Dirección General de Suministros del Estado al personal de la Dirección General Inmobiliaria, como asimismo los muebles, máquinas y demás elementos, detallados en las planillas anexas y que forman parte de la presente resolución.

3°.- La Dirección General de Contabilidad y Administración arbitrará las medidas necesarias para la pertinente transferencia de los créditos presupuestarios.

4°.- Las transferencias a que se refieren los artículos precedentes se disponen "ad referendum" del Poder Ejecutivo Nacional.

5°.- Comuníquese, publíquese y archívese.-

Fdo. JORGE WEHBE

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº. 1558.-

ACTO: DECRETO Nº 11.046/61.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA - DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO - PATRIMONIO DEL ESTADO - TRANSFERENCIAS - INMUEBLES DEL ESTADO

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1961.-

Visto que por decreto Nº 6.544 del 2 de agosto de 1961 (1), se estableció el procedimiento a seguir para el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7º de la ley 15.799; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo previsto en dicho decreto, la Secretaría de Estado de Hacienda ha dispuesto, mediante diversas resoluciones, las transferencias a que alude el artículo 2º del mismo;

Que los respectivos pronunciamientos fueron dictados por dicha Secretaría de Estado "ad referendum" del Poder Ejecutivo, razón por la cual procede ratificar esas resoluciones;

Por ello,

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1430.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Ratifícanse las resoluciones Nros. 4.118/61, 4.123/61, 4.190/61 (*) y 4.191/61 dictadas por conducto de la Secretaría de Estado de Hacienda.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamento de Economía e Interior y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Estado de Hacienda a sus efectos.-

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo
Jorge Wehbe.

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1557.-

ACTO: DECRETO Nº 11.380/61.-

MATERIAS: PLAN DE RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - C.E. P.R.A. - ECONOMIAS - LIMITACION DE SERVICIOS RECURSO DE AMPARO

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1961.-

Visto:

El decreto nº 2.351/61 (¹), dictado en uso de las atribuciones acordadas por el artículo 36º de la ley nº 15.796 (*) y las exigencias de buen gobierno que lo fundamentan,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DEL H.SENADO DE LA NACION EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Por el Ministerio de Educación y Justicia se darán instrucciones a los señores agentes fiscales que corresponda, para que intervengan en los recursos de amparo presentados o que puedan presentarse con motivo de la aplicación del decreto nº 2.351/61, interponiendo todos los recursos contra la decisión judicial que haga lugar a tales pedidos de amparo.

//-

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1371.-
(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1333.-

ARTICULO 2°.- Los señores fiscales ante las Excelentísimas Cámaras de Apelaciones continuarán ante ellas con la intervención que la ley les confiere, sosteniendo las apelaciones interpuestas por los señores agentes fiscales en primera instancia y deberán interponer, en los casos en que las sentencias de las Cámaras sean favorables a los pedidos de amparo, los recursos pertinentes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin perjuicio de recabar las instrucciones que estimen necesarias a tales efectos.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO - Luis R. Mac Kay

ACTO: Nota de la Subsecretaría de Justicia.-

MATERIAS: PLAN DE RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - C.E. P.R.A. - ECONOMIAS - LIMITACION DE SERVICIOS RECURSO DE AMPARO

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1961.-

Al señor Subsecretario de Hacienda
D. RAFAEL RODOLFO AYALA
S / D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de poner en su conocimiento que el señor Carlos J. VIDAL ALCOBENDAS se ha presentado ante el Juez en lo Correccional Dr. Eduardo Luis VILA, Secretaría del Escr. Alejandro MOLINA, promoviendo recurso de amparo por haber sido transferido a disposición de la Dirección General del Servicio Civil de la Nación. VIDAL ALCOBENDAS era Director General del Archivo de Actuaciones Judiciales y Notariales de la Capital Federal, organismo rebajado a la categoría de Departamento a raíz de la reestructuración de la Subsecretaría a mi cargo, dispuesta por decreto nº 2.351/61 (1) y aprobada por de-

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1371.-

creto nº 6.571/61. El recurrente alega la inconstitucionalidad del artículo 36 de la ley nº 15.796 (*), en el que se basa legalmente la racionalización administrativa y el primero de dichos decretos.

La gravedad de esta cuestión judicial respecto a la política de economía y racionalización en que se halla empeñado el Estado, han determinado al suscripto a tomar medidas que deseo poner en su conocimiento.

El oficio del señor Juez requiriendo informes, cuya copia se acompaña, fué contestado mediante la nota, cuya copia también se acompaña y se dictó el decreto nº 11.380/61 (+), cuyos términos proveen a la defensa del Estado en eventuales reclamaciones similares no sólo respecto a esta Subsecretaría sino en relación a cualquier medida basada en el decreto nº 2.351/61. El decreto nº 11.380/61 fué comunicado a todos los fiscales de primera instancia y de Cámara y, en especial, al doctor Jorge Vicente QUIROGA, que actuará en el caso planteado, al que se dieron las pertinentes instrucciones.

Se sugiere que ante cualquier planteo judicial similar, sin perjuicio de la necesaria intervención de los organismos letrados del Ministerio que corresponda, se de aviso a la Subsecretaría de Justicia, a cuyo fin puede comunicarse a cualquiera de los siguientes funcionarios: Sr. Director General de Justicia, Dr. Mariano MACIEL, T.E. 80-1739; Sr. Subdirector Gral. de Justicia, Dr. Jorge FERNANDEZ PASTOR, T.E. 80-6340; Sr. Jefe del Dpto. de Estudios y Antecendentes. Dr. Alberto CONIL PAZ, T.E. 80-6915.

Saludo al señor Subsecretario muy atte.

Fdo. EDUARDO M. DESSEIM
Subsecretario de Justicia

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1333.-
(+) Ver Digesto Administrativo Nº 1559.-

ACTO: DECRETO Nº 11.265/61.-

MATERIA: INCOMPATIBILIDADES

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1961.-

Visto el expediente Nº 24.189, letra T, del año 1961, en el que la Gobernación del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud solicita se mantenga la excepción al régimen de incompatibilidades para el personal de ese territorio, dispuesta por decreto Nº 14.803/57 (1), y

CONSIDERANDO:

Que en oportunidad de dictarse el decreto Nº 8.566/61 (2) sobre régimen de incompatibilidades, no se tuvo presente la situación especial que motivó la disposición arriba citada y teniendo en cuenta que actualmente subsisten las razones que dieron origen a la misma,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Declárase excluído del régimen sobre incompatibilidades al personal administrativo, técnico - profesional, de servicio, obrero y de maestranza de la

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 388.-
(2) Ver Digesto Administrativo Nº 1460.-

Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal que presta servicios o deba ser designado para ocupar cargos o desempeñar funciones en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamento del Interior y de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo
Jorge Wehbe

ACTO: DECRETO Nº 12.146/61.-

MATERIA: COEFICIENTES

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1961.-

Visto el decreto Nº 11.919 de fecha 4 de julio de 1956 (¹), por el que se fijó los coeficientes para las remesas que se realizan a favor del personal del Estado destacado en el exterior, y

CONSIDERANDO:

Que por decreto Nº 942 del 2 de febrero de 1961 (ª), al establecerse el sistema de liquidación y pago de las remuneraciones a los agentes de la Administración Central del Estado en el exterior, se dejó establecido que la Comisión Mixta Asesora creada por el artículo 7º, del citado texto legal, propondría al Poder Ejecutivo la asignación de los coeficientes a los diferentes países;

Que hasta tanto se expida la citada Comisión, corresponde -teniendo en cuenta las estimaciones actuales del costo de vida experimentado en Chile- reajustar el coeficiente vigente;

Por todo ello,

//-

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 123.-
(ª) Ver Digesto Administrativo Nº 1353.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 1º del decreto Nº 11.919 de fecha 4 de julio de 1956, dejándose establecido que a partir del 1º de noviembre de 1961, regirá para Chile el coeficiente básico de seis con cincuenta (6,50).

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Relaciones Exteriores y Culto, Economía y Defensa Nacional y firmado por los señores Secretarios de Estado de Hacienda, Comercio, Guerra, Marina y Aeronáutica.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Miguel A. Cárcano - Roberto T.Alemann - Justo P.Villar - Jorge Wehbe - Pedro M. Gracía Oliver - Rosendo M.Fraga - Jorge Rojas - Gastón C.Clement.

ACTO: DECRETO Nº 489/62.-

MATERIAS: RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - C.E.P.R.A.- PERSONAL - LIMITACION DE SERVICIOS - CESANTIAS - INDEMNIZACIONES (Ley Nº 16.432 - art. 49) - PRESUPUESTO

Buenos Aires, 17 de enero de 1962.-

Visto lo propuesto por el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A.), y

CONSIDERANDO:

Que desde que el actual gobierno nacional asumió sus funciones se abocó al estudio de la ejecución de diversas medidas tendientes a reducir el déficit fiscal;

Que uno de los principales factores del susodicho déficit está dado por el exceso de personal de la Administración Pública, lo cual también importa el sostenimiento de una pesada organización burocrática en contra de elementales normas de racionalización administrativa;

Que durante la vigencia del Plan de Racionalización Administrativa se han obtenido resultados satisfactorios con relación a la disminución de agentes en la Administración Pública, pero de ninguna manera puede ello

//-

considerarse suficiente a fin de lograr un servicio administrativo ágil que se encuentre al servicio de los planes de estabilización y desarrollo que se encuentra ejecutando el Gobierno de la Nación;

Que a fin de llegar en forma definitiva a una reducción de agentes que permita alcanzar el justo límite que las necesidades del país exigen a la Administración Pública corresponde disponer nuevas medidas para alcanzar la finalidad propuesta;

Por ello, atento lo establecido en el artículo 86, inciso 1º de la Constitución Nacional y las facultades acordadas al Poder Ejecutivo en el artículo 49 de la Ley número 16.432 (*),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Todos los organismos centralizados y descentralizados del Poder Ejecutivo Nacional, cualquiera sea su naturaleza jurídica, inclusive empresas del Estado y bancos oficiales, con excepción de los de seguridad y defensa y las universidades nacionales, procederán a elevar al Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa dentro de los quince (15) días de la publicación del presente decreto, un informe sobre la dotación del personal mínimo necesario para el funcionamiento de los servicios a su cargo. Sobre la base de ese informe y con los elementos de juicio en su poder, el C.E.P.R.A. fijará los porcientos de personal no indispensable en cada uno de los organismos aludidos.

En caso de no recibir información dentro del término expresado, el C.E.P.R.A. determinará de oficio los citados porcientos.

ARTICULO 2º.- Dentro de los cinco (5) días subsiguientes al vencimiento del plazo fijado en el artículo anterior,

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1552.-

el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa comunicará a los organismos indicados en el artículo 1º, los porcientos de personal no indispensable - con respecto al cual se aplicarán las normas establecidas en los artículos siguientes.

ARTICULO 3º.- Cada organismo deberá preparar la nómina - de personal que cubra el porcentaje fijado en la comunicación a que se refiere el artículo anterior, y resolverá por sí o someterá al Poder Ejecutivo, según las facultades que legalmente tenga atribuidas, el licenciamiento del personal incluido en dicha nómina. El personal aludido quedará excluído de los cuadros de dotación activa y percibirá por mes, durante el término de un año, una cantidad igual a su última retribución. La nómina deberá aprobarse o someterse al Poder Ejecutivo dentro de los quince (15) días improrrogables contados desde la recepción de la comunicación aludida. Los porcentajes fijados deberán cubrirse para la totalidad de agentes de la jurisdicción pudiendo la autoridad competente compensar disminuciones en una dependencia con aumentos en otras.

ARTICULO 4º.- El personal cuyos servicios hayan sido limitados conforme a lo expresado, será dado de baja de los cuadros de personal en actividad, y sus cargos serán suprimidos en forma definitiva de la estructura y agrupamiento funcional del organismo. Las partidas presupuestarias quedarán suprimidas y con ellas se constituirá - una partida global a la que se imputarán las sumas que se abonen a ese personal durante el lapso indicado en el artículo 3º.

ARTICULO 5º.- Los cargos suprimidos no serán rehabilitados bajo ningún concepto, aun cuando se trate de cargos de la estructura funcional del organismo, la que se considerará modificada por el hecho de la supresión.

ARTICULO 6º.- Los organismos excluidos de las normas del presente decreto quedan facultados para incorporarse al régimen del mismo.

ARTICULO 7º.- Otórgase la opción por una sola vez y por el término de treinta (30) días contados desde la publicación del presente decreto, para que el personal que desee ser incluido en las nóminas a que se refiere el artículo 3º lo haga voluntariamente, opción que deberá contar con la aceptación de la autoridad administrativa competente.

ARTICULO 8º.- Los pagos que se refiere el artículo 3º deberán comprender todas las asignaciones regulares y permanentes del cargo, incluido título y cargas de familia. - Ellos implican la caducidad de todos los permisos a que el agente tenga derecho, los que quedan comprendidos en - el lapso del licenciamiento.

ARTICULO 9º.- Los organismos mencionados en el artículo 1º deberán presentar el reajuste presupuestario que refleje la disminución de cargos, dentro de los sesenta (60) días de la publicación del presente decreto; mientras tanto - procederán a aplicar las normas del mismo con imputación a las autorizaciones vigentes para gastos en personal.

ARTICULO 10.- El presente régimen será de aplicación para el personal de los organismos suprimidos, refundidos con otros o reducidos, que deba ser dado de baja con motivo - de la aplicación de tales medidas, a partir del 1º de enero de 1962.

ARTICULO 11.- La indemnización establecida en el artículo 49 de la ley 16.432, así como las indemnizaciones por despido sin causa que correspondan según convenios laborales en vigor y que sean inferiores a la que en el presente decreto se establece, quedarán comprendidos en los pagos - que se efectúen al personal licenciado, de modo que no originarán pagos adicionales.

ARTICULO 12.- Los Directores Generales de Administración y de Personal o los funcionarios que hagan sus veces, serán directamente responsables del estricto cumplimiento - de todas las disposiciones contenidas en el presente decreto, bajo apercibimiento de considerarlos incursos en

falta grave y de disponer la instrucción de sumario administrativo, con suspensión automática del cargo, dándose intervención a la Procuración General del Tesoro de la Nación si la jerarquía del responsable así lo requiere, conforme a las normas en vigor.

ARTICULO 13.- El C.E.P.R.A. queda autorizado para producir las normas aclaratorias e interpretativas de las disposiciones del presente decreto.

ARTICULO 14.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 15.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Carlos A. Coll Benegas
Jorge Wehbe

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº. 1564.-

ACTO: DECRETO Nº 490/62.-

MATERIAS: RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - TRIBUNAL DE TASACIONES - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - OBRAS PUBLICAS - REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS

Buenos Aires, 17 de enero de 1962.-

Visto lo establecido en el artículo 49 de la Ley Nº 16.432 (*) de Presupuesto General de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que la citada norma legal autoriza al Poder Ejecutivo a suprimir dependencias, servicios y funciones y a redistribuirlos o transferirlos cuando razones de racionalización administrativa lo aconsejen;

Que en ejercicio de esas facultades el Poder Ejecutivo ha estudiado la función que cumplen los distintos organismos del Estado, llegando a la conclusión de que la existencia de algunos de ellos no se justifica, por haber variado las circunstancias que determinaron su creación;

Que sin perjuicio de considerar ulteriormente la

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1552.-

modificación de la Ley Nº 14.439 (") orgánica de los Ministerios Nacionales, el Poder Ejecutivo considera que pueden anticiparse modificaciones estructurales, autorizadas por la norma legal citada al principio, que permitan avanzar en la solución definitiva de los problemas de esa índole que se plantean;

Que tal es el caso de la Secretaría de Estado de Obras Públicas, la cual reune sólo un resto de las funciones que históricamente determinaron la creación del ex-Ministerio de Obras Públicas, pues las más importantes fueron antes de ahora transferidas a la Secretaría de Transportes y a la de Energía y Combustibles;

Que las funciones que conserva esa Secretaría de Estado encuadran en la función específica de otras entidades de jerarquía ministerial, en las que racionalmente deben tener ubicación para hacer efectiva una auténtica coordinación de servicios tal el caso de la actividad constructiva en materia portuaria y vial que integra el complejo de los transportes;

Que algunas de las funciones generales en materia de trabajos públicos tienen su correcta ubicación en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos por su jurisdicción más amplia;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación y la Dirección Nacional de Vialidad actuarán, en el futuro, por intermedio del Ministerio de Obras y Servicios Públicos .

(") Ver Digesto Administrativo Nº 505.-

ARTICULO 2º.- Transfiérese a la jurisdicción de la Secretaría de Estado de Transporte, la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, hasta tanto se cumpla el proceso de liquidación y transferencia a la Administración General de Puertos dispuesta por el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 3º.- Transfiérese a la jurisdicción de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería la Dirección Nacional de Construcción de Elevadores de Granos. La citada Secretaría de Estado propondrá al Poder Ejecutivo - en el término de sesenta (60) días la modificación de su estructura que sea consecuencia de esta incorporación. La Dirección Nacional que se transfiere lo hará con todo su personal, bienes muebles e inmuebles y recursos con - que atiende las obras a su cargo.

ARTICULO 4º.- Transfiérese al Ministerio de Obras y Servicios Públicos la ubicación presupuestaria del Consejo del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y Comisión Arbitral de la Ley 12.910. La citada transferencia implicará la de las partidas con que se atienden los gastos de los organismos mencionados y del personal de sus respectivas secretarías.

En las mismas condiciones, transfiérese a la Dirección General Impositiva al Tribunal de Tasaciones, cuya presidencia será ejercida por el titular de la citada Dirección General.

ARTICULO 5º.- Las funciones de la Dirección Nacional de Arquitectura deberán cumplirse por los organismos destinatarios de las obras respectivas con arreglo al régimen establecido para estos trabajos. La transferencia de la documentación respectiva deberá efectuarse dentro del - término improrrogable de noventa (90) días contados desde la publicación del presente decreto. Las obras en eje

cución serán continuadas por los organismos mencionados al principio de este artículo, a cuyo efecto le serán - transferidas o devueltas las partidas con que se atienden sus gastos.

ARTICULO 6º.- El Ministerio de Obras y Servicios Públicos procederá a proponer al Poder Ejecutivo, dentro de los treinta (30) días, la estructura orgánica, agrupación funcional y el reajuste presupuestario que sea consecuencia de las modificaciones que por el presente decreto se establecen, quedando facultado para incorporar personal de los organismos auxiliares de la Secretaría de Estado de Obras Públicas hasta un máximo de 200 agentes.

ARTICULO 7º.- Los artículos 1º, 2º, 3º y 4º, serán de cumplimiento inmediato.

ARTICULO 8º.- El Ministerio de Obras y Servicios Públicos se hará cargo de los archivos de la Secretaría de - Estado, debiendo transferir paulatinamente a los otros Ministerios, Secretarías y Organismos del Estado, la documentación que corresponda a las obras o servicios que ellos atienden.

ARTICULO 9º.- Dentro de los sesenta (60) días de la fecha de publicación del presente decreto deberá registrarse la baja de todo el personal de las Direcciones Generales de Administración, Asuntos Jurídicos, Personal y Servicios Generales y Obra Social de la Secretaría de - Estado de Obras Públicas, así como de las otras dependencias no transferidas. Dicha baja se producirá automáticamente al vencimiento de ese plazo para aquellos agentes que no hayan sido transferidos con arreglo a lo dispuesto en el presente decreto. La baja del personal de la Dirección Nacional de Arquitectura se producirá - automáticamente una vez vencido el plazo fijado en el - artículo 4º.-

ARTICULO 10.- El Ministerio de Obras y Servicios Públicos se hará cargo de los locales e inmuebles que desocupe la Secretaría de Estado de Obras Públicas en la Capital Federal y en el interior debiendo transferir a la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación para su venta, aquellos que no destine a sus propias necesidades. En la misma forma se procederá con respecto a los bienes muebles, maquinarias, automotores, materiales y útiles.

ARTICULO 11.- El personal que sea dado de baja será indemnizado en las condiciones establecidas en el régimen fijado para la reducción del personal excedente del Estado.

ARTICULO 12.- Encomiéndase al Ministerio de Obras y Servicios Públicos las tareas de liquidación final de los organismos que se disuelven.

ARTICULO 13.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Obras y Servicios Públicos y de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 14.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI - José Mazar Barnett -
Carlos A.Coll Benegas - Jorge Wehbe

ACTO: DECRETO Nº 504/62.-

MATERIAS: CONTRATACIONES - COMPRA-VENTA - MUEBLES Y UTILES - TELEFONOS - SERVICIOS DE ORGANIZACION Y METODOS - INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - C.E.P.R.A.

Buenos Aires, 17 de enero de 1962.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que es necesario racionalizar el equipamiento de las oficinas, a fin de obtener el mayor rendimiento posible del espacio y de los equipos;

Que en virtud de lo establecido en los decretos Nos. 10.976/58 (') y 4.651/61 ("), los organismos principales del Poder Ejecutivo deben tener a la fecha constituídos sus Servicios de Organización y Métodos, los que se encuentran habilitados para efectuar los estudios respectivos;

Que esta tarea debe tener especialmente en cuenta - la provisión de inmuebles, muebles y equipos de oficinas, a cuyo fin debe estatuirse un procedimiento que asegure la intervención de los citados Servicios de Organización y Métodos;

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 683.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1421.-

Por ello y atento lo propuesto por el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (CEPRA);

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- A partir de la fecha de publicación del presente decreto, los servicios de compras o suministros de todos los organismos civiles del Estado, en jurisdicción del Poder Ejecutivo, inclusive las Empresas del Estado, no tramitarán ninguna solicitud de adquisición de inmuebles para oficinas, provisión de muebles y/o equipos de oficina (escritorios, bibliotecas, mesas de trabajo, máquinas de escribir, de contabilidad, conjuntos electromagnéticos o electrónicos, equipos de microfilmación, equipos de reproducción de documentos, instalación y/o reestructuración de sistemas de intercomunicadores, instalación y/o reestructuración de centrales telefónicas internas, instalación y/o traslado de líneas telefónicas existentes), si dichas órdenes no están acompañadas de un informe del respectivo SERVICIO DE ORGANIZACION Y METODOS, del que surja la necesidad de la provisión que se solicita.

ARTICULO 2°.- Si en alguna jurisdicción no existiera SERVICIO DE ORGANIZACION Y METODOS constituído con arreglo a las normas de los decretos Nros. 10.976/58 y 4.651/61, el informe respectivo deberá ser expedido por el DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION Y METODOS del INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ISAP).

ARTICULO 3°.- A los efectos del control respectivo, el INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ISAP) comunicará a la SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA y al TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, el nombre de los organismos del Estado que hayan constituído sus servicios de Organización y Métodos en las condiciones del decreto N° 4.651/61.-

ARTICULO 4º.- Los Servicios de Organización y Métodos que no se encontraran en condiciones de emitir su dictamen, - por no contar con especialistas en alguno de los proble - mas sometidos a su consideración, quedan autorizados para requerir directamente la colaboración del INSTITUTO SUPE- RIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ISAP), el que deberá pro- ceder de inmediato a enviar un técnico al Servicio solici tante a efectos de que en colaboración con el personal - del mismo, efectúe el estudio correspondiente.

ARTICULO 5º.- Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemen te, toda adquisición de inmuebles y/o equipos electrónicos o electromagnéticos deberá contar con aprobación expresa del Poder Ejecutivo en los organismos centralizados y des centralizados o autárquicos. En las Empresas del Estado deberá contar con la aprobación del Síndico.

ARTICULO 6º.- Las compras o provisiones efectuadas en con travención a lo dispuesto en el presente decreto, harán responsable del importe de los elementos provistos al Je- fe de la dependencia solicitante y al Jefe de los servi - cios de compra y/o suministros intervinientes; todo ello sin perjuicio de las sanciones administrativas que corres pondan.

ARTICULO 7º.- El TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION imparti rá las instrucciones correspondientes a sus delegados, a fin de que los mismos no aprueben ninguna actuación en in fracción a lo dispuesto y efectúen las comunicaciones per tinentes a dicho Tribunal y al COMITE EJECUTIVO DEL PLAN DE RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA (C.E.P.R.A.), a los e- fectos pertinentes.

ARTICULO 8º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 9º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Carlos A.Coll Benegas
Jorge Wehbe

ACTO: DECRETO Nº 492/62.-

MATERIAS: RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - OBRAS PUBLICAS - CONTRATACIONES - OBRAS ARQUITECTONICAS

Buenos Aires, 17 de enero de 1962.-

Visto lo dispuesto por el decreto sobre centralización de tareas administrativas vinculadas con la realización de las obras arquitectónicas del Estado, y

CONSIDERANDO:

Que es indispensable dejar claramente fijados los principios esenciales que deben regir la aplicación de las normas contenidas en el mismo, evitando que ellas se traduzcan en el indebido mantenimiento de trámites y organismos innecesarios, en grave detrimento de los fines perseguidos por la política de racionalización burocrática en que está empeñado el actual Gobierno;

Que asimismo es necesario asegurar un correcto aprovechamiento de los predios urbanos en las obras arquitectónicas que realiza el Estado Nacional, con el objeto de impedir o corregir afectaciones antieconómicas o antifuncionales que lesionan los legítimos intereses colectivos y perjudican también el patrimonio fiscal;

Que para la plena consecución de tales objetivos deben arbitrarse normas adecuadas que reglen la actividad administrativa en esta materia, a fin de que se cumplan las exigencias legales y técnicas que la condicionan, -

//-

con el mínimo empleo de personal y trámites y con el máximo de eficacia, responsabilidad y rapidez;

Que para ello habrá que prever la modificación de las estructuras administrativas clásicas, que no responden a las nuevas concepciones enunciadas y que demoran innecesariamente la pronta resolución de los problemas que origina la realización de tales obras, diluyendo la responsabilidad de los funcionarios y organismos intervinientes;

Que, asimismo, corresponde adoptar previsiones para facilitar la liquidación de los organismos constructores que se suprimen y para atender los gastos comprometidos con anterioridad;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Créase el Consejo Coordinador de las Obras Arquitectónicas en jurisdicción del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el cual intervendrá en forma exclusiva y directa en la aprobación del emplazamiento y en la formulación del anteproyecto de los edificios públicos que el Estado Nacional construya. Para decidir acerca de la ubicación que corresponda dar a los mismos, el Consejo Coordinador de las Obras Arquitectónicas analizará las necesidades del servicio a que deben destinarse y la situación de los predios respectivos dentro del éjido urbano, con miras a su más correcto y total aprovechamiento. Ese análisis comprenderá los aspectos técnicos urbanísticos y económicos involucrados, dentro de las previsiones que corresponda adoptar en vista al futuro desarrollo de los centros poblados. Si como resultado de ese análisis se llegare a la conclusión de que la ubicación concuerda con las necesidades del servicio público, pero que el predio es susceptible de mayor aprovechamiento, el Consejo Coor-

dinador de las Obras Arquitectónicas estudiará la forma - en que puede ejecutarse una edificación que aproveche integralmente las capacidades del terreno, destinando las superficies cubiertas excedentes a otros usos públicos o privados y elevando los planes de financiación respectivos.

ARTICULO 2º.- El Consejo Coordinador de las Obras Arquitectónicas realizará un censo de los edificios públicos - nacionales, a fin de constatar su adecuación a los principios funcionales expuestos en este decreto y elevará un - plan progresivo para la institución de los que no respondan a un criterio de racional cumplimiento de los mismos, teniendo en cuenta los aspectos financieros, económicos , urbanísticos y arquitectónicos involucrados en ellos. Dicho censo deberá efectuarse en el plazo de 90 (noventa) - días contados desde la publicación del presente.

ARTICULO 3º.- El desarrollo de los anteproyectos a que se refiere el artículo 1º, en proyectos definitivos y de detalle, así como la confección de la documentación complementaria y la dirección y ejecución de la obra, se llevarán a cabo por contrato.

ARTICULO 4º.- Para cada obra o conjunto de obras según lo determine la autoridad jurisdiccional competente, se constituirá una Comisión Ejecutiva de tres funcionarios, integrada por un ingeniero o arquitecto, un contador y un abogado, controlará el estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa y del director de las obras, visando los certificados de obra expedidos por este último, sin cuyo requisito no tendrá validez alguna.

La Comisión tendrá amplias facultades para investigar y comprobar los casos de incumplimiento y para disponer - las intimaciones y órdenes que en su virtud corresponda adoptar por parte de la Administración con carácter urgente. Cuando las irregularidades debidamente constatadas - configuren causales de rescisión por culpa de los contra-

tistas, la Comisión elevará un informe circunstanciado y preciso, solicitando la aplicación de dicha medida. El organismo administrativo competente proveerá a dicho pedido sin más trâmite, en base exclusiva del informe producido y dentro del plazo de 15 (quince) días de recibido el mismo. La resolución que recaiga será ejecutoria, salvo el recurso jerárquico ante el Poder Ejecutivo, previsto por el decreto Nº 7.520/44 (*).

La Comisión intervendrá asimismo, con competencia exclusiva, en todos los pedidos, reclamos y cuestiones que plantee la Empresa o el Director de las obras y podrá resolver por sí misma los que no sean del resorte privativo de las autoridades superiores, tales como aprobación de las modificaciones del proyecto y presupuesto, alteración de las condiciones del contrato o pedidos de rescisión sin culpa por parte del contratista, las que deberá elevar con opinión fundada, para su oportuna resolución.

En todas las cuestiones reservadas a su conocimiento o intervención, la Comisión deberá expedirse dentro del plazo perentorio e improrrogable de 10 (diez) días con excepción del visado de los certificados de obra que deberá realizarse dentro del término de 3 (tres) días de recibido.

Los miembros de la Comisión serán personalmente responsables, desde el punto de vista civil, penal y administrativo, del correcto cumplimiento de las funciones que le están confiadas, dentro de la competencia profesional que a cada uno de ellos corresponde, así como de la observación estricta de los términos que este decreto les fija para expedirse en los asuntos en que deban intervenir.

ARTICULO 5º.- Las obras en ejecución, así como las licitadas y/o adjudicadas a la fecha del presente decreto continuarán realizándose de acuerdo al régimen contractual

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 43.-

vigente. La inspección de las mismas y liquidación de certificados se efectuarán con personal transitorio en número reducido, que será dado de baja a medida que cada obra termine. Los distintos organismos administrativos sólo podrán mantener en su estructura permanente un reducido sector de planificación de inversiones con la estructura que deberá aprobar el Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.). El personal excedente de las dependencias que actualmente atienden las construcciones, deberá ser dado de baja en las condiciones de licenciamiento establecidas para el personal excedente del Estado. Fíjase el término improrrogable de 30 (treinta) días contados desde la publicación del presente decreto para dar cumplimiento a lo establecido en este artículo.

ARTICULO 6º.- La Dirección Nacional de Arquitectura deberá transferir a los organismos destinatarios de las obras que realiza, la documentación correspondiente, a efectos de que las mismas sean continuadas en las condiciones previstas en el presente decreto. A contar de los 90 (noventa) días de la fecha, la citada documentación deberá estar en poder de los organismos aludidos.

ARTICULO 7º.- Todos los trabajos que actualmente se realizan por administración, cualquiera sea su importancia y naturaleza deberán efectuarse por contrato, a cuyo efecto se realizarán de inmediato los concursos o licitaciones que corresponda.

ARTICULO 8º.- La Dirección Nacional de Arquitectura procederá de inmediato a suprimir todas las dependencias, delegaciones, depósitos de la Capital y del interior del país, transfiriendo los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Estado a la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación para su enajenación, salvo aquellos indispensables que la misma Secretaría determine.

ARTICULO 9º.- Dentro del plazo improrrogable de 60 (sesen

ta) días contados desde la fecha de publicación del presente, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos someterá al Poder Ejecutivo la nómina del personal de la Dirección Nacional de Arquitectura afectada al estudio, proyecto, dirección, construcción y liquidación de obras que deberá ser dado de baja en las condiciones establecidas en el artículo 49 de la Ley Nº 16.432 (*) y en el régimen de licenciamiento del personal excedente del Estado.

ARTICULO 10.- Dentro de los 30 días de la fecha, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos someterá al Poder Ejecutivo el proyecto de organización y funcionamiento del Consejo Coordinador de las Obras Arquitectónicas que se crea en el artículo 1º, en el que tendrán representación necesaria los Ministerios y Secretarías de Estado en cuyas jurisdicciones se realizan trabajos públicos.

ARTICULO 11.- Derógase toda disposición que se oponga a lo establecido en el presente decreto.

ARTICULO 12.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de Obras y Servicios Públicos y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 13.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - José Mazar Barnett -
Carlos A. Coll Benegas - Jorge Wehbe.

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1552.-

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	N°. 1567.-

ACTO: DECRETO N° 496/62.-

MATERIAS: RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - PERSONAL - PROHIBICIONES - ECONOMIAS - VACANTES

Buenos Aires, 17 de enero de 1962.-

Visto que el Poder Ejecutivo ha adoptado diversas medidas para reducir los gastos y racionalizar la Administración Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que las tareas de reducción de los gastos fiscales y de racionalización administrativa en que se halla empeñado el Gobierno Nacional guardan entre sí una íntima correlación y exigen la institución de un régimen de absoluta eficacia y de relativa permanencia que asegure su plena consecución dado el tiempo requerido para el total desarrollo de las mismas;

Que las medidas de emergencia adoptadas hasta el momento no han cumplido con estos objetivos por carecer de esos caracteres que la experiencia adquirida ha demostrado como indispensables a los fines propuestos;

Que en consecuencia corresponde disponer la prohibición absoluta del ingreso de nuevos agentes y de la provisión de cargos vacantes, en todo el ámbito de la Administración Nacional, sin excepción de ninguna naturaleza, salvo la que resulte de la consideración especial

//-

de los casos particulares de coberturas de cargos esencia les, y por tanto, imprescindibles, para el normal desarro llo de las actividades básicas del Estado;

Que a tal efecto corresponde dejar sin efecto las excepciones acordadas al régimen del decreto Nº 5.006/61(*) prorrogado por decreto nº 11.177/61 (**), teniendo especialmente en cuenta que en casi todos los casos la finalidad que determinó excepciones de esa índole ya ha sido cumplida;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Déjase sin efecto, a partir de la publicación del presente decreto, todas las excepciones acordadas al decreto nº 5.006/61, prorrogado por decreto número 11.177/61, salvo las determinadas en los decretos números 6.311/61 (+), 5.831/61 y 8.498/61 (-).

ARTICULO 2º.- La infracción a las normas del citado decreto, por parte de los funcionarios con competencia legal para su aplicación o contralor de su cumplimiento, constituirá falta grave administrativa y será considerada con la pena de exoneración por incumplimiento de los deberes del funcionario público responsable.

ARTICULO 3º.- A los efectos de la aplicación de la sanción prevista en el artículo anterior, la autoridad superior que corresponda decretará la inmediata suspensión sin sueldo del inculpado y deberá adoptar las medidas necesa-

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1406.-
(**) Ver Digesto Administrativo Nº 1515.-
(+) Ver Digesto Administrativo Nº 1431.-
(-) Ver Digesto Administrativo Nº 1471.-

rias para que el sumario respectivo se sustancie y eleve dentro del plazo de 20 (veinte) días hábiles. La pena deberá aplicarse, o en su caso proponerse, dentro de los 10 (diez) días subsiguientes. Los términos señalados serán perentorios e improrrogables.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI - Carlos A. Coll Benegas
Jorge Wehbe

ACTO: DECRETO Nº 497/62.-

MATERIAS: RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - INSTITUTO - SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - SERVICIO CENTRAL DE ANALISTAS DE MEDICION DEL TRABAJO - PERSONAL

Buenos Aires, 17 de enero de 1962.-

Visto el decreto ley Nº 4.027/58 (°), las disposiciones del decreto Nº 2.351/61 (°°), lo aconsejado por el Instituto Superior de Administración Pública y lo propuesto por el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa, y

CONSIDERANDO:

Que por elementales razones de racionalización administrativa es de imperiosa necesidad fijar a la brevedad, con criterio técnico, las dotaciones básicas mínimas indispensables para que los distintos organismos de la Administración Nacional cumplan con eficacia las funciones asignadas;

Que las excepciones a las disposiciones generales del decreto Nº 413/60 (°), deben subordinarse a una compro //-

(°) Ver Digesto Administrativo Nº 479.-
(°°) Ver Digesto Administrativo Nº 1371.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1066.-

bación fehaciente de las necesidades invocadas, en la forma prevista en el inciso 2) ítem b) del Plan de Trabajo anexo al artículo 2° del decreto N° 2.351/61;

Que los estudios de medición del trabajo a que se refiere este último decreto y los de fijación de dotaciones básicas deben ser realizados por personal especializado, convenientemente seleccionado y adecuadamente retribuido;

Que la falta de experiencia en esta materia hace aconsejable establecer un sistema de transición, hasta tanto pueda fijarse un régimen definitivo para la determinación de las dotaciones básicas de los organismos;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Encomiéndase al I.S.A.P., la tarea de proponer las dotaciones básicas de todos los organismos civiles de la Administración Pública Nacional, a cuyo fín constituirá un Servicio Central de Analistas de Medición del Trabajo. El Estudio citado comprenderá tanto los organismos de la Administración central, como los descentralizados y autárquicos, empresas del Estado, plan de trabajos públicos y cuentas especiales.

ARTICULO 2°.- Encomiéndase al Instituto Superior de Administración Pública la realización de Cursos de Capacitación en Técnicos de Medición del Trabajo y la certificación de que los egresados reunen las condiciones requeridas para integrar el Servicio Central mencionado en el artículo anterior. Estos cursos quedarán incluidos en el régimen establecido por los decretos Nros. 4.649/61 y 4.652/61 (=) y equiparados a lo previsto en el artículo 1°, inc. d) del primer decreto citado.

(=) Ver Digesto Administrativo N° 1424.-

ARTICULO 3º.- El personal que integrará el Servicio Central a que se refiere el artículo 1º, será seleccionado de una nómina que deberán proponer todos los organismos de la administración nacional mencionados en el artículo 1º a solicitud del I.S.A.P.- Las nóminas serán integradas por agentes de concepto sobresaliente, con jerarquía no inferior a Clase B, Grupo II del escalafón general aprobado por decreto Nº 9.530/58, o sus equivalentes de otros escalafones, que reúnan las condiciones generales que establezca la citada Dirección General.

ARTICULO 4º.- Las nóminas deberán ser enviadas al I.S.A.P., conjuntamente con una información completa sobre los antecedentes personales de los agentes incluidos, dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la solicitud.

ARTICULO 5º.- Los Analistas de Medición del Trabajo que integran el Servicio Central revistarán "en comisión" hasta tanto se establezca un régimen permanente. A los fines de sus carreras administrativas, dichos agentes conservarán todos sus derechos, considerándose la tarea asignada como antecedente favorable que constará en sus respectivos legajos.

ARTICULO 6º.- El I.S.A.P., designará, de su personal permanente, al agente previamente capacitado en las técnicas de medición del trabajo, que actuará como Supervisor y Coordinador de los Analistas del Servicio Central.

ARTICULO 7º.- Los Analistas de Medición del Trabajo y el Supervisor y Coordinador percibirán una bonificación mensual de tres mil pesos moneda nacional (m$n. 3.000) mientras actúen efectivamente en sus tareas específicas a las órdenes del I.S.A.P.

ARTICULO 8º.- Con intervención de la Secretaría de Estado de Hacienda, el I.S.A.P. propondrá el reajuste presupuestario requerido para atender los mayores gastos dispuestos en el artículo anterior.

ARTICULO 9º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Carlos A. Coll Benegas
Jorge Wehbe.

ACTO: DECRETO Nº 500/62.-

MATERIAS: RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - PRESUPUESTO PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - C.E.P.R.A.

Buenos Aires, 17 de enero de 1962.-

Visto que es permanente preocupación del Poder Ejecutivo la reducción de los gastos públicos, como medio para dismimuir el déficit fiscal, y

CONSIDERANDO:

Que el análisis comparativo de las partidas parciales presupuestarias de propaganda y publicidad de los organismos dependientes de la Administración Central, de las entidades descentralizadas, de las empresas del Estado, de los servicios de cuentas especiales y del plan de trabajos públicos, demuestran que las mencionadas partidas o créditos no responden a un ordenamiento racional;

Que en la mayoría de los casos no existe una programación previa en materia de propaganda, mientras que en otros la publicidad propiamente dicha (publicación de los llamados a licitación, informativos de carácter general o de interés público, pedidos de personal, etc.), absorbe la totalidad o la mayor parte de los créditos asignados, lo que induce a errores de interpretación que no se ajustan a la realidad;

//-

Que todo ello hace necesario dictar normas de procedimiento y de concepto a las que deberán ajustarse la programación y el contralor de los créditos asignados en materia de propaganda y publicidad, de conformidad con la misión específica de cada organismo, servicio o empresa del Estado, con el objeto de lograr las economías que se persiguen en este rubro, de acuerdo con la realidad presente del país;

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Modifícase la denominación y concepto de la partida parcial de propaganda y publicidad del Presupuesto General de Gastos de la Administración Nacional, la que en los próximos ejercicios financieros, inclusive el de 1961-62, se dividirá en partida parcial de propaganda y partida parcial de publicidad.

ARTICULO 2º.- La partida parcial de propaganda comprenderá los créditos asignados para gastos de promoción o intensificación de la venta o uso de los productos o servicios que elaboran o prestan las entidades descentralizadas y las empresas del Estado.

ARTICULO 3º.- La partida parcial de publicidad comprenderá los créditos asignados para los gastos que demande la difusión o la información de carácter general, tales como publicación de contratos sociales, convocatorias de asambleas, edictos, llamados a licitación, avisos de interés público, etc., de los organismos, servicios y empresas del Estado.

ARTICULO 4º.- En la oportunidad de efectuarse el ordenamiento del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Nacional para el ejercicio 1961-62, se procederá al reajuste de los créditos previstos para propagan-

da y para publicidad a que se refiere el artículo 1º, de conformidad con lo que se dispone por los artículos 2º y 3º y de acuerdo con las necesidades y funciones específicas o naturaleza de las tareas que cumplen los organismos, servicios y empresas del Estado.

ARTICULO 5º.- A los efectos indicados en el artículo anterior, como así también, para la asignación en los ejercicios venideros de los créditos para propaganda y para publicidad de conformidad con lo que determinan los artículos 2º y 3º, deberá elevarse previamente al C.E.P.R.A. el plan ordenado o programación de las tareas a realizar. En caso de que dicho Comité no lo observara en el término de 15 días de su recepción, se dará por aprobado; de lo contrario deberán introducirse los reajustes aconsejados por el mismo.

ARTICULO 6º.- Las publicaciones que deben efectuarse en cumplimiento de disposiciones legales se harán, como norma general, por el término que fijan las respectivas disposiciones. En los casos que las disposiciones legales establecen plazos mínimos o prevén, excepcionalmente, su aumento o reducción por razones de necesidad o emergencia, las publicaciones se harán únicamente, por el número en días que fija dicho término mínimo o por el plazo que normalmente establece la disposición respectiva. Si las disposiciones legales no lo especifican, las publicaciones se harán por el término de un (1) día solamente. En todos los casos los espacios comprometidos serán mínimos y su ubicación en los órganos periodísticos la más económica posible.

ARTICULO 7º.- En la preparación de los planes o programación de las tareas a realizar, de conformidad con lo que se establece por el artículo 5º, como así también en la ejecución de los mismos deberá prevalecer el principio de estricta economía de los gastos, ajustado al objetivo comercial o publicitario que se persigue.

ARTICULO 8º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 9º.- Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la Nación, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas, publíquese y archívese.-

FRONDIZI - Carlos A. Coll Benegas
Jorge Wehbe.

ACTO: DECRETO Nº 501/62.-

MATERIA: RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - C.E.P.R.A. - SISTEMA DE SUGERENCIAS - PERSONAL

Buenos Aires, 17 de enero de 1962.-

Visto el punto 6) del Plan de Trabajo aprobado por decreto Nº 2.351/61 (1), y

CONSIDERANDO:

Que en diferentes oportunidades y por medio de diversos actos de gobierno, el Poder Ejecutivo se ha preocupado de que la Administración del Estado alcance un constante grado de superación y perfeccionamiento, sin dejar por ello de reconocer las fallas que actualmente la aquejan ni las dificultades de todo orden que es preciso vencer para lograr un mejoramiento de su eficiencia;

Que el éxito en la consecución de este objetivo no depende de medios espectaculares aislados, sino que está perfectamente reconocido que el camino a seguir para lograr una administración superior depende, en especial, del esfuerzo constante y tenaz que ha de producir un mejoramiento paulatino y perdurable;

Que entre los procedimientos utilizados frecuentemente para realizar tales mejoras, se cuenta con el co-

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1371.-

nocido como sistema o programa de sugerencias recompensadas por el Gobierno de diferente forma, aún no aplicado con carácter general y sistemático en nuestra administración pública;

Que la experiencia extranjera en esta materia y su práctica en nuestra actividad privada han producido resultados altamente satisfactorios pues, además de procurar un real mejoramiento de las operaciones de la administración, han provocado un mayor entusiasmo y satisfacción del personal con su trabajo, al brindársele la oportunidad de contribuir y participar en el funcionamiento de su organismo, convirtiendo a todos los empleados en colaboradores potenciales en la tarea de mejorar los servicios;

Que además de tales beneficios, el sistema de sugerencias permite una mayor identificación del personal con los éxitos de la organización, produce una mejor comprensión del personal jerárquico respecto de la importancia del reconocimiento como estímulo a los agentes y convierte su descontento en crítica constructiva;

Que la dimensión de la Administración Pública y la dispersión de sus oficinas en todo el territorio del país, exigen la adopción de un sistema de ejecución descentralizada que permita actuar ágil y rápidamente, pues estas son las cualidades básicas que procurarán el éxito de la medida a adoptar;

Que es evidente que los funcionarios cuya actividad tenga por objeto el perfeccionamiento de la organización, no deben ser premiados por presentar recomendaciones que constituyen su obligación corriente;

Que en parecidas condiciones se encuentran los directores o jefes, una de cuyas más importantes obligaciones consiste en procurar un mejor funcionamiento de su dependencia. Sin perjuicio, en ambos casos, de que en la evaluación de sus méritos se tengan en cuenta las mejoras de que son autores;

Que es conveniente aplicar este sistema con carácter experimental, a fin de recoger experiencias y sugerencias sobre su marcha y resultados y, luego de un lapso prudencial, llegar a estructurar un programa más estable y posiblemente más eficiente;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Créase en la Administración Pública Nacional con carácter de provisional un Sistema de Sugerencias destinado a concretar y estimular la contribución efectiva de los funcionarios y empleados públicos, por medio de la presentación de ideas propias, conducentes a obtener una reducción positiva de los gastos públicos o actividades a cargo de la Administración, ya sea en cuanto a la realización más cabal del servicio, o una más rápida, frecuente, exacta o amplia prestación.

ARTICULO 2º.- Con las excepciones que se establecen expresamente, podrán participar en este Sistema todos los agentes de la Administración Pública Nacional dependiente del Poder Ejecutivo, sean de la administración central o de entidades descentralizadas.

ARTICULO 3º.- No podrá presentar sus ideas en este Sistema de Sugerencias el personal del Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.), ni el de los diferentes servicios de Organización y Métodos o de aquellas oficinas que hagan sus veces, respecto de mejoras a aplicar en la jurisdicción donde actúan. Además, no podrán participar los agentes de la Clase "A" del Escalafón aprobado por decreto Nº 9.530/58, o sus equivalentes de los otros escalafones en vigor, por sugerencias a aplicar en la dependencia o sector bajo su dirección o en la que prestan servicios, sin perjuicio de que las mejo-

ras o perfeccionamiento que apliquen por su iniciativa personal, sirvan como factor de mérito para evaluar su actuación.

ARTICULO 4º.- La Presidencia de la Nación, cada Ministerio y Secretaría de Estado y el Tribunal de Cuentas de la Nación, organizarán para su administración central y para los organismos descentralizados de su jurisdicción, el Sistema de Sugerencias, ajustándose a las siguientes bases:

a) La dependencia responsable de la divulgación, promoción y correcta aplicación será la dirección, departamento o gerencia de personal u organismo que haga sus veces;
b) Dictaminará sobre la aprobación o rechazo de la sugerencia presentada una Comisión de composición permanente, que deberá contar con el asesoramiento de los técnicos o funcionarios especializados que la naturaleza del asunto requiera y que será presidida por un representante de la autoridad superior de la jurisdicción;
c) Cada Ministerio o Secretaría de Estado determinará las Comisiones de Sugerencias que funcionará en su respectiva jurisdicción;
d) La decisión final de la respectiva Comisión de Sugerencias, aceptando o rechazando, con fundamentos, la idea, será inapelable;
e) La decisión de la respectiva Comisión aceptando la sugerencia presentada, importará al mismo tiempo, una orden para su inmediata puesta en práctica y de su cumplimiento será responsable la autoridad superior del organismo donde se deba aplicar la mejora;
f) La resolución de la Comisión de Sugerencias, que acepte una mejora propuesta, determinará al mismo tiempo, teniendo en cuenta la importancia de la misma, la forma en que se expresará el reconocimiento de la Administración de acuerdo al siguiente detalle:
   1) Mención especial privada.
   2) Mención especial pública.

3) Mención especial pública por mérito extraordinario (Artículo 16, Estatuto)
4) Mención especial por mérito extraordinario (Artículo 16, Estatuto) y recomendación a I.S.A.P.

g) En todos los casos se tomará nota en el legajo personal del interesado;
h) La autoridad superior de cada jurisdicción dispondrá las medidas necesarias para que las sugerencias lleguen a las respectivas comisiones antes de los 30 - (treinta) días de haber sido presentadas;
i) Las Comisiones de Sugerencias deberán expedirse en un plazo máximo de 60 (sesenta) días.

ARTICULO 5º.- Las sugerencias de gran importancia efectiva para la buena marcha de la Administración Pública, ya sea por las economías que produzcan o por las mejoras que originen en los servicios, podrán ser remitidas a la consideración del Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.) para que éste dictamine si corresponde asignar una recompensa en efectivo.

Para su consideración, el Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.) podrá hacerse asesorar por los técnicos y especialistas que estime necesario, de forma tal de agotar el estudio sobre el valor de la sugerencia presentada.

El Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.) podrá aconsejar recompensas en efectivo por la presentación de sugerencias, cuando ellas reúnan a su juicio las siguientes condiciones:

a) Que sean legalmente factibles;
b) De sencilla y rápida puesta en práctica;
c) Que produzcan grandes economías en los gastos públicos, medidas en el lapso de un ejercicio, o bien que introduzcan substanciales mejoras en la prestación de los servicios públicos o actividades de las dependencias.

ARTICULO 6º.- Las recompensas en efectivo cuyo monto unitario máximo será de cien mil pesos moneda nacional (pesos - 100.000.- m/n.), se graduarán de acuerdo a los siguientes factores:

a) Economías efectivas que produzca la aplicación de la mejora en un ejercicio fiscal;
b) Evaluación de la mejora en las actividades del organismo, con referencia a un ejercicio fiscal;
c) Estimación del mejoramiento de los servicios públicos, especialmente desde el punto de vista de los usuarios.

El Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.) dictaminará si corresponde recompensa en efectivo y propondrá su monto. El Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A.) con intervención de la Secretaría de Estado de Hacienda considerará la propuesta y dispondrá su pago que se hará efectivo por el Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.) con los - créditos que a tal efecto se deberán arbitrar en su presupuesto.

ARTICULO 7º.- A los efectos dispuestos en el artículo anterior, el Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.) podrá proponer en cada año fiscal, las siguientes recompensas en efectivo:

Una	(1)	de m$n. 100.000.-
Dos	(2)	de m$n. 50.000.-
Cinco	(5)	de m$n. 10.000.-
Diez	(10)	de m$n. 5.000.-

ARTICULO 8º.- Cuando una Comisión de Sugerencias estime que el autor de una idea aprobada posee condiciones que aconsejen la realización de cursos de perfeccionamiento, lo pondrá a consideración del Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.), a fin de que este Instituto gestione - la concesión de una beca de estudios por intermedio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas u otros organismos nacionales o internacionales.

ARTICULO 9º.- A los efectos de una adecuada comparación y ponderación de las ideas presentadas al Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.) este Instituto las considerará a todas simultáneamente durante los dos últimos meses de cada año fiscal.

ARTICULO 10.- El Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.) informará al Poder Ejecutivo sobre la aplicación y resultados del Sistema que se instituye, aconsejando al mismo tiempo, las medidas que estime conveniente adoptar a fin de asegurar su mayor éxito. A este fin el citado Instituto podrá requerir de los distintos organismos públicos la información necesaria.

ARTICULO 11.- Con intervención de la Secretaría de Estado de Hacienda se incluirá en el presupuesto del Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.) la partida correspondiente para los pagos por premios o sugerencias.

ARTICULO 12.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 13.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Carlos A.Coll Benegas
Jorge Wehbe.

ACTO: DECRETO Nº 498/62.-

MATERIAS: INMUEBLES DEL ESTADO - PATRIMONIO DEL ESTADO
MUEBLES Y UTILES - TRIBUNAL DE TASACIONES

Buenos Aires, 17 de enero de 1962.-

Visto los artículos 50 y 52 de la Ley Nº 16.432 (º), y

CONSIDERANDO:

Que el citado artículo 50 de la Ley Nº 16.432 ratifica y complementa las previsiones del artículo 37 de la Ley Nº 15.796 ("), reglamentado por el decreto Nº 3.660/61 (°);

Que es necesario reglamentar la norma legal recientemente sancionada, en lo no contemplado en el decreto Nº 3.660/61;

Que, asimismo, es necesario reglamentar las condiciones básicas para vender bienes muebles que no se encuentran en situación de desuso o de rezago;

Por ello,

//-

(º) Ver Digesto Administrativo Nº 1543.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1334.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1395.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Ratifícase, como reglamentación del artículo 50 de la Ley Nº 16.432, las disposiciones del decreto Nº 3.660/61 con las modificaciones y ampliaciones consignadas en los artículos siguientes.

ARTICULO 2º.- Facúltase a la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación para delegar en organismos del Estado centralizados o descentralizados, incluídos los bancos oficiales, con los cuales hayan celebrado convenios para la ejecución y administración de las ventas de inmuebles, la determinación de los procedimientos de venta, siendo entendido que el remate público se realizará en todos los casos salvo autorización expresa acordada por dicha Secretaría.

Igualmente dicha Secretaría podrá convenir la delegación de esos organismos de la celebración de los actos jurídicos necesarios al perfeccionamiento de las transferencias; de la designación de los oficiales públicos que las tendrán a su cargo, así como la administración de las cobranzas por saldos de precio.

ARTICULO 3º.- Para la venta de bienes inmuebles a entidades oficiales o personas de derecho privado que los soliciten con el fin de construir viviendas, la Secretaría Técnica exigirá la presentación previa de un plan de construcción y financiación que en forma documentada justifique:

a) La viabilidad técnica y financiera del proyecto.
b) La conveniencia social, económica y urbanística del plan de construcciones.

Para el estudio de tales planes la Secretaría podrá recurrir a organismos especializados del Estado o bien realizarlos con técnicos de su dependencia o mediante contratos con técnicos o estudios privados. En ningún caso

la aprobación del plan tendrá otro efecto que el de posibilitar la venta directa que autoriza la Ley Nº 16.432.

ARTICULO 4º.- Una vez aprobado el plan a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría Técnica suscribirá el boleto de venta sobre la base del precio que resulte de la tasación que para inmuebles ubicados en la Capital Federal efectúe el Tribunal de Tasaciones y para los del interior, indistintamente el citado Tribunal o los Bancos de la Nación Argentina e Hipotecario Nacional.

Las modalidades de pago del o de los inmuebles se condicionará a las características del sistema de financiación incluído en el plan aprobado.

ARTICULO 5º.- Transfiérese a la Secretaría del Transporte el "Fondo de Promoción Social" creado por el artículo 11 del decreto Nº 9.529/61, bajo cuya dependencia funcionará la cuenta especial a que el mismo se refiere.

A la citada cuenta especial ingresarán los fondos provenientes de las ventas de bienes de empresas ferroviarias que no tengan destino fijado por ley o por decreto del Poder Ejecutivo y que se realicen con arreglo al decreto Nº 3.660/61 y el presente, y las que tengan origen en la recuperación de la financiación de trabajos mencionados en el mismo artículo.

ARTICULO 6º.- La Secretaría Técnica aplicará las normas del decreto Nº 9.529/61 en todo aquello que no resulte modificado por el presente, tanto en lo relativo a la consideración y estudio de los planes de construcción de viviendas como al régimen de la cuenta especial a que se refiere el artículo anterior.

ARTICULO 7º.- La Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación podrá delegar la tramitación de la venta de los bienes muebles en los propios organismos de la administración central, tenedores de los bienes, manteniendo en todos los casos un control centralizado de las operaciones que se realicen.

ARTICULO 8º.- Los bienes muebles que no se encuentran en situación de desuso o de rezago, mencionados en el artículo 50 de la Ley Nº 16.432, tales como automotores radiados del servicio, o parte de ellos, serán puestos a disposición de la Secretaría Técnica para su venta, la que se efectuará por intermedio de la Dirección General de Suministros del Estado, de otros organismos especializados de carácter oficial o bien del propio organismo tenedor del bien, según lo considere más conveniente la citada Secretaría Técnica.

ARTICULO 9º.- El producido de la venta de automotores en desuso o radiados del servicio, o de parte de ellos, será ingresado a los créditos del organismo al que pertenecieran las unidades vendidas, en los casos siguientes:

a) Cuando la venta se efectúe con el objeto de adquirir nuevas unidades con destino a servicios generales.
b) Cuando los automotores se entreguen como parte de precio de unidades nuevas, destinadas también a servicios generales.

En ambos casos la renovación de las flotas respectivas debe estar previamente autorizada por la Secretaría Técnica en las condiciones del decreto Nº 413/60 (=).

Si existieran cuentas especiales para atender la renovación de flotas, el producido de la venta ingresará a esas cuentas.

ARTICULO 10.- Cuando se tratare de otros elementos como máquinas y/o equipos de imprenta, o de otra actividad o industria, o implementos de usos diversos, se aplicarán las normas de los artículos 8º y 9º.

ARTICULO 11.- En los casos en que la venta o entrega en pago de precio no resultare de un remate o licitación pública o privada, la Secretaría Técnica fijará el valor de

---

(=) Ver Digesto Administrativo Nº 1066.-

dichos bienes, a cuyo objeto requerirá de cualquiera de las reparticiones de la Administración Nacional la designación de uno o más técnicos para que la asesoren en la tasación respectiva. Los organismos requeridos, dentro de los cinco (5) días deberán comunicar a la Secretaría Técnica la designación del o de los funcionarios que de inmediato asumirán la función transitoria encomendada. También podrá la Secretaría Técnica requerir a organismos oficiales especializados la tasación o justiprecio de los bienes de referencia.

ARTICULO 12.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 13.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Carlos A.Coll Benegas
Jorge Wehbe.

ACTO: DECRETO Nº 503/62.-

MATERIAS: INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA- SERVICIOS DE ORGANIZACION Y METODOS - C.E.P.R.A MANUAL DE ORGANIZACION DEL GOBIERNO NACIONAL

Buenos Aires, 17 de enero de 1962.-

Visto lo dispuesto en el inciso 11) del Plan de Trabajos anexo al artículo 2º del decreto Nº 2351/61 (1), y lo propuesto por el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A.), y

CONSIDERANDO:

Que resulta evidente la falta de una información ordenada y actualizada que contenga los datos sobre la organización, estructura y funcionamiento de las oficinas públicas, su denominación, sede y teléfono, nombre del titular, etc. que sirva de guía y fuente de consulta para el público a fin de facilitar la iniciación y atención de los diversos trámites que realiza ante los organismos públicos;

Que la recopilación de informaciones básicas -utilizada frecuentemente en otros países- serviría de valioso medio auxiliar de las tareas de gobierno y administración, en cuanto podría presentar de una manera -

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1371.-

//-

ACTO: DECRETO Nº 503/62.-

MATERIAS: INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-
SERVICIOS DE ORGANIZACION Y METODOS - C.E.P.R.A
MANUAL DE ORGANIZACION DEL GOBIERNO NACIONAL

Buenos Aires, 17 de enero de 1962.-

Visto lo dispuesto en el inciso 11) del Plan de Trabajos anexo al artículo 2º del decreto Nº 2351/61 (1), y lo propuesto por el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A.), y

CONSIDERANDO:

Que resulta evidente la falta de una información ordenada y actualizada que contenga los datos sobre la organización, estructura y funcionamiento de las oficinas públicas, su denominación, sede y teléfono, nombre del titular, etc. que sirva de guía y fuente de consulta para el público a fin de facilitar la iniciación y atención de los diversos trámites que realiza ante los organismos públicos;

Que la recopilación de informaciones básicas -utilizada frecuentemente en otros países- serviría de valioso medio auxiliar de las tareas de gobierno y administración, en cuanto podría presentar de una manera -

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1371.-

//-

clara y actualizada la organización y funciones de las dependencias públicas y sus relaciones jerárquicas y funcionales;

Que es obligación principal de todo gobierno, en un régimen democrático, mantener permanentemente informado al pueblo de los asuntos de su administración, tanto en las oportunidades y con los recaudos que establecen las normas legales, como en toda ocasión que se juzgue conveniente. A tales fines la preparación y publicación de ese conjunto de informaciones en forma de manual, constituirá un vehículo de difusión y de divulgación que permitirá al pueblo conocer más y mejor la administración que sostiene con su trabajo y esfuerzo;

Que la publicación del referido manual facilitará asimismo, el conocimiento, estudio y crítica de la organización actual del Gobierno por parte de las asociaciones, instituciones y particulares dedicados al estudio de estos problemas, pues de esta manera se pone a disposición de los mismos un conjunto sistemático de informaciones difíciles de determinar, localizar, conocer y coordinar;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Encomiéndase al Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.), por intermedio de su Servicio de Organización y Métodos, la preparación y publicación del Manual de Organización del Gobierno Nacional, que reunirá en forma ordenada, sistemática y actualizada, de fácil consulta, los principales datos sobre la designación o nombre, , ubicación y teléfono de la sede y de sus dependencias, nombre de los directores superiores, forma de nombramiento, organización y funcionamiento, disposiciones legales y reglamentarias que rigen su actividad, etc. de los

Ministerios, Secretarías de Estado, entidades descentralizadas, incluyendo empresas del Estado y en general de todos los organismos o unidades que integran el Poder Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 2º.- Para la preparación y publicación del referido Manual fíjase un plazo máximo de un (1) año a partir de la fecha del presente decreto.

ARTICULO 3º.- Todos los organismos comprendidos en el artículo 1º del presente decreto prepararán y presentarán, bajo su exclusiva responsabilidad, en los plazos y condiciones que establezca el Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.) por intermedio de su Servicio de Organización y Métodos, la información que les requiera para su inclusión en el mencionado Manual.

El Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.) informará al Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A.), sobre las demoras e inconvenientes que pudiera afectar el cumplimiento oportuno de la misión que se le encomienda.

ARTICULO 4º.- El Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.) atenderá los gastos que ocasione la preparación y publicación del Manual con los créditos de su presupuesto, pero podrá incorporar transitoriamente y mediante adscripciones el personal de refuerzo que sea necesario hasta que haya recopilado y preparado todo el material.

Una vez terminada esa tarea y dentro del plazo fijado en el artículo 2º, el Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.) llamará a licitación pública para contratar la publicación del Manual con una firma de plaza, sobre la base de la auto financiación total o parcial del trabajo, conservando el Estado los derechos de propiedad sobre el mismo.

ARTICULO 5º.- Las informaciones del referido Manual se -

actualizarán en los plazos que oportunamente establezca el Poder Ejecutivo a propuesta del Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.), el cual llevará un fichero permanentemente actualizado de las informaciones a que se refiere el artículo 1º.

ARTICULO 6º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos del Interior y de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo -
Carlos A.Coll Benegas - Jorge Wehbe.



ACTO: RESOLUCION Nº 15 (Bis)

MATERIAS: PATRIMONIO DEL ESTADO - INMUEBLES DEL ESTADO MUEBLES Y UTILES - COMPRA-VENTA

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1961.-

Visto el Decreto Nº 3.660/61 (1), por el que se facultó a la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación, para realizar la venta de los bienes inmuebles del dominio privado del Estado Nacional Argentino, que no fueren necesarios para la prestación de servicios públicos, y

CONSIDERANDO:

Que por los incisos h) y k) del artículo 1º del mencionado decreto se atribuyó a esta Secretaría competencia para contratar los servicios profesionales indispensables para la ejecución de las ventas y designar a los funcionarios que intervendrán en todos los actos y contratos que corresponda y que suscribirán, en nombre del Estado Nacional Argentino todos los documentos públicos y privados que fueren menester otorgar;

Que una vez realizados y aprobados los remates respectivos, corresponde proceder a la entrega de la posesión de los bienes y al otorgamiento de las escrituras

---

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1395.-

traslativas de dominio, constitutivas de derechos reales y sus cancelaciones, así como cualesquiera otras que deban suscribirse con motivo de las ventas efectuadas;

Que por Decreto Nº 10.724/61(") se facultó a esta Secretaría Técnica para dar intervención a las instituciones bancarias que efectuaron las ventas, para que por ante los escribanos autorizantes inscriptos en sus registros ubicados en la misma jurisdicción en que se encuentran situados los inmuebles, se formalicen las escrituras públicas respectivas;

Que para tales actos es asimismo indispensable nombrar a los funcionarios que tendrán a su cargo desempeñarse en nombre y representación del Estado Nacional, con las facultades propias en cada caso;

Que, teniendo en cuenta que la venta de los inmuebles en cuestión y el otorgamiento de las respectivas escrituraciones se realiza por intermedio de Bancos con organismos especializados para la ejecución de tales tareas, con agencias y delegaciones en el interior del país, principios básicos de racionalización y buena administración hacen aconsejable encomendar tales funciones a las mismas instituciones públicas, de acuerdo a las normas y procedimientos que rigen en cada uno de ellos;

Que tal sistema permite usar los servicios de instituciones ya existentes, con experiencia en la materia, y evita el traslado innecesario de funcionarios con la consiguiente economía de gastos;

Por todo ello y en uso de las facultades conferidas por los incisos g), i), h) y k) del artículo 1º del Decreto Nº 3.660/61,

---

(") Ver Digesto Administrativo Nº 1523.-

EL SECRETARIO TECNICO DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION,

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Facúltase a las instituciones bancarias intervinientes (Banco de la Nación Argentina, Banco Hipotecario Nacional o Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires), en cada caso, para que por intermedio de sus funcionarios o agentes autorizados y responsables suscriban, en nombre del Estado Nacional Argentino, los boletos de compra-venta referentes a las ventas que efectúen por el régimen del Decreto Nº 3.660/61.

ARTICULO 2º.- Facúltase a las instituciones bancarias intervinientes (Banco de la Nación Argentina, Banco Hipotecario Nacional o Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires), en cada caso, para que por intermedio de sus funcionarios o agentes autorizados y responsables, entreguen, en nombre del Estado Nacional Argentino, a la persona o personas que resultaren ser adquirentes, la posesión de los bienes inmuebles vendidos por el régimen del Decreto Nº 3.660/61. En la oportunidad de materializarse la entrega de la posesión, se levantará un acta que será firmada por ambas partes, debiendo el Banco remitir tres ejemplares de la misma a esta Secretaría Técnica, dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles de formalizado el acto.

ARTICULO 3º.- Facúltase a las instituciones bancarias intervinientes (Banco de la Nación Argentina, Banco Hipotecario Nacional o Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires), en cada caso, para que por intermedio de sus funcionarios o agentes autorizados y responsables, suscriban, en nombre del Estado Nacional Argentino, todas las escrituras públicas que fueren menester otorgar con motivo de los inmuebles vendidos por el Decreto Nº 3.660/61, cuyas escrituraciones les hayan sido encomendadas y con-

forme a las instrucciones que se le impartan, así como para abonar los gastos propios del acto, que previamente hubieren sido aprobados, inclusive confección de planos, mensuras, etc..

ARTICULO 4º.- Dentro de los diez (10) días hábiles de comunicada la presente resolución, las instituciones bancarias citadas en los artículos precedentes, deberán someter a la aprobación de esta Secretaría Técnica un proyecto de "Acta de Entrega de Posesión" y de las cláusulas y condiciones que se incluirán en las hipotecas por el saldo de precio que, en cada caso, los adquirentes de los inmuebles quedaren adeudando al Estado Nacional.

ARTICULO 5º.- Las instituciones bancarias mencionadas, facilitarán a la Secretaría Técnica toda la información que les solicite, relacionadas con las ventas efectuadas por el régimen del decreto nº 3.660/61, entrega de la posesión, adjudicación y trámite de las escrituras y formalización de las mismas, y autorizará el representante o representantes que se designen para intervenir y fiscalizar los actos que se celebren y los procedimientos seguidos.

ARTICULO 6º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

Fdo. JUAN OVIDIO ZAVALA

ACTO: RESOLUCION Nº 3.057/62.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - SECTOR ESPECIAL

Buenos Aires, 19 de enero de 1962.-

Visto la conveniencia de crear en esta Secretaría de Estado una dependencia provisional, para que actúe, de acuerdo con las directivas que se le impartan, con el propósito de resolver o agilitar las tareas que así lo requieran,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

1º) Créase, con carácter provisional, en la Dirección General de Contabilidad y Administración (Departamento de Personal) y a los fines indicados en el preámbulo de la presente, una dependencia denominada "Sector Especial", la que ajustará su cometido a las directivas que imparta el suscripto, por intermedio de la citada Dirección General.

2º) Las distintas reparticiones de esta Secretaría de Estado prestarán su más amplia colaboración a la co

//-

mentada dependencia, para el mejor cumplimiento de las tareas que se le asignen.

3°) Comuníquese a quienes corresponda, tómese nota y archívese.-

Fdo. JORGE WEBB

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº. 1575.-



ACTO: RESOLUCION Nº 7.036/62.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - DIVISION INTENDENCIA

Buenos Aires, 22 de enero de 1962.-

Visto las presentes actuaciones, por las cuales la Dirección General de Contabilidad y Administración solicita que se pase a jurisdicción de la División Intendencia de esta Secretaría de Estado la tarea que realiza el monta-expedientes del edificio, y

CONSIDERANDO:

Que las funciones que realiza el mencionado monta-expedientes para la distribución de los despachos y documentos que circulan por el Palacio no solo atienden a las necesidades de las dependencias de la Subsecretaría, sino que también toman a su cargo el orden interno y externo de los despachos emitidos por otros organismos en cuyo ámbito la Dirección General de Contabilidad y Administración no tiene competencia;

Que, en consecuencia, son los Servicios Generales que se hallan confiados a la División Intendencia quienes, a mérito de elementales razones de organización administrativa deben atender el funcionamiento de dicho monta-expedientes, con lo que se conseguiría así centralizar en la dependencia que corresponde -y que ya a la

//-

fecha atiende la distribución al exterior del edificio todas las cuestiones vinculadas con la circulación de los elementos mencionados;

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA
R E S U E L V E :

1º.- A partir del día 1º de febrero del año en curso la División Intendencia -dentro de las normas de práctica ya establecidas- se hará cargo de la distribución de las actuaciones que circulan por el edificio y de las que se remitan al exterior, comprendiendo dicha tarea el contralor del Comando Central del monta-expedientes y la atención de los distintos pisos del edificio.

2º.- Comuníquese a quienes corresponda y archívese.-

Fdo. JORGE WEHBE



ACTO: RESOLUCION Nº 12.001/62.-

MATERIAS: INCOMPATIBILIDADES - HORARIO - INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION

Buenos Aires, 5 de enero de 1962.-

VISTO:

Que el decreto Nº 8.566 del 22 de setiembre de 1961 (') y el cuerpo de disposiciones adjuntas que constituyen el Régimen sobre Acumulación de Cargos, Funciones y/o Pasividades para la Administración Pública Nacional, por su amplio alcance comprende a los distintos ministerios de la Administración Nacional y sus organismos jurisdiccionales, abarcando gran cantidad de agentes;

Que las mencionadas disposiciones han sido posteriormente complementadas, aclaradas o modificadas por el decreto Nº 9677 ("), de modificación e insistencia del 27 de octubre del corriente año;

Que como consecuencia de ello ha quedado establecida una nueva fecha para el comienzo de la vigencia de dicho régimen con la consiguiente variación de los plazos fijados en su articulado;

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1460.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1491.-

Que a la Dirección General del Servicio Civil le ha sido encomendada la centralización de la fiscalización - del estricto cumplimiento de las disposiciones aludidas;

Que dichas circunstancias y la amplitud de los casos y situaciones de aplicación aconseja, que dentro de los propósitos perseguidos, la cumplimentación se realice encuadrada en un régimen normativo que proporcione la debida uniformidad y facilite la efectiva fiscalización;

Que el citado decreto 9677/61 en su artículo 16 pone a cargo de la Secretaría de Estado de Hacienda conjuntamente con el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A.) el dictado de las aclaraciones que fuesen necesarias para la mejor aplicación del - decreto Nº 8566/61;

Que analizados con el C.E.P.R.A. los puntos atinentes a lo expuesto ha existido coincidencia de criterios,

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º.- Los plazos mencionados en los artículos 1º, 13 y 14 del cuerpo de disposiciones que constituyen el Régimen sobre acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública comenzarán a contarse desde el 1º de enero de 1962.

2º.- Apruébanse las Instrucciones para la cumplimentación y diligenciamiento del cuestionario para la declaración de cargos y actividades, que corren agregadas a la presente.

3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y fecho archívese.-

Fdo. JORGE WEHBE

I N S T R U C C I O N E S

PARA LA CUMPLIMENTACION Y DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO DE DECLARACION DE CARGOS Y ACTIVIDADES

I.- INSTRUCCIONES GENERALES

a) La declaración jurada de cargos y actividades deberá ser formulada en el cuestionario (original, duplicado y triplicado) aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional (Boletines oficiales Nº 19.642 y Nº 19.667).

b) El formato de este cuestionario deberá ser de las medidas del "tipo oficio" (22 cm. x 34 cm. aproximadamente), impreso en las dos caras.

c) La distribución y ubicación de sus rubros responderá al modelo publicado, no pudiendo transportarse rubros de una página a otra. Es aconsejable, asimismo, mantener la proporción de los espacios indicados en el modelo, no obstante, puede variarse el tamaño del espacio destinado a algunas preguntas cuando la naturaleza o características de la repartición requiera un lugar mayor o menor para su contestación, por ejemplo: horarios, lugar donde desempeña sus funciones, etc.
En los cuestionarios de un mismo Ministerio, Secretaría o Repartición estas indicaciones pueden ser impresas.

d) El cuestionario de declaración de cargos y actividades debe ser llenado, sin excepción, por todos los agentes comprendidos en el régimen establecido por el decreto Nº 8566/61, y el decreto Nº 9677/61 de modificación e insistencia.

e) Deberá cumplimentarse un cuestionario por cada cargo,

aún cuando para dos o más cargos coincidiera el mismo sitio de trabajo, por ejemplo: Jefe de Preceptores y Profesor en un mismo establecimiento educacional. Los profesores deberán llenar un cuestionario por cada escuela en que se desempeñen aún cuando las mismas funcionen en el mismo edificio. Como norma general debe tenerse presente que, atento el artículo 14 del decreto 8566/61 que dispone la agregación del original del cuestionario a la planilla de liquidación de haberes del mes posterior al vencimiento del plazo, deberá cumplimentarse una declaración ante cada entidad o repartición de la cual se perciba haberes.

f) Las preguntas deben ser cubiertas sin excepción, cruzándose con una línea los espacios correspondientes a aquellas preguntas a las cuales no corresponda respuesta.

g) Las Direcciones de Administración, u organismos que hagan sus veces, efectuarán el envío de los originales a que se refiere el artículo 14 del decreto 8566/61, con un remito, por duplicado, donde se indique por orden alfabético el apellido y nombre de los agentes, y que acompañará a los cuestionarios, clasificados en el mismo orden, hasta su envío a la Dirección General del Servicio Civil la que, previo cotejo del material con el remito devolverá el duplicado de éste, debidamente conformado, como constancia de la entrega.

II.- INSTRUCCIONES RELATIVAS A CADA PREGUNTA

Pregunta 1 - Documentación personal. Debe consignarse, indefectiblemente, Libreta de Enrolamiento o Cívica. Cuando por razones de edad o nacionalidad no se posean, indíquese los datos de la Cédula de Identidad o, en su defecto, los de la documentación principal que se tenga, indicando su naturaleza, número, etc., por ejem -

plo: Pasaporte Nº ....., partida o acta de nacimiento Nº ..... o letra. Tratándose de religiosas sin documentación, debe hacerse constar dicha circunstancia en la casilla correspondiente a Cédula de Identidad. Fecha de nacimiento: indíquese día, mes y año de nacimiento.

Pregunta 2 - Apellido y Nombre: Consígnense sin abreviaturas y con caracteres de fácil legibilidad, preferiblemente tipo imprenta, debiendo coincidir exactamente con los que figuren en los documentos de identidad del agente. Los apellidos maternos se harán constar únicamente cuando éstos figuren en los documentos de identidad. Las mujeres casadas, viudas o separadas, indicarán primero el apellido de solteras seguido de la preposición "de" y en último término el apellido del esposo, por ejemplo: Delia Fernández de Peña deberá consignar:

Fernández de Peña	Delia

Por razones de orden alfabético, en caso de apellidos precedidos por preposiciones o artículos, en cualquier idioma que sean, éstos se colocarán antes del apellido. Por ejemplo:

Van Der Lyden	María

De la Mota	José

De Ortúzar	Angel

Pregunta 3 - Domicilio. Debe indicarse el domicilio real del agente.

Pregunta 4 - Ministerio, Repartición, Dependencia, etc. Corresponde consignar los datos relativos a la Repartición o Entidad ante la cual se presentará la declaración jurada que se cumplimenta. Estos datos deben concordar con la Imputación Presupuestaria que corresponde informar en la misma pregunta, pudiendo diferir sólo en los casos de agentes que prestan servicios en Comisión, o como Adscriptos en Repartición distinta a aquella para la cual han sido nombrados. En estos supuestos deben marcarse una cruz (X) a la izquierda del nombre de la Repartición. Asimismo, los agentes adscriptos, en comisión, etc., deberán cumplimentar su declaración jurada ante la repartición en que efectivamente prestan servicios, y luego de certificada la situación de revista por aquella, la presentarán ante la repartición que le abona sus haberes a los efectos del trámite dispuesto por el art. 14 del decreto 8.566/61.

Pregunta 4 - Horario. Debe indicarse el horario dentro del cual cumple sus labores el agente, advirtiéndose que cuando por disposiciones legales (trabajo insalubre, peligroso, etc.) o por simple modalidad del trabajo, la jornada laborable se hallara disminuída, no se considerará como horario reducido sino completo (ej. radiólogos, médicos, maestro de grado, etc.).

Sueldo o retribución: Se consignará, en una sola cifra, todas las retribuciones de carácter permanente que se perciba de la entidad ante la cual se declara, estén sometidas o no a descuento jubilatorio (por ej. sueldo básico, salario familiar, antigüedad, estado docente, adicional por título, por función, por firma, por zona de trabajo, etc.).

En los casos de haberes estipulados por día o por hora se estimará el importe mensual multiplicando - por 25 o por 200, respectivamente, salvo en aquellos casos que por tratarse de aprendices el número de horas de labor mensual sea menor o de obreros que por convenios de trabajo su haber mensual se obtenga multiplicando su jornal por una cifra distinta de 25 o de 200.

Todas las cifras consignadas serán nominales.

Imputación presupuestaria. Se declarará la imputación completa asignada por el Presupuesto General de la Nación. Como es excepcional que el agente conozca su imputación presupuestaria esta casilla debe ser cubierta por las Direcciones de Administración u oficinas que hagan sus veces.

Los agentes de Empresas del Estado y de aquellos organismos cuyos presupuestos no estén incluídos en el Presupuesto General de la Nación no cumplimentarán esta pregunta.

Lugar donde desempeña sus funciones. Se indicará, en la forma que se solicita, el lugar donde desempeña - sus funciones.
En los casos en que las tareas se cumplan en más de un lugar, se indicará la sede donde se efectúa el - contralor del horario.

Funciones que desempeña. De especificarse la clase - de función que cumple en el cargo que declara, por ej: Administrativa, técnica, docente, arte de curar, maestranza, etc.

Ingreso. Corresponde indicar la fecha en que comenzó a desempeñar las funciones correspondientes al cargo que declara.

Certificación de los datos. La exactitud y veracidad

de los datos informados en esta pregunta será certificada por el jefe o superior jerárquico que cada repartición determine, teniéndose presente para ello la responsabilidad y el conocimiento de los datos que dicha certificación exige.

Pregunta 5, 6 y 7. Cuando además del cargo que consigna en la pregunta 4, el agente posea otros cargos, los deberá indicar en las preguntas 5, 6 ó 7 según corresponda. La exactitud y veracidad de estas respuestas son de la exclusiva responsabilidad del declarante puesto que no llevan certificación.

Cabe destacar, que cuando los cargos indicados en las preguntas mencionadas correspondan a reparticiones o a entidades comprendidas en el Régimen, servirán, a su vez, de base para llenar la pregunta 4 ante la repartición o entidad en que cumpla esa función y que recién entonces será certificada por el jefe respectivo.

Ejemplo:

Un agente posee un cargo administrativo en la Dirección Nacional de Aduanas, Departamento de Personal, con la siguiente retribución mensual: Sueldo $ 5.200, complemento de ubicación $850.-, subsidio familiar $ 550.-, bonificación por título $ 250, bonificación especial $ 1.700.-, premio por asistencia $ 1.040.-, horas extras trabajadas $ 600.- Los dos últimos conceptos no se tienen en cuenta para integrar el sueldo a declarar por considerárselos como "no permanentes". Horario de 12,30 a 19,30 horas.

Además, posee un cargo de maestro de grado en una escuela primaria dependiente del Consejo Nacional de Educación con la siguiente retribución mensual: Sueldo $ 4.025.- estado docente $ 1.225. -

Horario de 8 a 12 horas.

El agente procederá a cumplimentar sus declaraciones en la siguiente forma:

1) Ante la Dirección Nacional de Aduanas, declarará:

DATOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES, CARGOS Y OCUPACIONES

Repartición donde presta servicios — Lugar donde desempeña funciones

Ministerio, Secretaría de Estado, etc. Secretaría de Estado de Hacienda	Calle 120 parcela Localidad Cap. Nº 350 Pcia.
Repartición Deción. Nac. de Aduanas	Funciones que desempeña Administrativas
Dependencia, Oficina, Facultad Deción. de Personal	Ingreso 2-1-1956
Cumple Horario (Completo o Reducido) de hs. 12.30 a 19.30	Certifico que los datos consignados precedentemente son exactos y correctos
Sueldo o Retribución $8.550	
Imputación Presupuestaria 2.1.52.7-94-31-803-2849	Lugar Cap. Fed. Fecha 16-2-1965 (Sello)

EN OTRA REPARTICION NACIONAL, PROVINCIAL Y/O MUNICIPAL

Ministerio, Secretaría de Estado, etc. Ministerio de Educación y Justicia	Calle Alsina Localidad Cap. Fed. Nº 2499 Pcia.
Repartición Consejo Nac. de Educación	Funciones que desempeña Docentes
Dependencia, Oficina, Facultad Escuela Nº3 D.E. 2º	Ingreso 1-3-1961
Cumple Horario (Completo o Reducido) de hs. 8 a 12	Certifico que los datos consignados precedentemente son exactos y correctos
Sueldo o Retribución $5.250	
Imputación Presupuestaria —	Lugar / Fecha /

2) Ante la escuela donde se desempeña, declarará:

DATOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES, CARGOS Y OCUPACIONES

Repartición donde presta servicios — Lugar donde desempeña funciones

4

Ministerio, Secretaría de Estado, etc. Ministerio de Educación y Justicia	Calle Alsina Localidad Cap. Fed. Nº 2499 Pcia.
Repartición Consejo Nac de Educación	Funciones que desempeña Docentes
Dependencia, Oficina, Facultad Escuela Nº 3 D.E. 2º	Ingreso 1-3-1961
Cumple Horario (Completo o Reducido) de hs. 8 a 12	Certifico que los datos consignados precedentemente son exactos y correctos
Sueldo o Retribución $ 5.250	
Imputación Presupuestaria 2-1-28-7-410-33-18-1-3595	(Sello) Lugar Cap. Fed. Fecha 12-2-62

EN OTRA REPARTICION NACIONAL, PROVINCIAL Y/O MUNICIPAL

5

Ministerio, Secretaría de Estado, etc. Secretaría de Estado de Hacienda	Calle Azopardo Localidad Cap. Nº 350 Pcia.
Repartición Decdn. Nac. de Aduanas	Funciones que desempeña Administrativos
Dependencia, Oficina, Facultad Dección. de Personal	Ingreso 2-1-956
Cumple Horario (Completo o Reducido) de hs. 1230 a 19.30	Certifico que los datos consignados precedentemente son exactos y correctos
Sueldo o Retribución $ 8.550	
Imputación Presupuestaria	Lugar Fecha

Pregunta 8 - Percepción de Pasividades. Régimen. Deberá consignarse la disposición legal que autoriza la pasividad percibida.

Causa: Se consignará la causa que motivó el otorgamien

to de la pasividad: Pensión graciable, jubilación, retiro voluntario, descendiente de Guerrero del Paraguay, amparo, etc.

Cuadro demostrativo del cumplimiento de los horarios. El agente consignará el horario que cumple diariamente en cada repartición o establecimiento, destinando una línea para cada uno de ellos, en concordancia con la información consignada en el anverso del cuestionario es decir, en la línea 4 colocará los datos relativos a la repartición o establecimiento que consignó en la pregunta Nº 4 del anverso, en la línea 5 - los relativos a la pregunta 5 y así sucesivamente.

Certificaciones. En todos los casos las firmas de los funcionarios certificantes deberán ir acompañadas del - correspondiente sello aclaratorio.

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº. 1577.-



ACTO: DECRETO Nº 915/62.-

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD (Art. 62, 2º párrafo) -
CONTRATACIONES

Buenos Aires, 26 de enero de 1962.-

Visto las presentes actuaciones relacionadas con - lo preceptuado en el párrafo 2do. del artículo 62 de la Ley de Contabilidad, y

CONSIDERANDO:

Que la suma tope de quinientos mil pesos moneda nacional de curso legal (pesos moneda nacional 500.000.-) fijada para publicar y anticipar los anuncios de licitaciones en tres y cinco días, respectivamente, resulta en la actualidad en extremo escasa, por lo que se hace necesario disponer su elevación a cifras acordes con la variación experimentada en los costos de vida;

Que efectivamente, hoy en día la inmensa mayoría - de las licitaciones públicas que se realizan superan - holgadamente aquella suma, por lo cual, en estos casos, se deben publicar los anuncios pertinentes por el término de diez días y con quince de anticipación a la fecha de apertura, según lo estatuye el citado artículo, provocando ello un atraso no admisible en la tramitación de las adquisiciones cuyos montos presuntos no justifican tan dilatada espera para poder concretarlas;

//-

Que consultado el Tribunal de Cuentas de la Nación al respecto, manifiesta que, a su juicio, corresponde mantener la proporción resultante de elevar el límite de quinientos mil pesos moneda nacional de curso legal, (m$n. 500.000) previsto en el citado artículo 62 de conformidad con la variación experimentada por los precios desde el 31/XII/1956 (fecha del decreto Nº 23.354/56, ratificado por la Ley 14.467) (') (fs. 3);

Que en consecuencia y atento la información producida por la Dirección Nacional de Estadística y Censos a fs. 5/6 de estas actuaciones el aumento debe fijarse en dos millones de pesos moneda nacional de curso legal, (m$n. 2.000.000), por lo que el límite fijado en el párrafo 2do. del artículo 62 de la Ley de Contabilidad, debe ascender a dos millones quinientos mil pesos moneda nacional de curso legal, (m$n. 2.500.000);

Por tanto, de conformidad a la autorización contenida en el artículo 143 de la Ley de Contabilidad y Organización del Tribunal de Cuentas de la Nación y de la Contaduría General de la Nación aprobada por decreto ley Nº 23.354/56,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Modifícase el 2do. párrafo del artículo 62 de la Ley de Contabilidad, aprobada por decreto ley número 23.354/56, en la siguiente forma:

"Cuando el monto presunto de la contratación exceda de dos millones quinientos mil pesos moneda nacional de curso legal, (m$n. 2.500.000), los anuncios pertinentes se harán por diez días y con quince de anticipación a la fecha de la apertura respectiva. Si el monto no excediera de dicho importe, los días de publicación y anticipación serán de tres y cinco, respectivamente".

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el

(') Ver Digesto Administrativo Nº 609.-

señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. ARTICULO 3º.- Tómese nota, comuníquese al Tribunal de Cuentas de la Nación, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Dirección General de Suministros del Estado a sus efectos.-

FRONDIZI - Carlos A.Coll Benegas
Jorge Wehbe

ACTO: EXPEDIENTE Nº 50.074/62.-

MATERIAS: PROCURACION DEL TESORO - AUTOMOTORES OFICIALES - AUTOMOTORES ADSCRIPTOS - COMPENSACIONES - C.E.P.R.A.

Buenos Aires, setiembre 27 de 1961.-

Señor
Secretario de Hacienda de la Nación,
DOCTOR JORGE WEHBE
S / D.-

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Secretario de Estado a los efectos previstos en el artículo 23 del decreto nº 8.534/61 (*), solicitándole se sirva aclarar, con intervención previa de la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación, cual es la situación de la Procuración del Tesoro con relación al régimen creado por ese decreto. Hago presente que el titular de este organismo, conforme al decreto-ley nº 8.013/57 (**), depende jerárquicamente en forma directa del Presidente de la Nación y que por decreto nº 354/59 (+), se le ha atribuído jerarquía administrativa y retribución de Secretario de Estado.

//-

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1459.-
(**) Ver Digesto Administrativo Nº 271.-
(+) Ver Digesto Administrativo Nº 886.-

Saludo al Señor Secretario de Estado con distinguida consideración.

Fdo. CARLOS MARIA BIDEGAIN
Procurador del Tesoro de la Nación

Buenos Aires, 11 de octubre de 1961.-

ACTUACION C.E.P.R.A. Nº 10.272.-

Visto la consulta de la Procuración del Tesoro a fs. 1, y la información de la Secretaría de Hacienda a fs. 2, relacionados con la situación de la Procuración en cuanto al régimen de automotores para el traslado de funcionarios creado por decreto nº 8.534/61, este Comité Ejecutivo por la intervención que para el caso le dá el art. 23 del aludido decreto, considera que competen al Procurador los actos decisorios emergentes de aquella medida en lo que concierne a la Procuración, en mérito a la jerarquía administrativa atribuída por decreto nº 354/59, con la intervención de la Secretaría de Hacienda en los aspectos patrimoniales y presupuestarios correspondientes.

Con lo informado, vuelva a la Secretaría de Hacienda, a sus efectos.

Sirva la presente de atenta nota de envío.

Fdo. JUAN OVIDIO ZAVALA
Secretario Técnico de la Presidencia
de la Nación



ACTO: DECRETO Nº 978/62.-

MATERIA: PRESIDENCIA DE LA NACION

Buenos Aires, 29 de enero de 1962.-

Visto lo dispuesto por el Decreto Nº 15.803/60, y

CONSIDERANDO:

Que las tareas confiadas a la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación, requieren la designación de un funcionario de jerarquía que colabore con el titular de la misma y en quien éste pueda delegar parte de la labor;

Por ello y en uso de la facultad acordada al Poder Ejecutivo por el artículo 14 de la Ley Nº 16.432 (*),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Créase en la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación el cargo de Secretario Adjunto, - que tendrá a su cargo las funciones vinculadas con los problemas de racionalización administrativa.

ARTICULO 2º.- Autorízase al Secretario Técnico a delegar en el Secretario Adjunto la consideración y resolu-

---

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1545.-

ción de los asuntos que a su juicio deban ser atendidos por este último, inclusive los vinculados con el cumplimiento de los Decretos números 2.351/61 (*) y 3.660/61 (+).

ARTICULO 3°.- Sin perjuicio de cubrir de inmediato el cargo que se crea por el artículo 1°, la Secretaría de Estado de Hacienda someterá al Poder Ejecutivo el proyecto de reajuste que disponga su incorporación al presupuesto.

ARTICULO 4°.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de Interior y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo
Carlos A. Coll Benegas - Jorge Wehbe

(*) Ver Digesto Administrativo N° 1371.-
(+) Ver Digesto Administrativo N° 1395.-

Contaduría Gral. de Contabilidad y Administración - Dpto. de Secretaría

ACTO: DECRETO Nº 1.325/62.-

MATERIAS: RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - C.E.P.R.A.- PERSONAL - LIMITACION DE SERVICIOS - CESANTIAS - INDEMNIZACIONES (Ley Nº 16.432 - art. 49) - PRESUPUESTO

Buenos Aires, 9 de febrero de 1962.-

Visto la observación formulada por el Tribunal de Cuentas de la Nación al decreto Nº 489 de 17 de enero de 1962 (1), y

CONSIDERANDO:

Que el otorgamiento de licencias especiales, máxime cuando ellas tienen por objeto realizar una efectiva racionalización en la Administración Pública, es facultad del Poder Ejecutivo dentro de las atribuciones fijadas en el artículo 86º inciso I) de la Constitución Nacional;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Insístese en el cumplimiento del decreto //-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1563.-

Nº 489 de 17 de enero de 1962.

ARTICULO 2º.- Déjase establecido que durante el término de licenciamiento a que dicho decreto se refiere, el personal percibirá los haberes netos, hecha la deducción correspondiente por aportes jubilatorios y otros descuentos sobre haberes que resulten de las normas vigentes.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Carlos A. Coll Benegas
Jorge Wehbe.

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - Dpto. de Secretaría -

ACTO: DECRETO Nº 1357/62.-

MATERIA: DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL

Buenos Aires, 12 de febrero de 1962.-

Visto el decreto Nº 21.644/56 (¹), por el cual se organiza y reglamenta el funcionamiento de la Dirección General de Obra Social de la Secretaría de Estado de Hacienda, y

CONSIDERANDO:

Que el actual Consejo Consultivo, cuyo funcionamiento en carácter de cuerpo asesor previó aquel régimen, no constituye una auténtica representación de los intereses de los afiliados;

Que para corregir esta deficiencia, se propugna la creación de un Consejo de Administración con intervención directa en el manejo de las actividades del organismo integrado por representantes estatales y de los mismos afiliados, que tendrán así participación efectiva en su conducción, circunstancia que asegurará una mejor custodia de los intereses comunes;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Substitúyense los artículos 3º, 4º, 5º y //-

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 110.-

7º del Capítulo II del decreto Nº 21.644/56 por los siguientes:

"Artículo 3º.- El gobierno de la Dirección General de Obra Social estará a cargo de un Consejo de Administración, un Director General y un Subdirector General. El reemplazo de este último, por cualquier motivo, será ejercido por el funcionario de jerarquía inmediata que designe el Secretario de Hacienda.

"El Director y el Subdirector General, que serán los ejecutivos principales y tendrán las atribuciones y obligaciones que más adelante se determinan, serán nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Secretaría de Hacienda. El cargo de presidente del Consejo será ejercido por el Director General y en su ausencia desempeñará dichas funciones el Subdirector General.

"Artículo 4º.- I) El Consejo de Administración estará integrado por el Director General y por seis (6) Vocales Titulares y seis (6) Suplentes, designados por la Secretaría de Hacienda en la siguiente forma: tres (3) Titulares y tres (3) Suplentes en representación del Estado y tres (3) Titulares y tres (3) Suplentes elegidos por los afiliados principales en la forma que reglamente la Secretaría de Hacienda.

"II) Los Vocales durarán dos (2) años en su función, pudiendo ser reelectos y se renovarán totalmente al término de su mandato.

"III) Las designaciones respectivas tendrán carácter honorario, sin perjuicio de las sumas que en concepto de reintegro de gastos se asigne en el respectivo presupuesto.

"IV) Si alguno de los Vocales falleciere o renunciare, o en alguna forma dejare vacante el cargo temporaria o definitivamente, antes de terminar el período para el cual fué elegido, el Consejo de Administración elegirá por sorteo el reemplazante de entre

"los respectivos Suplentes, conservando la propor - "ción establecida en el presente, y cuya designación "durará hasta el reintegro del Titular en el primer "caso o hasta el vencimiento del mandato del Titular "en el segundo caso. No obstante el término de man- "dato fijado precedentemente, los Vocales continua- "rán en su función hasta la designación de los que "lo substituirán en el caso de que al vencimiento - "no se hubieran substanciado las nuevas designacio- "nes, pero hasta un período máximo adicional de - "tres (3) meses.

"V) Las condiciones para ser elegido Vocal serán de "terminadas por vía reglamentaria.

"VI) Los miembros del Consejo se desempeñarán sin - "perjuicio de sus funciones en las dependencias en "que revisten.

"Artículo 5º.- El Consejo de Administración sesiona "rá por lo menos una vez al mes y las resoluciones "se adoptarán por simple mayoría de votos de los - "miembros presentes.

"El Consejo estará en quorum con cinco (5) de sus "miembros, uno de los cuales deberá ser el Presiden "te, salvo en caso de ausencia o impedimento del mis "mo, en cuyo caso deberá estar presente el Subdirec "tor General. Tanto el Presidente como su reempla- "zante natural tendrán voto en las deliberaciones - "únicamente en caso de empate.

"El Consejo dictará un reglamento al que ajustará - "su actuación y tendrá las siguientes facultades y "obligaciones:

" a) Establecer las normas para la gestión adminis-
" trativa, técnica, comercial, económica y finan
" ciera del organismo, tomar conocimiento de las
" operaciones decididas con arreglo a dichas nor

" mas e intervenir, según la reglamentación que se
" dicte, en la resolución de los casos no previstos.
" b) Considerar el presupuesto anual de sueldos, gas-
" tos e inversiones y cálculo de recursos y elevar
" la propuesta a la aprobación de la Secretaría de
" Hacienda.
" c) Proponer a la Secretaría de Hacienda las modifi-
" caciones a las cuotas de afiliación y aranceles.
" d) Constituir o aceptar derechos de hipoteca, pren-
" da o cualquier otro derecho de uso, goce o garan-
" tía.
" e) Aceptar donaciones o legados.
" f) Proponer a la Secretaría de Hacienda la designa-
" ción de personal, promociones, contrataciones, re-
" nuncias, cesantías, exoneraciones y retrogradacio-
" nes y nombrar, a propuesta del Director General,
" personal jornalizado o transitorio.
" g) Aprobar, los convenios generales o especiales con
" organismos oficiales, mixtos y particulares, pa-
" ra la prestación de los servicios sociales, eco-
" nómicos y asistenciales, que el Presidente hubie-
" re celebrado a su referendum.
" h) Aprobar la realización de las operaciones finan-
" ciero-patrimoniales que resulten necesarias para
" los servicios sociales de acuerdo a la reglamen-
" tación que dicte la Secretaría de Hacienda. Las
" contrataciones de los bienes de cambio y de con-
" sumo, serán aprobadas por una comisión especial,
" constituída por dos (2) vocales y un (1) presiden-
" te, debiendo este último ser elegido de entre -
" los miembros que integran el Consejo, a excepción
" del Director General, en forma rotativa y por pe-
" ríodos no superiores a treinta (30) días.
" i) Requerir a la Dirección General toda la informa-
" ción y antecedentes que considere necesarios pa-

" ra el cumplimiento de sus funciones.
" j) Dejar constancia de lo actuado en las actas que
" se labren en oportunidad de cada una de las se-
" siones que realice, que serán suscriptas por la
" totalidad de los Vocales presentes y el que ejer
" za en cada caso la presidencia del Consejo.
" k) Elevar a la Secretaría de Hacienda la memoria a
" nual, el balance general y la cuenta de resulta
" dos de cada ejercicio y el plan de acción.
" l) Aprobar la habilitación de nuevos servicios y -
" ampliación y/o modificación de los existentes.
" m) Además de la reunión mensual, sesionará cuando
" medie pedido de por lo menos tres (3) de sus -
" miembros Titulares y en las demás oportunidades
" en que el Presidente lo convoque.
" n) Designar las comisiones de estudio, supervisión
" y asesoramiento que estime convenientes. Una de
" las comisiones deberá actuar como delegada del
" Consejo de Administración ante el Instituto Mé-
" dico Quirúrgico, a los fines de servir a la Di-
" rección de éste como órgano consultivo. Esta Co
" misión tendrá carácter permanente y estará inte
" grada por tres (3) miembros -un médico, un con-
" tador público y un especialista en asuntos de -
" personal- los cuales deberán desempeñarse en las
" mismas condiciones del artículo 4º, apartados -
" III y VI. La designación de estos miembros así
" como su remoción será efectuada por el Consejo
" de Administración. Sin perjuicio de las funcio
" nes que le asigne el Consejo de Administración,
" la Comisión Consultiva del Instituto Médico Qui
" rúrgico, tendrá el siguiente cometido:
" I - Mantener permanentemente informado al Conse
" jo de la marcha de los servicios del Instituto
" Médico Quirúrgico, propiciando las medidas que

" a su juicio procedería adoptar para asegurar la
" mayor eficiencia de aquéllos.
" II - Asesorar al Director del Instituto en todo
" lo concerniente al régimen de funcionamiento de
" los servicios.
" III - Intervenir en todo proyecto que el Institu
" to Médico Quirúrgico eleve a consideración de la
" Dirección General, ya se trate de medidas técni-
" cas o administrativas.

"Artículo 7º.- El Director General tiene a su cargo -
"la representación legal y administrativa de la Direc
"ción General de Obra Social, y ejerce las funciones
"directivas y ejecutivas de la misma en todos los a-
"suntos administrativos y técnicos que no estuvieren
"reservados expresamente a la decisión del Consejo de
"Administración, y cuando, estando reservados, media-
"ren motivos de urgencia, en cuyo caso deberá dar cuen
"ta al Consejo de Administración en la primera oportu
"nidad.
"Tendrá además, entre sus funciones principales:
" a) Dirigir y ejercer la inspección y fiscalización
" de todas las dependencias, actividades y personal
" a su cargo.
" b) Cumplir y hacer cumplir en lo que le compete,las
" presentes disposiciones y demás normas reglamen-
" tarias que se dicten.
" c) Confeccionar el balance general y la cuenta de -
" resultados del ejercicio y elaborar los planes -
" de acción, sometiéndolos a consideración del Con
" sejo de Administración.
" d) Someter a la aprobación del Consejo de Administra
" ción la habilitación de nuevos servicios y amplia
" ción y/o modificación de los existentes.
" e) Llevar el inventario general de todos los bienes
" permanentes, de cambio y de consumo, pertenecien
" tes al organismo o recibidos en uso, préstamo o

" consignación por parte del mismo.
" f) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de
" Administración.
" g) Delegar parcialmente funciones dentro de la lí-
" nea ejecutiva del organismo.
" h) Elaborar y elevar a consideración del Consejo de
" Administración, el presupuesto anual de sueldos,
" gastos e inversiones y cálculo de recursos.
" i) Proponer al Consejo de Administración, para su -
" consideración, la designación y baja del personal
" jornalizado transitorio.
" j) Disponer e intervenir en el manejo de fondos de
" la Dirección General de Obra Social disponiendo
" los ingresos y egresos, con sujeción a las nor-
" mas que se establezcan reglamentariamente.
" k) Disponer el traslado del personal dentro de su
" jurisdicción.
" l) Celebrar, ad referendum del Consejo de Adminis-
" tración, convenios generales o especiales con or-
" ganismos oficiales, mixtos y particulares para -
" la prestación de los servicios sociales, económi-
" cos o asistenciales.
" m) Con la aprobación previa del Consejo de Adminis-
" tración: comprar, vender, dar o recibir en pago,
" prestar o contraer préstamos y dar o tomar en a-
" rrendamiento toda clase de bienes muebles, inmue-
" bles y semovientes, con excepción de los bienes
" de cambio y de consumo.
" n) Suministrar al Consejo de Administración toda la
" información y antecedentes que éste solicite pa-
" ra el cumplimiento de sus funciones.
" o) Designar sub-responsables para el manejo de fon-
" dos, de acuerdo a la reglamentación que dicte la
" Secretaría de Hacienda".-

ARTICULO 2º.- La Dirección General de Obra Social elevará

a la Secretaría de Estado de Hacienda, dentro de los - treinta (30) días subsiguientes a la fecha del presente, el proyecto de reglamentación de las disposiciones contenidas en los artículos cuya substitución se efectúa por el artículo 1º, como así también el texto ordenado del - decreto Nº 21.644/56.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Hacienda a sus efectos.-

FRONDIZI - Carlos A. Coll Benegas
Jorge Wehbe.



ACTO: ACTUACION C.E.P.R.A. Nº 12.063/62.-

MATERIAS: LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS (Casinos) - BONIFICACION COMPENSATORIA - INDEMNIZACION .

Buenos Aires, 16 de febrero de 1962.-

La Secretaría de Hacienda solicita se aclare si la liquidación de la "bonificación compensatoria", que se efectúa al personal de Casinos con fondos provenientes de "propinas" otorgadas por el público concurrente, debe considerarse comprendida entre las asignaciones "regulares y permanentes" que toma en cuenta el decreto 8533/61 (') para determinar el monto de la indemnización por despido.

Por los fundamentos que informaron el dictamen de este Comité en las actuaciones que llevan el número 4956, el CEPRA estima que dicha "bonificación compensatoria" carece de los requisitos exigidos para integrar el "sueldo" normal del agente, ya que no es regular ni permanente y que por lo tanto no es computable a los efectos de fijar el "quantum" de la indemnización respectiva.

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. CARLOS ALBERTO M. YOUNG
Secretario Adjunto
Secretaría Técnica de la Presidencia
de la Nación.

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1458.-

ACTO: FALLOS del 8 de junio y 6 de diciembre de 1961.-

MATERIAS: ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 37, inc. a) - CESANTIA - RENUNCIA

"MAGALLANES, Miguel Alberto s/ Decreto 6.666/57".-

CONSIDERANDO:

Que el señor Miguel Alberto Magallanes presentó la renuncia al cargo que desempeñaba, como jornalizado, en la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos (Explotación Hipódromos), la cual le fué aceptada por decreto del Poder Ejecutivo Nº 17.278 del 29 de diciembre de 1959. Posteriormente, por decreto Nº 11.585 de fecha 20 de septiembre de 1960 se convirtió en cesantía dicha renuncia aceptada, invocándose el inc. a) del art. 37 del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional aprobado por decreto ley 6.666/57 (1), por haber incurrido el interesado en inasistencias no justificadas.

Que, considerando ilegítimo este proceder de la Administración Nacional, el señor Magallanes interpuso el recurso autorizado por el artículo 24 del Estatuto, sosteniendo que el Poder Ejecutivo no podía convertir en cesantía la aceptación de su renuncia porque en esa fe-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

cha ya se encontraba extinguido el vínculo jurídico que antes lo ligó al órgano administrativo.

Que llegadas las actuaciones al Tribunal, el señor Fiscal de Cámara sostiene ser ésta incompetente en razón de que el recurso organizado por el Estatuto tiene por objeto exclusivo proteger la estabilidad del agente y en este caso quien recurre no pretende ser reincorporado a su puesto. A estas argumentaciones adhiere el señor representante del Estado en su escrito de contestación al traslado.

Que, teniendo en cuenta el carácter de esta defensa, corresponde resolverla en primer término. A este respecto, es necesario destacar que si bien es cierto que el artículo 26 dice que cuando el Tribunal haga lugar al recurso dispondrá la reincorporación del agente, no lo es menos que el artículo 24 expresa que el recurso procede contra los actos administrativos firmes que dispongan cesantía o exoneración. También es exacto que, por regla general, estos recursos se proponen proteger la estabilidad en la función pública, pero eso no es suficiente como para excluir de su ámbito a otras situaciones, como ésta, en que se trata de un caso de cesantía y se tilda de ilegítimo el acto que la dispone, porque fundamentalmente este medio de amparo ha sido instituído para asegurar el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto en supuestos, de ruptura del vínculo de empleo público por cesantía o exoneración. En este caso, se invocaron expresamente en el decreto atacado sus disposiciones, dejándose establecido que se optaba por aplicarse a pesar de haberse excluído de su ámbito al personal afectado a las cuentas de explotación "Hipódromos" y "Salas de Entretenimiento", por ser ley más benigna "toda vez que brinda al imputado una serie de procedimientos que constituyen garantías", que no se hallan contemplados en el Estatuto que les es propio (estableci-

do por el 7.334 del 29 de junio de 1960) (*). Y no puede dudarse que entre los procedimientos aludidos se encuentra el recurso contenciosoadministrativo, ya que en el decreto 7334/60 no se organiza un remedio jurisdiccional semejante y sólo se deja a salvo la vía ordinaria para reclamar la indemnización que establece para los casos de separación ilegítima del empleo, después de agotada la vía administrativa mediante el recurso jerárquico (arts. 13 a 17). Por otra parte, en los supuestos corrientes, cuando prospera el recurso, el Tribunal primero declara la ilegitimidad del acto administrativo y, luego, dispone la reincorporación del agente. En este caso, basta para reparar el agravio -siempre en la hipótesis - de prosperar el recurso- con la declaración de ilegitimidad. En consecuencia, si la Cámara puede lo más también puede lo menos, teniendo en cuenta que siempre se está - dentro de la protección jurisdiccional del empleado público, que es, como se dijo, el fin primordial perseguido por el Estatuto en el recurso que organiza.

Que dejando así por admitida la competencia, corresponde considerar el fondo de la cuestión planteada, para resolverla, hay que recordar que el vínculo de empleo público puede terminarse por mutuo consentimiento de las partes y también por un acto de autoridad de carácter disciplinario que recibe su sustancia del poder jerárquico. Nadie duda, ni menos niega, que dicha relación jurídica, como se dijo, puede quedar extinguida por mutuo consentimiento, que se concreta en la renuncia por parte del empleado y en su aceptación por el órgano público. Tal es el caso de autos. Quiere decir pues, que Magallanes quedó desvinculado de la Administración desde que el decreto 17.278 le aceptó la renuncia. Sobre esto no puede haber otra opinión.

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1204.-

Que, sentado entonces que cuando el Poder Ejecutivo dictó el segundo decreto -Nº 11.585- Magallanes ya no era agente del Estado, se plantea el interrogatorio de saber si pudo ese decreto transformar la aceptación de la renuncia en una cesantía. Sin duda que ésta última es una medida disciplinaria; no parece necesario abundar en consideraciones para demostrarlo. Y bien, ya se dijo que ellas se nutren del poder jerárquico, el cual, a su vez proviene de la jerarquía, que es el vínculo de subordinación a que se encuentran sometidos los agentes públicos con relación a sus superiores (la jerarquía es de origen griego y significa jefe con autoridad). Planteado en estos términos el problema, la solución fluye espontáneamente; y no puede ser otra que la de negar la posibilidad de aplicar sanciones disciplinarias a quienes han dejado de formar parte de la administración pública.

Que, de acuerdo con lo expuesto, fuerza es admitir la falta de competencia del Poder Ejecutivo para dictar el decreto 11.585 del 20 de septiembre de 1960 y, por ende, declarar su ilegitimidad.

Que la jurisprudencia de la Corte Suprema citada por el señor Procurador del Tesoro, en el dictamen cuya copia corre a fs. 23/24 de estas actuaciones, se refiere a la revocabilidad de los actos administrativos en general, pero no contempla ningún supuesto equiparable al de autos, donde no está en juego la posibilidad de revocación, sino la de sancionar a una persona que ya no está sometida al poder jerárquico.

Que una última circunstancia queda por considerar y es que cuando se dictó el decreto de cesantía -20 de septiembre de 1960- ya estaba en vigor el Nº 7334 que excluyó de las disposiciones del Estatuto al personal "afectado a las Cuentas de Explotación "Hipódromos" y "Salas de Entretenimientos" dependientes de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos". No obstante, considera el Tribu

nal que, a pesar de eso, puede pronunciarse como lo hace, en razón de que el propio Poder de quien emanó aquél, dispuso, como se vió, someter el caso a las normas de dicho Estatuto. Además, la disolución del vínculo que ligaba al recurrente con la Administración se produjo mientras se hallaba amparado por sus normas y ahora se trata de modificar la situación jurídica adquirida bajo ese régimen y naturalmente el acto modificatorio proyecta sus efectos a la época en que fuera dictado el que la creó.

Por estas consideraciones, se declara nulo por ilegitimidad, el decreto Nº 11.585 de fecha 20 de septiembre de 1960.

Regístrese, notifíquese y devuélvanse estas actuaciones.

JUAN CARLOS BECCAR VARELA - ADOLFO R. GABRIELLI - HORACIO H.HEREDIA.

Expediente Nº 39.227-1961.-

Señor Director General de Asuntos Jurídicos:

El señor Director General solicita instrucciones respecto de la eventual interposición del recurso extraordinario que organiza el artículo 14 de la Ley 48 contra la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contenciosoadministrativo de la Capital que declara nulo por ilegítimo el decreto Nº 11.585, de 20 de septiembre de 1960, por el que se transformó en cesantía la aceptación de renuncia del Sr. Miguel Alberto MAGALLANES dispuesta por decreto anterior Nº 17.278/59.

I.- Entiendo que corresponde apelar la resolución de la Excma. Cámara, llevando el asunto a la Corte Supre

ma por la vía del recurso extraordinario, en razón de encontrarse cuestionada la inteligencia de las facultades constitucionales que competen al Poder Ejecutivo en materia de revocación de actos administrativos y de remoción de empleados públicos (artículo 86, incisos 1º y 10) y de las que le confiere una ley nacional (decreto-ley 6666/57), habiendo sido la decisión contra la validez de los actos fundados en dichas cláusulas (ley 48, art. 14, incisos 1º y 3º; ley 4.055, art. 6º).

II.- En cuanto al fondo del asunto, debe señalarse lo siguiente.

La sentencia de la Excma. Cámara llega a conclusiones opuestas a la validez del decreto del Poder Ejecutivo sin desentrañar la verdadera esencia del acto administrativo de que se trata, a la luz de los principios de derecho público aplicables.

Así no ha percibido que el decreto Nº 11.585/60 contiene dos actos diferentes, que deben ser analizados separadamente, porque son de naturaleza completamente distinta: el primero es el acto por el que el Poder Ejecutivo revoca el decreto 17.278/59 que había aceptado la renuncia del actor; el segundo es el acto por el que se lo declara cesante.

La Excma. Cámara pierde completamente de vista el primer acto y omite analizar su validez. Tan es así que rechaza la procedencia de aplicar la jurisprudencia de la Corte Suprema que se refiere a la revocabilidad de los actos administrativos porque "no está en juego la posibilidad de revocación, sino la de sancionar a una persona que ya no está sometida al poder jerárquico".

Sin embargo, es indudable el carácter de acto revocatorio que tiene la decisión del Poder Ejecutivo de dejar sin efecto una decisión anterior y se hace ineludible, entonces, analizar la validez de este acto. Aquí se halla, en verdad, la raíz del problema. Porque si el Poder Ejecu

tivo no ha podido revocar ese acto, entonces sí el caso tiene la solución contraria a la validez del decreto 11.585/60, sin necesidad de ir más adelante. En cambio, si el acto revocatorio es válido, se nos plantea el problema de si en esas condiciones pudo declararse cesante al actor, es decir, el aspecto que consideró la Excma. Cámara en su sentencia, aunque, a raíz de la omisión anterior, conforme a un enfoque que, con el debido respeto a su capacitado juicio, estimo erróneo.

Hemos, pues, de analizar en primer término, el problema que la Excma. Cámara omitió analizar.

1.- El Poder Ejecutivo revocó mediante un acto administrativo otro acto administrativo anterior. Pudo hacerlo válidamente? La cuestión se vincula al problema de la llamada "cosa juzgada administrativa", o sea, a la doctrina de la inmutabilidad de los actos administrativos bajo determinadas condiciones.

Esta doctrina, elaborada principalmente a través de fallos de la Corte Suprema de Justicia, se vincula esencialmente al ejercicio de actos reglados y deja en pie la facultad revocatoria del Poder Ejecutivo respecto a los actos discrecionales. Así lo señalan quienes han sistematizado la doctrina de la Corte (Juan Francisco Linares, "Cosa juzgada administrativa", p. 25; Jorge Tristán Bosch, "La extinción de los actos administrativos en la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional de Justicia", en Revista Argentina de Estudios Políticos, marzo 1946, p. 261 y siguientes).

La distinción se encuentra claramente establecida en el "leading-case" Carman de Cantón, Elena c. La Nación" (Fallos 175-367), donde se la expresa en estos términos: "Que el acto administrativo es como lo define Mayer 'toda disposición o decisión de autoridad que declara lo que es de derecho en un caso particular', pero es de naturaleza y alcances diversos cuando el poder administra-

dor o un organismo autárquico ejercita facultades discrecionales, que cuando cumple facultades regladas, cuando contempla intereses públicos en su resolución que cuando decide un interés particular. El nombramiento o remoción de un empleado, la concesión o negación de una licencia o beca, el otorgamiento de un permiso para usar de un terreno público, son notoriamente diversos de una concesión ferroviaria y del reconocimiento de una jubilación... Es lógico que cuando se obra en virtud de facultades discrecionales la revocación sea procedente...".

Interesa sobremanera, en consecuencia, llegar a una conclusión sobre el carácter discrecional o reglado del acto de aceptación de renuncia.

La Corte Suprema de Justicia había declarado repetidamente, que antes de la reforma constitucional de 1957 y del decreto ley 6666 del mismo año, que el ejercicio por el Poder Ejecutivo de la facultad constitucional de nombrar y remover a los empleados de la administración no se hallaba sujeto a la revisión de los jueces ni lesionaba derechos privados susceptibles de reparación por intermedio de los tribunales de justicia (Fallos, t.178, p.80; t. 182, ps. 54 y 363; t.192, p. 436). En el caso Aíta (Fallos t.188, p.176) se examinó la validez de actos del Poder Ejecutivo por los que sucesivamente se nombró a un empleado nacional, se dispuso su cesantía, se ordenó pagarle sueldos por el período en que había estado cesante, se transformó la cesantía en suspensión y, finalmente, quedaron revocadas las anteriores decisiones que le reconocían el derecho de cobrar emolumentos. La Corte Suprema dijo que al dictar esos actos el Poder Ejecutivo "ejerció 'facultades discrecionales' y no 'funciones regladas' por la ley, contemplando intereses públicos y no el interés particular de aquél".

Aunque Juan Francisco Linares entiende que la doctrina de la cosa juzgada administrativa debería extenderse a

algunos actos discrecionáles, al examinar el supuesto particular de las decisiones relativas a la función y empleo público dice que "cabe afirmar que los principios de legalidad y distribución no rigen aquí desde que la regla es la mutabilidad del acto frente al precepto constitucional referido" -el artículo 86, inciso 10. "Por el contrario, sólo frente a expresas disposiciones legales que la establecieran podrá afirmarse que ciertos empleos y funciones gozan de inmutabilidad en el acto de designación" (ob.cit. p. 147).

Por supuesto que no podemos ignorar que esta doctrina ha experimentado las consecuencias de la consagración del principio de la "estabilidad del empleado público" en el artículo nuevo de la Constitución y de su reglamentación en el decreto ley 6666/57. Actualmente la remoción de los empleados de la administración pública se encuentra regla da y el Poder Ejecutivo no ejercita en la materia un po - der discrecional.

Pero es esto así respecto a la "aceptación de la re - nuncia"? Hay acaso normas constitucionales y legales que establezcan formas y condiciones a las que debe sujetar - el Poder Ejecutivo su decisión al respecto? Juega a su respecto la garantía de la "estabilidad del empleado público"? Más aún, se trata de un caso de ejercicio de la facultad de "remoción" -que supone más bién el cese de la relación de empleo público por voluntad unilateral del Estado- o del ejercicio de una de las múltiples atribucio - nes inherentes a la posición del Presidente como jefe de la Administración nacional (artículo 86, inciso 1º, C.N.)?

Considero que al revocar el Poder Ejecutivo la aceptación de la renuncia obró con el fundado convencimiento de que actuaba en la esfera de sus facultades discrecionales. Ninguna ley regla su facultad de aceptar las renuncias que presentan los empleados públicos. Por lo demás, su acto - no fué en modo alguno injusto para el agente, ya que si -

multáneamente su situación de estabilidad en el empleo - quedó garantizada por las normas del decreto 6666/57. Aquí sí la conducta del Poder Ejecutivo debió encuadrarse dentro de un régimen reglado, y se encuentra sujeta al control judicial.

A mayor abundamiento corresponde señalar que aún respecto a los actos reglados se admite su mutabilidad cuando la manifestación de voluntad se halla afectada por dolo, error o violencia, si bien en este caso se entiende - que la nulidad debe gestionarse ante los jueces y dentro del término de dos años fijado por el artículo 4030 del código civil. Pero como el control judicial está asegurado por un procedimiento especial en el régimen del decreto ley 6666/57, parece que aquella doctrina debe admitir una excepción en los casos vinculados a este régimen, en que sus normas especiales deben aplicarse con preferencia al régimen común.

El decreto 11.585/60 configura pues, en este aspecto -en cuanto revoca la aceptación de la renuncia-, un acto válido y ha sido injustamente tachado de arbitrario por la sentencia de la Excma. Cámara.

2.- Tenemos ahora que considerar si la cesantía del actor declarada en el mismo decreto es igualmente válida.

La Excma. Cámara resuelve el punto mediante un juicio silogístico que se ciñe típicamente a la estructura de la sentencia que se ha dado en llamar "clásica". Premisa mayor: la cesantía es una expresión del poder jerárquico - que se mantiene hasta que la administración acepta la renuncia del empleado; Premisa menor: el Poder Ejecutivo le aceptó la renuncia al actor; Conclusión: ergo, el Poder Ejecutivo no pudo declarar cesante al actor.

En la premisa mayor utilizada por la Excma. Cámara es, por lo menos, dudosa, la verdad de dos proposiciones que la integran, a saber: 1) que la cesantía sea una expresión del poder jerárquico; y 2) que la aceptación de la renuncia concluya definitivamente la relación de empleo públi-

co. Y en cuanto a la premisa menor, ella contiene la suposición de estarse en presencia de un acto irrevocable, lo que, como se ha visto, no es exacto.

No creo que la cesantía tenga su causa jurídica en el poder jerárquico, sino que es simplemente la manifestación de voluntad del Estado de poner término a la relación de empleo público. Esta manifestación de voluntad tiene consecuencias establecidas por normas de derecho público, según que se ajuste o no a determinados requisitos. Debe fundarse en causales previstas por la ley, y producirse al cabo de un procedimiento reglado. Si se violan estas normas, el agente puede recurrir a la justicia y obtener su reincorporación o una indemnización.

No se trata, en consecuencia, de establecer si existe o no poder jerárquico, sino si subsiste o no una relación de empleo público a la que se pueda poner término. Lo que interesa es establecer si la aceptación de la renuncia es inmutable o no. Es decir, lo que la Excma. Cámara omitió considerar. Por nuestra parte, hemos despejado la incógnita con una conclusión favorable a la posibilidad de revocar la aceptación de renuncia.

Si se admite la conclusión anterior, esto es, que el Poder Ejecutivo pudo revocar su acto discrecional anterior, debe admitirse, la subsistencia de la relación de empleo público y la posibilidad jurídica de ponerle término por una declaración de cesantía sujeta a las limitaciones y condiciones que la ley establece en garantía de los agentes de la administración.

La suposición implícita en la sentencia de la Excma. Cámara de que la aceptación de la renuncia por el Poder Ejecutivo puso término en forma irrevocable y definitiva a la relación de empleo público no está confirmada por normas positivas de nuestro derecho público. Por lo pronto, por aquellas que atribuyen al respecto una facultad discrecional al Poder Ejecutivo. Puede además señalarse -

que la ley de contabilidad (decreto-ley 23.354/56) dispone expresamente que "la renuncia, separación del cargo, incapacidad legalmente declarada o muerte del responsable no impide ni paraliza el juicio de cuentas, el que, en los dos últimos casos, se sustanciará con los curadores o herederos del causante" (art. 113; véase también art.100). He ahí una disposición legislativa incompatible con la teoría absoluta de la terminación de la relación de empleo público por la renuncia y su posterior aceptación. También es incompatible con esa estricta teoría la posibilidad de convertir una exoneración en cesantía o una cesantía en aceptación de renuncia (véase Fallos, t. 201, p. 360). Sin embargo el poder administrador se ha creído capacitado para revocar actos anteriores de ese carácter cuando ha creído de ese modo hacer justicia a ex agentes desvinculados del servicio.

A esta altura de nuestro examen no está de más recordar que la Corte Suprema ha declarado reiteradamente que las relaciones entre el gobierno y los empleados públicos no se gobiernan por las normas del derecho privado sino por las del derecho constitucional y administrativo (Fallos, t. 166, p.264; t.179, p. 394; t.187, p.116; t.192,p.436; t.193, p.352; t.195, p.210; confr. t.239, p.41).

Y siendo ello así, los intereses generales comprometidos en la relación de derecho público deben merecer una atención especial, sin desmedro de los intereses individuales. Bien está que se cieguen todas las fuentes de poder arbitrario por parte de la administración pública, pero no se incurra en el error de amparar el abuso individual contra el ejercicio razonable del poder público dentro de un procedimiento normado que contiene suficientes garantías de defensa para los respetables derechos individuales.

El Poder Ejecutivo ha fundado en disposiciones del Estatuto su decisión de convertir en cesantía la aceptación de renuncia. No existe vestigio alguno de arbitrariedad.

La legitimidad de su acto puede ser examinada por la Justicia. Pero la Excma. Cámara, en vez de entrar al examen concreto de la cuestión ha preferido sentar en forma absoluta una doctrina negativa de las facultades del Poder Ejecutivo. Es, en cambio, mediante una doctrina flexible que someta al escrutinio judicial caso por caso, que pueden obtenerse resultados verdaderamente justos, sin sacrificar indebidamente el interés general ni el interés particular.

La excma. Cámara omitió advertir que el acto del Poder Ejecutivo no causó perjuicio injusto al actor. Lejos de ello, al restablecer la relación de empleo le permitió obtener por medios jurídicos el egreso de la administración pública en condiciones que pudieron atribuirle el derecho de percibir una indemnización a que no le da derecho, en cambio, el egreso por renuncia. La protección del interés público por el Poder Ejecutivo tiene su debida compensación en el derecho del agente a percibir del Estado una indemnización si probara que fué objeto de una cesantía ilegal. Esto es característico de la técnica del derecho administrativo, que armoniza los intereses generales e individuales, y que, dando siempre claro predominio a aquéllos, tiende a la vez a prevenir la arbitrariedad y a indemnizar los perjuicios que cause la acción administrativa.

La Excma. Cámara no quiso siquiera entrar a examinar el problema concreto. Por ello no proveyó favorablemente el pedido del representante de la Nación de solicitar el expediente Nº 397.011/59 en que constan los elementos de juicio que decidieron al Poder Ejecutivo a declarar terminada la relación de empleo por cesantía y no por renuncia.

Creo que esa era, sin embargo, la misión específica de la Excma. Cámara. Así lo establecen las normas que fijan su competencia en la materia (decreto-ley 6666/57, -

arts. 24,25). Al no encuadrar el caso debidamente, la Excma.Cámara se vió obligada a dar una larga y no convincente explicación sobre su propia competencia y su sentencia no se ajusta a los términos que la ley prescribe (comp. arts. 26,27) lo que está denunciando, mejor que ninguna argumentación, el defecto de planteamiento del caso. Si el tribunal no hubiera empezado por negar la validez del acto revocatorio del Poder Ejecutivo, habría tenido un caso perfectamente ajustado a su competencia, que se refiere a los casos de cesantía y exoneración. Pero la Excma.Cámara empieza por negar que existe cesantía y con ello el caso se le escapa de las manos. Por el contrario, la tesis del Poder Ejecutivo lo ubica plenamente en la esfera de su competencia, que consiste en determinar si la cesantía ha sido o no legal conforme a las condiciones y requisitos del decreto-ley Nº 6666/57.

3.- Una de las principales causas de la actual "crisis del Derecho" es la consagración por la teoría y la técnica jurídicas de crecientes posibilidades de escapar a la responsabilidad de nuestros actos. Desde que el Derecho es un "ordenamiento" de la conducta humana que enlaza a determinados supuestos fácticos determinadas consecuencias, siempre que se frustra la efectividad de las consecuencias se frustra el fin ordenador del Derecho.

La tesis de la Excma.Cámara -con el debido respeto a su juicio y excluyendo, por cierto, toda atribución de intenciones- consagra otra posibilidad "escapista". Ya no nos contentamos con la inapreciable conquista de poder prevenir la injusticia. Tenemos medios de evitarla. Pero en homenaje a una construcción jurídica que no deja resquicio para asomarnos a la realidad de la conducta humana -plano en el que se juega en verdad el drama de la justicia-, se pierde la oportunidad de afrontar de lleno el caso concreto. El que no desaprovecha su oportunidad es el autor de la conducta imputada, quien asume de inmediato la figura de "víctima" de la prepotencia estatal.

No hemos de entrar siquiera a enterarnos de la conducta particular en cuestión. La Justicia oficial concluye - con la declaración de que el Sr. Magallanes ha sido víc tima de un atropello, de una arbitrariedad, de un acto ilegítimo.

Es esa, sin embargo, la conclusión que en concien - cia -y en Derecho- merece el caso aquí juzgado? El Sr. Magallanes ha sido víctima, en verdad, de un acto ilegal e injusto? O fué ilegal e injusta su conducta hacia - la colectividad que le confió el desempeño de una tarea, le pagó un sueldo y no obtuvo la colaboración debida? - Ha sido ilegal e injusta la aplicación de la consecuen- cia prevista por la norma para semejante conducta y con las debidas garantías que ella prescribe? La respuesta a estos interrogantes dependía de una investigación que el Tribunal omitió hacer.

Es de desear que en este aspecto, como en otros más graves, la Justicia argentina -cuya notoria capacidad y jerarquía tiene digno exponente en la Excma. Cámara cuya sentencia aquí se impugna- vaya ajustando los resortes por los que debe hacerse efectiva la responsabilidad in dividual. El decreto 11.585/60 encierra una tesis que - contribuye al fin de superar la "crisis del Derecho" en un campo -el de la burocracia- respecto al cual es noto ria y generalizada la denuncia de males provocados por una extendida "irresponsabilidad". Su nulidad asesta un golpe a ese propósito y es de esperar que la Corte Su - prema de Justicia revoque la sentencia que la declara.

PROCURACION DEL TESORO, 26 de junio de 1961.-

Fdo. CARLOS MARIA BIDEGAIN.
Procurador del Tesoro de la Nación

SUPREMA CORTE:

El recurso extraordinario es procedente por haberse cuestionado la validez de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y ser la sentencia apelada contraria a su validez (art. 14, inc. 1º de la ley 48).

En cuanto al fondo del asunto, el Poder Ejecutivo Nacional por decreto 17.278 del día 29 de diciembre de 1959 aceptó la renuncia que presentó el señor Miguel Alberto Magallanes del cargo que desempeñaba como jornalizado en la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos -Explotación de Hipódromos-. Con fecha 20 de septiembre del año siguiente por decreto Nº 11.585, el mismo Poder Ejecutivo dispuso convertir en cesantía la referida aceptación de renuncia del nombrado ex-agente, "por encuadrar su situación en las prescripciones del art. 37, inc. a) del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, aprobado por decreto-ley Nº 6666 de 17 de junio de 1957" (fotocopia de fs. 29/31).

Interpuesto por el interesado el recurso previsto por el artículo 24 del citado Estatuto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso-Administrativo hizo lugar a aquél y declaró nulo por ilegitimidad el segundo de los decretos referidos. Como fundamento, el tribunal, que admitió su competencia para pronunciarse sobre la cuestión sometida a su decisión, consideró que la aceptación de la renuncia del señor Magallanes por el decreto 17.278/59 importó, sin lugar a duda, su desvinculación de la Administración. En cuanto a la modificación dispuesta por el decreto 11.585/60 sostuvo la Cámara que la misma implicó la imposición de una medida disciplinaria a quien había dejado de formar parte de la administración pública y que por lo tanto el último de los decretos era ilegítimo por falta de competencia del Poder Ejecutivo para dictarlo. Asimismo declaró el a-quo que no era aplicable en la especie la doctrina de V.E. citada por el señor Procurador

del Tesoro en el dictamen cuya copia obra a fs. 23/24 del expediente 397.011 glosado a las actuaciones, toda vez - que la misma se refiere a la revocabilidad de los actos administrativos en general, pero no a un supuesto como - el del sub-iudice en el que no está en juego la posibilidad de revocación sino la de sancionar a una persona que dejó de estar sometida al poder jerárquico.

Contra esa sentencia se agrava el representante de la Administración en el escrito de interposición de - recurso extraordinario, sosteniendo que la Cámara al declarar la invalidez del decreto 11.585/60 ha omitido considerar que el mismo contiene dos actos: el primero, la revocación del anterior decreto, y el segundo la declaración de cesantía del agente, y que bajo el primer aspecto el Poder Ejecutivo pudo legítimamente ejercer esa facultad por tratarse de facultades discrecionales que la Jurisprudencia de esa Corte Suprema ha reconocido en los casos que se registran en Fallos: 178; 80; 182; 54 y 353; 182; 176 y 193; 436. Afirma el apelante que, si bien actualmente la materia de remoción de los empleados de la Administración Pública se encuentra reglada en el decreto-ley 6666/57 y por lo tanto el Poder Ejecutivo no ejercita en la misma un poder discrecional, no lo es menos - que ese Poder tiene la atribución no reglamentada por ley, de aceptar las renuncias de los empleados públicos, y que el decreto impugnado no fué injusto para el interesado - en razón de que su situación de estabilidad en el empleo quedó garantizada por las disposiciones del Estatuto y que las normas especiales de éste, que aseguran un control judicial, deben aplicarse preferentemente.

Con respecto a la cesantía dispuesta por el segundo decreto considera el apelante que si se admite la atribución del Poder Ejecutivo de revocar un acto discrecional anterior, debe aceptarse la subsistencia de la relación de empleo público y la posibilidad jurídica de ponerle -

término mediante el acto de la declaración de cesantía sujeta a las condiciones y limitaciones que el decreto-ley citado prevé en garantía de los agentes de la administración. Estima el recurrente que la suposición de a-quo de que la aceptación de la renuncia del empleado puso término a la relación de empleo público "no está confirmada por normas positivas de nuestro derecho público", señalando - en ese sentido que la ley de contabilidad (decreto-ley Nº 23.354/56) establece expresamente que la renuncia, separación del cargo, incapacidad legalmente declarada o muerte del responsable, no impide ni paraliza el juicio de cuentas, el que, en los dos últimos casos, se sustanciará con los curadores o herederos del causante - artículos 113 y 100.

Afirma también el representante de la Administración que el acto, cuya nulidad declaró el tribunal, no es arbitrario por estar fundado en disposiciones del Estatuto, y concluye sosteniendo que la Cámara al no encuadrar el caso debidamente, no ha fundado convincentemente su propia competencia por lo que el pronunciamiento no se ajusta a los términos de los arts. 26 y 27 de la ley.

Al respecto, no comparto el criterio del recurrente y por el contrario considero acertadas las conclusiones del fallo del tribunal. En efecto, si bien es cierto que cuando la decisión de la Cámara de Apelaciones es favorable - al agente debe hacer lugar a su reincorporación (art. 28 del Estatuto),-lo que en el caso no fué solicitado- no lo es menos que ese tribunal tiene jurisdicción para revisar la "ilegalidad de la medida aplicada" (art. 25), y que - puede conocer de los recursos interpuestos contra los actos firmes del Poder Ejecutivo Nacional o de autoridades de la Administración Nacional que dispongan la cesantía o exoneración, como se trata en la especie, por la que resulta ajustado lo decidido por el a-quo en el sentido de que si tiene poder para lo más, también lo tiene para lo menos,

como lo ha hecho al declarar la nulidad por ilegitimidad del acto impugnado por el ex-empleado, sin vulnerar por ello los límites jurisdiccionales que le acuerda la ley.

Los demás agravios del recurrente no son, a mi juicio, admisibles, en razón de que la cuestión debatida no se vincula con las facultades del Poder Ejecutivo para revocar sus propios actos en materia que es discrecional sino que se refiere a si ese Poder tuvo atribución para dejar sin efecto el decreto que había aceptado la renuncia del empleado. En ese sentido no es menester recurrir a la doctrina de los autores que concuerdan con el a-quo en que esa aceptación concluye la relación del empleo público, ya que en el Estatuto, en una de cuyas disposiciones se fundó la medida recurrida, se encuentra expresamente contemplada la solución aplicable al supuesto de que se trata. En efecto, en el Capítulo VI referente al Egreso, -el art. 46 de ese ordenamiento legal preceptúa que el agente dejará de pertenecer a la Administración en los distintos casos a que se refieren sus seis incisos, el primero de los cuales es el de renuncia.

En tales condiciones, el fallo apelado que declara nulo por ilegitimidad el decreto 11.585/60, que separó de la Administración a una persona que había dejado de pertenecer a la misma se ajusta a las normas del decreto ley 6666/57 referidas. Por lo demás, no se trata en el sub-lite de un juicio de cuentas al que se refieren los preceptos de la ley de contabilidad citadas por el apelante sino el de una cesantía fundada en "inasistencias injustificadas" -art. 37, inc. a) del Estatuto- por lo que resulta inoficioso juzgar el presente con arreglo a las disposiciones de aquella ley.

En consecuencia, opino que corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto ha podido ser materia de recurso.

Buenos Aires, 28 de agosto de 1961.-

Fdo. RAMON LASCANO

Procurador General de la Nación

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1961.-

Vistos los autos: "MAGALLANES, Miguel Alberto s/decreto 6666/57".

CONSIDERANDO:

1º) Que el Poder Ejecutivo Nacional, mediante decreto Nº 17.278, de fecha 28 de diciembre de 1959, aceptó la renuncia que hiciera Miguel Alberto Magallanes al cargo que desempeñaba en la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos (Explotación de Hipódromos). Y, posteriormente, por decreto Nº 11.585 del 20 de setiembre de 1960, el mismo Poder Ejecutivo convirtió la anterior aceptación de renuncia en la cesantía del ex-agente mencionado. Se fundó esta última medida en la disposición contenida en el art. 37, inciso a) del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública (decreto-ley Nº 6666/57).

2º) Que, en tales condiciones, no es dudoso que la cesantía decretada participa de la naturaleza de una medida dispuesta en ejercicio del poder administrativo disciplinario, según así resulta del propio título del capítulo quinto del Estatuto, en el que se encuentra comprendido el mencionado art. 37 que expresamente ha sido invocado como sustento del decreto de cesantía a que se viene aludiendo (fs. 29/31).

3º) Que constituye presupuesto para el ejercicio del poder disciplinario la subsistencia de la relación de empleo público y correlativa situación de subordinación jerárquica, sobre la que se asienta el ejercicio de aquel poder estatal.

4º) Que tal doctrina es la que esta Corte ha aceptado en situaciones análogas, vinculadas al ejercicio de atribuciones semejantes en el ámbito del Poder Judicial, con-

forme a la cual la corrección disciplinaria pierde su esencial razón de ser, cuando, al momento de su aplicación, el sancionado ha dejado de pertenecer al Poder Estatal al que corresponde el ejercicio de las facultades disciplinarias de que se trata (doctrina de Fallos: 247; 615).

5º) Que, en el caso de autos, en el momento de la aplicación de la medida disciplinaria que ha sido cuestionada, la relación de empleo y situación de subordinación jerárquica habían quedado extinguidas mediante la aceptación de la renuncia del ex-agente por el Poder Ejecutivo, concretada en el primero de los decretos sancionados. Además, el acto de la cesantía fué simultáneo con el de revocación de la aceptación de la renuncia y tuvo carácter de sanción por las faltas imputadas al empleo.

6º) Que en lo atinente a los agravios vinculados a la competencia del tribunal apelado, se trata de materia procesal y de hecho, ajeno por tanto al recurso extraordinario y no impugnada de arbitrariedad (Fallos: 245;216; 248;374;249;75 y causa "Alejandro Vásquez s/ decreto - ley 6666/57", sentencia de 9 de agosto de 1961).

7º) Que, en las condiciones expuestas, habida cuenta de las demás particularidades del caso puntualizadas en el dictamen que antecede y el especial carácter de la aceptación de la renuncia, la doctrina mencionada en los anteriores considerandos resulta de aplicación a esta causa, no guardando relación directa con lo resuelto en las cláusulas constitucionales invocadas (art. 15, ley 48). La sentencia, pues, debe ser confirmada.

Por ello y lo concordantemente dictaminado por el Sr. Procurador General, se confirma la sentencia apelada en lo que ha sido materia del recurso extraordinario concedido a fs. 48. Notifíquese y devuélvanse.-

BENJAMIN VILLEGAS BASAVILBASO - ARISTOBULO D. ARAOZ DE LAMADRID - RICARDO COLOMBRES - ESTEBAN IMAZ.

ACTO: DECRETO Nº 1.880/62.-

MATERIAS: LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS (Hipódromos) - LICENCIAS - PERSONAL JORNALIZADO

Buenos Aires, 23 de febrero de 1962.-

Visto el decreto Nº 8.567/61 (1), por el cual se fija el régimen de licencias para el personal de la Administración Pública Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 1º del referido acto de gobierno se excluye de su ámbito de aplicación al personal sometido a regímenes especiales;

Que en dicha situación se encuentra el personal jornalizado por reunión que presta servicios en los hipódromos dependientes de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos toda vez que el mismo desempeña sus tareas en días inhábiles para el resto de los agentes de la Administración Nacional;

Que con tal motivo procede determinar expresamente el régimen a que habrá de ajustarse dicho personal en el uso del comentado beneficio, adecuando el mismo a las características especiales del servicio en cuestión;

Por ello,

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1461.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Fíjase el presente régimen de licencias para el personal jornalizado -por reunión- que presta servicios en los Hipódromos dependientes de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos.- Exclúyese del presente al personal contratado.-

ARTICULO 2º.- De la licencia anual por descanso:

a) La licencia anual ordinaria por descanso es obligatoria, comportará el goce de haberes y se concederá dentro del año calendario conforme a las necesidades del servicio.- Podrá ser fraccionada en dos (2) períodos y no podrá ser transferida al año siguiente por ningún concepto.-
En oportunidad de receso funcional se procurará que la mayor parte del personal use de su licencia en dicha época;

b) El agente separado de su cargo, cuando no sea por una medida expulsiva emanada de un sumario, tendrá derecho al pago de la parte proporcional de la licencia por descanso no utilizada;

c) El agente que presente renuncia al cargo por motivos particulares o por jubilación o por retiro voluntario y que hubiere hecho uso del beneficio apuntado, y cuya prestación de servicios fuere inferior a seis (6) meses, deberá reintegrar los haberes correspondientes a la parte proporcional utilizada en exceso;

d) Las licencias por descanso no podrán ser utilizadas a continuación de licencias por enfermedad (art. 6º), accidentes de trabajo o enfermedad profesional (art. 7º), servicio militar (art. 14º), licencias extraordinarias sin goce de jornales (arts. 15º, 18º y 19º) o con goce de jornales (art. 20º), debiendo por lo me-

nos haber efectivizado ocho (8) reuniones de prestación efectiva de servicios.- Si razones de tiempo no hacen posible su utilización dentro del año calendario se perderá el derecho a la misma.- Igual temperamento se adoptará cuando el agente se reintegre al servicio después de haber cumplido una suspensión equivalente o superior a ocho (8) reuniones, ya se trate de una medida cautelar o disciplinaria;

e) La licencia por descanso podrá interrumpirse por las siguientes causas:

1º) Enfermedad;

2º) Razones de servicio.-

En el primer caso el agente deberá continuar en el uso de la licencia por vacaciones seguidamente del alta médica respectiva, sin ser considerada ésta como una fracción; es de aplicación, en la emergencia, cuanto se refiere a no trasladar la licencia no utilizada al año siguiente.- Para el punto segundo las autoridades deberán tomar los recaudos pertinentes para que la interrumpida licencia sea utilizada indefectiblemente dentro del año calendario.-

ARTICULO 3º.- El término de la licencia anual será de:

a) Cuatro (4) reuniones cuando la antigüedad sea mayor de cincuenta (50) reuniones y no exceda de cinco (5) años;

b) Seis (6) reuniones cuando la antigüedad sea mayor de cinco (5) años y no exceda de diez (10) años;

c) Siete (7) reuniones cuando la antigüedad sea mayor de diez (10) años y no exceda de quince (15) años;

d) Nueve (9) reuniones cuando la antigüedad sea mayor de quince (15) años y no exceda de veinte (20)años;

e) Diez (10) reuniones cuando la antigüedad sea mayor de veinte (20) años.-

En el caso que dentro del año calendario el agente cumpliera una antigüedad que diera derecho a mayor licen

cia, se computará este término a los fines del otorgamiento de la misma.-

ARTICULO 4º.- Para establecer la antigüedad del agente se computarán los años de servicios prestados en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, incluso los "ad-honorem", o en entidades privadas cuando, en este último caso, se haya hecho el cómputo de servicios en la respectiva Caja de Previsión Social.- Al personal dado de baja o retirado de las Fuerzas Armadas de la Nación, Gendarmería Nacional, Cuerpo Penitenciario, Policía Federal, Bomberos y Prefectura Nacional Marítima, lo mismo que a - jubilados de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, se le considerará su anterior antigüedad, a cuyo fin se tendrá en cuenta el tiempo por el cual el agente percibió haberes por año calendario.-

A los efectos del reconocimiento de antigüedad acreditada en entidades privadas y hasta tanto la correspondiente Caja extienda las respectivas certificaciones, los agentes deberán presentar una declaración jurada, acompañada por una constancia extendida por el o los empleadores, sujeta a la pertinente certificación documental, en la - que se justifiquen los servicios prestados a partir de los diez y ocho (18) años de edad.-

La antigüedad del empleado por reunión será computada por año calendario.-

ARTICULO 5º.- De la licencia por corto tratamiento de la salud:

Se concederá hasta diez (10) reuniones de licencia - por año calendario, en forma contínua o discontínua, con percepción de jornal, en los casos de tratamientos por afecciones comunes, incluídas operaciones quirúrgicas menores y por accidentes acaecidos fuera del servicio; vencido dicho plazo, las posteriores licencias por esta causa podrán ser extendidas hasta el fin del año calendario pero sin derecho a percibir haberes.-

Cuando encontrándose en el desempeño de sus funciones, el agente requiera atención médica del Servicio Médico, le será considerado el día como licencia por enfermedad con o sin goce de jornal -según corresponda- cuando hubiere transcurrido menos de la media jornada de labor, y se le concederá permiso de salida cuando hubiere trabajado más de media jornada.-

ARTICULO 6º.- De la licencia por largo tratamiento de la salud:

a) Se concederá licencia con goce íntegro de jornal por las reuniones comprendidas dentro del término de un (1) año, en forma contínua o discontínua por afecciones que inhabiliten para el trabajo y para los casos de intervenciones quirúrgicas, exceptuando la cirugía menor a que hace referencia el artículo 5º;
b) Vencido este plazo, subsistiendo las causales que motivaron la licencia, se concederá ampliación de la misma por el término de un (1) año con percepción del 50 % del jornal;
c) Antes de terminar la prórroga, el agente será reconocido por una Junta Médica en el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, la que determinará de acuerdo con la capacidad laborativa del agente las funciones que podrá desempeñar en la Administración Nacional;
d) En caso de incapacidad total y permanente dictaminada por una Junta Médica del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, se aplicarán las Leyes de Previsión y Ayuda Social correspondientes, las que deberá tramitar el agente ante la Caja respectiva;
e) Cuando la mencionada Junta Médica no pueda expedirse categóricamente sobre la incapacidad total y permanente y compruebe que el agente no está en condiciones de reintegrarse, se formará una nueva Junta Médica al

cabo de ciento ochenta (180) días, la que se expedirá en forma definitiva.- Este período de ciento ochenta (180) días se justificará sin percepción de haberes;

f) Cuando el agente se reintegre al servicio, una vez vencida la licencia y la prórroga, es decir, una vez agotados los setecientos treinta (730) días que acuerda este artículo, no podrá utilizar una nueva licencia de este carácter hasta después de transcurridos tres (3) años;

g) Cuando se trate de períodos discontínuos se irán acumulando hasta cumplir los plazos indicados, siempre que entre los períodos otorgados no medie un lapso de tres (3) años; de darse este supuesto aquellos no serán considerados, y tendrán derecho a las licencias totales a que se refiere este artículo;

h) El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública es el único autorizado para disponer el alta del agente, sin cuyo requisito, éste no podrá reintegrarse a sus tareas;

i) Igualmente podrá ordenar cambio de tareas, acorde a la capacidad laborativa del agente, si lo considerara necesario o para el total restablecimiento del mismo. Asimismo podrá conceder, para idénticos fines, una reducción de las horas de labor, tratándose de accidentes de trabajo, a fijar en cada caso.-
El tiempo de la franquicia será fijado exclusivamente por el citado Ministerio.-

ARTICULO 7º.- De la licencia por enfermedad profesional o accidente de trabajo:

a) En caso de enfermedad profesional contraída en acto de servicio o accidente de trabajo, se concederá licencia con goce de jornal por las reuniones comprendidas en el término de dos (2) años, en forma contí-

nua o discontínua, para una misma o distinta afección;

b) Vencido este plazo, subsistiendo la o las causales - que determinaron la o las licencias, se efectuará una Junta Médica en el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, la que determinará la presunta incapacidad del agente;

c) Si surgiera incapacidad parcial o permanente deberán adecuarse las tareas del agente a su nuevo estado;

d) Si la incapacidad fuese total y permanente, se recomendará la aplicación de las Leyes de Previsión que estatuyen sobre la materia aludida, quedando en consecuencia la licencia de referencia sujeta a los términos de la Ley citada;

e) Cualquier accidente sufrido por el agente desde una hora antes del comienzo de la jornada de labor hasta una hora después de finalizada la misma, siempre que ocurriera en el trayecto del domicilio del agente al lugar de trabaja o viceversa, será causal para incluir la licencia que fuere necesario concederle con cargo al presente artículo.- El lapso indicado podrá ampliarse cuando se verifique que por razones de distancia o de ubicación, el viaje aludido demande normalmente más de una hora;

f) Cuando el accidente se produzca conforme a lo previsto en el inciso e), deberá hacerse la denuncia respectiva ante la autoridad policial, dentro de las - veinticuatro (24) horas de producido;

g) En todos los casos, para poder incluirse la licencia en el presente artículo, el pedido efectuado ante el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública debe ir siempre acompañado de la respectiva constancia sumarial;

h) El agente no podrá reintegrarse a sus tareas hasta - tanto el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pú-

blica no le acuerde el alta respectiva;

i) Cuando el agente se reintegre al servicio, una vez vencida la licencia y la prórroga, es decir, agotados los novecientos diez (910) días que acuerda este artículo, no podrá utilizar una nueva licencia de este carácter hasta después de transcurridos dos (2) años;

j) Cuando se trate de períodos discontínuos se irán acumulando hasta cumplir los plazos indicados, siempre que entre los períodos otorgados no medie un lapso de dos (2) años sin haber hecho uso de licencia de este tipo; de darse este supuesto aquéllos no serán considerados y tendrá derecho a las licencias totales a que se refiere este artículo;

k) En los casos a que se refiere este artículo, la Dirección de Obra Social o en su defecto el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, proveerán gratuitamente la asistencia social y los elementos terapéuticos necesarios.

ARTICULO 8º.- En todos los casos la Dirección de los Servicios Médicos tendrá a su cargo el control de la situación declarada por los agentes, para lo cual contará con la colaboración del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública.

El agente que se comprobare que no realiza el tratamiento médico, perderá su derecho a las licencias y beneficios que otorga el presente decreto.

Las licencias o justificaciones a que se refieren los artículos Nros. 5º, 6º, 7º, 11, 12 y 23, son incompatibles con el desempeño de cualquier función pública o privada; los agentes que infrinjan esta disposición quedarán comprendidos en este artículo, aparte de las sanciones que les correspondieren de acuerdo con lo establecido en el decreto Nº 7.334/60 (").

(") Ver Digesto Administrativo Nº 1204.-

ARTICULO 9º.- Si el agente se encontrara fuera de zona - de los servicios médicos o en el interior del país y se hallare enfermo o solicitara licencia para la atención - de un miembro del grupo familiar, deberá hacer llegar, en el término de setenta y dos (72) horas de comenzar a inasistir, a la Dirección de los Servicios Médicos, un certificado extendido por médico del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, o de la Repartición o de otra Repartición Nacional, Provincial o Municipal, con sede en la localidad o del médico de Policía del lugar y si no lo hubiere, de médico particular, con historia clínica y demás elementos de juicio médico que permitan certificar la existencia real de la causal invocada.

El certificado médico no perteneciente a una de las reparticiones citadas debe ser autenticado por la autoridad policial local.

Cuando el agente se encontrara en el extranjero y solicitara licencia por enfermedad (artículos 5º, 6º y 7º) deberá presentar o remitir para su justificación, a la Dirección de los Servicios Médicos, los certificados médicos extendidos por autoridades médicas oficiales del - país donde se encontrare, visado por el Consulado de la República Argentina.- En el supuesto de no existir las autoridades a que se hace referencia, el interesado recabará ante la policía del lugar una constancia que certifique tal circunstancia, teniendo entonces validez el - certificado del médico particular, legalizado y visado - por el Consulado de la República Argentina.

En todos los casos el agente se encuentra en la obligación de requerir, en el día, al Servicio Médico del Hipódromo de Palermo, aunque la reunión se realice en el - Hipódromo de San Isidro, el respectivo pedido de reconocimiento domiciliario.

No se justificarán bajo ningún concepto, inasisten-

cias motivadas por razones de salud, cuando no se haya cumplimentado el requisito del aviso previo.

ARTICULO 10.- Los agentes en uso de licencia por enfermedad (artículos 6º y 7º) no podrán ausentarse al interior del país o al extranjero sin autorización del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, bajo cuyo control se encuentran.

Al agente que no cumpliese con el requisito precedente, no le será concedida la prórroga de licencia que por causas de enfermedad podría solicitar en o desde el interior del país o el extranjero, aparte de las sanciones disciplinarias que podrían corresponderle por vulnerar expresas disposiciones del presente decreto.

ARTICULO 11.- De la licencia por enfermedad de familiar:

a) Para consagrarse a la atención de un miembro enfermo del grupo familiar el agente tendrá derecho a que se le conceda hasta cuatro (4) reuniones de licencia contínuas o discontínuas con goce íntegro de jornal por año calendario;
b) Cuando el Servicio Médico considere que el estado del paciente lo justifique, podrá prorrogar este beneficio en las mismas condiciones que el anterior por un término de ocho (8) reuniones, pero sin percepción de jornal.- En ambas circunstancias tendrá igualmente derecho, aunque el paciente se encuentre hospitalizado;
c) Los agentes quedan obligados a presentar ante la Jefatura de Personal una declaración jurada sobre los integrantes del grupo familiar; cualquier comprobación sobre que el agente ha falseado su declaración jurada con intención de lograr una licencia de este tipo, será sancionado conforme a las normas disciplinarias que rigen en el decreto Nº 7.334/60.-

ARTICULO 12.- De la licencia por maternidad:

a) Por maternidad se concederá licencia con percepción de jornal, por el término de doce (12) semanas, divi_ didas en dos períodos preferentemente iguales, uno - anterior y otro posterior al parto, el último de los cuales no será inferior a seis (6) semanas;
b) En el supuesto de parto diferido, se reajustará la - fecha inicial de este artículo, justificándose los días previos a la iniciación real de esta licencia - por los artículos 5º y 6º;
c) En caso de nacimiento múltiple esta licencia podrá - ampliarse a un total de quince (15) semanas, con un período posterior al parto no menor de nueve (9) semanas;
d) Los períodos son acumulables;
e) La iniciación de esta licencia limita automáticamente a dicha fecha inicial, el usufructo de cualquier otra licencia de que esté gozando la agente;
f) A petición de parte y previa certificación del Servi_ cio Médico podrá concederse cambio de tareas o de - destino a partir de la concepción y hasta el comienzo de la licencia por maternidad.-

ARTICULO 13.- De acuerdo a la Ley Nº 12.568 toda madre - de lactante tendrá derecho a optar por:

a) Disponer de dos (2) descansos de media hora cada uno para atención de su hijo en el transcurso de la jornada de trabajo;
b) Disminuir en una hora su jornada de trabajo, ya sea iniciando su labor una hora después del horario de - entrada o finalizando una hora antes;
c) Disponer de una hora en el transcurso de la jornada de trabajo para amamantar a su hijo.-

Esta licencia se acordará por espacio de doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de la fecha del na_

cimiento del niño, cualquiera fuera la fecha de su reintegro.

Este plazo podrá excepcionalmente ampliarse en casos muy especiales y previo examen del niño, hasta trescientos sesenta y cinco (365) días corridos, quedando bajo la absoluta responsabilidad del Servicio Médico la concesión de la referida prórroga como asimismo del beneficio de que trata el presente artículo.

En caso de nacimiento múltiple se le concederá esta franquicia sin examen previo de los niños; en caso de posterior fallecimiento de uno de ellos, se procederá como en oportunidad de nacimiento único.

ARTICULO 14.- De la licencia por servicio militar.

Los agentes que deban incorporarse al Servicio Militar Obligatorio, tendrán derecho a las siguientes licencias,- con el 50 % de su remuneración, desde la fecha de su incorporación hasta dos (2) reuniones después del día de la baja asentada en su libreta de enrolamiento, en los casos en que el agente fuere declarado inapto o exceptuado, y hasta cinco (5) reuniones después de haber sido dado de baja si hubiera cumplido con el período para el cual fué convocado.

Igualmente se concederá licencia por dos (2) reuniones, con la remuneración expresada, cuando el período fuere inferior a seis (6) meses.

Los días de viaje por traslado desde el punto del país donde cumplió con el Servicio Militar Obligatorio y el asiento habitual de sus tareas no serán incluídos en los términos de licencias fijadas precedentemente, cuando los mismos coincidan con los de reuniones hípicas y se justificarán independientemente con el 50 % de haberes.

Las ausencias en que incurra el personal por tener que someterse a examen médico previo a su incorporación a las fuerzas armadas, o por razones relacionadas con el mismo -

fin, serán justificadas con goce de sueldo, previa presentación de las citaciones respectivas.

El personal que con carácter de reservista sea incorporado transitoriamente a las fuerzas armadas, tendrá derecho a usar de licencia sin goce de jornal por el tiempo que permanezca en esa situación.

Igual beneficio será acordado al personal que cumpla el servicio militar en las fuerzas de seguridad (Policía Federal o Prefectura Nacional Marítima).-

ARTICULO 15.- De la licencia por cargos electivos o de representación.

El personal jornalizado de los hipódromos podrá gozar de licencia especial en los siguientes casos y en base, cuando así corresponda, a las prescripciones de la Ley Nº 14.455 (1):

a) Cuando el agente fuera designado para desempeñar cargos de representación política, en el orden nacional, provincial o municipal, o cuando resultare elegido miembro de los poderes Ejecutivo o Legislativo de la Nación o de las Provincias o de las Municipalidades, queda obligado a solicitar licencia sin percepción de jornal mientras dure su mandato, debiendo contar para ello con una antigüedad no inferior a tres (3) años de servicios;

b) Cuando el agente fuera designado o elegido para desempeñar cargos de representación gremial y/o sindical, tendrá derecho a licencia sin percepción de jornal, por el tiempo que dure su mandato, debiendo reintegrarse al servicio una vez finalizado éste.

Esta licencia será acordada por la Repartición a aquellos agentes que desempeñaren cargos directivos hasta la categoría de Tesorero o equivalentes.- El otorgamiento de esta licencia quedará supeditado a las comunicaciones que efectúe la Confederación General del Trabajo o el sin

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 608.-

dicato respectivo con personería gremial.-

ARTICULO 16.- De la licencia por asuntos familiares:

Desde el día de su ingreso el agente tendrá derecho a usar licencia con goce de jornal en los siguientes casos y por el término que se indica:

1.- Matrimonio:

a) Del agente (cuando éste se realice conforme a las Leyes argentinas o extranjeras reconocidas por Leyes argentinas) las reuniones comprendidas dentro de los diez (10) días corridos de efectuado el acto civil;
b) De sus hijos, una (1) reunión si coincidiera con el día de actuación.

2.- Nacimiento:

De hijos del agente varón, una (1) reunión si el hecho se produjera en el día de actuación o víspera.

3.- Fallecimiento: Ocurridos en el país o en el extranjero, mediante comprobante respectivo.

a) Del cónyuge o parientes de primer grado (padres o hijos) las reuniones comprendidas dentro de los cinco (5) días laborables;
b) De parientes de primer grado y consanguíneos y afines de segundo grado (suegros, yerno, nuera, hermanos, abuelos, nietos, cuñados, padrastro, madrastra, hijastro y medio hermano) una (1) reunión si coincidiera con el día de actuación o víspera.-

ARTICULO 17.- De la licencia para rendir exámenes:

Se concederá licencia con goce de jornal al personal que curse estudios en establecimientos oficiales o incorporados (nacionales, provinciales o municipales) para rendir examen en los turnos fijados oficialmente, debiendo

el agente presentar constancia de la prueba rendida, otorgada por las autoridades del establecimiento respectivo.

Este beneficio será acordado por el término de diez (10) reuniones anuales y por plazos que no excedan de dos (2) reuniones cada vez, debiendo ser éstas indefectible e inmediatamente anteriores o coincidentes con el examen a rendir, y acreditando la causal invocada con el certificado a que se alude precedentemente.

Si al término de la licencia acordada, el agente no hubiera rendido examen por postergación de fecha o mesa examinadora, deberá presentar un certificado extendido por la autoridad educacional respectiva, en la que conste dicha circunstancia y la fecha en que se realizará la prueba, quedando hasta entonces en suspenso la justificación de las inasistencias incurridas.

ARTICULO 18.- De la licencia por asuntos particulares:

En el transcurso de cada decenio el agente podrá usar de licencia sin remuneración, por el término de seis (6) meses, fraccionable en dos (2) períodos.- El término de la licencia no utilizado en un decenio no puede ser acumulado a los decenios subsiguientes.- Para tener derecho a esta licencia en distintos decenios deberá transcurrir un lapso mínimo entre la terminación de una y la iniciación de la otra de dos (2) años y no podrá adicionarse a las licencias previstas en los artículos 15-b), 19 y 20 del presente decreto.- Además deberá contar con una antigüedad ininterrumpida de un (1) año.-

ARTICULO 19.- De la licencia para estudios:

El agente tendrá derecho a un (1) año de licencia sin goce de jornal cuando deba realizar estudios, investigaciones, trabajos científicos, técnicos y culturales o participar en conferencias o congresos de esa índole, en el país o en el extranjero, ya sea por iniciativa particular, estatal o extranjera o por becas otorgadas por ins

tituciones privadas, nacionales o extranjeras.

Esta licencia podrá prorrogarse por un (1) año más, en iguales condiciones, cuando las actividades que realice el agente, a juicio de la Repartición, resulte de interés para el servicio.- En este caso el agente queda comprometido a no retirarse de la Repartición hasta transcurrido un (1) año como mínimo, desde la fecha del reintegro a sus funciones.

Para usufructuar de esta licencia deberá contar con una antigüedad ininterrumpida en los hipódromos de un (1) año, y no podrá adicionarse a las licencias previstas en los artículos 18 y 20.-

ARTICULO 20.- Los agentes de los Hipódromos Nacionales podrán obtener licencia con goce de jornal por el lapso que se determinará en forma expresa en el decreto que el Poder Ejecutivo dicte para su concesión, cuando concurran las siguientes causales y se cubran los requisitos exigidos: Que los intereses de la Nación en materia técnica, científica o profesional afín aconsejen la concurrencia o incorporación de agentes a Instituciones en el extranjero o en el país.- Al efecto deberá expedirse con carácter previo, la Comisión Nacional de la Unesco, cuando se trate de pedidos fundados en las actividades de ese organismo internacional o el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en los demás casos, los que determinarán el verdadero interés nacional de la concurrencia o incorporación, fundando dicha opinión en la necesidad e importancia que para el país reportarían los estudios a realizar. También corresponderá a dichos organismos analizar la aptitud, antecedentes, capacitación y títulos de los candidatos propuestos.

El agente que use esta licencia queda comprometido, mediante acto legal expreso, a permanecer como empleado de los hipódromos por el término de tres (3) años como mínimo, a partir de la fecha del reintegro a sus funcio

nes; si antes del término fijado el mismo decidiera su alejamiento de la repartición, se le hará cargo de devolución de los haberes percibidos durante el tiempo que permaneció en uso de la licencia de referencia.

Asimismo queda obligado a presentar ante la autoridad de la Repartición un trabajo sobre la materia abordada durante su concurrencia o incorporación a la entidad extranjera o del país.

Para tener derecho a esta licencia, deberá contarse con una antigüedad, como agente por reunión, de un (1) año ininterrumpido y no podrá adicionarse a las previstas en los arts. 18 y 19 debiendo mediar como mínimo una real prestación de servicios de un (1) año.

ARTICULO 21.- De la justificación de inasistencias:

Fuera de los casos de licencia contemplados expresamente en el presente decreto, podrán justificarse excepcionalmente y con goce de jornal, las inasistencias del personal motivadas por razones atendibles o de fuerza mayor.- No excederán de tres (3) reuniones anuales, fraccionadas a razón de una por cuatrimestre.

ARTICULO 22.- Tendrá derecho el agente a la justificación con goce de jornal de las inasistencias motivadas por fenómenos meteorológicos especiales, debidamente comprobados, debiéndose cotejar en la emergencia el domicilio declarado por el causante ante la Jefatura de Personal y el lugar del siniestro.

ARTICULO 23.- Las inasistencias motivadas por donar sangre serán justificadas con goce de jornal, siempre que se presente la certificación respectiva extendida por el establecimiento médico reconocido.

ARTICULO 24.- Disposiciones generales:

Todas las licencias concedidas por causa de enfermedad o accidente quedarán canceladas por el restablecimiento del agente, quien deberá en todos los casos, solicitar

la reincorporación a sus funciones aún cuando no hubiera vencido el término de la licencia, siempre que se encontrara en condiciones necesarias de acuerdo al presente régimen.

Asimismo, las licencias glosadas podrán ser canceladas si las autoridades médicas estimasen que se ha operado el restablecimiento total antes de lo previsto.

ARTICULO 25.- Se considerará falta grave toda simulación realizada con el fin de obtener licencia o justificación de inasistencias y el agente incurso en esta falta será sancionado conforme a lo establecido en el decreto número 7.334/60.- El médico funcionario público que extienda certificación falsa será sancionado conforme a lo establecido en el decreto Nº 7.334/60 o en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional.

ARTICULO 26.- En los casos de las licencias previstas en los arts. 6º, 7º, 14 y 20, el agente percibirá el jornal por los días que le hubiere correspondido laborar, y a los efectos del cómputo, se contabilizará por el total de días prescriptos.

ARTICULO 27.- El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública será el único organismo autorizado para expedir las certificaciones y practicar los reconocimientos médicos a que se refieren los artículos 6º y 7º; la Dirección de los Servicios Médicos queda facultada para conceder las licencias o justificaciones previstas en los artículos 5º, 11, 12, 13 y 23, del presente decreto y solicitar la intervención del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública en los casos que escapan a su jurisdicción.

ARTICULO 28.- El agente tendrá derecho a usar, desde la fecha de su incorporación, las licencias glosadas en el presente decreto, excepto las contempladas en los artículos 3º, 15-a), 18, 19 y 20 en los que se determina la antigüedad.

ARTICULO 29.- El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública es la única autoridad competente para expedir al aspirante el certificado de salud a que hace referencia el art. 4º, inciso a) del decreto Nº 7.334/60.

En el caso de que en el primer examen no se pudiese otorgar el certificado de aptitud, se le extenderá al postulante un certificado de salud provisorio, que podrá ser renovado periódicamente hasta un lapso no mayor de ciento ochenta (180) días, a cuyo término se expedirá en forma definitiva sobre la aptitud o inaptitud del interesado.- Durante el lapso de vigencia de este certificado de salud provisorio, se le podrá permitir al aspirante el desempeño de tareas de acuerdo a la índole de la afección que padece.

Mientras el postulante no se haya sometido al examen psico-físico de aptitud, o se encuentre comprendido en el lapso de certificado de salud provisorio, no tendrá derecho al usufructo de ninguna licencia por enfermedad establecida en este decreto.

ARTICULO 30.- Las disposiciones de los artículos 3º, 5º, 11 y 17 entrarán en vigencia el 1º de enero de 1962; las del artículo 2º a partir del 1º de julio de 1962 y las restantes se aplicarán desde el 1º del mes siguiente a la fecha de publicación del presente decreto en el Boletín Oficial.

ARTICULO 31.- Las disposiciones del decreto Nº 10/57 (*) continuarán en vigor hasta tanto sean de aplicación las normas aprobadas por el presente decreto, oportunidad en que aquellas quedarán automáticamente derogadas, como así también toda otra disposición que se oponga a las mismas.

ARTICULO 32.- Autorízase a la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación para dictar las normas reglamentarias y aclaratorias y toda otra que sea menester para la aplicación del presente régimen de licencias.

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 101.-

ARTICULO 33.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Economía y Asistencia Social y Salud Pública y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.
ARTICULO 34.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Carlos A.Coll Benegas -
Héctor V.Noblía - Jorge Wehbe.

ACTO: DECRETO Nº 1.881/62

MATERIAS: LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS(Casinos) - LICENCIAS - PERSONAL JORNALIZADO

Buenos Aires, 23 de febrero de 1962.-

Visto el decreto nº 8.567/61 (+) que actualiza el régimen de licencias para el personal de la Administración Pública Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1º del citado ordenamiento legal excluye de sus disposiciones al personal que se encuentre sometido a regímenes especiales;

Que tal es el caso del personal que presta servicios en los distintos Casinos dependientes de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, ya que se reúnen en el caso factores diversos, tales como la modalidad peculiar de la prestación de los servicios y su retribución, que justifican un régimen especial;

Que en estas condiciones es correcto disponer una reglamentación especial que, sin apartarse de las disposiciones del antes citado decreto reglamentario, condicione sus normas a las que resultan de aplicación para el personal de que se trata;

Por ello,

(+) Ver Digesto Administrativo nº 1.461.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Fíjase el siguiente régimen de licencias para el personal jornalizado de los Casinos dependientes de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, excluyéndose del mismo al personal contratado.

ARTICULO 2º.- De la licencia anual por descanso:

a) La licencia ordinaria por descanso es de utilización obligatoria, se concederá con goce íntegro de haberes y podrá ser fraccionada en dos (2) períodos a juicio de autoridad superior de cada casino, se acordará por año calendario, conforme a las necesidades del servicio y no podrá ser transferida al año siguiente por ningún concepto;

b) En las dependencias que tuvieran receso funcional anual, se dispondrá que la mayor parte del personal use su licencia en dicha época;

c) El agente separado de su cargo por razones de economía o racionalización, transferencia a la actividad privada, incompatibilidad por acumulación de cargos, razones de salud, fallecimiento, vale decir, que no lo sea por una medida expulsiva, emanada de un sumario, tendrá derecho al pago de la parte proporcional de la licencia por descanso no utilizada;

d) El agente que presente renuncia al cargo por motivos particulares, o por jubilación ordinaria o retiro voluntario, que hubiere utilizado la licencia total por descanso, y cuya prestación de servicios en el año calendario fuera inferior a 120 jornadas, deberá reintegrar los haberes correspondientes a la parte proporcional utilizada en exceso;

e) Las licencias por descanso no podrán ser utilizadas a continuación de licencias por enfermedad (artículo 11°), accidentes de trabajo o enfermedad profesional (artículo 12°), servicio militar (artículo 21), licencias extraordinarias sin goce de haberes (arts. 22°, 23°, 27° y 28°) o con goce de haberes (art.29°), debiendo por lo menos haber transcurrido 20 jornadas de trabajo efectivo. Si razones de tiempo no hacen posible su utilización dentro del año calendario, se perderá el derecho a la misma;

f) Igual temperamento que el indicado en (e) será de aplicación cuando el agente se reintegre al servicio después de una suspensión mayor de un (1) mes, ya se trate de una medida cautelar o disciplinaria;

g) La licencia anual por descanso podrá interrumpirse por las siguientes causas:

1ª: enfermedad;

2ª: razones de servicio.

En el primer caso el agente deberá continuar en uso de la licencia por vacaciones interrumpida, seguidamente del alta médica respectiva, sin considerar ésta como una nueva fracción. Para este caso es de aplicación el inciso a) cuando se refiere a no trasladar al año siguiente la licencia no utilizada. Para el punto 2°, las autoridades deberán tomar los recaudos pertinentes para hacer posible que la interrumpida licencia sea utilizada indefectiblemente en el transcurso del año calendario;

h) Las licencias de éste carácter serán en todos los casos otorgadas por el casino donde el agente está prestando servicios;

i) Para utilizar estas licencias debe contarse con 120 jornadas de antigüedad ininterrumpida;

j) Los profesionales médicos radiólogos y los auxiliares de radiología pertenecientes a los casinos quedan excluídos del presente artículo. La utilización de este beneficio les será otorgada conforme a lo reglamentado por el decreto nº 21.158/56 (°).

ARTICULO 3º.- El término de la licencia anual será:

a) De diez (10) días cuando la antigüedad del agente sea mayor de 120 jornadas y no exceda de cinco (5) años;

b) De quince (15) días cuando la antigüedad del agente sea mayor de cinco (5) años y no exceda de diez (10) años;

c) De dieciocho (18) días cuando la antigüedad del agente sea mayor de diez (10) años y no exceda de quince (15) años;

d) De veintidos (22) días cuando la antigüedad del agente sea mayor de quince (15) años y no exceda de veinte (20) años;

e) De veinticinco (25) días cuando la antigüedad del agente sea mayor de veinte (20) años.

En caso de que en el transcurso del año calendario el agente cumpliese una antigüedad que daría derecho a un término mayor de licencia anual se computará el término mayor para el otorgamiento de la misma.

ARTICULO 4º.- Cuando el agente se hallare cumpliendo una comisión o misión oficial fuera del asiento habitual donde desempeña sus tareas, no se computará en los términos del artículo 3º el tiempo normal empleado en el viaje de ida y vuelta que le ocasione el traslado.

(°) Ver Digesto Administrativo nº 151.-

Si la licencia la fracciona en dos (2) períodos sólo en uno de ellos se concederá el descuento por tiempo de viaje; al término de la licencia deberá justificar ante la autoridad respectiva que le concedió la misma, su traslado mediante certificación extendida por la policía de la localidad.

ARTICULO 5º.- Para establecer la antigüedad del agente se computarán los años de servicios prestados en la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal, incluso los "ad honorem" o en entidades privadas cuando en este último caso se haya hecho el cómputo de servicio en la respectiva Caja de Previsión Social.

A los efectos del reconocimiento de la antigüedad acreditada en entidades privadas y hasta tanto la correspondiente Caja extienda las respectivas certificaciones, los agentes deben presentar una declaración jurada, acompañada con una constancia extendida por el o los empleadores sujeta a la pertinente certificación documental, en la que se justifiquen los servicios prestados a partir de los 18 años de edad.

ARTICULO 6º.- Al personal retirado o dado de baja de las Fuerzas Armadas de la Nación, Gendarmería Nacional, Institutos Penales, Policía Federal y Prefectura Nacional Marítima, lo mismo que a jubilados y retirados de la Administración Nacional, Provincial y Municipal que ocupen cargos en la Administración Nacional, se le computará su anterior antigüedad a los efectos del artículo 3º. A este fin se tendrán en cuenta únicamente los años efectivos de servicio.

ARTICULO 7º.- A los efectos de la antigüedad como personal jornalizado de los Casinos, se computará un (1) año, a todo agente al que se le haya liquidado, como mínimo, doscientos cuarenta (240) jornales. Los días liquidados en el año, que excedan el mínimo establecido precedentemente, no serán acumulables para años posteriores.

ARTICULO 8º.- De la licencia por corto tratamiento de la salud:

Para el tratamiento de afecciones comunes, incluídas operaciones quirúrgicas menores, y por accidente acaecido fuera del servicio se concederá a los agentes hasta treinta (30) días corridos de licencia por año calendario, en forma contínua o discontínua con percepción íntegra de jornales. Vencido este plazo podrá prorrogarse hasta la finalización del año calendario pero sin goce de jornales.

Cuando el Servicio Médico autorizado estimare que el agente padece una afección que lo haría incluir en el artículo 11º, deberá someterlo a examen del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, sin que sea necesario agotar previamente los treinta (30) días a que se refiere el presente artículo.

Cuando encontrándose en el desempeño de sus funciones el agente requiera la atención médica del Servicio Médico, le será considerado el día como licencia por enfermedad con o sin goce de jornal según corresponda cuando hubiere transcurrido menos de la media jornada de labor, y se le concederá permiso de salida sin reposición cuando hubiere trabajado más de media jornada de labor.

ARTICULO 9º.- Las inasistencias motivada por donar sangre serán justificadas con goce de jornal siempre que se presente la certificación correspondiente extendida por establecimiento médico reconocido.

ARTICULO 10º.- De la licencia por enfermedad de familiar:

a) Para consagrarse a la atención de un miembro enfermo del grupo familiar, el agente tendrá derecho a que se le conceda hasta diez (10) días de licencia laborables contínuos o discontínuos, con goce íntegro de jornal por año calendario;

b) Cuando el cuerpo médico autorizado estime que el estado del paciente lo justifica, podrá prorrogar esta licencia en las mismas condiciones que la anterior por un término de veinte (20) días laborables pero sin goce de jornal. En ambas circunstancias el agente tendrá igualmente derecho, aunque el paciente se encuentre hospitalizado;

c) Los agentes quedan obligados a presentar ante las respectivas oficinas de personal y el Servicio Médico una declaración jurada sobre los integrantes del grupo familiar;

d) Cualquier comprobación sobre que el agente ha falseado su declaración jurada con intención de lograr una licencia de este tipo, será sancionado conforme las normas disciplinarias que rigen en el Decreto nº 7.334/60 (*).

ARTICULO 11º.- De la licencia por largo tratamiento de la salud:

a) Por afecciones que inhabiliten para el desempeño del trabajo y para los casos de intervenciones quirúrgicas, exceptuando la cirugía menor a que hace referencia el artículo 8º, se concederá hasta 365 días corridos en forma contínua o discontínua, para una misma o distinta afección, con percepción íntegra de jornales;

b) Vencido este plazo, subsistiendo la o las causales que determinaron la licencia, se concederá ampliación de la misma hasta el término de 365 días corridos, con el 50% de remuneración;

c) Antes de terminar la prórroga, el agente será reconocido por una Junta Médica en el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, la que determina-

(*) Ver Digesto Administrativo nº 1.204.-

rá de acuerdo con la capacidad laborativa del agente las funciones que podrá desempeñar;

d) En caso de incapacidad total y permanente dictaminada por la citada Junta Médica, se aplicarán las Leyes de Previsión y Ayuda Social correspondientes, las que deberá tramitar el agente ante las Cajas respectivas; para este último supuesto los organismos del Estado y en especial el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública deberán tener en cuenta los artículos 1º y 2º del Decreto nº 5.554/58 (*);

e) Cuando la mencionada Junta Médica no pueda expedirse categóricamente sobre la incapacidad total y permanente y compruebe que el agente no está en condiciones de reintegrarse, se formará una nueva Junta Médica al cabo de 180 días, la que se expedirá en forma definitiva. Este período de 180 días se justificará sin percepción de jornales;

f) Cuando el agente se reintegre al servicio una vez vencida la licencia y la prórroga, es decir agotados los 730 días que acuerda este artículo, no podrá utilizar una nueva licencia de este carácter hasta después de transcurridos tres (3) años;

g) Cuando se trate de períodos discontínuos se irán acumulando hasta cumplir los plazos indicados, siempre que entre los períodos otorgados no medie un lapso de tres (3) años sin haber hecho uso de licencia de este tipo; de darse este supuesto aquéllos no serán considerados. y tendrá derecho a las licencias totales a que se refiere este artículo;

h) El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública es el único autorizado para disponer el alta del agente, sin cuyo requisito éste no podrá reintegrarse a sus tareas;

(*) Ver Digesto Administrativo nº 612.-

i) Igualmente, podrá ordenar cambio de tareas o de destino al agente si lo conceptúa necesario, para el total restablecimiento del mismo.
Asimismo podrá conceder para idénticos fines una reducción en las horas de labor, a fijar en cada caso. El tiempo de esta franquicia será fijado exclusivamente por el citado Ministerio.

j) Las dos franquicias aludidas serán concedidas por el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, aunque no haya mediado licencias por el presente artículo, previa autorización para el examen médico otorgada por el Servicio Médico del Casino.

ARTICULO 12ª.- De la licencia por enfermedad profesional o accidente de trabajo;

a) En caso de enfermedad profesional contraída en acto de servicio, o accidente de trabajo se concederán hasta 730 días corridos de licencia en forma contínua o discontínua, para una misma o distinta afección, con goce íntegro de jornales;

b) Vencido este plazo, subsistiendo la o las causales que determinaron la o las licencias, se efectuará una Junta Médica en el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, la que determinará la presunta incapacidad del agente;

c) Si de la misma no surgiese incapacidad se otorgará el alta al agente con reintegro a sus tareas habituales o recomendará cambio de tareas o de destino; asimismo podrá conceder, para lograr el total restablecimiento del agente, una reducción en las horas de labor, tratándose de accidentes de trabajo, a fijar en cada caso;

d) Si surgiese incapacidad parcial, transitoria o permanente se adecuarán las tareas del agente a su nuevo estado;

e) Si la incapacidad fuese total y permanente, se recomendará la aplicación de las Leyes de Previsión que estatuyen sobre la materia aludida quedando en consecuencia la licencia de referencia sujeta a los términos de la Ley citada;

f) En el supuesto de que agotados los 730 días la Junta Médica no pudiese expedirse categóricamente sobre la incapacidad total y permanente, y comprobare que el agente no está en condiciones de reintegrarse a sus tareas, aún cambiándolas o adecuándolas, se le concederá al mismo una prórroga de 180 días corridos, con el 50% de remuneración.
Vencido este plazo se realizará una nueva Junta Médica la que deberá expedirse en forma definitiva.

g) Cuando una enfermedad profesional o un accidente de trabajo motivare el alejamiento del agente de sus tareas habituales por un lapso ininterrumpido mayor de 365 días, al término de éstos se realizará una Junta Médica en el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, la que determinará la incapacidad parcial o total de acuerdo a lo establecido en la Ley nº 9.688 y disposiciones complementarias;

h) Cualquier accidente sufrido por el agente hasta una hora antes del comienzo de la jornada de labor o hasta una después de finalizada la misma, siempre que ocurriera en el trayecto del domicilio del agente al lugar de trabajo o viceversa, será causal para incluir la licencia que fuese necesario conceder le, con cargo al presente artículo. El lapso indica

do podrá ampliarse cuando se verifique que por razones de distancia o de ubicación, el viaje aludido demande normalmente más de una hora;

i) La denuncia del accidente de trabajo deberá efectuarse ante la autoridad administrativa del organismo en que se desempeña el agente, inmediatamente de ocurrido aquél.
Cuando el accidente se produzca conforme a lo previsto en el inciso h), deberá hacerse la denuncia respectiva ante autoridad policial, dentro de las 24 horas de producido;

j) En todos los casos, para poder incluirse la licencia en el presente artículo, el pedido efectuado ante el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública debe ir siempre acompañado de la respectiva constancia sumarial;

k) El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública es el único organismo autorizado para disponer el alta del agente, sin cuyo requisito éste no podrá reintegrarse a sus tareas;

l) Cuando el agente se reintegre al servicio una vez vencida la licencia y la prórroga, es decir agotados los 910 días que acuerda este artículo, no podrá utilizar una nueva licencia de este carácter hasta después de transcurridos dos (2) años;

m) Cuando se trate de períodos discontínuos se irán acumulando hasta cumplir los plazos indicados siempre que entre los períodos otorgados no medie un lapso de dos (2) años sin haber hecho uso de licencia de este tipo; de darse este supuesto aquéllos no serán considerados, y tendrá derecho a las licencias totales a que se refiere este artículo.

ARTICULO 13º.- En todos los casos a que se refiere el artículo 12°, la Dirección General de Obra Social y en su defecto el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, proveerán gratuitamente la asistencia médica y los elementos terapéuticos necesarios.

ARTICULO 14º.- El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública será el único organismo autorizado para expedir las certificaciones y practicar los reconocimientos médicos a que se refieren los artículos 11° y 12°. Los respectivos Servicios Médicos quedan autorizados para conceder las licencias o justificaciones previstas en los artículos 8°, 9°, 10°, 18° y 20° del presente decreto, y solicitar la intervención del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública en los casos que escapan a su jurisdicción.

ARTICULO 15º.- En todos los casos los Casinos tendrán a su cargo el control de la situación declarada por los agentes de la administración, para lo cual contarán con la colaboración del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública. El agente al cual se comprobare que no realiza tratamiento médico, perderá su derecho a las licencias y beneficios que otorga el presente decreto.

Las licencias o justificaciones a que se refieren los artículos 8°, 9°, 10°, 11°, 12° y 18°, son incompatibles con el desempeño de cualquier función pública o privada; los agentes que infrinjan esta disposición quedarán comprendidos en el presente artículo, aparte de las sanciones que les correspondieren de acuerdo con lo establecido en el Decreto n° 7.334/60.

ARTICULO 16º.- Si el agente se encontrara fuera de su residencia habitual, en el interior del país, y necesitara licencia por enfermedad en un lugar en que no hubiera médico del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación o de la repartición o de otra repartición nacional, provincial o municipal, con sede en la locali-

dad, deberá presentar certificado del médico de pòlicía del lugar y si no hubiere, de médico particular, refrendado por la autoridad policial del lugar con historia clínica y demás elementos de juicio médico que permitan certificar la existencia real de la causal invocada.

Cuando un agente se encontrara en el extranjero y solicitara licencia por enfermedad (artículos 8°, 11° y 12°), deberá presentar o remitir para su justificación al servicio médico los certificados médicos extendidos por autoridades médicas oficiales del país donde se encontrare, visado por el Consulado de la República Argentina. En el supuesto de no existir las autoridades a que se hace referencia, el interesado recabará ante la policía del lugar una constancia que certifique tal circunstancia, teniendo entonces validez el certificado de médico particular, legalizado y visado por el Consulado de la República Argentina.

ARTICULO 17º.- Los agentes en uso de licencia por enfermedad (artículos 11° y 12°) no podrán ausentarse al interior del país o al extranjero sin autorización del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, bajo cuyo control médico se encuentran.

Al agente que no cumpliere con el requisito precedente, no le será concedida la prórroga de licencia que por causas de enfermedad podría solicitar en o desde el interior del país o el extranjero, aparte de las sanciones disciplinarias que podrían corresponderle por vulnerar expresas disposiciones del presente decreto.

ARTICULO 18º.- De la licencia por maternidad:

a) Por maternidad se acordará licencia con goce íntegro de jornal por el término de 84 días corridos, lapso que podrá ser dividido en dos períodos preferentemente iguales, uno anterior y otro posterior al parto. Los períodos son acumulables, y en ningún caso el segundo período (post-parto) será inferior a 42 días;

b) En el supuesto de parto diferido, se reajustará la fecha inicial de este artículo, justificándose los días previos a la iniciación real de esta licencia por los artículos 8º y 11º;

c) En caso de nacimiento múltiple la licencia por maternidad podrá ampliarse a un total de 105 días corridos, con un período posterior al parto no inferior a 63 días, resultando igualmente de aplicación las especificaciones del inciso b);

d) La iniciación de la licencia por este artículo limita automáticamente a dicha fecha inicial el usufructo de cualquier otra licencia de que esté gozando la agente.

ARTICULO 19º.- A petición de parte y previa certificación de autoridad médica competente que así lo aconseje, podrá acordarse cambio de tareas o de destino a partir de la concepción y hasta el comienzo de la licencia por maternidad.

ARTICULO 20º.- De acuerdo con lo estatuído en la Ley número 12.568, toda agente madre de lactante, tendrá derecho a la reducción de una hora de su jornada de labor para atender a la crianza de su hijo pudiendo optarse por:

a) Disponer de dos (2) descansos de media hora cada uno para atención de su hijo en el transcurso de la jornada de trabajo;

b) O disminuir en una hora díaria su jornada de trabajo ya sea, iniciando su labor una hora después del horario de entrada o finalizando una hora antes;

c) O disponer de una hora en el transcurso de la jornada de trabajo.

Esta franquicia se acordará por espacio de 240 días corridos contados a partir de la fecha del nacimiento del niño, cualquiera fuera la época de su reintegro.

Este plazo excepcionalmente podrá ampliarse, en casos muy especiales y previo examen médico del niño, hasta 365 días corridos quedando bajo la absoluta responsabilidad del cuerpo médico la concesión de la referida prórroga, como asimismo del beneficio de que trata el presente artículo.

En caso de nacimiento múltiple se le concederá a la agente esta franquicia sin examen previo de los niños; en caso de posterior fallecimiento de alguno de los niños, se procederá como en el caso de nacimiento único.

La franquicia a que se alude y su posible prórroga, sólo alcanzará a los agentes cuya jornada de trabajo son superior a cuatro (4) horas diarias.

ARTICULO 21º.- De la licencia por servicio militar:

Los agentes que deben incorporarse al servicio militar tendrán derecho a las siguientes licencias con el 50% de su remuneración; desde la fecha de su incorporación hasta cinco (5) días después del día de la baja asentada en la libreta de enrolamiento, en los casos en que el agente hubiere sido declarado inapto e fuera exceptuado; y hasta quince (15) días después de haber sido dado de baja si hubiera cumplido el período para el cual fué convocado y éste fuera mayor de seis (6) meses. Igualmente se concederá licencia de cinco (5) días, con la remuneración expresada, cuando el período fuera inferior a seis (6) meses.

Las licencias de cinco (5) y quince (15) días a que hace referencia el párrafo anterior, serán sobre días corridos.

Los días de viaje por traslado desde el punto del país donde cumplió con el servicio militar obligatorio y el a-

siento habitual de sus tareas no serán incluídos en los términos de licencias fijadas precedentemente; y se justificarán independientemente con el 50% de los jornales.

Las ausencias en que incurra el personal por tener que someterse a examen médico previo a su incorporación a las filas de las fuerzas armadas, o por otras razones relacionadas con el misno fin, serán justificadas con goce de jornal, previa presentación de las citaciones respectivas emanadas de organismos militar.

El personal que en carácter de reservista sea incorporado transitoriamente a las fuerzas armadas de la Nación tendrá derecho a usar de licencia y a percibir mientras dure su incorporación, como única retribución a la correspondiente a su grado en caso de ser oficial o suboficial de la reserva; cuando el sueldo del cargo civil sea mayor que dicha remuneración la dependencia a la cual pertenece liquidará la diferencia.

Para el personal que cumpla el Servicio Militar incorporado a la Policía Federal se le concederá licencia sin sueldo de conformidad con lo establecido en el decreto número 4216/54 (*).

ARTICULO 22º.- De la licencia por cargos electivos o de representación:

El personal que fuera designado para desempeñar cargos de representación política en el orden nacional, provincial o municipal, o cuando resultare elegido miembro de los Poderes Ejecutivos o Legislativos de la Nación o de las Provincias y de las Municipalidades; queda obligado a solicitar licencia sin percepción de jornales mientras dure su mandato, debiendo contar para ello con una antigüedad no inferior a tres (3) años de servicios.

ARTICULO 23º.- Cuando el agente fuera designado o elegido para desempeñar cargos de representación gremial y/o sindi-

(*) Ver Digesto Administrativo nº 1.052.-

cal, tendrá derecho a licencia sin goce de jornal, conforme a lo previsto sobre el particular por la Ley nº 14.455(!) y por el tiempo que dure su mandato, debiendo reintegrarse al servicio una vez finalizado éste.

Las licencias de este carácter quedan condicionadas a las especificaciones de la citada Ley; debiendo limitarse su concesión a aquellos agentes que desempeñarán cargos directivos, hasta la categoría de Tesoreros o equivalentes, en asociaciones profesionales con personería gremial reconocida, y que ostentan la representación más calificada o importante a que se refiere el artículo 18° de la Ley número 14.455.

ARTICULO 24°.- De la licencia por asuntos familiares:

Desde el día de su ingreso el agente tendrá derecho a usar de licencia con goce íntegro de haberes en los siguientes casos y por los términos que se indican:

1) Matrimonio

a) del agente (cuando éste se realice conforme a las leyes argentinas o extranjeras reconocidas por leyes argentinas) 10 días corridos.

b) de sus hijos: 1 día laborable.

2) Nacimiento

a) de hijos del agente varón: 2 días laborables.

3) Fallecimiento (ocurridos en el país y en el extranjero), mediante comprobante respectivo:

a) del cónyuge o pariente consaguíneo en primer grado: 5 días laborables.

b) parientes afines de primer grado y consaguíneos afines de segundo grado: 2 días laborables.

(!) Ver Digesto Administrativo nº 608.-

ARTICULO 25º.- De la licencia para rendir exámenes:

Dentro del año calendario se concederá licencia con goce íntegro de jornales por el término de 23 días laborables, a los agentes que cursen estudios en establecimientos secundarios especiales, universitarios, oficiales o incorporados y en Universidades privadas reconocidas por el Superior Gobierno de la Nación (nacionales, provinciales o municipales), para rendir examen. Este beneficio será acordado en tantos plazos como sea necesario, pero ninguno de los cuales podrá ser superior a siete (7) días. Al término de cada licencia el agente deberá presentar el comprobante respectivo extendido por autoridad del establecimiento educacional en el que conste que ha rendido examen.

Si al término de la licencia acordada, el agente no hubiera rendido examen por postergación de fecha o mesa examinadora, deberá presentar un certificado extendido por autoridad educacional respectiva, en el que conste dicha circunstancia y la fecha en que se realizará la prueba, quedando hasta entonces en suspenso la justificación de las ausencias incurridas.

ARTICULO 26º.- Cuando el agente acredite su condición de estudiante en establecimiento a que se refiere el artículo 25º, y la necesidad de asistir a dichos establecimientos en horas de oficina, los respectivos organismos que tengan concedidos horarios especiales deberán arbitrar las medidas para que estos agentes puedan concurrir a clase, clases prácticas y demás exigencias inherentes a su calidad de estudiante, tratando de armonizar que el servicio se afecte al mínimo, y el agente pueda normalmente desarrollar su actividad estudiantil; de no ser ello posible se acordarán permisos dentro del horario de trabajo.

En el caso de resultar imposible a los organismos respectivos adoptar las medidas enunciadas, los agentes podrán optar por el artículo 12º del Decreto nº 945/60 (-).

(-) Ver Digesto Administrativo nº 1075.-

ARTICULO 27º.- De la licencia por asuntos particulares:

En el transcurso de cada decenio el agente podrá usar de licencia sin remuneración por el término de seis (6) meses franccionable en dos (2) períodos. El término de licencia no utilizado en un decenio, no puede ser acumulado a los decenios subsiguientes. Para tener derecho a esta licencia en distintos decenios, deberá transcurrir un plazo mínimo de dos (2) años entre la terminación de una y la iniciación de otra, y no podrá adicionarse a las licencias previstas en los artículos 23°, 28° y 29°. Además deberá contarse con una antigüedad ininterrumpida en la Administración Pública de un (1) año.

ARTICULO 28º.- De la licencia para estudios:

El agente tendrá derecho a un (1) año de licencia sin goce de jornal cuando deba realizar estudios, investigaciones, trabajos científicos, técnicos y culturales o participar en conferencias o congresos de esa índole, en el país o en el extranjero, ya sea por iniciativa particular, estatal o extranjera o por becas otorgadas por instituciones privadas, nacionales o extranjeras.

Esta licencia podrá ser prorrogada por un año más en iguales condiciones, cuando las actividades que realice el agente a juicio de la Secretaría de Estado de Hacienda resulten de interés para el servicio. En este caso el agente queda comprometido a no retirarse del Casino hasta transcurrido un (1) año como mínimo desde la fecha de su reintegro a las funciones.

Para usufructuar esta licencia deberá contarse con una antigüedad ininterrumpida en la Administración Pública de un (1) año, y no podrá adicionarse a las licencias previstas en los artículos 27° y 29° debiendo mediar una real prestación de servicios de un (1) año.

ARTICULO 29º.- Los agentes de los Casinos podrán obtener licencia con goce de jornal por el lapso que se determina

rá en forma expresa en el decreto que el Poder Ejecutivo dicte para su concesión cuando se den las siguientes causales y se cubren los requisitos exigidos; que los intereses de la Nación en materia técnica, científica o prefesional afín aconsejen la concurrencia o incorporación de agentes a instituciones en el extranjero o en el país. Al efecto deberá expedirse con carácter previo, la Comisión Nacional de la Unesco, cuando se trate de pedidos fundados en las actividades de ese organismo internacional, o el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en los demás casos, los que determinarán el verdadero interés nacional de la concurrencia o incorporación, fundando dicha opinión en la necesidad o importancia que para el país reportarían los estudios a realizar. También corresponderá a dichos organismos analizar la aptitud, antecedentes, capacitación y títulos de los candidatos propuestos.

El agente que use esta licencia queda comprometido mediante acto legal expreso a permanecer como empleado de la Administración Pública Nacional por el término de tres (3) años como mínimo, a partir de la fecha del reintegro de sus funciones. Si antes del término fijado, el mismo decidiera su alejamiento de la función pública, se le hará cargo de devolución de los jornales percibidos durante el tiempo que permaneció en uso de la licencia de referencia.

Asimismo queda obligado a presentar ante la autoridad superior de su organismo un trabajo sobre la materia abordada durante su concurrencia o incorporación a la entidad extranjera o en el país.

Para tener derecho a esta licencia, deberá contarse con una antigüedad en la Administración Pública Nacional de un (1) año ininterrumpido; y no podrá adicionarse a las previstas en los artículos 27° y 28°, debiendo mediar como mínimo, una real prestación de servicios de un (1) año.

ARTICULO 30ª.- De la justificación de inasistencias:

Fuera de los casos de licencias contemplados expresamente en el presente decreto, podrán justificarse por razones particulares de fuerza mayor con goce de jornal hasta seis (6) días por cada doscientos cuarenta (240) jornadas trabajadas, debiendo no exceder de dos (2) días por cada veinte (20) jornadas trabajadas.

ARTICULO 31º.- El agente tendrá derecho a la justificación con goce de jornal de las inasistencias motivadas por fenómenos metereológicos especiales debidamente comprobados.

En todos los casos deberá cotejarse, previo a la justificación, el domicilio declarado por el agente en las Oficinas de Personal y el lugar del siniestro.

ARTICULO 32º.- Disposiciones generales:

Las licencias concedidas por causas de enfermedad o accidentes podrán ser canceladas si las autoridades médicas respectivas estimasen que se ha operado el restablecimiento total antes de lo previsto.

El agente deberá, en todos los casos, solicitar la reincorporación a sus funciones, aún cuando no hubiese vencido el término de su licencia, siempre que se encontrare en condiciones necesarias de acuerdo a la reglamentación vigente.

ARTICULO 33º.- Se considerará falta grave toda simulación realizada con el fin de obtener licencia o justificación de inasistencias y el agente incurso en esta falta será sancionado conforme a lo establecido en el Decreto nº 7.334/60. El médico funcionario público que extienda certificación falsa será sancionado conforme a lo establecido en el decreto número 7.334/60 o en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional.

ARTICULO 34º.- Facúltase al señor Secretario de Estado de Hacienda para determinar qué funcionarios tendrán a su cargo la concesión de las licencias previstas en el presente decreto, con excepción de la determinada por el artículo 29º, que será acordada por el Poder Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 35º.- En los casos de licencias previstas en los artículos 8°, 10°, 11°, 12°, 18°, 21°, 24° y 28° el agente percibirá el jornal por los días que le hubiere correspondido laborar, y a los efectos del cómputo se contabilizará por el total de los días prescriptos.

ARTICULO 36º.- El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, es la única autoridad competente para expedir al aspirante el certificado de salud a que hace referencia el artículo 4° inciso a) del decreto nº 7.334/60.

En el caso de que en el primer examen no se pudiese otorgar el certificado de aptitud, se le extenderá al postulante, un certificado de salud provisorio, que podrá ser renovado periódicamente hasta un lapso no mayor de 180 días a cuyo término se expedirá en forma definitiva sobre la aptitud del interesado. Durante el lapso de vigencia de este certificado de salud provisorio, se le podrá permitir al aspirante, el desempeño de tareas de acuerdo a la índole de la afección que padece.

Mientras el postulante no se haya sometido al examen psico-físico de aptitud, o se encuentre comprendido en el lapso del certificado de salud provisorio, no tendrá derecho al usufructo de ninguna licencia por enfermedad establecida en este decreto.

ARTICULO 37º.- El agente tendrá derecho a usar desde la fecha de su incorporación, las licencias regladas en el presente decreto, salvo los casos contemplados en los artículos 3°, 22°, 27°, 28° y 29° para los cuales queda especificada en cada caso la antigüedad requerida.

ARTICULO 38º.- Las disposiciones de los artículos 3°, 8°, 10° y 25° entrarán en vigencia el 1° de enero de 1962; las del artículo 2° a partir del 1° de abril de 1962 y las restantes se aplicarán desde el 1° del mes siguiente a la fecha de publicación del presente decreto en el Boletín Oficial.

ARTICULO 39º.- Las disposiciones del decreto nº 7511/58 (*) continuarán en vigor hasta tanto sean de aplicación las normas aprobadas por el presente decreto, oportunidad en que aquellas quedarán automáticamente derogadas, como así también toda otra disposición que se oponga a las mismas.

ARTICULO 40º.- La Secretaría de Estado de Hacienda podrá dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y toda otra que sea menester para la aplicación del presente régimen de licencias.

ARTICULO 41º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y Asistencia Social y Salud Pública y firmado por el señor Secretario de Hacienda.

ARTICULO 42º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Carlos Coll Benegas - Héctor V. Noblía - Jorge Wehbe.-

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 929.-

ACTO: DECRETO Nº 2.071/62.-

MATERIAS: RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - C.E.P.R.A. - LIMITACION DE SERVICIOS - PERSONAL - INDEMNIZACION (Ley Nº 16.432 - art. 49) - PRESUPUESTO

Buenos Aires, 7 de marzo de 1962.-

Visto lo dispuesto en el decreto Nº 489/62 (1), y

CONSIDERANDO:

Que corresponde adoptar las disposiciones que dejen perfectamente definido el carácter de la licencia extraordinaria reglada por dicho acto de Gobierno;

Que asimismo es necesario establecer el mecanismo que posibilite la incorporación de personal licenciado, cuando resulte indispensable autorizar la designación de nuevo personal en la Administración Nacional;

Que, además, debe adoptarse un sistema ágil para hacer efectivas las modificaciones presupuestarias resultantes de la aplicación de los decretos sobre racionalización administrativa;

Por ello,

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1563.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Durante el término de 12 (doce) meses del licenciamiento dispuesto por decreto N° 489/62, los organismos del Estado otorgarán a los agentes afectados, que lo solicitaren, el certificado de cesación de servicios para su presentación ante la Caja Nacional de Previsión que corresponda, la que queda obligada a admitirlo para tramitar el respectivo beneficio. Dicho certificado será otorgado con la constancia de que la cesación efectiva se operará en la fecha que corresponda al vencimiento del término de 12 (doce) meses del licenciamiento. Si el agente solicitara el inmediato goce del beneficio previsional, dejará de percibir los haberes por licenciamiento desde el momento en que perciba los correspondientes a la jubilación o retiro. En uno u otro caso, la indemnización legal se abonará una vez cesado el licenciamiento, quedando modificado en tal sentido el artículo 11° del decreto N° 489/62.

ARTICULO 2°.- Ningún organismo de las jurisdicciones civiles en la órbita del Poder Ejecutivo podrá incorporar nuevo personal, en el caso de que tenga la autorización para hacerlo, si no es mediante la absorción de agentes licenciados en los términos del decreto N° 489/62, o bien mediante la incorporación de personal de organismos cuya supresión o reducción ha sido ya programada.

La Dirección General del Servicio Civil de la Nación (Servicio de Transferencias) deberá llevar el registro permanentemente actualizado del personal licenciado que desee su reingreso a los cuadros de actividad. La manifestación en tal sentido deberá ser efectuada ante dicha Dirección por el personal afectado, dentro de los 30 (treinta) días de notificado de su licenciamiento.

Desde el momento de su reingreso, este personal cesará de percibir los haberes del licenciamiento, a cuyo e-

fecto la citada Dirección General formulará las comunicaciones del caso.

Esta norma es de aplicación para organismos centralizados y descentralizados, de cuentas especiales, autárquicos, inclusive bancos oficiales, empresas del Estado y Plan de Trabajos Públicos.

ARTICULO 3º.- Si por la especialidad de la función a cubrir no fuera posible incorporar al personal a que se refiere el artículo 2º, el organismo respectivo deberá solicitar al Poder Ejecutivo autorización expresa para designar personal distinto, fundando el pedido en información escrita suficientemente explícita.

ARTICULO 4º.- La opción a que se refiere el artículo 7º del decreto Nº 489/62 podrá ejercitarse hasta el 31 de marzo del año en curso. En cuanto al personal de los organismos cuya supresión o refundición haya sido dispuesta por el Poder Ejecutivo, podrá hacer uso de esa opción dentro de los plazos establecidos para el cumplimiento de tales medidas.

ARTICULO 5º.- El procedimiento de supresión de cargos establecido en el artículo 4º del decreto Nº 489/62 será efectuado mediante la incorporación al presupuesto de cada organismo de una planilla demostrativa de las modificaciones presupuestarias resultantes, conformada por el señor Secretario de Estado de Hacienda o el funcionario que éste designe. Tal modificación surtirá todos sus efectos sin perjuicio de requerir ulteriormente los pronunciamientos del Poder Ejecutivo que fueren pertinentes.

En caso de tratarse de personal imputado a partidas globales o cuentas especiales, la planilla demostrativa deberá reflejar igualmente la disminución de tales partidas en la proporción correspondiente al cargo eliminado.

El procedimiento fijado en este artículo se seguirá igualmente para la supresión de vacantes cuyo descongelamiento no se encuentre autorizado.

ARTICULO 6º.- Solo podrá acordarse excepción a lo dispuesto en el artículo 5º del decreto Nº 489/62 por acto expreso del Poder Ejecutivo cualquiera fuere la naturaleza jurídica del organismo afectado y siempre que se trate de un cargo de la estructura funcional aprobada por el Poder Ejecutivo y que se compense mediante la eliminación de otros cargos por un importe equivalente al del que se desea mantener.

ARTICULO 7º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Carlos A.Coll Benegas
Jorge Wehbe.

ACTO: DECRETO Nº 12.221/61.-

MATERIAS: ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - CALIFICACIONES CAMBIO DE CLASE O GRUPO

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1961.-

Visto el Escalafón aprobado por Decreto nº 9.530/58,

CONSIDERANDO:

Que por aplicación de las disposiciones contenidas en los puntos 48º al 50º del mismo, y sus normas complementarias (Decreto nº 11.941/59) (+), se han dictado varios decretos resolviendo los reclamos por ubicación escalafonaria presentados por numerosos agentes de distintos Ministerios y Secretarías de Estado;

Que en el caso de los reclamos resueltos favorablemente se presentan situaciones de agentes a los que se les ha cambiado no sólo de Grupo, sino incluso de Clase;

Que en estos últimos casos, en el transcurso de los tres años corridos desde la fecha del escalafonamiento de los agentes, 1º de noviembre de 1958, se han realizado otras tantas calificaciones anuales para las cuales se ha considerado el escalafonamiento primitivo de cada empleado, utilizándose en consecuencia el modelo de fo-

//..

(+) Ver Digesto Administrativo nº 916.-

ja correspondiente a la Clase en que revistaba;

Que dichas calificaciones se han reflejado, por aplicación del sistema de módulos vigentes, en la ubicación del interesado dentro de su Clase y Grupo, y por ende en sus retribuciones mensuales;

Que si como consecuencia de la modificación del encasillamiento dispuesto se debiera volver a calificar a los interesados utilizando el modelo de foja previsto para la Clase en la que, han sido reubicados con anterioridad al 1º de noviembre de 1958, se presentarían una serie de problemas de todo orden que es prudente evitar;

Que para ello y como una medida de carácter excepcional, deben darse por válidas las calificaciones ya realizadas en la Clase y Grupo que tenía el personal al momento de efectuadas las mismas;

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Dénse por válidas a todos los efectos previstos en el Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional (Decretos nros. 9.530/58 y 11.941/59) las calificaciones correspondientes a los períodos 1958/59, 1959/60 y 1960/61, discernidas a los agentes que con posterioridad a las mismas hayan sido reescalafonados, con efectos al 1º de noviembre de 1958, en distinta Clase y Grupo de la asignada primitivamente, como consecuencia de la resolución favorable de reclamos presentados en base a las normas de los puntos 48º al 50º del citado cuerpo normativo.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.
ARTICULO 3º- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Jorge Wehbe

ACTO: DECRETO Nº 1.239/62.-

MATERIAS: REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS - OBRAS PUBLICAS

Buenos Aires, 7 de febrero de 1962.-

Vistos estos actuados por los que la Secretaría de Obras Públicas aconseja se modifique el Artículo 27º del Reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, aprobado por Decreto nº 6.808 del 8 de agosto de 1961 (+), y

CONSIDERANDO:

Que la experiencia obtenida desde que funciona el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas aconseja propiciar la citada modificación;

Que dicha modificación permitirá la regularización inmediata de aquellas empresas que hayan hecho uso de la franquicia acordada por dicho Artículo, en especial las entidades extranjeras que hubieren merecido adjudicación de obras como consecuencia de la excepción que les ha sido conferida;

Que por otra parte, el Consejo del expresado Registro Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere la última parte del mencionado Artículo 27º y considerando equitativo y razonable, dispuso por Resolución nº 10 del 18 de Octubre de 1961, aumentar a $ 4.500.000 m/n. el monto hasta el cual las empresas interesadas pue

//..

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 1.432.-

den concurrir a licitaciones sin el requisito previo de inscripción exigido;

Que ante tal situación, procede actualizar, en su parte pertinente, el artículo en cuestión;

Por ello y atento lo propuesto por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Públicos;

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Sustitúyese el texto del artículo 27º del Reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas aprobado por Decreto nº 6.808 del 8 de agosto de 1961, por el siguiente:

"Artículo 27º.- El Consejo podrá, cuando para la ejecución de una obra concurran factores excepcionales, autorizar la presentación a la licitación de empresas no inscriptas pero con antecedentes verificables en el país o en el extranjero, que las hagan acreedoras a ser consideradas con capacidad técnica y financiera suficientes.

Los factores de excepción serán ponderados por el Consejo, previa información de la Repartición licitante.

No se concederán autorizaciones de excepción, a aquellas empresas que tengan un año o más de antigüedad en la ejecución de obras o trabajos con la Administración Nacional.

Para concurrir a licitaciones de obras o trabajos de hasta cuatro millones quinientos mil pesos moneda nacional (m$n. 4.500.000), no es obligatoria la inscripción en el Registro.

Este importe podrá ser reajustado por el Consejo, toda vez que las variaciones de costo determinadas oficialmente, a criterio de este organismo, asi lo exijan".

ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Públicos y firmado por el señor Secretario de Estado de Obras Públicas.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaria de Estado de Obras Públicas a sus efectos.-

FRONDIZI - José Mazar Barnett

ACTO: DECRETO Nº 1.453/62.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA - DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - TRANSFERENCIAS - PRESUPUESTO

Buenos Aires, 13 de febrero de 1962.-

Visto lo dispuesto por la Ley nº 15.799, en cuanto establece la modificación del régimen de contribución inmobiliaria y la transferencia a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de los servicios de fiscalización y percepción de impuestos y tasas que venía cumpliendo la Dirección General Inmobiliaria, y

CONSIDERANDO:

Que dicha medida es complementada posteriormente por el Decreto nº 8.668/61 (+), al disponer este acto de gobierno la transferencia del Tribunal de Tasaciones a la Secretaría de Estado de Obras Públicas;

Que, finalmente, el Decreto nº 6.544/61.(°), autoriza a la Secretaría de Estado de Hacienda para adoptar las medidas conducentes al cumplimiento del objetivo previsto, quedando asimismo facultada para convenir con los demás organismos de la Administración Pública Nacio

(+) Ver Digesto Administrativo nº 1.490.- //..
(°) Ver Digesto Administrativo nº 1.430.-

nal y con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires el traspaso de los servicios a cargo de la Dirección General Inmobiliaria, como así también el del personal, muebles, útiles y demás elementos pertenecientes a dicha repartición, lo cual fue cumplimentado mediante las resoluciones números 4.118; 4.190 (°); 4.191 y 4.378 de 1961;

Que frente al panorama expuesto, falta aún determinar el organismo que, en jurisdicción de la Secretaría de Estado de Hacienda, tomará a su cargo la liquidación final de aquellas tareas que venía cumpliendo la Dirección General Inmobiliaria y no se hallan involucradas en las transferencias dispuestas tales como la prosecución de gestiones y cobro -por vía administrativa o judicial-, de deudas con el fisco, diligenciamiento de actuaciones administrativas en trámite, etc.;

Que, a juicio de la Secretaría de Hacienda dado la índole de los servicios de que se trata, los mismos deben ser encomendados a la Dirección General de Contabilidad y Administración, otorgándosele al mismo tiempo, para ello, las facultades asignadas a la Dirección General Inmobiliaria por el Decreto-Ley nº 7.688/56 (") en orden a la autorización acordada por el art. 7º de la Ley nº 15.799, cumplido lo cual sólo resta disponer la disolución de la Dirección General citada en último término, transfiriendo su personal directivo a la Subsecretaría de Hacienda para luego fijar su destino definitivo;

Que, además es necesario modificar el presupuesto de la Secretaría de Hacienda aprobado para el ejercicio de 1962 por la Ley nº 16.432 (-), debiendo asimismo disponer

---

(°) Ver Digesto Administrativo nº 1.557.-
(") Ver Digesto Administrativo nº 52.-
(-) Ver Digesto Administrativo nº 1.543.-

la respectiva modificación del agrupamiento de funciones;
Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Declárase disuelta la Dirección General Inmobiliaria.
ARTICULO 2º.- Asígnase a la Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado de Hacienda, en virtud de lo establecido en el artículo 7° de la Ley nº 15.799, las facultades que el Decreto-Ley número 7.688/56 y demás disposiciones legales o reglamentarias, otorgaban a la Dirección General Inmobiliaria, para la resolución de todos aquellos asuntos vinculados a servicios que no hubieran sido transferidos a otros organismos de la Administración Pública Nacional o a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
ARTICULO 3º.- A los fines del cumplimiento del presente serán de aplicación las normas del Decreto nº 6.544/61, debiendo regularizarse por intermedio de la Dirección General de Contabilidad y Administración, en el plazo de treinta (30) días de la fecha la transferencia presupuestaria y la situación de revista del personal.
ARTICULO 4º .- Transfiérese al presupuesto de gastos para el ejercicio de 1962 de la Secretaría de Hacienda, los cargos de A-I Director General, A-II Subdirector General y A-III Director Secretario que figuran en el presupuesto de "gastos en personal" de la Dirección General Inmobiliaria, cuya disolución se dispone por el artículo 1° del presente decreto y ratifícase en el Item Subsecretaría, de acuerdo a las planillas anexas, la designación de los funcionarios que actualmente los desempeñan.
ARTICULO 5º.- Mantiénense, para los funcionarios indicados

en el artículo anterior y para el agente clase A. Grupo V, de la citada Dirección General, adscripto al Ministerio de Economía por Resolución nº 19/962, las compensaciones que en concepto de "dedicación funcional" y "servicios calificados" les fueran acordadas, respectivamente por las resoluciones 4.102 y 7.052/61 ratificada por el punto 2º de su similar 3.798/61 y 3.033/62.

ARTICULO 6º.- Modifícase en la forma que se determina en planillas anexas el presupuesto para el ejercicio 1962 de la Sección 1a. título I - Servicios (Sector 2), A) Erogaciones a financiar con recursos de Rentas Generales - Nº1 del Anexo 52 - Secretaría de Hacienda.

ARTICULO 7º .- Modifícase en la forma que se indica en planillas anexas el agrupamiento de funciones correspondientes a la Secretaría de Hacienda.

ARTICULO 8º.- Autorízase a la Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Hacienda y a la Contaduría General de la Nación a realizar las operaciones contables a que de lugar lo dispuesto por el presente decreto.

ARTICULO 9º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 10º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y Imprentas y vuelva a la Secretaría de Estado de Hacienda a sus efectos.-

FRONDIZI - Carlos A. Coll Benegas
Jorge Wehbe.-

Planilla anexa al Art. 4º.-

Clase A - Grupo I (Director General - Asesor)$ 12.500 (2-1-52-7-335-31-781-1-4001).Héctor Pastene (Cl. 1912,D.M. 1, M. 116.565. C. Id. 981.877 Cap.).

Clase A - Grupo II (Subdirector General - Asesor) $ 11.000. (2-1-52-7-335-31-781-1-4002). Fanor Florencio Oria Núñez (Cl. 1910, D.M. 19, M.1.108.798, Céd. Id.70.966 Bs. As.).

Clase A - Grupo III (Director Secretario) $ 10.400(2-1-52-7-335-31-781-1-4003).Roberto Sigifredo Valecky (Cl. 1911, D.M. 4, M. 535.246).

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
SUBSECRETARIA

	CLASE A				
	Grupo I	Grupo II	Grupo III	Grupo IV	Grupo V
	Director General	Subdirector General	Director Secretario		
Total de cargos por grupo	- 1	- 1	- 1		

TOTAL GENERAL: -3

DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA

	CLASE A				
	Grupo I	Grupo II	Grupo III	Grupo IV	Grupo V
	Director General	Subdirector General	Director Secretario		
Total de cargos por grupo	+ 1	+ 1	+ 1		

TOTAL GENERAL: + 3

ACTO: DECRETO N° 1.642/62.-

MATERIAS: ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Puntos 38° y 39°) - CALIFICACIONES - LICENCIAS

Buenos Aires, 19 de febrero de 1962.-

Visto lo establecido en el art. 7ª del Decreto número 8.725/61 (+) y en los puntos 38° y 39° del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Nacional (Decreto n° 9.530/58) y

CONSIDERANDO:

Que la norma a que se hace referencia en primer término, ha tenido por objeto evitar los inconvenientes que presupone discernir una calificación cuando el agente ha prestado servicio efectivo durante un lapso ínfimo, lo que no permite aquilatar sus reales merecimientos y condiciones;

Que dicho problema sólo se presenta en la parte conceptual de la calificación, pero no ocurre lo propio con la referida a los antecedentes (licencias, inasistencias, sanciones disciplinarias, embargos) que inciden en aquélla, ya que éstos se computan año a año, y resultaría ilógico que los considerados durante un período volvieran a hacer sentir su incidencia en el siguiente;

//.

(+) Ver Digesto Administrativo N° 1.472.-

Que por tanto la calificación a considerar es pura y exclusivamente la de conceptos, no así la de antecedentes, que debe ajustarse a los registrados en el año a calificar;

Que debe preverse el caso de los agentes que no prestan servicio durante todo el período calificatorio por hacer uso de sucesivas licencias con y sin goce de haberes, lo que imposibilita su encuadre en las previsiones de los incisos c) y e) del punto 38° del Escalafón;

Que igualmente debe especificarse que la repetición de la calificación anterior al personal comprendido en los incisos d), e) y f) del aludido punto 38° está circunscripta a la calificación de conceptos y no a la definitiva por los motivos expuestos en los tres primeros considerandos;

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda en uso de las atribuciones resultantes del Decreto-Ley nº 797/58 (°) y art. 20°, inciso 12° de la Ley nº 14.439 (¹),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Modifícase el inciso g) del punto 38° del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Nacional (Decretos Nros. 9.530/58 y 8.725/61, art. 7º), el que deberá considerarse redactado de la siguiente forma:

"g) Los agentes que no hayan prestado servicio efectivo durante un mínimo de tres (3) meses, consecutivos o alternados, durante el período correspondiente. En estos casos les será considerada a los mismos la calificación de conceptos (apartado III, Total C de la foja de

(°) Ver Digesto Administrativo nº 419.-

(¹) Ver Digesto Administrativo nº 505.-

calificaciones) obtenida en el último período calificatorio sobre la cual se le efectuarán las deducciones que correspondan de acuerdo con los antecedentes (apartado IV, puntos 1°, 2° y 3° de la foja de calificaciones) que registre durante el período al que corresponda la calificación a practicar".

ARTICULO 2º.- Agréguese al punto 38° del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Nacional (Decreto nº 9.530/58) el siguiente inciso:

"h) Los agentes que durante todo el período calificatorio hubieren estado con licencia, parte con sueldo y parte sin goce de haberes. En estos casos se seguirá el mismo procedimiento fijado en el inciso g)".

ARTICULO 3º.- Modifícase el texto del punto 39° del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Nacional (Decreto n° 9.530/58), el que deberá considerarse redactado de la siguiente forma:

"39º - A los agentes comprendidos en los supuestos previstos en los incisos d), e) y f) del punto 38° les será considerada, a los fines del pase a la categoría superior, la calificación de conceptos (Apartado III - Total C de la foja respectiva) obtenida en el período calificatorio inmediato anterior, sobre la cual se practicarán los descuentos que pudieran corresponder en base al rubro antecedentes (apartado IV, puntos 1°, 2° y 3°) por el lapso a calificar".

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Carlos A. Coll Benegas
Jorge Wehbe.-

ACTO: **DECRETO Nº** 1.686/62

MATERIAS: FACULTAD MINISTERIAL - CUENTAS ESPECIALES - PRESUPUESTO

Buenos Aires, 20 de febrero de 1962.-

Atento la necesidad de reglamentar el artículo 15º de la Ley nº 16.432 (+) de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 1962; y

CONSIDERANDO:

Que la facultad acordada al Poder Ejecutivo por dicho artículo, para delegar en los organismos estatales las atribuciones que fija el artículo 14 de la citada ley, en lo que se refiere a introducir modificaciones en determinados créditos dentro de los totales autorizados, tiene por finalidad la agilitación en los trámites para los reajustes presupuestarios que exigen las reales necesidades de los servicios en el curso del ejercicio financiero;

Que a efectos de la inmediata e integral aplicación de la autorización corresponde dictar las normas a que se ajustarán los respectivos organismos;

Por ello,

//..

(+) Ver Digesto Administrativo nº 1.546.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Delégase en los señores Ministros y Secretarios de Estado y en la autoridad superior de los organismos descentralizados, autárquicos y empresas del Estado, las facultades acordadas al Poder Ejecutivo por el artículo 14 de la Ley nº 16.432 (º), para que, en sus respectivas jurisdicciones y dentro del total de los créditos autorizados, procedan a reajustar, cuando las necesidades de los servicios así lo exijan, mediante compensación, las partidas referentes a otros gastos con excepción de aquellas que directa o indirectamente se traduzcan en beneficios al personal bajo cualquier modalidad o concepto.

ARTICULO 2º.- La delegación acordada por el artículo anterior también será de aplicación para los reajustes que requiera el Plan de Inversiones Patrimoniales que se atiende con los créditos previstos en el Sector 5, dentro de las partidas parciales del detalle analítico que apruebe el Poder Ejecutivo para la realización del referido Plan.

ARTICULO 3º.- Los ajustes que se dispongan en virtud de lo establecido por los artículos 1º y 2º no podrán crear nuevos conceptos de inversión ni modificar las leyendas asignadas a cada partida. Tampoco podrán dichos ajustes alterar las demás leyendas, menciones y códigos numéricos que contengan los presupuestos y planes respectivos.

Las modificaciones de créditos comprenderán invariablemente previsiones por doce meses, en forma tal que no den lugar a incrementos automáticos para los ejercicios fiscales siguientes.

La facultad de compensar a que se refiere este decreto no podrá ejercitarse entre créditos de distintos sectores y/o financiaciones del presupuesto general de la adminis-

(º) Ver Digesto Administrativo nº 1.545.-

tración nacional; ni tampoco podrá significar incrementación de tales créditos aún cuando la misma sea enjugada con un aumento correlativo de las economías de inversión a realizar.

ARTICULO 4º.- Los Ministerios, Secretarías de Estado, organismos descentralizados, autárquicos o empresas del Estado, comunicarán a la Secretaría de Estado de Hacienda y al Tribunal de Cuentas de la Nación la resolución y correspondientes planillas modificatorias de los créditos, confeccionadas de acuerdo con el modelo anexo.

Los actos intervenidos de conformidad por el Tribunal de Cuentas de la Nación serán girados a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.

ARTICULO 5º.- Los ajustes de presupuesto y de los planes de inversiones patrimoniales a que se refiere este decreto sólo podrán disponerse hasta el día 30 de septiembre de 1962 y deberán ser comunicados a la Secretaría de Estado de Hacienda y al Tribunal de Cuentas de la Nación antes del día 5 de octubre del mismo año.

ARTICULO 6º.- Las disposiciones del presente decreto no son de aplicación para los créditos comprendidos en el Anexo 31-Obligaciones a cargo del Tesoro (Sectores 2,4 y 5) Financiaciones 1 y 3, respectivamente, del presupuesto general de la administración nacional.

ARTICULO 7º.- Los ajustes presupuestarios que se dispongan de acuerdo a lo determinado en el presente decreto, serán comunicados al H.Congreso de la Nación conforme lo establece el artículo 32 de la Ley nº 16.432 (*).

ARTICULO 8º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 9º- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la Nación, pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

(*) Ver Digesto Administrativo nº 1543.- FRONDIZI - Carlos C.Benegas-J.Wehbe

ANEXO O ORGANISMO DESCENTRALIZADO:

ITEM:

INCISO 9 - OTROS GASTOS

Sector	Financiación	Anexo	Jurisdicción	Organismo Descentral.	Inciso	Item

Nº de Código de la Partida		Concepto	Nº de Código de la Partida		Presupuesto Vigente (debe dictarse el acto aprobatorio)	Modificaciones	Presupuesto Definitivo Resolución Nº Fecha:
Principal	Subprincipal		Parcial	Subparcial			

ACTO: RESOLUCION Nº 7.098/62.-

MATERIA: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

Buenos Aires, 23 de febrero de 1962.-

Visto el proyecto de reorganización de la Dirección General Impositiva elevado por la Intervención de dicha dependencia, y

CONSIDERANDO:

Que en dicho proyecto, confeccionado de conformidad con lo dispuesto en el decreto Nº 2781/60 (*), se contempla la necesidad, ya señalada en este último, de dotar a la entidad recaudadora de suficiente energía ejecutiva y agilizar sus procedimientos a fin de asegurar, mediante una eficiente acción recaudadora, el ingreso de los fondos indispensables al Estado para llenar sus fines;

Que para el cumplimiento de esos propósitos en el proyecto se propicia una pronunciada desconcentración funcional de sus dependencias, creándose nuevos organismos ejecutivos de distinto nivel, pero dotados todos de facultades suficientes para realizar una rápida y efectiva acción fiscalizadora de los tributos y facilitar los trámites de los contribuyentes. La unidad de criterio que debe presidir las decisiones de -

//-

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1139.-

estos organismos, independientes entre sí dentro de cada nivel, ha de quedar asegurada mediante la acción que por vía de superintendencia deben ejercitar sobre los mismos la Dirección General y los Directores Asesores, encargados de planificar las tareas de aquéllos e impartirles instrucciones;

Que resultando previsible, no obstante los recaudos adoptados, que una vez puesta en práctica la reorganización propiciada la experiencia puede determinar la necesidad de introducir en ella algunas modificaciones, es menester acordar al Interventor facultades suficientes para efectuarlas;

Por ello,

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Apruébase el proyecto adjunto de reorganización de la Dirección General Impositiva propuesto por la Intervención de dicha entidad.

ARTICULO 2º.- Autorízase al Interventor para que, en uso de las facultades que el artículo 7º de la Ley 11.683 t. o. en 1960, confiere al Director General, introduzca en la nueva estructura las modificaciones que la práctica aconseje, pero sin alterar sus lineamientos esenciales.

ARTICULO 3º.- Comuníquese a quienes corresponda y pase a la Dirección General Impositiva a sus efectos.-

Fdo. JORGE WEHBE

ANEXO A LA RESOLUCION Nº 7098

ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

DIRECCION GENERAL

I - FUNCIONES

La Dirección General estará a cargo de un Director - General, un Subdirector General y un Director Secretario, con las funciones y atribuciones previstas en la Ley - 11.683 (t.o.en 1960) y disposiciones reglamentarias.

CONSEJO

I - FUNCIONES

Se integrará con los miembros que nombre el Poder Ejecutivo. Asesorará a la Dirección General en todos los asuntos que someta a su consideración y resolverá todos los que le encomienden los intrumentos legales respectivos.

SECRETARIA GENERAL

I - FUNCIONES

Atenderá el despacho y registro de la Dirección General y actuará en las gestiones que especialmente se le - encomiende.

DIRECCION ASESORA DE ADMINISTRACION

I - FUNCIONES

Organizará, coordinará y ejecutará todo lo relativo a la gestión de la Repartición en materia patrimonial, financiera, contable y de personal, de conformidad con las disposiciones respectivas.- Realizará el procesamiento mecanizado de datos, con arreglo a los programas que a tal efecto se elaboren.

II - DEPENDENCIAS QUE LA COMPONEN

- Planes y Preparación de Presupuesto
- Administrativo
- Contabilidad
- Centro de Operaciones Mecanizadas
- Tesorería
- Comisión de Preadjudicación
- Secretaría.

III - FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS

1.- Planes y Preparación de Presupuesto

Promoverá las normas generales para el personal en lo atinente a la selección e incorporación y estudiará y programará la adquisición de inmuebles, instalaciones, vehículos, muebles y otros elementos de trabajo. Propondrá la distribución del personal y la adjudicación de muebles y demás elementos de trabajo en colaboración con la Dirección Asesora de Coordinación, Organización y Métodos.

Estudiará la implantación de nuevos sistemas contables o el mejoramiento de los existentes con adecuación a las normas respectivas. Proyectará el presupuesto general de la Repartición. Llevará un fichero temático actualizado.

2.- Administrativo

Intervendrá en las adquisiciones y suministros, el registro del personal, las impresiones, la recepción y -

distribución de correspondencia, el archivo general y la prestación de servicios generales y de maestranza, con excepción de las que expresamente se le asignen a las demás dependencias de la Dirección General.

Las funciones se desarrollarán con arreglo a la distribución siguiente:

- Compras y Suministros
- Registro de Personal
- Impresiones
- Mesa de Entradas y Archivo
- Servicios
- Administrativa
- Comisión de Recepción.

3.- Contabilidad

Intervendrá en la ejecución y contralor del presupuesto general de gastos de la Repartición y su régimen contable, como así también en lo referente a la registración y verificaciones pertinentes -y en su caso apropiación-, de la recaudación de los distintos gravámenes.

Las funciones se desarrollarán de acuerdo a la siguiente distribución:

- Contaduría Recaudación
- Contaduría Presupuesto
- Administrativa.

4.- Centro de Operaciones Mecanizadas

Recibirá, preparará, analizará y codificará toda la documentación relacionada con el procesamiento mecanizado. Compilará y controlará mecánicamente los datos extractados de dicha documentación.

5.- Tesorería

Custodiará y realizará el manejo de fondos a cargo -

de la Dirección General y la impresión, guarda, expendio y destrucción de valores fiscales.

6.- Comisión de Preadjudicación

Dictaminará en las adquisiciones y en la contratación de servicios propiciadas por Compras y Suministros, con arreglo a las normas legales en la materia.

7.- Secretaría

Realizará todas las tareas administrativas y controles de carácter interno inherentes a la Dirección Asesora de Administración.

DIRECCION ASESORA DE COORDINACION, ORGANIZACION Y METODOS

I - FUNCIONES

Promoverá y desarrollará la racionalización administrativa, excepto en aquellos aspectos que correspondan a la Dirección Asesora de Administración, a cuyo efecto proyectará el adecuado ordenamiento estructural de las dependencias, procurará la coordinación de sus funciones y la sistematización de los regímenes, medios y elementos de trabajo, y determinará, procurando su solución o mejoramiento, los factores de índole humana que inciden en el funcionamiento normal de la Dirección. Atenderá las relaciones públicas de la Repartición. Resolverá, en caso de dudas, qué dependencia debe intervenir en la tramitación de actuaciones.

II - DEPENDENCIAS QUE LA COMPONEN

- Estudio de Sistemas y Métodos
- Aplicación de Normas, Sistemas y Métodos
- Estadística
- Relaciones Públicas y Humanas
- Administrativa.

III - FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS

1.- Estudio de Sistemas y Métodos

Desarrollará una avanzada investigación -mediante el estudio en forma permanente-, para la implantación de nuevos sistemas o mejoramiento de los existentes en el aspecto orgánico funcional, y opinará y asesorará respecto de los proyectos que, sobre esas materias, elaboren las demás dependencias.

Examinará y propondrá las normas y métodos de trabajo con vistas a simplificar los procedimientos y agilizar los trámites y servicios de carácter funcional para activar el diligenciamiento de los asuntos.

Desarrollará un programa continuado relativo a la habilitación y capacidad de nuevos sistemas de control con procedimientos electrónicos, automáticos o de otro tipo para realizar tareas específicas, examinando y aconsejando el impulso de tales sistemas y equipos. Preparará la Memoria Anual con la colaboración de las demás dependencias. Decidirá, en caso de dudas, respecto de la dependencia que debe intervenir en la tramitación de actuaciones.

2.- Aplicación de Normas, Sistemas y Métodos

Estudiará la puesta en práctica de todos los métodos y sistemas de trabajo, creados o a crearse, para lo cual proyectará los formularios pertinentes, impartirá las instrucciones necesarias, diagramará los trámites y dirigirá y controlará su ejecución para el mejor logro de los fines perseguidos.

Analizará y adoptará las medidas inmediatas que correspondan en la efectivización de modificaciones administrativas, en cuanto no signifiquen cambios de trámites o sistemas ya establecidos.

3.- Estadística

Recopilará, ordenará y analizará las estadísticas, mediante la confección de representaciones gráficas, estudios de tendencias y diagramas, en los siguientes aspectos:

- Relativas al funcionamiento de la Dirección General, a su acción fiscalizadora y de investigación.
- Relacionadas con el funcionamiento de las leyes impositivas a fin de suministrar la información adecuada para los estudios tendientes al perfeccionamiento del régimen tributario.
- Vinculadas indirectamente o susceptibles de ser utilizadas en el mejoramiento de la acción fiscalizadora y técnica de la Repartición.

4.- Relaciones Públicas y Humanas

Facilitará las relaciones de las distintas dependencias con organismos públicos o privados y atenderá su participación en congresos, conferencias, etc. e intervendrá en la organización de las mismas cuando sean propiciadas por la Repartición.

Propenderá a la integración de sus agentes en los distintos niveles jerárquicos, identificándolos con los objetivos de la Dirección General y proyectará las medidas conducentes a lograr el bienestar del personal, desarrollando una efectiva intervención en el orden social y asistencial.

Realizará, conforme a la técnica adecuada, las publicaciones oficiales, publicidad y relaciones con el periodismo, etc., que le indiquen los organismos respectivos.

5.- Administrativa

Atenderá todo lo relativo a la Convocatoria de los Comités de Planificación y General, el registro y custodia de las actas y archivo de sus antecedentes y resoluciones.

Realizará todas las tareas administrativas y controles de carácter interno inherentes a la Dirección Asesora de Coordinación, Organización y Métodos y llevará un fichero temático actualizado.

DIRECCION ASESORA DE FISCALIZACION

I - FUNCIONES

Programará los planes generales de fiscalización, fundados en estudios e investigaciones económicos, demográficos o de otros índices representativos, referidos a las distintas zonas o regiones del país y en particular a cada industria, actividad o profesión.

Promoverá la creación y perfeccionamiento de los métodos a aplicar por el personal fiscalizador y proyectará los requisitos e instrucciones que deban cumplir los responsables, tendientes a facilitar la fiscalización.

II - DEPENDENCIAS QUE LA COMPONEN

- Programaciones
- Estudios Económico-Fiscales Nº 1
- Estudios Económico-Fiscales Nº 2
- Estudios Económico-Fiscales Nº 3
- Estudios Económico-Fiscales Nº 4
- Impuestos varios
- Administrativa.

III- FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS

1.- Programaciones

Preparará los planes o programas generales de fiscalización, metódicos y racionales, orientados a lograr el máximo aprovechamiento de los medios y elementos de que dispone la Dirección General, contemplando para ello las posibilidades inmediatas de corregir la evasión fiscal -

determinada o presumida a través de estudios de los diversos factores que la generan.

Los planes o programas de fiscalización deberán considerar las características económicas de cada una de las zonas establecidas para las Delegaciones Regionales.

Utilizará todos los medios de información que considere adecuados y, en especial, el material estadístico suministrado por la Dirección Asesora de Coordinación, Organización y Métodos y los informes técnicos producidos por Estudios Económico-Fiscales.

Elaborará las normas que establezcan los procedimientos, atribuciones y deberes del personal fiscalizador.

Proyectará normas tendientes a facilitar la fiscalización mediante certificaciones, informaciones y otras obligaciones a cargo de responsables; intervendrá en la creación, revisión y actualización de formularios relativos a la fiscalización y promoverá la implantación de sistemas de asesoramiento al público.

Estará facultada para solicitar la colaboración directa de los funcionarios especializados en las distintas materias, inclusive de los pertenecientes a las oficinas ejecutivas, y efectuará estudios constituyéndose en las mismas.

Las funciones serán desarrolladas con arreglo a la siguiente agrupación zonal:

- Capital y Partidos vecinos
- Bahía Blanca
- Córdoba
- La Plata
- Mendoza
- Mercedes
- Resistencia
- Rosario
- Tucumán

2.- Estudios Económico-Fiscales

Realizarán investigaciones que permitan determinar las modalidades de cada una de las ramas o actividades de su competencia con miras a establecer elementos precisos que faciliten su fiscalización.

Estudiarán los procesos tecnológicos y operativos conforme a usos, costumbres y demás factores de influencia existentes en las distintas zonas, plazas o mercados y efectuarán una adecuada agrupación y tipificación de actividades similares que permita establecer índices, coeficientes y demás bases de comparación.

Confeccionarán los informes técnicos pertinentes con arreglo a su utilización en la correcta fiscalización de los gravámenes a cargo de la Dirección General, preparando los cuestionarios que se deberán cumplir en los distintos sistemas de fiscalización: integral, rápida, parcial o formal.

Proyectarán, para ser utilizados por el personal fiscalizador, las normas específicas sobre informaciones y demás obligaciones a cargo de responsables y los formularios necesarios en la fiscalización de la rama o actividad investigada.

Las funciones se desarrollarán con arreglo a la distribución que a continuación se indica:

- Estudios Económico-Fiscales Nº 1: Industrias de Transformación
- Estudios Económico-Fiscales Nº 2: Industrias Extractivas, de Producción y Servicios
- Estudios Económico-Fiscales Nº 3: Bancos, Seguros, Financieras y Afines
- Estudios Económico-Fiscales Nº 4: Comercio, Auxiliares, Profesionales y demás responsables.

3.- Impuestos Varios

Corresponderá a esta dependencia desarrollar tareas análogas a las de Programaciones y de Estudios Económico-

Fiscales, con relación a los siguientes gravámenes: Internos (Título I) -excepto Seguros y Capitalización-, Sellos, Arancel Consular, Ganancias Eventuales, Apuestas en Hipódromos de Carreras, Transferencia de Automotores, Vehículos Automotores, Combinaciones y Trenes de Vehículos, Transmisión Gratuita de Bienes.

Entenderá asimismo en los que se incorporen en el futuro cuando, por su naturaleza o características especiales, ofrezcan similitud en su aplicación y/o fiscalización con los enunciados precedentemente.

4.- Administrativa

Realizará todas las tareas administrativas y controles internos inherentes a la Dirección Asesora de Fiscalización y llevará un fichero temático actualizado.

DIRECCION ASESORA TECNICO-IMPOSITIVA

I - FUNCIONES

Realizará estudios e investigaciones en el aspecto técnico de la materia impositiva, a fin de promover las modificaciones de las disposiciones legales reglamentarias, demás normas de aplicación vigentes y de los formularios respectivos, con el propósito de propender al perfeccionamiento del régimen impositivo.- Dictaminará y prestará asesoramiento a las demás dependencias de la Dirección General, en todos los asuntos de orden técnico impositivo que le sometan.- Impartirá directivas e instrucciones para la aplicación correcta y uniforme de la jurisprudencia en la materia.- Tendrá a su cargo la Biblioteca, la preparación y supervisión del material específico destinado a las publicaciones oficiales de la Repartición y los aspectos técnicos relacionados con el ingreso y capacitación del personal.

II- DEPENDENCIAS QUE LA COMPONEN

- Legislación
- Dictámenes
- Supervisión Técnica
- Biblioteca
- Administrativa

III- FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS

1.- Legislación

Investigará y analizará la doctrina, jurisprudencia y legislación nacional y extranjera y efectuará estudios permanentes de las leyes, disposiciones reglamentarias y demás normas de aplicación en el aspecto técnico-impositivo, a fin de verificar sus posibles deficiencias o la necesidad de perfeccionarlas y proyectará en forma coordinada con la Dirección Asesora Jurídica, las pertinentes reformas al régimen tributario.

Preparará los proyectos de resoluciones generales, demás normas impositivas, formularios, anexos e instrucciones.

2.- Dictámenes

Proyectará los dictámenes en los asuntos que se requiera asesoramiento técnico-impositivo.

3.- Supervisión Técnica

Propiciará el dictado de instrucciones generales y prestará los asesoramientos necesarios a fin de que los criterios interpretativos emanados de dictámenes y normas generales se apliquen uniformemente.

Preparará los temas para examen de ingreso del personal impositivo y de los cursos de capacitación que considere conveniente realizar.- Seleccionará el material con destino a las publicaciones oficiales y redactará los comentarios técnicos necesarios.

4.- Biblioteca

Centralizará todo el material bibliográfico y demás elementos de consulta; registrará y codificará las disposiciones legales y reglamentarias concernientes al régimen impositivo y materias afines y las normas respectivas de la Dirección General.

Llevará un fichero temático impositivo actualizado.

5.- Administrativa

Realizará todas las tareas administrativas y controles internos inherentes a la Dirección Asesora Técnico-Impositiva.

DIRECCION ASESORA JURIDICA

I - FUNCIONES

Realizará estudios e investigaciones vinculadas con su especialidad, a fin de promover las modificaciones de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas de aplicación vigentes, con el propósito de propender al perfeccionamiento del régimen impositivo.

Asumirá la representación del Fisco en los juicios en que el mismo sea parte, en tanto dicha función no corresponda a las Delegaciones Regionales.- Dictaminará y prestará asesoramiento a las demás dependencias de la Dirección General, en todos los asuntos de orden legal que le sometan.- Impartirá directivas e instrucciones para la aplicación correcta de las normas procesales y para la adopción de las medidas que juzgue convenientes en salvaguardia de los derechos del Fisco.

II- DEPENDENCIAS QUE LA COMPONEN

- Legislación
- Dictámenes
- Contencioso Judicial

- Supervisión Legal
- Administrativa

III - FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS

1.- Legislación

Investigará y analizará la doctrina y legislación nacional y extranjeras, efectuará estudios permanentes de las leyes, disposiciones reglamentarias y demás normas de aplicación a fin de verificar sus posibles deficiencias o la necesidad de perfeccionarlas y proyectar en forma coordinada con la Dirección Asesora Técnico Impositiva las pertinentes reformas al régimen tributario.

2.- Dictámenes

Proyectará los dictámenes en los asuntos en que se requiera asesoramiento letrado.

3.- Contencioso Judicial

Patrocinará y representará al Fisco en los juicios en que se haya interpuesto contra el mismo demanda o recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los casos en que el Estado sea parte ante el Tribunal Fiscal o los tribunales nacionales de cualquier instancia de jurisdicción de las Delegaciones Regionales de la Capital Federal, excepto aquéllos cuya representación les compete a los Cobradores Fiscales.

4.- Supervisión Legal

Proyectará normas e instrucciones en materia contencioso administrativa y judicial, graduación de multas, incobrabilidad de créditos fiscales y distribución de honorarios.- Asesorará a las demás Direcciones y a las Delegaciones Regionales en el aspecto legal.

5.- Administrativa

Realizará todas las tareas administrativas y controles de carácter interno inherentes a la Dirección Asesora Jurídica y llevará un fichero temático actualizado.

DIRECCION DE AUDITORIA

I - FUNCIONES

Realizará el contralor de la aplicación correcta y efectiva, por parte de las dependencias de la Dirección General y en todos los niveles jerárquicos, de las normas legales, procedimientos, programas de trabajo y demás disposiciones que rigen las actividades de la Repartición, informando a quien corresponda, las deficiencias comprobadas.

Efectuará análisis y comprobaciones especiales a fin de reunir elementos de juicio para la solución de problemas específicos planteados por las dependencias respectivas.

Señalará todas aquellas dificultades de orden general originadas en la aplicación de normas o programas que, a su juicio, deban corregirse.

II - DEPENDENCIAS QUE LA COMPONEN

- Asesoría Legal
- Planificación
- Auditoría Técnico Impositiva Buenos Aires
- Auditoría Técnico Funcional y Administrativa Buenos Aires
- Auditoría Técnico Impositiva-Funcional y Administrativa Santa Fe
- Administrativa

III- FUNCIONES Y COMPOSICION DE SUS DEPENDENCIAS

1.- Asesoría Legal

Asesorará al Director en la materia de su especialidad.

2.- Planificación

Asesorará al Director en su gestión, particularmente en la programación integral y coordinación de toda la labor de Auditoría en el país y en la elaboración de la información estadística.

Proyectará los programas de trabajo para Auditoría, controlando su cumplimiento y analizando los informes producidos.

Desarrollará sus funciones de acuerdo al siguiente agrupamiento de tareas:

- Normas y programas de trabajo
- Información y estadística

3.- Auditorías

Ejecutarán las auditorías de cada especialidad y en la zona de influencia que corresponda, de acuerdo con los métodos y programas establecidos, controlando el correcto desenvolvimiento de las dependencias, la observancia de las disposiciones generales y particulares y la racionalidad de las adaptaciones locales hechas a normas generales, informando las deficiencias a los jefes inmediatos y elevando además al Director de Auditoría los casos en que existan irregularidades.

Efectuarán los estudios y exámenes especiales que se disponga como consecuencia de las solicitudes de las dependencias respectivas.

Las funciones serán desarrolladas con arreglo al agrupamiento y zonas que a continuación se indica:

- AUDITORIA TECNICO IMPOSITIVA BUENOS AIRES

  Zona de Influencia: Delegaciones Regionales de Capital Federal y partidos vecinos, Bahía Blanca, Mercedes y La Plata.

- AUDITORIA TECNICO FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA BUENOS AIRES

Zona de Influencia: Delegaciones Regionales de Capital Federal y partidos vecinos, Bahía Blanca, Mercedes y La Plata.

- AUDITORIA TECNICO IMPOSITIVA-FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA SANTA FE

Zona de Influencia: Delegaciones Regionales de Córdoba, Mendoza, Resistencia, Rosario y Tucumán.

4.- Administrativa

Realizará todas las tareas administrativas y controles de carácter interno inherentes a la Dirección de Auditoría y llevará un fichero temático actualizado.

DELEGACIONES REGIONALES

I - FUNCIONES

Tendrán a su cargo con sujeción a las leyes y disposiciones respectivas, la aplicación, percepción y fiscalización, en las jurisdicciones que se les asigne, de los impuestos cuyo contralor compete a la Dirección General Impositiva.

Sin perjuicio de la superintendencia que ejercerá la Dirección General, las Delegaciones Regionales actuarán, para el cumplimiento de las tareas enunciadas, con las atribuciones inherentes a la condición de Juez Administrativo de que se encuentre investido su titular, conforme a la sustitución de funciones autorizadas por el Poder Ejecutivo.

No obstante, en su gestión deberán atenerse a los planes e instrucciones de carácter general formulados por las autoridades respectivas.

En el orden administrativo las Delegaciones Regionales entenderán en todos los aspectos relacionados con su funcionamiento con arreglo a las disposiciones legales pertinentes y a las normas y procedimientos que a tal fin se dicten.

II- DEPENDENCIAS QUE LAS COMPONEN (1)

- División Administrativa
- División Coordinación
- División Inspección
- División Revisión y Recursos
- División Jurídica

III- FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS

1.- División Administrativa

Desarrollará todas las tareas de carácter administrativo que corresponden a la Delegación Regional, para lo cual llevará los registros, controles y demás elementos necesarios relativos al personal, movimiento de fondos, presupuestos e inventarios, actuaciones, trámites y archivos, servicios generales y de maestranza.

2.- División Coordinación

Coordinará el desarrollo de las tareas que correspondan a las Agencias, Distritos y dependencias de la Delegación Regional a base de una adecuada y racional aplicación de los planes generales y demás instrucciones que impartan las autoridades respectivas, e intervendrá en la orientación, capacitación y perfeccionamiento del personal, así como en los problemas suscitados por la aplicación de los métodos o sistemas de trabajo.- Confeccionará las estadísticas correspondientes.

3.- División Inspección

Desarrollará los planes de fiscalización externa trazados por las autoridades respectivas, realizando a tal fin las inspecciones pertinentes, cuyas comprobaciones y conclusiones girará a División Revisión y Recursos para su ulterior diligenciamiento, cuando sus resultados no sean conformados.

4.- División Revisión y Recursos

Efectuará la contestación de consultas, resolución de inspecciones, solicitudes de devoluciones, compensaciones e imputaciones, prórrogas y exenciones, con arreglo a las normas y procedimientos que al respecto se dicten.

Además intervendrá y proyectará los pronunciamientos correspondientes a los recursos administrativos y las elevaciones de carácter técnico que deba efectuar la Delegación Regional.

5.- División Jurídica

Resolverá sobre la aplicación de multas.- Dictaminará necesariamente en todos los asuntos de importancia fiscal, por su monto o trascendencia, que se tramiten en jurisdicción de la Delegación Regional.- Prestará el asesoramiento jurídico requerido por las Agencias, Distritos y demás dependencias de la Delegación Regional.- Representará a ésta en los juicios y recursos en que sea parte e intervendrá en los juicios universales con interés fiscal, excepto en las Delegaciones Regionales con asiento en la Capital Federal.- Diligenciará además los oficios y las órdenes de allanamiento.

(1): La Delegación Regional Nº 3, tendrá además las siguientes dependencias:

- División Inspección Sellos: ejercerá las mismas funciones que División Inspección, con relación al impuesto de Sellos.-
- División Revisión y Recursos Sellos: cumplirá idénticas funciones que División Revisión y Recursos, con relación al impuesto de Sellos.-
- División Transmisión Gratuita de Bienes: atenderá todo lo relativo a este gravamen.-

AGENCIAS Y DISTRITOS

I - FUNCIONES

Ejercerán el contralor directo e inmediato del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los responsables domiciliados en su jurisdicción y resolverán sobre determinaciones de impuestos y/o sus accesorios establecidos a través de verificaciones formales o especialmente programadas, en devoluciones, compensaciones o imputaciones originadas en errores materiales o de cálculo, en prórrogas, gestión de cobro de deudas y certificaciones, conforme a las facultades que le confieran las normas respectivas.

II- DEPENDENCIAS QUE LA COMPONEN

- Sección Administrativa
- Sección Control Trámite y Archivo
- Sección Verificación Formal
- Sección Revisión
- Sección Jurídica

III- FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS

1.- Sección Administrativa

Desarrollará todas las tareas de carácter administrativo que correspondan a la Agencia o Distrito para lo cual llevará los registros, controles y demás elementos necesarios relativos al personal, movimientos de fondos, presupuestos e inventarios, actuaciones, trámites y archivos, servicios generales y de maestranza, conforme a las normas que al respecto se dicten.

2.- Sección Control Trámite y Archivo

Llevará los registros, controles y legajos necesarios para verificar internamente el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los responsables domiciliados en jurisdicción de la Agencia o Distrito.

3.- Sección Verificación Formal

Efectuará las verificaciones externas en la jurisdicción de la Agencia o Distrito con arreglo a los programas respectivos.

4.- Sección Revisión

Proyectará las resoluciones con relación a las verificaciones efectuadas por la Sección Verificación Formal, las correspondientes a solicitudes de prórrogas, devoluciones, compensaciones, imputaciones y certificaciones y las elevaciones de carácter técnico que deba efectuar la Agencia o Distrito.

5.- Sección Jurídica

Intervendrá en la gestión judicial de cobro de los créditos fiscales y en lo relacionado con la aplicación de multas.

DEL COMITE DE PLANIFICACION

1.- OBJETO Y COMPOSICION

Consistirá en la reunión de los Directores Asesores, Director de Auditoría o sus reemplazantes, bajo la presidencia del Subdirector General, con el objeto de deliberar sobre cuestiones de carácter general relacionadas con la marcha de la repartición, sobre asuntos de competencia común a dos o más Direcciones.- Sin perjuicio de ello, la deliberación podrá versar sobre problemas específicos de cada Dirección, cuando su titular lo solicite.

Las conclusiones que se obtengan darán lugar a la adopción de las medidas pertinentes por donde corresponda y en caso de ser necesario por razones de competencia, serán elevadas para su consideración al Director General.

2.- PERIODICIDAD Y QUORUM

Las reuniones del Comité de Planificación serán ordi

narias o extraordinarias.- Las ordinarias tendrán lugar mensualmente y deberán contar con la presencia de todos sus miembros. Las reuniones extraordinarias se celebrarán a solicitud de cualesquiera de los componentes del Comité y contarán con la presencia de todos sus miembros o bien solamente con la de aquéllos que en razón del tema a tratarse deban intervenir.

3.- CONVOCATORIAS

El Comité de Planificación será convocado por el Subdirector General.- Tratándose de reuniones extraordinarias convocadas a proposición de algún miembro del Comité, el Subdirector General decidirá quienes deberán participar de las mismas.

4.- ACTAS, TRAMITE Y ARCHIVO

Las deliberaciones del Comité de Planificación tendrán carácter reservado y quedarán asentadas en un libro de actas ad-hoc.- Dichas actas resumirán las conclusiones obtenidas, dejándose constancia de las opiniones en disidencia, y serán firmadas por todos los miembros del Comité.

De lo actuado se remitirá copia autenticada al Director General para su conocimiento o consideración, según corresponda.

Las convocatorias, el libro de actas, la tenencia y archivo de los antecedentes, trámites y demás documentación vinculada con el funcionamiento del Comité de Planificación, estará a cargo de la Dirección Asesora de Coordinación, Organización y Métodos.-

DEL COMITE GENERAL

1.- OBJETO

Consistirá en la reunión de los funcionarios de la Dirección General con el objeto de deliberar sobre los

distintos problemas suscitados por la orientación y ejecución de planes, sistemas, métodos de trabajo y en general sobre todos los temas inherentes al funcionamiento de la Repartición y a las normas cuya aplicación le compete.

Dichos temas tendrán origen en la iniciativa de los miembros componentes del Comité General y en su discusión será obligatoria la opinión de todos ellos.

Las conclusiones que en cada caso se obtengan tendrán carácter de recomendaciones que serán elevadas para su consideración al Director General.

2.- COMPOSICION

El Comité General estará compuesto y en condiciones de sesionar con la presencia de todos los Directores Asesores, Director de Auditoría, Auditores Jefes y Jefes de Delegaciones Regionales, o sus respectivos reemplazantes. Igualmente podrá sesionar válidamente en casos de ausencias no cubiertas, justificables a juicio de la presidencia.

3.- PERIODICIDAD

Las reuniones del Comité General serán ordinarias o extraordinarias.- Las ordinarias tendrán lugar cada cuatro (4) meses.-Las extraordinarias serán convocadas siempre que la naturaleza de los temas no permita diferir su discusión hasta la realización de una reunión ordinaria.

4.- PRESIDENCIA

La Presidencia del Comité General se encontrará a cargo del Subdirector General quien dirigirá la deliberación que podrá dar por terminada, cuando a su juicio hayan sido suficientemente expuestas las opiniones de los miembros del Comité.

5.- CONVOCATORIAS

Las reuniones del Comité General serán convocadas -

por el Subdirector General.- La convocación establecerá expresamente los puntos que deberán tratarse debiendo preverse su recepción por los miembros del Comité, con una anticipación no menor de diez (10) días a la fecha fijada para la reunión.

6.- PROPOSICION DE TEMAS

La proposición de los temas deberá hacerse llegar a la Subdirección General -los Auditores Jefes lo harán siguiendo la vía jerárquica correspondiente-, con una anticipación de treinta (30) días a la fecha de cada reunión ordinaria del Comité General.- La Subdirección General a su vez elevará copia de cada uno de los temas propuestos a la Dirección General, para su conocimiento.

7.- SELECCION DE TEMAS

La Subdirección General por propia iniciativa o por selección entre las sugestiones recibidas determinará los temas que deberá tratar el Comité General.- No obstante incluirá además en la convocación aquéllos que a juicio del Director General resulten de interés.

8.- ACTAS, TRAMITE Y ARCHIVO

Las deliberaciones del Comité General tendrán carácter reservado y quedarán asentadas en un libro de actas ad-hoc. - Dichas actas resumirán las conclusiones obtenidas en cada caso -incluso aquéllos que estén en disidencia-, y serán firmadas por el Presidente del Comité y dos de sus miembros elegidos a tal fin.

De lo actuado se remitirá copia autenticada a la Dirección General y a cada uno de los miembros del Comité, para su conocimiento.

La convocatoria, el libro de actas, la tenencia y archivo de los antecedentes, trámites y demás documentación

vinculada con el funcionamiento del Comité General estará a cargo de la Dirección Asesora de Coordinación, Organización y Métodos.-

ACTO: DECRETO Nº 2.072/62.-

MATERIAS: RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - BANCOS - ECONOMIAS - PERSONAL - LIMITACION DE SERVICIOS - INDEMNIZACIONES - INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - PRESUPUESTO

Buenos Aires, 7 de marzo de 1962.-

Visto lo establecido en el artículo 49º de la Ley Nº 16.432 (1), y

CONSIDERANDO:

Que diversos organismos del Estado mantienen dependencias recaudadoras con numeroso personal y estructuras complejas, cuyo costo no guarda relación con los recursos que deben percibir;

Que las entidades bancarias están habilitadas y ya lo hacen en algunos casos, para tomar a su cargo esas cobranzas mediante comisiones que implican una erogación inferior al costo de aquellos organismos recaudadores;

Por ello,

---

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1552.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Los organimos del Estado deberán encomendar las cobranzas a su cargo a las instituciones bancarias del sistema oficial y/o privado mediante convenios en que se determinen las condiciones y precio del servicio.

ARTICULO 2º.- A partir de los 60 (sesenta) días de la fecha deberán quedar eliminadas de las estructuras funcionales y presupuestos respectivos, las oficinas recaudadoras, así como los cobradores a domicilio. Desde el mes de junio del corriente año no se dará curso a pago de haberes correspondientes a personal integrante de las citadas dependencias.

ARTICULO 3º.- Los pagos por especies entregadas o servicios prestados en el mismo acto, podrán ser percibidos mediante una única caja incorporada a la tesorería de la dependencia u organismo que haga sus veces.

ARTICULO 4º.- Todos los organismos mencionados en el artículo 7° deberán someter al Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.) dentro del plazo fijado en el artículo 2° las modificaciones en sus estructuras que resulten necesarias para la debida aplicación de lo dispuesto. En caso de incumplimiento se considerarán automáticamente eliminadas las dependencias cuya función específica sea la cobranza.

ARTICULO 5º.- El personal de las dependencias que se suprimen quedará sometido al régimen del Decreto nº 489/62 (+) y sus complementarios.

ARTICULO 6º.- Declárase no comprendidas en lo establecido en el presente decreto a la Dirección Nacional de Aduanas; Dirección General Impositiva; las oficinas expendedoras de valores fiscales; aquellas cuya recaudación se efectúa mediante timbre u otros papeles fiscales, las dependencias de Correos y Telecomunicaciones y las oficinas receptoras de cheques y giros por vía postal y telegráfica.

(+) Ver Digesto Administrativo nº 1.563.-

ARTICULO 7º.- Con las excepciones establecidas en el artículo anterior, las normas del presente decreto serán de aplicación en todos los organismos centralizados y descentralizados, autárquicos y empresas del Estado, siendo responsables directos de su cumplimiento los directores de administración o funcionarios que hagan sus veces, sin perjuicio del contralor a cargo del Tribunal de Cuentas de la Nación.
ARTICULO 8º.- Dentro de los 15 (quince) días de la publicación del presente decreto, los organismos que realicen cobranzas por cualquier concepto y que consideren perjudicial el sistema implantado, formularán la presentación del caso ante el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización (C.E.P.R.A.) indicando el carácter y forma de la cobranza de los productos, servicios, tasas u otras prestaciones y la causa de su inconveniencia, debidamente fundada. El Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A.) podrá otorgar excepciones, con criterio restrictivo, una vez consideradas las presentaciones aludidas y hará saber lo resuelto en los 15 (quince) días subsiguientes. Vencido este último plazo el presente decreto será de cumplimiento obligatorio en los organismos solicitantes dentro de los plazos fijados en el artículo 2º, salvo que se hubiera acordado la excepción.
ARTICULO 9º.- El presente decreto será refrendado por el Señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.
ARTICULO 10º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Carlos A. Coll Benegas
Jorge Wehbe

ACTO: DECRETO Nº 2.170/62.-

MATERIAS: RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - CONTRATACIONES - INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - C.E.P.R.A. PERSONAL - PRESUPUESTO - PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

Buenos Aires, 8 de marzo de 1962.-

Visto que a efectos de facilitar el normal cumplimiento de la reorganización de la Dirección General Impositiva que se está llevando a la práctica con arreglo a lo prescripto por el Decreto nº 2.781/60 (+), resulta necesario eximir a dicho organismo del cumplimiento de las normas instituidas por los decretos números 497(°),500(') y 504/62 ("),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Declarar que las prescripciones contenidas en los decretos números 497 y 504/62 y artículo 5º del decreto nº 500/62, no son de aplicación en el ámbito de la Dirección General Impositiva.

(+) Ver Digesto Administrativo nº 1.139.-
(°) Ver Digesto Administrativo nº 1.568.-
(') Ver Digesto Administrativo nº 1.569.-
(") Ver Digesto Administrativo nº 1.565.-

ARTICULO 2ª.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.
ARTICULO 3ª.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y previa intervención del Tribunal de Cuentas de la Nación, pase a la Secretaría de Estado de Hacienda.-

FRONDIZI - Carlos A. Coll Benegas - Jorge Wehbe.-

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº 1595.-



ACTO: DECRETO Nº 2.247/62.-

MATERIAS: LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS (Hipódromos) - TRANSFERENCIAS - PATRIMONIO DEL ESTADO

Buenos Aires, 12 de marzo de 1962.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 14.188 establece la jurisdicción nacional en materia de hipódromos y agencias de "sport" y apuestas mutuas en todo el territorio de la República, facultando al Poder Ejecutivo para hacerse cargo de esas actividades, facultad que implica también la de dejarlas o transferirlas a la actividad privada;

Que es sostenido propósito del Gobierno Nacional transferir a la actividad privada todos aquellos servicios cuya prestación por parte del Estado no está justificada por verdaderas razones de bien público;

Que la Ley Nº 14.188 en su artículo 3º dispuso la incautación de todos los bienes, derechos y acciones de la Asociación Civil denominada "Jockey Club" de la Capital Federal, entre las cuales se encontraba la explotación de los hipódromos de Palermo y San Isidro;

Que tal incautación tenía su causa en la disolución de la citada asociación civil dispuesta por el artículo

//-

2º de la Ley;

Que ese artículo 2º fué derogado en forma expresa por el artículo 4º del decreto-ley Nº 3.966 del 1º de abril - de 1958 y si bien el artículo 3º de este último establece que el "Jockey Club" no tendrá derecho alguno "en relación con el funcionamiento, explotación y administración de los hipódromos", nada impide al Poder Ejecutivo en ejercicio de la facultad acordada por el artículo 1º de la Ley número 14.188, cuya vigencia está expresamente declarada, reintegrarle tales funciones en tanto se respeten las normas dictadas en materia de distribución del producido de aquellas explotaciones;

Que para ello el Poder Ejecutivo tiene en cuenta, además de las razones expresadas al principio, el hecho de que la experiencia acumulada por la citada asociación durante más de medio siglo, la capacita en forma exclusiva para atender los servicios aludidos, circunstancia que - permite encuadrar esta transferencia en el artículo 56º - apartado f) de la Ley de Contabilidad;

Que conciente de la trascendencia de la medida que establece este decreto, el Poder Ejecutivo ha recogido - previamente la opinión de todos los sectores vinculados - al turf nacional quienes de modo general han expresado su conformidad con la privatización;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Dentro de los 30 días de la fecha, la Secretaría de Estado de Hacienda convendrá con la Asociación - Civil Jockey Club de la Capital Federal, ad referendum del Poder Ejecutivo, la transferencia de la administración y explotación de los hipódromos de Palermo y San Isidro, teniendo en cuenta las siguientes bases;

a) La transferencia se efectuará dentro de los 60 días siguientes a la aprobación del convenio.

b) La transferencia del hipódromo de Palermo se otorgará a título precario, revocable en cualquier momento y sin derecho a indemnización alguna.

c) Se establecerán las condiciones bajo las cuales el personal afectado a la administración y explotación de los hipódromos pasará a depender del Jockey Club, sin que ello redunde en perjuicio de dicho personal.

d) Los impuestos que gravan la venta de boletos y de entradas en los hipódromos de Palermo y San Isidro serán abonados por el Jockey Club y depositados por éste en las cuentas respectivas, conforme a las disposiciones vigentes o las que se adopten en lo sucesivo.

e) El tanto por ciento que se reconozca al Jockey Club para la atención de los gastos emergentes de la explotación de los hipódromos de Palermo y San Isidro, no podrá ser superior al que percibe actualmente la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos (12,50 % y 8,50 %, respectivamente); si fuera inferior, la diferencia ingresará a Rentas Generales de la Nación.

f) Todos los recursos que obtuviere el Jockey Club por la administración y explotación de los hipódromos de Palermo y San Isidro, sólo podrán utilizarse para satisfacer los gastos de explotación de dichos hipódromos o para fomento o beneficio de las actividades hípicas en el país, con la salvedad de que el Poder Ejecutivo podrá ordenar su ingreso a Rentas Generales en la medida en que no fueren necesarios para cubrir los gastos de explotación y los importes a que se refiere el inc. g).

g) Se establecerá el importe que deberá satisfacer el Jockey Club como retribución por el uso de los terrenos y demás bienes de propiedad de la Nación y podrá

reconocerse al Jockey Club la comisión que se considere equitativa como remuneración por el desempeño de sus funciones de administrador de los hipódromos.

ARTICULO 2º.- Atento lo establecido por el artículo 16 de la Ley Nº 15.796 (1), dése cuenta al Honorable Congreso de la Nación.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Carlos A. Coll Benegas
Jorge Wehbe.-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1324.-



ACTO: DECRETO Nº 3.243/61.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - FONDO DE COMPENSACION

Buenos Aires, 24 de abril de 1961.-

Visto que el 31 de octubre de 1960, ha finalizado la vigencia de las normas provisorias aprobadas por Decreto nº 1.254/60.(+), para la liquidación del "complemento incentivado" del Fondo de Compensación instituido por el artículo 21, del Escalafón, Decreto nº 7.738/58 (°), y,

CONSIDERANDO:

Que subsistiendo actualmente la imposibilidad material de establecer fehacientemente una clasificación exacta e inequívoca de los factores que inciden en las recaudaciones que realiza la Dirección General Impositiva, lo cual no permite determinar los coeficientes que sobre el incremento logrado correspondan a la acción fiscalizadora de dicho Organismo, tórnase necesario implantar para el ejercicio financiero 1961 un régimen provisorio por el que, hasta tanto se aprueben las normas permanentes, posibiliten a su personal el usufructo del beneficio en cuestión, conciliándolo con las previsiones del artículo 23, de la Ley 14.789, en cuanto autoriza al Poder Ejecutivo a fijar un régimen especial de estímulos para dicho

(+) Ver Digesto Administrativo nº 1.132.- //..

(°) Ver Digesto Administrativo nº 639.-

personal sobre la base de la mayor recaudación que se obtenga como consecuencia de su acción fiscalizadora;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A:

ARTICULO 1º.- El Fondo de Compensación por incremento de recaudación correspondiente al ejercicio financiero 1961, a integrarse conforme lo prescribe el artículo 21, del Escalafón, Decreto nº 7.738, con el 3% del excedente que se obtenga en el ejercicio, se distribuirá entre todo el personal de la Dirección General Impositiva y el de otros Organismos que se desempeñen o hayan desempeñado en la misma por períodos no inferiores a seis (6) meses de servicios efectivos y continuados durante el lapso considerado.

ARTICULO 2º.- Establecer que una vez deducidas las sumas necesarias para componer la parte mínima y permanente de dos sueldos, instituida por el mencionado artículo 21, con el saldo del excedente se integrará el "complemento incentivado" del Fondo, liquidándose por este concepto hasta un límite máximo de cinco sueldos.

ARTICULO 3º.- El importe resultante de dividir el 3% del excedente por el de los haberes que se abonan mensualmente al personal de la Dirección General Impositiva y al adscripto a sus dependencias (considerando el sueldo básico, adicional por dedicación exclusiva, adicional por antigüedad y promoción automática), fijará la proporción de las retribuciones a distribuir en concepto de "complemento incentivado", con la limitación prevista en el artículo 2º.

ARTICULO 4º.- Prorróganse para el presente ejercicio las normas del Decreto nº 1.254/60, en lo que se relaciona con el índice que se tomará como base para determinar el incremento registrado en la recaudación del ejercicio 1961, como así también aquellas referidas al régimen de liquidación del Fondo.

ARTICULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.
ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Alvaro Alsogaray -
Ramón C.Lequerica.-

ACTO: DECRETO N° 2.248/62

MATERIA: COMISION NACIONAL DE LA HIPICA

Buenos Aires, 12 de marzo de 1962.-

Visto la privatización de los hipódromos de San Isidro y Palermo dispuesta por Decreto n° 2.247/62 (+), y,

CONSIDERANDO:

Que con la adopción de las medidas conducentes a restituir a la actividad privada la administración de hipódromos resulta necesario contar con un organismo técnico que cumpla las funciones desempeñadas por la anterior Comisión de Superintendencia de Hipódromos creada por la Ley n° 11.242, con adecuación a los requerimientos actuales del turf nacional, toda vez que el Estado -al desprenderse de la explotación de hipódromos- no puede renunciar al ejercicio del contralor y poder de policía sobre actividades ya que esta facultad es indelegable y propia del poder concedente;

Que la evolución del turf y su compleja actividad, de importantes características económicas y que contribuye al mejoramiento de la raza caballar nacional que ocupa desde muchos años un lugar privilegiado en la estadística mundial, determina la conveniencia de que el organis-

(+) Ver Digesto Administrativo n° 1.595.-

//..

mo a crearse quede integrado por reparticiones del Estado y entidades privadas que por la materia de que se trata y antecedentes demostrados en el curso de la historia del turf nacional representen la mayor garantía de idoneidad y capacidad;

Que al efecto es menester que el Poder Ejecutivo sea necesaria y debidamente asesorado, ya que la dirección del turf y la administración de los hipódromos constituyen especies que escapan a sus funciones específicas;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Créase provisionalmente la Comisión Nacional de la Hípica en jurisdicción de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, la que estará integrada por seis (6) miembros designados por el Poder Ejecutivo, de los cuales tres (3) serán nombrados a propuesta de la Secretaría de Estado de Hacienda, de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería y de la Secretaría de Estado de Guerra (Dirección General de Remonta y Veterinaria).

El Poder Ejecutivo designará directamente al Presidente, al Vicepresidente y al Secretario de la Comisión.

ARTICULO 2º.- Los miembros de la Comisión Nacional Provisional desempeñarán sus funciones con carácter honorario.

ARTICULO 3º.- La Comisión funcionará por espacio de sesenta (60) días y sesionará con una asistencia no inferior a tres (3) de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría de votos. El Presidente es el representante de la Comisión a todos sus efectos y tendrá doble voto en caso de empate.

ARTICULO 4º.- Es función y objeto de la Comisión Provisional asesorar al Poder Ejecutivo en todos los asuntos vinculados al turf y a la privatización de los hipódromos de San Isidro y Palermo.

Al efecto dentro del plazo señalado en el artículo anterior y luego de escuchar las opiniones de los sectores vinculados al turf nacional deberá elevar al Poder Ejecutivo un informe proponiendo:

a) La forma como deberá quedar constituida en definitiva la Comisión Nacional de la Hípica; número de miembros y entidades estatales y privadas que la integrán.

b) Las atribuciones y deberes que tendrá la Comisión.

c) Las atribuciones y deberes que tendrán las entidades privadas en la dirección y administración de los hipódromos a su cargo.

ARTICULO 5º.- Hasta tanto se disponga por decreto la constitución definitiva de la Comisión Nacional de la Hípica, las entidades privadas que tienen o tengan a su cargo la dirección y administración de hipódromos gobernarán sus actos son sujeción a las normas y reglamentos actualmente vigentes.

ARTICULO 6º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de Defensa Nacional y firmado por los señores Secretarios de Estado de Agricultura y Ganadería, de Hacienda y de Guerra.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Carlos A. Coll Benegas
Justo P. Villar - César I. Urien
Jorge Wehbe - Rosendo M.Fraga.-

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	N°1598.-

ACTO: DECRETO N° 2.277/62.-

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD (Arts. 55, 56 y 57) - SEGUROS - CONTRATACIONES

Buenos Aires, 13 de marzo de 1962.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que desde que el actual Gobierno Nacional asumió sus funciones, se abocó al estudio de la ejecución de diversas medidas tendientes a reducir el déficit fiscal;

Que las erogaciones que efectúa el Estado Nacional en materia de seguros son cuantiosas, lo que obliga a la adopción de medidas que procuren su reducción en todos aquellos casos en que tal gasto incida en las partidas respectivas del presupuesto;

Que, al propio tiempo, debe establecerse el estricto cumplimiento de las leyes vigentes en materia de contrataciones;

Que las reparticiones oficiales que han licitado la contratación de seguros, han obtenido rebajas en las tarifas como una consecuencia de la competencia que ello suscita entre las compañías aseguradoras;

Que por otra parte, esa competencia dentro de la actividad del seguro nacional es saludable por cuanto exige de las entidades mayor eficiencia técnica;

Que sólo cabe excluir de las presentes disposiciones los seguros cuyas primas sean solventadas por el perso-

//..

nal de la administración pública, dado que son ajenos a los propósitos de reducción de gastos fiscales que aquí se persiguen;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- A partir de la fecha de publicación del presente decreto, todas las contrataciones de seguros que realicen las dependencias u organismos de la Administración Nacional, inclusive entidades descentralizadas, autárquicas o empresas del Estado, deberán ajustarse a lo establecido en los artículos números 55, 56 y 57 de la Ley de Contabilidad y disposiciones concordantes y complementarias.

ARTICULO 2º.- En las licitaciones que se efectúen podrán intervenir todas las entidades aseguradoras, cuyo funcionamiento se ajuste a las normas legales y/o reglamentarias vigentes sobre la materia.

ARTICULO 3º.- Quedan excluidos de las disposiciones de este decreto los seguros cuyas primas se hallen a cargo de los agentes de la administración pública.

ARTICULO 4º.- Por intermedio de las delegaciones fiscales del Tribunal de Cuentas de la Nación, se controlará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto.

ARTICULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Carlos A. Coll Benegas
Jorge Wehbe.-

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - Dpto. de Despacho -

ACTO: EXPEDIENTE Nº 253.128/61.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - CONTRATACIONES

Buenos Aires, 28 de febrero de 1962.-

Vuelva a la Secretaría de Estado de Hacienda informándole que este Ministerio da su conformidad a las adquisiciones que se propone efectuar la Dirección General Impositiva, dado las facultades que a la misma le acuerda el decreto 3.152/60 (1), y lo avanzado del proceso de compra.

Para lo sucesivo, y no obstante lo dispuesto por el decreto 3152/60, la Dirección General Impositiva deberá consultar a este Ministerio antes de llamar a licitaciones o contraer compromisos que puedan generar obligaciones de pago al exterior.

Dése a la presente carácter de atenta nota.-

Fdo. ROBERTO MASSACANE
Subsecretario de Economía de la Nación

---

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1145.-

ACTO: EXPEDIENTE Nº 344.107/61.-

MATERIAS: SUELDO - DIFERENCIA DE HABERES - PRESUPUESTO - REEMPLAZOS

Buenos Aires, enero 31 de 1962.-

Vistas las presentes actuaciones y a fin de mejor proveer, pase a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, encareciéndole se sirva informar si el artículo 4º del decreto nº 10.542/46 (') se encuentra en plena vigencia, o si por el contrario, debe considerarse que el mismo ha sido dictado con referencia exclusiva a las situaciones existentes al 14 de setiembre de 1946.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES
Director General
de Contabilidad y Administración

Providencia Nº 356/62.-

A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION:

Asunto: reemplazos - pago de diferencia de haberes - Casa de Moneda de la Nación.

Disposiciones de aplicación: decreto nº 10.542/46.

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 74.-

Opinión de esta Dirección General: el artículo 4° del decreto n° 10.542/46 establece que "a partir de la fecha del presente decreto..."; vale decir que no puede conceptuarse que se trate de una norma tendiente a contemplar situaciones existentes a la fecha de su dictado, sino que por el contrario se trata de una prescripción a seguir desde ese momento en adelante.

En consecuencia, no habiendo sido derogada ni modificada por el decreto n° 11.826/60 (*), ni por otro acto de gobierno, mantiene su plena vigencia al momento.

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 1-3-1962.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

(*) Ver Digesto Administrativo N° 1254.-

Centro de Documentación e Información

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
Presidencia de la Nación

Este documento fue digitalizado por el
Centro de Documentación e Información
del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

Ciudad Autónoma de Bs. As. 2016

http://cdi.mecon.gob.ar/